

Causa Rol N° 114.017.
Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Claudio Mesa Latorre.

Temuco, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. -

VISTOS:

ÍNDICE

I.	Relación de la Sentencia.....	3 - 8
II.	Resumen ejecutivo.....	9 - 10
	Existen cuatro resúmenes ejecutivos.....	<u>273, 407, 422 y 469</u>
III.	Actuarios de tramitación y dato técnico.....	10
IV.	Ubicación de Doctrina.....	10
V.	Ubicación de Jurisprudencia.....	10
VI.	Reflexiones de lesa humanidad.....	10
VII.	En cuanto a la Acción Penal:	
	A. Declaraciones (60).....	11 - 149
	B. Documentos (29).....	149 - 174
	C. Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....	174 - 178
	D. Calificación jurídica de los hechos.....	178 - 183
	E. Declaración indagatoria de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.....	185 - 193
	F. Análisis de las declaraciones de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.....	193 - 273
	G. Defensa del abogado Víctor Carmine Zúñiga, en representación de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.....	273 - 280
	H. Consideraciones previas al análisis de la defensa:	
	1) Obligación de Investigar.....	280 - 295
	2) Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.....	292 - 306
	3) Estado de Derecho.....	306 - 312
	I. Análisis de defensa específica.....	312 - 405
	J. Acusación particular del abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de Mary Carmen Ortigosa Uriarte, María Isabel Lillo Flores,	

Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo y Juan Carlos Mateluna Lillo.....	405 - 406
K. Acusación particular de la abogada Carolina Contreras Rivera en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos.....	406
L. Adhesión a la Acusación Judicial Ignacio Jesús Dabed Ortigosa	407
M. Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:	
1) Atenuante de Responsabilidad Penal.....	407 - 411
2) Agravantes de Responsabilidad Penal.....	411 - 412
3) Determinación de la Pena.....	412 - 414
4) Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....	414 - 422
VIII. En cuanto a la Acción Civil:	
A. Demandas civiles interpuestas por el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de Mary Carmen Ortigosa Uriarte, María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo y Juan Carlos Mateluna Lillo.....	422 - 426
B. Demanda civil interpuesta por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa	426 - 429
C. Contestaciones de las demandas civiles por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Manuel Espinoza , en representación del Consejo de Defensa del Estado.....	429 - 438
D. Contestaciones de la demanda civil por el abogado Víctor Carmine Zúñiga , en representación de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.....	438 - 439
E. Análisis de la contestaciones de las demandas civiles por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Manuel Espinoza , en representación del Consejo de Defensa del Estado	439 - 450
F. Análisis de la contestaciones de la demanda civil por el abogado Víctor Carmine Zúñiga , en representación de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.....	451 - 454
G. Acreditación probatoria del daño moral	454 - 467
H. Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas	467 - 469
IX. Aspectos Resolutivos	470 - 474

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 114.017** del ingreso Juzgado del Crimen de Temuco, para investigar el delito de **Apremios Ilegítimos y Homicidios calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga** y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

- 1) **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, R.U.N. 3.085.228-1, chileno, natural de Victoria, casado, 85 años, abogado, domiciliado en Km. 17, camino Villarrica- Pucón, sector altos de Saint John, camino interior 700 m. Condenado (extracto de filiación de fs. 1.393 a 1.394, Tomo IV; 1.789 a 1.791, Tomo V; 2.298, Tomo VI; 2.291 a 2.300, Tomo VII; 2.302 a 2.304, Tomo VII).

Se inició la causa por querella criminal presentada por **Daniel Benjamín Mateluna Lillo (representado por el abogado Sebastián Saavedra Cea)**, con fecha **29 de marzo de 2012**, en contra de todos aquellos que resulten responsables, ya sea en calidad autores, cómplices y encubridores de los delitos de **secuestro simple, tormentos y homicidio calificado**, consumados, cometidos en perjuicio de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas, **a fs. 10 a 21 (Tomo I)**.

A fs. 101 a 102 (Tomo I), con fecha 29 de marzo de 2012, interpuso **querella criminal** el Subsecretario del Interior **Rodrigo Ubilla Macknney**, en contra de todos aquellos que resulten responsables por su intervención en calidad de autores, cómplices y encubridores, en los delitos de **secuestro simple y homicidio calificado**, ambos consumados, cometidos en perjuicio de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** y de **José María Ortigosa Ansoleaga**, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 465 a 474 (Tomo II), con fecha 24 de enero de 2013, interpusieron **querella criminal** los abogados **Carolina Contreras Rivera** y **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de **Juan Carlos Mateluna Lillo** y **María Isabel Lillo Flores**, en contra de todos aquellos que resulten responsables, ya sea en calidad autores, cómplices y encubridores de los delitos de **secuestro simple, tormentos y homicidio calificado**, consumados, cometidos en perjuicio de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 489 a 500 (Tomo II), con fecha 24 de enero de 2013, interpuso **querella criminal** la abogada **Carolina Contreras Rivera**, en

representación de **Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo y George Ricardo Mateluna Lillo**, en contra de todos aquellos que resulten responsables, ya sea en calidad autores, cómplices y encubridores de los delitos de **secuestro simple, tormentos y homicidio calificado**, consumados, cometidos en perjuicio de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 1.841 a 1.853 (Tomo VI), con fecha 23 de octubre de 2018, se sometió a proceso y prisión preventiva a OSCAR ALFONSO PODLECH MICHAUD, como **autor** de los delitos de **Apremios Ilegítimos y Homicidio Calificado** en la persona de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** y de **José María Ortigosa**, perpetrado en la comuna de Temuco con fecha **02 de octubre de 1973**. Otorgándole la medida cautelar de **arresto domiciliario total**. Dicha medida, fue confirmada por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco **a fs. 1.880 (Tomo VI)**; mientras que el auto de procesamiento fue confirmado **a fs. 1.884 (Tomo VI)**. Posteriormente a fs. **1.946 (Tomo VI), con fecha 06 de diciembre de 2018**, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco revoca la resolución apelada de fs. 1.930 y en su lugar decreta contra el procesado y en su lugar decreta el **arresto domiciliario nocturno** de 20:00 a 08:000 horas. Luego a fs. **1.163 (Tomo VI)**, con fecha 05 de enero de 2019, **se concede la libertad provisional al procesado**, previo pago de la suma de un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000); resolución que es confirmada por ltma. Corte de Apelaciones de Temuco a fs. **1.976 (Tomo VI)**, con declaración de que se eleva el monto fijado de fianza para obtener la libertad provisional a la suma de cuatro millones de pesos (\$4.000.000). Dicha suma es consignada con fecha 14 de enero de 2019, tal como consta en resolución y certificación de fs. **1.981 a 1.982 (Tomo VI)**. Finalmente se da **orden de libertad** al procesado con fecha 14 de enero de 2019, tal como consta a fs. **1.983 (Tomo VI)**.

A fs. 1.999 a 2.001 vta (Tomo VI), con fecha 22 de enero de 2019, interpuso **querella criminal** el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de **Mary Carmen Ortigosa Uriarte**, en contra de todos aquellos que resulten responsables, ya sea en calidad autores, cómplices y encubridores de los delitos de **homicidio calificado y apremios ilegítimos**, consumados, cometidos en perjuicio su hermano **José María Ortigosa**, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 2.008 (Tomo VI), con fecha 24 de enero de 2019, se declaró cerrado el sumario.

A fs. 2.014 a 2.017 vta (Tomo VI), con fecha 29 de enero de 2019, interpuso **querella criminal** el abogado **Luis Hermosilla Osorio**, en

representación de **Ignacio Jesús Dabed Ortigosa**, en contra de don **Alfonso Ernesto Podlech Michaud** y todos aquellos que resulten responsables en su calidad de autores, cómplices y encubridores de los delitos de **apremios ilegítimos y homicidio calificado**, cometidos en perjuicio **José María Ortigosa Ansoleaga**, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI), con fecha 15 de marzo de 2019, se dictó auto acusatorio en contra de ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, como autor de los delitos de Apremios Ilegítimos y Homicidio Calificado en la persona de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa, perpetrado en la ciudad de Temuco con fecha 02 de octubre d de 1973. Confiriéndose traslado a los abogados querellantes.

A fs. 2.111 a 2.136 (Tomo VI), con fecha 16 de abril del 2019, el abogado Sebastián Saavedra Cea, formula ACUSACIÓN PARTICULAR en contra de Alfonso Ernesto Podlech Michaud, solicitando condenarlo como autor de los delitos consulados de Homicidio Calificado y Apremios Ilegítimos en las personas de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 390 N°1, circunstancia 1 y 5, y artículo 150 N°1 del Código Penal Vigente a la época de los hechos, a la pena de presidio perpetuo y 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, respetivamente, más las sanciones accesorias legales, con costas. Al Primer otrosí interpone Demanda Civil de Indemnización de Perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por don Oscar Exss Krugmann, Abogado Procurador Fiscal de Temuco, solicitando se condene al demandado a la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para la hija de la víctima José María Ortigosa (Mary Carmen Ortigosa Uriarte) o la suma que el Tribunal determine en justicia, con reajustes de acuerdo al IPC desde la fecha de notificación de ésta demanda, más interés legales y las costas del juicio.

A fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI), con fecha 17 de abril del 2019, el abogado Sebastián Saavedra Cea, formula ACUSACIÓN PARTICULAR en contra de Alfonso Ernesto Podlech Michaud, solicitando condenarlo como autor de los delitos consulados de Homicidio Calificado y Apremios Ilegítimos en las personas de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 390 N°1, circunstancia 1 y 5, y artículo 150 N°1 del Código Penal Vigente a la época de los hechos, a la pena de presidio perpetuo y 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, respetivamente, más las sanciones accesorias legales, con

costas. Al Primer otrosí interpone **Demanda Civil de Indemnización de Perjuicios** en contra del Fisco de Chile, representado por don Oscar Exss Krugmann, Abogado Procurador Fiscal de Temuco, solicitando se condene al demandado a la suma total de **\$900.000.000 (novecientos millones de pesos), que se desglosan en la suma de \$150.000.000 para la cónyuge y cada uno de los hijos de la víctima** (María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo y Juan Carlos Mateluna Lillo) **o la suma que el Tribunal determine en justicia, con reajustes e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda, más las costas del juicio.**

A fs. 2.002 a 2.220 (Tomo VI), Ignacio Jesús Dabed Ortigosa se adhiere a la acusación judicial formulada en contra de **Oscar Alfonso Podlech Michaud.** Al Primer otrosí interpone **Demanda Civil de Indemnización de Perjuicios** en contra de **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, como también solidariamente en contra del Fisco de Chile, solicitando se condene a los demandados a pagar solidariamente la suma total de **\$300.000.000 (trescientos millones de pesos) a Ignacio Jesús Dabed Ortigosa, más reajustes e intereses legales** desde la fecha de notificación de la demanda **o la suma que el Tribunal estime ajustada a Derecho y equidad al metido de autos, todo con costas.**

A fs. 2.222 a 2.228 (Tomo VI), con fecha 30 de abril del 2019, la abogada **Carolina Contreras Rivera**, por la Unidad programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, formula **ACUSACIÓN PARTICULAR** en contra de **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, solicitando condenarlo como **autor** de los delitos consulados de **Homicidio Calificado y Apremios Ilegítimos** en las personas de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** y de **José María Ortigosa**, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 390 N°1, circunstancia 1 y 5, y artículo 150 N°1 del Código Penal Vigente a la época de los hechos, a la pena de **presidio perpetuo y 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, respetivamente, más las sanciones accesorias legales, con costas.**

A fs. 2.306 (Tomo VII), con fecha 12 de junio de 2019, se confirió traslado de la Acusación Judicial, adhesión a la misma, acusaciones particulares y demandas civiles a los abogados de los acusados y civilmente demandados.

A fs. 2.317 a 2.355 (Tomo V), el abogado Procurador Fiscal de Temuco Subrogante, **Manuel Espinoza Torres**, en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea (en presentación de María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna**

Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo y Juan Carlos Mateluna Lillo), solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas (*Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas, por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación; y Excepción de Prescripción Extintiva*); y negar lugar a dicha demanda en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de las sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su fórmula de cómputo.

A fs. 2.357 a 2.394 (Tomo V), el abogado Procurador Fiscal de Temuco Subrogante, **Manuel Espinoza Torres**, en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea (en presentación de Mary Carmen Ortigosa Uriarte)**, solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas (*Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada, por haber sido ya indemnizada la demandante en conformidad a las leyes de reparación; y Excepción de Prescripción Extintiva*); y negar lugar a dicha demanda en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su fórmula de cómputo.

A fs. 2.396 a 2.428 (Tomo V), el abogado Procurador Fiscal de Temuco Subrogante, **Manuel Espinoza Torres**, en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa**, solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas (*Excepción improcedencia de la indemnización dineraria, por preterición legal del demandante y haber sido reparado en la forma que se expresa; y Excepción de Prescripción Extintiva*); y negar lugar a dicha demanda en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su fórmula de cómputo.

A fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII), con fecha 04 de julio de 2019, el abogado **Víctor Carmine Zúñiga**, en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud, en lo principal de su escrito **interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento** (declinatoria de jurisdicción, amnistía y prescripción). En el segundo otrosí y en subsidio de dichas excepciones, **contesta la acusación fiscal y acusaciones particulares y plantea excepciones de fondo**, solicitando

la absolución e su defendido por no tener participación ni responsabilidad en los hechos. Y en el sexto otrosí, **contesta la demanda civil**.

A fs. 2.569 a 2.582 (Tomo VII), con fecha 22 de julio de 2019, la abogada **Carolina Contreras Rivera**, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría del ramo, **evacua traslado** de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, solicitando desestimar las excepciones alegadas por la defensa, con expresa condenación en costas.

A fs. 2.584 a 2.590 (Tomo VII), con fecha 23 de julio de 2019, el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, por la parte querellante, **evacua traslado** de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, solicitando desestimar las excepciones alegadas por la defensa, con expresa condenación en costas.

A fs. 2.595 a 2.600 (Tomo VII), con fecha 26 de julio de 2019, el abogado **Francisco Alejandro Sepúlveda Araya**, por la parte querellante, **evacua traslado** de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, solicitando rechazar todas y cada una de las excepciones alegadas por la defensa.

A fs. 2.602 a 2.606 (Tomo VII), con fecha 30 de julio de 2019, el Tribunal **rechaza la excepción de Declinatoria de Jurisdicción** formulada por el abogado Víctor Carmine Zúñiga, no condenándolo en costas, por existir motivos plausibles para litigar.

A fs. 2.607 a 2.610 (Tomo VII), con fecha 06 de agosto de 2019, el Tribunal **rechazan las excepciones de Amnistía y Prescripción** formuladas por el abogado Víctor Carmine Zúñiga, sin perjuicio de lo que se pueda resolver con posterioridad.

A fs. 2.619 a 2.620 (Tomo VII), con fecha 16 de agosto, **se recibió la causa a prueba**.

A fs. 2.782 (Tomo VIII), con fecha 23 de septiembre de 2019, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. 2.783 (Tomo VIII), con fecha 23 de septiembre de 2019, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A fs. 2.784, 2.969, 2.971, 2.972, 2.974, 2.991, 3.002, 3.003, 3.021 y 3.024 (Tomo VIII), se dictaron medidas para mejor resolver.

A fs. 3.035 (Tomo V), con fecha 24 de diciembre de 2021, se trajeron los **autos para fallo**.

II. RESUMEN EJECUTIVO:

Esta sentencia consta de **(474) cuatrocientos setenta y cuatro fojas, (44) cuarenta y cuatro considerandos, (9) nueve tomos y (1) cuaderno Reservado. El Tomo I** va desde fojas 1 a fs. 350; **Tomo II** desde fs. 351 a 701; **Tomo III** de fs. 702 a 1.050; **Tomo IV** de fs. 1051 a 1.440; **Tomo V** de fs. 1.441 a 1.839; **Tomo VI** de fs. 1.840 a 2.260; **Tomo VII** de fs. 2.261 a 2.662; **Tomo VIII** de fs. 2.663 a 3.034; **Tomo IX:** de fs. 3.035 en adelante. Del considerando 1° al 35° se trata la acción penal y del 36° al 44° a la acción civil. Existen cuatro resúmenes ejecutivos en páginas **273, 407, 422 y 469**. Los considerandos se resumen de la siguiente forma: 1°) y 2°) **EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL Y ELEMENTOS PROBATORIOS DEL PROCESO:** Declaraciones (60) y Documentos (29); 3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación jurídica de los hechos; 6°) y 7°) Concepto de Lesa Humanidad; 8°) **DECLARACIÓN INDAGATORIA DE OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD;** 9°), 10°) y 11°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso **[hay resumen ejecutivo, página 273];** 12°) **DEFENSA DEL ABOGADO VÍCTOR CARMINE ZÚÑIGA**, en representación del acusado; 13°) **CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA:** A. Obligación de investigar. B. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. C. Estado de Derecho; 14°), 15°), 16°), 17°), 18°), 19°), 20°), 21°), 22°), 23°) y 24°) **ANÁLISIS DE DEFENSA ESPECÍFICA;** 25°) **ACUSACIONES PARTICULARES DEL ABOGADO SEBASTIÁN SAAVEDRA CEA** en representación de Mary Carmen Ortigosa Uriarte, María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo Y Juan Carlos Mateluna Lillo; 26°) **ACUSACIÓN PARTICULAR DE LA ABOGADA** Carolina Contreras Rivera en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos; 27°) Análisis de las acusaciones particulares; 28°) **ADHESIÓN A LA ACUSACIÓN DE IGNACIO JESÚS DABED ORTIGOSA;** 29°) Análisis de la Adhesión a la Acusación Judicial **[hay resumen ejecutivo, página 407].** **CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL:** 30°) Atenuante de Responsabilidad Penal; 31°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 32°), 33°) y 34°) Determinación de la pena; 35°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores **[hay resumen ejecutivo, página 422].** **EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:** 36°) **Demandas Civiles interpuestas por el abogado Sebastián Saavedra Cea** en representación de Mary Carmen Ortigosa Uriarte, María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo Y Juan Carlos Mateluna Lillo; 37°) **Demanda Civil interpuesta por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa;** 38°) **Contestaciones de las Demandas Civiles por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Manuel Espinoza, en representación del Consejo de Defensa del Estado:** A. Excepción reparación satisfactoria. improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación (respecto de las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea) y Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandan, por preterición legal del demandante y por haber sido reparado en la forma que se expresa (respecto a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa). B. Excepción de Prescripción Extintiva. C. En cuanto al daño e indemnización reclamadas. D. Improcedencia del pago de ajustes e intereses con anterioridad a

que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; **39°) Contestación de la Demanda Civil por el abogado Víctor Carmine Zúñiga**, en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud: **A.** Excepción dilatoria de ineptitud del libelo por falta de algún requisito en el modo de proponer la demanda (artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil. **B.** Falta de legitimación causal para que Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, sea sujeto pasivo de una acción indemnizatoria por el homicidio y apremios ilegítimo en la persona del Señor Ortigosa **C.** Falta de legitimación activa de Ignacio Jesús Dabed Ortigosa para ser demandante de la acción de indemnización de perjuicios: la defensa se basa en su condición de nieto del Señor Ortigosa. **D.** Prescripción de la acción civil; **40°) Análisis de la contestaciones de las demandas civiles efectuadas por el Fisco de Chile;** **41°) Análisis de la contestación de la demanda civil efectuadas por el abogado Víctor Carmine Zúñiga**, en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud; **42°) Acreditación probatoria del daño moral;** **43°) Montos;** **44°) reajustes e intereses de las sumas demandadas** [hay resumen ejecutivo, página 469].

III. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- 1º) Fuente: **Arial.**
- 2º) Tamaño: **12.**
- 3º) Interlineado: **1,5 cm.**
- 4º) Alineación: **Justificada.**
- 5º) Fecha de inicio de la causa: **27 de enero de 2012.**
- 6º) Actuario de Tramitación Sumario: **Pablo Lazcano Cárdenas y Marcelo Varas Cicarelli.**
- 7º) Actuario de Tramitación Plenario: **Francisca Belén Rosales Castillo y Leslie Anahi Villalobos Retamal.**

IV. UBICACIÓN DE DOCTRINA:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 4°), 6°), 7°), 13°), 19°), 30°), 35°), 40°).

V. UBICACIÓN DE JURISPRUDENCIA:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 4°), 5°), 13°), 16°), 23°), 30°), 35°), 40°), 41°).

VI. REFLEXIONES DE LESA HUMANIDAD:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 6°), 7°) y 16°).

CONSIDERANDO:**VII. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL**

1°) Que a **2.041 a 2.053 (Tomo VI)**, con fecha **15 de marzo de 2019**, se dictó auto acusatorio **en contra ÓSCAR ALFONSO PODLECH MICHAUD**, como **autor** del delito de **Apremios Ilegítimos y Homicidio Calificado** en las personas de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga**, perpetrado en las comuna de Temuco el 02 de octubre de 1973, delito previsto y sancionado en el artículo 150 N°1 y 391 N°1, circunstancia 1° y 5° del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia de los señalados ilícitos penal, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio (que corren de fs. **1 a 2.008**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES (60):

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1 DANIEL BENJAMIN MATELUNA LILLO (21 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha **03 de febrero de 2012**, rolante de fs. **25 a 27 (Tomo I)**, acota ser hijo de **Daniel Mateluna Gómez**, quien era Suboficial retirado de Carabineros, de profesión practicante, era simpatizante del MIR y fue secretario de la Central Única de Trabajadores de Temuco. Expone que el 11 de septiembre de 1973, apenas supo lo que estaba pasando en Chile, se despidió de todos ellos, quienes no entendían lo que ocurría producto de su edad. Se fue de la casa, por lo que supo, donde su amigo **Carlos Contreras**, en calle Magallanes, Población San Antonio. Desde el día siguiente, empezaron los allanamientos en su casa, casi siempre producidos a partir del toque de queda, siempre por Carabineros de Temuco, golpeando y botando las puertas preguntaban dónde estaba su padre. Recalca que a pesar de los años, recuerda

perfectamente a uno de los Carabineros que lo detuvieron y lo golpearon. Siempre eran los mismos que allanaban su casa. Destaca que ellos siempre andaban de civil, a excepción del chofer que andaba con su uniforme y en vehículo de la institución. Anexa que el 13 de septiembre fue detenido por primera vez por personal de Carabineros de Temuco, les dio un nombre falso y fue llevado a la Segunda Comisaría de Carabineros, ya que según ellos, fue arrestado por violar el toque de queda. Fue liberado en la mañana del día siguiente, entre las 7 y 8 horas. No recuerda que Carabineros lo detuvieron. A su padre lo vio el 16 o 17 de septiembre en la casa de sus amigos, pasó dos días con él. El día 19 o 20 de septiembre los Carabineros volvieron a su casa, como era de costumbre, a allanar. Apareció el Carabinero que lo detuvo la primera vez y reconoció su verdadera identidad. En ese momento fue detenido inmediatamente, con su madre, porque él sabía todo lo que ellos habían hecho la primera noche cuando lo detuvieron y sus allanamientos. Agrega que estuvo 3 días detenido en la Segunda Comisaría de Temuco. Fue golpeado y amenazado constantemente. Cuando su padre supo que lo tenían detenido y no lo soltaban, él se entregó al Regimiento Tucapel. Al día siguiente lo liberaron. Desde que se entregó no lo vieron más. Por dos semanas no tuvieron noticias de él. Arguye que el 30 de septiembre supieron de él, por un papel que envió desde la cárcel con un Gendarme, que no supieron su nombre, porque en ese tiempo nadie se identificaba por miedo. En el papel él les decía que estaba en libre plática y que contactaran un abogado, que le llevaran comida, que se cuidaran, principalmente él. Contactaron al señor abogado **Sergio Merino Jarpa**, quien quedó de asumir su defensa. Sin embargo, posterior al 02 de octubre el abogado los contactó para decirles que ya no había nada que hacer, su padre había sido ejecutado y no alcanzó ir a visitarlo. Sustenta que el 01 de octubre, como a las 11:00 horas se presentó frente a la cárcel pública de Temuco, en calle Balmaceda, con lo que él pidió; y como a las 12:00 horas, llegó un Jeep militar y pudo ver cuando dos soldados lo ayudaron a bajar, prácticamente en brazos, porque no podía caminar, se veía muy maltratado, muy golpeado. Mientras lo registraban en la recepción de la cárcel pública, pudieron verse por última vez. Nunca pudo entregarle lo que pidió, por lo tanto volvió a su casa. Como a las 9:00 horas del día 02 de octubre su madre escuchó el **Bando Militar** donde decían que dos extremistas, entre los que estaba su padre y **José María Ortigosa Ansoleaga**, habían sido ejecutados por intentar fugarse del Cuartel Militar. Atestigua que empezaron los trámites para saber dónde estaba su cuerpo y tratar de recuperarlo. Con ayuda de algunas personas, sobre todo de **Alfonso Contreras**, quien era chofer del Almirante de la Marina en Punta Arenas, e hijo de **Carlos Contreras**, pudieron saber dónde estaba y reconocer su cuerpo en la

morgue del Hospital de Temuco. Les entregaron el cuerpo de manera escondida y pudieron darle sepultura en el Cementerio de Padre Las Casas. Fue el primer habitante de ese cementerio. Con el tiempo se enteraron de varias personas que estuvieron presos en la cárcel junto con él, entre los que recuerda está **Víctor Maturana Burgos**. Comunica que él tiene más datos sobre las personas que estuvieron presos con su padre. Además supo que su amigo **Guido Troncoso**, que fue ejecutado días después que su padre, también estuvo detenido con él. A pesar de los años, recuerda perfectamente a uno de los Carabineros que lo detuvieron y lo golpearon. Siempre eran los mismos Carabineros que allanaban su casa.

A.2 MARIA ISABEL LILLO FLORES (41 años de edad a la época de los hechos), declara de 28 a 30 (Tomo I); y a fs. 54 (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 03 de febrero de 2012, rolante de fs. 28 a 30 de autos (Tomo I), advierte ser la esposa de Daniel Mateluna Gómez. Él era jubilado de Carabineros, no estaba en servicio y apoyaba al Gobierno de Salvador Allende, pero no sabe si él militaba en algún partido político, ni si era miembro de alguna agrupación. Explaya que noche tras noche llegaba la fuerza pública, de todas las instituciones, a hacer allanamientos buscando a su esposo. Su esposo se había ido a la casa de la familia de **Carlos Contreras** y su esposa **Brígida**, quienes vivían en la Población San Antonio. Cuando allanaban lo primero que hacían era tomarla junto a su niño menor, les ponían un revolver en la cabeza y se ponían a registrar la casa, según ellos, buscando armas. Los amenazaban, apuntándoles con sus escopetas, dejaban a sus hijos boca abajo mientras registraban la casa. Como no encontraban nada, se llevaban a sus hijos **Daniel** y **Patricio** a la Comisaría y los tenían toda la noche en ese lugar. Continúa que su esposo se presentó al Ejército el día 20 de septiembre de 1973, acompañado por **Alfonso**, uno de los hijos de la familia **Contreras**. Pero a pesar de esto igual siguieron allanando su casa. Luego de esto, fue trasladado a la cárcel de Temuco, donde estuvo desde el 20 de septiembre hasta el día 1 o 2 de octubre, le pasó a avisar un Gendarme amigo de su esposo, que vivía en la Población El Esfuerzo, pero no recuerda su nombre, que él ya no se encontraba en la cárcel, lo había traslado al Regimiento Tucapel. Señala que antes de que lo llevaran al Regimiento, supo, por una enfermera que trabajaba en el Hospital y que era amiga de su marido, que lo habían llevado hasta allá porque estaba muy mal, tenía la mandíbula fracturada, sin dientes y sin uñas. Tiene entendido que esa enfermera, que no recuerda su nombre, desapareció. Nadie de su familia alcanzó a visitarlo en el Regimiento Tucapel, sólo supieron de su muerte por los

comunicados del **Bando Militar**, el día 02 de octubre. Tuvo conocimiento por personas que no conocía, que él salió caminando abrazado con otra persona, muy despacio desde el Regimiento y que les dispararon. Pero que en ningún momento ellos iban corriendo. Esas personas comentaron que iban en muy malas condiciones, por eso caminaba despacio. Continúa que sus hijos corroboraron al ver el cuerpo, que su esposo estaba mutilado. El cuerpo de su esposo lo entregaron desde el Hospital, fue un médico amigo, que no recuerda su nombre, que llamó a la familia de **Rosita** y su esposo de apellido **Palma**, quienes vivían en la calle Ziem, casi en la esquina del pasaje Gorostiaga, para que le avisaran que su esposo estaba en el Hospital y que fuera a retirar el cadáver, porque de lo contrario lo iban a dejar en una fosa común. Para poder retirar el cadáver tuvo que ir **Carlos Contreras** con su camioneta y sacar el ataúd escondido entre sacos de papas y carbón, ya que el recinto estaba muy custodiado de Militares y todo lo que entraba y salía lo revisaban. Proclama que afortunadamente la camioneta no la revisaron, porque ellos dijeron que andaban entregando unos sacos de papas y carbón que les habían encargado. A su esposo lo sepultaron en el cementerio de Padre las Casas. Fue el primer habitante de ese campo santo. Exclama que a pesar de que su marido estaba muerto y sepultado, seguían allanando su casa. Tuvo que irse a la casa de **Laura García** y su esposo, que vivían al lado de **Rosita Palma**. Después de todo lo sucedido se fue a la casa de su padre en San Bernardo, porque la situación era insostenible.

En declaración extrajudicial, rolante de fs. 54 de autos (Tomo I), afirma que el afectado era practicante, jubilado de Carabineros. Tenía una clínica en Rodríguez, Temuco. No sabe si militaba en algún partido, pero era de la U.P. junto a los hijos de 18 y 20 años en ese entonces. Lo acusaron de tener una clínica clandestina. El día 11 de Septiembre de 1973, por radio se enteró que debía presentarse al Regimiento Tucapel. Se fue a casa de unos amigos, ya que al hogar llegaban a buscarlo Carabineros o Militares. Como no aparecía, se llevaban a los hijos de a dos detenidos, los golpeaban en la Comisaría y los soltaban en horas del toque de queda. Cuando se enteró que el hijo mayor tenía la cabeza rota, debido a los golpes recibidos, el afectado se presentó al Regimiento Tucapel, el 20 de Septiembre. No sabiendo más de él hasta que lo entregaron muerto. Hubo un **Bando N°8** el miércoles 4 de Octubre de 1973 del Comandante de la Guarnición Militar de Temuco, en la que decía que el día 02 de octubre, él afectado y **José María Ortigosa Ansoleaga** trataron de huir del Regimiento y fueron dados de baja, firmado por **Pablo Iturriaga Marchesse**. El cuerpo les fue entregado en el hospital de Temuco y lo enterró la familia en el Cementerio Padre de las Casas. Cuando les entregaron el cadáver estaba sin

dientes, producto de la tortura. La familia fue muy reprimida y actualmente la declarante vive en Canadá con todos sus hijos.

A.3 ERNESTO AUGUSTO TAPIA MARAMBIO (41 años de edad a la época de los hechos). En declaración judicial de fecha 05 de diciembre de 1981, rolante de fs. 52 a 53 (Tomo I), alega que fue administrador del cementerio general de Temuco durante 20 años y terminó su labor alrededor de 3 a 4 años a la fecha. Respecto a los cadáveres que llegaban en el año 1973 y 1974 como indigentes eran sepultados en los últimos patios, que eran los números 25 a 29, donde cada vez que estos cuerpos eran sepultados como indigentes luego que pasaba el tiempo sin que se hubiera cambiado el sistema de arriendo o que se haya llevado a una sepultura propia, en todo caso, estos terrenos eran ocupados solo una vez por falta de espacio, sino que si había en una sepultura para arriendo un indigente y llegaba otro se sepultaba ahí. Si esa misma sepultura era arrendada o comprada por otras personas, los restos de los cuerpos que se habían sepultado con anterioridad quedaban enterrados en los mismos lugares reducidos y muy profundamente enterrados. Además relata que ese terreno es muy húmedo, por lo que los cajones y cuerpos de estas personas no duraban mucho tiempo. Era muy común que en alguna sepultura se pudiera encontrar varios cuerpos de distintas personas y esto era por falta de espacio. Precisa que solamente vino a funcionar el cementerio de Padre Las Casas en el año 1973, después del 11 de septiembre y recuerda que el primer cadáver sepultado en ese cementerio fue el señor **Mateluna**, quien fue muerto por Militares.

A.4 ELIAS AMAR AMAR (33 años en la época de los hechos), quien declara de fs. 61 a 62 (Tomo I); y de fs. 89 a 91 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre de 2003, rolante de fs. 61 a 62 (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 583 a 584 (Tomo III), anexa que fue detenido el 14 de septiembre de 1973 en horas de la noche, en el interior de su domicilio por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, quienes vestían de uniforme y luego de realizarse un gran operativo. El motivo de su detención presume que se debió a su cargo de secretario comunal de Temuco del Partido Socialista. Luego de su detención, fue trasladado a la Base Aérea de "Maquehue", donde fue interrogado y torturado, siendo estas torturas golpes con puños, pies, armas de fuego, además de cortarle el pelo; dicha sesión duró hasta cerca de las 08:00 horas del día siguiente. Esa misma tarde los mismos soldados de la FACH lo trasladaron a la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel de Temuco, donde fue llevado ante el Fiscal Militar, percatándose que se trataba de un

conocido abogado de la zona de nombre **Alfonso Podlech**, quien lo mandó incomunicado a la cárcel pública de Temuco. Consultado respecto si vio personas detenidas en la cárcel o regimiento Tucapel, quienes posteriormente fueron indicadas como desaparecidas o muertas dentro del periodo en que permaneció en esos lugares, es decir hasta el mes de enero de 1974, recordó haber visto entre otras personas a **Pedro Ríos, Daniel Mateluna, José Ortigosa y Omar Venturelli**. Apunta que en el caso de **Ortigosa y Mateluna**, estos fueron muertos a principios del mes de octubre, luego de haber sido sacados de la cárcel, por personal Militar quienes los trasladaban al Regimiento, ignorando las circunstancias en que ocurre la muerte de estos dos y quienes lo hicieran. En cuanto a las veces que tuvo ocasión de ver a estas personas, solo a **Mateluna** lo vio en precarias condiciones físicas debido a las torturas recibidas por parte de sus interrogadores, pero en el caso del resto de los nombrados pudo darse cuenta que se encontraban en un buen estado físico.

En declaración extrajudicial, de fecha 31 de agosto de 1990, rolante de fs. 89 a 91 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 228 a 230 (Tomo I), escrutó que las detenciones primarias que se realizaron eran en su mayoría por cosas de tipo personal y algunas de ellas, personas muy conocidas más que algo planificado, respondía al arbitrio. Así lo vio en aquella multitud de detenidos, campesinos y gente humilde que no representaban ningún peligro, agregó que luego cuando le levantaron la incomunicación supo que habían campesinos que no sabían ni porque estaban allí. Posteriormente lo dejaron en libre plática en la cárcel, había unos 700 a 800 detenidos, se encontró allí con **Pedro Ríos, Venturelli, Ortigosa** quien luego fue sacado y llevado al Regimiento. Destacó que en la noche y en la tarde venían a buscar detenidos, los llamaban por una lista, algunos volvían y otros no. Respecto a **Mateluna**, lo reconoció, porque lo había conocido en calidad de dirigente deportivo. A **Mateluna y Ortigosa** los llevaron juntos un día, después no volvieron y no supo más de ellos.-

A.5 ELCIDES LUIS GUBELIN DURAN (24 años a la época de los hechos), quien declara de fs. 63 a 64 (Tomo I); 70 a 71 (Tomo I); y a fs. 73 (Tomo I),

En declaración extrajudicial de fecha 05 de Noviembre de 2003, rolante de fs. 63 a 64 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 585 a 586 (Tomo III), apunta que cerca del 20 de septiembre de 1973 llegó a la cárcel de Temuco, oportunidad en la cual tuvo la ocasión de ver detenidos en este lugar a **Daniel Mateluna y José Ortigosa**, quienes en una oportunidad fueron sacados

del penal, ignorando para donde eran llevados o en qué circunstancias fueron muertos, ya que a los días siguientes se enteró, por comentarios, que habían sido al parecer fusilados. Manifestó que no pertenecía a ningún partido, no conocía a la gente que estaba detenida y sólo recuerda a esos dos, debido a que el primero de los nombrados estaba en muy mal estado físico producto de las torturas recibidas, mientras que en el caso de **Ortigosa**, éste era una persona muy activa y que incluso había pintado las galerías del recinto carcelario, en el caso de él su condición física era buena. Acerca de las fechas en que estas personas fueron muertas, no pudo indicarlo específicamente, pero especifico que fue antes de su presentación al Consejo de Guerra a mediados de octubre de 1973. Finalmente señaló que fue llevado a declarar al Regimiento de Temuco, encontrándose detenido en la cárcel de esta ciudad, sólo declaró cuando llegó y fue ante el señor Fiscal (cuyo nombre no recuerda) quien luego de hacerle algunas preguntas lo envió a la cárcel.

En declaración extrajudicial, de fecha 28 de febrero de 2012 rolante de fs. 70 a 71 (Tomo I), difunde que después de cinco o seis días de su detención fue trasladado hasta la Cárcel Pública de Temuco, siendo llevado en dos oportunidades hasta el Regimiento de Infantería N°08 Tucapel de Temuco, recordando que la última vez que estuvo ahí, fue interrogado por el Capitán **Ubilla** y otra persona de civil que le prestaba cooperación cuyo apellido era **Novoa**. En esa Unidad Militar permaneció solo un par de horas y en la noche fue trasladado nuevamente hasta la Cárcel Pública de Temuco, lugar donde estuvo recluido dos años y cuatro meses, quedando en libertad según recuerda a fines del año 1975. Respecto a **Daniel Mateluna Gómez**, expone que lo conoció al interior de la Cárcel Pública de Temuco, el permaneció recluido solo un par de días del mes de septiembre de 1973, no recordando si en alguna oportunidad le mencionó el motivo por el cual había sido detenido, como tampoco recordó haberlo visto en malas condiciones físicas. El único recuerdo que tiene es que a fines de septiembre de 1973 no lo volvió a ver más y nunca supo que había pasado con él. Finalmente, señaló que fue detenido junto a **Oscar Seguel** y **Juan Saravia Domke**, bajo el argumento que estaban ideando un complot en contra del Estado, ya que según ellos tenían en su poder armas. Esta situación era totalmente falsa y aseguró que su detención se debió a que ocultó a **Hernán Catalán Escobar**, su hermano **Hugo** y a otras tres personas que pertenecían a la Juventud del Partido Socialista.

En declaración judicial, de fecha 19 de marzo de 2012 rolante a fs. 73 (Tomo I), ratificó su declaración extrajudicial que rola de fs. 70 a 71 (Tomo I), con excepción de que estuvo recluido en la Cárcel de Pitrufquén, puesto que en

realidad estuvo detenido en la 5° Comisaría de Carabineros de esa ciudad. A la pregunta, asegura que no conocía a don **Daniel Mateluna** y solo tuvo contacto con él durante el período en que coincidieron en la cárcel de Temuco, por lo que desconoce qué ocurrió con esta persona.

A.6 CARMEN GRACIELA URIARTE OYANGUREN (47 años a la época de los hechos), quien declara de fs. 85 a 88 (Tomo I); y de fs. 331 a 333 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de agosto de 1990, rolante de fs. 85 a 88 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 224 a 226 (Tomo I), apoya que con su marido vivían en Santiago y en el verano de 1973 fueron al sur a veranear, les gusto la zona de Temuco por lo que decidieron comprar un fundo en sector Catrico. No se alcanzó a inscribir. No se despidió a nadie, solo se recontrató y siguieron con el mismo personal que existía. El abogado de la contraparte vendedora fue **Alfonso Podlech**, quien después fue Fiscal Militar de la zona. Señaló que cierta persona dijo que su marido tenía allí una escuela de guerrilla. Aproximadamente un mes antes del 11 de Septiembre, en Santiago, donde tenían una estación de servicio-garage, se robaron una caja de fondo de grandes dimensiones, como de 2 metros, se lo llevaron civiles en un camión, se hizo la denuncia pero nunca paso nada. Dentro de esta caja habían tres letras de cambio suyas en blanco, como a los dos años después aparecieron aquellas letras en el edificio Diego Portales, la acusación fue que ella misma las había dado para financiar la defensa de **Carlos Laso**. Además se le acusó de poseer bienes adquiridos en virtud de la amistad con **Salvador Allende**. Afirma que su marido no tenía militancia política. El año 1964 conocieron al Presidente **Salvador Allende**, cuando salió elegido Senador, no le vieron ni tuvieron contacto con él, solo su hijo se reunió con él una vez, hacia el año 1972. El 11 de Septiembre se encontraban en Santiago, cuando el Intendente **Jaime Concha** apareció en las listas. Lo fue a buscar y lo detuvo una patrulla, conduciéndolo al Estadio Nacional. Allí un pariente Militar lo liberó y lo condujo escoltado a la casa. En el intertanto **Jaime Concha** se refugia en su casa, estuvo unos días, salió justo de la casa, pues los datearon que los allanar allanarían. Efectivamente llagaron, pero ya no estaba. Fueron al Taller garaje el 13 de Septiembre a ver como estaba, pasó al Regimiento, allí los llevó detenidos una patrulla Militar. La interrogo un Oficial Joven, pero gracias a un parentesco con un sobrino Militar la dejaron en libertad. Llegó a la casa. Al otro día llegó su marido del Estadio, estaba fuertemente impactado de los sucesos y hechos que allí presenció. Narra que hacia el 21 de septiembre llegó la Policía de Investigaciones

a su casa, preguntando por su marido, ella pregunto de qué se trataba y le contestaron que era un exhorto de Temuco. Al día siguiente se trasladó a Temuco y se entrevistó con el Fiscal **Podlech**, ya que la orden la impartía esa repartición. Indagó el motivo de la citación, la acusación era tener una escuela de guerrillas. Le hizo ver la falsedad absoluta de esa acusación, pues se había recontratado a todo el personal, no había nadie nuevo. Sin embargo el administrador antiguo del fundo, era socialista y era también director de tránsito de la Municipalidad de Villarrica. Alega que **Ulises González** era el Jefe de Investigaciones de Temuco. Quién posteriormente persiguió y hostigo a la familia en innumerables oportunidades. Aduce que **Podlech** al otro día comentó que el administrador había confesado que tenía unos textos marxistas y un arma, lo que había sido incautado, entonces señaló que no habría ningún problema que se presentara. Su marido decide presentarse, pese a sus insistencias de que no lo hiciera. El verano de 1973 fueron a veranear con **Carlos Cardoen**, quién había llevado un avión, luego acusaron a **José** de hacer guerrillas con aviones. **Carlos** que era Reserva de la FACH dijo que él lo llevaba y se fueron en el auto de la declarante, muy vistoso y único de Temuco. Se alojaron en un Hotel y al rato, una gran cantidad de efectivos Militares tomó detenido a los tres viajeros, esto es **José María, Carlos Cardoen y Pedro Pablo Errázuriz**. Fueron interrogados y liberados posteriormente, salvo **José**, pues tenía una orden para presentarse. Los acompañantes le dijeron que estuviera tranquila. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Temuco, el Alcaide **Maximiliano Vivanco**, que la conocía, la llamó entre el 25 y 28 de septiembre y le comunicó que su marido se encontraba incomunicado, que era el único preso político incomunicado y en muy malas condiciones, ya que había sido torturado con electricidad. Le mandó un mensaje manuscrito, en el que señalaba que necesitaba dinero, pues le pedían un rescate de 250.000 dólares. **Carlos Cardoen** expresó que le entregaron una cantidad ligeramente inferior a **Pablo Iturriaga Neumann**. Nunca pudo comprobar estos hechos efectivamente. Desarrolla que el Alcaide la llamaba regularmente y con fecha 03 de octubre recibió la noticia. Fueron al día siguiente al Hospital, la dejaron ver el cuerpo con una persona del personal subalterno gracias a una propina, pues el medico jefe se lo negaba. Pudo ver el cadáver de su marido, tenía 11 tiros. Musita que en el Regimiento habló con don **Luis Jofré Soto**, quien le dijo que a los fusilados se les depositaba en la fosa común, frente a las fuertes insistencias cedió y se lo dio en un cajón sellado. Le prohibieron hacerle misa y anuncios en los diarios. No obstante, ella lo hizo, enterrando a su marido en Santiago, con gran asistencia. Luego tuvo que ir a Temuco a defender el campo. La defensa que hacían era que su marido era marxista. Por lo que habló con **Urrutia** en la Corte y el Relator

Zurita, quienes se negaron a ayudar, argumentando que su marido fue fusilado por marxista. En Temuco se siguió un Juicio para reivindicar el campo, en el que no pudo recuperarse, pasando a poder de la antigua dueña, **Herminia Diez**, quien lo vendió a su vez. Posteriormente en una conversación con el Fiscal **Podlech**, éste le dijo que lo había liberado luego de interrogarlo. El Alcaide le relató que en una oportunidad había tomado unas copas con **Luis Jofré Soto**, quien le dijo “ese tal por cual **de Ortigosa** casi me convence”. Sustenta que fue allanada en numerosas oportunidades, por distintas ramas de las Fuerzas Armadas. E hizo varias gestiones, en la Cruz Roja y en otros lugares. Posteriormente se fueron a España, donde permanecieron un largo espacio de tiempo.

En declaración judicial, de fecha 25 de marzo de 1991, rolante de fs. 331 a 333 (Tomo I), aproxima ser la cónyuge de **José María Ortigosa Ansoleaga**, quien falleció el 02 de octubre de 1973 en Temuco, por una patrulla Militar. En el año 1973 vinieron a esta zona de vacaciones y su marido se enamoró de la región hasta tal punto que decidió comprar un fundo en Catrico a 20 kilómetros antes de Villarrica, el cual fue comprado a la señora **Herminia Diez**, lugar al cual vinieron en solo dos oportunidades. Hizo presente que el abogado de la señora **Diez** era el Fiscal Militar de ese entonces, don **Alfonso Podlech Michaud**. Señaló que un señor de esta ciudad, al cual no quiso mencionar, denunció a su marido como que era marxista y fue así como llegó a su casa un exhorto emanado de la Fiscalía Militar citando a su marido, el cual pese a su reclamo, señaló que nada temía y por tanto decidió presentarse siendo acompañado por los señores **Carlos Cardoen Cornejo** y **Pedro Pablo Errázuriz** encontrándose en Temuco con **Claudio Picasso** entregándolo en la FACH, según le dijo **Cardoen**. La acusación que se le hizo a su marido era que en el campo recién comprado había una escuela de guerrilla, lo que era totalmente falso puesto que la gente que estaba en el campo fue recontratada por ellos y no se puso a nadie más. Respecto a la noticia del fallecimiento de su marido, al cual se le aplicó la “ley de fuga”, la supo por intermedio del Alcaide de la época, don **Maximiliano Vivanco**, el que además de llamarla por teléfono, le envió un escrito de su marido en el que le comunicaba que se le estaba pidiendo la suma de US 250.000 por su libertad, no indicándole quien se los pedía, pero le informaron que era el Intendente de ese año **Pablo Iturriaga** junto a un tal **Pacheco** de la FACH. En conocimiento del fallecimiento de su marido, se trasladó de inmediato a Temuco, apersonándose en el Regimiento Tucapel, conversando con el Mayor **Luis Jofré Soto**, el cual le señaló que los cadáveres de los fusilados iban a la fosa común y no le entregarían el cuerpo de su marido, respondiéndole que tendría que dispararle de frente y no en la espalda como a su marido para que los enterraran a

los dos en esa la fosa común. Después de eso ingresó a una oficina donde conversó con otros Militares y regresó diciéndole que llevara un cajón y ropa, al respecto de la ropa, le dijo que su marido estaba vestido, a lo que contestó que esa ropa no servía. Se le prohibió poner aviso en El Mercurio, sin misa y que lo llevara de inmediato al cementerio. Posteriormente fue al Instituto Médico Legal, donde un funcionario o auxiliar la dejó ver el cadáver de su esposo, que estaba en una camilla autopsiado presentando heridas de bala en la espalda. Luego un hijo retiró el cuerpo de la morgue, siendo trasladado a Santiago donde se le dio cristiana sepultura y puso los avisos en El Mercurio y le mandó hacer una misa como correspondía según su creencia. Agrega que al día siguiente al fallecimiento de su esposo, el campo que él había comprado a la señora **Diez** fue requisado por la autoridad y entregado nuevamente a doña **Herminia Diez**, quien rápidamente lo vendió. Al respecto se siguió un juicio en un Juzgado de esta ciudad, pero lo abandonó al ver que se cometía tanta injusticia y que no valía la pena seguir con el juicio y al poco tiempo esa señora había muerto. Distinguió que su marido no era marxista y es más para el día 11 de septiembre de 1973 puso una bandera en la casa y celebró ese día; toda su familia era y es de derecha, todo lo que sucedió se debió a una acusación infundada de parte de una persona que le tenía envidia. Supo por último, que el responsable de haber dado ordenado la ejecución de su cónyuge fue el Mayor **Luis Jofré Soto**.

A.7 OSVALDO BASTIDAS CERÓN (34 años a la fecha de los hechos), quien declara de fs. 143 (Tomo I); y a fs. 144 a 145 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 16 de septiembre de 1973, rolante a fs. 143 (Tomo I), aquilata que fue empleado de la Municipalidad de Villarrica desde aproximadamente 14 años a esa fecha, desempeñándose como Director del Tránsito, en los primeros días de junio llegó hasta su oficina un tal **José María Ortigosa Ansoleaga** con el objeto de sacarle patente a un automóvil y dos tractores de su propiedad, aseguró que era primera vez que vio y por ende conoció a ese sujeto. Posteriormente, a los días siguientes, **Ortigosa** regresó a la Municipalidad y lo invitó al “Club Social” de esta ciudad, lugar donde le manifestó que carecía de un administrador para un Fundo que poseía en Catrico, empleo para el cual se ofreció y este de inmediato aceptó la oferta. Así el 09 de junio al reunirse en el club antes señalado, redactaron un contrato de trabajo. Su función específica fue la de pagar los jornales de los obreros que laboraban en el Fundo, además de preocuparse de las siembras, compras de animales, etcétera. Una vez que se hizo cargo del predio, tuvo conocimiento que este individuo había concurrido en numerosas ocasiones hasta allí, con personas que no conocía, que

en la casa patronal observó libros de lectura marxista, no llamándole mayormente la atención, ya que **Ortigosa**, manifestó en reiteradas oportunidades que era amigo personal del ex presidente **Salvador Allende**, con asimismo los senadores **Altamirano, Volodia Teitelboim y Jaime Suárez**. En virtud a estos, consultó telefónicamente al Senador **Suarez**, dado que como independiente, trabajó en su campaña política, quien le manifestó que **Ortigosa** era un individuo de pésimos antecedentes, señalándolo como estafador internacional. Por esta razón trató de desistir de este contrato, lo que no se concretó con razones ajenas a su voluntad. Finalmente declaró que desconocía el paradero de este individuo, el cual podría encontrarse en Santiago, lugar de donde lo llamaban telefónicamente.

En declaración judicial de fecha 26 de septiembre de 1973, rolante de fs. 144 a 145 de autos (Tomo I), fue el 16 de septiembre de 1973, en la subcomisaria de Carabineros de Villarrica, por ser administrador del Fundo de **José Ortigosa Ansoleaga**, en el cual fueron encontrados explosivos por Carabineros, hecho del cual no tenía conocimiento alguno. En efecto, aseguró haber sido contratado por **Ortigosa**, a mediados de junio de ese año, para que le administrara un Fundo en Catrico. No tenía conocimiento de que en dicho Fundo existieran armamentos o explosivos y los fines que se daban a estos. Relató que con posterioridad unos tres días antes del Movimiento Militar, se enteró que un tal **Marcelo**, de quien ignora todo dato, habría repartido explosivos entre los trabajadores, que en total suman trece. El tal **Marcelo**, según se le hizo saber, era estudiante, sin especificar de qué universidad o carrera. Manifestó de su filiación política que es independiente y si bien ayudó en la campaña política del ex Senador **Jaime Suárez Bastidas**, fue por el hecho que este señor es pariente suyo, en el grado de primos hermanos. Actualmente y por el espacio de 14 años se desempeñaba como director del tránsito en Villarrica. Afirmó que jamás ha usado armas y salvo la campaña política antes señalada, no ha tenido participación activa de esa índole. No ha sido activista ni propago ideas marxistas en pro del Gobierno anterior. Tampoco ha tenido contacto con grupos extremistas que hayan portado armamento, panfletos o afiches. Señaló haber sido contactado telefónicamente por elementos del MIR, quienes le comunicaban “que no se metiera con los fascistas porque algo le iba a pasar él o a su familia”.

A.8 UBILDO ANTONIO JIMENEZ VARAS (32 años a la fecha de los hechos), quien declara a fs. 147 (Tomo I); y de fs. 284 a 285 (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 1973, rolante a fs. 147 (Tomo I), arguye que es técnico agrícola experto en lechería, por esto le atendía el Fundo a **Mario Cortés Bornand**, hace un mes y medio, lo atajo

en la calle **José María Ortigosa**, para pedirle profesionalmente le atendiera su campo. Que posteriormente visitó el campo de **Ortigosa** para hacer un plan de explotación, el cual no se llevó a efecto, porque no tuvo oportunidad de conversar nuevamente con **Ortigosa**. Cuando visitó el campo no fue a la casa patronal, sino estuvo solamente en la parte baja del mismo.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto del 2012, rolante a fs. 284 a 285 (Tomo I), asegura que fue jefe de área del Servicio Agrícola y Ganadero de la zona de Villarrica desde el año 1971, siendo nombrado en el mes de junio del año 1973, interventor de la Industria Maderera Leopoldo De Miguel e hijo, ubicada en la ciudad de Villarrica, en ese entonces tomada por sus trabajadores y dirigida por el MIR. Posteriormente, tras el Golpe de Estado el día 11 de septiembre de 1973, fue detenido por personal de Carabineros en su domicilio, siendo trasladado hasta la Subcomisaria de Villarrica, donde permaneció hasta el día 02 de octubre del mismo año, siendo luego trasladado a la Cárcel de Loncoche, hasta el 22 de diciembre de 1973. De lo anterior, adosa que en su estadía en la Cárcel de Loncoche fue trasladado hasta el Regimiento Tucapel, de Temuco donde permaneció por algunas horas y fue torturado con electricidad. A la consulta, respecto de **Daniel Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga**, acotó que del primero de ellos desconoce antecedentes y a **Ortigosa** le tocó conocerlo debido a que él tenía un campo en el sector de Catrico y se comentaba que era activista del Gobierno y pagado para realizar estas labores, a quien recordó que cuando se encontraba detenido en el Regimiento Tucapel lo trasladaban por un patio esposado con las manos atrás, desconociendo mayores antecedentes de su paradero. Respecto a la consulta, destacó que luego del tiempo logró establecer que uno de sus torturadores en el Regimiento Tucapel, fue un Capitán de apellido **Quintana**, y el Fiscal Militar que lo interrogó era de apellido **Podlech**, quien le hizo consultas respecto a **Ortigosa**.

A.9 VICTOR HERNAN MATURANA BURGOS (34 años a la fecha de los hechos), quien declara de fs. 231 a 238 (Tomo I); 311 a 317 (Tomo I); 345 a 348 (Tomo I); 561 a 563 (Tomo II); 581 a 582 (Tomo II); 620 a 621 (Tomo II); 1.117 a 1.118 (Tomo IV); 1.452 a 1.454 (Tomo V); y a fs. 1.509 a 1.510 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 31 de agosto de 1990, rolante de fs. 231 a 238 (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 301 a fs. 306 (Tomo I), atestigua ser ex oficial de Carabineros, siendo parte del año 1973 estudiante universitario, tenía una activa participación política y social en la universidad. Expresó que a raíz de un allanamiento hecho a su casa por una

patrulla Militar que andaba en su búsqueda, al no estar allí, se llevan de rehén a su hermano **Eugenio Maturana**. Por lo que se presenta voluntariamente en el Regimiento Tucapel, en la Fiscalía, su hermano fue dejado en libertad y él quedó detenido e incomunicado por orden del asesor legal de ese Tribunal, el abogado **Alfonso Podlech Michaud**. Se le inició proceso para ser sometido a Consejo de Guerra. Finalmente lo condenó a la pena de presidio perpetuo de cinco años, por el delito de traición. Petición que el abogado asesor de la Fiscalía hizo, en su calidad de abogado acusador, fue la pena de muerte. Ensaya que fue destinado a cumplir su condena en la cárcel de Temuco, lugar donde permaneció del 13 de septiembre de 1973 hasta el 26 de julio de 1975. En esa fecha es trasladado a la penitenciaría de Santiago, lugar donde permaneció hasta el mes de febrero de 1976, mes en que sale del país rumbo a Canadá, por haberse conmutado su pena de prisión por extrañamiento, en virtud del decreto 504. Manifestó que el propósito de su declaración es señalar circunstancialmente, los lugares, momentos y contextos en que estuvo con diversas personas, entre ellas **José Ortigosa**. Relató que en el mes de septiembre, alrededor de las 15.00 horas en un día de la última semana, en el momento que se encontraba en el patio junto con el resto de prisioneros, fue llamado por un funcionario de Gendarmería para ser llevado a la Fiscalía. También llamó a **José María Ortigosa** que también estaba en el patio. Fueron sacados juntos y llevados en el mismo vehículo al Regimiento. Los condujo en una camioneta con Guardia Militar, un Suboficial del servicio de Inteligencia de apellido **Moreno**, quien siempre vistió de civil. Continuó que llegados al Regimiento, los hacen esperar en el calabozo al lado de la guardia. Transcurridos unos minutos llega un Conscripto y vendándole la vista lo conduce al gimnasio, entregándolo al equipo de torturadores. Terminados estos su tarea, se lo llevan a declarar a la Fiscalía, donde lo interroga el asesor legal en base, informó que aquellos lo habían entregado. Después de esto se le lleva de nuevo al mismo calabozo, permaneciendo un tiempo breve, pues **José Ortigosa** ni ningún otro detenido permanecido en él. Lo llevan de vuelta a la cárcel incomunicado. Alrededor de la medianoche del mismo día, sorpresivamente entró a su celda, un Cabo de Gendarmería de apellido **Silva**, a quien apodaban el “**Choro Silva**”. Muy excitado y sabiendo que él había estado en el Regimiento junto con **Ortigosa**, le dijo: “Vengo del servicio hospital que entregué a las 12 de la noche y hace poco llegó el cadáver de **Ortigosa** todo baleado”. De esta forma supo la muerte de esta persona, lo que verifico días después, cuando se le dejó en libre plática y se reintegró al grupo de presos políticos. Aseguro que no conocía con anterioridad a **José María Ortigosa**.

En declaración judicial de fecha 20 de febrero de 1991, rolante a fs. 311 a 317 (Tomo I), ratificó su declaración prestada ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 31 de agosto de 1990. Respecto a la situación de **José María Ortigosa**, sustentó que en el mes de septiembre, día exacto no recuerda, se encontraba en la cárcel de Temuco junto a otros prisioneros y entre ellos **José Ortigosa**, a quien no ubicaba, ya que eran más de doscientos presos que allí habían. Cuando fueron llamados **Ortigosa** y él, conducidos en un vehículo Militar al Regimiento Tucapel, al mando de un Suboficial de apellido **Moreno**. En el vehículo solo iban **Ortigosa** y él, aquel parecía ser una persona de recursos, ya que le contó durante el trayecto al Regimiento sus inquietudes respecto de la vida que iban a llevar en la cárcel, como pintarían la galería y cosas de ese tipo. Llegados al Regimiento son conducidos al calabozo al lado de la guardia, al rato después fue llevado por un Conscripto a la sala de tortura y a continuación a la interrogación ante el asesor legal de la Fiscalía y luego a la vuelta del calabozo ya no estaba **Ortigosa**, para enseguida conducirlo de regreso a la cárcel incomunicado. Suma que alrededor de la medianoche del mismo día, sorpresivamente entró a su celda, un Cabo de Gendarmería de apellido **Silva**, a quien apodaban el “**Choro Silva**”, muy excitado y sabiendo que había salido temprano con **Ortigosa**, le dijo más o menos lo siguiente: “Vengo del servicio hospital que entregué a las 12 de la noche y hace poco llegó a la morgue el cadáver de **Ortigosa** todo baleado”. Eso fue lo último que supo de **José María Ortigosa**, al cual como dijo, no conocía con anterioridad a los hechos.

En declaración extrajudicial de fecha 21 de febrero de 1991, rolante a fs. 345 a 348 (Tomo I), atina que en lo referente a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se presentó físicamente ante ellos y entregó una declaración escrita más o menos detallada de algunas personas detenidas y desaparecidas en la ciudad de Temuco, o que estuvieron en la cárcel de esta ciudad, en los años 1973 y siguientes. Decantó respecto de **José María Ortigosa**, que tenía unos 45 años, 1.80 metros de estatura aproximadamente, macizo, tez morena y cabellos negros. Relató el traslado al Regimiento junto a **Ortigosa** y como se enteró de su muerte por el funcionario de Gendarmería conocido como el “**Choro Silva**”. Con posterioridad llegó a la cárcel el rumor que a **Ortigosa** lo habían baleado al intentar fugarse.

En declaración extrajudicial de fecha 03 de julio del 2003, rolante de fs. 561 a 563 (Tomo II), blasona que fue detenido el 13 de septiembre de 1973, en dependencias del Regimiento "Tucapel" de Temuco, por cuanto se fue a presentar en forma voluntaria, ya que el día anterior fue llegado como rehén un

hermano suyo al allanar su domicilio y no encontrarse, dejándole el mensaje que si no me presentaba su hermano iba ser muerto. La búsqueda de su persona se debía que era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.), además que toda su familia era partidaria del gobierno del presidente **Salvador Allende**. Es el caso que una vez estando detenido, en el interior del Regimiento antes citado, se le hizo un documento por parte de la Fiscalía para su ingreso a la cárcel de la ciudad, donde fue llevado ese mismo día. Su detención se extendió hasta el mes de enero de 1976, haciendo presente que el día 13 de octubre de 1973, fue sometido a un Consejo de Guerra integrado por los representantes del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y presidido por un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco don **Mario Olate Melo**, quien además llegó vestido de uniforme; a raíz de ese Consejo es que fue condenado la pena de presidio perpetuo, por lo que fue llevado a la cárcel. En el mes de enero de 1976 se le conmutó la pena por la de extrañamiento, siendo enviado a Canadá. Durante el tiempo que estuvo detenido en la cárcel de Temuco y las veces que fue llevado a prestar declaración bajo sesiones de torturas en el recinto del Regimiento "Tucapel", recordó haber visto pasar muchas personas que tenían igual condición a la suya, recordando entre otros a quienes en la actualidad se encuentran como detenidos desaparecidos **Luis Almonacid Dúmenez, Dixon Retamal Cornejo, Jaime Eltit Spielmann y Omar Venturelli Leonelli**; además dentro de las personas que fueron ejecutadas por razones políticas recuerda a **José Ortigosa Ansoleaga, Juan Antonio Chávez Rivas y Daniel Mateluna Gómez**. Con estas personas nombradas anteriormente, tuvo algún tipo de contacto ya sea en la cárcel o en el Regimiento, como por ejemplo en el caso de **Ortigosa**, con quien fue sacado en el mismo vehículo con dirección al Regimiento, pero en la tarde sólo volvió el, a los días después se sabía que a éste le habían dado muerte. Agregó con relación a las personas por las cuales eran interrogadas y/o torturadas en el Regimiento Tucapel, que rememora al entonces Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, el Suboficial **Leone Quilodrán Burgos**, un Suboficial **Orlando Moreno Vásquez** y un Oficial de nombre **Manuel Vásquez Chahuán**. Además recuerda a un Detective que estuvo agregado al Regimiento, de apellido **Morales** y a quien apodaban **"El Membrillo"**, ignora mayores antecedentes. Reconoce a estas personas debido a que antes de la tortura ellos conversaban con él y después podía relacionar sus voces y en otras ocasiones por comentarios de otros detenidos como también de Militares. Acotó que respecto a los funcionarios de la Fiscalía Militar que operaban los primeros días del mes de octubre de 1973, recuerda que el Fiscal era el Mayor **Luis Jofré Soto**, quien además era Segundo Comandante del Regimiento; el Asesor Jurídico **Alfonso Podlech Michaud**, quien

en su exclusiva condición de abogado asumió el puesto, pero debido a la personalidad que tenía **Jofré**, un poco tímido, éste era quien "hacía y deshacía" en la Fiscalía, por lo cual es una de las personas que tiene mayor información acerca de las personas que fueron muertas, desaparecidas y en general en todos los hechos ocurridos posterior al 11 de septiembre de 1973.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre del 2003, rolante a fs. 581 a 582 (Tomo II), acerca de los hechos que le eran consultados en estos interrogatorios, fundamentalmente se dirigían a la entrega de nombres de otros militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), partido al cual pertenecía; asimismo de los lugares donde, supuestamente tenían escondidas las armas para enfrentarlos en una lucha armada y consultaban por nombres de personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas que pudieran estar involucrados en su movimiento. Indicó que con **Dixon Retamal, Jaime Eltit y José Ortigosa** estuvo en el Regimiento y a quienes vio con evidentes signos de haber sido torturados, debido a su estado físico muy deplorable, además que ellos mismos le comentaban que estaban siendo torturados, por los mismos Militares de la unidad. Mayoritariamente hablaban y era muy conocido el método de la aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo por parte de los torturadores hacia los detenidos. Conjeturó a razón de nombres de las personas que pudieron haberle dado muerte a estas personas, no tiene antecedentes tan concretos, pero si manifestar que estos pertenecían a funcionarios Militares de dotación del Regimiento Tucapel de Temuco. Hizo presente que mientras permaneció detenido hasta el mes de enero de 1976, pudo percatarse que la constante de la muerte o desapariciones de los detenidos políticos de Temuco, fue mediante el mecanismo de sacarlos desde el lugar donde se encontraban y nunca más regresaban, justificándose a través de la "Ley de Fuga" algunas de las muertes.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero del 2009, rolante a fs. 620 a 621 (Tomo II), barbulló que cuando se presentó voluntariamente ante la Fiscalía del Regimiento Tucapel el día 13 de septiembre de ese año, fue debido a que fue citado previa amenaza de dar muerte a un hermano que se encontraba allí recluido si no lo hacía. Pues bien, al ingresar a esta Fiscalía fue el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, quién vistiendo de Militar con el grado de Mayor, ordenó sin consulta alguna al personal de esa Fiscalía, proceder a su detención, incomunicación y reclusión en la cárcel pública de esta ciudad, sin argumento alguno, lo que demuestra que este abogado era quién tomaba las determinaciones al interior de esa Fiscalía, sin tomar parecer si quiera a las autoridades Militares que se encontraban.

En declaración judicial de fecha 19 de julio del 2013, rolante a fs. 1.117 a 1.118 de autos (Tomo IV), ratifica sus declaraciones extrajudiciales prestadas ante la Policía de Investigaciones de Chile, que rolan de fs. 100 a 102, de fs. 163 a 164 y de fs. 257 a 258 (otorgadas en causa diversa). Basa a la pregunta que **Alfonso Podlech Michaud** fue la persona que ordenó su detención e incomunicación el 13 de septiembre de 1973, además de disponer su traslado a la cárcel. Esta persona vestía de uniforme en aquella oportunidad. Adosó que este abogado lo interrogó a lo menos en cinco oportunidades en la Fiscalía Militar mientras estuvo privado de libertad. Él dirigía el interrogatorio mientras que un actuario tomaba nota a máquina de lo que el declaraba. Constantemente **Podlech** le decía que si no entregaba toda la información que se le estaba pidiendo en el interrogatorio, iba a ser devuelto a otro equipo para que ellos le sacaran las respuestas que él requería. Este otro equipo era el grupo de torturadores que operaba en otra dependencia del Regimiento y al que tuvo que enfrentar en varias oportunidades durante su cautiverio. A veces pasaba primero a la sala de torturas y luego a la Fiscalía o lo hacía a la inversa, es decir, se cumplían las amenazas de **Podlech**. Anexó que en una ocasión se le hizo firmar en la Fiscalía una declaración tomada en la sala de torturas. A la pregunta, si bien el Mayor **Jofré** era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado **Alfonso Podlech**, puesto que tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que **Jofré**. Todo el mundo sabía esto.

En declaración extrajudicial de fecha 16 de mayo del 2016, rolante a fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.488 a 1.490 (Tomo V), colige que en la Cárcel Pública de Temuco cumplió condena entre el 13 de septiembre de 1973 hasta el día 26 de julio de 1975, posteriormente siguió el cumplimiento de esta en la Penitenciaría de Santiago hasta enero de 1976, fecha en la cual salió exiliado a Canadá. La condena anteriormente señalada, fue en base a una falsa acusación de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Traición a la Patria, la cual se determinó mediante un Consejo de Guerra, el cual fue dirigido por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, **Mario Olate Melo**, siendo el Abogado acusador el Fiscal Militar **Alfonso Podlech Michaud**. Respecto a las víctimas de los hechos investigados, **Daniel Mateluna Gómez** y **José Ortigosa Ansoleaga**, señala que a ambos los conoció al interior de la Cárcel Pública de Temuco, principalmente a **José Ortigosa Ansoleaga**, ya que en más de una oportunidad conversó con él e incluso fueron trasladados juntos hasta dependencias del Regimiento Tucapel, los primeros días de octubre del año 1973, siendo esa la última vez que lo vio con vida, ya que él nunca salió

del Regimiento y por consiguiente no regresó a la Cárcel. Conforme a su recuerdo, el día en que los fueron a retirar de la Cárcel, se presentó personal del Regimiento Tucapel a cargo del por entonces Sargento **Orlando Moreno Vásquez**, quien junto a un grupo de Conscriptos procedió a trasladarlos hasta el Regimiento Tucapel. Esto fue a eso de las nueve de la mañana, donde al llegar al Regimiento los dejaron en el calabazo ubicado en la Guardia de ingreso del mismo Regimiento. Respecto a su consulta, comunica que el tiempo que estuvo junto a **Ortigosa** en el calabozo de la guardia, conversaron diversos temas entre los cuales el trabajo que iban a realizar en la Cárcel Pública, relacionado con los arreglos de algunas dependencias de éstas, dando a entender la claridad que tenía este señor, en que iba a permanecer mucho tiempo detenido, dentro de las cosas que se pudo dar cuenta que **Ortigosa** provenía de una familia de mucho dinero e incluso tenía propiedades en Villarrica, las cuales no supo si estaba vendiendo o trabajando en la agricultura. Ahora bien, durante el periodo que estuvieron en los calabozos de la guardia, no había otros detenidos ni tampoco se pudo percatar de las identidades de sus custodios, sólo está claro en su recuerdo que en determinado momento lo vinieron a buscar dos Conscriptos los cuales procedieron a vendarle su vista, llevándoselo al interior del Regimiento, lugar donde lo comienzan a torturar en base a la aplicación de corriente eléctrica, golpes e inyecciones de Pentotal. Respecto a lo anterior, comenta que nunca tuvo claro la identidad de sus torturadores, sólo tiene claro que le tiraron a un catre metálico y lo torturaban de las formas antes mencionadas. Esta sesión de torturas duro desde las 09:30 horas de la mañana hasta medio día, horario en que lo regresan a la sala de guardia percatándose que al interior de esta ya no estaba **José Ortigosa**, posteriormente a eso de las dos de la tarde lo sacan de la guardia y comienzan una nueva sesión de torturas, la que duró hasta como a las ocho de la noche, horario en que lo regresan a la Cárcel Pública, en calidad de incomunicado, condición que duró cerca de tres días. Después de su incomunicación vuelve a la libre plática junto a los otros detenidos, dándose cuenta que en base a sus comentarios que **Ortigosa**, no había regresado. No obstante, esta situación la presumía, ya que estando incomunicado al calabazo llegó un Gendarme de apellido **Silva**, apodado "**El Choro**" quien omitiendo todo procedimiento interno de la Cárcel habló con él y le comunicó que el cuerpo sin vida de **Ortigosa**, había llegado baleado al Hospital Regional, señalándole que se enteró directamente de esta situación, ya que él estaba cumpliendo servicio en dicho Centro Asistencial ese día. Hace presente que nunca supo el nombre completo del Sr. **Silva**, pero mediante averiguaciones que hizo con otro Gendarme, se le dio la información preliminar que hoy día estaría fallecido. Agrega

a lo anterior, que nunca supo qué pasó con el Sr. **Ortigosa**, al interior del Regimiento, posteriormente se enteró por medio de un **Bando Militar**, que había sido ejecutado junto a **Daniel Mateluna**, al intentar huir del Regimiento. No sabe en qué momento sacaron de la Cárcel Pública a **Daniel Mateluna Gómez**, no maneja información respecto a su situación. Finalmente, hace presente que dentro de las personas detenidas que estuvieron esos días, había una persona de apellido **Bastías**, a quien vio en muy malas condiciones anímicas, recuerda a este señor porque él le comentó que trabajaba junto a **Ortigosa**, no dándole mayores detalles, sólo tiene claro que a los días quedó en libertad y que en la actualidad probablemente vive en Canadá e incluso una de sus hermanas viviría aún en Villarrica.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto del 2016, rolante a fs. 1.509 a 1.510 (Tomo V), ratifica sus declaraciones extrajudiciales y judiciales prestadas en autos y la de fs. 1.488 a 1.490. A su pregunta, conjetura que **Alfonso Podlech Michaud** fue la persona que ordenó su detención e incomunicación el 13 de septiembre de 1973, además de disponer su traslado a la cárcel. Esta persona vestía de uniforme en aquella oportunidad. Agrega que este abogado lo interrogó a lo menos en cinco oportunidades en la Fiscalía Militar mientras estuvo privado de libertad. Él dirigía el interrogatorio mientras que un actuario tomaba nota a máquina de lo que declaraba. Constantemente **Podlech** le decía que si no entregaba toda la información que se le estaba pidiendo en el interrogatorio, iba a ser devuelto a otro equipo para que ellos le sacaran las respuesta que él requería. Este otro equipo era el grupo de torturadores que operaba en otra dependencia del Regimiento y al que tuvo que enfrentar en varias oportunidades durante su cautiverio. A veces pasaba primero a la sala de torturas y luego a la Fiscalía o lo hacía a la inversa, es decir, se cumplían las amenazas de **Podlech**. Incluso recuerda que en una ocasión se le hizo firmar en la Fiscalía una declaración tomada en la sala de torturas. Cimentando que si bien el Mayor **Jofré** era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado **Alfonso Podlech**, puesto que tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que **Jofré**. Todo el mundo sabía esto. Respecto de la oportunidad en que fue trasladado con **José Ortigosa Ansoleaga** desde la cárcel al Regimiento, recuerda que fue el Sargento **Moreno** junto a otros Conscriptos quien los sacó de ese recinto penitenciario y los llevó a la Unidad Militar antes indicada. Ese día, primero pasó a la sala de torturas y después se lo llevaron a la Fiscalía Militar. No recuerda exactamente quién lo interrogó en esa ocasión. Después volvió a pasar a la sala de torturas. Finalmente regresó a la cárcel en calidad de incomunicado, no recordando si fue el propio

Moreno quien lo llevó a la cárcel o no. Lo cierto es que **José Ortigosa** no iba con el declarante. A su pregunta cuenta que el "**Choro**" **Silva** dijo que había visto el cadáver de **Ortigosa** en la morgue, que estaba baleado.

A.10 HECTOR ULISES GONZALEZ CASTRO (32 años a la fecha de los hechos), quien declara de fs. 286 a 287 (Tomo I); 397 a 400 (Tomo II); y a fs. 540 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre del 2012, rolante de fs. 286 a 287 (Tomo I), delibera que fue jefe de la Comisaría de Villarrica de la Policía de Investigaciones de Chile para el 11 de septiembre de 1973. Advirtió que quedaron acuartelados y recibiendo las órdenes de su dirección general, fue a eso de las 11:30 horas que se apersona un grupo de Militares quienes se reúnen con él y consultan de qué lado estaban, a lo cual le respondió que se estaban cumpliendo las órdenes superiores. Días posteriores la unidad continuó sus labores normales, comunicando todas las diligencias a la superioridad. A la consulta, respecto de **Daniel Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga**, señaló que del primero de ellos desconoce antecedentes y que a **Ortigosa** le tocó conocerlo debido a situaciones de trabajo, recurriendo a sus servicios, ya que él era mecánico en Santiago, posteriormente comenzó a llegar a la ciudad de Villarrica, según él por razones de turismo. Fue así que en el mes de septiembre tomó conocimiento por un **Bando** el cual fue transmitido por radio, que **Ortigosa** había sido muerto por personal Militar por intento de fuga, en el interior del Regimiento Tucapel, desconociendo otros antecedentes respecto de los hechos ocurridos.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre del 2012, rolante a fs. 397 a 400 (Tomo II), ratificó la declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, que rola de fojas 286 a 287 de autos. Espetó que tenía 8 funcionarios a su cargo, recordando a **Álvarez**, quien era chofer y hombre de confianza. Todos los funcionarios de Investigaciones tenían un apodo, a él lo conocían como "**caballo loco**". No recordó el apodo de los otros funcionarios. Puntualizó que no tuvieron contacto con otras instituciones, como Carabineros o Ejército, después del 11 de septiembre de 1973. No participó de reuniones con las Fuerzas de Orden o Militares. Recordó que ese día llegó un camión del Ejército a preguntarles con quien estaban, así que les dijo que iban a obedecer las órdenes superiores. Manifestó que el Regimiento, en septiembre de 1973 pedía que se les llevaran detenidos a dirigentes sociales de la ciudad de Villarrica. Los solicitaban telefónicamente, sin órdenes escritas. Al ver esta situación llamó al Fiscal Militar, **Alfonso Podlech Michaud** y coordinaron una

reunión para analizar la situación, en la que regularizaron la forma en que se solicitaban a los detenidos. Desde esa fecha el Fiscal Militar **Podlech**, ordenó que todo se hiciera por escrito. Recuerda a **José María Ortigosa**, ya que les arreglaba el móvil que utilizaban en la Policía de Investigaciones mientras se desempeñó en Santiago. El taller de **José María Ortigosa**, estaba ubicado en calle Portugal, cercano a 5 de julio. Era común que todos los policías pasaran a revisar los vehículos en su local. Narró que luego lo volvió a ver en Villarrica, sólo en una oportunidad. Eso fue antes del Golpe Militar. Ese encuentro fue en el Cuartel, ya que lo fue a ver. Le contó que se alojaba en la casa de **Mario Cortes Bornand**, su amigo. El Tribunal le leyó en lo pertinente la declaración que rola de fojas 386 a 390 de autos, respecto de lo cual el deponente señaló que es falso lo que se ha declarado. Nunca participó de una supuesta pelea. Tampoco recuerda que hayan estado comiendo o en una cena en ese lugar. El Tribunal le leyó la declaración que rola de fojas 384 de autos, respecto de lo cual el deponente contestó que es falso lo que se declara. No encontró armas en el Fundo Catrico. Dio cuenta a sus superiores, una vez efectuado el allanamiento, que no había encontrado armas en ese lugar. Insiste que ellos, el grupo de Investigaciones no encontraron nada de armas en ese lugar. Según su condición de Policía cree que “cargaron” el lugar. Indicó tener conocimiento que **José Ortigosa** había comprado el campo en el sector Catrico, ubicado frente a un Cuartel de la Fuerza Aérea, a un suegro de un Coronel de Carabineros. Se comentó que en ese Fundo se estaba formando un grupo de guerrilla, por lo que para salir de dudas fueron hasta ese lugar a verificar lo que se les informó. Llegaron a la casa y la allanaron, pero no encontraron nada, no había nada sospechoso. A cargo de ese lugar había un administrador que les permitió pasar a revisar el lugar. Sin embargo, cuando salieron del lugar, lo llama el Capitán de Carabineros, **Ramón Torrealba**, y le dice que ellos fueron y encontraron iniciadoras, dinamita y pizarras. El allanamiento lo hicieron por orden telefónica de la Fiscalía Militar. Barbulló que supo que había muerto **José Ortigosa** por un **Bando** que se comunicó. Luego, unos dos o tres meses, llegó gente de la DINA que andaba investigando las circunstancias de la muerte de **José Ortigosa**. Llegaron a la Policía de Investigaciones y ordenó su detención. Llamó a la Fiscalía Militar y le dio cuenta al Fiscal **Alfonso Podlech**, quien le ordenó dejarlos detenidos. De esta situación le dio cuenta al General **Baeza** de la Policía de Investigaciones de Chile. El Tribunal le leyó en lo pertinente la declaración que rola de fojas 386 a 390 de autos, respondiendo el deponente que todo lo declarado es cierto, pero la declaración es falsa en aquella parte que dice que colgó a uno de los detenidos desde el techo. Afirma que detuvo a esas personas y dio orden de enviarlos de inmediato a la Fiscalía. Trasladaban a los

detenidos en carros que se enviaron desde Investigaciones de Temuco para llevarlos. También la declaración es falsa en aquella parte que se le imputa culpabilidad por la muerte de **Ortigosa**. No tiene nada que ver con la muerte de esta persona. Anexó que de todo lo que sucedía en Villarrica también se le daba cuenta Juez de Letras de la comuna, **Rene García Villegas** y que la inteligencia de la zona de La Araucanía, estaba a cargo de Carabineros y el Ejército. Desconoce si la Fuerza Aérea participara de esos grupos.

En diligencia de careo entre Héctor Ulises Gonzalez Castro y Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto del 2013, rolante a fs. 540 (Tomo II), ratificó en lo pertinente sus dichos de fs. 397. No reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer de qué se trata de **Alfonso Podlech Michaud**, respecto de lo cual explana que a esta persona ha hecho referencia en sus dichos. Explana que cuando llamó por teléfono a la Fiscalía Militar alguien le informó que el Fiscal era **Alfonso Podlech Michaud**. Por este motivo pensó que él lo era. Expone que nunca se reunió con el Fiscal Militar ni con **Alfonso Podlech** en aquella época para coordinar el tema de la entrega de detenidos en el Regimiento.

A.11 PEDRO PABLO ERRAZURIZ OSSA (37 años a la fecha de los hechos), quien declara de 288 a 289 (Tomo I); y de fs. 529 a 530 de (Tomo II).

En declaración extrajudicial de 25 de septiembre de 2012, rolante de fs. 288 a 289 (Tomo I), difunde que el año 1970 conoció a **José Ortigosa Ansoleaga**, quien era dueño de un taller de reparaciones de automóviles, ubicado al parecer en la calle San Victoria, de la comuna de Santiago. Decantó que hicieron una sociedad de palabra, cuyo objeto era la venta a ECA de alimentos, de la cual resultaron dos o tres negocios exitosos. A raíz de esta relación laboral, se hicieron amigos y pudo conocer su casa y familia, oyéndole decir en varias ocasiones que tenía una propiedad agrícola en el sur del país, específicamente novena región, agregando que era simpatizante del Partido Socialista. Con respecto a los hechos que se investigan, cimentó que una vez ocurrido el Golpe de Estado el día 11 de septiembre de 1973, días posteriores a este suceso, **José Ortigosa**, fue detenido por una Patrulla Militar, desconoce las circunstancias, y fue llevado al Estadio Nacional, lugar donde permaneció por tres días, para luego continuar con su vida en normalidad. Ante tal detención y debido a su extrovertida personalidad, que a posterior le pudiera traer problemas y que resultara detenido nuevamente, le aconsejó que se asilara en la Embajada de Ecuador, situación que ocurrió, gracias a que fue concedido por el Cónsul de

apellido **Buenaventura**. Continuó que durante los días que permaneció en la Embajada, los cuales fueron alrededor de seis a siete días, **José** se enteró por un comunicado radial, que debía presentarse en la ciudad de Temuco. Ante tal requerimiento, decidieron con ayuda de **Carlos Cardoen**, amigo de ambos, efectuar averiguaciones preliminares en la Fuerza Aérea de Temuco, donde nadie supo dar ninguna indicación de que hubiese una razón del llamado, motivo por el cual decidieron junto a **Cardoen** acompañar a **José** hasta Temuco. Relató que llegaron hasta un hotel, que estaba ubicado al ingreso de Temuco, lugar donde a la hora después fueron detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea, los cuales se desplazaban en camiones, siendo llevados en su caso y **Cardoen** a unas dependencias de Carabineros de Chile, mientras que a **José Ortigosa**, presume que fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Aérea, siendo esta la última vez que lo vio con vida. Posteriormente fueron interrogados por funcionarios de Carabineros, quienes al corroborar sus identidades y conocer sus actividades profesionales, fueron trasladados a unas dependencias de la Fuerza Aérea, probablemente "Base Aérea Maquehue", lugar donde firmaron un documento y quedaron en libertad, aprovecharon la oportunidad de preguntar por la situación de **José Ortigosa**, indicándoles los uniformados que se encontraba preso. Suma que al día siguiente de haber recuperado su libertad, decidieron con **Carlos Cardoen** regresar a Santiago, enterándose dos a tres días después y por intermedio de la familia de **José Ortigosa**, que éste había muerto por herida a balas, desconociendo mayores detalles al respecto. Finalmente, señaló que nunca supo identidad alguna de los uniformados de la Fuerza Aérea que los detuvieron como tampoco de los Carabineros que los interrogaron, agregando que con relación a la persona de **Daniel Mateluna Gómez**, no lo conoce y es primera vez que escucha su nombre.

En declaración judicial de fecha 02 de julio del 2012, rolante a fs. 529 a 530 de (Tomo II), ratificó íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 288 a 289. Anexa a sus dichos que en todo momento aconsejó a **José Ortigosa** que no fuera a Temuco, pero este insistió en el viaje por lo que decidió acompañarlo junto a **Carlos Cardoen**. A la pregunta, no participó en la reunión junto a **José Ortigosa** desarrollada en un restaurante de Villarrica en que se haya suscitado un incidente con personal de Investigaciones de esa ciudad. Sin embargo, recordó que "**Pepe**" le comentó en alguna oportunidad que había tenido una pelea en un bar de Villarrica con un jefe de la Policía de Investigaciones de ese lugar, al cual golpeó bastante. A la pregunta, recalcó que no fue apremiado físicamente ni en la Comisaria ni en la Base Aérea Maquehue. Sin embargo, cuando salió de la

Comisaría con destino a la Base Maquehue, fue conduciendo el vehículo de **Pepe Ortigosa** y junto al declarante iba un Sargento de Carabineros, que fue increpado al salir por un Teniente porque no le iba apuntando con su arma. Por esto el Sargento sacó su revólver y se lo puso en la cabeza. Cuando se alejaron dejó de hacerlo. A la pregunta, expresó que no tuvo oportunidad de conversar con ningún Oficial del Regimiento Tucapel de Temuco o de la Base Aérea Maquehue. Al día siguiente de haber sido dejado en libertad conversó con el obispo **Bernardino Piñera** para que intercediera por **José Ortigosa**. Después de esto regresó a Santiago. A la pregunta, contó que **la viuda de José Ortigosa** le entregó el chaleco que él vestía cuando fue ejecutado. Ese chaleco él se lo había prestado poco antes de ser detenido. Esta prenda estaba llena de agujeros que claramente eran de balas. A la pregunta, musitó no recordar que se haya pedido rescate por **José Ortigosa**. Finalmente, señaló que desconoce el motivo que tuvieron las autoridades de Temuco para dar muerte a **José Ortigosa**. Sólo se le ocurre el móvil de la venganza.

A.12 SIGIFREDO JARA CONTRERAS. (39 años a la fecha de los hechos), quien declara de fs. 328 a 329 (Tomo I); 349 (Tomo I); y 565 a 566 (Tomo II).

En declaración judicial de 04 de marzo de 1991, rolante de fs. 328 a 329 (Tomo I), desarrolla que fue Capitán de Gendarmería, siendo trasladado en octubre de 1973 desde Linares a la Cárcel de Temuco, relató que su función principal era el control del personal uniformado. Respecto a las personas **Omar Venturelli, Luis Almonacid y José Ortigosa**, no las recuerda ni conoce debido a la gran cantidad de población de presos políticos. Proclamó que los presos políticos eran sacados de la cárcel por personal del Ejército y de la FACH, quienes los sacaban con unas ordenes que estos dejaban en la guardia y estas órdenes llevaban una firma ilegible y un timbre, pero para poder regularizar estas situaciones hubo que conversar con el Fiscal don **Alfonso Podlech** y el Secretario, para poder normalizar el ingreso y egreso de los detenidos. Por último señaló conocer a **Víctor Maturana Burgos**, quien estuvo preso en la penitenciaría local.

En declaración extrajudicial rolante a fs. 349 de autos (Tomo I), destaca que fue designado a mediado de noviembre de 1973 jefe de Gendarmería en la Novena Región. De los nombrados: **Dixon Retamal, Omar Venturelli, Luis Almonacid, José Ortigosa y Jaime Eltit**, no los ubica como detenidos políticos, ni tampoco tuvo una relación más directa con algunos de ellos en forma especial.

En declaración extrajudicial de 03 de julio de 2003, rolante de fs. 565 a 566 (Tomo II), precisó que la población penal cuando llegó a Temuco en 1973 era de aproximadamente unas ochocientas personas, haciendo una división entre cuatrocientos reos por delitos comunes y cuatrocientos como prisioneros políticos. Acerca de estos últimos, no recordó cual era el sistema para ingresarlos, debido a que este tema era totalmente autoritario por parte de los Militares, ya que cuando llegaban en la noche con las patrullas, fuertemente armados y sus caras enmascaradas, se llevaban a un grupo de personas de las cuales no habían registros, por cuanto estos no entregaban ninguna Orden Judicial o de la Fiscalía, por lo que era muy difícil para ellos poder controlarlos y además, no estaban en condiciones de poner trabas a este procedimiento. Lo anterior lo supo a raíz de comentarios del personal que llevaba más tiempo en la unidad. Sustentó que en el mes de noviembre de ese mismo año y en circunstancias que había quedado como Jefe de penal, fue a exponer la situación antes relatada ante el entonces Fiscal **Alfonso Podlech Michaud**, quien a partir de ese momento cooperó en solucionar el procedimiento y de esta forma, en corto plazo el sistema volvió a ser como correspondía, pudiendo llevar control de los detenidos. Con relación al traslado de los internos a las diferentes Fiscalías o Tribunales de la jurisdicción, estos eran realizados por los funcionarios de Gendarmería, sin perjuicio de las veces que los mismos Militares lo hacían, sin recordar nombres de estos, debido a que eran diferentes en cada oportunidad y con los cuales no se hablaba mucho. Todo esto antes de la conversación que tuvo con el Fiscal **Alfonso Podlech**. Comentó respecto a las Fiscalías que funcionaban en esa época en la ciudad de Temuco, recordando que la Militar era la que centraba todo la labor, sin perjuicio de las otras tales como la de Aviación o de Carabineros, de las cuales no recordó haber tenido mayor contacto con estos. La Fiscalía Militar era la que tenía todo el traslado de detenidos durante el día o la noche, conmemorando algunos Carabineros en el penal en algunas oportunidades.

A.13 NELSON RODOLFO THIELEMANN RODRIGUEZ. (34 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 352 a 354 (Tomo I); y de fs. 567 a 568 (Tomo II).

En declaración judicial de 19 de abril de 1991, rolante de fs. 352 a 354 (Tomo I), detalla que fue empleado de la caja de empleados particulares de Temuco en septiembre de 1973. Fue Cadete de la Escuela Militar y desde el mismo día 11 estuvo de Comisión de Servicio en la Fiscalía Militar, recibiendo el sueldo de la caja y su misión era ser Oficial de enlace, es decir tenía que llevar prisioneros desde la cárcel al Regimiento y viceversa sin que en ningún momento

se hubiese actuado con prepotencia y castigando a las personas. Anexó que el Fiscal Militar de ese entonces era el Mayor **Luis Jofré** y el abogado **Alfonso Podlech** solo era un Asesor Jurídico de la Fiscalía. Afirmó que en varias oportunidades le correspondió interrogar a detenidos, sin apremios ni nada parecido. Jamás vio en Fiscalía que se maltratara o castigara a un detenido, por lo menos frente a su presencia. Respecto de **José Ortigosa** recordó haberlo visto en los pasillos de la Fiscalía. No es efectivo que supiera todo lo que pasaba en el interior del Regimiento ni que diera un trato inhumano a los detenidos que le tocaba trasladar desde y hacia el Regimiento.

En declaración extrajudicial de 03 de julio de 2003, rolante de fs. 567 a 568 (Tomo II), distingue que después del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, en su calidad de Oficial de Reserva del Ejército, fue llamado por el Fiscal de apellido **Jofré**, para que cumpliera funciones administrativas en la Fiscalía Militar de Temuco. Respecto al Fiscal **Jofré**, recuerda que ostentaba el grado de Mayor. Suma que sus actividades dentro de la Fiscalía eran principalmente el traslado de expedientes de Consejos de Guerra a la Comandancia de la IV o V División de Ejército y en algunos casos le correspondió interrogar a detenidos que estaban privados de libertad por razones de índole político subversivo. Añadió que no le correspondió nunca atender a presos que presentaran algún tipo de lesiones atribuibles a su detención o interrogatorio preliminar, actuaciones practicadas por organismos represivos que actuaban en la época y en ninguna de sus entrevistas se violentó físicamente o psicológicamente a ninguna persona, vale decir, el testimonio por escrito del declarante era entregado al Fiscal Militar. Afirmo que nunca asistió como Funcionario Administrativo a ningún Consejo de Guerra, ya que sus funciones no comprendían presenciar ese tipo de sesiones. Se enteró de muchos casos de personas que habían sido detenidas en la ciudad de Temuco y acusados de extremismo, participación en grupos de guerrillas y fabricación de artefactos explosivos. Por el tiempo transcurrido no recuerda con precisión identidades de personas que fueron sometidas a este tipo de juicios por de las autoridades Castrenses, sin embargo, rememoró **un proceso sustanciado por la Fiscalía Militar contra una sujeto de apellido Ortigosa y que se rumoreaba entre pasillos que esta persona estaba asociada al robo de un maletín con dólares**, desconociendo si era el autor o afectado o mayores detalles al respecto. A la pregunta si conoció antecedentes o procesos instruidos contra **Dixon Retamal Cornejo, Daniel Mateluna Gómez y Omar Venturelli Leonelli**, explicitó que estos nombres no le parecen de personas conocidas y menos podría recordarlos como procesados en instancias Militares. Sobre muertes de personas que eran trasladadas hacía o desde la Fiscalía Militar,

también escuchó del personal del Regimiento Tucapel, que a veces estos hechos acontecían producto que los detenidos trataban de escaparse de las patrullas Militares que los custodiaban.

A.14 VÍCTOR EFREN SILVA FIGUEROA (41 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de 03 de junio de 1991, rolante de fs. 366 a fs. 367 (Tomo II), glosa que fue Cabo de Gendarmería en la Cárcel de Temuco en el mes de septiembre de 1973. Confirma que lo apodaban en el servicio “**El Choro**” **Silva** por su carácter y proceder cuando era funcionario. Rememoró que había un promedio de 400 presos políticos que eran llevados por las Fuerzas Armadas, es decir tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea y muy pocos por parte de Carabineros. Detalló que es efectivo que vio en la morgue del hospital el cadáver de **José Ortigosa**, quien estaba detenido en la Cárcel y lo vio baleado, situación que impuso al preso político el señor **Maturana**. Relató que en esa época era frecuente que patrullas del Ejército y la Fuerza Aérea llegaran a la Cárcel a buscar detenidos sin que estos volvieran posteriormente al penal y cada vez que retiraban detenidos lo hacían a altas horas de la noche.

A.15 LUIS ARMANDO JOFRÉ SOTO (44 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de 23 de julio de 1991, rolante de fs. 368 a 370 (Tomo II), copia de la cual se encuentra de fs. 569 a 570 (Tomo II), ensaya que fue Mayor del Regimiento Tucapel para el 11 de septiembre de 1973, cimiento que después de ese día, no recuerda cuanto tiempo después, fue nombrado Fiscal Militar, lo que significó que quedó fuera de la línea operacional propia del Ejército dedicándose solo al aspecto administrativo de la Fiscalía. Anexó que como Asesor Jurídico de la Fiscalía se desempeñó el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, en todo caso no desde los primeros días, y meses después, fue el Fiscal Militar en propiedad. Cuando había detenidos en la cárcel y se necesitaban en la Fiscalía, normalmente los trasladaba de un lugar a otro un Sargento de apellido **Moreno**, y como se hizo conocido no había problemas en que en la cárcel le entregaran los detenidos para ser interrogados en la Fiscalía, previa presentación de los documentos respectivos y oficiales. A la pregunta sobre la situación de **José Ortigosa Ansoleaga**, aseveró no recordar haberlo interrogado en la Fiscalía, pero conjeturó que esta persona se encontraba en Temuco a cargo de la construcción de un edificio y en cuanto al documento que rola a fs. 92 reconoció como suya la firma, y se debió seguramente, a que se le dio cuenta de este hecho y el como Fiscal Militar era su obligación dar crédito a la información que se le enviaba a través del Comandante del Regimiento y otorgar los documentos necesarios para

la sepultación, autopsia y entrega de cadáveres a los familiares de estos. En todo caso en el Regimiento debe haber constancia del hecho que significó la muerte del señor **Ortigosa**, que reitera no fue interrogado por él, es decir no se abrió proceso alguno en su contra. En cuanto al altercado que pudo haber tenido con la **señora de Ortigosa**, sustentó que es un hecho que no niega ni afirma categóricamente, pues con todo lo que pasaba esos días y la tensión a la que estaban sometidos, puede ser que se haya expresado en esos términos y en todo caso trató de ayudar en lo posible para la entrega del cadáver a la señora y efectivamente entregó el salvoconducto que se le exhibió. Puntualizó que en su papel de Fiscal se pudo dar cuenta que muchos detenidos de la época eran personas idealistas sin ser peligrosos, y actuó en consecuencia dándoles la libertad y ayudándolos en lo que podía, incluso dejó a mucha gente en libertad con su sola promesa de irse al extranjero y que fue lo que ocurrió en innumerables casos, ayuda que también otorgaba a los familiares de los detenidos. A la pregunta, jamás interrogó o se le presentó una persona torturada o con muestras de castigo físico ni moral, tenía claro que era una persona con autoridad y no un monigote que podía ser manejado por otros.

A.16 ALFREDO GARCÍA DIAZ (27 años a la fecha de los hechos).

En declaración judicial de 03 de marzo de 1992, rolante de fs. 377 a 379 (Tomo II), esgrime que fue Teniente dentro de Gendarmería de Temuco en 1973 y su labor era de Jefe Interno, hasta aproximadamente el año 1980. Preciso que en su labor de Jefe Interno le correspondió recibir a todos los detenidos, ya sean por delitos o políticos para lo cual se llevaba un libro de novedades. Invocó como nombres de detenidos políticos, entre ellos a **José Ortigosa, Gastón Lobos**, quien estuvo incomunicado, el **señor Omar Venturelli**, un funcionario del Ejército de apellido **Morales**, un señor **Mateluna**, este caso lo recuerda porque le correspondió entregar la ropa a la señora de él y otros. Proclamó que el señor **Ortigosa** fue retirado por personal del Ejército o la FACH, pero no Carabineros; y a los demás, venían un Suboficial del Ejército de apellido **Moreno**. Jamás participó en un grupo de represión, ya que en esa época era masón y solo asistía a las reuniones de la logia.

A.17 PATRICIA VERONICA ORTIGOSA URIARTE (12 años a la

fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 23 de noviembre del 2012, rolante de fs. 384 a 385 (Tomo II), escruta ser la hija de **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren**. Difundió que en la época de la muerte de su padre, tenía la edad de 12 años y vivía en calle Pastor

Fernández, en Santiago. Relata que supo por comentarios de familiares que a su padre lo llamaron a declarar por una pistola que habían encontrado en su campo en el sector "Catrico" de la comuna de Villarrica. Esta arma era de propiedad del administrador. Su padre se juntó con **Carlos Cardoen** y **Pedro Pablo Errázuriz Ossa**, para ir a Temuco. En Temuco llegaron a un hotel, pero de inmediato cree que la Policía de Investigaciones los tomaron detenidos. Sin embargo, el único que quedó detenido en la cárcel fue su padre. **Carlos Cardoen** fue a visitarlo al día siguiente a la cárcel de Temuco. En la cárcel, lo habrían torturado con electricidad en la lengua y testículos. Expuso que cuando su padre estuvo en la cárcel habrían pedido dinero, algo así como 500 mil dólares para que le dieran la libertad. Tiene entendido que juntaron ese dinero y lo entregaron. Probablemente **Carlos Cardoen** puede tener mayor información al respecto. Además, les contaron que a su padre no le habían podido comprobar los delitos que se imputaban, por lo que lo dejaron en libertad, pero al salir le dispararon. Apuntó que su hermano **Francisco** fue el encargado de retirar el cuerpo de la morgue. Su madre siempre hizo todo lo posible por las vías legales para investigar su muerte. Incluso se reunió con un Militar para saber sobre su muerte, éste le dijo que era uno de los errores que habían cometido, desconoce la identidad de este Militar. Destacó que un día, luego de la muerte de su padre, los Militares allanaron su casa, no sabe qué buscaban. Otro día, llegaron al garaje de la familia y destruyeron el local. Su madre, cansada de la persecución Militar, decidió que se fueran a vivir a España. Todo esto fue el año 1978 aproximadamente. Agregó que su padre estuvo detenido en el Estadio de Chile, debido a que llevó escondido en el maletero de su auto, al intendente de Santiago para que no fuera detenido. En ese lugar, **Rafael Oyanguren**, primo de su madre, dio la orden o hizo las gestiones para liberar a su padre. Él llegó con custodia militar a la casa luego de 3 días de haber estado en ese lugar.

A.18 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ URIARTE (23 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 386 a 390 (Tomo II); 541 (Tomo II); y a fs. 542 (Tomo II).

En declaración judicial de fecha 23 de noviembre del 2012, rolante de fs. 386 a 390 (Tomo II), estimula ser hijo de **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren**, su madre enviudó y en el año 1957, se casó con **José María Ortigosa Ansoleaga**. De ese matrimonio nacen dos hijas, **Mary Carmen** y **Patricia Verónica**. Desarrolló que **José Ortigosa** a fines de la década del año 1960 fue el encargado de atender los autos del Senado en el garaje de la familia y además vivía en el mismo sector de **Salvador Allende**, por lo que comenzó a

tener una relación de amistad con su familia. Además coincidían en los mismos círculos sociales. Para la campaña presidencial del año 1964, **Salvador Allende** como vecino y amigo con **José Ortigosa** en una comida en su casa le pidió que lo acompañara a realizar campaña a las distintas ciudades de Chile y **José** aceptó su ofrecimiento. Precisó que producto de un problema por unos negocios que efectuó **José Ortigosa** y que tenía con **Salvador Allende** se enemistaron y no volvieron a tener relación. Sin embargo, a pesar de esto, una vez que **Allende** asume en la presidencia concurrió a solicitarle ayuda laboral y el accedió ya que le tenía aprecio a su madre. Es efectivo que **José Ortigosa** tuvo problemas con giro doloso de cheques y otros delitos de índole económico producto del mal manejo financiero. Narró que en una oportunidad se encontraban veraneando junto a **Luis Cádiz y su cónyuge "Pola" Jiménez**, además de sus amigos **Gustavo Villarroel, Enrique Marchant y Eduardo Valech**. En uno de esos días el "**Nano**" **Maihart** o uno de sus amigos que habían bebido bastante, hacen un disparo en el primer piso hacia el segundo piso de un restaurant de Villarrica, donde se encontraban todos los hombres que veraneaban en ese lugar. Justo en ese momento, se percatan que en el segundo piso del local se estaba realizando una comida de la Policía de Investigaciones de Villarrica. Había 8 funcionarios entre los que se encontraba el jefe del grupo, **Héctor Ulises González Castro**, quienes estaban en completo estado de ebriedad. Musitó que bajaron y se armó una pelea dentro del restaurant, en la cual **José Ortigosa** le pegó a **González Castro**. En esa oportunidad no llegó Carabineros y no se hicieron denuncias por la pelea que se formó. En relación a las propiedades que tenía **José Ortigosa** en la ciudad de Villarrica, manifestó que en el año 1973 inició una relación de amistad con **Oswaldo Bastidas Cerón**, quien trabajaba en esa época en el departamento de tránsito de la Municipalidad de Villarrica. A raíz de esto, le ofreció trabajar como Administrador en el Fundo "Catrico" que poseía en la comuna de Villarrica. **Bastidas** aceptó el ofrecimiento. Detalló que el Fundo Catrico era de la señora **Herminia Diez González**. El intermediario en la venta de este Fundo fue **Exequiel Quintana**. **José Ortigosa** le compró aproximadamente 100 o 200 vaquillas para el Fundo a **Mario Cortes Bornand**, las que nunca le entregó. El abogado de **Herminia Diez**, era **Alfonso Podlech**, quien después de fallecido **José Ortigosa**, supieron por comentarios que se había quedado con la propiedad. Atestiguó que una vez producido el Golpe Militar, funcionarios de Investigaciones de Villarrica Comandados por **Héctor Ulises González Castro**, allanaron el Fundo Catrico, encontrando solamente una pistola corta, argentina, calibre 22, de propiedad del Administrador, **Oswaldo Bastidas**. Hicieron la denuncia en la Fiscalía Militar. La Policía de Investigaciones de Villarrica envió una orden de presentación a **José**

Ortigosa por el arma que se le habían encontrado. Esta orden era de citación y no de detención. Esto lo sabe porque recibió personalmente la citación extendida a **José Ortigosa**. Comunicó que **José Ortigosa** decidió presentarse, desconoce si en la Fiscalía Militar de Temuco o en Investigaciones de Villarrica. En esa oportunidad fue acompañado por **Pedro Pablo Errázuriz Ossa** y **Carlos Cardoen Cornejo**. Llegaron en un auto camaro del año 1972, color dorado e hicieron escala en Temuco. Se alojaron en unos moteles en las afueras de Temuco. Supo, por **Carlos Cardoen**, que llegó una patrulla de la Fuerza Aérea al motel, los detuvieron y los llevaron a interrogarlos. Desconoce si los llevaron a la Fiscalía Militar o a alguna unidad de la Fuerza Aérea o Ejército. Los interrogaron vendados. **Carlos Cardoen** había sido Oficial de la Fuerza Aérea, por lo que lo dejaron en libertad. **Pedro Pablo Errázuriz Ossa**, se comunicó con su madre porque ella era la jefa de la Cruz Roja en Chile. Continúa que a **José Ortigosa** lo enviaron a la cárcel, no tuvieron la oportunidad de visitarlo mientras estuvo en ese lugar, pero se enteraron que estaba ahí por el Alcaide de ese recinto de nombre **Maximiliano Vivanco** con quien **José** tenía una relación muy cercana. La única que lo visitó en la cárcel fue la abogada de la familia de nombre **Aura Cuello**. Explayó que el 02 de octubre de 1973, por un llamado telefónico que recibió **Joaquín**, el mozo de la casa, les comunicaron que **José Ortigosa** había fallecido. Ese llamado lo hizo la abogada de la familia de nombre **Aura Cuello**. El cuerpo de **José Ortigosa** fue retirado por él y un grupo de personas cercanas desde el Hospital Regional de Temuco, se hicieron los funerales en Santiago. Proclamó que una vez muerto **José Ortigosa**, un amigo suyo **Vicente Gutiérrez Rolleri**, ex Marino, Patria Libertad y perteneciente al Servicio de Inteligencia del Gobierno de esos años y dependía del General **Palacios** de la Fuerza Aérea, le contó que a **José** lo mataron por culpa de **Héctor González Castro**. Junto a él concurrieron hasta Villarrica, el año 1974, a aclarar lo sucedido con **José**. En la Policía de Investigaciones de esa comuna fueron encañonados por los Detectives que estaban en ese lugar, incluso a su amigo **Vicente** le vendaron la vista y lo colgaron desde el techo, no respetando su condición de Agente del Servicio de Inteligencia del Gobierno. En ese lugar estuvieron por un lapso de 8 horas aproximadamente, hasta que **Héctor González Castro** comprobó sus identidades y los envió hasta la Fiscalía Militar de Temuco. Lugar donde fue presentado ante el Fiscal de la época, **Alfonso Podlech**, quien le preguntó por qué andaba con **Vicente Gutiérrez** y qué relación tenía con **José Ortigosa**. Le comentó que estaba averiguando la muerte de su padrastro. **Le preguntó irónicamente, de qué había muerto su padrastro y le dijo que él lo había dejado en libertad y que tenía copia de la orden, sin embargo, cuando le pidió que le exhibiera el**

documento se negó a hacerlo y le dio la orden de desaparecer de su vista en 5 minutos, y que no volviera más a preguntar sobre él. Le hizo caso y desde esa fecha que no viene a Temuco. También agregó que en una oportunidad conversó con su primo **Rafael Antonio Oyanguren Rodríguez**, quien le contó que sabía por qué habían matado a **José Ortigosa**, pero como habían pasado tantos años era mejor dejar las cosas así. Su primo fue Brigadier del Ejército de Chile e incluso estuvo desempeñándose como Militar en el Regimiento Tucapel de Temuco unos 7 o 10 años después de la muerte de **José Ortigosa**. Por último, en Temuco se le tenía mucho respeto al Fiscal Militar del Regimiento Tucapel, **Alfonso Podlech** y le dio la impresión que tenía todo un círculo de protección.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto del 2013, rolante a fs. 541 (Tomo II), precisó que fue doña **Aura Cuello**, abogada de la familia, fue quien viajó primero a Temuco para interiorizarse respecto de los motivos de la detención de **José Ortigosa**. Ella lo visitó en la cárcel y fue quien avisó de su muerte a su familia. Relató que junto con su madre concurrieron a Temuco, donde su madre se entrevistó con **Alfonso Podlech Michaud** en la Fiscalía Militar. En ese lugar **Podlech** le preguntó irónicamente a su madre si sabía cómo murió **José Ortigosa**, como ignorando a qué venía ella. Todo esto se lo contó ella una vez que salió de ese lugar y llegó al vehículo en que él la estaba esperando. A la pregunta, expresó que a principios de 1974 viajó con **Vicente Gutiérrez Rollen** a Temuco para averiguar más sobre la muerte de **José Ortigosa**. Recuerda haberse entrevistado con **Alfonso Podlech** en la Fiscalía Militar, que ahora estaba ubicada en los altos de un banco. En esa oportunidad estaba en calidad de detenido tras haber sido derivado desde Villarrica por funcionarios de la Policía de Investigaciones. En esa oportunidad le preguntó el motivo de su detención y le contestó que andaba averiguando lo ocurrido con **José Ortigosa**. Entonces esta persona le dijo que se acordaba perfectamente de él y que incluso le había dado la orden de libertad por falta de méritos, de lo cual guardaba una copia. Él le pidió que le exhibiera la copia, pero él se negó y le ordenó salir de la sala.

En diligencia de careo entre **Francisco Antonio Rodríguez Uriarte** y **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante a fs. 542 (Tomo II), ratifica sus dichos de fs. 541. Reconoce a la persona con la que se le carea como **Alfonso Podlech Michaud**, de quien ha hecho referencia. Dicha persona y el señor **Jofré** subrogaban en la Fiscalía. Se mantiene en sus dichos.

A.19 JUAN CARLOS MATELUNA LILLO (17 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 24 de noviembre del 2012, rolante de fs. 391 a 392 (Tomo II), explicita ser hijo de **Daniel Mateluna Gómez**, quien era Suboficial retirado de Carabineros, de profesión Practicante, él era simpatizante de izquierda, pero desconoce que haya pertenecido a algún partido político o agrupación. Descargó que producido el Golpe Militar, el 11 de septiembre de 1973 su padre salió de la casa, entendiendo que a la casa de **Carlos Contreras**, en el sector El bajo, de Temuco, ya que temía ser detenido. El mismo día 11 de septiembre, en horas de la tarde, llegaron Militares a efectuar un allanamiento en la casa, buscando a su padre. En esa oportunidad él no estaba ahí, pero pudo divisar desde la esquina lo que estaba sucediendo. En la casa sólo estaba su madre y su hermano, **Cristian Marcelo**, que en esa época tenía dos años de edad. Ese día, en la noche, también fueron Carabineros a efectuar allanamientos, llevándose detenidos a su madre y a su hermano pequeño. Recuerda que en uno de esos allanamientos, se equivocaron y se llevaron a sus hermanos menores, **César Patricio y Ricardo**, los estuvieron detenidos hasta las 4 de la mañana, para liberarlos en pleno horario de toque de queda en una calle alejada de su hogar. Ellos tenían 15 y 19 años, respectivamente. En otra oportunidad aprehendieron a su hermano **Daniel**, quien sufrió golpes en su cabeza en la 2° Comisaría de Temuco. Fue muy torturado en ese lugar, llegó con su cabeza llena de sangre a la casa. Recuerda a un Carabinero de la 2° Comisaría, que lo apodaban "**el perro**", quien efectuaba los allanamientos, le ponía la pistola en el pecho a su madre. Este Carabinero era de baja estatura, de pelo negro, bigotes y de contextura gruesa. También recuerda como parte del grupo de Carabineros que efectuaban allanamientos, a una persona que andaba de civil, alto, rubio, de ojos claros y de contextura gruesa. Atestiguó que producto de los allanamientos que se efectuaban, su padre se presentó en el Regimiento Tucapel, donde le dijeron que no saliera de la ciudad y quedó en libertad. Sin embargo, como siguieron realizándose allanamientos, su padre se volvió a presentar, quedando detenido. Tiene entendido que fue trasladado a la 2° Comisaría de Carabineros, donde lo torturaron. Posteriormente, les avisaron que iba a ser trasladado a la cárcel y su hermano **Daniel** lo fue a ver, pero no pudo tener contacto directo con él, porque iba en muy malas condiciones físicas. La última vez que vio a su padre, fue la mañana del 11 de septiembre. Conjeturo que su hermano mayor pudo verlo cuando estaba escondido en la casa de **los Contreras**. Señaló que hubo un Gendarme, que no recuerda si vivía en la población Alonso de Ercilla o El Esfuerzo, quien les llevaba noticias respecto a su padre. Incluso fue quien les avisó que lo iban a trasladar al Regimiento. No

recordó el nombre del Gendarme. Expuso que supieron de la muerte de su padre por un **Bando** que se dio a conocer. Añadió que una persona que trabajaba en la morgue fue quien los ayudó con el ataúd de su padre. No recuerda el nombre de esta persona. El cuerpo de su padre lo vio su hermano **Ricardo**, él fue quien lo identificó. **Alfonso Contreras**, quien había sido funcionario de la Armada, tenía una relación muy cercana con su padre y él los ayudó a retirar el cuerpo desde el hospital. Por último, agrega que su hermano **Ricardo** en alguna oportunidad hizo una declaración al Comité Juicio y Castigo, que está en Temuco, donde relató cómo estaba el cuerpo de su padre al ir a identificarlo.

A.20 MARY CARMEN ORTIGOSA URIARTE (14 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 25 de noviembre del 2012, rolante de fs. 395 a 396 (Tomo II), exclama ser hija de **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren**. En la época de la muerte de su padre, tenía la edad de 14 años y vivía en calle Pastor Fernández N°550, sector el Arrayan de la ciudad de Santiago. Expuso que su padre compró un Fundo en la zona de Temuco, llamado Fundo Catrico y el sitio Las Hachiras, entre Villarrica y Temuco. A su padre lo citaron, le parece que desde Policía de Investigaciones de Villarrica, ya que en el Fundo que él compró habían dos armas. El Fundo Catrico, su padre lo compró con todo lo que tenía, incluso con los trabajadores. Supuso que las armas que se encontraron eran de propiedad del Administrador del Fundo. Posteriormente se enteraron que se había probado que las armas no eran de su padre. Exclamó que al llegar a su casa supieron que su padre había muerto. Su madre les contó que los Militares habían dado muerte a su padre afuera del Regimiento Tucapel de Temuco, junto a un señor de apellido **Mateluna**. Ignora quien le comunicó a su madre la muerte de su padre. Relató que junto a su familia fueron a Temuco, se alojaron en el Hotel Frontera. A su madre no le querían entregar el cadáver, pero igualmente fueron a la morgue. Su hermano, **Francisco** sacó las ropas de su padre para investigar qué tipo de balas tenía o cuál era la causa de su muerte. Guardó esas ropas en el maletero del auto. Su madre consiguió que le entregaran el cuerpo y cuando llegaron a Santiago lo cambiaron de urna. Recuerda que su padre tenía una bala en la cabeza. Todos estos hechos la impactaron debido a su corta edad. Anexó que cuando les entregaron el cuerpo, les prohibieron hacer cualquier tipo de ceremonia fúnebre. Su madre no hizo caso de las órdenes de los Militares, ya que se hizo una misa y se puso un aviso en el diario. En Temuco, su madre habló con **Alfonso Podlech**, Fiscal Militar en aquella época, por lo ocurrido con su padre. Explanó que su madre les contó que pidieron un rescate para liberar a su padre. **Carlos Cardoen**

y **José Pablo Errázuriz**, fueron con dinero a buscar a su padre. Nunca se enteraron qué pasó con ese dinero. Iban en el auto Camaro de color café, que era de su padre. Con posterioridad tomaron conocimiento que su hermano ubicó a **Alfonso Podlech** para venderle a **Carlos Cardoen** Las Hachiras. Sin embargo, nunca concurren a firmar la venta de esa propiedad, porque estaban en España, pero igual se realizó la venta y quedó a nombre de **Carlos Cardoen**. Comentó que su madre, antes de morir le contó que las señoras de los Militares que dieron muerte de su padre fueron a conversar con ella, ya que los habían dado de baja. Comunicó que su padre, apenas se produjo el Golpe Militar, fue detenido en el estadio de Chile. Fue liberado ya que un primo de nombre **Rafael Oyanguren**, que estaba en ese lugar, dio la orden de liberarlo. Recuerda que cuando llegó a la casa relató muy impactado la muerte de un niño que mataron los Militares en ese lugar.

A.21 RAMÓN TORREALBA GUZMAN (38 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 29 de noviembre del 2012, rolante de fs. 402 a 403 (Tomo II), explica que no recuerda haber citado a alguna reunión en la Comisaría de Villarrica ni fuera de ella, de carácter policial a la policía de Investigaciones de Villarrica en conjunto con la Fuerza Aérea, una noche luego del 11 de septiembre de 1973. Explana que entre el 11 de septiembre de 1973 y el mes de octubre del mismo año, no escuchó disparos que pudiera identificar como los realizados con metralleta, en algún sector de Villarrica. A continuación se refiere sobre los hechos ocurridos en Liquiñe. Por otra parte, explana que efectivamente le correspondió efectuar un allanamiento en el sector Catrico, en una propiedad que supuestamente era **José Ortigosa Ansoleaga**. En ese lugar les informaron que había una escuela de guerrilla, encontrando dinamita y otros elementos explosivos en la tapa de baño. Recuerda a un señor de apellido **Bastidas**, que al parecer era secretario de la Municipalidad y supuestamente dirigía esta escuela de guerrilla.

A.22 CARLOS REMIGIO CARDOEN CORNEJO (31 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 421 a 423 (Tomo II); y de fs. 436 a 437 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de noviembre de 2012, rolante de fs. 421 a 423 (Tomo II), funda que fue amigo de la víctima de los hechos investigados de nombre **José Ortigosa Ansoleaga**, a quien conoció a finales de la década de los sesenta. Indicó que **José** se dedicaba al comercio en la ciudad de Santiago y a la agricultura en un terreno que tenía en las cercanías

de la ciudad de Villarrica, recordando también que era piloto de vehículos de competición, desempeñándose para estos efectos en el sector de las Vizcachas, Santiago. Respecto a la militancia política de **José**, ignora si la tuvo, pero tiene muy claro que era amigo personal del Presidente **Salvador Allende Gossens**, por lo tanto, cree que era simpatizante de los partidos de Izquierda. Sobre las circunstancias que rodearon la detención de **José**, utiliza en primer lugar que éste estuvo detenido en el Estadio Nacional, lugar donde fue sacado por un familiar de su esposa que era Oficial de Ejército, para posteriormente asilarse en la Embajada de Ecuador, lugar desde donde se comunicó telefónicamente con él, para informarle que estaba siendo requerido por las autoridades militares de Temuco, porque lo estaban acusando de tener una escuela de guerrillas en esa región, por este motivo le solicitó que interviniera por él; en su calidad de Oficial de Reserva de la Fuerza Aérea. Por este motivo, el declarante contactó General de la Fuerza Aérea **José Berdichevsky**, a quien le expresó lo solicitado por **Pepe**, quien le dijo en esa oportunidad que lo acompañara a Temuco, junto con un salvoconducto emitido por él. Por otra parte, contactó a **Claudio Picasso Quinto**, quien era amigo tanto de **José** como de su persona y quien además también era Oficial de Reserva de la Fuerza Aérea. El objeto de su llamado fue para darle a conocer la situación en que se encontraba **Pepe** y lo que le había dicho el General antes mencionado. Una vez recibido el salvoconducto, contactó a **José** y le informó los pasos a seguir, según su recuerdo **Pepe**, le dijo que ponía a disposición su auto modelo Cámaro y que los acompañaría su amigo personal **Pedro Pablo Errázuriz**. No recuerda la fecha exacta en que salieron desde Santiago, probablemente después del día 11 de septiembre u octubre de 1973, salieron de mañana llegando a Temuco, cerca de las 16:00 horas de ese día contactó nuevamente a **Claudio Picasso**, informándole que habían llegado y que tenían la intención de dirigirse a la Base Aérea, pero **Claudio** le manifestó que era preferible que se alojaran en un hotel y que se presentaran en la Base Aérea al día siguiente. Debido a esta situación, se instalaron en un hotel ubicado en la carretera, el hecho es que cerca de las 19:00 horas fueron allanados por personal de Carabineros, quienes hicieron un ingreso muy violento al lugar donde se encontraban. Según su recuerdo, uno de los Carabineros preguntaba muy aireadamente, por **Ortigosa**, a lo cual **Pepe** levantó su mano siendo detenido inmediatamente, incluso a ellos también los detuvieron. Posteriormente fueron llevados a la Comisaría de Carabineros de Temuco, donde no tiene muy claro si fue en ese lugar donde les señaló que era Oficial de la Fuerza Aérea y donde también le arrebataron el salvoconducto que portaba. Posteriormente, fueron separados y llevados a distintos calabozos, en determinado momento solicitó

conversar con el Oficial a cargo, pero no le fue permitida tal situación. A eso de las diez de la noche, les piden que salgan del calabozo y un Oficial de Carabineros le ordenó a un Carabinero que los subieran a una camioneta y le ordenó a éste que sacara su armamento y que los matara en caso de cualquier movimiento. Hace presente que fueron llevados hasta la Base Aérea "Maquehue", donde fueron recibidos por un funcionario Militar muy hostil, quien les propinó un par de culatazos y vendó su vista al ingreso. Según recuerda, se llevaron a **Pepe**, probablemente a una sesión de interrogatorios y luego a **Pedro Pablo** y finalmente al declarante. Posteriormente, lo trasladaron a una dependencia que a su parecer correspondía a una enfermería por el olor a alcohol y yodo, en dicho lugar aun vendado lo sentaron en una silla y fui interrogado por una persona cuya identidad ignora, contándole a éste señor los motivos por los cuales andaban en la zona refiriéndose al requerimiento de **José**. Una vez finalizado el interrogatorio, esta persona le pidió que se sacara la venda y pudo ver frente a sí una persona de civil, de bigote, pelo negro, de tez blanca, cuya identidad nunca supo, quien le pidió excusas por el trato que habían recibido, señalándole que se encontraban en tiempo de guerra y que había que tomar precauciones, justificando el procedimiento hacia ellos. Posteriormente, se reunió con **Pedro Pablo** en una dependencia de la Base y fueron trasladados al hotel, esto cerca de la 06:00 horas, donde procedieron a ducharse y guardar su ropa, dirigiéndose minutos después nuevamente a la Base para ver que iba a suceder con **Ortigosa**. Al llegar a la base se informó que éste había sido trasladado al Regimiento "Tucapel". Por lo antes señalado, se dirigieron al mencionado Regimiento, donde se presentaron en la guardia, lugar donde preguntaron por **José Ortigosa**, recordando que en esos momentos logró visualizar a **Pepe**, en el interior de la guardia logrando manifestarle que iba a ser juzgado en ese lugar y que se encontraba bien, también recuerda que le pidió que fuera al mercado y le comprara unas frazadas, ya que había pasado mucho frío, indicándoles también que contactaran a su señora para que ella junto a un abogado se vinieran a Temuco. Según su recuerdo, fueron a comprar las frazadas, pero no tiene claro si se las entregó personalmente o las dejó en la guardia. Posteriormente, junto a **Pedro Pablo** emprendieron rumbo a Santiago, recordando que en determinada parte del trayecto escucharon por la radio que el "Extremista **José Ortigosa**, quien se encontraba detenido al interior del Regimiento Tucapel por intentar fugarse, había sido abatido por personal Militar", esto lo escuchó cerca de las 16:00 horas. Esta situación los tomó por sorpresa e hicieron un par de llamados telefónicos a Santiago. Al llegar a Santiago, fue a casa de **José**, donde tomó contacto con **Carmen**, su esposa, quien ya estaba en conocimiento de la muerte de su marido. Al día siguiente

Carmen le informó que el cuerpo de **Pepe** no iba ser entregado por las autoridades Militares, por este motivo contactó a **Juan Torres Gundian**, quien era Oficial de Ejército y su amigo personal, quien intercedió contactando a las autoridades en Temuco para que enviaran el cuerpo de **José** a Santiago. Después de dos días la familia de **José** recibió su cuerpo y él declarante asistió a sus funerales en el Cementerio General. Finalmente, aclara que nunca supo las verdaderas circunstancias que rodearon la muerte de **José**, incluso su mujer nunca le comentó sobre algún antecedente respecto a las identidades de los autores de su muerte.

En declaración judicial de fecha 18 de diciembre de 2012, rolante de fs. 436 a 437 (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 421 a 423. Justifica que conoció a **José Ortigosa** a fines de 1969 o principios de 1970, estableciendo una buena amistad al punto que conocía a su esposa y a sus hijos. Incluso hubo un tiempo en que vivieron muy cerca en El Arrayán. No recuerda haber participado en una reunión junto a **José Ortigosa** desarrollada en un restaurante de Villarrica en que se haya suscitado un incidente con personal de Investigaciones de esa ciudad. Supo que **José Ortigosa** compró un campo en Villarrica que se ubicaba cerca del lago, pero nunca lo visitó, ni tiene conocimiento de que su familia haya visitado ese predio, aunque es muy probable. Se enteró a través de **Carmen Uriarte** de la detención de **José Ortigosa** en el Estadio de Chile y también que por intermedio de un familiar de su mujer pudo ser liberado. Respecto de su consulta, habla que estaba en Estados Unidos cuando se produjo el Golpe Militar y a su regreso lo contactó **José Ortigosa**, quien estaba asilado en la embajada de Ecuador, indicándole que estaba siendo requerido por las autoridades de Temuco por tener una supuesta escuela de guerrilla en su predio de Villarrica. Desconoce cómo se enteró él de este requerimiento. En todo caso, por la personalidad y la actitud de **José Ortigosa** éste estaba muy lejos de propiciar una escuela de guerrilla. Éste tenía un taller de vehículos donde reparaba sus propios vehículos y los de terceros. A su pregunta, indica que no tiene claro si el salvoconducto que portaba le fue quitado por Carabineros durante el arresto o en la Comisaría en Temuco. Invoca que no fue apremiado físicamente ni en la Comisaria ni en la Base Aérea Maquehue, salvo los culatazos que le dieron al llegar a esta última Unidad Militar. Tampoco tuvo oportunidad de conversar con ningún Oficial del Regimiento Tucapel de Temuco o de la Base Aérea Maquehue, salvo el que lo interrogó en ese lugar. Ni tiene conocimiento de que se haya pedido algún tipo de rescate por **José Ortigosa**. Tiene el vago recuerdo de haber visto la chaqueta que en esa oportunidad vestía **José**

Ortigosa, la que presentaba muestras de haber recibido impactos de bala de distinto calibre por la espalda. Esta prenda se la enseñó algún familiar de **Ortigosa**. Desconoce el motivo que tuvieron las autoridades de Temuco para dar muerte a **José Ortigosa**. Sólo se le ocurre el móvil de la venganza, aunque no tiene indicios como para pensar en alguien o en algo que desencadenara estos acontecimientos. Ni tampoco tuvo conocimiento de que la familia de **Ortigosa** hubiese sufrido allanamientos o baleos a sus propiedades después de la muerte de éste.

A.23 AQUILES ALFONSO POBLETE MÜLLER (42 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 424 a 425 (Tomo II); 615 a 617 (Tomo II); 991 a 992 (Tomo III); 997 a 998 (Tomo III); y a fs. 1.098 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre de 2012, rolante de fs. 424 a 425 (Tomo II), inquiriere que respecto a las víctimas señaladas en el decreto que se le exhibe, recuerda a **José María Ortigosa Ansoleaga**, a quien interrogó al interior del Regimiento de Infantería N°08 "Tucapel de Temuco" en una fecha posterior al 11 de septiembre del año 1973. Según su recuerdo, este hombre se encontraba detenido al interior del Regimiento y le fue entregado por el Capitán de Ejército de apellido **Ubilla**, cerca de las 16:00 horas de una tarde de la cual no precisa fecha exacta, quien le hizo presente que lo interrogara respecto a un dinero y documentación que portaba. Manifiesta que solamente interrogó a este señor y también hace presente que no fue torturado por su persona. Una vez finalizado el interrogatorio, entregó a **Ortigosa** al Capitán **Ubilla** y desde ese momento se desentendió de él, enterándose al día siguiente que **Ortigosa** había fallecido, ya que algunos soldados mencionaban que "se lo había llevado el señor". Musita que aparte del Capitán **Ubilla**, no recuerda las identidades de otros Militares, pero si tiene claro que ellos también tenían su equipo de interrogadores.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs. 615 a 617 (Tomo II), narra que para septiembre de 1973 se desempeñaba como Jefe Territorial de Investigaciones de Ferrocarriles, que comprendía la jurisdicción de Cajón a Pto. Montt, le parece que tenía el grado de Inspector. Ostenta que fue destinado al Regimiento Tucapel de Temuco desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. Junto con él fueron asignados **Rigoberto Ortiz**, **Luis Morales** y **Hernán Quiroz**. Respecto del chofer **Carlos Luco**, parece que estuvo en el Regimiento, pero no estaba a su cargo. Nadie más fue asignado al Regimiento, al menos que el recuerde. En el Regimiento fueron recibidos por el Comandante de la Unidad, quien los presentó al Capitán **Ubilla**, informándoles que a partir de ese momento trabajarían bajo sus

órdenes. En dicho lugar cumplían diversas funciones, como citaciones y cosas por el estilo y sí interrogaron detenidos políticos, específicamente recuerda haber interrogado a seis médicos que venían de Pto. Saavedra, aunque ignora sus nombres. Los interrogatorios los efectuaban en una oficina grande, que era como una cuadra, y posteriormente en un gimnasio. El declarante practicaba los interrogatorios en presencia de **Quiroz, Ortiz y Morales**. Los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que obtenían la información y le informaban de los avances de los interrogatorios al Capitán **Ubilla**, quien muchas veces presenciaba estas entrevistas. Desconoce la filiación política de los médicos. Hace presente que el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado **Alfonso Podlech**, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. **Puntualiza que** no presenció ni participó en torturas en el Regimiento Tucapel. Las personas que ellos interrogaban en el gimnasio del Regimiento Tucapel estaban allí en calidad de detenidos y se veían muy cansados. Por lo general, les preguntaban acerca de la existencia de armas y por su filiación política. En total debe haber interrogado a diez personas, pudiendo recordar a un joven que dijo ser GAP, pero que tras el interrogatorio descubrieron que no era tal. Posteriormente, un Oficial, al parecer **Ubilla**, le dijo que a este joven "se lo había llevado el señor". Otra persona que a quien tomó declaración fue a un corredor de autos de apellido **Ortigosa**. Toda la información se la entregaban a **Ubilla** y éste, a su vez, le entregaba los antecedentes a la Fiscalía Militar. **En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que, según supo, era el Fiscal**. Los nombres de las personas que se le señalan no le son conocidos ni recuerda haberlos interrogados. Sí conoció a **Enrique Keller**, quien era agricultor y vivía en Lican Ray, pero no lo vio jamás en el Regimiento Tucapel. Ni recuerda que haya habido un asalto al polvorín del Regimiento, ni tampoco que haya habido algún atentado a éste, menos que haya sido difundida una noticia de este tipo en la prensa local. Precisa que se retiró del Regimiento en enero de 1974, pero se quedó trabajando en ese lugar **Hernán Quiroz** quien no quiso retirarse. Proclama que sólo su equipo más el Oficial **Ubilla** estaban presentes en los interrogatorios que le correspondió practicar. Nunca vio presenciar interrogatorios a **Alfonso Podlech** ni estuvo presente cuando éste decidía el destino de los detenidos, pero se comentaba mucho este hecho. Se comentaba que un médico del Regimiento practicaba interrogatorios a los detenidos usando Pentotal. Sin embargo, no conoce el nombre de este médico.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2012, rolante de fs. 991 a 992 (Tomo III), propone que en relación a su estadía en el

Regimiento de Infantería N°8 "Tucapel" de Temuco, es efectivo que estaba a cargo del grupo de detectives agregados a dicho recinto Militar, haciendo referencia a que cumplió funciones ordenadas por un Capitán de Ejército de apellido **Ubilla**, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas a dicho Regimiento. Es así que para efectuar dichas labores se situaron en el gimnasio del Regimiento, donde personal de Ejército les entregaba los detenidos, quienes ya venían en malas condiciones físicas y procedían a interrogarlos bajo la aplicación de corriente eléctrica producida por un dinamo, recordando que con un cochayuyo mojado pasaban por el cuerpo de los detenidos simulando que se trataba de una culebra. Hace presente que todos los detenidos ingresaban vendados y procuraban no sobrepasarse con ellos. Una vez terminada la sesión de interrogatorios entregaban los detenidos al Capitán **Ubilla**, quien hacía entrega de estos a otro grupo de interrogadores, pero que pertenecían al Regimiento. Relata que el personal de Ejército no participaban en los interrogatorios que ellos efectuaban, pero recuerda que en más de alguna oportunidad estuvo presente por unos momentos el Comandante **Iturriaga Marchesse**. Conforme a lo anterior, soflama que del grupo de Detectives que interrogaba junto a él, recuerda a **Quiroz** y **Ortiz**. Sugiere que además cumplían horario en el Regimiento, recordando que ingresaban a las 08:30 horas y eran despachados a las 17:30 horas de lunes a viernes. Rememora que permanecieron cerca de tres meses agregados al Regimiento, recordando que al final de este periodo ya que se encontraba aburrido de las situaciones que ocurrían al interior de dicho lugar, sobre todo lo que les comentaban algunos Militares referente a los detenidos que ellos interrogaban, ya que en más de una oportunidad se le comento que a la mayoría de estas personas se les daba muerte. Por este motivo le manifestó la molestia al Comandante **Iturriaga**, señalándole que junto a su personal se retirarían del Regimiento, a lo cual el uniformado no puso objeción. Hace presente que el único Detective que siguió cumpliendo funciones en el Regimiento fue **Quiroz**, quien se había hecho muy cercano del Capitán **Ubilla**, manifestándole que le ordenó que abandonara el Regimiento, que se quedaba allí, ya que le iban a otorgar el grado de Oficial. Según su recuerdo, esta situación se la dio a conocer al Prefecto **Aranda**, ignorando que decisión adoptó. Sugiere que respecto a las fotografías que se le exhiben y cuyas identidades se la dan conocer, no le son conocidos sus nombres, pero recuerda el apellido **Vasey**. Hace presente que fueron muchos los interrogatorios que efectuaron, recordando el de una persona proveniente de Santiago y que decía ser miembro del G.A.P, recordando que a este señor una vez interrogado lo entregaron al Capitán **Ubilla**, enterándose al día siguiente que

había fallecido a manos de los Militares, quienes le aplicaron la Ley de Fuga. Suma que siempre los Militares les comentaban que le aplicaban la Ley de Fuga a los detenidos. Indica que en relación al grupo de Militares que interrogaban a los detenidos y que posteriormente se enteraba que se les daba muerte, correspondían a un grupo de funcionarios al mando del Capitán **Ubilla**, que al parecer eran del área de Inteligencia y son ellos quienes debiesen saber de qué manera eran eliminados y las circunstancias, no recordando las identidades de alguno de ellos.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de fs. 997 a 998 (Tomo III), ratifica su declaración judicial rolante de fs. 224 a 226; y la de fs. 1.990 a 1.992, así como su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile rolante de fs. 3.206 a 3.207 (respecto de otra causa). Sustenta que sabía de las decisiones que tomaba el abogado **Alfonso Podlech** con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recuerda haber interrogado a un joven que decía haber pertenecido al GAP. Esta persona cuando la entregaron estaba muy "frisquzada", es decir los Militares de Inteligencia lo habían torturado bastante. Él les refirió con lujo de detalles la estructura del Palacio de la Moneda, por lo que no hubo necesidad de apremiarlo. Este joven era delgado, pero audaz y fue ejecutado por los Militares. Un soldado, cuya identidad ignora le dijo que a este joven "se lo había llevado el Señor". Urde que el nombre de **Guido Raúl Troncoso Pérez** le resulta conocido y lo asocia con el joven que ha señalado anteriormente. Respecto de su consulta, rememora que había otro Oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, que era el Teniente **Rubio**. Sin embargo, no le cabe duda que todos los Oficiales sabían sobre esto. Respecto de **José Ortigosa Ansoleaga** recuerda que se los entregaron los Militares completamente "frisquzado", rememorando que estaba botado en el piso y el declarante le puso el pie sobre el pecho. Él le dijo que estaba comprando un campo en la zona de Pucón y Villarrica y que por ese motivo lo habían detenido. A él también lo mataron los Militares, según supo. Desconoce el nombre de los Militares que trabajaban con ellos, pero siempre fue el mismo grupo entre Conscriptos y Clases. Posteriormente se refiere al **Dr. Hernán Henríquez**. A su pregunta, aduce que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del Regimiento, en donde le aplicaron electricidad a estas personas. Recuerda tanto a **Quiroz** como **Ortiz**, quienes participaban dándole vuelta al dinamo, pero al que más utilizó fue a Quiroz, puesto que **Ortiz** participaba más en los interrogatorios; en tanto que **Morales** era torpe y solo servía para trasladar a los detenidos y darle algunos golpes. Las terminales

eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo. Finalmente el Detective **Quiroz** no quiso regresar a Investigaciones junto con ellos y prefirió quedarse trabajando con el grupo de Inteligencia de los Militares. Este hombre se transformó en una persona cruel en el trato con los detenidos y en general el clima dentro del Regimiento se hizo insostenible para el declarante y por eso decidió retirarse de ese lugar.

En declaración judicial de fecha 03 de julio de 2013, rolante a fs. 1.098 (Tomo IV), utiliza que el abogado **Alfonso Podlech** era quien determinaba el destino de los detenidos. Sin embargo no recuerda haberlo visto interrogando detenidos junto con él. Respecto de **José Ortigosa Ansoleaga**, efectivamente vio a esta persona al interior del Regimiento Tucapel. Esta persona estaba botada en el piso del gimnasio de la unidad. Recuerda que lo arrastró hacia una banca y posteriormente le dio cuenta de esta situación al Capitán **Ubilla**, quien al parecer le dio a conocer el caso al Coronel **Iturriaga**. No supo qué Militares intervinieron en su muerte. Respecto del Detective **Quiroz** ratifica todos sus dichos anteriores, agregando que el Capitán **Ubilla** le pidió que dejara a **Quiroz** trabajando con él.

A.24 HERNÁN RAÚL QUIROZ BARRA (29 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 426 a 427 (Tomo II); 517 (Tomo II); 536 a 537 (Tomo II); 986 a 988 (Tomo III); 1.064 a 1.065 (Tomo IV); 1.066 a 1.067 (Tomo IV); 1.070 a 1.075 (Tomo IV); 1.102 a 1.103 (Tomo IV); 1.104 a 1.105 (Tomo IV); 1.108 a 1.109 (Tomo IV); y de fs. 1.334 a 1.337 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 06 de noviembre de 2012, rolante de fs. 426 a 427 (Tomo II), acota que respecto a las víctimas de los hechos investigados, cuyas identidades y fotografías le son mencionadas y exhibidas, no recuerda a ninguna de estas como detenidos del Regimiento de Infantería N°08 "Tucapel" de Temuco. Es enfático en señalar que nunca interrogó a los detenidos bajo la aplicación de tormentos o torturas, ni tampoco le correspondió trabajar en las dependencias del gimnasio de esa Unidad Militar. Agrega además que ignora qué Detectives trabajaban en esa dependencia y en su caso personal, nunca ingresó a ella e ignoraba que ahí se torturara bajo la aplicación de corriente eléctrica a los detenidos. Respecto al Teniente **Espinoza**, a quien apodaban **"El Loco" o "El Gato"**, le entregaban los detenidos por orden del Fiscal Militar **Jofré**, recordando que generalmente a estos detenidos los interrogaban en la Comandancia, rememorando que estos nunca presentaban rasgos de haber sido interrogados con anterioridad, ahora bien, ignora qué destino tenían estos detenidos en manos de **Espinoza**. Aduce que los interrogatorios que efectuada tenían relación con las individualizaciones de los detenidos. En relación

a su permanencia en el Regimiento, advierte que estuvo segmentadamente en esa Unidad Militar durante un año, recordando que lo dejaron agregado al Regimiento en un periodo que su mando determinó que el resto de los Detectives agregados regresaran a la Prefectura. Según su recuerdo quedó con el Detective **San Juan** cumpliendo las mismas funciones en la Fiscalía mencionada. Siguió agregado al Regimiento por petición del Fiscal Militar Mayor **Jofré**. A modo personal está en su creencia o convencimiento que el destino de muchos detenidos al interior del Regimiento pasó por manos del Teniente **Espinoza**, ya que este señor se caracterizaba por tener un trato poco deferente con los Detectives, haciéndoles presente que solamente ellos, los Militares sabían interrogar a los detenidos y tratar con ellos, recordando que siempre se los llevaba al interior del Regimiento. Respecto a las muertes de detenidos al interior del Regimiento, adopta que es efectivo que estas situaciones ocurrían, enterándose siempre en la mañana del día siguiente que estos fueron dados de baja, a su juicio en extrañas circunstancias, ya que siempre esto ocurría de noche y se señalaba que los detenidos habían intentado asaltar a centinelas o escapar del Regimiento. Por otra parte, adosa que muchos de los detenidos eran llevados al Cuartel de Investigaciones de Temuco, donde también eran interrogados, recordando que en más de una oportunidad le tocó efectuar su traslado y entrega al Comisario de esa unidad de nombre **Mario Baeza**.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante de fs. 517 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 426 a 427.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 12 de julio de 2013, rolante de fs. 536 a 537 (Tomo II), ratifica su declaración de fs. 517. Reconoce a la persona con quien se le carea como **Libardo Schwartenski Rubio** quien en 1973 era Conscripto del Regimiento Tucapel y les llevaba la correspondencia a la Fiscalía Militar. Ésta persona llevaba órdenes que llegaban de diferentes instituciones. Insiste que nunca trabajó en la Compañía de Plana Mayor, ni presenció interrogatorios en donde se torturaran personas. Además, nunca trabajó con los Tenientes que menciona el señor **Schwartenski**. Agrega a sus dichos que a esta persona no la recordaba particularmente hasta que se presentó hace algunos años junto con su señora en el negocio que el declarante tenía en calle Portales frente al correo. En esa oportunidad le dijo que había trabajado en el Regimiento Tucapel y que se acordaba de él. En los días siguientes y con el correr del tiempo comenzó a pedir fiado en su negocio sin pagar la deuda. También un día le pidió cheques para comprar un vehículo, documentos que le costó mucho recuperar. Finalmente, se presentó en su casa hace dos años y le pidió dinero prestado. El declarante le dijo

que no tenía y acto seguido fue a su negocio que estaba ubicado al lado de su casa y le pidió el dinero a su hijo, sin que hasta la fecha sepa la cantidad que le fue entregada, pero en todo caso la suma jamás la devolvió. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 986 a 988 (Tomo III), agrega que ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el año 1966, en esta institución cumplió funciones diez años, ya que le dieron de baja el año 1976, cuando ostentaba el grado de Inspector. Respecto a su permanencia en Temuco, recuerda que estuvo cerca de nueve años cumpliendo funciones en la Comisaría Judicial de dicha ciudad, la que para el año 1973 estaba a cargo del Comisario **Daniel Aguirre Mora**. Una vez llegado el 11 de septiembre de 1973 y debido a los hechos que ocurrieron ese día fue destinado por el mando de su Unidad a cumplir funciones al interior del Regimiento de Infantería N°8 “Tucapel” de Temuco. Rememora que el grupo de funcionarios policiales que fueron asignados al Regimiento estaba compuesto por el Subcomisario **Aquiles Poblete Müller**, el Detective I **Rigoberto Ortiz Lara**, Detective II **Luis Morales Toledo**, Detective IV **Daniel San Juan Clavería** y el conductor de vehículos policiales **Carlos Luco Astroza**. Recuerda que fue el Prefecto **Carlos Aranda Salazar** quien dispuso su concurrencia al Regimiento “Tucapel”, rememorando que trabajaban en esa unidad desde las 09:00 hasta las 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, haciendo presente que antes de concurrir diariamente al Regimiento debían pasar a la Comisaría Judicial a firmar. Hace presente que una vez que llegaron al Regimiento “Tucapel”, se les puso bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, la cual estaba a cargo del Mayor **Luis Jofré Soto**, siendo su ayudante el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Alega que se les asignaron labores de toma de declaraciones a detenidos, efectuar citaciones, detenciones y allanamientos ordenados por la Fiscalía Militar. Hace presente que en más de algún allanamiento encontraron armamento explosivos, también más de alguna detención debió obedecer a alguna implicancia políticas de los detenidos. Anexa que la dependencia que se les asignó correspondía a una oficina ubicada en la Comandancia del Regimiento. No recuerda la identidad de algunas de las personas que en su momento le tocó tomarle declaración o detener. Nunca sometió a interrogatorio bajo tortura a algún detenido que haya llegado al Regimiento, también desconoce en que dependencias se pudieron haber efectuado estas labores, ya que el personal Militar limitó su tránsito al interior del Regimiento. Anima que con el paso de los días que llevaban trabajando en el Regimiento fueron separados del grupo de Detectives el Subcomisario **Aquiles Poblete Müller** y el Detective I **Rigoberto Ortiz Lara**, ignorando de quien

pasaron a depender, lo que sí tiene claro es que diariamente llegaban al Regimiento. Añade que el grupo de Detectives quedó a cargo del Detective II **Luis Morales Toledo**, con quien siguieron cumpliendo las funciones que les asignaba la Fiscalía Militar. Respecto a esta situación, apunta que el Fiscal Militar ordenó que los detenidos que no colaboraran con ellos fueran entregados directamente al Teniente de Ejército **Manuel Espinoza Ponce**, quien se haría cargo de estas personas. Respecto a los Sargentos **Schönherr** y **Moreno**, los recuerda trabajando como dactilógrafos en una oficina que estaba en la misma dependencia donde trabajaban, recordando haberlos visto en más de alguna oportunidad tomándoles declaraciones a detenidos. Sobre la permanencia al interior del Regimiento “Tucapel” de efectivos de la Fuerza Aérea de Chile y de Carabineros, apoya que efectivamente trabajaron funcionarios de esas instituciones, cumpliendo los mismo horarios de ellos, recordando a un Carabinero de nombre **Omar Burgos Dejan**, quien se desempeñaba en la oficina de archivos junto a otro Carabinero, rememorando también a dos funcionarios de la Fuerza Aérea que trabajaban en la oficina de archivo, ignorando sus identidades. En relación a estas personas, hace presente que no trabajaban de uniforme. Respecto a las funciones del conductor de vehículos policiales, **Carlos Luco Astroza**, precisa que estaba a sus disposiciones para efectuar las labores mencionadas, pero el siempre quedaba en la guardia del Regimiento a la espera de sus requerimientos, ignorando si este conductor salió junto a personal de Ejército. Aproxima que siempre se enteraban del fallecimiento de detenidos al interior del Regimiento durante las mañanas y de acuerdo a la información que se les entregaba, estas personas fallecían producto de disparos efectuados por personal Militar por intentar fugarse del Regimiento en horas de la noche. Para estos efectos siempre eran emitidos **Bandos Militares**. Aquilata que mientras estuvieron agregados al Regimiento, siempre estuvieron bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, recordando que esta era asesorada por el abogado **Alfonso Podlech Michaud** y los actuarios **Quilodran** y **Tolozá**.

En declaración judicial de fecha 04 de junio de 2003, rolante de fs. 1.064 a 1.065 (Tomo IV), asegura que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba en la Comisaría de la Policía de Investigaciones de Temuco. En ese entonces era Detective Cuarto y por orden del señor Prefecto de la Unidad, don **Carlos Aranda Salazar** debió presentarse al Regimiento “Tucapel” de Temuco junto a los siguientes funcionarios: Comisario **Aquiles Poblete Müller** a cargo del grupo, Subcomisario **Rigoberto Ortiz Lara**, Detectives **Luis Morales**, **Daniel San Juan Clavería** y el conductor **Carlos Luco Astroza**. Precisa que concurrieron luego de que se presentaran ante los Militares los funcionarios del

Departamento de Informaciones de ese entonces, los que fueron rechazados por estos, siendo devueltos a la Unidad. Al presentarse a la ayudantía del Regimiento “Tucapel” fueron derivados al señor Fiscal Militar de ese entonces don **Luis Jofré Soto**, quien les indicó que debían cumplir las mismas funciones que cumplían en Investigaciones pero al mando de él. Estas consistían en detenciones, citaciones, allanamientos, búsqueda de armas, bombas. Todas las órdenes que cumplían fueron mediante Decreto de la Fiscalía, tal como se hacía con los Tribunales Ordinarios de Justicia. Mucha de esas órdenes las cumplían con resultados, es decir, encontraban armas, explosivos, bombas enterradas en diferentes domicilios de Temuco, y también lograron ubicar y detener a algunas personas, siendo estas puestas a disposición de la Fiscalía. Asevera que se les asignó una oficina en el interior del Regimiento “Tucapel” frente a la Fiscalía misma, en donde tomaban declaraciones a los detenidos. Atestigua que cuando se trataba de detenidos difíciles, eran entregados al Teniente de Ejército de apellido **Espinoza**, quien era Comando boina negra, alto, de ojos claros y le decían “**el gato Espinoza**”. Este Oficial era el encargado del interrogatorio de esas personas difíciles, precisa que se trataban de detenidos que se iban de negativa y que no querían reconocer, habiéndoles encontrado explosivos o armamentos en su poder. Personalmente no vio que **Espinoza** haya golpeado a alguno de los detenidos ni tampoco dijo algo al respecto, porque era un hombre muy reservado y los Militares tenían mucha desconfianza hacia ellos, los funcionarios de Investigaciones. Del Teniente **Espinoza** nunca supo su nombre completo y le consta que estuvo varios meses trabajando en la Unidad. Respecto a don **Alfonso Podlech Michaud**, sabe que él asesoraba al Fiscal Militar, don **Luis Jofré Soto**, en la parte legal. Él era abogado y concurría en esa época al Regimiento donde lo vio personalmente. Atina que a petición de **Podlech** se llevó a la Fiscalía gente profesional, esto es, funcionarios actuarios de los Tribunales de Justicia. También tiene conocimiento que él pidió asesoría a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco para llevar en buena forma el funcionamiento de la Fiscalía Militar. No recuerda alguna orden de investigar o de detener con los nombres que se le mencionan. Blasona que con anterioridad se le citó al Primer Juzgado del Crimen de Temuco, donde declaró al tenor de preguntas referidas a personas desaparecidas en esa época de 1973. Estas declaraciones judiciales se debieron a lo informado en una orden de investigar diligenciada por funcionarios de Investigaciones del Departamento V, ante los cuales declaró extrajudicialmente.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2002, rolante de fs. 1.066 a 1.067 (Tomo IV), comienza haciendo referencia a su trayectoria profesional. Barbulla que mientras cumplió labores en la Comisaría de

Investigaciones de Temuco se produjo el Pronunciamiento Militar, ocurrido el 11 de septiembre de 1973. En ese entonces su jefe de Unidad, el Prefecto **Carlos Aranda Salazar** los llamó a su oficina a seis funcionarios, oportunidad en la cual les comunicó que tenían que presentarse en el Regimiento Tucapel de dicha ciudad, sin entregarles mayor información. Este grupo iba a cargo del Comisario **Aquiles Poblete Müller**, seguido por **Rigoberto Ortiz Lara**, **Luis Morales**, **Daniel San Juan Clavería** y como conductor de vehículo a cargo de una camioneta civil incautada por el Ejército, el señor **Carlos Luco Astroza**. Estando agregado un poco más de un año a esta función, ya que fue uno de los últimos Detectives que regresó a la Comisaría de Investigaciones. Basa que el mismo 11 de septiembre se presentaron en el Regimiento Tucapel, donde fueron recibidos por el Fiscal Militar, Mayor **Luis Jofré Soto**, quien les señaló que desde ese momento tenían que cumplir órdenes judiciales emanadas de la Fiscalía, las que eran impartidas por el señor Fiscal directamente al jefe de grupo, Comisario **Poblete** y posteriormente salían a darle cumplimiento. En esas labores le correspondió realizar diferentes investigaciones, citaciones de personas y también detenciones. Cuando se detenía a alguna persona, era interrogada en los Cuarteles de Investigaciones y luego puestas a disposición de la Fiscalía. En algunas oportunidades cuando se trataba de detenidos difíciles eran entregados al Teniente de Ejército de apellido **Espinoza**, quien se hacía cargo de su interrogatorio. Colige que los desplazamientos de ellos dentro del Regimiento estaban un poco restringidos, ya que para el ingreso pasaban por la guardia, luego contiguo a esta sala estaba una dependencia habilitada como calabozos. Por el frente de la guardia estaba la sala de la Comandancia, en cuyo interior funcionaba la Fiscalía. A un costado de la oficina de la Fiscalía existía una oficina donde trabajaban los Detectives. La oficina de ellos estaba equipada con unos escritorios, dos máquinas de escribir y unas cuantas sillas. Aquí se interrogaba a los presos, se les tomaba una declaración y si eran detenidos difíciles eran entregados al Teniente **Espinoza**, quien los llevaba hacia el interior del Regimiento, ignorando qué tratamientos les daba. Comunica que el Teniente **Espinoza** trabajaba con la Compañía de Comandos. Recuerda que en esa fecha, la Fiscalía estaba integrada por don **Luis Jofré**, que era el Fiscal; **Adrián** que era un Funcionario Judicial que estaba agregado; un señor **Toloza**, Actuario del Poder Judicial; un Militar de apellido **Quilodrán**; y tres Detectives que permanecieron allí, **Morales**, **Daniel San Juan** y el declarante. Ellos cumplían horarios de oficina y su labor solo estaba direccionada a tomar declaraciones. Niega que le correspondiera ver detenidos en malas condiciones debido a los malos tratos. Tampoco supo de muerte de personas que hayan ocurrido dentro o fuera del Regimiento Tucapel.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante de fs. 1.070 a 1.075 (Tomo IV), ratificó su declaración extrajudicial rolante de fs. 3.330 a 3.331 (prestada en causa diversa). Comenta que estuvo prestando funciones en el Regimiento Tucapel desde el 11 de septiembre de 1973 hasta diciembre 1974. El jefe de Inteligencia era el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, pero desconoce qué otros Militares componían ese Departamento. Esto lo supo por las publicaciones que salieron en el periódico hace poco tiempo, enterándose por ese medio que él era el Jefe de Inteligencia en el Regimiento Tucapel. Conjetura que el grupo de Detectives que fue comisionado para trabajar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar estaba a cargo del Comisario **Aquiles Poblete Müller**, integrándolo además del Subcomisario **Rigoberto Ortiz Lara**, actualmente fallecido; los Detectives **Luis Morales Toledo**, fallecido, **Daniel San Juan Clavería** y el declarante. Además, fue destinado como conductor don **Carlos Luco Astroza**. Respecto de las actividades que le correspondió realizar mientras estuvo en el Regimiento Tucapel, comenta que tuvo que cumplir órdenes emanadas de la Fiscalía Militar. Estas eran entregadas a su jefe por el Fiscal Militar, don **Luis Jofré Soto** y ellos salían a cumplirlas. Las órdenes consistían en citar personas, aprehender a otras y llevar a cabo investigaciones. Cuenta que entre las personas que le correspondió detener, sólo recuerda a **Víctor Maturana Burgos**, pero fueron más. Decanta que cuando llegaron al Regimiento Tucapel había más de 800 detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos 5 días allí, ya que ellos debían tomarles declaraciones y anotar sus datos. Esta tarea la realizaron escribiendo a mano, puesto que no tenían otros medios. Le parece que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no lo recuerda exactamente. Sin embargo, siempre permanecieron tomando declaraciones en el patio. En esta tarea fueron ayudados por el Suboficial **Schonherr** de Ejército. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en interrogatorios de detenidos en el Regimiento Tucapel, respondiendo el declarante que sí le correspondió hacerlo, pero siempre en la oficina que tenían asignada en el recinto de la Comandancia. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en torturas de detenidos en el Regimiento Tucapel, respecto de lo cual deponente señala que nunca. El Tribunal le pregunta si supo que algunos detenidos hayan sido apremiados físicamente en el Regimiento Tucapel, respondiendo el declarante que no supo. Delibera que un mes y medio o dos después de haber llegado a trabajar en el Regimiento, el Comisario **Aquiles Poblete Müller** y el Subcomisario **Ortiz** regresaron al Cuartel de Investigaciones y a fines de diciembre se fue el resto, salvo **Luco** y el declarante, quienes se quedaron por petición expresa del Fiscal **Jofré**. El

declarante quedó como enlace entre el Regimiento e Investigaciones. Nunca le correspondió salir con personal distinto a los de su institución, es decir, no salió con Militares. Respecto de los dichos expresados en su declaración extrajudicial sobre los detenidos difíciles y que eran entregados al Teniente **Espinoza**, esto era una orden expresa que el Mayor **Jofré** le dio a su jefe, el Comisario **Poblete**. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de Carabineros, Militares o de la FACH, que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaron en su oficina. Estas personas eran derivadas al Teniente **Espinoza** por orden del Mayor **Jofré**. Para esto ellos llamaban a la guardia para que un Soldado viniera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún Conscripto más tarde, para ser llevado a la presencia del Tenientes **Espinoza**. Sin embargo, desconoce hacia dónde era llevado ni quienes lo interrogaban. Respecto de lo señalado con relación a las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarle el arma a los centinelas, difunde que este tipo de noticias ellos las recibían cuando llegaban en la mañana a trabajar al Regimiento. Sin embargo nunca tuvieron mayores antecedentes sobre cómo ocurrieron los hechos ni tampoco podían preguntar. Sólo sabe que estos hechos ocurrían durante la noche cuando ellos ya no estábamos en la Unidad. Recuerda el asalto al Polvorín, porque fue muy comentado en el Regimiento y en general en Temuco, porque las explosiones de aquella noche se sintieron muy fuertes en la ciudad. El declarante vivía en aquella época cerca del Cuartel de Investigaciones y pudo oírlas. Niega saber sobre de alguna persona que falleciera al interior del Regimiento producto de haber recibido descargas eléctricas. En lo pertinente el Tribunal le lee la declaración prestada por don **Aquiles Alfonso Poblete Müller** de fs. 3.223 a 3.224, respecto de lo cual deponente señala que no es cierto que él haya interrogado detenidos aplicando corriente sobre ellos. Esta persona miente con el sólo afán de perjudicarlo, puesto que durante toda su vida funcionaría lo persiguió. De hecho fue él quien le dio de baja. Acompaña en este acto copia de una declaración jurada efectuada por don **Óscar Eduardo Lemus Hax**, ex funcionario de investigaciones que avala sus dichos. Tampoco es cierto que interrogara personas en una dependencia distinta a la oficina que estaba junto a la Comandancia, ni que dependieran del Capitán **Ubilla**. Tiene entendido que este Oficial era el Ayudante del Comandante **Iturriaga**. De hecho él los recibió cuando llegaron al Regimiento y hacía las veces de ayudante. El Tribunal le lee la declaración prestada por don **Daniel Amoldo Aguirre Mora** de fs. 3.231 a 3.232, respondiendo el deponente que no es efectivo lo que el señor **Aguirre** señala en sus dichos, ya que nunca prestó colaboración con el señor **Podlech** antes del 11

de septiembre de 1973, ni menos le entregó información de Inteligencia. Si bien sabía que el señor **Podlech** era un abogado de Temuco, recién lo conoció personalmente cuando comenzó a trabajar para la Fiscalía Militar en 1973. Este abogado era el asesor de la Fiscalía y se presentaba en ese lugar dos o tres veces a la semana. Se imagina que asesoraba al Fiscal **Jofré** en la tramitación de los procesos. Respecto de lo que señala el señor **Aguirre Mora** y que dice relación con detenidos que resultaron muertos en las torturas, divulga que no participó ni tuvo conocimiento de esto. Agrega que a diez días de llegados al Regimiento, **Aquiles Poblete Müller** y **Ortiz** fueron separados de ellos por orden del Fiscal **Jofré**, quizás, y se pusieron a trabajar en otros lado, ignora dónde. No sabe qué nuevas funciones cumplieron, pero no volvieron a trabajar a la oficina de ellos. El Tribunal le lee la declaración prestada por don **José Raúl Inzunza Reyes** de fs. 3.310 a 3.313, respecto de lo cual el deponente desarrolla que no recuerda a la persona cuya declaración se le lee, pero señala que sus dichos son falsos. Nunca salió con Militares a efectuar detenciones, ni interrogó personas en dependencias de la Compañía de Plana Mayor. Tampoco trabajó para el Capitán **Ubilla**. No sabe por qué motivo esta persona lo sindicaba participando de estos hechos. Acompaña copia de dos declaraciones extrajudiciales prestadas por él mismo en diferentes procesos relacionados con este tema. Descarga que quien puede avalar sus funciones en la Fiscalía Militar es don **Alfonso Podlech**, ya que con él ellos alcanzaron a trabajar cuando fue Fiscal. Rectifica aquella parte de su declaración en la que señaló que la orden de entregar a los detenidos se la dio al Mayor **Jofré** al Comisario **Poblete**, porque en realidad se la dio al Detective **Morales**, puesto que **Poblete** ya había sido separado del grupo junto con **Ortiz** y trabajaban en otra parte.

En diligencia de careo entre José Raúl Inzunza Reyes y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.102 a 1.103 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 3.436 a 3.441 (otorgada en causa diversa). No reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer que se trata de José Raúl Inzunza Reyes, respecto de lo cual el deponente destaca que nunca conoció a esta persona con quien se le carea. Agrega que todas las detenciones que efectuaron estaban respaldadas por un Decreto Judicial emanado de la Fiscalía Militar. No sabe el motivo por el cual esta persona lo sindicaba efectuando las actividades que él señala, está equivocado. Por otra parte, habían más Detectives trabajando en el Regimiento. Detalla que estuvo en el Regimiento Tucapel hasta mediados de 1974 más o menos. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Daniel Amoldo Aguirre Mora y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 3.436 a 3.441 (otorgada en causa diversa). No reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer que se trata de **Daniel Aguirre Mora**, respecto de lo cual el deponente distingue que recuerda a la persona con quien se le carea, porque en 1973 era su jefe en el Cuartel de Investigaciones de Temuco. Glosa que el señor **Aguirre** se equivoca cuando dice que él y **Luco** tuvieron algo que ver con los apremios sufridos por los señores **Apablaza** y **Nambrard**, por cuanto ellos fueron detenidos por la Fuerza Aérea y nunca estuvieron en el Regimiento Tucapel. Por otra parte, solo atendió al señor **Podlech** en el Cuartel de Investigaciones en una oportunidad en que él se presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective **Ortiz**. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.108 a 1.109 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 3.436 a 3.441 (otorgada en causa diversa). Reconoce a la persona con quien se le carea como **Libardo Schwartenski Rubio**, quien en 1973 era Conscripto del Regimiento Tucapel y les llevaba la correspondencia a la Fiscalía Militar. Ésta persona llevaba órdenes que llegaban de diferentes instituciones. Insiste que nunca trabajó en la Compañía de Plana Mayor ni presenció interrogatorios en donde se torturaran personas. Además, nunca trabajó con los Tenientes que menciona el señor **Schwartenski**. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 29 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.334 a 1.337 (Tomo IV), basa que estuvo prestando funciones en el Regimiento Tucapel desde el 11 de septiembre de 1973 hasta diciembre 1974. El jefe de Inteligencia era el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Suma que el grupo de Detectives que fue comisionado para trabajar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar estaba a cargo del Comisario **Aquiles Poblete Müller**, integrándolo además del Subcomisario **Rigoberto Ortiz Lara**, actualmente fallecido; los Detectives **Luis Morales Toledo**, fallecido; **Daniel San Juan Clavería** y el declarante. Además, fue destinado como conductor don **Carlos Luco Astroza**. Respecto de las actividades que le correspondió realizar mientras estuvo en el Regimiento Tucapel, tuvo que cumplir órdenes emanadas de la Fiscalía Militar. Estas eran entregadas a nuestro jefe por el Fiscal Militar, don **Luis Jofré Soto**, y ellos salían a cumplirlas. Las órdenes consistían en citar personas, aprehender a otras y llevar a cabo investigaciones. Entre las personas que le correspondió detener sólo recuerda a **Víctor Maturana Burgos**, pero fueron más. Cuando

llegamos al Regimiento Tucapel había más de 800 detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos 5 días allí, ya que ellos debían tomarles declaraciones y anotar sus datos. Esta tarea la realizaron escribiendo a mano, puesto que no tenían otros medios. Le parece que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no lo recuerdo exactamente. Sin embargo, siempre permanecieron tomando declaraciones en el patio. En esta tarea fueron ayudados por el Suboficial **Schonherr** de Ejército. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en interrogatorios de detenidos en el Regimiento Tucapel, respecto de lo cual el declarante responde que sí le correspondió hacerlo, pero siempre en la oficina que tenían asignada en el recinto de la Comandancia; pero niega que le haya correspondido participar en torturas de detenidos en el Regimiento Tucapel o haber sabido que algunos detenidos hayan sido apremiados físicamente en dicho lugar. Por otro lado, señala que un mes y medio o dos después de haber llegado a trabajar en el Regimiento, el Comisario **Aquiles Poblete Müller** y el Subcomisario **Ortiz** regresaron al Cuartel de Investigaciones y a fines de diciembre se fue el resto, salvo **Luco** y el declarante, quienes se quedaron por petición expresa del Fiscal **Jofré**. El deponente quedó como enlace entre el Regimiento e Investigaciones. Niega que le haya correspondido salir con personal distinto a los de su institución, es decir, no salió con Militares. A su pregunta, sobre los detenidos difíciles y que eran entregados al Teniente **Espinoza**, esto era una orden expresa que el Mayor **Jofré** le dio a su jefe el Comisario **Poblete**. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de Carabineros, Militares o de la FACH, que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaron en su oficina. Estas personas eran derivadas al Teniente **Espinoza** por orden del Mayor **Jofré**. Para esto, ellos llamaban a la guardia para que un Soldado viniera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún conscripto más tarde para ser llevado a la presencia del Tenientes **Espinoza**. Sin embargo, desconoce hacia dónde era llevado ni quienes lo interrogaban. Respecto de las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarle el arma a los centinelas, puede señalar que este tipo de noticias ellos las recibían cuando llegaban en la mañana a trabajar al Regimiento. Sin embargo nunca tuvieron mayores antecedentes sobre cómo ocurrieron los hechos ni tampoco podían preguntar. Solo sabe que estos hechos ocurrían durante la noche cuando ellos ya no estaban en la unidad. Los nombres de **Daniel de Los Ángeles Mateluna Gómez** y **José María Ortigosa Ansoleaga** no le resultan conocidos, ni los recuerda como detenidos en El Regimiento Tucapel de Temuco en 1973. Si

recuerda haber tomado conocimiento de sus muertes a través de un **Bando Militar** que fue publicado en la prensa y que daba cuenta de este hecho. Respecto de los dichos de **Raimundo Quezada Chandía**, cuya declaración se le ha leído, puede indicar que poco después de su llegada al Regimiento, el Comisario **Poblete** los separó en dos grupos. Uno estaba conformado por **Morales, San Juan** y el declarante, quienes quedaron trabajando en la Comandancia. El otro grupo, integrado por **Ortiz** y **Poblete** se fue a trabajar hacia el interior del Regimiento bajo las órdenes del Capitán **Ubilla**, pero desconoce dónde ni qué funciones cumplieron allí. El señor **Poblete** regresaba en las tardes y les pedía cuenta de las órdenes que habían recibido durante el día.

A.25 ORLANDO MORENO VÁSQUEZ (32 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 428 a 429 (Tomo II); 528 (Tomo II); 571 a 573 (Tomo II); 605 a 606 (Tomo II); 607 a 608 (Tomo II); 624 a 626 (Tomo II); 680 a 681 (Tomo II); 905 a 906 (Tomo III); 1.154 (Tomo IV); 1.330 (Tomo IV); 1.445 1.446 (Tomo V); y a fs. 1.461 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 06 de noviembre de 2012, rolante de fs. 428 a 429 (Tomo II), evidencia que en relación a las víctimas, **Daniel Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga**, entre otras, cuyas fotografías le son exhibidas, no recuerda a ninguna de estas como detenidos del Regimiento de Infantería N°08 "Tucapel" de Temuco. Respecto a lo anterior, expresa que en reiteradas oportunidades supo de la muerte de detenidos por intento de fuga, los cuales se daban a conocer a través de **Bandos Militares**, en cuya confección el declarante niega haber participado. Estos **Bandos** generalmente los confeccionaba el Fiscal Militar **Podlech**. Respecto a la existencia de un grupo de interrogadores Militares, desconoce la existencia de dicho grupo y recuerda solamente a los Detectives que estaban agregados al Regimiento para tales efectos, recordando al Detective **Quiroz** y al conductor **Luco**, trabajando junto al declarante y al Sargento **Schönherr** en la Comandancia del Regimiento, recordando que los otros Detectives trabajaban en el gimnasio chico de la Unidad Militar. Sobre el destino final de las víctimas de los hechos investigados, como también de los demás detenidos al interior del Regimiento explicita que esa información debe ser obtenida de **Jaime García Covarrubias**, quien en ese tiempo era Teniente y ayudante del Comandante del Regimiento, también los Oficiales **Manuel Vásquez Chahuán** y **Raimundo García Covarrubias**, ya que ellos estaban a cargo de distintas Compañías y tenían relación directa con el Comandante del Regimiento. Respecto al Teniente **Espinoza**, quien esta fallecido, exclama que al igual que los Oficiales

mencionados anteriormente debió haber manejado información respecto a la suerte de muchos detenidos. Por otra parte, el Oficial que tenía directa relación con los Detectives al interior del Regimiento corresponde al fallecido Capitán **Nelson Ubilla Toledo**.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante a fs. 528 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 428 a 429.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003, rolante de fs. 571 a 573 (Tomo II), expone que el 01 de febrero de 1959 ingresó a la Escuela de Infantería de San Bernardo como alumno, siendo posteriormente destinado a cumplir funciones al Regimiento de Infantería de Montaña N°8, "Tucapel", Unidad Militar a la cual llegó en el mes de enero de 1961 y en la que se desempeñó hasta el mes de abril de 1989, oportunidad en la que se acogió a retiro por "tiempo cumplido". Recuerda que el 11 de septiembre de 1973 llegó al Regimiento "Tucapel", al parecer ese día fueron llamados a sus casas para que se presentaran antes de la hora habitual, pero sin darles mayores explicaciones. Recuerda que en esa época tenía el grado de Sargento 2° y se desempeñaba en la Segunda Comandancia con el Mayor **Luis Jofré Soto**, quien era el segundo Comandante del Regimiento y el Fiscal Militar, también trabajaba el Sargento **Raúl Schonherr Frías**. Dentro de las funciones que le correspondían en el cargo antes del día del Pronunciamiento, era de labor administrativa (dactilógrafo) y encargado en la criptografía y claves de la Unidad. Al llegar al Cuartel ese día 11, se les indicó que tenían que esperar órdenes y noticias que tenían que llegar de Santiago, según lo manifestado por el Mayor **Jofré** y durante la mañana, a través de los diferentes **Bandos** emitidos por la radio, se enteraron que las Fuerzas Armadas habían derrocado al Gobierno del Presidente **Salvador Allende**. Esa misma mañana el Comandante del Regimiento, Coronel **Pablo Iturriaga Marchese**, llamó a una reunión a los Oficiales, oportunidad en la que seguramente, les dio a conocer los hechos ocurridos y las órdenes para que sean transmitidas a los demás Militares. Una vez que se emitieron las órdenes el Mayor **Jofré** le indicó que junto **Schonherr** se dedicaran a la parte de los criptogramas, recibir y enviar los mensajes que se estaban cursando, los que debido a los hechos que acontecían habían aumentado considerablemente, razón por la que se veían imposibilitados de cumplir alguna otra función. Paralelamente la Fiscalía Militar a cargo del Mayor **Jofré**, funcionaba en la misma dependencia del Regimiento, pero en un lugar diferente a donde el declarante desempeñaba su función, por la que no tenía contacto con la labor de estos. La Fiscalía Militar tenía para su funcionamiento dos personas que eran Militares con el grado de

Suboficiales, recordando a **Santiago Villarroel** y **Leonel Quilodran Burgos**, además de otros civiles que se agregaron después del Pronunciamiento que pertenecían a un Juzgado del Crimen de Temuco de los que recuerda a **Adrián González Maldonado** y a **Héctor Toloza Fierro**. Cabe hacer presente que estas personas fueron llevadas por un señor abogado, quien fue el que se hizo cargo de la Fiscalía Militar de Temuco a los pocos días después del 11 de septiembre de 1973, de nombre **Alfonso Podlech Michaud**, quien para todos los efectos era el Fiscal Militar Letrado, ignorando cuál era su función específica por cuanto nunca trabajó en forma directa con él. Cabe hacer presente que a partir de esa fecha el Mayor **Jofré** pasó a cumplir funciones como segundo Comandante del Regimiento, ignorando si todavía tenía alguna incidencia en la Fiscalía Militar. **Alfonso Podlech Michaud** cumplía sus funciones de Fiscal en el Regimiento "Tucapel", recordando que era cotidiano verlo en el interior de esta Unidad Militar, pero no pudiendo agregar que éste se encontraba durante todo el día. Debido a su función y grado no tenía acceso a otro tipo de información acerca de otros antecedentes que digan relación con la Fiscalía Militar. Acerca de lo que se le consulta, que si cumplía funciones en el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del Regimiento "Tucapel", en fecha posterior al 11 de septiembre, agregando que su función en esta correspondía a todo lo relacionado con las claves y al manejo de la documentación clasificada de la Unidad, siendo el Jefe de 1973, expone que eso es correcto. Otro de los integrantes de este grupo era el Sargento **Schonherr**. Respecto a si en alguna oportunidad participó en algún operativo donde se detuvieran personas o en el traslado de prisioneros políticos desde la cárcel hasta la Fiscalía Militar de Temuco, explica que nunca realizó algún operativo donde se haya detenido gente, pero sí puede reconocer que cuando la Fiscalía Militar necesitaba algún preso político, era enviado con una orden de ésta para retirarlo de la cárcel y una vez que era interrogado, era trasladado nuevamente al recinto carcelario, pero sin tener conocimiento alguno de los interrogatorios, como asimismo en las circunstancias en que estos se realizaban. Lo anterior, supone que ocurría por el sólo hecho de pertenecer al SIM, lo que sucedió en varias ocasiones, no recordando nombres de alguna persona detenida que le haya correspondido trasladar. Respecto a personas muertas o en la actualidad desaparecidas, de las cuales existen testimonios que estuvieron detenidas por personal Militar del Regimiento "Tucapel", nunca tuvo conocimiento de que se les diera muerte a alguna de estas o algún prisionero político, por cuanto no participó en estos hechos ni le consta que hayan ocurrido, ignorando dichas circunstancias. En el mes de abril de 1989 se retiró del Ejército de Chile con el grado de Suboficial Mayor mientras cumplía funciones en el Regimiento "Tucapel" de Temuco.

En declaración judicial de fecha 22 de diciembre de 2003, rolante de fs. 605 a 606 (Tomo II), funda que para septiembre de 1973 se desempeñaba en la Segunda Comandancia que estaba a cargo del Mayor **Luis Jofré Soto**. Con posterioridad al 11 de septiembre se formó la Sección Segunda de Seguridad a la cual fue asignado para efectuar trabajos de oficina y eventualmente para efectuar patrullajes de control de toque de queda. Justifica que en noviembre de 1973 en la mañana, recuerda que el Comandante del Regimiento le entregó un documento para que lo cifrara y lo remitiera al Cuartel General de la División en Valdivia, cuyo contenido relataba los hechos acaecidos la noche anterior. Se decía que la guardia del polvorín se habría enfrentado a las personas fallecidas luego que éstas pretendieron asaltar el polvorín, ubicado en la isla Cautín, refiriéndose a éstos hechos. En lo pertinente el Tribunal le pregunta si el Regimiento Tucapel fue centro de detención, respondiendo el deponente que sí, dada la gran cantidad de detenidos que llegaron al Regimiento éstos fueron dejados en el gimnasio, donde algunos permanecieron por varios días, luego de lo cual eran dejados en libertad o trasladados a la cárcel pública por orden de la Fiscalía Militar. El Tribunal le pregunta si le correspondió interrogar a los detenidos o presenciar interrogatorios, respondiendo el deponente que no. Ni nunca escuchó que alguien fuera torturado, aunque no podría asegurar que no haya ocurrido.

En declaración diligencia de careo entre Herman Carrasco Paul y don Orlando Moreno Vásquez, de fecha 22 de diciembre de 2003, rolante de fs. 607 a 608 (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 188 (en causa diversa). Su única misión era llevar y traer a los detenidos desde la Cárcel a la Fiscalía y es por eso que lo mencionan, puesto que se hizo conocido de la mayoría de los detenidos. Respecto a los dichos de **Carrasco**, cree que esa es sólo una impresión que él tiene, puesto que jamás participó ni supo de hechos de esa naturaleza. Recuerda haber visto a esta persona en el Regimiento, pero no se acuerda haberlo visto maltratado o golpeado como él afirma. Insiste en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de febrero de 2009, rolante de fs. 624 a 626 (Tomo II), habla que para el año 1973, mes de septiembre, estaba inserto en la 2da. Comandancia del Regimiento, la que se encontraba al mando del fallecido Mayor **Luis Jofré Soto, quien ya por ese tiempo era el Fiscal Militar del Regimiento Tucapel. En esta unidad cumplía labores de dactilógrafo y criptógrafo. A partir del 11 de septiembre de 1973, pasó a desempeñarse en la Sección Segunda, que veía los temas de seguridad Militar del Regimiento, la que se encontraba al mando del entonces Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, actualmente fallecido. Cabe señalar que el Mayor **Luís Jofré** siguió**

cumpliendo funciones de Fiscal Militar, pero era asistido por el Abogado **Alfonso Podlech Michaud**. Deja en claro que la las dependencias de la Fiscalía para la fecha en comento funcionaban en otra dependencia distinta a las oficinas de la Sección Segunda, lugar donde el declarante junto al Sargento **Raúl Schonherr** trabajaban, principalmente en labores de documentación clasificada y mensajes cifrados que salían y llegaban a la unidad. Sobre su pregunta, indica que dentro de las personas que se desempeñaban como actuarios en la Fiscalía se encontraban dos actuarios de un Tribunal del Crimen de Temuco, cuyos nombres eran **Adrián González Maldonado**, **Héctor Toloza Fierro** (fallecido) y el Abogado **Dorian Novoa Godoy**. Además había un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones de esta ciudad agregados también a la Fiscalía Militar, dentro de los cuales recuerda a los señores **San Juan Clavería**, **Morales**, **Quiroz** y **Luco**. Sobre su consulta, invoca que efectivamente y cree que por su especialidad la que es "Especialista en Seguridad Militar", le correspondía ir hasta la Cárcel Pública de esta ciudad, en vehículo militar (Jeep) escoltado por patrulla de la Unidad a dejar detenidos de la Fiscalía del Regimiento o llevar detenidos que eran requeridos, todos por causas políticas. Por lo anterior, es que se le ha mencionado tantas veces en estos cometidos, haciendo presente que estos detenidos los dejaba en la guardia del Regimiento a espera de que fueran ingresados a la Fiscalía. La seguridad de estos detenidos mientras estaban en la Unidad Militar era responsabilidad del personal que cumplía labores de guardia y eran mantenidos conforme su recuerdo en el "Gimnasio Chico" que quedaba aledaño al rancho de Conscriptos del Tucapel. Posteriormente se refiere a la detención de un ciudadano de nombre **Víctor Hugo Valenzuela Velásquez**. Por otra parte, inquiere que es efectivo que un día del mes de noviembre de 1973, no puede precisar fecha, le correspondió cifrar un mensaje dirigido al Comandante en Jefe de la IV División de Ejército con Asiento en Valdivia, donde se informaba el **Bando** que daba cuenta de un Asalto al Polvorín de su Unidad, por parte de extremistas, de los cuales la guardia de la unidad había logrado dar de baja a siete de ellos, refiriéndose a aquello. Por último, conforme a su recuerdo, el Regimiento Tucapel estaba compuesto por una Compañía de Plana Mayor y Servicios, dos Compañías de Fusileros, una Compañía de Morteros y una Compañía Andina.

En declaración judicial de fecha 10 de julio de 2009, rolante de fs. 680 a 681 (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 130 a 132, su declaración judicial rolante de fs. 188 a 188 vta y su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 261 a 263 (todas en causa diversa). En lo pertinente recuerda que los Oficiales que alojaban en el Regimiento

y que estaban solteros eran los hermanos **García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán**, el Teniente **Espinoza**, Teniente **Tichahuer**, el Teniente **Romilio Lavín, Pablo Gran, Carlos Oviedo**. También alojaban los Capitanes **Vargas, Valdebenito, Mario Alvarado y Fernández Carranza**. Todos los Oficiales solteros pernoctaban en dependencias ubicadas en el casino de Oficiales. A su pregunta, manifiesta que el SIRE se formó en el mismo Regimiento después del 11 de septiembre de 1973 con representantes del Ejército, Carabineros y Fuerza Aérea, pero funcionó poco tiempo. En un principio estuvo nominado junto con **Schönherr** para formar parte de este organismo, pero posteriormente fueron designados los Cabos de apellido **Martínez y Bahamondes**, quienes eran conductores. Recuerda que por Carabineros había un Capitán de apellido **Quiroz** y por la FACH un Teniente de apellido **Videla**. El Jefe del SIRE era el Capitán **Rubio Valladares**. El Capitán **Ubilla** era el nexo entre el Comandante del Regimiento y el SIRE. Puede ser que Investigaciones haya formado parte de este organismo, pero no lo recuerda. Musita que el Sargento **Mario Arias Díaz** era instructor, pero posteriormente pasó a formar parte de la DINA, al parecer en 1974 o 1975. Recuerda al Suboficial **Arturo Átala Alcántara**, quien actualmente se encuentra fallecido. Posteriormente se refiere a los hechos relacionados con el asalto al polvorín.

En declaración diligencia de careo entre **Jaime García Covarrubias y don Orlando Moreno Vásquez, de fecha 22 de septiembre de 2010, rolante de fs. 905 a 906 (Tomo III)**, ratifica íntegramente su declaración judicial de fs. 624. Narra que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es el Teniente **Jaime García Covarrubias** a quien he hecho referencia. Esta persona al día siguiente de ocurrido el asalto al polvorín le entregó un **Bando** para que lo cifrara y lo enviara por criptograma a la Cuarta División de Ejército. A su pregunta, ostenta que durante el año 1980 o 1981 el señor **García** lo llamó a través de la comunicación interna del Ejército para pedirle que averiguara qué había pasado con la causa que investigó el asalto al polvorín. Se mantiene en sus dichos.

En declaración diligencia de careo entre **Ernesto García Isla y don Orlando Moreno Vásquez, de fecha 04 de octubre de 2013, rolante a fs. 1.154 (Tomo IV)**, puntualiza que lo que dice esta persona es absolutamente falso, puesto que nunca entró a la sala que señala el señor **García**, ni supo de su existencia. No sabe el motivo por el cual esta persona lo involucra en estos hechos. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 28 de octubre de 2014, rolante a fs. 1.330 (Tomo IV), el Tribunal le da a conocer la declaración extrajudicial

prestada por **Raimundo Quezada Chandía**, rolante de fs. 1.317 a 1.320, respecto de lo cual el deponente responde que no conoce al señor **Quezada Chandía** ni lo recuerda como Conscripto. Ahora, respecto de lo que esta persona ha dicho, puede precisar que efectivamente había un gimnasio chico en donde hubo personas detenidas, pero niega haber tenido acceso a ese lugar. Allí trabajaban los Detectives que fueron asignados al Regimiento Tucapel, cuyas funciones coordinaba el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Proclama que no le consta que allí se haya torturado a alguna persona. Si el señor **Quezada Chandía** dice que el participaba en esas actividades está mintiendo o él también estaba presente, puesto que para verlo en esas actividades debería haberlas presenciado. Respecto de lo indicado por **Quezada Chandía**, en el sentido de que el declarante habría presenciado la ejecución del señor **Mateluna** al interior de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, propone terminantemente que eso es absolutamente falso y desconoce el motivo por el cual esta persona le imputa actos de esa naturaleza.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2016, rolante de fs. 1.445 a 1.446 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.491 a 1.492 (Tomo V), prefiere que para el año 1973 se desempeñaba en la 2° Comandancia del Regimiento N°8 Tucapel de Temuco, correspondiéndole para la época ser el Dactilógrafo de dicha Comandancia. Respecto a las víctimas **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** y **José María Ortigosa Ansoleaga**, sólo recuerda a la víctima de apellido **Ortigosa**, puesto que se comentó que el Capitán **Callis** de Carabineros de Pitrufquén y el Coronel **Pacheco** de la Base Aérea Maquehue, habrían extorsionado a esta persona, con un dinero que éste portaba a objeto de otorgarles su libertad. Enterándose también que una vez que se supo esta situación el Comandante del Regimiento, don **Pablo Iturriaga Marchesse**, informó a la superioridad sobre esta situación, por lo que los mencionados funcionarios fueron retirados de sus puestos. Respecto a la pregunta que tiene relación con el traslado de detenidos desde la cárcel pública al Regimiento Tucapel de Temuco, recalca que efectivamente le tocó efectuar esos traslados, no recordando claramente a quienes trasladó en dichas oportunidades, sólo están en su recuerdo aquellas personas que en reiteradas ocasiones llevó al Regimiento, quienes eran miembros del MIR, recordando entre otros a un señor de apellido **Azocar**, **Alarcón** y a **Bernardita Beisser**, esposa de **Azocar**, quienes fueron posteriormente exiliados. Sobre el traslado que pudo haber efectuado al detenido **Ortigosa**, relata que no descartó el haberlo trasladado pero como no lo conocía no puede dar fe de esa situación, a parte que fueron muchos los detenidos que tuvo que trasladar. Por otra parte y refiriéndose a los traslados de detenidos, hace

presente que siempre recibía un documento con el o los nombres de los detenidos a trasladar de la cárcel al Regimiento, el cual era firmado por el Fiscal Militar, siendo en un principio firmados por el Mayor **Jofré** y posteriormente por **Alfonso Podlech**, una vez este fue nombrado como Fiscal Militar. En lo personal, los traslados que efectuó siempre finalizaban en la Guardia del Regimiento, dejando a los detenidos bajo la custodia de los funcionarios que cumplían dicho servicio. No obstante, sabe que eran sacados de ese recinto por el mismo personal de guardia los cuales los trasladaban a la Oficina del Fiscal Militar, ignorando si **Alfonso Podlech** participaba en esos interrogatorios. Respecto a la aplicación de la Ley de Fuga que se les dio a estas personas, no maneja ningún tipo de antecedente al respecto y en relación al detenido de apellido **Mateluna**, fue encontrado fallecido en la vía pública, específicamente en la calle O'Higgins casi al llegar a Aldunate, sugiere que aparte de desconocer todo tipo de antecedente al respecto, no recuerda el haber despachado un **Bando Militar** que diera cuenta de tal situación.

En declaración judicial de fecha 06 de junio de 2016, rolante a fs. 1.461 (Tomo V), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.445 a 1.446.

A.26 MANUEL JESÚS CONTRERAS SALAZAR (19 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 430 a 431 (Tomo II); 518 (Tomo II); 659 a 660 (Tomo II); 673 a 675 (Tomo II), 765 (Tomo III); 931(Tomo III); y a fs. 932 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 07 de noviembre de 2012, rolante de fs. 430 a 431 (Tomo II), sugiere que ingresó a cumplir con su servicio Militar Obligatorio al Regimiento de Infantería N°08 "Tucapel" de Temuco, durante el mes de abril del año 1973, finalizando su instrucción Militar durante el mes de agosto del año 1975. Según su recuerdo, quedó encasillado desde un comienzo en la 2da. Sección de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, siendo el Comandante de su Compañía el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, y a cargo de su sección el Subteniente **Lavín**. Respecto a sus labores como Conscripto después del 11 de septiembre del año 1973, le correspondía a efectuar la custodia de las instalaciones del Regimiento, servicios de guardia y patrullajes de control de toque de queda. Hace presente además, que con posterioridad al 11 de septiembre comenzaron a llegar personas detenidas al Regimiento, los cuales eran alojados en el patio principal de la Unidad Militar. Respecto a los lugares donde se efectuaban los interrogatorios, suma que estos correspondían a un gimnasio chico en el cual se interrogaba bajo tortura a los detenidos, dos Detectives. También

había otra dependencia en una cuadra de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, la que en principio utilizaban los Conscriptos como sala de recreación, y que fue habilitada para efectuar interrogatorios bajo tortura, pero en ese lugar los interrogadores correspondían a algunos Oficiales del Regimiento, recordando al Capitán **Manuel Fernández Carranza** y los Tenientes **Vásquez Chahuán** y **Espinoza**. Según su recuerdo, en dicho lugar, al cual ingresó en una oportunidad, pudo ver unas baterías y unas bolsas plásticas las cuales a su juicio eran utilizadas para asfixiar a las personas. También en una oportunidad vio que sacaron a dos personas fallecidas desde esa sala. Respecto a las víctimas de los hechos investigados, sustenta que solamente recuerda el apellido **Mateluna**, como uno de los detenidos del Regimiento, pero mayores antecedentes respecto al destino final de esta persona no maneja. También, recuerda a la persona de anteojos y barba como detenido del Regimiento, cuya fotografía se le exhibe, pero no recuerda su identidad. Posteriormente se refiere a los hechos sobre asalto al polvorín de la isla cautín, respecto de lo cual urde que eso fue un montaje para justificar las ejecuciones de las personas que fallecieron en el supuesto enfrentamiento. También por comentarios, supo que en otras oportunidades personas fueron llevadas a la Isla del Tucapel, donde eran ejecutadas en el polígono que ahí se encontraba y que posteriormente, los cadáveres eran subidos a camiones Militares, los cuales eran llevados hasta el Puente Allipén y arrojados al Río Toltén. Por lo que supo, los Oficiales que tenían participación en el traslado de estos cuerpos correspondían a los Tenientes **Vásquez** y **Espinoza**.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante a fs. 518 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 430 a 431. Respecto de los Oficiales encargados de interrogar a los detenidos recuerda a **Manuel Vásquez Chahuán**, **Nolberto Uribe Moroni**, **Pablo Gran López**, **Manuel Fernández Carranza** y **Manuel Espinoza Ponce**. También cumplía esta función el Suboficial **Moreno Vásquez**, quien estaba a cargo de una Comisión Civil, y el Sargento **Mario Arias Díaz**. Era de público conocimiento que estos Oficiales trataban con detenidos y los interrogaban.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de mayo de 2009, rolante de fs. 659 a 661 (Tomo II), delibera que para en abril de 1973 ingresó a efectuar su Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería N°8 Tucapel, el cual finalizó el año 1975, estando inserto dentro de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, cuyo comandante era el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, quien según su recuerdo era el Oficial encargado de las investigaciones de los presos políticos que se encontraban en el Regimiento, refiriéndose a los demás

integrantes que recuerda de su Compañía. Dice que pudo ver detenidos políticos dentro del Regimiento Tucapel. Éstos prisioneros eran rapados tanto de su cabellera como de sus barbas en el caso de los varones, generalmente se les cubría la vista con vendas de color negro y rojo y eran mantenidos, por ejemplo en la sala contigua a la guardia, llamada "Sala de Visita de Conscriptos", "en el Gimnasio Chico" que era una bodega donde se almacenaba pertrechos, "una dependencia ubicada al lado de los baños de la Compañía de Plana Mayor y Servicios". Luego se refiere a los hechos relacionados con el asalto del polvorín. En lo pertinente, difunde que efectivamente existía un grupo operativo a cargo de los detenidos, a quienes interrogaban. Este grupo estaba compuesto principalmente por Oficiales y Suboficiales, refiriéndose a estos. Por otra parte, recuerda que se les obligaba casi todas las noches a cargar camiones con cuerpos de víctimas o ejecutados políticos, los que por lo general eran trasladados hasta el puente Allipén, donde finalmente eran arrojados al río.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de fs. 673 a 675 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada rolante de fs. 466 a 468 (correspondiente a la declaración presente), aclarando aquella parte en la que señala que casi todas las noches le correspondió cargar camiones con cuerpos de personas fallecidas. En realidad esta actividad la realizó en dos oportunidades, aunque sabe que hubo más muertos por los comentarios que se hacían al interior de la Compañía por parte de los otros Conscriptos. La mayoría de estos cuerpos provenían de la isla Cautín. Recuerda haber recibido órdenes en dos oportunidades de subirse a un camión junto con otros Conscriptos, para dirigirse a la isla Cautín. En casi todos los casos los cuerpos fueron llevados al puente Allipén, donde fueron arrojados al río, refiriéndose al personal que los acompañaban aquellas veces. Recuerda que existía un grupo de Conscriptos que a veces salía vestido de civil a efectuar pesquisas. A su pregunta, recuerda que las personas muertas que le correspondió subir a los camiones eran todos varones, quienes presentaban varios impactos de bala, las manos amarradas con cañaman o alambre y estaban con su vista vendada. Estos cuerpos estaban todos en el sector del polígono de tiro. Antes y después de efectuar las misiones les advertían de guardar silencio respecto de lo que habían visto. Por consiguiente se refiere a los hechos relacionados con el asalto al polvorín y luego a los Oficiales encargados de interrogar a los detenidos.

En diligencia de careo entre Manuel Jesús Contreras Salazar y Mario Herman Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 765 (Tomo II), ratifica sus declaraciones extrajudicial y judicial prestadas en autos y que rolan de fs. 758 a 759 y a 778 (otorgada en causa diversa), con excepción de

aquella parte en la que señaló que le correspondió ir a la isla Cautín en dos oportunidades a cargar un camión con ejecutados políticos. La verdad es que sólo fue en una oportunidad y no recuerda quién era el Oficial al mando y tampoco recuerda que el Sargento **Mario Arias Díaz** allí presente, tuviera participación en esas actividades. Ratifica eso sí, aquella parte en que señaló que el Sargento **Arias** participaba en los interrogatorios de detenidos políticos. El Sargento **Arias** pertenecía al grupo de Inteligencia y se relacionaba con el Suboficial **Moreno Vásquez** y con efectivos de Investigaciones. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Manuel Jesús Contreras Salazar y Norberto Francisco Uribe Moroni, de fecha 05 de abril de 2011, rolante a fs. 931 (Tomo III), ratifica su declaración. Acota que efectivamente en una de las misiones que hace referencia iba a cargo el Teniente **Uribe**. A la época en que ocurrieron los hechos estaba asignado a la Compañía de Plana Mayor y Servicios, la que estaba a cargo del Teniente **Rubio Balladares** que reemplazaba al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Se mantiene en sus dichos.

En declaración diligencia de careo entre Manuel Jesús Contreras Salazar y Pablo Domingo Gran López, de fecha 05 de abril de 2011, rolante a fs. 932 (Tomo III), ratifica su declaración. Aduce que efectivamente el Teniente a la época de los acontecimientos era de apellido **Gran**, quien participó en los hechos que se le leen. No recuerda la fecha exacta de ocurrencia de los hechos a que se ha referido. Advierte que desde abril de 1973 hasta principio del año 1976 realizó su Servicio Militar Obligatorio. El interrogatorio a que hace referencia se llevaba a cabo en dependencias de los comedores de los Soldados, que estaba ubicado al centro del Regimiento.

A.27 LIBARDO HERNÁN SCHWARTENSKI RUBIO (19 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 432 a 433 (Tomo II); 519 (Tomo II); 536 a 537 (Tomo II); 744 a 747 (Tomo III); 757 a 758 (Tomo III); 761 (Tomo III); 763 (Tomo III); 1.077 a 1.078 (Tomo IV); 1.106 a 1.107 (Tomo IV); 1.108 a 1.109 (Tomo IV); y a fs. 1.153 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2012, rolante a fs. 432 a 433 (Tomo II), copia de la cual se encuentra de fs. 1.034 a 1.035 (Tomo III), afirma que durante el mes de enero del año 1973 ingresó a cumplir con su Servicio Militar Obligatorio al Regimiento de Infantería N°08 "Tucapel" de Temuco, siendo encuadrado en la Compañía de Plana Mayor y Servicios, la que se encontraba al mando del entonces Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, quien en la actualidad se encuentra fallecido, recordándolo como el encargado del Servicio de Inteligencia Militar (S.I.M.) y también como el Oficial a

cargo de los detenidos que llegaban a la Unidad Militar. Sobre la existencia de un grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, agrega que conforme a su recuerdo, éste lo integraban el Capitán **Ubilla**, el Teniente **Jaime García Covarrubias (apodado El Yango)**, el Subteniente **Romilio Lavín**, los Sargentos **Orlando Moreno Vázquez** y **Raúl Schonherr Frías**, además del Sargento **Mario Arias Díaz**, los cuales realizaban su labor en una sala de interrogatorios habilitada en la cuadra de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, donde era recurrente observar los detenidos que ingresaban a esa sala, los cuales se sabía que eran torturados. De la misma forma, existía un grupo de Detectives que estaba integrado por **Carlos Luco Astroza** y **Hernán Quiroz Barra**; quienes efectuaban interrogatorios, los que en más de una vez presenciaron en oportunidades en que debía entregarles documentación, como eran torturados los detenidos. Además otro interrogador era el fallecido Teniente **Manuel Espinoza Ponce**. Respecto a su consulta referente a las condiciones en que observó a las personas cuando se estaban siendo torturadas, alega que éstas se encontraban desnudas, con la vista vendada y sobre un somier metálico, junto a sus torturadores que eran los Detectives **Quiroz** y **Morales**, quienes eran acompañados en muchas oportunidades por el Sargento **Mario Arias Díaz**. Anexa que mientras permaneció en el Regimiento Tucapel no tuvo conocimiento de detenidos asesinados por Ley de Fuga, desconociendo lo sucedido con las víctimas de los hechos investigados entre ellas **Daniel Mateluna Gómez** y **José María Ortigosa Ansoleaga**, a quienes tampoco reconoce como detenidos del Regimiento según fotografías que se le exhiben. Posteriormente se refiere a los hechos sobre el asalto del polvorín de la Isla Cautín. Anima que cumplió servicios en comisión extra- institucional, tanto en la D.I.N.A. como en la .CN.I., finalizando sus servicios en el Ejército de Chile el año 1993. Respecto a su consulta, añade que hubo otros Conscriptos que tenían las mismas labores que él, recordando a los de apellidos **Valeria**, **Chávez**, **Ríos** y a uno que apodaban el **Loco Carrillo** y al Conscripto **Samuel Arroyo**, quien era el conductor personal de **Ubilla**. Apunta que durante su estadía en el Regimiento, trabajó junto al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, efectuando labores de ordenanza que también incluía la redacción de las órdenes del día la Compañía, según su recuerdo fue elegido porque tenía estudios de profesor de enseñanza básica.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2013, rolante a fs. 519 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 432 a 433.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 12 de julio de 2013, rolante de fs. 536 a

537 (Tomo II), ratifica sus dichos de fs. 519. Reconoce a la persona con quien se le carea como el Detective **Hernán Raúl Quiroz Barra**, a quien vio en la sala donde se torturaba e interrogaba detenidos. Sin embargo, no recuerda que él particularmente haya estado torturando a estas personas, pero sí estaba en el grupo. Apoya que solo trabajaba para el Capitán **Nelson Ubilla** y no para la Fiscalía Militar. Nunca llevó documentación hacia la Comandancia ni a la Fiscalía, sino que sólo entregó ésta a los Detectives cuando estaban en la sala ubicada en la Compañía de Plana Mayor. Aproxima que es cierto lo que el señor **Quiroz** señala en el sentido que el declarante se presentó en su negocio junto con su esposa y que posteriormente le prestó cheques como garantía para comprar un vehículo, pero se los devolvió. También es cierto que le pidió dinero a su hijo y que aún no se lo devuelve, pero lo hará esta semana. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con lo que le tocó ver en el Regimiento Tucapel, por lo que se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 05 de enero de 2010, rolante a fs. 744 a 747 (Tomo III), aquilata que ingresó al Regimiento Tucapel de Temuco para cumplir con su Servicio Militar el 15 de enero de 1973, siendo encuadrado en la Primera Compañía de Cazadores, que estaba al mando del Capitán **Rodolfo Vargas Campos**, siendo el jefe de su sección el Subteniente **Pablo Gran López**. A los tres meses, después de la revista de reclutas, fue seleccionado por el Teniente **Rubio Balladares** para formar parte de una sección denominada "montada" que se encuadró en la Compañía de Plana Mayor. Esta sección estaba encargada de dar mantención a los caballos que había en el Regimiento, refiriéndose a los integrantes de dicha sección. Después del 11 de septiembre de 1973, aparte de las funciones antes indicadas, le correspondió efectuar turnos de guardia que generalmente eran cumplidos en la puerta de acceso al Regimiento y en el sector de la línea férrea, detrás de la unidad. Jamás le correspondió efectuar patrullajes, ni detener personas o allanar domicilios mientras estuvo en el Regimiento Tucapel. Respecto de su consulta, arguye que vio detenidos al interior del Regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973, quienes eran mantenidos en algunas cuadras de las Compañías de Cazadores y Plana Mayor. Quien estaba a cargo de los detenidos era el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, siendo sus colaboradores directos el Teniente **Espinoza**, los Sargentos **Moreno, Schonherr y Arias**. Además, había un grupo de Detectives, entre los que recuerda a **Carlos Luco Astroza y Hernán Quiroz Barra**. Asegura que nunca le correspondió participar en interrogatorios o tortura de los detenidos, ni tampoco trasladar detenidos al interior del Regimiento. Rememora que alguno de los Conscriptos que estaban en la enfermería era requerido por los Oficiales y

Suboficiales antes mencionados para que los ayudaran con los detenidos. Recuerdo el nombre de **Pío Seco** como uno de ellos. Al parecer tendría un restaurante a la salida de Temuco de nombre "Pura Carne". Respecto de los hechos materia de esta investigación, asevera que se enteró de lo ocurrido por la información que apareció en el diario. Ese día se encontraba en casa de sus padres en la ciudad de Gorbea. Hace presente que a fines del mes de octubre o principios de noviembre de 1973 fue destinado al Regimiento Tejas Verdes, refiriéndose a sus acompañantes. Por lo tanto, no recuerda si para la fecha de ocurrencia de estos hechos aún se encontraba asignado al Tucapel y estaba de franco; o estaba ya asignado al Tejas Verdes y, por lo tanto, disfrutaba de sus vacaciones o de algún permiso. Durante su estadía en Tejas Verdes recibió instrucción de Inteligencia. Luego de esto, pasó a formar parte de la DINA recibiendo nueva instrucción de inteligencia en una Escuela ubicada en Pajaritos. En 1977 la DINA pasó a llamarse CNI. Atestigua que su nombre operativo era "**Leonardo Smith Rivera**", refiriéndose a su estadía en la CNI. Posteriormente el Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 701, respecto de lo cual el deponente atina que no es efectivo que tuviera algo que ver con los detenidos, como tampoco sabe que **Valeria** participara de estas actividades. Tampoco recuerda que haya existido una "patrulla brava" integrada por Conscriptos, destinada a detener personas y allanar domicilios. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 761 y fs. 779, respondiendo que niega rotundamente haber participado de la "patrulla brava", desconociendo por qué se le sindicaba en estas actividades. Quienes tenían algo que ver con los detenidos eran los de la Policía de Investigaciones. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 774, contestando que no es efectivo que él junto a otros Soldados hubiesen sido seleccionados para que salieran a las calles antes del Golpe Militar. Sólo en una oportunidad fue destinado junto a otro Soldado Conscripto, cuyo nombre no recuerda, para resguardar al personal de ferrocarriles que hacían mantención a la línea férrea, ya que en ese tiempo había peligro de que hubiese explosivos puestos en esos lugares. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 905, respecto de lo cual el deponente señala que jamás participó en actividades con detenidos, pero sí era bien visto por los Oficiales, pues tenía muy buena preparación. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 907, respecto de lo cual blasona que no recuerda haber estado en ninguna comisión especial ni recuerda a **Luis Alberto Rebolledo Mella**. Agrega que el Capitán **Ubilla** le tenía buena y por eso a veces lo llamaba para hacer aseo en su oficina. También le ayudaba al Sargento Primero **Quilodrán** a escribir a máquina las órdenes de la Compañía.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de enero de 2010, rolante a fs. 757 a 758 (Tomo III), barbulla que para el año 1973, mes de enero específicamente, ingresó a cumplir con su Servicio Militar Obligatorio, siendo encuadrado en la Primera Compañía de Cazadores; cuyo Comandante era el Capitán **Rodolfo Vargas Campos**. Posterior a la restructuración del Regimiento fue encuadrado en la Compañía de Plana Mayor y Servicios, la que se encontraba al mando del entonces Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, quien en la actualidad se encuentra fallecido. A éste último lo recuerda como el encargado del Servicio de Inteligencia Militar (S.I.M.). En lo relativo a las personas que ingresaban en calidad de detenidas al Cuartel, éste Oficial era quien estaba a cargo. En lo personal recuerda haber visto personas en esta calidad en la Unidad Militar, sin que recuerde a ninguna persona en especial. Sobre la existencia de un grupo encargado de la entrevista de los prisioneros políticos, basa que conforme su recuerdo, éste lo integraban el Capitán **Ubilla**, los Sargentos **Orlando Moreno Vázquez** y **Raúl Schonherr Frías** además del Sargento **Mario Arias Díaz**, además, también pertenecían a este grupo los Detectives **Carlos Luco Astroza** y **Hernán Quiroz Barra**; sin dejar de mencionar al fallecido Teniente **Hugo Espinoza Ponce**. Mientras permaneció en el Regimiento Tucapel, le correspondió hacer guardias, por tanto no es efectivo que estuviese exento de tales servicios. Ahora bien, antes de ingresar a cumplir con su Servicio Militar, tenía estudios como Profesor Normalista, situación que le permitió distinguirse entre sus pares y llegar a trabajar en labores administrativas en la oficina del Capitán **Nelson Ubilla** y el Sargento 1° **Quilodran**, no siendo extraño que en alguna oportunidad los Soldados Conscriptos del Cuartel lo vieran junto a este Oficial en alguno de los patios. Respecto de la fecha en que fue enviado junto a otros Conscriptos a efectuar el Curso de Inteligencia de la D.I.N.A. a las Rocas de Santo Domingo, no puede precisar la fecha exacta, pero si sabe que fue en el mes de noviembre de 1973. Lo que tiene claro es que la noche de ocurridos los hechos (referentes al Asalto al polvorín) no se encontraba al interior del Regimiento, ni de guardia, ni durmiendo. De lo ocurrido aquella noche se enteró por la prensa mientras estaba en su casa junto a sus padres en la localidad de Gorbea. Colige que posterior al curso antes citado, pasó a cumplir servicios en Comisión Extra- Institucional, tanto en la D.I.N.A. como en la .CN.I., finalizando sus servicios en el Ejército de Chile el año 1993. En relación a que algunos Conscriptos de la enfermería del Cuartel, eran requeridos en oportunidades por el grupo que trabajaba con los prisioneros o detenidos, esto lo señaló porque en alguna oportunidad vio alguno de estos hombres solicitar la colaboración de la enfermería para asistir a los detenidos, quienes eran interrogados en distintos lugares del Regimiento, sin que pueda

precisar un lugar específico. En relación a la pregunta sobre si participó en interrogatorios a personas detenidas al interior del Regimiento "Tucapel", comunica que nunca participó en estos cometidos, como tampoco trasladó detenidos fuera del Regimiento ni al sector de la Isla Cautín. Sobre la pregunta respecto del fallecido Teniente **Hugo Espinoza Ponce**, comenta que éste Oficial era de la 2a Compañía de Cazadores, por lo tanto, si él efectuó algún procedimiento con detenidos fuera o dentro del Regimiento lo más probable es que lo hubiese efectuado con gente de su Compañía y no con Soldados de otra como los de Plana Mayor y Servicios por ejemplo.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 761 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.029 a 1.030 (en causa diversa). Conjetura que el Sargento **Arias Díaz** pertenecía a Plana Mayor y Servicios y al parecer se integró a la Sección Segunda después del Golpe Militar, pues lo veía junto a **Schönherr, Moreno Vásquez** y el Capitán **Ubilla** participando en el grupo que se ocupaba de los detenidos para su interrogatorio.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2013, rolante de fs. 763 (Tomo III), ratifica íntegramente sus declaraciones extrajudicial y judicial prestadas en autos y que rolan de fs. 1.029 a 1.030, a fs. 932 y 1.071 (en causa diversa), respectivamente. La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el Sargento **Mario Hernán Arias Díaz**, a quien ha hecho referencia. Cimentando que efectivamente fue llamado en varias oportunidades para efectuar trabajos administrativos en la Compañía de Plana Mayor, como escribir a máquina, pero jamás participó en los interrogatorios de detenidos. En lo demás, se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2013, rolante de fs. 1.077 a 1.078 (Tomo IV), ratificó su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 3.328 a 3.329 (en causa diversa). Recuerda perfectamente al Teniente **Jaime García Covarrubias** y a su hermano **Raimundo**. Éstos Oficiales siempre andaban juntos. En una oportunidad pudo verlos al interior de la sala donde se torturaban personas en la Compañía de Plana Mayor y Servicios. En esos momentos había una persona desnuda y con su vista vendada tendida sobre un somier. También estaban presentes los Detectives **Quiroz y Morales**. Respecto al Subteniente **Lavín**, cuenta que él era uno de sus jefes en la Compañía de Plana Mayor y Servicios y pudo verlo entrar en más de una ocasión a la sala donde se interrogaba y torturaba personas. No podría asegurar que él participó en torturas pero por lo menos sabía que lo que allí

pasaba y debió haber presenciado alguna sesión de estas. Respecto del punto N°1 del **Bando N° 9** de fecha 5 de octubre de 1973 que le ha sido leído, y del recorte de prensa del Diario Austral del día 4 de octubre de 1973, decanta que los hechos allí narrados no le resultan verosímiles, por cuanto resulta difícil de creer que un detenido haya intentado fugarse del Regimiento. Cree que las personas mencionadas en el **Bando, Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez** más los mencionados en el diario, **Mateluna y Ortigosa** fueron ejecutados por el grupo de Inteligencia o se murieron durante los interrogatorios y torturas. Delibera que los hechos ocurridos en el Regimiento con relación a los detenidos lo sabían todos los Oficiales, por lo menos el Comandante **Iturriaga**, el segundo Comandante **Jofré** y el ayudante **Jaime García Covarrubias**, además de todos los Oficiales involucrados en los interrogatorios y torturas. Respecto de **Alfonso Podlech Michaud**, tiempo después se enteró que él era el Fiscal en el Regimiento Tucapel, pero no lo vio mientras estuvo en ese lugar. Hace presente, que a principios de octubre se fue Santiago a efectuar el Curso de Inteligencia en las Rocas de Santo Domingo, junto con **Luis Peña Gatica, Antitur y Cantero**, entre otros. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de **José Raúl Inzunza Reyes**, de fs. 3.310 (prestada en causa diversa), respecto de lo cual el deponente dice recordar a **José Inzunza**, quien al igual que él ayudaban al Capitán **Ubilla**, pero no es efectivo que el declarante hubiese participado en interrogatorios ni menos en torturas. A su pregunta, difunde que a **Jaime García Covarrubias** le decían "**El Yango**", porque siempre andaban con armas al cinto y era muy loco, como el personaje de las películas de Farwest y además le gustaban los caballos. El Tribunal le exhibe la fotografía rolante a fs. 57 de la **causa rol 114.003** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, respondiendo el deponente que de pie y de izquierda a derecha reconoce al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, al Comandante **Pablo Iturriaga Marchesse** y al último de la derecha como **Jaime García Covarrubias**. Sentado, al centro, reconoce al General **Pinochet**.

En diligencia de careo entre José Raúl Inzunza Reyes y Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.106 a 1.107 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 3.445 a 3.446 (otorgada en causa diversa). Reconoce a la persona con quien se le carea como José Raúl Inzunza Reyes, quien al igual que el declarante era Conscripto en el Regimiento Tucapel. Después que se fuera a Santiago, tiene entendido que él comenzó a trabajar con el Capitán **Ubilla**, por lo que no lo vio en la oficina de este Oficial. A su pregunta, divulga que efectivamente pudo haber presenciado algunos interrogatorios cuando ingresaba a la sala donde estos se llevaban a cabo para que dejara documentación, pero jamás interrogó a nadie, ni menos participó en las torturas.

Rememora haber visto entrar a la sala de interrogatorios al Cabo **Salgado Goyeneche**, que era de la Compañía Andina y también estaba a cargo del material de guerra, trabajando junto al Teniente **Lavín**. También vio entrar frecuentemente a **Jaime García Covarrubias** y a **Raimundo García**. Sin embargo, **era común que todos los Oficiales fueran a mirar de vez en cuando, porque era la novedad**. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.108 a 1.109 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.445 a 3.446 (otorgada en causa diversa). Reconoce a la persona con quien se le carea como el Detective **Hernán Raúl Quiroz Barra**, a quien vio en la sala donde se torturaba e interrogaba detenidos. Sin embargo, no recuerda que él particularmente haya estado torturando a esta persona, pero sí estaba en el grupo. A su pregunta, desarrolla que sólo trabajaba para el Capitán **Nelson Ubilla** y no para la Fiscalía Militar. Nunca llevó documentación hacia la Comandancia ni a la Fiscalía, sino que sólo entregó ésta a los detectives cuando estaban en la sala ubicada en la Compañía de Plana Mayor. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Jaime García Covarrubias, de fecha 04 de octubre de 2013, rolante a fs. 1.153 (Tomo IV), ratifica íntegramente sus declaraciones extrajudicial y judicial prestadas en autos y que rolan de fs. 3.328, 3.355 y fs. 3.446 respectivamente (en causa diversa). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el Teniente **Jaime García Covarrubias**, de quien ha hecho referencia. Por otra parte, descarga que se refiere a hechos que ocurrieron entre el 11 de septiembre y mediados de octubre de 1973, fecha en que se fue a Santiago. Destaca que su nombre lo dio posteriormente, porque le preguntaron si conocía a otros Oficiales a los que hubiese visto en la sala donde se interrogaba y torturaba detenidos. En lo demás, se mantiene en sus dichos.

A.28 ALFONSO RENÉ CONTRERAS FARFÁN (34 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 510 a 511 (Tomo II); 1.449 a 1.451 (Tomo V); y a fs. 1.508 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 04 de abril de 2013, rolante a fs. 510 a 511 (Tomo II), distingue que ingresó a la Armada de Chile en el año 1968. Glosa meses antes del día 11 de septiembre de 1973 su madre contrajo una enfermedad, por la cual tuvo que ser operada en nueve oportunidades y permanecía postrada en la casa, fue así que comenzó a ser tratada por **Daniel Mateluna Gómez**, quien era practicante y ostentaba el grado de Suboficial de

Carabineros. Por lo anterior y ya llegado el Golpe de Estado comenzaron a salir los "**Bandos**" en los cuales se mencionaba a **Daniel Mateluna**. Fue así que el día 11 de septiembre, se dirigió a la casa de sus padres, comenzando a hacer ruido, indicándole su madre que guarde silencio, ya que **Daniel** se encontraba escondido en el entretecho de la casa, por tal motivo se acercó al entretecho y conversó con él, solicitándole éste que por favor lo pasara a Argentina, a lo cual señaló que era imposible, ya que su casa era allanada constantemente por funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros, pero que haría todo lo posible por llevarlo directamente al Regimiento "Tucapel", lo cual ocurrió a la semana del Golpe. Ya en el Regimiento se presentó a **Daniel** a un Coronel de Ejército, del cual no recuerda nombre, pero sabe que era el Jefe de Regimiento por esos entonces, quien conversó a puerta cerrada con **Mateluna** por aproximadamente unos veinte minutos, para luego entregarle en custodia a su amigo, trasladándose nuevamente a su domicilio. Pasado unos días su amigo **Mateluna** nuevamente fue llamado por los **Bandos** radiales y televisivos, por lo cual se trasladaron por segunda vez al Regimiento, quedando detenido en la misma oficina del Coronel. Pasado los días se enteró que **Mateluna**, se encontraba detenido en la Cárcel de Temuco y tenía contacto directo con su cuñado **Neftalí Gutiérrez**, actualmente fallecido, quien le entregaba toda información, la que el declarante daba a la familia de su amigo, los cuales en esos días residían en su casa. Pasado unas dos semanas de la detención de **Daniel Mateluna**, en los momentos que se dirigía a la casa de sus padres en horas de la mañana, observó que un grupo de personas miraba un cuerpo, al cual se acercó y con sorpresa **comprobó que era el de Daniel, el cual estaba de espalda y con siete impactos de bala en la espalda, quien además vestía una chaqueta azul, pantalón negro y zapatos, su cuerpo yacía en la intersección de calle Mackenna y Aldunate al costado de la línea férrea, a unas dos cuadras del Regimiento Tucapel**, fue el impacto que no lo dejaba hacer nada, por lo que se trasladó a casa de sus padres y contó lo sucedido, al mismo tiempo que se comunicó con la esposa de **Mateluna**, a quien le informó de lo sucedido. Transcurrido una hora fueron hasta el lugar y el cuerpo ya no se encontraba, por lo cual consultaron en el Regimiento y en la guardia, donde les dicen que todos los cuerpos estaban en la morgue. Por lo anterior se trasladaron junto a la cónyuge de Daniel, **Isabel Lillo** hasta la morgue, en donde ingresó y consultó por su amigo, señalándole la persona encargada que efectivamente el cuerpo de **Mateluna** se encontraba en el lugar, indicándole que para ser entregado deberían traer elementos para sellar el cajón, ya que de otra forma no lo entregarían. Fue así que se trasladó hasta la casa de su amigo **Cesar Larcon**, el cual trabajaba en una funeraria y tenía los elementos para sellar el cajón, de

esta forma se trasladaron hasta la morgue y procedieron a sellar el cajón sin antes observar que su amigo tenía seis disparos por la espalda y uno en la parte frontal, sin salida de proyectil. Así mismo el día que sacaron a **Daniel Mateluna** de la morgue, se trasladaron hasta al Cementerio de Padre de Las Casas, en donde enterraron a su amigo, siendo este el primer cadáver que llegaba al Cementerio. Posteriormente la esposa de Daniel junto a sus hijos se trasladó a Santiago y luego a Canadá. A su pregunta ensaya que no recuerda a funcionarios del Regimiento "Tucapel", lo que si recuerda es que por indagaciones que realizó años posteriores, la persona que habría matado a **Mateluna**, sería un Sargento de Ejército, el cual residía en la Población Santa Rosa y vendía papas en un camión en la feria, del cual no recuerda su nombre, sólo que era una persona morena, de contextura gruesa y usaba bigote. Finalmente esgrime que por comentarios de su cuñado **Neftalí**, que habría sido imposible que **Daniel** se hubiese fugado, ya que no podía ni caminar, debido a que por las torturas él lo alimentaba en la boca, sin poder mover las extremidades, también manifestó que tampoco mascaba ya que le habían sacado los dientes.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de mayo de 2016, rolante a fs. 1.449 a 1.451 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.495 a 1.497 (Tomo V), espeta que para el año 1973, era Cabo 1° de la Armada de Chile. Escruta que sólo conoce a **Daniel Mateluna Gómez**, ya que tenían una amistad tremenda, debido a que este hombre en su calidad de practicante le había salvado la vida a su madre. Estimula que para el año 1973, **Daniel Mateluna** tenía una edad aproximada de 50 años y era practicante de Carabineros de Temuco, incluso en su tiempo libre ejercía de manera particular sus actividades. Conforme a su recuerdo, días posteriores al 11 de septiembre de 1973, el nombre de **Daniel Mateluna** comenzó a aparecer en los **Bandos Militares**, ya que él tenía ideas de izquierda, pero no le consta que haya pertenecido a algún partido político. Respecto a lo que se le consulta, estima que efectivamente **Daniel Mateluna** estuvo oculto en el domicilio de sus padres, donde actualmente reside, recordando la oportunidad en que se enteró de esta situación, ya que ese día iba a dejar unos encargos a casa de su madre, cuando le comenta que don **Daniel** estaba oculto en el entretecho de su casa, acto seguido ingresó al domicilio y pudo tomar contacto con **Daniel** a quien le hizo ver que esta situación podría traerles problemas como familia, ya que él era muy requerido por la autoridad Militar y temía que se les pudiera involucrar como cómplices en el sentido de ocultarlo. Incluso él le pidió que lo ayudara a salir del país en dirección a Argentina, pero eso estaba fuera de su alcance. En base a la conversación que sostuvo con don **Daniel** decidió sugerirle que fueran a presentarse al Regimiento Tucapel, a objeto

de evitar consecuencias mayores hacía él, su familia y la del declarante; por esta razón, ese mismo día cerca de las una de la tarde, ambos concurren al Regimiento Tucapel, lugar donde pidió conversar con el Mayor de esa Unidad Militar a quien ubicaba, ya que por pertenecer a la Armada, en sus días libres debía presentarse en el Regimiento. Una vez que los atendió el Mayor, cuyo nombre no recuerda, después de entablar un breve diálogo con él, le pide que salga de la Oficina y que ingrese **Mateluna**, reunión que duró cerca de quince minutos, posteriormente el Mayor sale de su oficina y le dice que **Daniel** queda bajo su tutela y debía responder por él en caso de cualquier cosa, posteriormente, regresan al domicilio de sus padres, ubicado en calle Magallanes N°1232, donde lo mantuvieron por cerca de una semana, hasta cuando nuevamente salió llamado por un **Bando Militar**, ocasión en que lo acompañó, pero esta vez no le permitieron ingresar al Regimiento, donde un funcionario Militar le señaló que se tenía que ir, ya que **Mateluna**, quedaría detenido. Nunca supo la identidad del Militar que lo atendió, pero sabe que ese funcionario era el que estaba de guardia ese día y sin obtener otra explicación regresó al domicilio de sus padres a informar la situación e informarle a la familia de Daniel. Posteriormente, por comentarios de conocidos que mantenía en la cárcel se enteró que **Daniel Mateluna** se encontraba ahí, donde permaneció por unos días, perdiendo posteriormente el rastro y el estado de salud de **Mateluna**. Conforme a su recuerdo, cerca de las nueve a diez de la mañana y mientras iba a visitar a sus padres por calle O'Higgins antes de llegar a la línea férrea, se dio cuenta que había un grupo de gente que se encontraba viendo a un cuerpo tirado en el suelo, el cual estaba sin vida, reconociendo que era su amigo **Mateluna**, pudiendo apreciar que éste mantenía un impacto de bala en el cráneo, específicamente en la frente y diversos impactos de bala en la espalda, posteriormente fue al domicilio de sus padres a avisar la situación, para luego ir al Regimiento y pedir autorización para retirar el cuerpo de la morgue y posteriormente velarlo y darle sepultura en el cementerio de Padre Las Casas. Rememora que conversó con el funcionario de guardia, quien fue a solicitar la autorización correspondiente al interior del Regimiento para poder retirar el cuerpo. Evidencia que durante un tiempo trató de averiguar quiénes fueron los funcionarios Militares que le habían dado muerte a **Daniel**, pero nunca obtuvo resultados positivos, sólo en una oportunidad se enteró por el comentario de un ex Militar que se desempeñaba en la Enfermería del Regimiento, cuyo apellido era **Fonseca**, que el probable autor participante en la muerte de **Daniel**, era un Sargento de Ejército cuyo nombre no recuerda, pero sabe que pasado el tiempo éste señor se había suicidado, eso fue lo único que supo al respecto. Agrega que durante el tiempo que don **Daniel** estuvo oculto en el

domicilio de sus padres, frecuentemente fueron allanados por personal de Carabineros de la 2° Comisaría. Además en una oportunidad se quedó en el domicilio de don **Daniel Mateluna**, mientras él se encontraba oculto en la casa de sus padres, siendo habitual que funcionarios de Carabineros allanaran su inmueble y maltrataran a su familia.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto de 2016, rolante a fs. 1.508 (Tomo V), ratificó sus declaraciones extrajudiciales prestadas en autos de 510 a. 511 y de fs. 1.495 a 1.497. Hace presente que no recuerda exactamente el grado del Oficial que lo atendió junto a **Mateluna** en el Regimiento, pero era el mandamás de esa unidad. A su pregunta, expresa que el Sargento de Ejército a que hizo referencia y que sería el presunto autor del homicidio de **Mateluna**, en ese tiempo vivía en el sector de Santa Rosa y los fines de semana vendía papas en la feria. Lamentablemente no recuerda su nombre.

A.29 JAIME GARCÍA COVARRUBIAS (25 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 550 a 555 (Tomo II); 750 a 752 (Tomo III); 895 a 897 (Tomo III); 898 a 899 (Tomo III); 900 (Tomo III); 901 (Tomo III); 902 (Tomo III); 903 a 904 (Tomo III); 1.141 a 1.145 (Tomo IV); 1.151 a 1.152 (Tomo IV); 1.153 (Tomo IV); y a fs. 1.154 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 21 de abril de 2003, rolante a fs. 550 a 555 (Tomo II), explicita que encontrándose en sus funciones habituales en el interior del Regimiento Tucapel en Temuco, recuerda que en horas de la tarde, no puede precisar fecha, pero sí que fue a los días posteriores de haberse producido el Pronunciamiento Militar, vio en el patio del Cuartel un helicóptero, en que se le señala que en él había llegado el General **Arellano Stark** junto a otros Oficiales, ya que andaba pasando revista a los Regimientos. Tuvo la oportunidad de ver a alguna de las personas que lo acompañaban y recuerda que la tenida que seguramente usaban era la de combate de color verde, puesto que en esa fecha era el vestuario reglamentario en el Ejército. Aclara que no estuvo presente a la llegada del General **Arellano**, pero presume que lo debe haber recibido el Comandante del Regimiento, **Pablo Iturriaga Marchesse**, fallecido. No puede asegurar el tiempo exacto que el General **Arellano** permaneció en el Regimiento, dado que era muy frecuente que aterrizaran helicópteros con autoridades Militares dejando a estas en forma transitoria, mientras el piloto con su tripulación cargaban combustible en la Base Aérea de Maquehue. Presume que el helicóptero debe haber permanecido aterrizado por espacio de unas horas. En lo pertinente es preguntado por el Tribunal, respecto si desarrollaba labores de inteligencia en esos momentos, respondiendo el declarante que no. En esa fecha tenía otras

funciones y consistían en ayudante de la Comandancia del Regimiento, Jefe de Relaciones Públicas y Teniente de la Compañía de Plana Mayor. No puede precisar las fechas en que realizó las funciones señaladas. Sí puede afirmar que nunca realizó labores operativas. Solo tenía que cumplir con sus turnos rotativos, los que se debían cumplir por razones extraordinarias para resolver situaciones que pudieran producirse y que se necesitara la presencia de un Oficial. Solo recuerda entre otras, que en una oportunidad tuvo que concurrir al Hospital a tomar conocimiento acerca de un herido a bala por las patrullas durante el toque de queda. No recuerda con claridad fechas y circunstancias. No tuvo participación en ningún hecho que tuviera relación con Derechos Humanos. Preguntado por el Tribunal, acerca de si tuvo conocimiento que en el Regimiento Tucapel de Temuco se hubiesen encontrado personas privadas libertad, por pertenecer a partidos políticos opuestos, cargos sindicales o gremios que en esa fecha hubiesen causado problemas por la situación que se vivía en el país, respecto de lo cual exclama que no recuerda que en el Regimiento se hubiesen mantenido personas detenidas por problemas políticos. Tampoco puede recordar que hubiesen habido instalaciones habilitadas para ello. Si puede decir que luego del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 se difundieron listas de personas que debían presentarse a la Fiscalía Militar y pudo ver largas filas de personas que se presentaron ante ella, la que se encontraba situada a la entrada del Regimiento. Era una oficina pequeña habilitada para ello. No habían personas detenidas en el Regimiento. Preguntado por el Tribunal, respecto a si participó junto al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, Teniente **Manuel Vásquez Chaguan**, Teniente **Raimundo García Covarrubias**, un Oficial de apellido **Espinoza**, el Conscripto **Juan Carrillo** y por el Sargento de apellido **Moreno**, torturando a personas que se encontraban detenidas, responde que no. Jamás ha participado en torturas ni tampoco con los Oficiales que se mencionan. Además el Teniente mencionado de nombre **Raimundo García Covarrubias** es su hermano y en esa fecha era Subteniente, mientras que el grado del declarante era de Teniente. A continuación se refiere a los hechos relacionados con el intento de asalto al denominado "Polvorín" situado en la Isla Cautín. Preguntado por el Tribunal para que diga si intervino en la detención, eventual tortura, fusilamiento o desaparición de diversas personas, entre ellas **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, expone que no participó en esos hechos y tampoco conocía a las personas. De nombre puede decir que conocía a la familia de **Emilio Eltit** e identifica a **Gastón Lobos**, ya que fue Intendente en Temuco en el año 1972. Preguntado por el Tribunal para que diga si ha tenido conocimiento de quien participó en las detenciones, torturas, fusilamientos y desaparición de las personas

señaladas en la pregunta anterior, responde que no tiene conocimiento en cuanto a la identidad de participantes en detenciones, torturas, fusilamientos y desaparición. Si fue testigo de las detenciones que se producían en el Regimiento. Las personas que en forma voluntaria se presentaban ya que habían sido llamadas por un **Bando Militar**, el cual fue difundido por radios y diarios. Esta gente se presentaba al Regimiento y en dependencias de la Fiscalía Militar se resolvía si quedaban detenidos o se les daba la libertad. En el caso de los detenidos eran enviados al parecer a la Cárcel de Temuco y las personas eran trasladadas en vehículos de prisioneros. En cada vehículo al parecer se llevaba a unas seis personas aproximadamente. Lo que recuerda bien es que se trataban de vehículos cerrados, con las características de los vehículos de Gendarmería. No recuerda vehículos Militares para el traslado de los detenidos. Preguntado por el Tribunal para que diga si tiene conocimiento de Consejos de Guerra que se habrían llevado a cabo en la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del Regimiento Tucapel responde que sí, hubieron Consejos de Guerra los primeros meses de haberse producido el Golpe Militar. En su mayoría se realizaron por porte de armas de fuego. No recuerda ningún Consejo efectuado en la Fiscalía Militar de Temuco en el que se haya resuelto condenar a pena de muerte. Expone que le correspondió participar en dos Consejos de Guerra y su desempeño fue de Secretario. En su función no tenía poder para resolver en cuanto a la situación de los detenidos. Preguntado por el Tribunal para que diga si ha tenido noticias simultáneas o posteriores de hechos relacionados con las personas que anteriormente se señalan, en que pudieran haber participado agentes civiles o uniformados y, concretamente qué, respecto de lo cual explicita que no, en algún momento leyó en revistas, respecto de algunos de estos casos, pero no tiene información de las personas involucradas en ello. Es todo cuanto puede aportar a esta investigación respecto a los hechos ocurridos en la ciudad de Temuco, además permaneció en el Regimiento Tucapel de Temuco hasta el mes de agosto de 1974, fecha en que fue trasladado a la Comandancia en Jefe del Ejército en Santiago.

En declaración judicial de fecha 26 de enero de 2010, rolante a fs. 750 a 752 (Tomo III), se refiere a los hechos relacionados con el intento de asalto al denominado "Polvorín" situado en la Isla Cautín. En lo pertinente funda que en algún momento le correspondió desempeñar el cargo de Secretario de la Fiscalía Militar, esto es en septiembre de 1973 y posteriormente en 1974. Este era un puesto rotatorio y dentro de dichas funciones estaba el leer las sanciones a los presos. A su pregunta, justifica que no le correspondió integrar el CIRE. En aquella época estaba conformado por los Oficiales de Inteligencia de cada institución de

las Fuerzas Armadas y de Orden, todo bajo el mando de algún Segundo Comandante. A su pregunta, habla que sí hubo detenidos en el Regimiento Tucapel, específicamente en la guardia, los que estaban en tránsito o permanecían por un período muy breve. En un primer momento se habilitó el patio con mesas para interrogar personas, porque eran muchas, y cuando llovía se les ubicaba en el gimnasio. Posteriormente, el Capitán **Ubilla** habilitó una dependencia ubicada frente a la Comandancia, cercana al patio de mantenimiento, donde además intervenía personal de investigaciones.

En diligencia de careo entre Herman Carrasco Paul y Jaime García Cobarrubias, de fecha 15 de septiembre de 2010, rolante a fs. 895 a 897 (Tomo III), ratifica en lo pertinente su declaración de fs. 77 (otorgada en causa diversa), en el sentido que no participó de interrogatorios ni torturas de detenidos. Respecto de su consulta, indica que no vio detenidos en el gimnasio del Regimiento Tucapel, aunque es posible que los haya habido de manera transitoria, pues en ese lugar trabajaba la Sección Segunda temas de inteligencia. Recuerda que en la Sección Segunda estaba el Capitán **Ubilla** y el Teniente **Maldonado**. Además estaban los Suboficiales **Moreno** y **Schönherr**. Estos últimos se dedicaban a labores administrativas. El Oficial operativo era **Ubilla**, por lo que él con toda seguridad debió haberse entendido con los detenidos. También colaboraban en esa función algunos detectives. Niega haber pertenecido a la Sección Segunda. Invoca que fue ayudante del Regimiento Tucapel entre febrero o marzo de 1973, hasta fines de noviembre o principios de diciembre de ese mismo año. Su función tenía que ver con el aspecto administrativo del Regimiento, más las necesidades particulares del Comandante. En ningún caso es un cargo operativo, pues no estaba en la cadena de mando y no tenía tropa a su cargo. Inquieta que durante el período septiembre - diciembre de 1973 sólo le correspondió salir en patrullajes una vez que dejó la ayudantía. Adosa que la opinión pública fue enterada de los hechos materia de esta investigación a través de un **Bando**, que debido haber sido firmado por el Comandante **Iturriaga**, pues los **Bandos** de esa naturaleza los debía firmar el Comandante de la Guarnición. Cada situación que se producía en las distintas Unidades de la Guarnición de Temuco, como intentos de fuga en que resultaban personas muertas, eran comunicadas mediante **Bandos**. Estos bandos eran firmados por el Comandante del Regimiento. Además, normalmente podía firmar el **Bando** el Ayudante del Regimiento, como constancia de que la información era dada a conocer en una fecha y hora ciertas, pero en ningún caso implica que quien suscribía aparte del Comandante del Regimiento, tuviera conocimiento de los hechos que en el texto de cada **Bando** se detallaba. Posteriormente se refiere al caso puntual del asalto

al polvorín. A su pregunta, musita que sí recuerda haber firmado un par de **Bandos** en que se daba cuenta de la muerte de personas a manos de alguna patrulla Militar. Uno de ellos se refería a un hecho ocurrido en la base "Maquehue" de la Fuerza Aérea. En ninguno de los casos fue testigo de los hechos señalados en los **Bandos**, por lo que no le consta que los sucesos hayan ocurrido o no de la manera como se detallaba en esos comunicados. A su pregunta, narra que la instrucción nocturna continuó ejecutándose de manera normal después del 11 de septiembre de 1973, aunque quizás más intermitentemente, pero no se dejó de instruir a los Soldados. Insiste en que no tuvo Conscriptos a su mando. Esta persona ha colocado su nombre en una revista señalándolo como uno de los presuntos autores del delito. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Luis Humberto Llamunao Huaiquinao y Jaime García Cobarrubias, de fecha 15 de septiembre de 2010, rolante a fs. 898 a 899 (Tomo III), ratifica en lo pertinente sus declaraciones de fs. 37, 75 y 946 otorgadas en causa diversa (Correspondiendo ésta última declaración a la de fs. 750 a 752, Tomo III, de la presente causa). No estuvo como Comandante de la Segunda Compañía de Cazadores durante 1973. Tampoco es efectivo que saliera en patrullajes en compañía del Subteniente **Espinoza** ni menos con Soldados. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Héctor Omar Barra Reyes y Jaime García Cobarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fs. 900 (Tomo III), ratifica sus declaraciones de fs. 37, 58 y 946 otorgadas en causa diversa (Correspondiendo ésta última declaración a la de fs. 750 a 752, Tomo III, de la presente causa). Ostenta que existía una dependencia especialmente habilitada por el Capitán **Ubilla** junto a la Comandancia, donde eran interrogados los detenidos por el personal de inteligencia, pero jamás entró a ese lugar mientras estuvo ocupado por ese grupo, ni participó de interrogatorios y menos aún de torturas de detenidos. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Oscar Inostroza Segura y Jaime García Cobarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fs. 901 (Tomo III), ratifica sus declaraciones de fs. 37, 58 y 946 otorgadas en causa diversa (Correspondiendo ésta última declaración a la de fs. 750 a 752, Tomo III, de la presente causa). Puntualiza que jamás ha participado en actos como los que el señor **Inostroza**, con quien se le carea, ha descrito. Considera que son ofensivos los dichos de esta persona y faltan a la verdad. Piensa que esta persona está prestando un falso testimonio y está siendo orientando desde algún lado. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Jorge Luis Godoy Valdebenito y Jaime García Cobarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fs. 902 (Tomo III), ratifica sus declaraciones de fs. 37, 58 y 946 otorgadas en causa diversa (Correspondiendo ésta última declaración a la de fs. 750 a 752, Tomo III, de la presente causa). Precisa que jamás ha participado en actos como los que el señor **Godoy**, con quien se le carea, ha descrito. Hace presente que no tenía mando, por lo que no tenía unidades a su dependencia, pues era el ayudante del Comandante. Por otra parte jamás pasó por sobre el mando del Capitán **Ubilla**. Piensa que esta persona está prestando un falso testimonio y está siendo orientando desde algún lado. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Juan Bautista Labraña Luvecce y Jaime García Cobarrubias, de fecha 22 de septiembre de 2010, rolante a fs. 903 a 904 (Tomo III), ratifica su declaración judicial prestada a fs. 37 (otorgada en causa diversa). Proclama que jamás perteneció a la Sección Segunda. Le parece que el señor **Labraña**, con quien se le carea, debe estar confundido puesto que la oficina de la Comandancia donde el declarante trabajaba estaba en el mismo pabellón que la oficina de la sección Segunda. Por lo tanto, es falso que integrara o estuviera al mando de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento. Además, no tenía los Cursos de Inteligencia. El señor **Labraña** sólo habla de supuestos y no de hechos, por lo que le pediría que se refiriera sólo a lo que vio y no a lo que él presume. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 24 de septiembre de 2013, rolante a fs. 1.141 a 1.145 (Tomo IV), propone que en algún momento le correspondió desempeñar el cargo de Secretario no letrado de la Fiscalía Militar, esto es después de septiembre de 1973. Este era un puesto rotatorio por lo que no tiene mucho recuerdo de qué cosa era lo que le correspondía firmar o atender. Recuerda haber participado en el primer Consejo de Guerra que hubo en Temuco y otro. Todos estos procesos fueron bien publicitados y de pública audiencia. A su pregunta, prefiere que el CIRE fue creado por el General **Nilo Floody Buxton** en 1974, específicamente en Concepción cuando éste era Jefe de la Tercera División de Ejército con asiento en esa ciudad. Este organismo lo conformaban todas las ramas de las Fuerzas Armadas más Carabineros e Investigaciones. En 1973 esto no existía. Recalca que por norma general llegaba al Regimiento o a la Comandancia antes que el Comandante **Iturriaga**. En ese lapso debía pasar revista a la guardia e izar la bandera. Fue en ese instante en que se enteró, al parecer por boca de dos Oficiales, cuyos nombres no recuerda, sobre lo que había ocurrido la noche anterior en el polvorín del Regimiento. Respecto de su consulta, relata que si bien era el Ayudante del Regimiento, no era el hombre de confianza

ni mucho menos del Coronel **Iturriaga**. Esto se ve reflejado en la nota que este Oficial puso en su hoja de calificaciones, cuya copia acompaña. Recuerda que el Capitán **Ubilla** habilitó una dependencia ubicada frente a la Comandancia, cercana al patio de mantenimiento, donde además intervenía personal de Investigaciones que fue expresamente llamado para apoyar a la Inteligencia en los interrogatorios. Otro grupo de Detectives, según su recuerdo, trabajó con la Fiscalía Militar. Puede ser que el Capitán **Ubilla** haya interrogado personas en ese lugar o quizás se habilitaron dependencias en el gimnasio grande. Soflama que en un primer momento después del 11 de septiembre de 1973 se canalizaba todo través de la Intendencia, pero a poco andar de septiembre de 1973, el Comandante **Iturriaga** dispuso que todos los hechos de carácter operativo fueran informados por la Guarnición Militar. En todo caso, las relaciones entre el Intendente y el Comandante del Regimiento eran buenas. El Tribunal le lee la declaración de **Ernesto García Isla** de fs. 462 y siguiente, respecto de lo cual el deponente sugiere que jamás perteneció a Inteligencia Militar, ni participó en interrogatorios de detenidos. Como dijo, en ese período era Ayudante del Regimiento y no podía efectuar dos funciones al mismo tiempo. Además, para estas tareas fueron llamados los detectives que trabajaron con **Ubilla**. Nunca integró formal ni informalmente grupos de interrogadores. El Tribunal le lee la declaración de **Héctor Omar Barra Reyes** de fs. 670 y 701, respecto de lo cual el deponente suma que no es efectivo lo que esta persona indica en el sentido que haya participado en interrogatorios ni torturas en una sala ubicada en la Compañía de Plana Mayor o en cualquier otro lugar. Desconoce el motivo por el cual se le implica en estos hechos. Jamás tuvo conocimiento de la existencia de un lugar habilitado para estos fines. Ni vio a ninguna persona civil en el Regimiento que haya presentado signos de haber sido apremiado físicamente. Sustenta que en una oportunidad vio que en el patio del Regimiento un Conscripto fue azotado, porque robó un reloj de una persona que había sido detenida por toque de queda. Esta medida en aquel tiempo estaba contemplada en el Reglamento del Ejército. Niega haber ordenado azotar a algún Conscripto. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de **José Arturo Fuentes Carrasco** de fs. 1.657, respecto de lo cual el deponente urde que si bien es cierto que en algunas ocasiones fue Comandante Subrogante de alguna unidad fundamental, esto ocurrió en 1974 y no antes. Por este motivo dificulta que haya estado a cargo en algún momento de manera temporal de la Compañía de Cazadores. Por otra parte es falso que haya azotado u ordenado azotar con una fusta a algún Conscripto. A su pregunta, utiliza que el Capitán **Ubilla** trabajaba sólo con personal bajo su mando, es decir, de su Compañía. Aunque es posible que algún otro miembro del Regimiento se haya

ofrecido voluntariamente para trabajar con él y que **Ubilla** lo haya aceptado. Sin embargo, no recuerda a nadie que lo haya solicitado. El Tribunal le lee la declaración de **Raúl Cerda Aguilera** de fs. 1.931, respecto de lo cual el deponente insiste en que nunca participó de interrogatorios de detenidos ni menos en torturas. Puede ser que el Capitán **Ubilla** haya tenido una sala especialmente habilitada para tortura, pero no supo de estas actividades. El Tribunal le lee la declaración de **José Heriberto Mansilla Gatica** de fs. 3.261, respecto de lo cual el deponente acota que recuerda al señor **Mansilla Gatica**, puesto que jugaba fútbol en el Regimiento. Sin embargo, él está equivocado en sus dichos, ya que nunca tuvo que ver con detenidos. Le extraña que el Suboficial **Mansilla** haya omitido que su cargo era de Ayudante en el Regimiento. Además, recuerda haber cumplido funciones de Oficial de Intendencia cuando **Tichahuer** estuvo efectuando un curso en Santiago durante cuatro meses en 1974. El Tribunal le lee la declaración de **Víctor Manuel Terán Vásquez** de fs. 3.352, respecto de lo cual el deponente advierte que no es efectivo lo que esta persona indica. No recuerda que haya habido una sala habilitada para detenidos en la Compañía de Plana Mayor y Servicios. Todo el tema de detenidos lo veía el Capitán **Ubilla** y su grupo. Por otra parte no es efectivo que haya golpeado ni menos que le haya dado 30 días de castigo. Esto porque no está contemplado tal número de días de castigo. Además, un Teniente no estaba facultado para sancionar a los Conscriptos. Finalmente, nunca fue Oficial de la Compañía de Plana Mayor. El Tribunal le lee la declaración de **Pedro Misael Elgueta Muñoz** de fs. 3.372 y siguiente, respecto de lo cual adopta que es falso lo que esta persona señala. Nada tiene que ver con detenidos. El Tribunal le lee la declaración de **Libardo Hernán Schwartenski Rubio** de fs. 3.445 y siguiente, respecto de lo cual declara que nunca participó en las actividades que señala el señor **Schwartenski**. Todo lo que él dice es falso ya que nunca interrogó, torturó ni presenció estas actividades. El Tribunal le lee la declaración de **Orlando Moreno Vásquez** de fs. 3.449, respecto de lo cual adosa que efectivamente estaba al tanto de la existencia de detenidos en el Regimiento Tucapel, los que eran interrogados por la Sección Segunda a cargo del Capitán **Ubilla**. Pero desconoce qué sucedió con los detenidos y nada tuvo que ver con ellos. Se imagina que el Mayor **Jofré** conversaba con el Capitán **Ubilla** respecto de los detenidos. En cuanto al abogado **Alfonso Podlech** afirma que esta persona llegó para asesorar al Comandante de la Guarnición en los temas jurídicos, incluyendo la Fiscalía Militar. Sin embargo, no está muy informado de las tareas que desarrolló. A su pregunta, supo de personas fallecidas en el Regimiento, pero se informó a través de los **Bandos** que el Coronel **Iturriaga** le entregaba para que informara a la población. También se enteró de hechos a través de los

comentarios de pasillo, como fue el caso del asalto al polvorín. Sólo recuerda la muerte de un Soldado Conscripto, porque a un compañero se le escapó un tiro, refiriéndose a aquello. Respecto de **Guido Troncoso Pérez** y **Pedro Ríos Castillo**, aunque estos nombres no le resultan conocidos, sí recuerda que hubo un período en que ocurrieron varios hechos de sangre relativamente seguidos. Sabe que se publicaron **Bandos** que salieron desde la Comandancia en que se daba a conocer esta información, pero nunca vio los cadáveres de estas personas ni presencié sus ejecuciones.

En diligencia de careo entre Ernesto García Isla y Jaime García Cobarrubias, de fecha 04 de octubre de 2013, rolante de fs. 1.151 a 1.152 (Tomo IV), ratifica su declaración judicial prestada a fs. 37, 58, 946 y 3.666. Agrega que jamás ha participado en actos como los que el señor **García Isla** señala, con quien se le carea. Hace presente que no tenía la especialidad de Inteligencia ni jamás participó en estas actividades. Nunca interrogó detenidos ni se relacionó con ellos. Además, el SIRE se formó mucho después de 1973. A su pregunta, alega que no sólo se paseaba por la Compañía de Plana Mayor, sino que lo hizo por todas las Compañías porque como Ayudante del Regimiento debió haberlo hecho mandado por el Comandante. Fue Ayudante del Regimiento todo el año 1973. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Jaime García Cobarrubias, de fecha 04 de octubre de 2013, rolante a fs. 1.153 (Tomo IV), ratifica sus declaraciones de fs. 37, 58, 946 y 3.666. Anexa que jamás estuvo en una sala en donde se estuviera interrogando o torturando personas. Sí fue en alguna oportunidad a la Compañía de Plana Mayor, pero jamás participó ni se enteró de un hecho como el que señala el señor **Schwartenski**. A su pregunta, anima que ha revisado las declaraciones pretéritas que el señor **Schwartenski Rubio** ha prestado en este proceso y no lo menciona en el grupo de interrogadores ni torturadores, salvo ahora. Se mantiene en sus dichos.

A.30 HERMÁN CARRASCO PAUL (21 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 593 a 597 (Tomo II); 598 a 599 (Tomo II); 607 a 608 (Tomo II); 609 a 612 (Tomo II); 618 a 619 (Tomo II); 646 a 647 (Tomo II); 892 a 893 (Tomo III); 894 (Tomo III); 895 a 897 (Tomo III); 907 a 908 (Tomo III); y de fs. 1.124 a 1.125 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre del 2003, rolante a fs. 593 a 597 de autos (Tomo II), basa que para septiembre de 1973 era dirigente de las Juventudes Comunistas y alumno de segundo año de Pedagogía en Castellano de la Universidad de Chile, sede Temuco. El 17 de

septiembre personal de la FACH lo detuvo, en dicha institución, fue vendado y sometido a maltrato físico y torturas, refiriéndose a aquello. Lo dejaron en libertad pero el 05 de noviembre llegaron a buscarlo el Suboficial **Ormar Burgos Dejean** y el Cabo **Juan Fritz**, ambos de Carabineros de Chile, pues lo requerían en la Fiscalía Militar. Lo llevaron a la 2° Comisaría donde le preguntaron por el nombre de dirigentes políticos de la época, para luego de eso ser pasado al calabozo donde vio a diversas personas, refiriéndose a ellas. Al día Siguiente apunta que fueron trasladados al Regimiento Tucapel y los ingresaron a un calabozo que estaba detrás de la guardia. Estando en ese lugar, fue vendado y conducido por **Juan Carrillo** hacia el gimnasio del Regimiento, donde fue sometido a tortura mediante la aplicación de electricidad en todo el cuerpo. Calcula que eran 5 personas las que le torturaban entre las cuales reconoció la voz de **Nelson Ubilla Toledo** y **Orlando Moreno Vásquez**. A **Nelson Ubilla** lo ubicaba, pues en su calidad de dirigente estudiantil fue varias veces a la Intendencia y esta persona fue ayudante del Intendente en una época. Aquilata que luego de estos tormentos le llevaron de vuelta al calabozo antes señalado, refiriéndose a las personas que también llegaron junto con él. A continuación, se refiere detalladamente a lo vivido en aquel lugar y las torturas y vejámenes a las que fue sometido. En lo pertinente, comenta que el día 8 de noviembre, aún en el gimnasio, los sacan de a uno hacia la Fiscalía para firmar su libertad. Esto sucedió en presencia del Cabo **Schönherr** y de **Alfonso Podlech Michaud**. Posteriormente **Raúl Buhilzer** y él fueron subidos un camión junto a otros detenidos y los condujeron a la cárcel. En el camión iba el Sargento **Moreno**. A los 10 o 15 días se enteró que los otros detenidos con los que estuvo detenido habían sido ejecutados.

En diligencia de careo entre Nelson Manuel Ubilla Toledo y Hernán Carrasco Paul, de fecha 12 de diciembre del 2003, rolante de fs. 598 a 599 de autos (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 175 de autos (correspondiente a la declaración precedente). A lo que cuenta que la persona sentada a su lado es el señor **Nelson Ubilla Toledo**, de quien se ha referido en su declaración. A la vez decanta que el señor **Ubilla** allí presente es quien le torturó y quien dirigía los interrogatorios. Respecto a lo antes relatado dice que su suegro **René Beltrán Valdebenito** le salvó la vida, ya que intercedió ante esta persona y eso hizo que le llevaran a conversar con él, sacándole la venda que llevaba en la vista para que conversaran y argumentando que el motivo de su conversación era el aprecio que le tenía al suegro del deponente he iba a intentar salvarlo, pues están todos condenados a muerte. Difunde que en su estadía en la cárcel, donde pasaron más de 500 personas, los que habían tenido la desgracia de pasar por el Regimiento, señalaban sin temor a dudas y con absoluta certeza

que la persona que dirigía el aparato de represión, interrogatorios y desaparecimientos desde el Regimiento, era don **Nelson Ubilla Toledo**, Capitán y Jefe del Servicio de Inteligencia Militar.

En diligencia de careo entre Hernán Carrasco Paul y Orlando Moreno Vásquez Toledo, de fecha 22 de diciembre del 2003, rolante de fs. 607 a 608 de autos (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración prestada en autos y que rola a fs. 175 (correspondiente a su declaración de fs. 593 a 597). Descarga que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es el Sargento **Orlando Moreno Vásquez**. Para el deponente es muy difícil aceptar la versión del señor **Moreno**, puesto que si bien es cierto que no lo vio, en la cárcel todo el mundo comentaba que éste era un torturador y mano derecha de **Nelson Ubilla**, además que cuando fue sometido a tortura en el gimnasio del Regimiento escuchó su voz de entre los torturadores. Insiste en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre del 2008, rolante de fs. 609 a 612 (Tomo II), colige que el día 4 de noviembre de 1973 mientras se encontraba en casa de sus padres, fue detenido por dos funcionarios de Carabineros de nombres **Juan Fritz** y **Ormar Burgos**, quienes se movilizaban en una camioneta y vestían de civil. Detalla que le mostraron una orden de detención emanada de la Fiscalía Militar, la que además incluía a muchas otras personas, por lo que fue conducido hasta la 2a Comisaría de Carabineros, en donde un Suboficial le preguntó en la guardia acerca de las personas que aparecía en la lista, refiriéndose a estas. Durante la noche sintieron llegar a más detenidos, pero no los ingresaron a su calabozo. Al día siguiente, en la mañana, fueron trasladados en un furgón hasta el Regimiento Tucapel, junto con otras personas, donde fueron recibidos por el Sargento **Orlando Moreno Vásquez** en la guardia del Regimiento. También estaba presente el Capitán **Nelson Ubilla Toledo** y otros Oficiales, los condujeron hasta una pieza ubicada detrás de la guardia. Luego, comenzaron a sacarlos de a uno hacia el gimnasio del Regimiento para someterlos a interrogatorios. Respecto a esto último esgrime que en ese lugar fue interrogado por el Capitán **Nelson Ubilla**, por el Teniente **Jaime García Covarrubias** y por el Sargento **Orlando Moreno Vásquez**. Los interrogatorios incluían apremios ilegítimos por parte de los inquisidores, manteniéndolos en todo el tiempo vendados. A la vez funda que dos días después de haber sido detenido fue llevado junto a **Juan Antonio Chávez** hasta la oficina de la Fiscalía Militar ubicada al interior del Regimiento, donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban **Alfonso Podlech**, **Nelson Ubilla Toledo** y **Orlando Moreno Vásquez**. A la vez indica que su suegro, quien era Suboficial de Ejército del Tucapel, don **René**

Beltrán Valdebenito, intercedió por él y le sacó aún con las vendas puestas en sus ojos y le llevó a la 2da Compañía para conversar con **Nelson Ubilla Toledo**. Allí le sacaron las vendas y este Oficial lo insultó y golpeó mientras le decía a su suegro que él no quería cooperar. Pudo reconocer la voz de este Oficial como uno de los torturadores. Posteriormente fue sacado de ese lugar y conducido a otra habitación con la vista vendada, donde pudo sentir los gritos de **Amador Francisco Montero Mosquera**. El 8 o 9 de noviembre llegó el Sargento **Moreno** al gimnasio donde se encontraban, ya sin vendas y desnudos. Sacó a **Raúl Buholzer** y rato después le sacó a él hacia la calle. Detrás de él iba su suegro para cerciorarse que nada le fuera a pasar. Fue subido a un camión Militar, siendo conducidos todos hasta la cárcel. Por consiguiente se refiere al intento de asalto el polvorín. Continúa relatando hechos materia de otras investigaciones.

En declaración extrajudicial, de fecha 05 de enero del 2009, rolante de fs. 618 a 619 (Tomo II), puntualiza que él es uno de los dos sobrevivientes del macabro hecho ocurrido la noche del 10 de noviembre de 1973 en la ciudad de Temuco, específicamente al interior del Regimiento de Infantería N° 8 "Tucapel", lugar donde masacraron a seis militantes del partido Comunista y Juventudes Comunista de la ciudad de Temuco y un señor de nombre **Juan Aillañir Huenichual**, relatando los hechos ocurridos a diferentes víctimas. En lo pertinente, consultado respecto de quienes él recuerda como sus interrogadores al interior del Regimiento Tucapel, precisa que sin lugar a dudas se encuentra **Orlando Moreno Vásquez**, que se desempeñaba en la Fiscalía del Regimiento, a quien conocía desde niño y porque eran vecinos, el fallecido **Nelson Ubilla Toledo**, el Teniente de Ejército **Manuel Vásquez Chahuán**, además de otro Teniente llamado **"El Loco Espinoza"**, el Teniente **Jaime García Covarrubias**, quien los interrogó a rostro descubierto y el Conscripto **Juan Carrillo**. Finalmente, relata que respecto del abogado **Alfonso Podlech Michaud**, éste sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de Mayor, es más fue él quien les insistió en firmar un documento que por supuesto negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del Plan "Z".

En diligencia de careo entre Hernán Carrasco Paul y Juan Humberto Carrillo Rebolledo, de fecha 19 de mayo del 2009, rolante de fs. 646 a 647 (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración prestada en autos y que rola a fs. 218 (correspondiente a su declaración de fs. 609 a 612). Soflame que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es **Juan Carrillo Rebolledo**, quien era Conscripto del Regimiento Tucapel esto para septiembre de 1973. Por otra parte acota que el primer día que los sacaron desde la pieza de guardia hacia el gimnasio del Regimiento, fue el Conscripto **Juan Carrillo** quien le sacó de ese

lugar, para ser llevado hacia la parte de atrás del recinto, lugar donde le golpeó, y le dijo "expúlsame ahora concha de tu madre" y posteriormente le vendó la vista para conducirlo al gimnasio. Posteriormente se refiere a su suegro, Suboficial **Beltrán**, quien intercedió por él. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial, de fecha 02 de septiembre del 2010, rolante de fs. 892 a 893 (Tomo III), copia de la cual se encuentra de fs. 907 a 908 (Tomo III), agrega que es uno de los dos sobrevivientes a la matanza efectuada la noche antes del día 10 de noviembre de 1973, al interior de dicho destacamento Militar, por efectivos de esa Institución entre otros, en contra de sus compañeros detenidos para la fecha en dicho Cuartel, refiriéndose a estos. Recuerda que la noche del 10 de noviembre de ese año, estaba junto a **Raúl Buholzer Matamata**, en dependencias de la Ex Cárcel Pública de Temuco, en calidad de presos por orden de la Fiscalía Militar de Cautín, sin acusación en su contra, más que el hecho de pertenecer todos al Partido y a Las Juventudes Comunistas. A dicho recinto carcelario, llegaron Raúl y el declarante desde el Regimiento "Tucapel" trasladados por una Patrulla Militar en un camión de ese Cuartel, en calidad de presos. Dicha patrulla iba bajo el mando del Sargento **Orlando Moreno Vásquez**, quien les internó en dicho centro de detención el día 09 de noviembre de 1973 a últimas horas de la tarde. Aplica que fue detenido por personal de Carabineros de la Comisión Civil de la Segunda Comisaría de Temuco, el día 04 de noviembre de 1973, desde la casa de sus padres, siendo sus aprehensores los Carabineros **Juan De Dios Fritz Vega** y **Ornar Burgos Dejean**, quienes lo llevaron detenido hasta las dependencias de esa Comisaría donde ya se encontraban detenidos **Raúl Buholzer Matamata** y **Alberto Molina Ruiz**. Al día siguiente, fueron llevados hasta el Regimiento Tucapel de Temuco e ingresados a un calabozo que existe en la parte posterior al recinto de guardia. Ya estando en la condición antes citada y habiendo sido sometido a diversos interrogatorios bajo la tortura, el día 07 u 08 de noviembre de 1973, mientras estaba en el calabozo junto a **Víctor Valenzuela**, **Juan Mardones**, **Alberto Molina**, **Juan Antonio Chávez** y **Raúl Buholzer**, todos a rostro descubierto, siendo en horas de la tarde ya oscureciendo, apareció también a rostro descubierto un Oficial, del grado de Teniente a quien perfectamente ubicaba antelación cuyo nombre es **Jaime García Covarrubias**, portando una fusta dé montar, con su rostro desencajado, quien les ordenó salir del calabozo hacia el patio del patio de formación del Regimiento. Recuerda que el Teniente **García**, se hacía acompañar de una patrulla de Conscriptos, quienes andaban portando sus fusiles. En un momento los hizo formar entre gritos e insultos y golpes con la fusta en cualquier parte de sus cuerpos, que ya habían resistido a diversas sesiones de apremios de parte del grupo de **Ubilla Toledo**. El

caso es que el Teniente **García** les gritó: aquí se forman todos los comunistas chuchas de su madre" y en fila india los hizo marchar hacia el gimnasio que se encuentra en la parte sur de la citada Unidad Militar. Una vez al interior del gimnasio, **García Covarrubias**, a punta de golpes de su fusta, los obliga a desvestirse entre golpes de culatas que les propinaban los Conscriptos en cumplimiento a sus órdenes. Una vez desnudos les ordena que entre los mismos detenidos se efectuaran tocamientos en los genitales, que unos con otros tuviesen relaciones buco genitales, a lo cual se negamos rotundamente, las burlas por parte de este Oficial y los golpes duraron al menos unas horas, hasta que se cansó de golpearlos, ya que la orgía que él pretendía montar y observar bajo un ojo desquiciado no lo consiguió. Agregar que en un momento **Jaime García**, entre golpes le señala que es doblemente culpable del "Plan Z" en su condición de hijo y yerno de Militares, uno de ellos en servicio activo para la fecha, refiriéndose a al padre y suegro del declarante, el Suboficial **René Beltrán**. Durante toda esa noche y desnudos permanecieron en ese gimnasio, bajo custodia de otros Conscriptos que a diferencia de los anteriores estaban tan asustados como ellos. La mañana siguiente, es sacado de esta dependencia, para lo cual se le hace vestir y vendada la vista es conducido a lo que cree eran las dependencias de la Segunda Compañía de Cazadores. En dicho lugar, es ingresado a una pieza donde escucha que una persona estaba bajo la tortura, en ese lugar un hombre desconocido le dice a **Montero Mosquera** que repita los nombre de los Dirigentes de las Juventudes Comunistas y él dice entre gritos producto de los golpes de corriente eléctrica: "**Juan Antonio Chávez** y el **Chico Carrasco** (refiriéndose al declarante). Acto seguido, lo sacan al exterior y le quitan la capucha que tenía puesta, viendo al Capitán **Nelson Ubilla Toledo** y a su suegro, quien lo mira con lágrimas en sus ojos. **Ubilla** le dice: "Viste que no quiere cooperar," a lo que su suegro trata de defenderlo diciendo que a lo mejor el declarante nada sabía, insistiendo **Ubilla** al decir: "No, va a cagar como todos este huevón no más". Y lo retornan al gimnasio, de lo cual advierte a sus compañeros. Explica que si de algo está claro es que el ex Teniente **Jaime García Covarrubias** tenía contacto con los detenidos a quienes torturaba y sabía de lo que con cada uno de ellos pasaría.

En declaración judicial de fecha 15 de septiembre del 2010, rolante a fs. 894 de (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial que rola de fs. 1.543 a 1.544 (correspondiente a la declaración precedente) y agrega que permaneció en calidad de detenido al interior del Regimiento Tucapel hasta el día anterior al supuesto asalto al polvorín, puesto que fue trasladado hasta la cárcel de Temuco en un camión bajo la custodia de una Patrulla Militar que iba al mando de **Orlando Moreno Vásquez. Junto con él iban otras personas.**

En diligencia de careo entre Hernán Carrasco Paul y Jaime García Covarrubias, de fecha 15 de septiembre del 2010, rolante de fs. 895 a 897 (Tomo III), ratifica en lo pertinente sus declaraciones prestadas en autos y que rola a fs. 218 (correspondiente a su declaración de fs. 609 a 612) y 1.547 (correspondiente a su declaración de fs. 894). A la vez alega que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es **Jaime García Covarrubias**, a quien ha hecho referencia en sus dichos. Por otra parte anexa que tiene la certeza que él participó en el asesinato de las personas que murieron en el polvorín, por la manera como se ensañó con ellos y con él durante las sesiones de tortura junto a sus Conscriptos. Finaliza manteniéndose en sus dichos.

En diligencia de careo entre Hernán Carrasco Paul y Óscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto del 2013, rolante de fs. 1.124 a 1.125 de autos (Tomo IV), ratifica en lo pertinente sus declaraciones judiciales prestadas en autos de fs. 175 (correspondiente a su declaración de fs. 593 a 597) 218 (correspondiente a su declaración de fs. 609 a 612) y 3.567. Anima que reconoce a la persona sentada a su lado con la cual se le carea como **Alfonso Podlech Michaud** de quien ha hecho referencia. A la vez añade que ha prestado declaraciones en muchas causas durante este tiempo y ha contestado lo que se le ha preguntado, no tiene sentido que él venga a inventar cosas ante el Tribunal ni tiene ánimo de venganza. Precisa que si conoce a **Alfonso Podlech Michaud** desde niño. Se mantiene en sus dichos.

A.31 JOSÉ ALBINO KRAUSE ÁLVAREZ (28 años a la fecha de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2009, rolante de fs. 622 a 623 (Tomo II), comienza haciendo referencia a su historia Militar. Para el año 1973, ostentaba el grado de Cabo 1ro., y cumplía funciones, en el Regimiento de Infantería N°8 Tucapel en la ciudad de Temuco. Recuerda que la Unidad Militar ya referida contaba con Cinco compañías: 1 de Mortero donde se encontraba el Comandante de Compañía **Vásquez Chahuán** y el Suboficial **Morales**, 3 Compañías de Fusileros y 1 Compañía de Plana Mayor y Servicios, que era donde él se encontraba inserto y se desempeñaba también el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Sobre el Oficial de Ejército apodado "**El Loco Espinoza**", lo recuerda porque era un Oficial del grado de Teniente de nombre **Manuel Espinoza**, que pertenecía a la Compañía de Morteros, era un sujeto de personalidad especial, que gustaba de las actividades propias de un "Comando", refiriéndose a sus características físicas. Afirma que efectivamente el Regimiento Tucapel luego del 11 de septiembre de 1973 fue utilizado como lugar base para la permanencia de detenidos políticos, que eran requeridos por las autoridades

Militares y de la Fiscalía que funcionaba al interior del Regimiento; específicamente en el casino de Oficiales, siendo conforme su recuerdo el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, quien vistiendo uniforme militar asimilado al grado de Mayor era el Fiscal Militar del Regimiento. A continuación se refiere a otros hechos.

A.32 DANIEL SAN JUAN CLAVERÍA (28 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 632 a 633 (Tomo II); 678 a 679 (Tomo II); 984 a 985 (Tomo III); y de fs. 1.327 a 1.329 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de marzo de 2009, rolante de fs. 632 a 633 (Tomo II), apunta que para el año 1973 se desempeñaba con el grado de Detective Cuarto, prestando servicios en la Comisaría Judicial de Temuco. Posterior al 11 de septiembre de 1973, fue agregado junto a otros Oficiales de la institución, entre los que recuerda a don **Aquiles Poblete Müller, Rigoberto Ortiz Lara**, actualmente fallecido, **Luis Morales Toledo, Hernán Quiroz Barra** y el conductor **Carlos Luco Astroza**, al Regimiento de Infantería N°8 "Tucapel". Las funciones que debían desempeñar eran las de entrevistar y tomar declaraciones a las personas que llegaban detenidas a dicho recinto Militar y entregar la información a los funcionarios del Ejército que la solicitaban. Luego declara en lo referente al "Asalto al polvorín". Sobre las Instrucciones de a quién debían entrevistar las impartía directamente su jefe de grupo que era don **Aquiles Poblete**, quién a su vez recibía instrucciones del Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Advierte que el Fiscal Militar que estaba a cargo a partir del 11 de septiembre de 1973 fue inicialmente **Jofré**. Sin embargo, posteriormente asumió el Fiscal **Alfonso Podlech Michaud**, pero no recuerda fecha exacta en la que este último comenzó a ejercer el cargo. Dentro de los funcionarios del Ejército que recuerda de aquella época, están el Teniente **Espinoza**, a quién apodaban "**El gato Espinoza**", al Sargento **Moreno** y al Cabo **Schönherr**. Finaliza en el año 1974 sus labores en el Regimiento Tucapel, regresando a la Comisaría Judicial de Temuco.

En declaración judicial de fecha 09 de julio de 2009, rolante de fs. 678 a 679 (Tomo II), ratifica íntegramente la declaración prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile. Apoya que le correspondió servir en el Regimiento Tucapel durante cinco meses más o menos, tiempo durante el cual interrogó detenidos políticos en una dependencia ubicada en la Comandancia de la Unidad Militar señalada, que era contigua a la Fiscalía Militar. Los detenidos interrogados se encontraban con su vista sin vendas, no llevaban esposas y eran traídos y llevados por personal Militar. Desconoce dónde permanecían esos

detenidos antes y después de los interrogatorios. Adosa que no le correspondió practicar interrogatorios con intervención de Oficiales o Suboficiales de Ejército. Tampoco practicó interrogatorios en el gimnasio del Regimiento, ignorando si este lugar era recinto habilitado para esos fines. No participó en torturas a detenidos ni supo que este hecho ocurriera. Toda la información recabada durante los interrogatorios era entregada a su jefe, el Comisario **Aquiles Poblete Müller**, quien se la entregaba al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Agrega que su horario de trabajo era desde las 08:30 horas hasta las 19:00 horas, sin que jamás haya interrogado personas de noche. Nunca supo que sus colegas lo hicieran fuera de horario. No recuerda que personal militar colaborara en el cumplimiento de órdenes de la Fiscalía Militar.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 984 a 985 (Tomo III), comienza refiriéndose a su carrera laboral. Conjetura que para año 1973, ostentaba el grado de Detective IV y después del 11 de septiembre de ese año, a solicitud del mando del Regimiento de Infantería N° 08 "Tucapel" de Temuco, fue asignado por sus superiores a cumplir funciones a dicho Destacamento Militar, refiriéndose a los funcionarios policiales que fueron asignados. Dentro de las funciones que les asignaron a cumplir al interior del Regimiento eran las de tomar declaraciones a los detenidos que disponía el Capitán **Ubilla**; así mismo otra de sus funciones eran las de efectuar citaciones que disponía la Fiscalía Militar del Regimiento. Hace preste que el lugar que les asignaron para trabajar, correspondía a una oficina que a su parecer, se encontraba en la Comandancia del Regimiento, donde también había una oficina de partes donde trabajaban los Sargento **Moreno** y **Schönherr** y también en esas dependencias operaba la Fiscalía Militar. Recuerda que en varias ocasiones vio que efectivos de la Fuerza Aérea que llegaban al Regimiento a entregar personas detenidas.

En declaración judicial de fecha 28 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.327 a 1.329 (Tomo IV), cimenta que para septiembre de 1973 era Detective de la Comisaría Policial de Temuco y fue destinado al Regimiento Tucapel de Temuco junto con **Rigoberto Ortiz Lara**, **Luis Morales Toledo**, **Hernán Quiroz Barra** y el conductor **Carlos Luco Astroza**, lo que debió haber ocurrido durante los días siguientes al 11 de septiembre de 1973. El lugar de trabajo fue el edificio de la Comandancia, siendo el nexo entre ellos y el Ejército el Capitán **Ubilla**, quien era el Ayudante del Regimiento. Su tarea consistía en interrogar a los detenidos que por diferentes motivos llegaban al Regimiento. Les preguntaban por el motivo de su detención. En el mismo edificio se ubicaba la Fiscalía Militar. Los detenidos interrogados se encontraban con su vista sin

vendas, no llevaban esposas y eran traídos y llevados por personal Militar. Toda la información recabada durante los interrogatorios era entregada a su jefe, el Comisario **Aquiles Poblete Müller**, quien se la entregaba al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. A su pregunta, decanta que los nombres de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** y **José María Ortigosa Ansoleaga** no le resultan conocidos.

A.33 ADRIÁN SEGUNDO GONZÁLEZ MALDONADO (31 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 662 a 665, (Tomo II); y a fs. 945.

En declaración judicial de fecha 11 de junio de 2009, rolante de fs. 662 a 665 (Tomo II), basa que para septiembre de 1973 se desempeñaba en el 1° Juzgado del Crimen de Temuco como Oficial Tercero. Para el 13 o 14 de septiembre de ese mismo año fue llamado a la Corte de Apelaciones junto con su colega **Héctor Toloza Fierro**, siendo informados de que habían sido designados en Comisión de Servicios en la Fiscalía Militar de Temuco. Presentándose en dicha Fiscalía al día siguiente, la que funcionaba al interior del Regimiento en una oficina ubicada en el edificio de la Comandancia. Su jefe directo allí era el Mayor **Luis Jofré Soto**, Segundo Comandante del Regimiento y Fiscal Militar, siendo Secretario uno de los **hermanos García Covarrubias**. Las funciones que el deponente efectuó en la Fiscalía decía relación con la toma de declaraciones a los detenidos que eran puestos a disposición de ese Tribunal. Respecto a su consulta, el abogado **Podlech Michaud** asesoraba al Fiscal **Jofré**, sin ser participe en la toma de declaraciones a los detenidos y testigos, función que realizaba el deponente junto a **Toloza**. En la Fiscalía se trataban todos aquellos casos relacionados a la ley de armas y tenencia de explosivos. A las personas detenidas se les consultaba por su militancia política, si habían participado de tomas o de atentados. Recuerda que se interrogó a muchas personas pertenecientes al MIR. Posteriormente se refiere a los hechos relacionados con el atentado al polvorín.

En declaración judicial de fecha 18 de mayo de 2011, rolante a fs. 945 (Tomo III), consultado el deponente por el Tribunal, acerca del punto 2° de la querella presentada a fs. 1.782, señala que en su calidad de actuario de la Fiscalía, le correspondió tramitar la causa originada por los hechos relativos al polvorín. Les tomó declaración a muchos testigos, en su mayoría Conscriptos, sin recordar mayores detalles en razón del tiempo transcurrido, refiriéndose a dicha causa. Ratifica en todas sus partes la declaración prestada a fs. 561 (correspondiente a su declaración precedente).

A.34 JOSÉ TOMÁS ARGOMEDO GARCÍA (24 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 700 a 701 (Tomo II); 1.093 (Tomo IV); y a fs. 1.094 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de fs. 700 a 701 (Tomo II), conjetura que para septiembre de 1973 se desempeñaba en el Regimiento de Montaña Reforzado N°4 "La Concepción" de Lautaro, con el grado de Subteniente, sirviendo en el Grupo de Artillería hasta comienzos de 1974. A partir del 11 de septiembre de 1973 pasa a desempeñar como ayudante del Coronel **Ramírez** en su calidad de Intendente. Le tocó servir el cargo tanto para el Coronel **Hernán Ramírez** como para el Coronel **Pablo Iturriaga**. Luego del 11 de septiembre se conformó una mini junta integrada por el Coronel **Gonzalo Arias González** en representación de Carabineros; **Pablo Iturriaga Márchese** por el Ejército; **Hernán Pacheco Cárdenas** por la FACH; el Coronel **Ramírez** por el Nuevo Gobierno; y una serie de civiles connotados, entre los que recuerda a un señor de apellido **Picasso**. Cimentaba que tanto el Coronel **Ramírez** como el viajaban todos los días desde Lautaro para cumplir funciones en la Intendencia y se regresaban en la tarde, pernoctando en esa ciudad. Desde fines de diciembre de 1973 y hasta principios de 1974 se quedó pernoctando en el casino del Regimiento Tucapel de Temuco, porque el nuevo Intendente, **Pablo Iturriaga Márchese**, así lo exigió. Respecto a los hechos ocurridos con ocasión el asalto al polvorín del Regimiento Tucapel de Temuco, no lo recuerda. Sin embargo, el Intendente citó a una reunión a todos los Comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden para ordenar que se le informara detalladamente acerca de todo enfrentamiento que ocurriera entre civiles y Militares. Lo que pretendía era que no hubiera gente desaparecida sin justificación, refiriéndose a lo ocurrido en el polvorín. Respecto de los **Bandos**, señala que estos eran redactados por el abogado de la Intendencia, cuyo nombre no recuerda, pero al parecer por su conocimiento del tema tiene la impresión que trabajaba desde antes en la Intendencia, y eran firmados por el Intendente **Ramírez**. En todo caso, la información acerca de estos hechos era remitida por conducto regular hacia la Intendencia, luego de lo cual se confeccionaba el **Bando** respectivo. Los conductos regulares eran los Comandantes de cada Unidad.

En declaración judicial de fecha 01 de julio de 2013, rolante de fs. 1.093 a 1.094 (Tomo IV), cuenta que respecto de sus dichos anteriores referidos a la manera como se resolvieron los casos de muerte de detenidos en la región, señala que según recuerda comenzaron a llegar a la Intendencia varios anónimos que daban cuenta de la muerte o aparición de cuerpos de personas en la región las que habrían sido ejecutadas por Patrullas Militares o de Carabineros.

Producto de esto, el Coronel **Ramírez** llamó a una reunión de urgencia con los Jefes de Ejército, Carabineros y Fuerza Aérea de la región. En esta cita el Intendente señaló que esta situación no podía seguir ocurriendo y que si se repetían hechos en que hubiesen enfrentamientos a lo menos debían hacer entrega de los cuerpos a las familias y que los mandos Militares de la zona debían informar al Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la situación que ocurriera mediante un parte que señalara las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos. Todo lo anterior, para poder elaborar un **Bando** que le diera una salida jurídica formal a estos acontecimientos. Nunca se interiorizó de la manera como se confeccionaban los **Bandos**, pero seguramente el abogado de la Intendencia, cuyo nombre no recuerda, tuvo que haber participado en su elaboración. Decanta que al momento de comunicar los **Bandos** no tenía dudas de la verosimilitud de lo que ellos expresaban; pero que ahora, a cuarenta años de distancia puede concluir que los **Bandos** emitidos en la época de 1973 tenían como función principal darle una forma jurídica a los hechos acaecidos y no se ajustaron fielmente a lo que realmente ocurrió.

A.35 JORGE LUIS GODOY VALDEBENITO (18 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 707 a 708 (Tomo III); 717 a 719 (Tomo III); y a fs. 902 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 25 de agosto de 2009, rolante de fs. 707 a 708 (Tomo III), deduce que para el mes de septiembre de 1973 se encontraba efectuando Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento N°8 de Infantería "Tucapel". Para el mes de noviembre de 1973 se encontraba inserto dentro de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, cuyo Comandante era el capitán **Nelson Ubilla Toledo**. A continuación se refiere a los hechos relacionados al asalto al polvorín de la Isla. En lo pertinente, recuerda que dentro del Regimiento efectivamente existían personas detenidas luego del 11 de septiembre de 1973, incluso recuerda el hecho de que el hermano de un Conscripto de su compañía, quien mientras permanecía prisionero en el patio de la Unidad junto a otros detenidos, de rodillas y con sus brazos extendidos los cuales debían sostener ladrillos, fue brutalmente golpeado por otro Conscripto de la Compañía de nombre **José Chávez Etchepare**, quien estaba designado por el mando de la Unidad para vendar a los detenidos, marearlos mediante la técnica de dar vueltas sobre su eje para posteriormente pasarlos a la pieza que se encontraba dentro de la Compañía de Plana Mayor, la cual contaba con un catre metálico y dos dínamos eléctricos. Difunde que conoció el funcionamiento de estos aparatos cuando por reírse, el Sargento **Mario Hernán Arias Díaz** lo puso

sobre este catre y le aplicó golpes de corriente en su cuerpo, al menos por unos 10 minutos, lo cual le causó mucho dolor, vómitos y diarrea, lo que hasta el día de hoy no ha podido olvidar. Por lo antes expuesto, es que luego de finalizado su Servicio Militar Obligatorio se fue inmediatamente a Argentina, desvinculándose por completo del Ejército de Chile.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2009, rolante de fs. 717 a 719 (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 743 a 744 (correspondiente a la declaración precedente). Comienza refiriéndose a los hechos relacionados con el asalto al polvorín y la participación del Conscripto **José Chávez Etchepare**. Divulga saber de la existencia de una patrulla especial formada por Conscriptos que se ofrecieron como voluntarios, entre los que recuerda a **José Chávez Etchepare, Libardo Schwartenski, Juan Mario Fuente Henríquez, Juan Carrillo** y al **parecer Leopoldo Villagrán Alvarado**, y **Luis Valeria Candía**, entre otros. Este grupo era dirigido por el Sargento **Mario Arias Díaz**, quien actuaba bajo las órdenes directas del Teniente **Jaime García Covarrubias**. Este grupo se destacaba por su crueldad con los detenidos y por participar en allanamientos y detenciones, recordando que siempre llegaban con especies sustraídas desde las casas que allanaban. Respecto de los detenidos en el Regimiento Tucapel, agrega a lo ya expresado en su declaración extrajudicial, que el Teniente **García Covarrubias** los interrogaba en la sala donde funcionaba la Banda del Regimiento. Después, eran trasladados por Personal Militar, entre ellos los mencionados precedentemente, hasta la sala de torturas ubicada entre el edificio de Plana Mayor y Morteros, donde en una oportunidad fue torturado por el Sargento **Arias**. A su pregunta, desarrolla que el Teniente **García** mandaba más que el Capitán **Ubilla** en cuanto al tratamiento de detenidos, destacándose por su crueldad para con ellos. Su hermano, el Subteniente **Raimundo García**, en un principio fue una persona muy amable y no se quiso meter con los detenidos, pero después fue influenciado por su hermano y cambió su conducta. Posteriormente, ambos participaban en los interrogatorios de los detenidos en la dependencia de la Banda del Regimiento.

En diligencia de careo entre Jorge Luis Godoy Valdebenito y Jaime García Cobarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fojas 902 (Tomo III), ratifica sus dichos de fs. 769 (correspondiente a la declaración precedente). No reconoce a la persona con quien se le carea. Agrega a sus dichos que siente mucho temor de la persona con la cual es careada por lo que no desea seguir declarando, ya que está seguro que su vida correría peligro si agrega algo más. Este señor es muy peligroso.

A.36 OSCAR INOSTROZA SEGURA (19 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 709 a 711 (Tomo III); 720 a 722 (Tomo III); 762 (Tomo III); y a fs. 901 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 26 de agosto de 2009, rolante de fs. 709 a 711 (Tomo III), descarga que ingresó a efectuar su Servicio Militar Obligatorio el día 06 de enero del año 1973 al Regimiento N°8 de Infantería y Montaña “Tucapel”, en la ciudad de Temuco. Para el mes de noviembre del año 1973 se encontraba inserto dentro de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, la que se encontraba bajo el mando del Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, siendo su Segundo Comandante el Subteniente **Raimundo García Cobarrubias**, recordando que su hermano el Teniente **Jaime García**, se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios Conscriptos. Destaca que dentro de los lugares o dependencias que eran usadas para mantener prisioneros políticos dentro del Regimiento estaban la sala de banda de música de la unidad, el gimnasio chico donde se practicaba boxeo, el calabozo de la guardia y la “Sala de Conferencias” existente dentro de la Compañía de Plana Mayor y Servicio. Esta última dependencia, se encontraba ubicada al medio de la compañía, allí se encontraba un catre metálico de los que ellos usaban y que era de una plaza, con los instrumentos necesarios para la tortura. En alguna oportunidad le correspondió llevar a esta sala a su propio cuñado de nombre **Ricardo Villanueva**, quien por ese tiempo era simpatizante de la Unidad Popular. Posteriormente se refiere a los hechos relacionados con el ataque al polvorín del Tucapel. En lo pertinente, recuerda como quienes realizaban los interrogatorios a los detenidos del Regimiento al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, Sargento **Mario Arias Díaz**, y los Conscriptos Sargento 2do., de Reserva **José Chávez Etchepare**, **Libardo Schwartenski Rubio** y **Luis Ángel Valeria Candía** y el Teniente **Jaime García**, entre otros.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2009, rolante de fs. 720 a 722 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 753 a 755 (correspondiente a la declaración precedente), refiriéndose a los hechos relacionados con el ataque al polvorín del Tucapel. En lo pertinente detalla que existía una Escuadra de Conscriptos que fueron tomados de todas las Compañías del Regimiento, la que fue ordenada por el Capitán **Nelson Ubilla** y fue hecha por los Clases de cada Compañía, la que se efectuó antes del Golpe Militar para salir a las calles a disuadir las manifestaciones. Los Conscriptos seleccionados eran en su mayoría gente fornida y de estatura por sobre el promedio. Recordando que de su Compañía fueron seleccionados **Héctor Illanes Leal**, **Gerardo García Díaz**,

Libardo Schwartenski, Juan Carrillo y José Chávez Etchepare, entre otros. Rememora que tanto **Illanes** como **García** eran personas de un carácter muy violento. Respecto de los detenidos distingue que le correspondió trasladar a varios de ellos desde la guardia del Regimiento hasta una sala ubicada entre el pabellón de Plana Mayor y la Compañía de Morteros. A esta sala le llamaban “sala de conferencias de alto nivel”. En una de las visitas que hizo a esa sala pudo ver que dentro de esta se encontraba **Jaime García Covarrubias** y el Sargento **Mario Arias Díaz**, entre otros. En esa oficina se torturaba a las personas mediante la aplicación de corriente. Glosa que le correspondió custodiar detenidos en el gimnasio chico, lugar al que llegaban personas muy golpeadas, tanto hombres como mujeres. A continuación se refiere a las personas que murieron en el supuesto ataque al polvorín.

En diligencia de careo entre Oscar Inostroza Segura y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fojas 762 (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial y judicial prestadas en autos y que rola a fs. 774 (correspondiente a la declaración precedente). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el Sargento **Mario Hernán Arias Díaz** a quien ha hecho referencia. En más de una oportunidad le correspondió trasladar detenidos desde la guardia a la sala de interrogatorios, pudiendo ver en más de una oportunidad al Sargento **Arias** entre el grupo de interrogadores. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Oscar Inostroza Segura y Jaime García Covarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fs. 901 (Tomo III), ratifica sus dichos de fs. 753 y 774 (correspondiente a la declaración de fs. 709 a 711 y a la de fs. 720 a 722 respectivamente) en el sentido que vio al Teniente **Jaime García Covarrubias** en alguna oportunidad dentro de la sala donde se mantenían a los detenidos políticos al interior del Regimiento Tucapel y donde, además se les torturaba. No reconoce a la persona con quien se le carea. Sin embargo, señala que al ser hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, por lo que pensándolo más detenidamente quizás se haya confundido al sindicarlo a él como presente al interior de la sala donde se torturaba a los detenidos. Puede ser que no haya estado en ese lugar.

A.37 MARIO HERNÁN ARIAS DÍAZ (33 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 736 a 738 (Tomo III); 755 a 756 (Tomo III); 762 (Tomo III); 763 (Tomo III); 764 (Tomo III); 765 (Tomo III); 1.110 a 1.112 (Tomo IV); y de fs. 1.380 a 1.381 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2009, rolante a fojas 736 a 738 (Tomo III), ensaya que el día 1° de febrero de 1959 ingresó al Ejército de Chile, específicamente al escalafón de Suboficiales, entre los años 1976 y 1984 prestó servicios extra institucionales en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI). Para el año 1973, mes de noviembre se desempeñaba en el Regimiento de Infantería N°8 “Tucapel”, ubicado en la ciudad de Temuco, específicamente en la Compañía de Plana Mayor y Servicios, que se encontraba a cargo del por entonces Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, quien se desempeñaba con Oficial de Inteligencia de la Unidad Militar, haciendo referencia posteriormente a los funcionarios de planta de su Compañía y la forma que se desarrollaban los servicios de guardia. Luego se refiere a los hechos relacionados con el Polvorín del Tucapel. En lo pertinente, esgrime que efectivamente vio a personas detenidas al interior del Regimiento en tal calidad, en lo denominado “en tránsito” desde la cárcel a la Fiscalía y viceversa, quienes eran generalmente mantenidos en un calabozo que se habilitó en un dormitorio de Conscriptos existente dentro la guardia, sobre quienes había que tener la debida vigilancia. Respecto de los funcionarios encargados de las entrevistas de los detenidos al interior del Regimiento, recuerda a personal de la Policía de Investigaciones de Temuco, como por ejemplo a **Hernán Quiroz Barra** y **Hernán Morales Toledo**, además de los Sargentos **Orlando Moreno Vásquez**, y **Raúl Schonherr Frías** y el fallecido **Nelson Ubilla Toledo**. Dentro de este grupo, rememora como Conscriptos de confianza de este grupo a **Libardo Schwartenski Rubio** y **José Chávez Etchepare**. Sobre la “Sala de Conferencia”, respecto de la cual se le pregunta, espeta que cada Compañía del Regimiento tenía una sala de instrucción teórica, con la finalidad de efectuar la enseñanza respectiva a los Conscriptos, estas se encontraban al centro de cada Compañía, contigua a los baños y dormitorios. Efectivamente su Compañía tenía la suya y allí se interrogaba por parte del grupo ya referido a los detenidos, negando el deponente haber participado de estos interrogatorios, porque no era su función en el Cuartel.

En declaración judicial de fecha 28 de enero de 2010, rolante de fs. 755 a 756 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 879 a 881 (correspondiente a la declaración precedente). En lo pertinente estimula que las personas que mencionó en su declaración extrajudicial como participando en interrogatorios eran los que formaban parte del Departamento Segundo. Niega que le haya correspondido participar en interrogatorios. Más aun, tenían prohibición de acercarse al lugar donde estos se efectuaban. El Tribunal le lee, en lo pertinente las declaraciones

de fs. 597, 769 y 778, respecto de lo cual el deponente evidencia que no tenía acceso a la sala de interrogaciones ni menos los Conscriptos, salvo aquellos que ha mencionado, desconociendo el motivo por el cual los Conscriptos le sindicaban como integrante del grupo de interrogadores. Jamás trabajó junto al Teniente **Espinoza** o al Teniente **Gran**, pues estos eran de otras Compañías. Sí supo que el Teniente **Espinoza** salía con alguna patrulla a efectuar ejecuciones simuladas a borrachitos que pillaba en horas de toque de queda. E insiste en que jamás participó en hechos como los que se le imputan. Sus funciones fundamentales eran las de hacer guardia y hacer instrucción a la Sección de Telecomunicaciones.

En diligencia de careo entre Oscar Inostroza Segura y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 762 (Tomo III), ratifica íntegramente declaración prestada a fs. 951 de autos (correspondiente a la declaración precedente). Expresa que su única misión era hacer guardia e instrucción a la Sección de Telecomunicaciones, por el hecho de tener esa especialidad. En alguna oportunidad le correspondió entregar detenidos desde la guardia a Conscriptos para que llevaran detenidos a la dependencia a que hace referencia el Sr. **Inostroza**. Puede ser que su equivoco se deba a que la sala de instrucción donde se llevaban a cabo los interrogatorios estaba al lado del almacén de Telecomunicaciones, donde el deponente trabajaba. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 763 (Tomo III), explicita que jamás estuvo asignado a la Sección Segunda, pues en esa sección solo había especialistas en inteligencia y él lo era en Telecomunicaciones. Ratifica íntegramente la declaración a fs. 951 de autos (correspondiente a la declaración de fs. 755 a 756). Aunque no recuerda a la persona con la que se le carea, si recuerda el nombre de **Libardo Schwartenski Rubio** como un Conscripto de confianza del grupo de Suboficiales y Oficiales a cargo de los detenidos. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Enrique Segundo Muñoz Moreno y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 764 (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 951 de autos (correspondiente a la declaración de fs. 755 a 756). Reitera que su única misión era hacer guardia e instrucción a la Sección de Telecomunicaciones, por el hecho de tener esa especialidad. Estaba en el almacén de Telecomunicaciones y no en la sala de instrucción, que se ubicaba a un costado de ésta. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Manuel Jesús Contreras Salazar y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 765 (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 951 de autos (correspondiente a la declaración de fs. 755 a 756). Reitera lo señalado precedentemente. Exclama que jamás perteneció a Inteligencia Militar. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 06 de julio de 2013, rolante de fs. 1.110 a 1.112 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 879 a 881 (correspondiente a la declaración de fs. 736 a 738) y la judicial de fs. 951 a 952 (correspondiente a la declaración de fs. 755 a 756). Respecto de su consulta, explana solo haber visto detenidos en una dependencia ubicada en la guardia del Regimiento, los que no se registraban en ese lugar, es decir, no se dejaba constancia de su detención e ingreso a la Unidad en el libro de novedades. Explana que mientras estuvo allí, a veces llamaban del Departamento II para pedir que les llevaran los detenidos a la oficina que tenían en la Comandancia. Dichos detenidos eran llevados con su vista descubierta y no iban esposados. Sin embargo, le parece que había otro grupo de detenidos que eran llevados hacia la Compañía de Plana Mayor, que iban con su vista vendada. Respecto de su consulta, expone que el Oficial de Inteligencia del Regimiento era el **Capitán Nelson Ubilla Toledo**, quien trataba junto a su grupo el tema de los detenidos. Tiene entendido que todos los Oficiales concurrían al lugar donde trabajaba **Ubilla** y su grupo, porque cuando llegaban con detenidos debían informarle al Capitán respecto de la razón por la cual estas personas estaban privadas de libertad. También debían darle cuenta al Fiscal respecto de lo mismo, que en 1973 correspondía al Mayor **Jofré**, quien se hizo asesorar por personal de la Corte de Apelaciones de Temuco y por un abogado de nombre **Alfonso Podlech**. A este abogado lo veía casi todos los días cuando llegaba al Regimiento. Siempre lo vio de civil, salvo en los Consejos de Guerra, en que vistió uniforme. Los Consejos de Guerra se efectuaron en el Casino de Oficiales. Explica que muchos detenidos que estaban en la guardia fueron llamados a declarar a la Fiscalía Militar ubicada en la Comandancia. Varios de estos fueron dejados en libertad y otros fueron llevados a la cárcel. No recuerda que hayan quedado persona detenidas en la guardia por más de algunas horas o que hubiesen sido llevados desde la Fiscalía hacia el Departamento II. A continuación se refiere a las personas que recuerda haber visto detenidas en el Regimiento. No le consta que haya habido detenidos en el gimnasio del Regimiento, pero es probable. Por consiguiente, se refiere al rol que hizo de clase de servicio en su Compañía. El Tribunal le lee las declaraciones extrajudicial y judicial prestadas por

José Raúl Inzunza Reyes de fs. 3.307 y 3.310, respecto de lo cual el deponente declara que supo de interrogatorios efectuados en la Compañía de Plana Mayor y Servicio, nunca participó de ellos. Respecto de lo que señala esta persona en el sentido que el deponente habría participado en detenciones junto con él, rememora el hecho que se relata. En esa oportunidad, excepcionalmente el Capitán **Ubilla** le pidió que fuera a dejar un detenido a la cárcel, por lo que se hizo acompañar de un Conscripto, refiriéndose a esos hechos. El Tribunal lee la declaración de **Martin Huiriqueo Antuhuil** de fs. 3.342 a 3.343, respecto de lo cual el deponente invoca que no sabía que los Cabos **Lizama, Labraña, Silva y Saldaña** tenían que ver con detenidos. Reitera que no participó en interrogatorios o torturas de detenidos. Se comentaba eso sí, que los hermanos **García Covarrubias** participaban de estas actividades, sobre todo el menor de ellos que era medio loco, sometiendo a los Conscriptos a actividades de instrucción no programadas durante las noches.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2015, rolante de fs. 1.380 a 1.381 (Tomo IV), inquiriere que para 1973 estaba encuadrado en la Compañía de Plana Mayor y Servicios, cuyo Comandante era el Capitán **Nelson Ubilla Toledo** y en la Sección Telecomunicaciones el mando estaba a cargo del Sargento **Luis Peña Andaúr**. Después del Golpe Militar aparte de los servicios de guardia debía hacer instrucción a la Sección de Telecomunicaciones. Manifiesta que efectivamente hubo personas detenidas al interior del Regimiento Tucapel, quienes eran mantenidas por breve tiempo en la guardia de la unidad. Ellos eran llamados a declarar en la Fiscalía Militar ubicada en el edificio de la Comandancia. Ostenta que nunca tuvo relación con detenidos, salvo en una oportunidad en que ante la falta de conductores tuvo que ir a dejar un detenido a la cárcel, refiriéndose a estos hechos. Recuerda que efectivamente el Capitán **Ubilla** trabajaba con un grupo de detectives en la Compañía de Plana Mayor, donde interrogaban detenidos en la sala de instrucción, reiterando que nunca participó de esas actividades. Respecto a su consulta, puntualiza que los detectives trabajaban tanto en la Fiscalía Militar como en la sala de instrucción con el Capitán **Ubilla**. Los Sargentos **Moreno Schonherr** trabajaban en la Sección Segunda, pero desconoce si interrogaban personas. Posteriormente se refiere a los hechos racionados con **Rubén Morales**, conocido como "milico" Morales. Los nombres de **Daniel los Ángeles Mateluna Gómez, José María Ortigosa Ansoleaga** y otros, no le resultan conocidos, salvo el apellido **Ortigosa** que asocia con un rumor que decía que esta persona habría sido detenida por personal de la FACH y que habría sido dejado en libertad tras pagar una alta suma de dinero.

A.38 CARLOS SAMUEL BOBADILLA OJEDA (27 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 12 de mayo de 2010, rolante de fs. 774 (Tomo III), aproxima que vio detenidos al interior del Regimiento Tucapel, quienes eran mantenidos en el gimnasio del Regimiento y en una dependencia ubicada entre la Plana Mayor y la de Morteros. El acceso a esos lugares era restringido. Solo concurrían allí los miembros de la Sección Segunda, entre los que recuerda a los Sargentos **Moreno** y **Schönherr**. Además de los Oficiales **Vásquez Chahuán**, **Espinoza Ponce** y en alguna oportunidad vio al Teniente **Uribe Moroni** transitar a ese sector.

A.39 OMAR BURGOS DEJEAN (26 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 780 a 782 (Tomo III); 909 a 910 (Tomo III); y de fs. 993 a 994 (Tomo III).

En declaración judicial de fecha 21 de junio de 2007, rolante de fs. 780 a 782 (Tomo III), precisa jamás perteneció a la Comisión Civil, pero en noviembre de 1973 fue destinado al Regimiento Tucapel, como agregado para hacer un archivo político. Quedando a disposición de **Nelson Ubilla**. Proclama que antes del Golpe Militar se desempeñaba en la Comisión Civil junto con **Fritz Vega**. El día 13 de septiembre fue llamado a acuartelarse y como Comisión Civil le correspondió detener a unas personas, las cuales fueron trasladadas hasta el Regimiento y en dicho lugar inventaron un enfrentamiento y les dieron muerte a estos detenidos, pero propone que nada tiene que ver. En cuanto al SICAR, refiere que solo comenzó a funcionar en el año 1974. Relata que los días 11 y 30 de septiembre como Comisión Civil le correspondió cumplir órdenes emanadas desde la Fiscalía Militar, Fiscal **Polvich**. En lo pertinente, interrogado respecto si le correspondió realizar como integrante de la Comisión Civil detenciones por motivos políticos, dice que por órdenes de la Fiscalía. En relación a quienes interrogaban a los detenidos políticos dentro de la Segunda Comisaría, señala que **Fritz y Riquelme**, este último a veces salía con la Comisión Civil, pero nunca realizaron interrogatorios con torturas, ya que nunca se empleó la fuerza, simplemente se limitaban a preguntar datos de las personas así como datos políticos. A la pregunta en relación a aquellos casos que la militancia fuera del MIR, Partido Comunista o Partido Socialista, qué pasaba con esos detenidos y quién daba las órdenes, el deponente soflama que quedaban a disposición de la Fiscalía Militar o de Carabineros, según quien diera la orden de detención y algunos eran llevados al Regimiento. Inquirido para que diga si personalmente le correspondió trasladar detenidos desde la Segunda Comisaría hasta el Regimiento Tucapel o Base Maquehue, afirma que en algunas oportunidades le

toco trasladar detenidos hasta el Regimiento Tucapel, en la guardia, mediante un documento. Dichos traslados los efectuaban en una camioneta roja y siempre en compañía de **Fritz**, quien iba a cargo. Suma que **Fritz** como Suboficial y los servicios dependían del Subcomisario. Interrogado sobre si tiene conocimiento de que los detenidos políticos eran sacados con destino desconocido, sustenta que habían comentarios del Capitán **Callis**, relativos a que mataba gente o así.

En declaración judicial de fecha 12 de octubre de 2010, rolante de fs. 909 a 910 (Tomo III), aduce que efectivamente estuvo como agregado al Regimiento Tucapel desde principios de octubre de 1973 hasta los primeros días de marzo de 1974, reiterando que estuvo bajo el mando del Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. El Tribunal le pregunta si le concernió tomar declaraciones o detener personas en su estadía en el Regimiento, respecto de lo cual el deponente apunta que no, solo se dedicó a hacer archivos y entregar salvoconductos, invocando que trabajó con dos Conscriptos en el Regimiento Tucapel uno de apellido **Jaque** y otro **Cid**. Se le lee declaración de fs. 1.293 que el declarante prestó ante el Ministro Solís en junio de 2007, respecto de lo cual utiliza que efectivamente era un comentario generalizado, que lo del supuesto asalto al polvorín fue un montaje, refiriéndose a aquello.

En declaración extrajudicial de fecha de 18 de abril de 2012, rolante de fs. 993 a 994 (Tomo III), acota que ingresó a Carabineros de Chile en 1968 y para 1973 se desempeñaba en la Comisión Civil de la Segunda Comisaria, la que estaba integrada por el Sargento **Juan Fritz Vega**, el Cabo **Opazo**, los Carabineros **Verdugo**, **González** y **Garrido**. Respecto a su agregación al Regimiento de Infantería N°08 "Tucapel" de Temuco, advierte que esta se concretó los primeros días del mes de octubre de 1973, rememorando que el mando de la Comisaria lo envió a esa Unidad Militar a prestar sus servicios. Hace presente, que el día en que llegó a dicho lugar se tuvo que presentar con el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, quien dispuso que se hiciera cargo de confeccionar un archivo político. Recuerda que se le otorgó una oficinal, la cual estaba llena de papeles con datos de personas que habían pertenecido a instituciones públicas y de partidos políticos. Refiere que el Capitán **Ubilla**, le ordenó confeccionar ficha a cada una de las personas que indicaban los papeles que ahí se encontraban, por lo que tuvo que clasificar la información de acuerdo a la tendencia política de cada una de ellas. Para estos efectos, se le asignó como compañero de labores un Conscripto de apellido **Cid**, **Ismael** cree que era su nombre. Respecto al grupo de Detectives que operaba al interior del Regimiento, recuerda solamente a los de apellidos **Quiroz** y **Luco**. Refiere que a pesar de estar agregado al Regimiento, en más de una oportunidad salió a efectuar

detenciones emanadas de la Fiscalía Militar, en esas oportunidades era requerido por el Sargento de Carabineros **Juan Fritz Vega**, a quien se le hacía llegar las ordenes. Aduce que no le correspondió realizar interrogatorios al interior del Regimiento, tampoco sabe si los Detectives agregados al Regimiento efectuaban esas labores. Recuerda que el Sargento **Schönherr** y **Moreno** trabajaban en la Sección Segunda del Regimiento, pero no recuerda haber visto que tomaran declaraciones a los detenidos. En lo concerniente refiere que nunca vio sacar cadáveres desde el interior del regimiento, a pesar que en más de una oportunidad se emitían **Bandos Militares** que señalaban el fallecimiento de detenidos por la acción de los Militares, argumentando que estos detenidos se les aplicaba la “ley de fuga”.

En declaración judicial de fecha 02 de junio de 2003, rolante de fs. 2.977 a 2.979 (Tomo VIII), sustenta que después del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973 pasó a integrar un Organismo de Inteligencia cuyo nombre no le fue informado, puede haber sido Comisión Civil o SICAR; en realidad es lo mismo, pues eran los mismos funcionarios, solo es un problema de tiempo ya que al principio se llamaban Comisión Civil y luego SICAR, que significa Servicio de Inteligencia de Carabineros. Respecto a quienes eran los miembros del este Servicio de Inteligencia, recuerda a **Opazo Inzunza**, al Cabo 1° **Navarrete** apodado “**el perno**” y aun funcionario de apellido **Gonzalez**; y en cuanto a los Oficiales solo puede mencionar al Teniente **Riquelme**. Respecto del Capitán **Ramón Callis**, dice que efectivamente lo conoció era un Oficial que estaba medio loco al que apodaban “**el Carnicero**”, pero él nunca trabajó con su grupo, sino que había traído su gente desde Pitrufquén y dentro de ellos recuerda solo a un funcionario de apellido Lukowiak. Respecto de **Osvaldo Muñoz Mondaca** y **Luis Silva Aguayo**, difunde que efectivamente los conoció siendo Teniente y Suboficial respectivamente. Ambos trabajaban en la Tenencia Coilaco, pero tampoco trabajaron en su grupo de Inteligencia. Preguntado por las labores específicas que cumplía el Servicio de Inteligencia, atestigua que lo único que hacían era dar cumplimiento a los requerimientos de la Fiscalía Militar, es decir, recibían una orden de aprehensión y acto seguido concurrían al domicilio, en ese lugar consultaban por la persona, todo esto de día, no horas de toque de queda ni efectuaron detenciones nocturnas. Preguntado respecto de si el Grupo de Inteligencia de la 2°Comisaria de Carabineros interrogaba detenidos, manifiesta que sí, ellos interrogaban en una sala de espera que estaba cerca de la guardia pero jamás se hizo uso de la fuerza, nunca vio a ningún colega golpear a un detenido. Preguntado por el Tribunal respecto de la razón por la cual interrogaban detenidos si solo cumplían Órdenes Judiciales, el deponente urde que solo se

interrogaban detenidos para consultárseles por sus vinculaciones políticas con ocasión de alguna denuncia y luego se les dejaba en libertad o se les pasaba a la Fiscalía. En ocasiones llegaba alguna persona que denunciaba a algún vecino acusándolo de ser de algún Partido Político de izquierda o extremista, ante lo cual iban a buscarlo, lo llevábamos a la Comisaria y se interrogaba al tenor de esa denuncia, y si el detenido negaba esa acusación se le dejaba inmediatamente en libertad. Respecto a sus labores específicas en la SICAR, reitera que cumplía las Ordenes de Detención emanadas por la Fiscalía Militar, cuyo Fiscal era un señor **Podlech**. Respecto de las dependencias que ocupaba la SICAR, en un primer tiempo estaba en la 2° Comisaría y todos los funcionarios que trabajaban en ese servicio vestían de civil. Preguntado respecto de la orden que existía en relación a que en los Retenes y Tenencias no se podía tener detenidos políticos, sustenta que eso es efectivo y como en esas Unidades no habían vehículos, los efectivos de la misma 2° Comisaria iban a buscarlos en vehículos policiales. Preguntado si personalmente le tocó ir a buscar detenidos a los retenes o Tenencias, el deponente manifiesta que no, ya que no era chofer, los choferes, que eran del Servicio de Inteligencia, esto es **Fritz** como **Navarrete** eran conductores. Respecto de sus funciones específicas como Servicio de Inteligencia en los primeros días después del 11 de Septiembre de 1973 en que quedaron acuartelados, precisa que le correspondió ser centinela exterior, jamás le correspondió custodiar calabozos. Delibera que quienes interrogaban a los detenidos por motivaciones políticas era el "**Perno Navarrete**" y el "**Carnicero Callis**", pero jamás los golpearon ni maltrataron. Desarrolla que el "**Perno Navarrete**" era de su grupo. En cuanto a las entradas que tiene la 2° Comisaría, descarga que tiene dos, ambas por calle Claro Solar, una que es la principal y otra que era para ingreso de vehículos que está como a veinte metros de la principal. Por otra parte, destaca que su grupo de trabajo era el **Sargento Fritz, Opazo, Navarrete, González** y el mismo, siendo **Fritz** el de más alta graduación. Preguntado respecto de si **Fritz**, sobre si mató a dos colegas, responde el declarante que eso es efectivo, en una ocasión **Fritz** ingresó a un local a pasar un parte de alcoholes y sorprendió a los dos colegas bebiendo, armándose una pelea en la que asesinó a un Cabo de nombre **Lorenzo Maldonado Martínez** y a un Paramédico de apellido **Urta**, cuyo nombre no recuerda.

A.40 JORGE GONZALEZ CURIQUEO (18 años de edad a la fecha de los hechos) quien declaró a fs. 805 a 806 (Tomo III); y de fs. 816 a 817 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 08 de julio de 2010, rolante de fs. 805 a 806 (Tomo III), adosa que ingresó a cumplir con su Servicio Militar Obligatorio en abril de 1973 al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la Segunda Compañía de Cazadores, al mando del Comandante Teniente **Manuel Vásquez Chahuán**, perteneciendo a la Primera Sección de esta Compañía a cargo del Sargento **Isaías Rubilar Alarcón**. En cuanto a las permanencias de personas detenidas al interior del Regimiento Tucapel, dice que muchas veces vio personas detenidas al interior del Regimiento, las que estaban con la vista vendada, también recuerda que vio a varios Centinelas del Cuartel pasear a detenidos cuyas identidades desconoce. A continuación se refiere a los hechos relacionado con el “Polvorín de la Isla”. Sobre el Teniente **Manuel Espinoza Ponce**, afirma que se encontraba a cargo de la 4ta. Sección de su Compañía, agregando que este hombre era muy malo con los Conscriptos y le gustaba de andar metido con los detenidos que estaban en el gimnasio del Regimiento, al igual que todos los Oficiales de la Unidad. Finalmente se refiere a la detención de su padre.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2010 que rola a fs. 816 a 817 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 1.264 a 1.265 (correspondiente a la declaración precedente). Por consiguiente, se refiere a los hechos relativos al asalto al polvorín de la Isla Cautín. En lo pertinente reitera que vio varios detenidos al interior del Regimiento Tucapel, quienes estaban con la vista vendada y eran mantenidos en el gimnasio de la Unidad.

A.41 CARLOS LUCO ASTROZA (36 años a la época de los hechos) quien declaró a fs. 881 a 882 (Tomo III); 989 a 990 (Tomo III); 1.297 a 1.299 (Tomo IV); 1.300 (Tomo IV); y de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2006, rolante de fs. 881 a 882 (Tomo III), anexa que para 1973 se encontraba prestando funciones como conductor de vehículo de la Prefectura. Sin embargo, por diferencia de carácter con el Prefecto de la época don **Carlos Aranda**, fue enviado en calidad de agregado a cumplir funciones en la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel, ubicada en calle San Martín N°750, a partir del 14 de septiembre. Una vez que se presentó en ese Destacamento tomó contacto con los demás funcionarios de su institución que ya se encontraban en calidad de agregados a la Fiscalía del Tucapel, recordando que el más antiguo era **Aquiles Poblete Miller**, pero quien organizaba el grupo era **Rigoberto Ortiz Lara**, quien se entendía con la gente de la Fiscalía. Dentro de este grupo de funcionarios policiales estaban también **Daniel San Juan Clavería, Hernán Raúl Quiroz**

Barra, Luis Morales Toledo y Carlos Zurita. Asevera que en más de una oportunidad pudo ver a **Alfonso Podlech** al interior de la Fiscalía Militar de Tucapel, sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme, sin dejar de mencionar que para todos los efectos era **Luis Jofré** el Fiscal Militar. Adiciona que también se destacaba la figura del Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, a quien recuerda como el hombre que tomaba las decisiones en cuanto a los detenidos junto a sus ayudantes los Sargentos **Schonherr Frías** y **Orlando Moreno Vásquez**. En relación a los vínculos de los grupos dedicados a trabajar los temas políticos para el año 1973 indica que su amigo **Orlando Garrido Riquelme**, funcionario de la planta de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile y de la dotación del grupo N°3 de helicóptero de la Base Aérea Maquehue de Temuco, a quien conoció con antelación al 11 de septiembre de 1973 y compartían actividades sociales y familiares, cumplía funciones como chofer de la Base en distintos vehículos, era un hombre muy reservado y que en ocasiones se hacía acompañar por otro funcionario, quien tenía una mancha de quemadura en el costado derecho de su cara, de quien nunca supo su nombre y que según los dichos de **Garrido** disparaba a quien fuera sin problema alguno. Afirmo que **Garrido** también se relacionaba con el funcionario de Carabineros de la Comisión Civil apodado “**El huaso**” de apellido **Fritz Vega**. Posteriormente se refiere a lo ocurrido con **Luis Almocid Dúmenez** y **Omar Venturelli Leonelli**.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de mayo de 2011, rolante de fs. 989 a 990 (Tomo III), comienza señalando que se ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile en 1963 y para el 11 de septiembre de 1973 fue designado a cumplir funciones al Regimiento Infantería N°8 Tucapel de Temuco, quedando en calidad de agregado a este Destacamento Militar hasta el de noviembre de dicho año. Hace presente que cuando llegó ya se encontraban agregados el Subcomisario **Poblete**, los Detectives **Ortiz, Morales, San Juan y Quiroz**, recordando que estos policías se encontraban trabajando en una oficina de la Comandancia del Regimiento, lugar donde se imagina trataban con los detenidos, ya que siempre se veía al Detective **Morales** llevar detenidos desde la guardia del Regimiento hasta la oficina donde trabajaban. Hace presente esta situación, porque desde su llegada al Regimiento, se le ordenó por parte del Detective **Ortiz** que debía permanecer permanentemente en la guardia del Regimiento, quedando a disposición de los Detectives para efectuar solamente citaciones, negando que en alguna oportunidad haya efectuado alguna detención o allanamiento, o haber salido como conductor de los Militares. A continuación se refiere a los detectives agregados a dicho Destacamento Militar.

En declaración judicial de fecha 08 de abril de 2013, rolante de fs. 1.297 a 1.299 (Tomo IV), añade que para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como conductor de la Policía de Investigaciones de Temuco, su jefe directo era el Prefecto **Carlos Aranda**. Reiterando que fue agregado al Regimiento Tucapel, que en ese lugar estaban los detectives **Quiroz, Poblete, San Juan y Morales**, y que todos los Detectives quedaron bajo las órdenes del Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, estando además sujetos a lo que la Fiscalía Militar dispusiera. En lo pertinente comunica que le correspondió acompañar patrullas Militares hacia Cunco y Curarrehue narrando los detalles de su cometido. Por consiguiente, afirma que en el Regimiento dependían directamente del Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Apunta que el Mayor **Jofré** “no se metía en nada”, por lo que a su parecer el abogado **Alfonso Podlech** estaba a cargo de ello en la Fiscalía Militar, adicionando que esta persona andaba de uniforme en el Regimiento. Respecto a los detenidos en el Regimiento Tucapel, ignora quienes interrogaban a estas personas, pero supone que eran los demás Detectives agregados más el Capitán **Ubilla** y los Suboficiales **Moreno Vásquez** y **Schönherr**, que siempre andaban con este Oficial. Recuerda a **Germán Cantarutti Pereda**, quien era de la FACH, siendo posible que el deponente haya integrado patrullas junto con esta persona, pero siempre acompañando a algún Detective, aunque no lo recuerda con claridad. Rememora a **Luis Alberto Chihuailaf Arriagada** y a sus hermanos, quienes eran de Cunco al igual que el deponente, refiriéndose a estos. Apoya que en aquel tiempo no tenía poder de decisión sobre ningún aspecto de los operativos, ya que sólo era conductor.

En diligencia de careo entre **Luis Alberto Chihuailaf Arriagada** y **Carlos Luco Astroza**, de fecha 08 de abril de 2013, rolante a fs. 1.300 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 219 (correspondiente a la declaración precedente). Recuerda a **Luis Alberto Chihuailaf Arriagada** allí presente, a quien vio detenido en el Regimiento Tucapel de Temuco. Niega haber vestido de Militar. Sí rememora a un Reservista de apellido **Miguel**, pero nunca trabajó con él. Y del mismo modo recuerda a un señor de apellido **Vidal** en el Regimiento, respecto de quien nunca supo qué hacía, pero al parecer era de Inteligencia, sin embargo, tampoco trabajó con él. Se mantiene en sus dichos

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV), reitera que para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como conductor de la Policía de Investigaciones de Temuco, siendo su jefe directo el Prefecto **Carlos Aranda**; y que fue destinado al Regimiento Tucapel, donde estuvo bajo las órdenes del Comisario **Ortiz**, conjuntamente con él

estaban además los Detectives **Quiroz, Poblete, San Juan y Morales**, quedando todos los Detectives bajo las ordenes de **Nelson Ubilla Toledo**, sujetos a la Fiscalía Militar. En dicho lugar, le correspondió salir a efectuar citaciones siempre con funcionarios de su institución. Insiste que acompañó a unas patrullas Militares hacia el sector de Cunco y Curarrehue, refiriéndose a aquello. En lo pertinente, vuelve a señalar el Mayor **Jofré** no se metía en nada, por lo que le parece que el abogado **Alfonso Podlech** estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el Regimiento y se entendía con el Capitán **Ubilla**. Aclara que nunca presencié una conversación entre ellos, pero que era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de Inteligencia que ejercía **Ubilla**. Adicionando que tanto **Podlech** como **Ubilla** estaban constantemente en la Fiscalía Militar. Por consiguiente se refiere a otros hechos. Consultado por **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga** y otros, arguye que no le resultan conocidos, tampoco los recuerda como detenidos en el Regimiento Tucapel de Temuco en 1973. En lo pertinente, asegura que su función era solo conducir el vehículo a su cargo y jamás ingresó hacia el interior de la Unidad Militar. Aseverando que en aquel tiempo no tenía poder de decisión sobre ningún aspecto de los operativos.

A.42 EDISÓN CHIHUAILAF ARRIAGADA (35 años a la época de los hechos). En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2012, rolante de fs. 950 a 953 (Tomo III), atestigua que para septiembre de 1973 se desempeñaba como director de la Escuela N°27 de la Localidad de Metrenco, comuna de Padre Las Casas y vivía en una casa anexa al establecimiento. Además participaba en organizaciones campesinas del sector y era militante del Partido Radical. Ocurrido el Golpe Militar fue destituido de su cargo y paso a formar parte del cuerpo de profesores del mismo establecimiento, por orden de la Dirección Provincial de Educación. Los primeros días de octubre de 1973 llegó hasta su domicilio una patrulla Militar que tenía órdenes de detenerlo, siendo trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco. Asevera que en ese lugar permaneció todo el día en una dependencia ubicada en la guardia de la Unidad Militar. Aduce que estando en ese lugar pudo ver muchas personas detenidas, algunas de las cuales habían sido torturadas, quienes presentaban muestras de haber sido golpeados, especificando a alguno de ellos y las condiciones en que las vio. Hace presente que también presencié la llegada de otra persona joven que había sido traído de Punta Arenas. Afirma que durante ese mismo día que estuvo detenido en la guardia del Regimiento Tucapel pudo ver al abogado **Alfonso Podlech**, vestido de traje campaña, calzando botas y dos pistolas al cinto. Este hombre entró a la

guardia visiblemente alterado, y comenzó a increpar a los Soldados a quienes les habría dicho “Oye po esta es la última vez que les digo, no me dejen entrar más mujeres y viejas de mierda, que me tienen loco con sus reclamos. Yo ya se los dije y si no me hacen caso los hago fusilar a ustedes también”. Precisa que esto lo escucho, así como también pudo ver a **Podlech** porque la puerta de la celda donde estaban los detenidos se les quedó abierta a un Soldado. Comenta que poco rato después entró un Soldado muy apesadumbrado, por lo sucedido con el abogado **Podlech**, al punto que se quejó diciéndole que estaba harto de lo que estaba sucediendo y que no hallaba la hora de que todo esto terminara. Además indicó hacia el lugar donde **Podlech** había estado y señaló que “ahora mandaban ellos”, como dejando entrever que había personas ajenas al Regimiento con mando. Expone que al final de ese día lo dejaron en libertad, pero pocos días después fue detenido por Carabineros de Padre Las Casas y posteriormente por Militares, quienes lo volvieron a trasladar al Regimiento Tucapel y luego a la cárcel de Temuco, detallando lo que vivió.

A.43 RAÚL CERDA AGUILEF (19 años a la época de los hechos).

En declaración judicial de fecha 25 de abril de 2012, rolante de fs. 954 a 956 (Tomo III), ratifica su declaración judicial de fs. 636 (otorgada en causa diversa). Blasona que ingresó hacer el servicio militar el 02 de marzo de 1972 en el Regimiento Tucapel de Temuco, encuadrado en la Compañía Morteros, refiriéndose a la dotación que recordaba. En lo pertinente recalca que hubo muchos detenidos en el Regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973, los que eran mantenidos en la guardia de la unidad, en el gimnasio chico y en el gimnasio grande. A cargo de los interrogatorios de los detenidos había un grupo de Oficiales, Suboficiales y civiles. Entre los Oficiales recuerda a los capitanes **Nelson Ubilla Toledo**, a los Tenientes **Jaime García Covarrubias** y **Alejandro Rubio Valladares** y a los Subtenientes **Raimundo García Covarrubias**, **Manuel Espinoza Ponce** y **Carlos Oviedo Arriagada**. De los Soldados recuerda al Suboficial Mayor **Quilodrán**, Sargento **Silva San Martín**, **Mario Arias Díaz** y **Alberto Cerda Miere**, este último conductor, **Víctor Juvenal Del Río Poveda**, **Albino Krausse Álvarez**, quienes trabajaban en Inteligencia y vestían de civil. Todos ellos pertenecían a la Plana Mayor que dependía de **Ubilla**. Agrega que también recuerda a **Luis Peña Andaúr**, quien siempre salía con el Teniente **Rubio Valladares**. De los Soldados Clases que recuerda que trataban con los detenidos estaba el **Sargento Lizama**, Cabo **Castro**, Cabo **Schaaff**, Cabo **Barrenechea**, este último era del grupo especialmente entrenado para estos efectos. Recordando también al Sargento **Mario Arias Díaz** de la Segunda de

Cazadores. Relata que la Compañía de Cazadores participaba en los asuntos con los detenidos, el Sargento **Santisteban**, Sargento **Guajardo**, Cabo **Labraña Luvecce** y el Conscripto **Sigisfredo Melo**. A continuación reitera y detalla a las personas de su Compañía relacionados con el tema de los detenidos. Expresa que era conocido por todos en el Regimiento que los detenidos eran torturados en una dependencia ubicada en la Compañía de Plana Mayor y Servicios. Hasta ese lugar llevaban a los detenidos para interrogarlos, pudiendo ver a los Oficiales antes indicados pasar con detenidos hacia ese lugar o mandar en su nombre a buscar detenidos al gimnasio o a la guardia para ser llevado a la sala antes mencionada. Esto lo sabe porque su Compañía estaba encargada de efectuar guardias en el perímetro interior del Regimiento y constantemente podían ver estas actividades.

A.44 ERASMO RICARDO VILLANUEVA SIMÓN (22 años a la época de los hechos). En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2012, rolante de fs. 968 a 971 (Tomo III), colige que para 1973 se desempeñaba en un oficina de contabilidad y no tenía militancia política. En lo pertinente, refiere que en noviembre de 1973 llegaron hasta su casa una Patrulla de Militares del Regimiento Tucapel, quienes allanaron su domicilio cuando él no se encontraba, pues estaba en la oficina, recibiendo un llamado telefónico desde su casa donde le contaron lo que sucedía. Se dirigió hasta su domicilio, donde un Suboficial le dijo que por orden del Capitán **Nelson Ubilla Toledo** quedaba detenido. Lo llevaron hasta la guardia del Regimiento Tucapel, donde fue ingresado a una dependencia contigua donde habían varios detenidos, permaneció dos días en ese lugar, durante ese periodo iban sacando a los detenidos hacia otro sector, quienes regresaban más tarde con visibles signos de haber sido torturados. Recordando que en ese lugar existía un banco similar a los que están en las plazas que era utilizado para dejar a los prisioneros que quedaban en muy malas condiciones. Acota que al tercer día fue llevado hacia una dependencia ubicada en una de las cuadras donde se alojaban los Conscriptos. En esa sala pudo ver una mesa larga donde estaban sentadas cinco personas entre las que recuerda un Oficial vestido de uniforme de la Fuerza Aérea de Chile y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, persona que ubicaba de vista con anterioridad. Luego de que el deponente revelara su identidad, el abogado **Alfonso Podlech** buscó un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel. Luego de mirarlo dio una orden señalando que quedaba detenido y que al día siguiente pasaba al interrogatorio, siendo regresado a la sala de la guardia. Al día siguiente **Oscar Inostroza Segura** junto a dos Conscriptos, le dijo que por órdenes superiores

debía llevarlo a interrogatorios, lo sacó de la guardia y tras caminar unos pasos le venda la vista. Sin embargo por la orientación en que quedó antes de ser vendada su vista y la dirección que siguieron al caminar se percató que se dirigían hacia la misma sala donde había estado el día anterior donde estaba **Podlech**. Precisa con detalle los que le sucedió durante el interrogatorio, donde le aplicaron electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de agredirlo. Presume que eran las mismas personas que vio el día anterior, por el lenguaje que utilizaban. Al día siguiente fue sacado nuevamente a la sesión de torturas, refiriéndose detalladamente sobre ésta. Adiciona que alrededor del octavo día fue llevado a la cárcel en un camión junto a cuatro o cinco personas más, donde estuvo hasta el 22 de diciembre de 1973. Rememora que una semana antes fue llevado al Regimiento Tucapel donde lo ingresaron a una dependencia donde se entrevistó con el abogado **Alfonso Podlech**, quien le dijo que por decisión del Tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara. Nadie le dio ninguna explicación por lo sucedido y ante el temor que esto le generó, decidió irse a Argentina.

A.45 FRANCISCO JERÓNIMO MATTA ITURRA. (29 años a la época de los hechos). En Declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante a fojas 1.000 a 1.001 (Tomo III), dice estar seguro que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien interrogó a su padre y a Héctor Aguayo Olavarría, porque su padre se lo dijo. Además, indica que a mediados de octubre de 1973 concurrió a conversar con Alfonso Podlech Michaud en compañía del ex diputado Hardy Momberg, quien en aquel tiempo era miembro del Partido Nacional. Se entrevistaron con él en una oficina ubicada al interior del Regimiento. En esa reunión Podlech se hizo acompañar de los Capitanes Nelson Ubilla y Mario Alvarado. Cuenta que Hardy Momberg le dijo a Podlech que si expulsaba del país al padre del declarante, él (Momberg) también se iría. Entonces Podlech le contestó que lo iba a echar del país de todas formas porque su padre era financista de la guerrilla del MIR y del Partido Socialista. Recuerda que en una fecha posterior, el abogado Sergio Zapata Camus fue a conversar con Podlech, en representación del padre del declarante. Dice estar seguro que Podlech era el verdadero Fiscal Militar en Temuco y utilizaba al Mayor Jofré como “pantalla”, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y afirma que pudo comprobar su autoridad cuando conversó con él. En lo pertinente, comenta que su padre le dijo que Podlech junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a Aguayo y a otra persona quedarse en la Fiscalía para ser

interrogados. Acota que **Podlech** ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros, refiriéndose a éstos en detalle.

A.46 DANIEL ARNOLDO AGUIRRE MORA (41 años a la época de los hechos), quien declaró a fs. 1.005 a 1.008 (Tomo III); 1.104 a 1.105 (Tomo IV); y a fs. 1.129 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.005 a 1.008 (Tomo III), en lo pertinente conjetura que los funcionarios asignados al Regimiento pasaron a depender de la Inteligencia Militar que estaba bajo las órdenes del Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Por su grado, el grupo de detectives del Tucapel estaba bajo las órdenes de **Aquiles Poblete Müller**. Luego de un mes y medio o dos este Oficial y **Ortiz** se retiraron del Regimiento para volver a sus funciones normales. Dos meses más tarde lo hicieron el resto de los detectives, menos **Quiroz**, quien quedó como enlace, y **Luco** que regresó en abril del año 1974. Afirma que estos funcionarios fueron desleales con la institución y con el resto de sus compañeros y los culpa de las torturas que sufrieron los detectives que posteriormente fueron detenidos. Respecto de **Alfonso Podlech Michaud**, puede señalar que un año antes que ocurriera el Golpe Militar, éste abogado iba al Cuartel de Investigaciones a requerir información de tipo político. Recuerda que se entrevistaba con el **Prefecto Leonel Hormazábal** y con el detective **Quiroz**. Sabe que le entregaba esta información a alguien en el Regimiento Tucapel, pero desconoce a quién. Esta información la obtenía desde los archivos que la Inteligencia de Investigaciones tenía y la usaba con el grupo de Patria y Libertad de Temuco, según comentaban los mismos funcionarios. Después del 11 de septiembre de 1973 **Podlech** siempre se mantuvo muy cercano y activo adentro del Regimiento Tucapel. Dice que incluso en una oportunidad en que el Prefecto lo presentó ante la "Junta Chica" de Temuco, **Podlech** estaba con ellos. Anexa que en una oportunidad en el mes de noviembre de 1973, con ocasión de haber quedado como Prefecto Subrogante, se produjo una fuga de personas que estaban detenidas en el Regimiento Tucapel, los que fueron dados de baja. Entonces concurrió al Regimiento para pedir antecedentes sobre este hecho y tenérselos al Prefecto cuando regresara. Cuenta que al llegar a ese lugar se entrevistó con el Comandante **Iturriaga Marchesse** y con **Alfonso Podlech**. Entonces el Comandante le dijo que sólo le comunicara al Prefecto que los detenidos habían intentado fugarse y que eso era todo. Por consiguiente se refiere a los funcionarios de Investigaciones que fueron detenidos, detallando cada caso. En lo pertinente comenta que el detective **Ortiz** desde el primer momento le solicitó volver a la unidad, porque no le gustaba trabajar en el Tucapel. Esta

persona fue obligada por su superior **Aquiles Poblete Müller** a ir a trabajar a esa Unidad Militar. **Ortiz** le comentó que en alguna ocasión algunos detenidos murieron en las sesiones de interrogatorios y torturas. Además, dijo que los Militares no sabían interrogar, porque maltrataban demasiado a los detenidos al punto de dejarlos semi inconscientes. Dice no saber qué Oficiales del Ejército practicaban interrogatorios en el Tucapel, pero sí recuerda que el Capitán **Nelson Ubilla Toledo** y el Teniente o **Capitán Manuel Vásquez Chahuán** concurrieron en dos o tres ocasiones a buscar detenidos políticos para llevárselos al Regimiento. Estos detenidos eran casi todos "miristas". Finalmente, dice recordar el nombre de una persona de apellido **Ortigosa** que fue ejecutada por órdenes del Comandante **Iturriaga** confabulado con el Comandante **Pacheco** de la FACH. Todo esto fue hecho para quitarle una maleta con dólares que esta persona portaba. Indica que esto lo supo la familia de **Ortigosa**.

En diligencia de careo entre Daniel Arnoldo Aguirre Mora y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.231 a 3.234 (correspondiente a la declaración precedente). No reconoce a la persona con quien se le carea. En lo pertinente y ante la pregunta del Tribunal responde que el grupo de Detectives que se fue al Regimiento Tucapel trabajó para la Fiscalía Miliar, según tiene entendido. Añade que poco después del 11 de septiembre aparecieron tres Oficiales de Ejército, Carabineros y Fuerza Aérea y le entregaron al Prefecto una nómina con los nombres de los Detectives que querían que fueran a trabajar al Tucapel. Respecto del motivo por el cual indicó que los detectives **Luco** y **Quiroz** son culpables de las torturas recibidas por **Nambrad** y **Apablaza**, es porque seguramente recibió antecedentes en aquella época que lo hicieron pensar esto. En cuanto a **Alfonso Podlech**, indica que antes del 11 de septiembre de 1973 iba siempre al Cuartel de Investigaciones a buscar información de inteligencia. Para esto pasaba al segundo piso de la unidad y en alguna oportunidad lo vio junto al señor **Quiroz**. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Daniel Arnoldo Aguirre Mora y Alfonso Podlech Michaud, de fecha 13 de agosto de 2013, rolante a fs. 1.129 (Tomo IV), ratifica en lo pertinente su declaración judicial de fs. 3.231 a 3.234 (correspondiente a la declaración precedente). Reconoce a la persona con la cual se le carea como **Alfonso Podlech Michaud**, de quien ha hecho referencia, porque se presentó ante él previo a entrar a la Audiencia. Aclara que en el pasado el Sr. **Podlech** nunca sostuvo alguna conversación con él. Indica que quien puede avalar sus dichos (respecto a que **Podlech** iba a la Prefectura de investigaciones

para requerir información de tipo político) es el ayudante del Prefecto, cuyo nombre es **Aliar Catalán**. Se mantiene en sus dichos.

A.47 JOSÉ HERIBERTO MANSILLA GATICA (38 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 1.011 a 1.013 (Tomo III); 1.137 (Tomo IV); 1.138 (Tomo IV); 1.139 a 1.140 (Tomo IV); y de fs. 1.568 a 1.570 (Tomo V).

En ddeclaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.011 a 1.013 (Tomo III), ratifica su declaración que rola de fs. 2.007 a 2.009 (otorgada en causa diversa). Delibera que después del 11 de septiembre de 1973 se desempeñó en la Sección de Administración de Fondos del Regimiento Tucapel de Temuco, como dactilógrafo, cuyas dependencias de dicha sección se ubicaban en la Comandancia del Regimiento, que posteriormente fueron ocupadas por el Servicio de Inteligencia. Recuerda a la señora **María Meza**, quien era la Secretaria del Seguro Social. A la pregunta del Tribunal, responde que para septiembre de 1973 el Segundo Comandante del Regimiento de apellido **Jofré** no tomaba declaraciones. **Iturriaga Marchesse** sólo se ocupaba de cosas generales. El trabajo cotidiano de la Fiscalía, como interrogar y tomar decisiones con respecto de los detenidos era de **Alfonso Podlech**, se intercedía ante éste, porque él decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. Cuenta que el Comandante **Jofré** le dijo personalmente (cuando el declarante estaba de guardia) que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que habían dos mujeres, debía tomarla **Alfonso Podlech**. Fue por esa razón que intercedió ante **Podlech** por las mujeres que conocía. Anexa que la oficina de Plana Mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el Comandante **Jofré** era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba **Podlech**. Éste tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos. El declarante agrega que fue futbolista, seleccionado de Temuco, integró el primer Deportes Temuco y a don **Alfonso Podlech** le gustaba el fútbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante él por **Rolando Núñez**, quien vivió en el mismo sector que el declarante y que en una oportunidad se tomó junto a otras personas uno de los Fondos de don **Alfonso Podlech**. Cuando esta persona se presentó en la Fiscalía, don **Alfonso** le dijo que le agradeciera por haber intercedido por él, porque sí no lo hubiese hecho, hace rato lo hubiera tenido "apuntado". Lo dejó irse y lo citó posteriormente a la Fiscalía. Gracias a que intercedió por él, **Rolando** se salvó. Nunca supo más de él. A su pregunta, respecto de los hechos conocidos como asalto al polvorín, supe que todo era mentira. Atestigua que había una sala de torturas en la Primera Compañía de Cazadores. En una oportunidad andaba

buscando a su jefe **Tichahuer** y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos, mientras le decían "perrita, tu sabes eso". Afirma que **Tichahuer** y los Oficiales **García Covarrubias** tenían que ver con las torturas y los detenidos y que había personal de Inteligencia, que incluso los vigilaba a ellos. Continúa declarando que había un Cabo de apellido **Labraña** y otro grupo de Conscriptos que integraban la **Patrulla Chacal**, y que ellos le llamaban los "**chalados**". Agrega que un Arquitecto que vivía en su barrio de apellido **Rocha**, una vez le pidió que ayudara a su hermano que estaba en el extranjero, cree que en Centroamérica y tenía que venir a Chile, pero tenía prohibición de entrar al país, así que trató de ayudarlo para que pudiera hacerlo.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante a fs. 1.137 (Tomo IV), copia de la cual se encuentra a fs. 1.572 (Tomo V), ratifica su declaración prestada en causa diversa y aduce que efectivamente estuvo trabajando por una tarde con don **Alfonso Podlech Michaud**, quien tomaba declaraciones y el deponente era el dactilógrafo. Esta situación sólo fue por una tarde y fue por orden del Mayor **Jofré**. Posteriormente se refiere a las personas por las cuales intercedió, difundiendo en lo pertinente que una ocasión fue a conversar con el Mayor **Jofré**, quien lo mandó a hablar con **Alfonso Podlech**. La decisión tomada por éste fue dejar en libertad a estas mujeres y citarlas para el día siguiente. Cuenta que el Mayor **Jofré** lo mandó a hablar con don **Alfonso Podlech** porque él estaba a cargo de los detenidos.

En declaración judicial de 12 de septiembre de 2013, rolante a fs. 1.138 (Tomo IV), copia de la cual se encuentra a fs. 1.573 (Tomo IV), amplía su declaración anterior, indicando que la persona que era deportista y por la cual intercedió ante don **Alfonso Podlech** es de apellido **Núñez**. **Alfonso Podlech** lo conocía y cuando lo vio en el Regimiento, ordenó dejarlo con arresto domiciliario y además, como era vecino del declarante, este quedó a cargo de su custodia, es decir, cuidar que no se arrancara de la ciudad.

En diligencia de careo entre José Heriberto Mansilla Gatica y Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.139 a 1.140 (Tomo IV), ratifica su declaración judicial prestada en causa diversa y la de fs. 3.605 (correspondiente a la declaración de fs. 1.138) en lo pertinente. Ante lo dicho por el **Sr. Podlech** (respecto a que no es efectivo que hubiese interrogado personas con él por orden del Fiscal Militar de apellido Jofré) el declarante responde que esa tarde él estaba de Suboficial de guardia. En la guardia de la unidad se encontró con la señora **Meza Moncada** en calidad de detenida. En esa oportunidad fue a conversar con don **Alfonso**, quien le dijo que se la llevara. Por orden del Mayor **Jofré** tuvo que servir como Dactilógrafo al

Alfonso Podlech mientras interrogaba a la señora **Meza Moncada**. Asevera que en esa época no sabía quién era el Fiscal Militar. Cuenta que las funciones de don **Alfonso Podlech** eran tomar declaraciones a los detenidos. Recuerda que en aquella época también intercedió ante don **Alfonso Podlech** por un amigo que era deportista y que anterior al 11 de septiembre de 1973 había tomado el fundo de la familia **Podlech** en la comuna de Lautaro. Asegura recordar muy bien lo relatado, porque fue lo único que efectuó con **Alfonso Podlech** en el Regimiento Tucapel de Temuco. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 1.568 a 1.570 (Tomo V), divulga que para septiembre de 1973 prestaba funciones en el Regimiento Tucapel de Temuco, trabajando en Administración de Fondos como Dactilógrafo. Afirma que jamás trabajó tomando declaraciones en la Fiscalía Militar. Respecto a la señora **María Meza Moncada**, no la recuerda, aunque es muy posible que la haya interrogado porque estuvo una tarde cooperándole a don **Alfonso Podlech** en la toma de declaraciones. Lo anterior, porque recibió órdenes de hacer esto. Sin embargo, solo tomó dos declaraciones y quien interrogaba era don **Alfonso Podlech**, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que conocía y que estaban detenidas. Cuenta que las declaraciones las tomó en la oficina del Jefe de Plana Mayor, no recordando el tenor del interrogatorio. Tampoco recuerda si esta persona presentaba signos de torturas. A la única persona que recuerda haber visto muy maltratada producto de las torturas, fue a **Rubén Morales Quijada**, apodado “**Milico**” quien era su amigo, refiriéndose con detalle sobre esos hechos. A su pregunta, recuerda que Orlando **Moreno Vásquez**, **Raúl Schonherr** y un Cabo de apellido **Abello** trabajaban en Inteligencia junto al Capitán **Ubilla**. Expresa que en una oportunidad, después del 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 10:30 horas, mientras se encontraba de Suboficial de guardia, llegó un camión cargado de detenidos que venían del sector Toltén y Loncoche. Estas personas fueron dejadas en el patio de la Unidad y debían pasar la noche en el Regimiento, refiriéndose a las personas por quienes intercedió ante **Alfonso Podlech**, para que quedasen en libertad. Finalmente comenta que el Capitán **Ubilla** y su grupo tenían habilitada una cuadra en la Primera Compañía para interrogar personas. En una oportunidad se acercó a ese lugar para conversar con el Teniente **Tichahuer**, quien estaba presente en los interrogatorios. Además pudo ver al Teniente **Jaime García Covarrubias**.

A.48 PEDRO MISAEL ELGUETA MUÑOZ (19 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 1.044 a 1.046 (Tomo III); y fs. 1.048 a 1.050 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2013, rolante de fs. 1.044 a 1.046 (Tomo III), desarrolla que para septiembre de 1973 se encontraba efectuando el Servicio Militar en el Regimiento de Infantería N°8 "Tucapel" de Temuco, encasillado en la Sección de Plana Mayor de la Compañía de Morteros, al mando del Capitán **Manuel Fernández Carranza**. En lo pertinente, en una oportunidad fue designado como Policía Militar, correspondiéndole en el caso desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los Consejos de Guerra, instancias donde el abogado **Alfonso Podlech** y el Comandante del Regimiento **Pablo Iturriaga Marchesse**, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento. Otra situación que quiere aportar, es que pudo observar cuando trasladaban a los detenidos a la sala de instrucción de la Compañía de Morteros, lugar donde escuchaba los desesperados gritos de estas personas que eran interrogadas.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2017, rolante a de fs. 1.048 a 1.050 (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile. En lo pertinente afirma haber visto detenidos en el Regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en la sala de instrucción de la Compañía de Morteros. En ese lugar los detenidos eran torturados. Él pudo escuchar muchas veces los gritos de dolor que salían desde esa dependencia. Allí eran sometidos a apremios tanto hombres como mujeres. A su pregunta, los Oficiales A cargo de los detenidos eran **Nelson Ubilla Toledo, Jaime y Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, Manuel Vásquez Chahuán y Alejandro Rubio Valladares**. Estos Oficiales eran ayudados por los Sargentos y clases de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, más algunos Soldados Conscriptos. Posteriormente se refiere a los hechos relacionados con el intento de asalto ocurrido en la Isla Cautín. En lo pertinente y respecto de **Alfonso Podlech Michaud**, puede señalar que lo recuerda bien porque como dijo en su declaración extrajudicial, lo vio en los Consejos de Guerra. Esta persona al parecer leía la sentencia que casi siempre era de fusilamiento. Además, se le veía pasar a la Comandancia.

A.49 DOMINGO ESTEBAN QUINTANA BUSTOS (19 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 1.054 a 1.055 (Tomo IV); y de fs. 1.057 a 1.058 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 20 de enero de 2013, rolante de fs. 1.054 a 1.055 (Tomo IV), detalla que para septiembre de 1973, se encontraba efectuando el Servicio Militar en el Regimiento de Infantería N°8

"Tucapel" de Temuco, encasillado en la Tercera Escuadra de la Tercera Sección de la Compañía de Morteros, al mando del Capitán **Manuel Fernández Carranza**. A continuación se refiere a las labores de la Compañía de Morteros una vez ocurrido el Pronunciamiento Militar. Del mismo modo, le correspondió cumplir servicios de guardia, siendo testigo en ocasiones del ingreso durante el día de personas detenidas a la Unidad Militar, los cuales permanecían en un recinto techado, desconociendo posteriormente cual era el destino de estas personas. Con respecto a la consulta que se le hace, manifiesta que al interior del Regimiento, recuerda haber visto dependencias destinadas para los interrogatorios de los detenidos, siendo estas la sala de instrucción de la Compañía de Morteros y de la Plana Mayor. En lo que respecta al personal que se dedicaba a interrogar a los detenidos, solo sabe por comentarios de terceros que el Mayor **Espinoza Ponce** practicaba dichas labores. Finalmente indica que nunca le correspondió detener personas, como tampoco participar en labores operativas o de Inteligencia.

En declaración judicial de fecha 22 de enero de 2013, rolante a fojas 1.057 a 1.058 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile. En lo pertinente, distingue que efectivamente en muchas oportunidades los Soldados Conscriptos fueron azotados en el patio del Regimiento Tucapel, detallando aquello. Atestigua haber visto detenidos en el Regimiento Tucapel, sin embargo desconoce lo que sucedía con ellos. Expresa que en alguna oportunidad, recuerda haber pasado por el costado de la 1º Compañía de Cazadores, lugar desde donde se escuchaban los lamentos y gritos de personas que aparentemente estaban siendo apremiadas en la sala de instrucción ubicada entre las Compañías de Plana Mayor y de Morteros. Ellos tenían prohibición de acercarse a ese lugar. Se decía que el Teniente **Espinoza** tenía algo que ver con los detenidos. Por comentarios que se escuchaban en el rancho de Soldados, algunos comentaban que los detenidos eran torturados durante la noche, pero no recuerda quién le hizo el comentario ni qué Oficiales participaban en estos hechos. Respecto a las personas que se le pregunta, entre ellas **José María Ortigosa Ansoleaga**, dice no haberlo conocido como detenido en el Regimiento Tucapel. Pero sí recuerda el nombre de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, porque escuchó en alguna oportunidad que estaba detenido en el Regimiento. Sin embargo él no lo vio ni conoció a esta persona.

A.50 NAVOR SIFRIDO SOTO CERECEDA (19 años a la época de los hechos). En declaración judicial de fecha 23 de enero de 2013, rolante de

fs. 1.059 a 1.063 (Tomo IV), glosa que ingresó a hacer el Servicio Militar en abril de 1973 en el Regimiento Tucapel de Temuco, siendo encuadrado en la Compañía de Morteros, cuyo comandante era el Capitán **Manuel Fernández Carranza**. Recuerda que además estaba el Teniente **Pablo Gran López**. Aclara que fue encuadrado en la Cuarta Sección, bajo el mando del Sargento 1° **Germán Ibarra Espinoza**, y en la primera escuadra, que estaba bajo el mando del Sargento 2° **Rafael Lizama Saldías**. Rememora además a los Clases **Luis Muñoz**, **Guillermo Castro**, **Luis Barrenechea Calderón**, Cabo 1° **Morales**, Suboficial **Moraga**, Suboficial **Quilodrán** y Cabo Nelson Schaaff. Poco después del 11 de septiembre de 1973 el Capitán **Fernández Carranza** fue relevado de su mando y en su lugar fue puesto el Teniente **Pablo Gran**, no recordando cuánto tiempo estuvo en el cargo. Posteriormente asumió el mando el Teniente **Alejandro Rubio Valladares**. Mucho tiempo después supo que el Capitán Fernández había sido relevado del mando por estar involucrado con células miristas. Para el 11 de septiembre de 1973 le correspondió hacer punto fijo en los edificios públicos, también le correspondió salir en patrullajes nocturnos controlando el horario de toque de queda y las carreteras; y estuvo al interior del Regimiento Tucapel efectuando guardias en casi todos los lugares de esa unidad, como la guardia de entrada, el gimnasio, el casino de oficiales, las caballadas y el rancho de Soldados Conscriptos. Asevera que vio muchos detenidos en el Regimiento Tucapel, alrededor de quinientos. Los detenidos que estaban en el patio, estaban de cubito abdominal ordenados en filas uno al lado del otro, tenían su vista vendada con un paño negro y sus manos estaban atadas a la espalda. Ellos (los Soldados) tenían la misión de darles alimentos una vez al día. El rancho de Soldados Conscriptos fue adaptado como un lugar para la tortura, mientras que el gimnasio fue destinado para dejar al resto de los detenidos. A estos lugares eran llevados los detenidos para ser apremiados o para que descansaran, respectivamente. También pudo ver que en ese lugar entraban civiles y otras personas que no conocía. Algunas veces, mientras estaba de guardia, le correspondió ir a dejar detenidos hacia el lugar donde eran torturados. En ese lugar pudo ver al Teniente **Espinoza**. Recuerda que los detenidos una vez que salían de la tortura había que ir a buscarlos entre dos a tres Soldados, puesto que no podían sostenerse en pie por sí solos. Además, se veían muy maltratados, algunos estaban amarillos y con los ojos negros, además de tener la piel pegada a la cara. Estas personas estuvieron al menos 15 días viviendo y durmiendo en el patio o en el gimnasio, siendo sacadas a torturas durante ese tiempo. Suma que todas las noches podían escuchar desde la Compañía de Morteros gritos y lamentos que provenían desde el rancho de Soldados Conscriptos donde se torturaban los detenidos. A

continuación se refiere al asalto al Polvorín. Preguntado entre otras personas, sobre **Daniel Mateluna Gómez** y **José María Ortigosa**, dice no recordarlos. A su pregunta, recuerda que en la Inteligencia del Regimiento trabajaban el Capitán **Nelson Ubilla Toledo** y el Teniente **Raimundo García Covarrubias**, quienes pertenecían a la Compañía de Plana Mayor y Servicios. Seguramente ellos dos tenían algo que ver con los detenidos. Adosa que antes del 11 de septiembre de 1973 se formaron grupos de fusilamiento, siendo sacados efectivos de distintas Compañías para adiestrarlos en estas funciones. No recuerda el nombre de ninguno de ellos. Adosa que **antes del 11 de septiembre de 1973 se formaron grupos de fusilamiento**, siendo sacados efectivos de distintas Compañías para adiestrarlos en estas funciones. Efectivamente recuerda que en el patio del Regimiento se azotó a varios Soldados Conscriptos. Estos eran amarrados a un poste que había en el patio y un verdugo que tenía en su cabeza una capucha los azotaba. Los Soldados no resistían más de tres latigazos antes de desmayarse. Esto se hacía con el Regimiento completo formado en el patio y que observaba. Además, la banda tocaba los tambores. Expresa que es imposible que los Oficiales del Regimiento no supieran lo que ocurría al interior de la unidad, puesto que para cada cosa que se iba a hacer ellos mantenían reuniones permanentes. Ninguno podría decir que no hubo detenidos en el Regimiento o que no supieron que se torturaba o de la manera y circunstancias en que los detenidos fueron ejecutados. Tampoco podrían negarlo los Soldados Clase.

A.51 HERNÁN ALEJANDRO MORALES GÓMEZ (35 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 1.082 a 1.085 (Tomo IV); 1.353 a 1.354 (Tomo IV); y de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2012, rolante de fs. 1.082 a 1.085 (Tomo IV), esgrime que para el mes de agosto de 1973 se desempeñaba como abogado de Carabineros de Temuco y dependía del Prefecto de aquella época. En una oportunidad, tomó contacto con el Ministro de Interior, **Jaime Tohá**, quien le contó que existía una escuela de guerrilla en el sector costero de Carahue, quizás Nehuentúe, y que se iba a realizar una investigación por lo que debía designarse un Fiscal Ad-Hoc para este efecto. Por este motivo le pidió que se hiciera cargo de ese sumario, puesto que ya había hablado con el mando en Valdivia para que fuese el designado. Fue así que una vez notificado legalmente de su designación se presentó ante el Comandante del Regimiento Tucapel, que era de apellido **Iturriaga**, quien le señaló que iba a trabajar en una dependencia ubicada al lado de la oficina del Mayor **Jofré** y que le iban a designar un Oficial para que sirviera como actuario. En lo pertinente espeta que todas las

resoluciones las confeccionaba el personal de Fiscalía Militar y el sólo las firmaba. A su pregunta, escruta que conoce a **Alfonso Podlech Michaud**, quien es abogado de la ciudad de Temuco. Indica que esta persona lo llamó por teléfono a poco de haber tomado su cargo de Fiscal Ad-Hoc para pedirle que dejara a todos los detenidos presos, porque eran extremistas. También recibió el llamado de los abogados **Renato Maturana** e **Hilad Bustos Espinoza**, para solicitar la libertad de los detenidos. En aquel tiempo, **Podlech** tenía muy buenas relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel. En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Después del 11 de septiembre de 1973, **Podlech** acudía frecuentemente al Regimiento, vestido de Militar. Se decía que era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor **Jofré** sobre temas legales. Desconoce si tuvo participación en interrogatorios de detenidos, pero sí sabe que él organizó la Fiscalía Militar que funcionó al interior del Regimiento. Él fue quien trajo a los actuarios **Tolosa** y **González**, más un amigo de este abogado, de nombre **Dorian Novoa**. Esta persona fue quien reemplazó al deponente en Carabineros tiempo después, seguramente recomendado por **Podlech**.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.353 a 1.354 (Tomo IV), estimula que se desempeñó como Fiscal Ad-Hoc en el Regimiento Tucapel de Temuco desde el año 1973 a julio de 1974. En ese periodo se desempeñó a requerimiento del IV Juzgado Militar de Valdivia, correspondiéndole concurrir al mencionado Regimiento cuando solamente habían detenidos. Sobre las víctimas **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, evidencia que conoció a **Ortigosa**, ya que era su cliente y ubicaba a **Mateluna**, ya que a su parecer era Practicante y probablemente se desempeñó en el Hospital Regional de Temuco. Sobre **Ortigosa**, puede señalar que lo conoció en la ciudad de Villarrica, ya que estaba en el negocio de animales, él era una persona muy ostentosa y por lo que sabe manejaba dinero de otras personas producto de sus negociados. Sobre los hechos que rodearon su detención y muerte, no tiene antecedentes claros, ya que está en su recuerdo que dos días antes de su detención le contactó telefónicamente desde Santiago, comentándole que tenía una citación desde el Regimiento Tucapel, según cree recordar le dio el nombre de **Iturriaga** como el Oficial que lo citaba. Dada la situación, **José Ortigosa** le consultó que debía hacer, a lo cual le dijo que si no tenía nada que temer se presentara, esa fue la última vez que conversó con él, ignorando si viajaría a Temuco. Es así, que después de quince días aproximadamente, se enteró por intermedio de una persona que probablemente tenía el nombre de **Pedro Ansolena Hueicolea** y **Ramón Quezada Ansolena**,

quienes eran sus clientes y oriundos de Villarrica, que a **José** "lo habían dado vuelta", dándole a entender que lo habían matado y que les extrañaba esa situación ya que conocían a **Ortigosa** y su nula filiación política. Posteriormente este hecho fue un comentario generalizado en el medio que se desenvolvía y por su parte nunca se enteró de detalle alguno sobre su permanencia en el Regimiento, ni con quien trató al interior de este. Lo único que sabía, era que **José** traía una fuerte suma de dinero, situación que le comentó por teléfono la última vez que conversaron, lo que sabe es que este dinero no apareció jamás después de su muerte, porque en una conversación con los socios que él tenía (**Ansolena** y **Quezada**), se le comentó que habían desaparecido los animales y el dinero, no dándole mayores detalles sobre esa situación. Hace presente, que nunca me enteré sobre las circunstancias en que murió **Ortigosa**, ni tampoco quiso preguntar ya que podía verse envuelto en un lio, considerando además que los militares manejaban de forma muy hermética la información.

En declaración judicial de fecha 26 de noviembre de 2014, rolante de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.353 a 1.354. Agrega que fue el Ministro de Interior, **Jaime Tohá**, quien le contó que existía una escuela de guerrilla en el sector costero de Carahue, quizás Nehuentúe, y que se iba a realizar una investigación por lo que debía designarse un Fiscal a Ad - hoc para este efecto. Por este motivo le pidió que se hiciera cargo de ese sumario, puesto que ya había hablado con el mando en Valdivia para que el declarante fuese el designado. Fue así que una vez notificado legalmente de su designación se presentó ante el Comandante del Regimiento Tucapel, que era de apellido **Iturriaga**, quien le señaló que iba a trabajar en una dependencia ubicada al lado de la oficina del Mayor **Jofré** y que le iban a designar un Oficial para que sirviera como actuario. Recuerda que la oficina que le entregaron tenía uno o dos escritorios y a un oficial de apellido **García** era el Secretario de la Fiscalía bajo su mando, quien además, ofició de actuario durante los interrogatorios. A su pregunta, expresa que el Mayor **Jofré** era una persona bonachona que no tenía el perfil de Militar clásico como **Iturriaga** y no tomaba mayores decisiones sobre el destino de las personas detenidas. Por esto cuando sucedió el golpe, llegó el abogado **Alfonso Podlech** para asesorarlo en materias de la Fiscalía, a quien conocía como abogado de la ciudad de Temuco. En aquel tiempo, **Podlech** tenía muy buenas relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel. En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Sustenta que después del 11 de septiembre de 1973, **Podlech** acudía frecuentemente al regimiento, vestido de Militar. Se decía que

era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor **Jofré** sobre temas legales. **Podlech** organizó la Fiscalía Militar que funcionó al interior del Regimiento. Él fue quien trajo a los actuarios **Toloz**a y **González** más un amigo de este abogado, de nombre **Dorian Novoa**. Esta última persona fue quien reemplazó al declarante en Carabineros tiempo después, seguramente recomendado por **Podlech**. Desconoce el motivo por el cual el abogado **Podlech** fue designado Fiscal Ad-Hoc para concurrir a la Corte de Apelaciones de Temuco con el objeto de solicitar actuarios y Personal Judicial para los Consejos de Guerra. Esto porque el declarante era Fiscal Ad Hoc y nada le dijeron en ese sentido. Exclama que un día **Toloz**a le dijo que **Podlech** interrogaba detenidos al igual que lo hacía el Mayor **Jofré**. En todo caso, en su proceso nunca actuó el abogado **Podlech**. Respecto de su consulta, explana que quizás el abogado **Renato Maturana** pueda dar fe de que su actuación en aquel tiempo fue apegada a Derecho y que nunca estuvo de acuerdo con lo que sucedió durante ese período. Respecto de los hechos materia de esta investigación, recuerda lo ocurrido a **José Ortigosa Ansoleaga**, quien por aquel tiempo era su cliente. Esta persona lo llamó por teléfono a raíz de que lo estaban requiriendo en la Fiscalía Militar de Temuco mediante un **Bando Militar**. El declarante le dijo que no temiera si nada había hecho. Entonces él decidió venir. Pocos días después supo que había sido ejecutado, pero no se enteró de mayores detalles, puesto que le consultó al Comandante **Iturriaga** por su caso, pero éste le dijo que no se metiera. Sabe que **Ortigosa** vino a Temuco con un maletín lleno de dólares, el cual desapareció. Alguien según entiende, se apropió de ese dinero, pero desconoce quién lo hizo.

A.52 BERNARDITA DEL CARMEN WEISSER SOTO (23 Años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró de fs. 1.113 a 1.114 (Tomo IV); 1.119 a 1.120 (Tomo IV); 1.121 a 1.123 (Tomo IV); 1.556 a 1.559 (Tomo V); 1.591 a 1.592 (Tomo V).

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.113 a 1.114 (Tomo IV), ratifica íntegramente su declaración judicial prestada en causa rol 113.051. En lo pertinente agrega que mientras se encontraba en la Fiscalía Militar, vio llegar a Conscriptos con libros requisados, uno de los cuales eran poesías de Gabriela Mistral, por lo cual solicitó al Mayor **Jofré** si podía quedárselo, lo recogió justo en el momento en que aparece el Sr. **Alfonso Podlech** a la sala. **Jofré** en un acto que le pareció casi de aprobación hacia **Podlech** le insinuó que podría darle este libro, a lo que **Podlech** nada dijo, pero casi de inmediato miró hacia los otros volúmenes y sacó uno, diciendo que se iba

a quedar con ese libro. **Alfonso Podlech** vestía uniforme militar y fue interrogada por él en dos oportunidades junto a su actuario de apellido **González**. Aclara que era este actuario quien tenía un anillo con forma de dragón y no un Militar como lo señaló anteriormente. También **González** la interrogó a solas en otras oportunidades. Suma que existe una persona de nombre **Maggie o Margarita Toledo Klenner**, quien vive en Puerto Montt y que estuvo detenida junto con ella en el Buen Pastor y que también fue interrogada por **Alfonso Podlech**. Ella puede dar testimonio de lo que le tocó vivir. Respecto de los hechos materia de esta investigación, recuerda que un día mientras esperaba ser interrogada en la Fiscalía Militar, se acercó el Capitán Ubilla, quien siempre rondaba por ese lugar, el que tenía una venda en un brazo. En esa oportunidad dijo que habían sido víctimas de un intento de asalto, Tiempo después asoció esta declaración de **Ubilla** con el asalto al polvorín. También rememora a **Ambrosio Badilla Vasey**, quien fue detenido por los Militares mientras ella estaba en Chiloé. Supo que al parecer alguien habría revelado el lugar donde estaba escondido, pero no maneja detalles.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de diciembre de 1973, rolante de fs. 1.119 a 1.120 (Tomo IV), rectifica sus declaraciones y reconoce haber sido simpatizante y militante del MIR, habiendo sido concientizada y patrocinada por **Luis Almonacid**, alias “**El Happy**”, refiriéndose a su trayectoria política. En lo pertinente expone que debido al sistema de “compartimentación” que imperaba origen estructural del MIR, ignora totalmente su estructura, aunque tiene conocimiento que habían otras subchefaturas en av. Alemania, Santa Rosa, Pueblo Nuevo y Padre Las Casas. Explica que la “compartimentación” significaba “no saber ni meterse en lo que sabía o hacía otra persona”, léase otro militante.

En diligencia de careo entre Bernardita Del Carmen Weisser Soto y Óscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.121 a 1.123 (Tomo IV), ratifica su declaración prestada en autos y que rola de fs. 3.503 a 3.504 (correspondiente a la declaración de fs. 1.113 a 1.114). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, quien la interrogó a fines de octubre de 1973 en la Fiscalía Militar ubicada en el Regimiento Tucapel. Funda que fue sometida a Consejo de Guerra en 1975 y él era Fiscal en esa oportunidad. En esa ocasión fue muy irónico con los detenidos que allí estaban, puesto que señaló que habían sido muy bien tratados. El Tribunal le da a conocer el contenido de la declaración acompañada por el señor **Podlech**, respondiendo la deponente que reconoce como suya la firma estampada al final de la declaración. Justifica que fue interrogada por el señor **Podlech** en una oficina ubicada hacia el fondo del edificio que estaba

situado hacia la izquierda de la entrada del Regimiento. En esa oficina fue interrogada de la misma manera como se le está efectuando en esta declaración. Él y el Mayor **Jofré** usaban uniforme, mientras que sus actuarios y el señor **Novoa** vestían de civil. Le parece que la relación que tenía el señor **Podlech** con el resto de los integrantes de la Fiscalía Militar, incluido el Mayor **Jofré** era de superioridad por cuanto daba la sensación que todos le tomaban el parecer a él para actuar. Por consiguiente se refiere a la detenida de nombre **Margarita Toledo Klenner**, quien le relató que fue interrogada por **Podlech** en la Fiscalía Militar, indicando que hubo muchas otras mujeres detenidas que sufrieron torturas y que seguramente fueron interrogadas por este señor, refiriéndose a las que recuerda. Invoca que el señor **Podlech** fue al Buen Pastor a efectuar visitas de cárcel ocasión en las que sufrieron amenazas por parte de él. No existe ánimo de venganza en sus palabras, sino que el único afán es dar a conocer lo que le ocurrió, donde **Podlech** tuvo participación. Si fue a Italia fue porque la justicia italiana se lo pidió, ya que ella jamás pidió ir a ese país a declarar en contra de él, sino que fue a ese lugar para contar su experiencia. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 18 de noviembre de 2003, rolante a fojas 1.556 a 1.559 (Tomo V), inquiriere que para el 11 de septiembre de 1973 era militante del MIR junto con su marido, don **Alonso Azocar Avendaño**, huyeron hacia Chiloé a mediados del mes de septiembre de ese año. Sin embargo, el 16 de octubre de ese mismo año fueron detenidos por la PDI y llevados al Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt, en donde recuerda haber escuchado a otros detenidos siendo torturados en el cuarto contiguo al suyo. Al día siguiente fueron llevados al Cuartel de investigaciones de Temuco, donde fueron torturados, refiriéndose con detalle a dichos hechos. Posteriormente fueron llevados al Regimiento Tucapel, donde fueron recibidos en una oficina que al parecer era el lugar de funcionamiento de la Fiscalía Militar. Luego su marido fue derivado a la cárcel pública, mientras ella al Buen Pastor. Posteriormente detalla los interrogatorios a los que fue sometida en el Regimiento Tucapel. En lo pertinente, interpreta que un día la fue a buscar el Sargento **Moreno**, quien la llevó al Regimiento para que le tomaran una declaración en la Fiscalía. En ese lugar vio pasar a unos Militares Conscriptos con un montón de libros requisados, los que iban a ser destruidos, quienes los dejaron en el piso de la oficina. Entonces apareció el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, revisó los libros y tomo para sí una colección. Además vio un libro de poesías de Gabriela Mistral e instintivamente pidió quedárselo. Entonces el Comandante **Jofré** en un acto de nobleza se lo regaló. Por consiguiente continúa refiriéndose a lo vivido por su paso en el Regimiento.

En declaración judicial de fecha 23 de mayo de 2017, rolante de fs. 1.591 a 1.592 (Tomo V), ratifica sus declaraciones extrajudiciales y judiciales prestadas en autos y la de fs. 1.556 a 1.559, 1.984 a 1.987, 2.260 a. 2.261, 2.268 a 2.270, de la causa 113.089. También ratifica el careo que se practicó entre la deponente y **Alfonso Podlech** de fecha 19 de julio de 2013, en la causa rol 113.089. En lo pertinente, manifiesta que sospechaban que podían andar buscándolos. Recuerda que su tía que pasó por Temuco les contó que vio un afiche que los Militares habían publicado donde aparecía su nombre. Aclara que la persona que tenía el anillo de serpiente en la mano no era Militar, sino que era el secretario de **Podlech**. Parece que su apellido era **González**. Ese recuerdo le quedó por el anillo.

A.53 LUIS RAIMUNDO QUEZADA CHANDIA (19 Años a la época de los hechos investigados), quien declaró de a fojas 1.317 a 1.320 (Tomo IV); 1.426 (Tomo IV); y de fs. 1.504 a 1.507 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2014, rolante a fojas 1.317 a 1.320 (Tomo IV), musita que ingresó a efectuar su Servicio Militar Obligatorio al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, durante los meses de noviembre o diciembre de 1972, se presentó en esa fecha ya que no había ingresado en la fecha que correspondía, quedando inserto en la Compañía de Morteros, finalizando en 1975. En lo pertinente, narra que efectivamente perteneció al Partido Comunista de Temuco, antes de su ingreso al Regimiento Tucapel, ostentado el cargo de Dirigente Estudiantil, Presidente de la FEMEC (Federación de Estudiantes Medios de Cautín) y dirigente del Centro de Alumnos del Colegio Pablo Neruda de Temuco. El día 11 de septiembre de 1973, el deponente señala ostentar el grado de Sargento de Reserva del Regimiento, la madrugada de ese día, se encontraba de guardia comandando una patrulla que tenía por funciones la vigilancia de la casa del Comandante del Regimiento, Coronel **Pablo Iturriaga Marchesse**. Esa madrugada, se presentó el Teniente **Espinoza**, en el lugar donde se encontraba y lo toma detenido, trasladándolo al Regimiento para ser interrogado respecto a su filiación política, refiriéndose a esto. Se le ordenó regresar a sus funciones, con la condición de que si era sorprendido en alguna situación opositora al Régimen Militar que se estaba instaurando tendría consecuencias negativas. No obstante, lo anterior, su casa fue allanada en una oportunidad, siendo detenidos su padre y hermano a la semana siguiente del Golpe de Estado, refiriéndose a la intervención que hizo por ellos. Por otra parte, ostenta que los detenidos comenzaron a llegar al Regimiento a partir del día 11 de septiembre, los que eran alojados en un gimnasio al costado de los comedores de

los Conscriptos. Dentro del gimnasio había una dependencia donde se torturaba, donde se comentaba que había un catre donde se le aplicaba corriente eléctrica a los detenidos, esto lo supo por el comentario de la gente que trabajaba en el casino y también porque a veces se escuchaban gritos provenientes de esa dependencia. Puntualiza que efectivamente en la Enfermería, Cuadra de Plana Mayor y Servicios y un baño ubicado entre las cuadras de las Compañías de Cazadores y Andina, se efectuaban interrogatorios. Sobre las personas que participaban en esos interrogatorios estaban el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, el Sargento **Moreno** y dos Detectives. Precisa que camino a las caballerizas, las cuales se ubicaban junto a una cerca, se instaló una caja metálica enterrada en la tierra, la cual se asimilaba a un incinerador, pudiendo muchas veces sentir olor a carne asada, esto lo sabía todo el mundo. Respecto a las víctimas **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** y **José María Ortigosa Ansoleaga**, proclama que no los conoce. Sin embargo recuerda el apellido **Mateluna**, identificándolo como uno de los detenidos del Regimiento Tucapel, lo que supo por boca del mismo Teniente **Espinoza**, quien en dos oportunidades le conversó sobre esta persona, comentando que estuvo en los momentos en que el detenido fue asesinado, probablemente al interior de la sala de torturas de la Compañía de la Plana Mayor y Servicios, haciendo referencia que dentro de esa misma sala lo estaban interrogando y en medio del interrogatorio el Teniente **Vásquez Chahuán**, a quien apodaban el “cara de muerto”, le dio un disparo en su frente con su arma de 9 milímetros. Según lo comentado por **Espinoza**, la víctima después del disparo se habría intentado levantar, gritándoles “Milicos hijos de puta”, cayendo en una mesa donde lo tenían. También **Espinoza** le dijo que **Mateluna** no murió inmediatamente y que tuvo que darle el tiro de gracia para que muriera, señalándole además que en el lugar de los hechos también estaban los Detectives y **Moreno**. Propone que el apellido del fallecido se lo dijo **Espinoza** de forma accidental, al relatarle los fantasmas que lo atormentaban. Posteriormente este hecho fue comentado por todos los Militares, incluso estos hacían alusión al apellido de la víctima.

En declaración judicial, de fecha 11 de diciembre de 2015, rolante a fs. 1.426 (Tomo IV), no ratifica su declaración judicial de fs. 1.317 a 1.320 hasta conversar con su abogado.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2016, rolante a fojas 1.504 a 1.507 (Tomo V), recalca que respecto de su declaración judicial de fs. 1.317 a 1.320, estaba convaleciente de un infarto y tomando cuatro tipos de medicamentos al momento de la declaración. En segundo lugar, relata que durante el periodo de interrogatorios tuvo que interrumpir en dos oportunidades la

sesión para poder tomarse sus medicamentos por haberse descompensado. Confiesa que no leyó su declaración y firmó sin haber revisado su contenido, el que tiene errores graves. En lo demás ratifica su declaración extrajudicial con la salvedad de las siguientes apreciaciones: en primer lugar se presentó en el Regimiento Tucapel en noviembre o diciembre de 1972 por el llamado a efectuar el Servicio Militar, pero ingresó a cumplirlo en abril de 1973, refiriéndose a aquella situación. Hace presente que su Servicio Militar lo realizó en el período 1973 – 1974, no extendiéndose hacia 1975. En lo pertinente y sobre la conversación que sostuvo con el Teniente **Espinoza**, sugiere que ésta ocurrió durante la Campaña que realizó en Curarrehue en 1974. En dicha conversación el declarante le dio su visión de la vida y entonces él se abrió a hablar sobre sí mismo y agregó que estaba marcado dentro del Ejército como el "perro malo", por lo que su carrera estaba manchada y que estaba arrepentido de haber hecho todo lo que había hecho. En algún momento comenzó a desahogarse y le habló sobre los fantasmas que lo perseguían y por el caso de un señor de apellido **Mateluna**. Le dijo algo así como "no sé por qué acabé matándolo", agregó que no había razones para hacerlo, pero que le había dado rabia, que estaba como poseído y que por esto le habría disparado. Agregó que el Subteniente **Lavín**, presente en el interrogatorio, se habría "cagado entero" ante la situación y que alguien habría tenido que rematarlo porque quedó vivo después del disparo que él hizo. Suma que dicho interrogatorio al parecer ocurrió en el gimnasio chico del Regimiento, ubicado a un costado del rancho de los Conscriptos, pero no le dijo si estaban presentes los Detectives y el Sargento **Moreno**.

A.54 PABLO DANIEL ALARCÓN PÉREZ (22 Años a la época de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 05 de mayo de 2016, rolante a fs. 1.485 (Tomo V), urde que conocía a la víctima Daniel Mateluna Gómez, quien vivía en las cercanías de su domicilio en calle Ziem de la Población Ercilla. Recuerda que en 1973 Mateluna era un Carabinero jubilado quien tenía la edad 60 años aproximadamente e ignoraba que militancia política tenía, pero conocía que era simpatizante del Gobierno del Presidente Salvador Allende. Mateluna era una persona muy conocida en el barrio por fomentar el deporte en la población e incluso tenía un Club Deportivo. Respecto a la detención de Mateluna, no maneja mayores antecedentes, pero asevera que fue detenido en la misma fecha que su primo Guido y posteriormente tomó conocimiento por un Bando Militar que había sido ejecutado en las mismas circunstancias que su primo.

A.55 MARIO ARNOLDO ALARCÓN TAPIA (21 años a la época de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 05 de mayo de 2016, rolante de fs. 1.456 a 1.457 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.486 a 1.487 (Tomo V), acota que para el año 1973 se encontraba trabajando en Ferrocarriles del Estado en Victoria, y residía en Temuco. Respecto a la víctima **Daniel Mateluna Gómez**, aduce que efectivamente lo conoció, él era una persona mayor, quien era practicante, incluso sabe que trabajó en Carabineros de Temuco. En lo personal, era muy amigo de **Daniel**, quien tenía casi su misma edad. Sobre la detención de éste, no maneja mayores antecedentes al respecto, solo supo por comentarios que había sido detenido por los Militares e incluso que había estado oculto antes de su detención y debido a que habían detenido a su hijo **Daniel** tuvo que entregarse ante la autoridad Militar. Posteriormente, por los antecedentes que obtuvo en Temuco, supo que a **Mateluna** le habían dado muerte durante un intento de fuga.

A.56 RODRIGO MIGUEL ANTONIO HENRÍQUEZ ARAVENA (33 años a la época de los hechos). En declaración judicial de fecha 13 de diciembre de 2010, rolante a fs. 1.571 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 228 a 230 (otorgada en causa diversa). Advierte que vio al abogado **Alfonso Podlech** interrogar a su hermano en dependencias del Regimiento Tucapel donde funcionaba la Fiscalía Militar. Este hecho lo presenció, pues se encontraba en los pasillos contiguos a la oficina antes mencionada. Junto con su hermano, señala que fueron interrogados **Jobet, Ljubetic y Ortigosa**, quienes pasaron a la sala de audiencias, donde se encontraba **Podlech** junto a los actuarios **Tolosa y González**. Le parece que fue al día siguiente o subsiguiente de la primera detención de su hermano, que se dirigió hasta el Regimiento y se entrevistó con **Alfonso Podlech**, quien le señaló que su hermano y los demás detenidos mencionados anteriormente eran unos activistas. Asevera que **Podlech** actuaba como Fiscal Militar en propiedad, de hecho vestía Uniforme Militar y daba órdenes en ese lugar. Además en todas las oportunidades en que concurrió a la Fiscalía Militar jamás vio al Mayor **Jofré** en Fiscalía, solo entrevistándose siempre **Podlech**, quien trataba a los detenidos con epítetos tales como “vende patria”.

A.57 JORGE EDMUNDO SEPÚLVEDA CONTRERAS (18 Años a la época de los hechos). En declaración judicial de fecha 26 de octubre de 2017, rolante de fs. 1.615 a 1.620 (Tomo V), adopta que ingresó a hacer el Servicio Militar en abril de 1972 en el Regimiento Tucapel de Temuco, donde es encuadrado en la Compañía de Morteros, refiriéndose a la dotación que recuerda

de dicho Regimiento. Para el 11 de septiembre de 1973 recuerda que le correspondió hacer guardia al Hotel Terra. Ya que el día anterior en la noche tenían conocimiento que iba a suceder el Golpe de Estado. Afirma que vio muchos detenidos por motivos políticos al interior del Regimiento Tucapel, recordando que en una oportunidad en que estaba de guardia del Cuartel vio el patio completamente cubierto de personas que tenían el torso desnudo y estaban boca abajo, viendo a los Oficiales **Jaime** y **Raimundo García Covarrubias** que pasaban caminando sobre estas personas, incluso les daban puntapiés, acompañándose de Soldados Conscriptos. También recuerda que había una sala de torturas ubicada en la Compañía de Plana Mayor a la que llevaban a los detenidos políticos, donde recuerda haber visto entrar al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, a dos Detectives que trabajaban con él y a dos Conscriptos que eran de apellido **Valeria** y **Schwartenski**. Estas personas constantemente llevaban y traían detenidos desde ese lugar, pudiendo ver que les vendaban la vista. En alguna oportunidad hacían que los detenidos se agacharan simulando que habían obstáculos que sortear. En ese proceso se golpeaban la cabeza contra los muros en los que éstos Conscriptos hacían chocar a los detenidos. Todos estos hechos sucedieron entre 1973 a 1975 en que el deponente finalizó el Servicio Militar. Posteriormente se refiere a los hechos relacionados con el asalto al polvorín. A su pregunta, agrega que a su parecer es imposible que algún Oficial del Regimiento no supiera de la existencia de detenidos y del destino de estos en el Regimiento. Posteriormente se refiere a los Conscriptos de su Compañía que estuvieron en la Base Aérea Maquehue, refiriéndose a los hechos que le comentaban. En lo pertinente, alega que **Podlech** era quien estaba al mando de todo dentro del Regimiento. Tomando decisiones sobre quien vivía y quién no. Era el Fiscal Militar, dentro de la Comandancia tenía una oficina con los del Servicio de Inteligencia Militar. Esta persona se movilizaba por toda la región. Esto le consta al declarante, debido a que él estaba de guardia y veía esta situación. Incluso recuerda que en muchas ocasiones el mayor **Jaime García Covarrubias** le pasó documentación a **Podlech** y él decidía respecto a las personas que se indicaban en esos papeles. Todo esto que menciona es del año 1973. Respecto al caso de **Daniel Mateluna** y **José María Ortigosa Ansoleaga**, sólo recuerda que en una oportunidad al momento de comer en el rancho, se comentó que habían matado a un doctor de apellido **Mateluna**, esto era un comentario generalizado entre los Conscriptos. Se decía que lo habían matado fuera del Regimiento, pero desconoce mayores detalles. Insiste en que en el Regimiento Tucapel había una gran cantidad de detenidos en el gimnasio y también sobre la existencia de la sala de torturas, donde se ubicaba un camarote metálico, el que servía para aplicarles

electricidad a las personas. Lo que sabe porque lo vio. Anexa que una oportunidad le correspondió hacer guardias en el Hospital Regional de Temuco, mostrándole la persona a cargo de ese lugar los cuerpos que estaban ingresados por Personal Militar, ya que habían sido muertos por funcionarios del Regimiento, si saber mayores detalles. Por consiguiente se refiere a hechos personales.

A.58 NELSON LUIS AGUSTÍN SECKEL CATALÁN (24 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 1.649 a 1.652 (Tomo V); y de 1.663 a 1665 (Tomo V).

En declaración judicial de fecha 07 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1.649 a 1.652 (Tomo V), en lo pertinente anima que después del 11 de septiembre de 1973 se conformaron grupos al interior de la Base Aérea de Temuco, cuya conformación desconoce, los cuales se encargaban de los detenidos por motivos políticos. Este grupo especial (de Inteligencia) tuvo un estatus especial, no usaban uniforme y en la asistencia diaria aparecían en Comisión de Servicio. Respecto a los detenidos por motivos políticos, dice que conoció de la existencia de estos posteriormente cuando se desempeñaba en la Dirección del Personal de la Fuerza Aérea, puesto que llegaban los Sumarios Administrativos de Fuerza Aérea, con lo que comenzó a saber lo que este grupo hacía. Menciona que en una oportunidad, en su calidad de Subrogante del ayudante titular del Director del Personal, recibió la correspondencia, tomando conocimiento de un sumario que posteriormente le tocó ratificar. La situación era que enviaron a un Suboficial de Reserva de nombre **Carlos Cardoen** con un detenido de nombre **José Ortigosa** hacia el Regimiento Tucapel, detenido después de que el Consejo de Guerra en el Regimiento lo dejara libre. Lo anterior lo sabe, pues el propio **Carlos Cardoen** se lo dijo, éste último era muy amigo de **Ortigosa**, el cual era intensamente buscado. Asevera que **Ortigosa** era fuertemente buscado en la región, porque era señalado de ser dueño de un campo de Guerrilla. Además de ser intensamente buscado por que era fundador financista del GAP (grupo de amigos personal de Allende). **Ortigosa** vivía en Rancagua, fue corredor de autos y tenía un garage grande en Diez de Julio. **Carlos Cardoen** era amigo de **Ortigosa** y al enterarse que era buscado éste le habría aconsejado a **Ortigosa** presentarse en la Fuerza Aérea de Santiago en donde la persona con la cual se presentó, según le dijeron era un General, le señaló que en Santiago no lo buscaban pero que le aconsejaban ir a Temuco a fin de aclarar su situación. **Carlos Cardoen** en su propio avión lo trasladó a Temuco. Una vez llegado a Temuco a la base Aérea se inicia el operativo en que se señala que fue detenido **Ortigosa**, el cual fue trasladado hasta el Regimiento Tucapel de

Temuco junto a **Cardoen**. Éste último le contó al deponente que lo dejaron libre y a **Ortigosa** lo sometieron a Consejo de Guerra. El resultado del Consejo de Guerra fue que se decretó la libertad de **Ortigosa**. Estando **Carlos Cardoen** y la **señora de Ortigosa** esperando que lo dejaran libre, sintieron los disparos y luego alguien del Regimiento les informó que el detenido había intentado escapar y por eso le habían disparado. Posteriormente se refiere a la situación de otros detenidos políticos.

En declaración judicial de fecha 11 de julio de 2018, rolante de fs. 1.663 a 1.665 (Tomo V), ratifica la declaración judicial prestada en causa 114.033, agregada a esta causa de fojas 1.649 a 1.652. En lo pertinente, apunta que nunca vio detenidos desaparecidos, ni supo de la existencia específica de ellos, hasta que le contaron lo que había pasado (señor **Ortigosa y Cardoen**), después de los años, estando radicado en Santiago, gente que venía de Temuco le contaba rumores de lo sucedido. Apunta que en una conversación que tuvo con **Carlos Cardoen**, él se refirió a lo que le sucedió cuando trajo a Temuco a su amigo **José Ortigosa**, para que aclarara su situación, porque era buscado intensamente en la Zona Cautín. Apoya que conoció a **Carlos Cardoen**, pues era amigo de una amiga suya y de su suegro, por lo cual le comentó la situación, de la cual también el testigo había escuchado, pues fue un hecho público. Según se enteró, el señor **Ortigosa** era buscado por tener en un campo cerca de Villarrica, una supuesta escuela de guerrillas. Aproxima que **Cardoen** llegó en su avión privado junto a **Ortigosa**, a la Base Aérea Maquehue, el señor **Cardoen** vestía de uniforme de la Fuerza Aérea por ser Oficial de Reserva, al presentarse en aquel lugar fueron detenidos ambos y trasladados al Regimiento de Temuco. Aquilata que esta situación debe haber ocurrido antes del mes de noviembre de 1973. Una vez trasladados el señor **Cardoen y Ortigosa**, fueron interrogados, quedando en libertad **Cardoen** y el señor **Ortigosa** quedó a disposición de la Fiscalía Militar. El señor **Cardoen** le señaló que quien hizo de Juez Militar era el Segundo Comandante del Ejército. **Cardoen** le avisó a la **esposa de Ortigosa**, que vivía en Santiago o Rancagua, para que le trajera ropa a su marido y terminado el proceso dejaron en libertad al señor **Ortigosa** declarado sin cargos, de esta forma salió libre y conversó con su señora, informándole que había quedado libre y que iría a buscar sus cosas donde habían estado detenido. Concurrió acompañado de un Conscripto, cuando estaba en eso sintieron unos disparos y le informaron que por intento de fuga le habían disparado. Arguye que el señor **Cardoen** le comentó que suponía que el que ordenó dispararle fue el Comandante **Pacheco** de la Fuerza Aérea.

A.59 JOSÉ RAÚL INZUNZA REYES (19 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 1.102 a 1.103 (Tomo IV); y de fs. 1.106 a 1.107 (Tomo IV),

En diligencia de careo entre José Raúl Inzunza Reyes y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.102 a 1.103 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.310 a 3.313 (otorgados en causa diversa). No reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer que se trata de **Hernán Raúl Quiroz Barra**, respecto de lo cual el deponente señala que tenía la impresión de que era él, pero como ha pasado tanto tiempo esta persona ha envejecido. Cimiento que lo recuerda muy bien porque trabajó con él en la Compañía de Plana Mayor y Servicios junto con el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. No puede estar equivocado. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre José Raúl Inzunza Reyes y Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.106 a 1.107 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.310 a 3.313 (otorgados en causa diversa). Reconoce a la persona con quien se le carea como **Libardo Schwartenski Rubio** de quien hizo referencia. Él estuvo presente durante los interrogatorios, pero no lo vio aplicar electricidad a los detenidos ni interrogarlos. Por otra parte, sólo recuerda al Sargento **Arias** participando en interrogatorios y torturas. Justifica que es cierto lo que el señor **Schwartenski** señala, en el sentido que todos los Oficiales del Regimiento iban a la sala de interrogatorios a curiosar. No sabe si ellos interrogaban o no, pero sí entraban a mirar.

A.60 JUAN DE DIOS FRITZ VEGA (43 años a la época de los hechos). En declaración judicial de fecha 11 de mayo de 2006, rolante de fs. 2.980 a 2.990 (Tomo VIII), glosa que ingresó a Carabineros de Chile el 1° de agosto de 1956 y en 1962 fue destinado a la 2° Comisaría de Temuco, donde estuvo hasta 1976. A los hechos del 11 de septiembre de 1973, se encontraba a cargo de la Comisión Civil, a pesar que no tenía el grado y antigüedad, igualmente el Capitán **Bahamondes**, lo nombra a cargo de esta Comisión. Se dedicaban a Investigar delitos comunes como en toda Comisaría, donde existían las Comisiones de esta naturaleza, pero a partir de los hechos del 11 de septiembre de 1973, se les comienza a entregar Órdenes Judiciales en que se les ordena tomar detenidos de toda índole, incluyendo prisioneros políticos. Esas órdenes venían de la Fiscalía Militar. El señor **Eduardo Riquelme Rodríguez**, era quien estaba a cargo de abastecimiento, de recibir las Órdenes emanadas de la Fiscalía de Carabineros, la que estaba cargo del Coronel **Gonzalo Arias González**. Esta Comisión dependía de la 2° Comisaría Civil de Carabineros de Temuco, ubicada

en la parte posterior del Cuartel, específicamente en la oficina donde funcionaba la Central de Compras. El calabozo que ocupaban para sus detenidos era el más pequeño de la unidad, agregando que ninguno de sus detenidos eran ingresados en la Guardia y se llevaban después al Regimiento Tucapel N° 8, de Temuco. Esgrime que el grupo específico de trabajo desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la formación de la S.I.C.A.R. a fines de diciembre de 1973, cuando llegó a hacerse cargo de este grupo el Capitán **Somoza**, jefe de la Tercera Comisaría Padre Las Casas, existía la siguiente dotación: Teniente **Eduardo Riquelme**; los Cabos **Juan Aliro Verdugo Jara**, **Ornar Burgos Dejean**, y el declarante. Este y no otro fue el grupo de trabajo. Hace el alcance que en la 3° Comisaría Padre Las Casas, funcionaba otra Comisión Civil a cargo de **Somoza**, el Sargento **Emilio Figueroa Candía** y el Cabo **Hernán Navarrete Jara**, todos los cuales posteriormente integraron SICAR. Por su parte Lautaro también contaba con SICAR a cargo de un Sargento cuyo nombre no recuerda. Por otra parte, el Comandante don **Gonzalo Arias González**, era el Jefe de los Servicios y Segundo hombre de la Prefectura de Cautín, de la cual dependía la 2° Comisaría y sus Destacamentos. Este Oficial era jefe directo de la Comisión Civil y posteriormente de la SICAR. Respecto del funcionamiento de éste grupo espeta que el Teniente **Riquelme** era quien ordenaba las detenciones, para lo cual se movilizaban en una camioneta marca Chevrolet, modelo C-10 con toldo color rojo, vistiendo de civil. Lo anterior en cumplimiento de Órdenes emanadas de las Fiscalías Militares del Ejército y de Carabineros. El declarante por su parte recibió en algunas oportunidades estas Órdenes, que consistían en papeles de roneo tipo oficio, con la instrucción "Deténgase a". Posteriormente, los detenidos eran trasladados hasta la Comisaria para efectuar el informe respectivo y de inmediato eran llevados hasta la Guardia del Regimiento Tucapel. Cuando detenían a personas sin orden, éstos eran llevados a la oficina de la "Comisión Civil" para interrogarlos por el Teniente **Riquelme** en presencia de **Burgos Dejean**, **Aliro Verdugo** y el declarante. Escruta que le correspondió participar en algunas detenciones de personeros políticos, dentro de ellos, el Director del Liceo N°1, el hijo de un Suboficial del Ejército que pertenecía al MIR, el dirigente de la Brigada **Ramona Parra**, que vivían atrás de los edificios de calle Barros Arana; en la detención de un hijo de un Suboficial de Ejército quien era dirigente Comunista, ellos lo entregaron al Regimiento Tucapel donde al parecer lo fusilaron. Estimula que es efectivo que **Ornar Burgos Dejean** fue agregado al SIR "Servicio de Inteligencia Regional" a petición del Comandante del Regimiento Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, debiendo efectuar ciertos servicios nocturnos junto a éste grupo cuya finalidad ignora. Evidencia que todos los detenidos que pasaban por su

grupo eran pasados a la Fiscalía. Militar del Ejército. En tanto era el Comandante **Gonzalo Arias González** quien decidía el destino de los detenidos. Expresa que por coordinaciones anteriores del mando de su Institución, todos los detenidos políticos una vez que eran detenidos por la Comisión Civil de Carabineros y establecida su situación, eran enviados al Regimiento. Explicita que la Comisión Civil pudo haber cumplido Órdenes de la Fiscalía Militar de Ejército, sin la necesidad imperativa de que la Fiscalía Militar de Carabineros tomara conocimiento de ello. En relación al grupo de funcionarios de la Comisión Civil de la 2° Comisaría de Temuco y que posteriormente se denominó SICAR, exclama que esto siguió funcionado día posteriores al 11 de septiembre al mando del Teniente **Eduardo Riquelme Rodríguez**. Agregando que los funcionarios subalternos eran el declarante, **Hugo Opazo Inzunza**, **Ernesto Garrido Bravo** pero muy poco tiempo, y **Omar Burgos Dejean**. Lo anterior porque estos funcionarios desde el 11 de septiembre de 1973 ya trabajaban juntos en la Comisión Civil cumpliendo órdenes de la Fiscalía Militar de Carabineros en temas propios de su conocimiento. Reitera que las Comisiones Civiles de Carabineros dependían jerárquicamente del respectivo Comisario pero por dinámica funcional podían también cumplir órdenes, no sólo del Fiscal Militar de Carabineros, como ocurría desde antes de 1973. Por Jerarquía no podían recibir órdenes directas por ejemplo de algún Oficial de la Base Aérea Maquehue, en ese caso, el procedimiento era pedir ayuda a la institución correspondiente y éste establecía la coordinación con la otra institución. Insiste que como en este caso la Comisión Civil estaba también bajo la Autoridad Militar pero no directamente, sólo cumpliendo órdenes, generalmente dando cumplimiento a los Bandos en donde se dejaba claro a donde debían ser llevados los detenidos, es decir al Regimiento Tucapel, a la Base Aérea Maquehue o en su caso a la Cárcel Pública, pero siempre pasando por los conductos regulares de la institución. No tuvo conocimiento en la época que se torturara o se lesionara a los detenidos políticos que existían al interior de estos recintos, ya que nunca conoció las dependencias de estos recintos. En cuanto a **Ramón Callís Soto**, lo conoció en la época en que él era Capitán de la 5° Comisaría de Pitruftuén, quien era un hombre muy extrovertido, hablaba fuerte y además era imponente físicamente, lo que hacía que entre sus subalternos fuera muy respetado, él era chantajista, chantajeaba a los agricultores en concomitancia con **Andrés Pacheco Cárdenas** ellos amenazaban a los agricultores que si no les daban dinero en dólares los tomaban detenidos. **Ramón Callís** por otra parte, demás que les imponía mucha disciplina a sus soldados y la última vez que lo vio fue una vez que me preguntó si es que lo quería matar, a lo que respondió que no. En esa época andaba con una psicosis

que lo querían matar. Piensa que él no era sano mentalmente. Ingresaba a los Retenes y ponía hombres armados con metralleta en la entrada, se dice que muchas veces trato de matar un Sargento. La señora del declarante, que es de Pitrufquén decía que en la noche se escuchaban largas balaceras. Explana que en Pitrufquén también contaba con Comisión Civil dedicada de detenciones políticas. Explaya que si conoció a **Gamaliel Soto**, ya que él era de la Tenencia de Cunco y siempre trabajo allá, por lo que nunca participó en detención alguna junto a **Gamaliel Soto**, ellos dependían de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas; exponiendo además que ellos también contaban con Comisión Civil, que realizaba detenciones políticas, en donde era famoso **Hernán Navarrete** (fallecido), muchos de ellos pasaron posteriormente a la SICAR, al que se crea en Junio de 1974, acompaño copia de documento que la crea. Posteriormente se refiere a otros hechos. En cuanto a **Andrés Pacheco Cárdenas** explica que lo conoció. En referencia al Capitán de Ejército **Nelson Ubilla**, funda que era parte de la Dotación del Regimiento Tucapel, y es quien estuvo a cargo de la Inteligencia en el Ejército, pero nunca tuvo contacto directo con él, ni recibió orden alguna directa de **Ubilla**, tampoco del Teniente **Eduardo Riquelme Rodríguez**, ya que, este tenía menos rango que el declarante y como secretario del Fiscal **Gonzalo Arias González**, lo único que podría haber hecho eventualmente era transmitir una Orden, pero que emanaba de la autoridad del Comandante **Arias y Riquelme**, les transmitía las Ordenes a ellos, les decían que eran emanadas de Tribunales pero se imagina que muchas veces deben haber sido de carácter político. A lo que se le pregunta debo decir que, en cuanto a que efectivamente el procedimiento consistía en que primero les llegaba la orden, posteriormente detenían a la persona, lo entregaban al Regimiento Tucapel y estos posteriormente los enviaban a la Cárcel de Temuco, justifica que es posible que **Eduardo Riquelme y Gonzalo Arias** hayan ido a buscar a alguien y sacarlo de la Cárcel, debido a que en una ocasión lo llamó **Eduardo Riquelme** y le dijo que lo acompañara a buscar a un joven a la Cárcel, ya que le habían pedido que lo entregará a su familia, fue así que lo fueron a buscar a la Cárcel tenía orden de libertad y el declarante lo tuvo que sacar en brazos, debido a que no podía caminar. Se lo entregaron a su padre. Supo posteriormente que nuevamente lo habían tomado detenido, pero no sabe que pueden haber hecho con él, no recuerda su nombre, pero era de Cunco. Esto ocurrió en la misma época en que dejaron en libertad a **Maturana**, quien salió al extranjero. Por lo que se enteró en la época, pero que nunca presencié, fue que el destino de los fusilados en el caso del Regimiento Tucapel eran enterrados en la Isla Cautín, que en esa época pertenecía al Regimiento. En el caso de Maquehue, éste recinto tenía hacia el poniente un lugar que utilizaban para fusilar a los

detenidos y los lanzaban al Río Cautín. Habla que nunca trabajó de noche, y que siempre al día siguiente de haber detenido personas, ya no estaban en la Comisaría, se decían que los habían entregado al Regimiento Tucapel. Niega que le haya correspondido entregar detenidos en la Base Aérea Maquehue, ni tampoco conoció a las personas que se le nombran.

B. DOCUMENTOS (29):

B.1 Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Daniel Benjamín Mateluna de fs. 10 a 21 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 1 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra a fs. 42, 117 184, 187, 193 (Tomo I) y 461 (Tomo II), **contiene Certificado de Defunción de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez,** de la circunscripción de Temuco, quien falleció con fecha 02 de octubre de 1973, inscripción N°652, a causa estallido cráneo encefálico, traumatismo cráneo encefálico resultado de heridas por arma de fuego de guerra.
- b) A fs. 2 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra a fs. 115, 187 y 190 (Tomo I), **contiene Acta de Defunción de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez,** que reitera los datos precedentes, añadiendo que el fallecido se encontraba casado con María Isabel Lillo Flores.
- c) A fs. 3 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 43, 116 y 192 (Tomo I), **contiene Certificado Médico de Defunción Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez,** en el que consta que falleció con fecha 02 de octubre de 1973, que en lo pertinente establece causa de muerte por estallido cráneo encefálico, traumatismo cráneo encefálico y heridas por arma de fuego de guerra, por autopsia realizada a la víctima. *Documento firmado por el Dr. Wolfgang Reuter.*
- d) De fs. 4 a 5 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 476 a 477 (Tomo II), **contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,** en el que consta que **Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez,** de 53 años, casado, era Consejero de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Temuco. Fue detenido y trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco. Con fecha 2 de octubre de 1973 fue ejecutado en las dependencias de este recinto militar por agentes del Estado.
- e) A fs. 6 (Tomo I),** copia de la cual se encuentra a fs. 46, 119, 171, 195 y 223 (Tomo I), **contiene copias de recorte de prensa que se titula “Once bajas en Cautín”,** noticia de fecha 21 de octubre de 1973, que relata lo siguiente:

hasta el momento se han registrado 11 bajas en Cautín, correspondientes a individuos que pretendieron escapar de los Cuarteles, donde se los mantenía prisioneros o agredir a los Centinelas que los custodiaban, de acuerdo a los Bandos oficiales. Seis de ellos fueron dados de baja por efectivos del Ejército: Diego Durán, Daniel **Mateluna Gómez, José Ortigosa Ansoleaga, Pedro Ríos Castillo** y Guido Troncoso Pérez. el sexto corresponde a un desconocido que no portaba documentos y que fuera abatido durante las horas de toque de queda al no obedecer la voz de alto. Otros dos fueron dados de baja por Centinelas del grupo N°3 de helicóptero: Hernán Henríquez y Alejandro Flores. El resto, por patrullas de Carabineros: Guillermo Hernández Elgueta, ex Subdelegado de Cunco, Leomedes Monroy Seguel y Hernaldo Aguilera Salas.

- f) **A fs. 7 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 45, 118, 120, 170, 194, 196, 222(Tomo I) y 1.820 (Tomo V), **contiene copias de recorte de prensa que se titula “En Regimiento de Temuco, muertos dos Marxistas Por Intento de Fuga”**, que relata lo siguiente: dos personas que estaban detenidas en el interior del Regimiento Tucapel de Temuco fueron dadas de baja por las guardias internas, al intentar escapar del recinto. Estas personas fueron identificadas como **“Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga”**, de quienes no fueron proporcionados mayores antecedentes. El intento de fuga, según el Bando dado a conocer por la Comandancia de la Guarnición Militar de Temuco, ocurrió en la noche del día 02 de octubre.
- g) **A fs. 8 (Tomo I)**, **contiene Certificado de Nacimiento de Daniel Benjamín Mateluna Lillo**, quien nació con fecha 03 de enero de 1952, registrando como padre a Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y como madre a María Isabel Lillo Flores.
- h) **A fs. 9 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 464 (Tomo II), **contiene Certificado de Matrimonio entre Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y a María Isabel Lillo Flores**, Circunscripción de San Bernardo, N° de Inscripción 5, el cual fue celebrado con fecha 04 de enero de 1950.

B.2 Fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 189/73, emitido por la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de fs. 31 a 35 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 115 a 153 (Tomo I), **Protocolo de Autopsia Médico Legal de Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez**, de fecha 03 de octubre de 1973, en el que consta su fallecimiento con fecha 02 de octubre de 1973, y concluye que: **a) La causa precisa y necesaria de muerte del N.N identificado como Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez fue un estallido craneo-encefálico**

ocurrido por disparo de bala. **b)** En la necropsia practicada, pudo localizarse dos orificios de entrada de bala, uno en la región lumbar izquierda y otro en la región escapular izquierda, estableciéndose dos orificios de salida en el flanco derecho por desintegración del proyectil, del cual se ubicó solo fragmento. El proyectil escapular izquierdo tuvo su laida en la base de la nuca. **c)** Por su localización es prácticamente seguro que hubo un tercer disparo, que impacto en la región occipital derecha, ocasionando un estallido del cráneo y la desintegración del proyectil, del cual se localizó cuatro fragmentos intracreaneanos. Este disparo, no hizo orificio de salida y su trayecto fue de tras hacia adelante, de abajo hacia arriba y ligeramente de derecha a izquierda. **d)** Todos los disparos corresponden a impactos a distancia y de diferentes ángulos, por lo cual se estima que fueron hechos por diferentes armas pero de igual calibre. **e)** La lesión encefálica debió ocasionar una muerte instantánea. **f)** Los Proyectiles corresponden a gran calibre de armas de guerra. La herida lumbar determinó secciones múltiples del intestino delgado y perforaciones del intestino grueso; sección de la aorta abdominal y estallido del hígado, por lo cual también debe estimarse como rápidamente mortal. *Documento firmado por el DR. Wolfgang Reuter.*

B.3 Antecedentes proporcionados por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 42 a 55 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 142 a 174 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente forma:

- a) De fs. 48 a 50 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 57 a 60 y de fs. 172 a 174 (Tomo I), **contiene Oficio N°1095/91 del Servicio Médico Legal de Temuco, de fecha 25 de septiembre de 1991,** en el cual se indica que existen otras autopsias donde la causa de muerte haya sido consecuencia de las razones señaladas en los protocolos remitidos mediante Oficio N° 1026/91, incluyendo nómina de diversas personas, entre ellas: de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez:** de 53 años de edad, Protocolo de Autopsia N°189/73 de fecha 03/10/1973, cuya causa de muerte corresponde a estallido cráneo encefálico, heridas de arma de fuego de guerra; y de **José María Artigosa Ansoleaga:** de 42 años de edad, Protocolo de Autopsia N°190/73 de fecha 04/10/1973, cuya causa de muerte corresponde a atrición cráneo encefálica por heridas de bala de patrulla Militar. *Firmado por la Dra. Barrientos Orloff.*
- b) A fs. 159 a 161 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 177 a 197 (Tomo I) y de fs. 371 a 373 (Tomo II), **contiene Protocolo de Autopsia de José María Ortigosa Ansoleaga N°190/73 de fecha 05 de octubre de 1973,**

en el que consta que falleció con fecha 02 de octubre de 1973 y concluye que:

a) La causa precisa y necesaria de muerte del N.N identificado como José María Ortigosa Ansoleaga fue una atrición cráneo-encefálico determinada por acción de arma de fuego. **b)** El registro de autopsia ha podido demostrar el impacto de cinco proyectiles con las siguientes características: **b.i)** Orificio de entrada preauricular izquierdo, correspondiente a un disparo a distancia con salida en la región occipital, que determinó el estallido del cráneo y masa encefálica y es el causante directo de esta muerte. **B.ii)** Impacto de una bala en el lado derecho del labio superior, que corresponde probablemente a un disparo de cerca y que ocasionó una destrucción de los incisivos superiores, ubicándose el proyectil en la parte posterior de la cavidad bucal con deformidad de su base. **B.iii)** Orificio de entrada de proyectil en la región escapular izquierda, que corresponde a un disparo de cerca y es transfixiante torácica, correspondiendo a su orificio de salida al extremo postero-superiores del brazo derecho. **B. iv)** Dos orificios de entrada de proyectiles en el tercio medio posterior del hemiterax derecho de orientación paralela oblicua dirigido hacia arriba, adelante y a la izquierda. Este proyectil ha atravesado y destruido ampliamente la columna vertebral dorsal, penetraron en la parte torácica izquierda a nivel del vértice y segundo espacio intercostal izquierdo, ocasionando la fractura de la clavícula. Uno de los proyectiles escapó por la región supraclavicular. No puede se ubicado el otro proyectil, pese al registro de la región especular izquierda, pudiendo haberse desviado terminalmente de su trayecto sin dejar huella visible. **c)** De las lesiones señaladas, se logró aislar dos proyectiles de plomo con cubierta de bronce, de forma cónica, que por sus características corresponde al calibre y tipo de balas de guerra utilizadas por el Ejército. **d)** Atendida la naturaleza y extensión de las lesiones craneanas, la muerte debió producirse en forma instantánea. **e)** La necropsia demostró además la existencia de una hipertrofia cardiaca global de predominio ventricular izquierdo, atribuible a un estado de hipertensión arterial, que el occiso debió padecer en vida. Hay cicatrices planas blanquecinas en la mano y muslo derechos, probablemente secundarias a quemaduras. *Documento firmado por el DR. Wolfgang Reuter.*

B.4 Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, de fs. 101 a 112 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 74 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra a fs. 162, 165, 217 (Tomo I) y 478 (Tomo II), contiene **Certificado de Defunción de José María Ortigosa**

Ansoleaga, Circunscripción de Temuco, Inscripción N° 648, quien falleció con fecha 02 de octubre de 1973 en la Guardia del Cuartel Militar, cuya causa de muerte fue causal Atrición cráneo encefálica, traumatismo cráneo encefálico por heridas de bala por patrulla militar.

- b) **De fs. 75 a 76 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra de fs. 476 a 477 (Tomo II), **contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación**, en el que consta que **José María Ortigosa Ansoleaga** de 42 años de edad, casado con dos hijas, era comerciante y agricultor, son militancia política conocida. Al ser requerido por la Fiscalía Militar de Temuco se presentó a las autoridades, siendo detenido y llevado a la cárcel y desde allí al Regimiento Tucapel. Y fue ejecutado el 02 de octubre de 1973 por agentes del Estado.
- c) **De fs. 77 a 80 (Tomo I)**, **contiene Informe Individual del Caso para la Comisión respecto de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, que reúne los datos antecedentes de la víctima.
- d) **De fs. 81 a 84 (Tomo I)**, **contiene Informe Individual del Caso para la Comisión respecto de José María Ortigosa Ansoleaga**, que reúne los datos antecedentes de la víctima.

B.5 Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de fs. 114 a 140 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 189 a 251 (Tomo I), en virtud del cual se adjunta toda la información que posee de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, lo que se desglosa de la siguiente forma:

- a) **A fs. 166 (Tomo I)**, **contiene Certificado Médico de Defunción de José María Ortigosa Ansoleaga**, en el que consta que la víctima tenía 42 años de edad, falleció con fecha 02 de octubre de 1973 en la guardia del Cuartel Militar, cuya causa inmediata de muerte fue la Atrición Cráneo-encefálica, debido a heridas de bala por patrulla militar. *Documento firmado por el Dr. Olfgang Reuter Berger.*
- b) **A fs. 169 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 218 a 220(Tomo I), **contiene Acta de Defunción de José María Ortigosa Ansoleaga**, que reitera los datos precedentes.

B.6 ORD. N°1370 de fecha 20 de abril de 2012, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de fs. 183 a 188 (Tomo I), en virtud del cual remite:

- a) **A fs. 185 (Tomo I), contiene Extracto de Filiación y Antecedentes de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez,** en que consta que se encuentra fallecido y no registra condenas.
- b) **A fs. 186 (Tomo I), contiene Certificado de Nacimiento de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez,** Circunscripción de San Pedro de Atacama, N° de Inscripción N°473, quien nació con fecha 16 de enero de 1920, registrando como padre Leonidas Mateluna y como madre es Pabla De las Mercedes Gómez.

B.7 ORD. N°1937 de fecha 29 de agosto de 2012, remitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de fs. 273 a 275 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 404 a 406 (Tomo II); **en virtud del cual remite los antecedentes familiares de las víctimas de autos,** que se desglosa de la siguiente forma:

- a) **A fs. 274 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra a fs. 405 (Tomo II), **contiene antecedentes Familiares de José María Ortigosa Ansoleaga,** quien nació con fecha 20 de agosto de 1931 y falleció en Temuco el 02 de octubre de 1973. Contrajo Matrimonio con Carmen Graciela Uriarte Oyanguren en 1958, quien se encuentra fallecida desde 2001. Sus hijos son los siguientes: Mary Carmen Ortigosa Uriarte, Patricia Verónica Ortigosa Uriarte, Francisco Antonio Rodríguez Uriarte, Ignacio Rodríguez Uriarte y Miguel Isidro Rodríguez Uriarte. Sus padres fueron José María Ortigosa Cillero, (fallecido en 1983) y Teresa Ansoleaga Urrechaga (fallecida en 1986). Sus hermanos son Juan Antonio Ortigosa Ansoleaga, Teresa Ortigosa Ansoleaga, Cecilia Ortigosa Ansoleaga y María Angélica Ortigosa Ansoleaga.
- b) **A fs. 275 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra a fs. 406 (Tomo II), **contiene antecedentes Familiares de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez,** quien nació con fecha 16 de enero de 1920 y falleció en Temuco el 02 de octubre de 1973. Contrajo Matrimonio con María Isabel Lillo Flores. Sus hijos son los siguientes: Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Juan Carlos Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo y César Patricio Mateluna Lillo. Sus padres fueron Leonidas Mateluna y Pabla De Las Mercedes. Sus hermanos son Aida Filomena Mateluna Gómez, Hilda Del Carmen Mateluna Gómez, Gregorio Mateluna Gómez, Jacinto Mateluna Gómez y Santiago Del Carmen Mateluna Gómez.

B.8 Copias autorizadas de causa rol 2182-98 de la Corte de Apelaciones de Santiago rolante de fs. 299 (Tomo I) a 384 (Tomo II), lo que se desglosa de la siguiente manera:

- a) **A fs. 323 (Tomo I), contiene Oficio N° 160/91 de fecha 20 de febrero de 199 del Servicio Médico Legal de la IX Región,** en que informa al 2° Juzgado del Crimen de Temuco que el 03-10-73 ingresó a dicho servicio un N.N con Oficio de la Fiscalía de Ejército Cautín, el que posteriormente fue identificado como José María Ortigosa Ansoleaga, de 42 años. El protocolo de autopsia es el N°190/73 del 04-10-73. El cadáver fu retirado del servicio por doña Carmen Uriarte Oyanguren para ser sepultado en *Santiago. Documento firmado por la Dra. Viera Barrientos Orloff.*
- b) **De fs. 334 a 344 (Tomo I), contiene Informe de la Brigada de Homicidios de Temuco, de fecha 29 de marzo de 1991,** el que en virtud de una orden de investigar informa los datos de investigación respecto de la víctima José María Ortigosa Ansoleaga en que se señala lo siguiente: la denuncia la efectuó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuya víctima fue visto con vida por última vez en el Regimiento Tucapel de Temuco, reproduciendo los dichos del testigo Víctor Maturana Burgos y Sigisfredo Jara Contreras, concluyendo que mediante las declaraciones antes enunciadas y constancias respectivas se logró acreditar la efectividad de la denuncia.

B.9 Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Carolina Contreras Riveras y Sebastián Saavedra Cea, de fs. 465 a 474 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 462 (Tono II), contiene Certificado de Nacimiento de Juan Carlos Mateluna Lillo,** quien nació con fecha 26 de julio de 1956, registrando como padre a Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y como madre a María Isabel Lillo Flores
- b) **A fs. 463 (Tono II), contiene Certificado de Nacimiento de María Isabel Lillo Flores,** quien nació con fecha 20 de septiembre de 1930, registrando como madre a Ana Flores de Lillo.

B.10 Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Carolina Contreras Riveras de fs. 489 a 500 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 479 (Tono II), contiene Certificado de Nacimiento de Christian Marcelo Mateluna Lillo,** quien nació con fecha 08 de julio de 1969, registrando

como padre a Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y como madre a María Isabel Lillo Flores.

- b) **A fs. 480 (Tono II), contiene Certificado de Nacimiento de César Patricio Mateluna Lillo**, quien nació con fecha 24 de julio de 1958, registrando como padre a Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y como madre a María Isabel Lillo Flores.
- c) **A fs. 481 (Tono II), contiene Certificado de Nacimiento de George Ricardo Mateluna Lillo**, quien nació con fecha 19 de diciembre de 1953, registrando como padre a Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y como madre a María Isabel Lillo Flores.
- d) **De fs. 485 a 488 (Tono II), contiene copia del caso de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez existente en la página web “Memoria viva”.**

B.11 Informe Pericial Planímetro N°207 de fecha 29 de mayo de 2012, evacuado por Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 958 a 965 (Tomo III), realizado en causa rol 113.089, el cual hace referencia a la fijación Planimétrica de las distintas dependencias del Regimiento de Infantería Tucapel N°8 de Temuco. Documento firmado por *Christian Silva Barra, Perito Dibujante Planimetría*.

B.12 Acta de inspección Ocular, rolante de fs. 1.015 a 1.020 (Tomo III), en que el Tribunal se constituye en dependencias del R.I N°8 “Tucapel”, en la que consta que se dirigieron al Pabellón de solteros del Casino de Oficiales, lugar donde el testigo **Raimundo García Covarrubias** identifica el dormitorio donde alojaba, así mismo se dirigen a otro lugar dentro del Casino de Oficiales donde el testigo **Romilio Lavín** indica cuál era su dormitorio. Luego el testigo **Orlando Moreno Vásquez** indica el lugar donde funcionaba la Fiscalía Militar, dirigiéndose todos a la Comandancia del Regimiento, en dicho lugar el testigo manifiesta que ésta Comandancia estaba a cargo del Mayor **Cofré**, pero después funcionaba con el **Sr. Podlech**; a su vez, el testigo **García Covarrubias** señala que habían dos oficinas, en una funcionaban los actuarios y en otra el Fiscal. A continuación, el **Sr. García** indica dónde se ubica la compañía de Plana Mayor, la Compañía de Morteros y la Compañía Cazadores que antes era la Compañía Andina. Luego el **Sr. Lavín** indica dónde el lugar donde se encontraba el gimnasio del Regimiento. El **Sr. Moreno** acotó que llegó gente detenida al Regimiento y ésta era llevada al gimnasio, siendo el Fiscal quien decidía quién iba a la cárcel o quién quedaba en libertad. Los testigos, específicamente el **Sr. Moreno**, indica el lugar donde se encuentran los baños. El Sr. Ministro pregunta a

otros testigos, personal de la Policía de Investigaciones en situación de retiro, a fin de que indiquen el lugar donde trabajaban, señalando éstos que fueron destinados al Regimiento para efectos de prestar colaboración al **Sr. Fiscal Podlech**, aduciendo que habían actuarios que eran civiles y que existieron muchos detenidos, los cuales eran asignados a los detectives, aproximadamente 20 detenidos por detective. El testigo **Sr. Hernán Quiroz Barra** afirma que a él le tocó interrogar a muchos de estos detenidos. Por otra parte, el **Sr. Luco**, afirma que él en esos tiempos era chofer, y sólo llegaba hasta la guardia del Regimiento, en ese lugar se le indicaba que trámite debía hacer y él tenía expresa orden de llegar solo hasta la guardia del Regimiento. Mientras que el **Sr. Omar Burgos Dejean** agrega que trabajaba en el archivo, el cual quedaba en la Comandancia, al fondo a la izquierda, cuya oficina no tenía nombre, él daba los salvoconductos, trabajando hasta el viernes, alegando que normalmente tenía un banco de colegio ubicado antes de la Guardia del Regimiento, en el cual trabajaba entregando a la gente los salvoconductos que eran documentos firmados por el Fiscal **Jofré**. A su vez, el testigo **Sr. Raúl Schonherr Frías** indica que trabajó en la Segunda Comandancia después del 11 septiembre de 1973, señalando que en la Segunda Comandancia, en su interior, habían tres dependencias: la oficina del dactilógrafo, funcionaba en este lugar como también la del Segundo Comandante, y otra dependencia en que habían tres oficinas, allí funcionó el Fiscal **Jofré**, después llegó el **Sr. Podlech**. Posteriormente el Sr. Ministro se reúne con otros testigos, quienes fueron Conscriptos a la época de los hechos. En lo pertinente, el Sr. Ministro, consulta al **Sr. Inostroza** (ya que en su declaración dice que le correspondió entregar detenidos a la 2da. Comandancia), desde donde sacaba a los detenidos y hasta donde los llevaba, trasladándose el testigo junto al Sr. Ministro y las demás personas a una dependencia ubicada al lado de la Guardia, donde el **Sr. Inostroza** indica que esa era una sala de espera, donde se dejaba a los detenidos. La dependencia tiene una sola puerta de entrada y salida, señalando el **Sr. Inostroza** que desde ese lugar se sacaba a los detenidos y los llevaban a la compañía de Plan Mayor, lugar donde los interrogaban en la Quinta Cuadra, había en el interior unos somieres metálicos, a las personas se las dejaba en ese lugar para que las interrogaran, ellos no ingresaba, luego salían del lugar siempre custodiados, señala que a él varias veces le tocó llevar gente que salió bien físicamente, estas personas salieron caminando, sin embargo, en esa sala se sentían ruidos de tortura. Respecto al Sr. **Jorge Luis Godoy Valdebenito**, Soldado Conscripto a la fecha de ocurrencia de los hechos, el Sr. Ministro le solicita que indique el lugar dónde él habría sido torturado, quien se desplaza al lugar donde están las Compañías, indicando que había una pieza grande en la

cual tenían una cama, específicamente somier y que el Sgto. **Mario Arias** lo habría acostado y le habría aplicado corriente. El sr. **Godoy** anexa que veía a las personas que llegaban detenidas con venda en los ojos y que se escuchaban ruidos y gritaba gente. Agrega que había un Conscripto de apellido **Etchepare**, el cual mareaba a los detenidos y que en la sala de banda era el lugar donde pasaban los detenidos, los cuales eran golpeados por los mismos Soldados, por orden de los más antiguos. Indica que el Mayor **Jofré** nunca se metía en nada.

B.13 Fotografía de Daniel De los Ángeles Mateluna Gómez, rolante a fs. 1.155 (Tomo IV), acompañada al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.156 (Tomo IV).

B.14 Copia de sentencias ordenadas a agregar al proceso según resolución de fs. 1.157 (Tomo V), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **De fs. 1.158 a 1.166 (Tomo IV),** contiene Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 14 de marzo de 2.001, correspondiente a causa caratulada “Barrios Altos vs Perú”.
- b) **de fs. 1.267 a 1.283 (Tomo IV),** contiene Sentencia de la **Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, en causa rol 103-2011,** de fecha 12 de enero de 2013, que confirma la sentencia apelada de 18 de agosto de 2011.
- c) **De fs. 1.284 a 1.293 (Tomo IV),** contiene sentencia dictada por la **Excelentísima Corte Suprema, con fecha 29 de julio de 2013, en causa rol 40.184,** en la cual se rechazan los recursos de casación en el fondo formalizados por los abogados Mario Márquez Maldonado, Marco Romero Zapata y Rodrigo Cortés Muñoz, en sus presentaciones en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 14 de enero de 2013, la que no es nula.

B.15 Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

- a) **De fs. 67 a 69 (Tomo I),** contiene entrevista a Elcides Luis Gubelin Durán.
- b) **De fs. 279 a 289 (Tomo I),** contiene declaración de Ubildo Antonio Jiménez Varas, Héctor Ulises Gonzáles Castro y Pedro Pablo Errázuriz Ossa.
- c) **De fs. 411 a 420 (Tomo II),** contiene entrevista de Carlos Remigio Cardoen Cornejo, Aquiles Alfonso Poblete Müller, Hernán Raúl Quiroz Barra, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Jesús Contreras Salazar, y de Libardo Hernán Schwartenski Rubio.

- d) **De fs. 507 a 509 (Tomo II)**, contiene declaración de amigo de la víctima.
- e) **De fs. 556 a 560 (Tomo II)**, contiene declaración de Víctor Hernán Maturana Burgos, Teodoro Salomón Rivera Beneit, Sigisfredo Jara Contreras, Nelson Rodolfo Thielemann Rodríguez, concluyendo que cual se desprende que no existen elementos criminalistamente válidos que puedan relacionar las muertes de las víctimas con la llegada a la ciudad de Comitiva del General Sergio Arellano Stark.
- f) **De fs. 972 a 983 (Tomo III), 1.025 a 1.030 (Tomo III), 1.308 a fs. 1.310 (Tomo IV), 1.323 a fs. 1.324 (Tomo IV)**, contiene entrevista a ex funcionarios del Regimiento Tucapel.
- g) **De fs. 1.350 a 1.352 (Tomo IV)**, contiene entrevista a ex Fiscal Ad. Hoc del Regimiento Tucapel.
- h) **De fs. 1.469 a 1.484 (Tomo V)**, entrevistas de ex funcionarios de Regimiento Tucapel y testigos.
- i) **De fs. 1.528 a 1.533 (Tomo V)**, que contiene declaración de Rolando Fonseca Venegas, Pedro Jorge Ansorena Goycolea, y entrevista de José Cid Quintana.
- j) **De fs. 1.545 a 1.548 (Tomo V)**, contiene declaración policial voluntaria de Romilio Osvaldo Lavín Muñoz y de José Ismael Cid Quintana.

B.16 Copia de Informe Pericial Documental Caligráfico emitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.395 a 1.423 (Tomo IV), que contiene informe pericial documental N° 584, de 25 de abril de 2014, que dice relación con **Causa Rol N° 113.089** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, el cual concluye que de los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica FISCAL, en orden de "LIBERTAT" N° S/N, de la Fiscalía Militar Curacautín de Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a Carabineros de Chile, Subcomisaría Villarrica, la cual dispone la libertad de Mario Fernando Cortes Bordard y Ubildo Antonio Jiménez Varas, **es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud**. No se emite pronunciamiento respecto a la eventual intervención escrituraria de Oscar Alfonso Podlech Michaud en la confección del texto que indica "peligroso pasarlo SIM", en la declaración de fecha 26 de septiembre de 1973, otorgada por Osvaldo Bastías Zerón, Director del tránsito de la Municipalidad de Villarrica, acorde lo señalado en el punto respectivo del informe. *Firma María Eugenia Sepulveda Larenas, Profesional Gr. 8° Perito Documental.*

B.17 Informe reservado del Ejército de Chile Estado Mayor General, de fs. 1.641 a 1.642 (Tomo V), de fecha 19 de abril de 2018, del Jefe Del Estado Mayor General Del Ejército, en virtud del cual se adjuntan carpetas con fotocopias debidamente autenticadas de las Hojas de Vida del periodo 1973/74, Minuta de Servicios u Hojas de Antecedentes Oficiales (HAO) y fotografías correspondientes al personal del Regimiento Tucapel de Temuco, **formándose Cuaderno Reservado según resolución de fs. 1.643 (Tomo V)**. Dichos documentos se refieren a: **Pablo Domingo Gran López, Jaime Guillermo García Covarrubias, Pedro Guillermo Manuel Tichahuer Salcedo, Manuel Abraham Vásquez Chahuán, Romilio Lavín Muñoz, Hernán Ramírez Ramírez, Norberto Uribe Moroni, Arnoldo Aedo Matus, Anacleto Aguirre Rivera, Mario Hernán Arias Díaz, Orlando Moreno Vásquez** (quien fuera ascendido a Sargento 1° con fecha 03 de septiembre de 1973, tal como consta a fs. 72 vta del Cuaderno Reservado), **Benjamín Rodemil Farías Lavín, Juan Labraña Luvecce, Libardo Hernán Schwartenski Rubio** (quien fuera contratado con el grado 14 en la Dirección de Inteligencia Nacional en Comisión Extra-institucional con fecha 24 de junio de 1915, tal como consta a fs. 85 del Cuaderno Reservado), **Manuel Rafael Campos Ceballos, Juan Humberto Carrillo Rebolledo, Juan Carlos Concha Belmar, Gabriel Alfonso Dittus Marín, Sergio Orlando Vallejos Garcés, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, Raimundo García Cobarrubias** (quien pasa al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco en 1972, tal como consta a fs. 100 del Cuaderno Reservado). *Documento firmado por don John Griffiths Spielman, General de División, Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Timbre del Ejército de Chile.*

B.18 Informe Pericial Documental N°465, de fecha 31 de marzo de 2017, evacuado por Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1.668 a 1.674 (Tomo V), el cual concluye que según la evaluación de los antecedentes examinados, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto “Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal” en copia de autorización fechada en Temuco el 18 de diciembre de 1973, dirigida al Doctor Wolfgang Reuter B, del Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín-Temuco del Ejército de Chile, **es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud**. *Documento firmado por María Eugenia Sepúlveda Larenas, Profesional Perito Grado 5° de la Policía de Investigaciones.*

B.19 Copia autorizada del Acta de Pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973 de fs. 1.680

(Tomo V), traída a la vista según resolución de fs. 1.679, la que indica que: don Alfonso Podlech habría manifestado que había sido designado Fiscal Militar Ad Hoc con motivo del estado de sitio en que se encuentra el país a disposición de la Fiscalía Militar y gran cantidad de detenidos, por lo que el número de actuarios con los que contaba no es suficiente para interrogar con la urgencia del caso a esas personas. Por lo que se presenta ante el Presidente de la Corte, para pedirle su cooperación para que se pusiera a disposición de la Fiscalía a funcionarios que el mismo señor Podlech habría sugerido: Relator de la Corte, don **Gastón Macklemburg Vásquez**; Secretario en Comisión de Servicio en la Corte, **Dorian Novoa Godoy**; y los actuarios del Primer Juzgado y del Juzgado de nueva cuantía, señores **Adrián Gonzales Maldonado y Héctor Toloza Fierro**.

B.20 Resoluciones traídas a la vista y ordenas a agregar al proceso según resolución de fs. 1.681 (Tomo V), lo que se desglosa de la siguiente forma:

- a) **De fs. 1.682 a 1.705 (Tomo V)**, contiene **copia autorizada de auto acusatorio dictado con fecha 14 de marzo de 2018, traída a la vista de causa rol 113.089, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, en el que se acusa entre otros, a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.
- b) **De fs. 1.706 a 1.735 (Tomo V)**, contiene copia autorizada de auto acusatorio dictado con fecha 30 de noviembre de 2016, traída a la vista de **causa rol 113.969, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, en el que se acusa entre otros, a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.
- c) **De fs. 1.726 a 1.736 (Tomo V)**, contiene copia autorizada **de auto de procesamiento dictado con fecha 23 de mayo de 2018**, traída a la vista de causa rol 113.975, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en el que se somete a proceso a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.
- d) **De fs. 1.737 1.788 (Tomo V)**, contiene copia simple de **sentencia de fecha 09 de febrero de 2017, dictada por el Ministro señor Alejandro Madrid Croharé, traída a la vista de causa rol 2.182, Episodio Eltit**, de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en su aspecto resolutivo, Letra E, declara que se condena entre otras personas, al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.

B.21 Copia simple del documento Junta Provincial de Gobierno de Cautín Primera edición, Suplementos Colección de bandos emitidos por el Diario Austral el 18 de noviembre del año 1973, rolante de fs. 1.798 a fs. 1.816 (Tomo V), que a fs. 1.801 en lo que respecta al subtítulo “La Provincia de

Cautín”, señala que: “Las personas que a continuación se indican deberán presentarse a la Comandancia del Rgto. “Tucapel”, el sábado 15 de septiembre de 1973, ante de las 15:00 horas”, indicando los nombres de diversas personas, entre ellas Daniel Mateluna. Documentos acompañados al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.797 (Tomo V).

B.22 Fotografía de José María Ortigosa Ansoleaga, rolante a fs. 1.888 (Tomo VI), acompañada al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.887 (Tomo IV).

B.23 Certificado de Nacimiento de Mary Carmen Ortigosa Uriarte de fs. 2.002 (Tono VI), acompañados en la querella Criminal presentada por Sebastián Saavedra Cea de fs. 1.999 a 2.001 vta (Tomo VI), en el que consta que nació con fecha 23 de mayo de 1959, registrando como padre a José María Ortigosa Ansoleaga y como madre a Carmen Graciela Uriarte Oyanguren.

B.24 Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Luis Hermosilla Osorio de fs. 2.014 a 2.017 (Tomo VI), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 2.018 (Tono VI)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 2.427 (Tomo VII) y 2.673 (Tomo VIII), **contiene Certificado de Nacimiento de Ignacio Jesús Dabed Ortigosa**, quien nació con fecha 02 de febrero de 1955, registrando como padre a Mario Enrique Dabed Jamis y como madre a Patricia Verónica Ortigosa Uriarte.
- b) **A fs. 2.019 (Tono VI)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 2.675 (Tomo VIII), **contiene Certificado de Defunción de Patricia Verónica Ortigosa Uriarte**, quien falleció con fecha 26 de octubre de 2013.
- c) **A fs. 2.020 (Tono VI)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 2.674 (Tomo VIII), **contiene Certificado de Nacimiento de Patricia Verónica Ortigosa Uriarte**, quien nació con fecha 28 de junio de 1961, registrando como padre a José María Ortigosa Ansoleaga y como madre a Carmen Graciela Uriarte Oyanguren.

B.25 Documentos acompañados en el escrito de Acusación particular y Demanda Civil presentada por Sebastián Saavedra Cea de fs. 2.111 a 2.136 (Tomo VI) y de fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **De fs. 2.077 a 2.081 vta (Tomo VI) y de fs. 2.148 a 2.152 vta (Tomo VI)**, contiene el Texto de la Resolución 60-147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones".
- b) **De fs. 2.082 a 2.091 (Tomo VI) y de fs. 2.138 a 2.147 (Tomo VI)**, contiene el Texto de la Comisión de derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, relativo a la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, aprobado con fecha 8 de Febrero de 2005.
- c) **De fs. 2.092 a 2.110 (Tomo VI) y de fs. 2.153 a 2.171 vta (Tomo VI)**, contiene Sentencia en Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 29 de noviembre de 2018.

B.26 Documentos acompañados en el escrito de defensa presentado por el abogado Víctor Carmine Zúñiga de fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 2.495 (Tomo VII)**, contiene Entrevista a los señores Ministros don Alejandro Solís y Fernando Carreño.
- b) **De fs. 2.496 a 2.497 (Tomo VII)**, contiene Fallo Corte Interamericana caso "Norin Catriman Versus Chile" y valor a los artículos de Prensa.
- c) **A fs. 2.498 (Tomo VII)**, contiene Entrevista al ex Ministro don Alejandro Solís como Asesor del Ministerio de Defensa.
- d) **A fs. 2.499 (Tomo VII)**, contiene Certificado de don Manuel Valdés Valdés, ex presidente de la Confederación de Empleadores Agrícolas, que se refiere a labor desarrollada por su representado en el Sindicato de Empleadores Agrícolas, autorizándolo para que realizara la atención a los miembros del sindicato junto con dedicar parte de su tiempo a la organización de la Fiscalía Militar, desde el 11 de Septiembre de 1973.
- e) **A fs. 2.500 (Tomo VII)**, contiene Certificado para ser ratificado por don Julio Jara González, Ingeniero Agrónomo que trabajó en la Corporación de la Reforma Agraria incluyendo 1973.
- f) **A fs. 2.501 (Tomo VII)**, contiene Oficio del Estado Mayor del Ejército de 22 de Abril de 2009, sobre que Podlech no pertenecía al Ejército antes del 14 de Marzo de 1974.
- g) **De fs. 2.502 a 2.503 (Tomo VII)**, contiene Oficio Estado Mayor del Ejército de fecha Septiembre de 2009, en que señala que Podlech no participó en ningún

Consejo de Guerra y que se opuso al cargo de Fiscal Militar señalando que se estaba desempeñando como Asesor en la Fiscalía Militar de Ejército de Cautín.

- h) **A fs. 2.504 (Tomo VII)**, contiene solicitud de Alfonso Podlech Michaud, en el sentido de proponerse al cargo de Mayor del Servicio de Judicial para desempeñarse como Fiscal Letra de las Fiscalías de Ejército y Carabineros de Temuco.
- i) **De fs. 2.505 a 2.506 (Tomo VII)**, contiene carta de fecha 13 de junio de 2014, de Miguel Muñoz Farías (General de División , Jefe del Estado Mayor General del Ejército) a Gustavo Promis Baeza, (abogado de Alfonso Podlech Michaud), en la que manifiesta que dentro del Código de Fuero no se encuentra regulada la institución del Fiscal Ad-Hoc en lo que respecta a los Tribunales en Tiempo de Guerra, ni se encontró ningún tipo de antecedente relacionado con algún cargo, puesto o función denominado "Fiscal de Hecho" y /o "Fiscal Militar de Hecho" entre 1973 y 1982
- j) **De fs. 2.507 a 2.509 (Tomo VII)**, contiene Declaración judicial de **Gastón Mecklenburg** de fecha 05 de Diciembre de 2013, quien aclara que cuando dice que luego de tomar la declaración, el expediente era llevado al Fiscal, materialmente y físicamente no podía saber a quién se le llevaba efectivamente, si era al Fiscal o a otros administrativos que allí trabajaban. Agrega que en el fondo eran una especie de asesores de actuarios, ya que con el toque de queda llegó una gran cantidad de detenidos y la Fiscalía Militar estaba empantanada con el gran número de personas que allí estaban. Alega que era relator de la Corte de Apelaciones de Temuco, pero no le correspondía relatar todos los días, de tal manera que llegó al parecer un oficio de la Fiscalía Militar a la Corte de Apelaciones pidiendo funcionarios que pudieran ayudar a solucionar el gran número de detenidos que había en el Regimiento y de los cuales prácticamente la totalidad lo estaba por infracción al denominado "toque de queda", recordando que el primer día por lo menos algunos no estaban aún en normal estado de intemperancia, por el tiempo no recuerda cuantos días cumplió esta función de asesorar, cree que fueron uno o dos días, de lo cual diariamente daba cuenta. Una vez que se le exhibe el Acta de Pleno de fojas 1.061, reconoce las firmas que allí aparecen aparece don **Oscar Carrasco Acuña**, don **Rafael Mera Mera** (ya fallecido), **Luis Eduardo Ortiz Bravo** (también fallecido) y don **Mario Olate Melo**, el secretario era don **Claudio González Rozas** (ya fallecido). Pero no aparece la firma de don **Orlando González Castillo**, seguramente no concurrió ese día. Por otro lado, anexa que al abogado Sr. **Podlech** lo conocía muy bien, se trataba de una ciudad chica en esa época y los abogados no eran muchos y este abogado ejercía a

nivel de Corte alegando constantemente. En lo que dice relación con que el Sr. **Podlech** estaba en la Fiscalía, ignora el título que podía tener o si tomaba decisiones en los expedientes en las causas que allí se tramitaban, por lo menos frente al deponente nunca tomó una determinación al respecto, como decir a esta persona déjenla libre o detenida; si recuerda haberlo visto de uniforme. Pero nunca hablaron en ese período en que estuvo. Efectivamente estaban los otros funcionarios judiciales que se mencionan en esta acta y también recuerda a un Magistrado que se llamaba **Pedro Celindo Inostroza** que era Juez de menor Cuantía y que actualmente está fallecido, pero no recuerda si él trabajaba allí o sólo llegó a preguntar algo. Anima que físicamente no tomaba declaraciones, sólo despejaba la gran cantidad de detenidos que había. Ignora las razones para que se le solicitara como un de las personas que debía ir a cumplir funciones, eran tres relatores, pero cree que se le pidió a él, porque era uno de los relatores más antiguo. En segundo lugar, siempre dio garantías a los abogado de imparcialidad y aunque esté mal que lo diga, cree que se debió a sus capacidades personales, pero reitera que solo estuvo algunos días y cumplida la misión de despejar el atochamiento que se había producido en la Fiscalía Militar, volvió a sus funciones propias a la Corte, dando cuenta al Presidente, que era don Oscar Carrasco o al Ministro que le hubiera preguntado al respecto. Con respecto a lo que el Tribunal le pregunta y como una apreciación particular, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, no iba a recibir a cualquier persona que llegara de la calle a solicitar algo, él necesariamente debe haber tomado conocimiento respecto a la investidura o mandato que ostentaba el abogado.

- k) **De fs. 2.510 a 2.511 (Tomo VII)**, contiene Declaración del ex funcionario en comisión de servicio, fallecido, don **Dorian Novoa Godoy**, de fecha 08 de Septiembre de 1977, quien añade que efectivamente estuvo en Comisión de Servicio en la Fiscalía Militar de Cautín, que en ese entonces no era Letrada, pero no puede precisar fecha exacta en que se incorporó a la Fiscalía en calidad de Asesor Jurídico, enviado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. En todo caso, aproximadamente en septiembre de 1973, después del cambio de Gobierno ocurrido el día once. Apunta que conoció a Caupolicán Calfuquir Villalón durante su permanencia en Pitrufquén como Secretario del Juzgado de Letras y posteriormente como Secretario en Comisión de Servicio en este mismo Tribunal. Apoya que no tuvo ninguna intervención en su detención ni en su libertad, ni en la extensión de algún certificado. Pero si puede manifestar que lo vio detenido en el Regimiento Tucapel unos de los días inmediatamente anteriores al 18 de septiembre. En la fecha de los hechos

referidos en la denuncia, el Fiscal Militar era el Mayor **Luis Jofré**, y el declarante junto con su colega **Gastón Mecklenburg**, Relator en esa época de la Corte de Apelaciones de Temuco y también en Comisión de Servicio en la Fiscalía, se limitaban a tomar declaraciones en una oficina cercana a la del Fiscal, remitiendo posteriormente esas declaraciones y los comparecientes al Fiscal, quien era en definitiva quien resolvía y adoptaba las medidas pertinentes.

- I) **De fs. 2.512 a 2.513 (Tomo VII)**, contiene Declaración del Presidente de Colegio de Abogados Temuco de la época don **Guido Sepúlveda Sánchez**, de fecha 28 de Septiembre de 2010, quien aproxima que ratifica sus afirmaciones contenidas en los certificados de fecha 28 Agosto del 2006, complementado el 03 Marzo del 2009, como asimismo, en sus declaraciones prestadas ante el Fiscal en Roma Sr. **Giancarlo Capaldo** el 17 Julio del 2009 y, ante el Juez Exhortado en Temuco Sr. **Carlos Gutiérrez Zabala**, Titular del Primer Juzgado de Letras de Temuco con fecha 12 Mayo del 2010 por delegación del Ministro de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago y exhortante Sr. **Alejandro Solís Muñoz**, Juez de Instrucción en el **Proceso 2192-98**, en el marco de la participación del abogado Sr. **Alfonso Podlech Michaud**, como Asesor Jurídico en el Regimiento Tucapel de Temuco después del 11 de Septiembre del 1973 y que su nombramiento, como Fiscal Ad-Hoc solamente (ya que no era Oficial de Ejército) se generó posteriormente en el año 1974; y sólo para casos puntuales en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29 del Código de Justicia Militar de la República de Chile que, prescribía: *"En caso de ausencia, licencia, imposibilidad legal o cualquier otro impedimento del Fiscal, será subrogado por el Oficial de la respectiva Institución que el Juez designe. El Juez podrá también designar Fiscales Ad-Hoc cuando las necesidades del servicio lo requieran, ya sea para tramitar una causa o para efectuar una diligencia determinada"*. Recordando que con posterioridad el abogado, Sr. **Alfonso Podlech Michaud** fue nombrado por la superioridad del Ejército como Fiscal Titular. Ratifica sus declaraciones contenidas en las actuaciones invocadas, especialmente, en cuanto a que en su condición de Presidente del Colegio de Abogados de Chile en Temuco que, personalmente y con otros colegas abogados (rememora a **Renato Maturana Burgos, Sergio Merino Jarpa, Jorge Mera Molina, Fernando Mellado Diez, Francisco Huenchumilla Jaramillo**) ingresaron al Regimiento Tucapel con motivo de las defensas de detenidos que asumieron a esa sazón, comprobando y constatando in situ que su colega Sr. **Alfonso Podlech Michaud** no intervino en los lamentables hechos que configuraron el desaparecimiento de don **Omar**

Ventureli, siendo Fiscal Titular en esta investigación el Oficial de Ejército Sr. **Luis Jofré Soto**, quien intervenía en todos los procedimientos y suscribía las correspondientes órdenes de ingreso y salida de los detenidos, según recuerda.

- m) **A fs. 2.514 (Tomo VII)**, contiene Certificado de Gendarmería de Chile de 14 de Marzo de 2017, en que señala que no hay órdenes de ingreso o egreso suscritas por el ciudadano Alfonso Podlech durante el año 1973.
- n) **De fs. 2.515 a 2.522 (Tomo VII)**, contiene Informe Pericial de la PDI del 4 de Julio de 2014, el que concluye que: la firma a nombre de don **Oscar Alfonso Podlech** en el documento de fecha 28.SEP.073, es el resultado de un proceso mitativo de las firmas genuinas de la persona antes mencionada, siendo por tanto, falsa. Por los motivos mencionados en el cuerpo del presente informe pericial se presume fundadamente que los grafismos manuscritos que señalan "Peligroso Pasarlo "SIM"" trazados en el documento cuestionado correspondiente a la hoja de papel de roneo, tamaño oficio, con manuscritos mecanografiados, los que comienzan por anverso con la frase "Temuco, a veintiséis de Septiembre de mil novecientos setenta y tres.", no fueron trazados por don **Oscar Alfonso Podlech Michaud**.
- o) **De fs. 2.524 a 2.539 (Tomo VII)**, contiene copia sentencia Corte Suprema en causa rol 2182.1998, sobre secuestro calificado de Luis Jorge Almonacid Dúmenez de 28 Enero de 2016.
- p) **De fs. 2.540 a 2.549 (Tomo VII)**, contiene copia sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, causa rol 2182-98, sobre secuestro de Aladín Rojas de 22 de Enero de 2019.
- q) **De fs. 2.550 a 2.551 (Tomo VII)**, contiene declaración extrajudicial de **Mario Seguel Cides**, de fecha 13 de Abril de 2013, a quien le consta personalmente que en los meses de septiembre a diciembre de 1973 y entre los meses de enero a marzo de 1974, don **Alfonso Podlech Michaud**, en su condición de abogado y Consejero del Colegio de Abogados de Temuco, actuó voluntariamente como un Consultor (o Asesor Legal) de la Fiscalía Militar de Temuco, como único fin (o propósito exclusivo) de que dicho organismo tuviese una organización legal adecuada para cumplir sus tareas propias institucionales. En dicha condición de Asesor Legal de la Fiscalía, obtuvo el señor **Podlech** de la Corle de Apelaciones de Temuco y por su intermedio, de la Corle Suprema de Justicia, principal Tribunal de la República de Chile, la que autorizó expresamente esta: actuación, es decir, la colaboración del Poder Judicial a la citada Fiscalía Militar. Colaboración del Poder Judicial, en su más alto nivel que se concretó en la designación y Comisión de diferentes

Funcionarios Judiciales en la citada Fiscalía Militar, al efecto de que con su experiencia y calidad funcionaria hicieran los interrogatorios de las personas detenidas por orden de dicha Fiscalía. Esta participación del Poder Judicial Chileno en la Fiscalía Militar a través de funcionarios de carrera y experimentados, permitió que los procedimientos llevados por la Fiscalía Militar se ajustaran a las normas básicas del Derecho Procesal Chileno. En este contexto, don **Alfonso Podlech** nunca participó directa ni indirectamente en ningún interrogatorio de detenidos puesto que su única función consistió en asesorar al Fiscal Militar titular, **Luís Jofré Soto**, para que todos procedimientos de la Fiscalía fueran llevados de modo legal. Lo que se aseguró precisamente, mediante la participación de los funcionarios designados por la Corte de Apelaciones de Temuco, con autorización previa de la Corte Suprema de Chile, que fueron las personas que hicieron y llevaron a cabo los interrogatorios de detenidos. Es así, que don **Alfonso Podlech Michaud**, nunca firmó, dictó, ni ordenó ninguna resolución judicial respecto a ningún detenido, pues su única función consistió en actuar como Asesor Legal para asegurar las normas del debido proceso de las personas que fueron detenidos por orden del Fiscal Militar titular, señor **Jofré Soto**. Todo lo anterior le consta por conocer el Acta Oficial de la Corte de Apelaciones de Temuco, que así lo establece y prueba, y porque personalmente en su calidad de Asesor Legal de la Fiscalía del Ejército del Batallón de Transportes de la comuna de Victoria, Novena Región, Chile, tuvo acceso a tales instrumentos y de todo el acontecer de los hechos antes referidos.

- r) **De fs. 2.552 a 2.553 (Tomo VII)**, contiene declaración extrajudicial de **Teodoro Ribera Beneit**, de fecha 10 de Enero de 2011, quien arguye que el 11 de Septiembre de 1973 fue un día especial, despertaron y la radio les informó que se había producido un Pronunciamiento Militar, que se había declarado "Estado de Sitio" y que los habitantes debían permanecer en sus casas, sin salir de ella. Inmediatamente, tomó su automóvil y no obstante lo anterior fue al Colegio a buscar a sus hijos. En la tarde de ése mismo día, lo llama por teléfono el Segundo Comandante de la Fuerza Aérea en Temuco, don **Benjamín Fernández**, y le dice que está en una reunión Conjunta con el Ejército, Aviación y Carabineros, y que requieren de abogados idóneos para que los asesoren en materiales legales. El declarante se excusó manifestándole que tenía seis hijos, tres a de las cuales estudiaban en Concepción, una en Santiago y dos menores en Temuco, y los gastos que ello significaban no le permitía una alternativa como la propuesta. Le dio varios nombres que estaban en la lista, por lo que el declarante le expuso cuales le

parecían más convenientes para esa asesoría. Días después el mismo don **Benjamín Fernández** le informó que habían designado a don **Alfonso Podlech Michaud** como Asesor Legal del Fiscal Militar, Mayor **Luis Jofré Soto** en el Regimiento Tucapel de Temuco. Durante mucho tiempo, don **Alfonso Podlech Michaud** se desempeñó como mero Asesor del Fiscal Militar, y esto me constaba por lo siguiente: **1)** Continuó desempeñando su profesión de abogado, y atendió a muchas personas en asuntos que estaban en manos del Fiscal Militar, Mayor **Luis Jorre Soto**. **2)** Uno de estos asuntos es el del ciudadano Italiano don **Alberto Marvaldi Maccio**, quien fue detenido por ser el Gerente de la Radio La Frontera, que era la que mantenía contacto y transmitía las órdenes a la escuela de guerrilleros de Nehuentúe. **3)** Durante muchos años mantuvo una relación muy fluida con la colectividad Italiana de esta ciudad de Temuco, los asesoró jurídicamente y formó parte de su equipo de Basquetbol "Sportivo Italiano", que obtuvo en varias oportunidades el título de Campeón. No es extraño, en consecuencia, que la esposa del **Sr, Marvaldi**, doña **Gina De Marvaldi**, lo llamara por teléfono pidiendo ayuda para su marido detenido. Por lo que inmediatamente, fue a la casa del representante Consular de Italia en Temuco, Sr. **Guido Zirotii**, y lo requirió para que lo acompañara al Regimiento a pedir la libertad del **Sr, Marvaldi**, pero se negó rotundamente a ello. No obstante se dirigió solo al Regimiento y solicitó una entrevista con el Asesor Legal, don **Alfonso Podlech M**. De la conversación obtuvo que don **Alfonso Podlech** lo acompañara a una Audiencia con el Fiscal Militar **Luis Jofré**. Al conversarlo con don **Alfonso Podlech**, le manifestó que ese era uno de los casos más graves conocidos, por lo que le consiguió una audiencia con el Fiscal **Luis Jofré**, quien después de varias consultas telefónicas manifestó que la única salida posible era que el Superior de los Traperos de Emaus, el **Abate-Pierre**, domiciliado en París, viniera a buscarlos. Obtenido lo anterior, recurrió al Cónsul de Francia en Temuco, don Pedro **Alzuget Heguy**, quien se puso en contacto telefónico con Francia y el abate **Pierre** vino a Temuco con su abogado y el Fiscal Militar **Luis Jofré** les entregó a los 4 detenidos. Asegura que en los diversos casos en que tuvo que intervenir nunca cobró honorarios, todo lo hizo gratuitamente, y lo único que obtuvo fue que el General Ramírez lo citara a la Intendencia, y en presencia de un grupo de personas le dijera con fuerte voz "a usted lo he citado para decirle que como siga defendiendo a estos indeseables lo voy a echar por el río para abajo". Por supuesto que optó por callar, pero de inmediato presentó a la Corte de Apelaciones de Temuco un Recurso de Amparo, el que por estar en "estado de excepción" no fue aceptado. Por todo lo anterior le consta y declara bajo

juramento, que en todo el año 1973 el único Fiscal que veía y resolvía las causas de los detenidos era el Mayor de Ejército **Luis Jofré Soto**, y este y nadie más que éste, tuvo injerencia e intervención en los lamentables hechos relacionados con el desaparecimiento de don **Omar Venturelli**, que se le pretenden imputar a don **Alfonso Podlech Michaud**. Asevera que en la fecha en que se pudieron cometer los hechos o delitos investigados, don **Alfonso Podlech Michaud** era un simple Asesor Legal de un Militar, pero no tenía ni siquiera la facultad de resolver providencias de "mero trámite". En efecto, se imputa a don **Alfonso Podlech** un delito que era imposible para él cometer, pues no contaba en aquella fecha con ningún poder o facultad relativa a los prisioneros que tomó el Gobierno Militar y él al igual que muchos, sólo se vio arrastrado por los acontecimientos.

- s) **A fs. 2.556 (Tomo VII)**, contiene definición de Asesor “ Del latín asesor, que, a su vez, se deriva de assidere, asistir o ayudar. Asesor es, pues, la personas que asesora, es decir, que asiste o ayuda a otra con su consejo o dictamen. Especialmente se designa así al letrado que aconseja e ilustra con su opinión a un juez lego o a las personas que acuden a él en consulta”
- t) **De fs. 2.557 a 2.558 (Tomo VII)**, contiene el Certificado del Tribunal Electoral Regional de la Araucanía en que consta que desde el año 2003 hasta el 2010 Alfonso Podlech Michaud fue miembro de ese Tribunal.
- u) **De fs. 2.559 a 2.560 (Tomo VII)**, contiene Certificado del Presidente del Colegio de Abogados de Chile, felicitando al señor Podlech por los cincuenta años de ejercicio de la profesión ejercidos en forma impecable.
- v) **A fs. 2.561 (Tomo VII)**, contiene Certificado del Director Docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor, sede Temuco, donde consta que Alfonso Podlech Michaud se desempeñó como Director de la Clínica Jurídica, durante el período de 2002 al 2005.

B.27 Documentos acompañados en el escrito presentado por Carolina Contreras Riveras a fs. 2.762 (Tomo VIII), para efectos de contextualizar las condiciones y características de los Consejos de Guerra efectuados durante la Dictadura Militar, así como los vicios que estos presentaron y las recientes sentencias que reconocen estos, que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **De fs. 2.680 a 2.728 (Tomo VIII)**, contiene copia simple de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 02 de septiembre de 2015, en caso “Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs Chile”.

- b) **De fs. 2.729 a 2.748 (Tomo VIII)**, contiene copia simple de la sentencia en causa Rol N°1488-2018, dictada por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema, de fecha 25 de junio de 2018.
- c) **De fs. 2.749 a 2.761 (Tomo VIII)**, contiene copia simple de la sentencia en causa Rol N°4176-2019, dictada por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema, de fecha 29 de agosto de 2019.

B.28 Certificados de Defunción, ordenados a agregar al proceso según medida para mejor resolver de fs. 3.003 (Tomo VIII) y 3.021 (Tomo VIII) que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 3.004 (Tomo VIII)**, contiene certificado de Defunción de **Elías Amar Amar**, quien falleció con fecha 15 de diciembre de 2005.
- b) **A fs. 3.005 (Tomo VIII)**, contiene certificado de **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren**, quien falleció con fecha 19 de noviembre de 2001.
- c) **A fs. 3.006 (Tomo VIII)**, contiene certificado de Defunción de **Ubildo Antonio Jiménez Varas**, quien falleció con fecha 11 de mayo de 2019.
- d) **A fs. 3.022 (Tomo VIII)**, contiene certificado de Defunción de **Nelson Manuel Uldarico Ubilla Toledo**, quien falleció con fecha 12 de febrero de 2007.

B.29 Documentos referidos al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, ordenados a agregar al proceso según medida para mejor resolver de fs. 3.024 (Tomo VIII) que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **De fs. 103 a 111 (Cuaderno Reservado)**, contiene Hojas de Vida del acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, respecto del periodo comprendido entre 1974 a 1981. **A fs. 104 del Cuaderno Reservado y con fecha 24 de julio de 1976**, consta que en cuanto a su preparación profesional se señaló que: “se ha destacado dentro de los finales de la Jurisdicción del IV Juzgado Militar por la idoneidad y eficiencia, evidenciada en la sustanciación de los procesos y el cabal y oportuno cumplimiento de las instrucciones que se han impartido al respecto”. **Mientras que a fs. 109 del Cuaderno Reservado y con fecha 07 de abril de 1981**, consta que en cuanto a su preparación profesional se evidenció que: “En una visita inspectiva efectuada por el Auditor del IV Juzgado Militar a la Fiscalía Militar de Cautín (Temuco), se pudo constatar que ésta es dirigida en muy buena forma por el Tte. Podlech, en lo referido a la sustanciación de procesos y asesoría legal”.
- b) **De fs. 3.026 a 3.040 (Tomo VIII)**, contiene copia de las páginas de **periódicos de la época**, los que se sub-desglosan de la siguiente forma:

- i. **De fs. 3.026 a 3.027 (Tomo VIII), contiene copia del Diario Austral del domingo 01 de julio de 1990, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Confesiones del ex Fiscal Militar”,** entrevista en que el acusado en lo pertinente invoca lo siguiente: Los Marxistas quieren aparecer ahora como inocentes palomas. Justifica la intervención militar como la única alternativa democrática en su contexto y asegura que en Chile hubo una guerra. Estima que los muertos y desaparecidos son el precio que hubo que pagar para llegar al Chile que hoy tenemos. Inicia su entrevista acotando que asumió como Fiscal Militar de Temuco el 02 de marzo de 1974. Incluso antes de eso, fue Asesor Legal de la Fiscalía porque el Comandante Iturriaga que era amigo suyo se lo pidió, especialmente para algunos casos puntuales que se le estaban presentando, como el de Nehuentúe. Cuando llegó el día 11 de septiembre, le pidió que le ayudara con el objeto de reforzar su personal en la Fiscalía Militar, la que estaba a cargo del Mayor Luis Jofré. Se le pidió por el Comandante Iturriaga que se apersonara ante el Presidente de la Corte de Apelaciones de la época con el objeto que, como hombre de Derecho, al igual que el encartado, tuviera la gentileza, dado el momento especial que estaba viviendo el país, para los efectos de facilitar personal necesario al Comandante de la Guarnición, a fin de interrogar a las personas en forma adecuada, porque eran muchos detenidos. Asimismo le pidió que ayudara en la organización de los Consejos de Guerra y para lo anterior, el acusado pidió la colaboración del Colegio de Abogados, de tal modo que todos los procesados tuvieran asesoría legal.
- ii. **De fs. 3.028 a 3.029(Tomo VIII), contiene entrevista al acusado de febrero de 1983, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Los desacuerdos del ex Fiscal Militar”,** donde el acusado en lo pertinente asevera lo siguiente: Le tocaron todos los procesos del MIR a contar de 14 de febrero de 1974, cuando se hizo cargo de la Fiscalía. Tomó parte en los Consejos de Guerra como acusador y allí se condenó a innumerables personas a penas diversas. Posteriormente a la pregunta que dice relación con que esperó que echaran a su hermano para levantar su voz, preguntándole el Periodista si cree que tiene también una parte de responsabilidad, el acusado de autos contesta que si hubiera sido civil es posible que en ese momento, o antes, hubiera elevado la voz disidente en algunos aspectos puntuales, porque sigue creyendo que los postulados de la Junta son los necesarios y

adecuados y por ello apoya al Gobierno Militar. Pero el problema de su hermano fue el factor detonante de toda una inquietud personal.

- iii. **De fs. 3.030 a 3.032 (Tomo VIII), contiene entrevista al acusado que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Ex Fiscal Militar de Cautín. “Espero que la Comisión de Verdad y Reconciliación no se transforme en una de venganza y ajuste de cuentas”,** donde en lo pertinente justifica lo siguiente: Rechaza lo que llama “la utilización política que se ha hecho del hallazgo de las osamentas”. Niega saber que en Temuco hayan también detenidos desaparecidos y ejecutados. Dice ser responsable de todo lo que sucedió a contar del día 02 de marzo de 1974 y que pasó por Fiscalía. **Renuncia a cualquier Ley de Amnistía o lo que sea si el día de mañana pretenden que ha tenido alguna responsabilidad:** ahí esta él para asumirla. No tiene ninguna duda de que así va a ser. A la pregunta de la Periodista respecto de si mientras fue Fiscal sabía que estaba haciendo desaparecer gente, responde que esto del “desaparecimiento” es entre comillas, porque hay muchas personas que ese minuto iban “huyendo” hacia el extranjero. Era una situación bastante peculiar. Afirmo que la DINA actuó llevando a los detenidos como debe ser. Respecto a la pregunta de la Periodista sobre si ellos le entregaban los detenidos, el acusado responde que algunos, otros los llevaba Carabineros, depende de la persona que había sido detenida. Respecto a la pregunta de su la información que tenía para los juicios es la que entregaba la DINA, responde que esos son antecedentes nada más; pero no constituyen una prueba completa de los hechos. De tal manera que se tenía que cotejar con las declaraciones y otros antecedentes si era procedente. Respecto a la pregunta si a los prisioneros los interrogaba el encargado o lo hacía la DINA, **éste responde que él los interrogaba porque era el Fiscal Sustanciador, de tal manera que los detenidos podían venir con un parte, con la declaración extrajudicial; pero tenían que prestar su declaración ante él.** Posteriormente y frente a la pregunta de qué causal era la invocada para pedir la pena de muerte en Consejo de Guerra, el encartado responde que en el Código de justicia Militar hay numerosos hechos: traición a la patria y tantos otros delitos. Aclara que **el Código de Justicia Militar se aplica a todas las personas.** Recordando que estábamos en una guerra y se aplicaba a todas las personas. Luego, consultado sobre los Crímenes de Lesa humanidad, lo cuales no prescriben y son inamnistiables, el acusado responde que son

disposiciones de general aplicación, pero lógicamente cuando hay leyes especiales que se dictan en países que han tenido una situación especial como tuvo Chile en su oportunidad, en que incluso los Obispos fueron partidarios de que se dictara una Ley de Amnistía, no cabe ninguna duda de que la Ley especial siempre prima sobre la general. De tal manera, que a través de la Amnistía quedó solucionado todo el problema de los delitos que en aquella oportunidad tuvieron lugar, porque esto favoreció a ambos sectores. Finalmente respecto a los detenidos desaparecidos urde que su posición es muy simple: cree que existiendo esta Comisión de Verdad y Reconciliación, espera que no se transformen una Comisión de venganza y ajuste de cuentas, lo que sería tremendamente lamentable. Existiendo esta Comisión los mismos personeros, teniendo conocimiento de los hechos a través de los cuales se pueda establecer donde se encuentran las osamentas de las personas que efectivamente hayan muerto, con el máximo de discreción, lisa y llanamente procedan a entregar los cadáveres”

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A. Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron el control de la ciudad de Temuco, erigiéndose como Intendente el Coronel Comandante del Regimiento “La Concepción”, de Lautaro, **Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez** (fallecido según consta a fs. 1.794) y como Gobernador de Temuco, el Coronel **Pablo Iturriaga Marchesse** (fallecido según consta a fs. 1.795), Comandante del Regimiento de Infantería N°8 “Tucapel” de esta ciudad, quien además quedó como Jefe de la Guarnición de Temuco.

B. Que el mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen el procesado según consta a fs. 1.841 a 1.853 **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, abogado de Temuco, que además era Teniente de Reserva del Ejército de Chile, quien se presentó en el Regimiento “Tucapel” para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del Segundo Comandante, Mayor **Luis Jofré Soto** (fallecido según consta a fs. 1.793). Este Oficial, sin embargo, debió asumir mayores funciones como Segundo Comandante del Regimiento Tucapel poco tiempo después. A partir de ese día en adelante comenzaron a llegar personas

civiles al Regimiento que fueron llamadas a presentarse ante la Fiscalía Militar mediante Bandos publicados en la prensa escrita y en las radios, o que fueron traídas en carácter de detenidas desde diferentes puntos de la región, por patrullas de carabineros y Militares.

Ante el alto número de detenidos y de personas llamadas a prestar declaración, la Fiscalía Militar fue reforzada para realizar su trabajo con funcionarios del Poder Judicial que fueron solicitados a la Illma. Corte de Apelaciones de Temuco por el abogado anteriormente indicado, quien actuando como Fiscal Ad - hoc hizo una presentación al Pleno del Tribunal de Alzada, tras lo cual fueron asignados en comisión de servicios algunos actuarios de diferentes Tribunales y un Relator de la Corte, situación que consta en acta suscrita por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, rolante de fs. 1.680 a 1.681 de estos autos.

Debido a la falta de conocimiento en materias procesales penales sumado al poco carácter que tenía y al trabajo como Segundo Comandante del Regimiento, el Mayor **Luis Jofré Soto** (fallecido según consta a fs. 1.793) fue delegando funciones como Fiscal Militar al abogado asesor de la Fiscalía, quien comenzó a detentar el cargo de Fiscal de hecho, al punto que los familiares le consultaban a él por el destino de los detenidos. Sin embargo, el Mayor **Jofré Soto** (fallecido según consta a fs. 1.793) siguió firmando la mayoría de las veces el papeleo administrativo y participó en algunos interrogatorios de detenidos.

C. Que las personas llamadas a presentarse a la Fiscalía Militar y las que fueron traídas en carácter de detenidas eran mantenidas en unas dependencias ubicadas junto a la guardia y en el gimnasio grande. Una vez interrogadas por personal de la Fiscalía Militar, por los detectives de la Policía de Investigaciones agregados al Regimiento o por los propios oficiales que participaban en estas actividades, algunas de ellas eran dejadas en libertad, otras eran enviadas a sus casas con arresto domiciliario y otras eran conducidas hasta la cárcel pública donde permanecían mientras se resolvía su situación procesal.

D. Que los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, el domicilio de la víctima, **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, sufrió una serie de allanamientos por parte de funcionarios de Carabineros de Chile, quienes bajo amenazas, preguntaban a su familia por su paradero, para evitar represalias contra esta, el Sr. **Mateluna Gómez** decide presentarse voluntariamente ante las Autoridades Militares, quedando de inmediato detenido en el Regimiento de infantería N° 8 "Tucapel", posteriormente la víctima es ingresada a la cárcel pública con fecha 17 o 18 de septiembre de 1973. Fue visto al interior de este recinto en muy malas condiciones hasta fines del mes de septiembre de 1973, con

señales de haber sufrido graves apremios físicos, testigos de estos fueron **Elías Amar Amar**, según consta en declaración de fs. 61 a fs. 62 (fallecido según consta a fs. 3.004) y **Elcides Luis Gubelin Durán**, según consta en declaración de fs. 63 a 64, quienes también estuvieron detenidos en ese lugar. Posteriormente con fecha 02 de octubre de 1973 es conducido nuevamente al Regimiento de Infantería N°8 "Tucapel", quedándose en dependencias del citado establecimiento donde fue visto por **Manuel Jesús Contreras Salazar**, siendo posteriormente comunicada su muerte, según consta de fs. 1.798 a 1.816, mediante **Bando Militar N°8**, de la Comandancia de Guarnición de Temuco de fecha 05 de octubre de 1973, por supuesto intento de fuga del Cuartel del Regimiento antes citado.

E. Que en el caso de la víctima **José María Ortigosa Ansoleaga**, este fue citado en su domicilio de Santiago con fecha 21 de septiembre de 1973, por funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile, por exhorto de la Fiscalía Militar, bajo acusación de tener una Escuela de Guerrillas, en un fundo ubicado en el sector Catrico, Novena Región, testigo de esta citación, según consta de fs. 85 a 88, fue su cónyuge **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren** (fallecida según consta a fs. 3.005). Por tal motivo, la víctima, según consta en declaración de fs. 288 a 289 y de fs. 421 a 423, viajó a Temuco junto a dos amigos **Carlos Cardoen** y **Pedro Pablo Errázuriz**, alojándose en las afueras de la referida ciudad, lugar donde estos fueron detenidos por un contingente militar, luego de ser interrogados son dejados en libertad sus dos amigos, siendo el Sr. **Ortigosa Ansoleaga** conducido a la cárcel pública de Temuco en régimen de incomunicado. Posteriormente con fecha 02 de octubre de 1973, la víctima es conducida junto a **Daniel de Los Ángeles Mateluna Gómez** al Regimiento de infantería N°8 "Tucapel", donde fue visto, con signos de haber sido torturado y en muy malas condiciones físicas, según consta a fs. 581 a 582, por **Víctor Hernán Maturana Burgos**, quien se encontraba en la misma situación que la víctima, siendo posteriormente comunicada su muerte, según consta de fs. 1.798 a 1.816, mediante el Bando Militar N°8 de la Comandancia de Guarnición de Temuco de fecha 05 de octubre de 1973, por supuesto intento de fuga del Cuartel del Regimiento antes citado. Por otra parte señalar que según los antecedentes que obran en el proceso, como son las declaraciones de **Carmen Uriarte Oyanguren** de fs. 85 a 88 (fallecida según consta a fs. 3.005), de **Francisco Antonio Rodríguez Uriarte** de fs. 386 a 390 y de **Carlos Cardoen Cornejo** de fs. 421 a 423, **José María Ortigosa Ansoleaga**, era amigo personal del Ex Presidente **Salvador Allende Gossens**.

F. Que los hechos antes mencionados, debieron ser conocidos por **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, Teniente en Reserva, ya que como se mencionó en la letra B, actuaba desde el 11 de septiembre de 1973 como Abogado Asesor y Fiscal Militar Ad-Hoc del Regimiento Tucapel de Temuco, interrogando a los detenidos y decidiendo el destino de las personas privadas de libertad, teniendo en esa fecha las facultades decisorias y de orden al interior de las dependencias del mencionado Regimiento. Además, en su calidad de Fiscal Ad-Hoc y Abogado Asesor de la Fiscalía Militar, no denunció ni informó a la superioridad militar ni a otra autoridad de los ilícitos investigados, ni consta que se haya efectuado una investigación, ni la existencia de un registro como consecuencia de la comisión de estos hechos. Eran tales las facultades que tenía este abogado que los propios dichos del Jefe de Guardia de la cárcel pública de Temuco, para octubre de 1973, en su declaración de fs. 328 a 329, manifestó que: atendida la sobrepoblación luego del 11 de septiembre de 1973, fue a hablar con el encargado de la Fiscalía Militar, aludiendo al abogado antes mencionado, quien “normalizó la situación”. Corolario de lo anteriormente expuesto son las múltiples aseveraciones que han efectuado miembros que prestaron funciones al interior del Regimiento para la época de los hechos investigados, a saber: en dichos de **Aquiles Poblete Müller** (fallecido, según consta a fs. 1.792), Comisario en situación de retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, en su declaración de fs. 615 a 617 expresó que “el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos es el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar”. En este mismo orden de ideas resulta relevante tener presente lo explicitado por el Sargento Primero del Regimiento Tucapel, **José Heriberto Mansilla Gatica**, quien en su declaración judicial de fs. 1.011 señaló: “...a septiembre de 1973, el Segundo Comandante del Regimiento de apellido **Jofré**, no tomaba declaraciones. **Iturriaga Marchesse** solo se ocupaba de cosas generales. El trabajo cotidiano de la Fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto a los detenidos, era de **Alfonso Podlech**”. Asimismo y para reforzar lo manifestado ut-supra, es de suma importancia mencionar el documento que rola a fs. 148 que da cuenta de una orden de libertad de dos personas, de fecha 28 de septiembre de 1973, emitido por la Fiscalía Militar de Temuco y firmada por el abogado y Fiscal Militar Ad-Hoc en comento, aquello en relación con lo que concluye en el informe pericial documental rolante de fs. 1.395 a 1.423, emitido por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, que entre otras cosas expresa lo siguiente: “los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer, que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica FISCAL, en la orden de “LIBERTAT” N° S/N, de la

Fiscalía Militar Cautín Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a Carabineros de Chile, Subcomisaria Villarrica, la cual dispone la Libertad de **Mario Fernando Cortés Bornard** y **Ubildo Antonio Jiménez Vargas** (fallecido según consta a fs. 3.006), es Genuina de **Oscar Alfonso Podlech Michaud**", que de igual forma se vincula directamente con el informe pericial documental elaborado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, traído a la vista desde causa rol 113.985 y rolante de fs. 1.668 a 1.674 (Tomo V) (detallado en el apartado B.18 de documentos), en cuanto concluye lo siguiente: "la evaluación de los antecedentes examinados en esta oportunidad, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto **Luis A. Jofré Soto** Mayor Fiscal (fallecido según consta a fs. 1.793), en la copia de autorización fechada en Temuco el 18.DIC.973, dirigida al doctor **Wolfgang Reuter**, Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín- Temuco del Ejército de Chile, es genuina de **Oscar Alfonso Podlech Michaud**". Lo anteriormente expresado corrobora la responsabilidad en estos hechos, del Abogado Asesor y Fiscal Militar Ad-Hoc, antes mencionado.

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados en esta etapa procesal, constituyen los delitos de **Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados** de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga**, previstos y sancionados en los artículos 150 N°1 y 391 N°1, circunstancias Primera y Quinta, respectivamente, del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de **lesa humanidad**.

En cuanto a las agravantes o calificantes del delito de homicidio, esto es, alevosía y premeditación, sobre la materia este Tribunal ya se ha pronunciado respecto de a la Alevosía en los delitos de Homicidios Calificados en causas roles: **45.345**, caso Juan Tralcal Huenschuman; rol **27.526** caso Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz; **27.525** caso Segundo Cayul Tranamil; rol **29.877**, caso Nicanor Moyano Valdés; rol **45.344**, caso Segundo Moreira Bustos y Juana de Dios Rojas Viveros; rol **29.869**, caso Guillermo Hernández Elgueta; rol **29.879**, caso Domingo Obreque Obreque; rol **45.343**, caso Segundo Lepín Antilaf y otros; rol **57.071**, caso Jorge Arturo Toy Vergara; rol **10.854-P**, caso Dagoberto Cárcamo Navarro y otros; rol **4-2010-V**, caso Víctor Carreño Zúñiga; rol **114.042**, caso José Alerto Fuentes Fuentes (Hotel Oriente); rol **114.007**, caso Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui; rol **44.305**, caso Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos; rol **1-2013**, caso Alberto Colpihueque Navarrete y otros; rol **113.478**, caso Luis Omar Torres Antinao; rol **113.969**, caso Hernán Henríquez Aravena y otros; rol **6.345**, caso José Ananías Zapata Carrasco; rol **114.043**, caso

Gonzalo Hernández Morales; rol **114.047**, caso Rubén Eduardo Morales Jara. Fallos que se encuentran ejecutoriados. En efecto, el Tribunal ha reflexionado lo siguiente:

A. EN RELACIÓN A LA CIRCUNSTANCIA 1° DEL ARTÍCULO 391 N°1 (ALEVOSÍA): En este caso a diferencia de lo que expone la defensa, **sí es aplicable ésta calificante**. Haciendo presente que hay que hacer un distinguo en teoría penal, ya que una cosa es lo que son las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal autónomas, las cuales se clasifican en personales, materiales y mixtas que pueden influir en la determinación de la pena y otra cosa muy distinta es cuando la agravante es parte del tipo penal. En este sentido la defensa no hace radical distinción. Haciendo notar, además, que la alevosía corresponde a aquellas circunstancias calificadas como mixtas, en cuanto por un lado participa de lo material, esto es, la ejecución misma del delito o en los medios empleados, pero también contienen una condición de ánimo o bien condiciones o actitudes del sujeto activo. Dicho lo anterior, en el artículo 64 del Código Penal, a propósito de la comunicabilidad, es necesario reflexionar que cuando la circunstancia agravante es parte del tipo penal – como es el caso en estudio – dichas circunstancias ya no son agravantes, sino como se explicó anteriormente, son parte de la figura penal, siendo el delito único para los diversos partícipes. En consecuencia, la circunstancia debe afectar a todos, distinguiendo la doctrina entre circunstancias y elementos. Al incorporarse las agravantes a la descripción típica, estas se transforman en elementos del delito.

Según el profesor **Mario Garrido Montt** (Obra El Delito de Homicidio y sus figuras penales, Ediciones Encina limitada, Santiago, 1976, Página 154 y siguientes) es claro que actuar a traición corresponde a la maquinación tendiente a engañar o aparentar ante la víctima una situación diversa a la verdadera, pues la cautela importa reserva, astucia o maña para engañar. Asimismo, importa aprovecharse de la confianza o lealtad que la víctima ha depositado en el victimario. Es decir, corresponde a simulación, doblez. Por otro lado, **obrar sobreseguro**, que es la figura que concurre en esta causa, significa crear o aprovechar condiciones fácticas que permiten al agente evitar todo riesgo de su persona, como en cuanto a la realización del acto al momento de la comisión del hecho. Ahora bien, es preciso indicar que en el actuar sobreseguro, puede ser que la situación de seguridad sea absolutamente indiferente para el hechor o deberse a mera casualidad, sin que las condiciones en que obre el hechor – haya o no sido provocadas por él – sean determinantes de la perpetración del homicidio, de modo que, si no hubieran concurrido, el autor a su vez se hubiera abstenido de obrar. En

este caso, obviamente que el acusado propició un actuar sobreseguro, donde las víctimas no tenían ninguna posibilidad de actuación para su defensa. En consecuencia, si no se hubieran reunido estas condiciones que es obrar sobre seguro y atendido además el contexto de la época, claramente no se hubieran ejecutado a las víctimas de autos, Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga, puesto que pese a encontrarse a disposición y bajo custodia de la autoridad militar, fueron apremiados y dados de baja por un supuesto intento de fuga según consta en los artículos de prensa de la época de fs. 6 (Tomo I) y fs. 7 (Tomo I), (Detallados en el apartado B.1 de Documentos) y el mérito de autos. **Ello es actuar sobre seguro y hace concurrente la alevosía.**

B. EN RELACIÓN A LA CIRCUNSTANCIA 5° DEL ARTÍCULO 391 N°1 (PREMEDITACIÓN): Este Tribunal considera que la agravante del artículo 391 N° 1 circunstancia quinta del Código Penal **es aplicable en este caso**, toda vez que de acuerdo al mérito del proceso, a los hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI), y en esta sentencia, también hubo una preparación desde la citación efectuada por comunicado radial a través de la Fiscalía Judicial del Regimiento Tucapel de Temuco, en virtud de la cual se informa a Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga que debían presentarse en dependencias de dicho Regimiento en la ciudad de Temuco. Para posteriormente y también vía comunicado radial, dar a conocer el Bando N°8 del Comandante de la Guarnición Militar de Temuco, en la que decía que el día 02 de octubre, las víctimas de autos aludidas trataron de huir del Regimiento y fueron dados de baja.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además **delito de lesa humanidad**. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Iltna. Corte de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufuén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufuén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

V. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

W. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017;

X. Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017;

Y. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018;

Z. Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020;

A.A Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

B.B Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

C.C. Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

DD. Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

E.E Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

F.F Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.**Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.**

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena. Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad.** 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación.

Ricardo Lorenzetti, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, “Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad” **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7º) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de

vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michel Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

DECLARACIONES INDAGATORIAS

8°) Que prestando declaración indagatoria OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD (38 años a la época de los hechos), quién declaró de fs. 359 a 363 (Tomo II); 539 (Tomo II); 540 (Tomo II); 542 (Tomo II); 576 a 578 (Tomo II); 1.121 a 1.123 (Tomo IV); 1.124 a 1.125 (Tomo IV); 1.127 (Tomo IV); 1.129 (Tomo IV); 1.130 (Tomo IV); 1.139 a 1.140 (Tomo IV); y fs. 1.639 a 1.640 (Tomo V).

En declaración judicial de fecha 16 de mayo de 1991 rolante de fs. 359 a 363 (Tomo II), acota que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, se desempeñó Ad-Honorem como Asesor Oficioso del Comandante de la Guarnición del Regimiento Tucapel, **Pablo Iturriaga Marchese**, debido a su profesión como abogado. La razón de este cargo derivaba de la circunstancia que fue Cadete Militar durante los años 1949 a 1952, año en que renunció para estudiar Derecho. Se le otorgó el grado de Suboficial Primero, aspirante a Oficial de Reserva, por su permanencia en la Escuela Militar. Tan pronto tuvo lugar el Pronunciamiento Militar, se requirió la presencia de los ex Cadetes y en esa calidad, siendo Abogado, el Comandante **Pablo Iturriaga** le pidió que colaborara con él en distintos aspectos legales. Cimentando que era un abogado de ejercicio libre de profesión, por lo que solamente una parte de su tiempo podía destinarlo a ayudar, dado que por el proceso de la Reforma Agraria tenía muchos juicios, defendiendo agricultores afectados. Llegado el 11 de septiembre de 1973, recuerda haberle dicho al Comandante **Iturriaga** que ante la presencia en la unidad de decenas de detenidos y no contándose con el personal suficiente en la Fiscalía Militar para que se atendiera a esas personas, era necesario y urgente solicitar la colaboración del Poder Judicial, para hacer más expedita la labor. Una vez que lo escuchó el Comandante **Iturriaga**, lo autorizó para que en su nombre y representación conversara con el Presidente de la Corte de la ciudad de Temuco, don **Oscar Carrasco Acuña**, quien con toda gentileza transmitió esta inquietud al Pleno de la Corte y previa consulta a la Corte Suprema, se autorizó para que diferentes personas pasaran en Comisión de Servicios a la Fiscalía Militar, que funcionaba en las oficinas de la Segunda Comandancia del Regimiento Tucapel, dentro del mismo edificio. Fue así como se asignaron entre otros a don **Adrián González**, don **Héctor Toloza**, a la señora **Victoria Gálvez**, al Relator don **Gastón Macklemburg** y al Relator y hoy Ministro **Nibaldo Segura Peña**. Todas estas personas permitieron descongestionar rápidamente la Fiscalía, evitando la detención de muchas personas, en que no habían motivos suficientes para ser privados de libertad. Su labor era de nexo entre el Comandante y el señor Fiscal, don **Luis Jofré** del Ejército y el de Carabineros de apellido **Arias**. Ésta labor era ver qué casos haría procedente los Consejos de Guerra, para lo cual se hizo la interconsulta con la Comandancia de la División. Se pidió que viera todo este tipo de problemas y que pidiera la colaboración al Colegio de Abogados, para la defensa de los encausados. Habló al efecto con su colega, don **Guido Sepúlveda**, quien contó con la colaboración de todos los colegas que fueran requeridos para hacer la defensa de los diferentes Consejos de Guerra, que en gran cantidad tuvieron lugar en esta zona. Todos estos Consejos se hicieron con arreglo a la Ley

y basándose en el Estado de Guerra Interno que se había decretado. Recuerda que le llamó la atención un día determinado, que no recuerda, pero tiene que haber sido uno a dos días antes que por **Bando** se diera a conocer su muerte, cuando en circunstancias en que se encontraba conversando con el Mayor **Jofré**, se le apersonó el señor **Ortigosa**, que estaba detenido en el Regimiento, ignorando el motivo y le señaló que era amigo de una serie de Almirantes y Generales que el acusado ni conocía, y que quería hablar con ellos. Lógicamente, el exculpado no podía hacer nada al respecto, pero le llamó la atención ese hecho, porque lo vio muy exaltado y en perfecto estado de salud. Esta notoriedad aparece más de manifiesto cuando leyó en el Informe de Comisión Rettig, donde se señala que esta persona había sido visto maltratado, lo que no es efectivo, por lo menos es lo que al él le consta. Con posterioridad al hecho de que se había dado de baja por intentar una fuga, fue a conversar con el encausado la señora de Ortigosa, de nombre **Carmen Uriarte**, a quien el Fiscal solo le dio explicación de la existencia del **Bando Militar**, por cuanto en tiempo de guerra, el **Bando** equivale a una Ley y no cabe su discusión. Estos Bandos eran redactados personalmente por el Comandante con sus Asesores Militares, pues tienen conocimientos suficientes, adquiridos en la Academia de Guerra, acerca de las situaciones en que es procedente dictar **Bandos**. Respecto en qué lugar se encuentran actualmente los Bandos, piensa que deben estar en la Comandancia de la Guarnición o División misma con asiento en Valdivia. Todas las personas que fueron detenidas oficialmente por la Fiscalía están registrados sus ingresos y egresos cuando correspondía, en el libro pertinente, el que se mantiene en la Fiscalía Militar. Fue precisamente uno de los tantos aspectos que debió ayudar, para llevar el libro en forma, debido al máximo de flexibilidad en cuanto al procedimiento, ya que en vez de las 48 horas para agotar el procedimiento se dieron plazos de meses, para permitir una mejor investigación y defensa en su caso. A nadie se condenó a muerte en estos Consejos de Guerra y varios de estos encausados salieron absueltos. El caso más grave afectó a un Oficial en retiro de Carabineros de nombre **Víctor Hernán Maturana Burgos**, refiriéndose a dicho caso. Posteriormente, con fecha 02 de marzo y ante una petición formal del Comandante de la Guarnición, para que ocupara el cargo de Fiscal Militar, asumió dicha función con el grado de Mayor de Ejército de Servicio de Justicia Militar, el que desempeñó hasta el 02 de enero de 1983, en que renunció voluntariamente, por haber estimado injusta la expulsión del país de que fue víctima su hermano **Carlos Podlech Michaud**, refiriéndose a ello. Respecto a la pregunta que se le formula por los detenidos desaparecidos, entre ellos **José Ortigosa**, funda haberlo conocido. Ignora el procedimiento administrativo a que pudo dar origen el

fallecimiento de algunas personas por aplicación a la Ley de Fuga, dado que desde que asumió como Fiscal esta situación no se produjo. Piensa que estas situaciones podrían estar registradas en los Libros de Novedades de la Comandancia pertinente.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2013 rolante a fs. 539 (Tomo II), ratifica su declaración judicial rolante de fs. 359 a 363, con excepción de aquella parte en que señala que don **Nibaldo Segura** estuvo prestando servicios en la Fiscalía Militar, puesto que ese hecho jamás ocurrió. Aparentemente él fue detenido por infringir el horario de toque de queda y llegó en esa calidad a la Fiscalía Militar. Por este hecho es que se confundió. A su pregunta indica que nunca conversó con el Mayor **Jofré** ni con el Comandante **Iturriaga** respecto de lo sucedido con **Ortigosa**. Debido al trabajo como Abogado de libre ejercicio que paralelamente tenía al de la Fiscalía y los Consejos de Guerra, no estaba mucho tiempo en el Regimiento, por lo que no tuvo la oportunidad de comentar hechos como el que le ocurrieron al señor **Ortigosa**. **Respecto de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** desconoce todo tipo de antecedentes. En cuanto a la confección de los **Bandos**, desconoce quienes los confeccionaban. Puede ser que los haya redactado el propio Coronel **Iturriaga** o que se los hubiese encargado a sus Asesores Militares, cuyas identidades desconoce. A él jamás le pidió que redactara alguno.

En diligencia de careo entre Héctor Ulises Gonzáles Castro y Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013 rolante a fs. 540 (Tomo II), ratifica declaración de fs. 539. Barbulla que no era el Fiscal Militar en aquella época, sino que lo era el Mayor **Jofré**. Asevera que era solo un Asesor Legal y nunca conversó con esta persona, a quien no conoce. Insiste en que no era Fiscal Militar en 1973 y que la persona con quien se le carea está confundida, ya que solo asumió la Fiscalía a partir de marzo de 1974.

En diligencia de careo entre Francisco Antonio Rodríguez Uriarte y Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud de fecha 12 de agosto de 2013 rolante a fs. 542 (Tomo II), ratifica sus dichos de fs. 359. Complementa sus dichos en el sentido que jamás ha sido irónico en sus palabras. Por otra parte, doña **Carmen Uriarte** se entrevistó con el Fiscal **Jofré** en su presencia, pero él no habló con ella. Advierte que no es efectivo que él y Sr. **Jofré** subrogaban en la Fiscalía. Reiterando que fue Fiscal después de marzo de 1974, por lo que no tuvo nada que ver con la muerte del señor **Ortigosa** y menos podría haber dado orden de libertad para él en ese tiempo. En su concepto no había ningún elemento para enjuiciar al señor **Ortigosa**, pero él no tomaba esas decisiones, ni se le consultaba con relación a los hechos de sangre que ocurrieron en esa época como lo

sucedido con el señor **Ortigosa**. Por otra parte, niega haber sostenido una reunión con el Coronel **Iturriaga** o con el Mayor **Jofré** para representarle el hecho de que se estuviese ejecutando personas sin juicio previo. Aparte que los **Bandos Militares** justificaban esos hechos. Añade que el Secretario de la Fiscalía Militar desde septiembre de 1973 en adelante era **Jaime García Covarrubias**. Posteriormente, cuando asumió el exculpado como Fiscal Militar se designó a un Oficial de Carabineros. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003 rolante de fs. 576 a 578 (Tomo II), arguye que el día 11 de septiembre de 1973, oportunidad en la ocurrió el Pronunciamiento Militar en nuestro país, se encontraba en la ciudad de Temuco en su calidad de ex Cadete Militar y dada su profesión de Abogado es llamado por el Comandante del Regimiento "Tucapel" Coronel **Pablo Iturriaga Marchesse**, quien le solicita como una forma de reforzar la función de la Fiscalía Militar, asesorando y ayudando a dar una mayor agilidad al tránsito de centenares de personas detenidas que se encontraban en el patio de la Unidad Militar. Hace presente que estos detenidos provenían de los organismos policiales respectivos y con respectiva documentación (partes). Recuerda que muchos de ellos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.), los que a la luz de sus ideales buscaban el enfrentamiento con sus opositores, razón por la que significaba un riesgo para la seguridad de la zona. Ante tal situación que se estaba viviendo en la zona y en general en el país, es que accedió a la petición del Coronel **Iturriaga**, por lo que pasó a formar parte de la Fiscalía Militar en calidad de asesor y como organizador de los Consejos de Guerra que se formarían a partir de esa fecha. Por esta razón tuvo que hacer coordinaciones con el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, con la finalidad de reforzar la cantidad de personal, por lo que accedió a enviarlo en Comisión de Servicio a la Fiscalía, dentro de los cuales recuerda a **Adrián González Maldonado, Héctor Toloza Fierro** (fallecido) y **Dorian Novoa Godoy**. En dicha Fiscalía Militar, para la fecha de su ingreso, recuerda que se encontraba como Fiscal Militar el Mayor de Ejército **Luis Jofré Soto** (2° Comandante del Regimiento "Tucapel") y una persona que tenía como actuario, **Leonel Quilodrán** y las causas que se veían antes del 11 de septiembre de 1973 eran en su gran mayoría por la Ley de Reclutamiento. Su función fue exclusivamente la conversación con los abogados para que estos acudieran a la defensa de los detenidos, quienes tenían que pasar al Consejo de Guerra, para darles una debida defensa, recordando que tuvo la colaboración del Colegio de Abogados, razón por la cual no tenía disposición absoluta de su tiempo para la Fiscalía, ya que este trabajo no era remunerado y tenía muchas causas en los Tribunales por

expropiación, de las que tenía que hacerse cargo, por lo que su concurrencia en la Fiscalía Militar era sólo momentánea durante el día. Respecto al funcionamiento de la Fiscalía Militar, era en el mismo recinto de la Comandancia de esta Unidad Militar, pero no lo tiene muy claro y a raíz de esto es que muchas personas pudieron ver al encartado transitar por dicho recinto. Aclara que nunca participó en interrogatorios, puesto que estos eran llevados a cabo como correspondía por los señores actuarios, sin que tuviera conocimiento que se aplicara algún tipo de tortura o malos tratos a las personas que concurrían a estas diligencias. Recuerda además, que una vez que se trató de normalizar la situación de los detenidos y debido a la gran cantidad de estos, es que fueron enviados a la cárcel de la ciudad, por lo que creó un Libro de Ingreso y Egreso de Detenidos, conforme se hacía de manera común en los Tribunales del Crimen, ignorando quienes eran las personas que tenían a su cargo el traslado de los detenidos desde la Fiscalía hasta la cárcel de Gendarmería. Narra que su función de Asesor de la Fiscalía duro hasta el mes de marzo de 1974, asumiendo a partir de esa fecha como Fiscal Militar de la ciudad de Temuco, dependiendo para los efectos legales de la IV Juzgado Militar de Valdivia, cargo que ocupó hasta el mes de febrero de 1983, oportunidad en la que por un problema que aquejó a un hermano en relación a los Derechos Humanos renunció. Justifica que algunos Consejos de Guerra estaban presidido por don **Mario Olate Melo**, e integrado por el **Coronel Hernán Mardones Díaz**, **Eduardo Soto Parada**, **Benjamín Fernández Hernández**, **Luis Puebla Leiva**, **Jaime Rowe Del Rio**, **Jorge Verdugo Álvarez** y **Jaime García Covarrubias**, lo que aparece consignado en la Resolución N°1449-73, siendo todas estas personas funcionarios de la Fuerzas Armadas. Con respecto a la consulta, barbulla que mientras fue Cadete de la Escuela Militar el año 1951 aproximadamente, recuerda que el Comandante de su Compañía era el entonces Capitán **Sergio Arellano Stark**, debiendo agregar que una vez que se retiró de la Escuela Militar no volvió a ver a este Oficial sino hasta después de producido el Pronunciamiento Militar, no pudiendo precisar fecha; en que en dependencias de la Comandancia del Regimiento Tucapel se pudo percatar de su presencia, acercándose a saludarlo y en esa oportunidad comentó informalmente que en materia penal operaba la irretroactividad. Palabras que le llamaron la atención, ya que provenían de un Militar, aclarando que no se podía procesar ninguna persona por hechos anteriores. Con respecto a los nombres que se le mencionan, entre ellos **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, soflama que solamente conoce a **Ortigosa**. Recuerda que mientras se desempeñó en la Fiscalía Militar, un familiar de éste consultó por él, debiendo agregar que ignora todo tipo de antecedentes con respecto a las otras personas.

En diligencia de careo entre Bernardita del Carmen Weisser Soto y Óscar Alfonso Podlech Michaud, con fecha de 19 de julio de 2013 rolante a fs. 1.121 a 1.123 (Tomo IV), ratifica su declaración judicial de fs. 2.751 a 2.759 (otorgada en causa diversa). Invoca que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es doña **Bernardita Del Carmen Weisser Soto**, quien fue sometida a Consejo de Guerra en una fecha que hay que precisar. En lo particular, niega que haya tomado alguno de los libros de los que fueron requisados, como también que la haya interrogado en alguna oportunidad. En muy posible que si el Consejo de Guerra fue en 1975 él no haya estado presente, puesto que en ese tiempo ya era Fiscal Militar, acompañando una declaración prestada por dicha persona en el aquel tiempo. Barbulla que no recuerda los hechos que esta señora ha declarado. Es más, piensa que todo lo está inventando. Él jamás tuvo oficina en la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel y sólo se dedicó a organizar los Consejos de Guerra y a buscar a los abogados idóneos para que defendieran a los detenidos. Conjetura que ésta señora fue acusada en la oportunidad de ser la Jefa de la Subjefatura de Av., Alemania del MIR en 1973. La declaración de la señora **Weisser** obedece a un resentimiento y afán de venganza manifiesta, por el hecho de haber sido condenada en un Consejo de Guerra. Incluso fue a Italia a declarar en su contra. Piensa que su nombre fue deslizado en Italia por **Víctor Maturana Burgos**. En lo demás, se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Hermán Carrasco Paúl y Óscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013 rolante de fs. 1.124 a 1.125 (Tomo IV), ratifica declaración judicial de fs. 2.751 a fs. 2.759 (otorgada en causa diversa). Cimentta que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es don **Hermán Carrasco Paúl**, quien fue a declarar a Italia en su contra. Todo lo que esta persona declara es absolutamente falso. Menciona que tiene en su poder una declaración hecha por el señor **Carrasco** en la cual señala haberlo visto de uniforme en la Fiscalía Militar, sin que indicara que tuviera alguna otra función. Indica que el señor **Carrasco Paul** en distintas ocasiones ha ido agregando hechos nuevos. Igualmente, en alguna declaración extrajudicial dijo que el exculpado tenía responsabilidad en los hechos ocurridos con motivo del asalto al polvorín, hecho que también es falso, por cuando estaba en Santiago en esa fecha. Niega haber conocido al señor **Carrasco** de niño. Solo lo conoció en Italia, en lo demás se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Nelio Gastón Holzapfel Gross y Óscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013 rolante a fs. 1.127 (Tomo IV), ratifica declaración su judicial de fs. 2.751 a 2.759 (otorgada en causa diversa). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es don **Nelio**

Gastón Holzapfel Gross, a quien conoce desde hace muchos años. No recuerda el incidente a que esta persona hace referencia. En todo caso, de haber ocurrido como lo expresa el señor **Holzapfel**, con toda seguridad debió haber consultado al Mayor **Jofré**, quien era la persona que resolvía las situaciones de los detenidos. De todos modos, piensa que el señor **Holzapfel** está confundido y que **Dorian Novoa** fue quien conversó con el Mayor **Jofré** y no con el acusado, ya que no tenía poder de decisión. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Daniel Aguirre Mora y Óscar Alfonso Podlech Michaud de fecha 13 de agosto de 2013 rolante a fs. 1.129 (Tomo IV), ratifica declaración judicial de fs. 2.751 a 2.759 (otorgada en causa diversa). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es don **Daniel Aguirre Mora**, a quien ha conocido previo a entrar a esta audiencia. Sin embargo, no lo conocía antes. Respecto de los dichos del señor **Aguirre** indica que son absolutamente falsos. Nunca el exculpado estuvo en la Prefectura de Investigaciones para requerir información de tipo político, asevera que, de haber ido, sólo lo hizo para requerir información de algún detenido pero no información de tipo político. Declara que nunca participó de lo que el señor **Aguirre** sindicó como la "Junta Chica" ni participó de la reunión que sostuvo esta persona con el Coronel **Iturriaga** con motivo del asalto al polvorín del Regimiento. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 13 de agosto de 2013, rolante a fs. 1.130 (Tomo IV), rectifica aquella parte de su declaración que prestó el día anterior, en el sentido que el Secretario de la Fiscalía no letrada antes de su designación como Fiscal Letrado, habría sido don **Jaime García Covarrubias**. No es así, pues lo confundió con el rol que él desarrolló como Secretario de algunos Consejos de Guerra. Aduce que unas de las motivaciones que señaló a la Corte para obtener la colaboración de miembros del Poder Judicial, ya que en el Regimiento solamente había un dactilógrafo calificado, el señor **Leonel Quilodrán**, encargado de las causas del Regimiento y entiende que el Fiscal don **Luis Jofré** lo designaba a él como Secretario, sin perjuicio de otras situaciones en que tiene que haber reemplazado otra persona.

En diligencia de careo entre José Heriberto Mansilla Gatica y Óscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013 rolante de fs. 1.139 a 1.140 (Tomo IV), musita que no es efectivo lo que declara el Sr. **José Heriberto Mansilla**, respecto a que interrogó a personas junto a él, por orden del Fiscal Militar de apellido **Jofré**. Precisa que el Fiscal Militar era el Mayor **Jofré** y que el acusado solo era el asesor de la Fiscalía. Asevera que jamás tomó declaraciones siendo Asesor de la Fiscalía Militar. Tampoco lo hizo **Guido**

Sepúlveda. No recuerda que a su hermano le hayan tomado un fundo y menos que **Mansilla Gatica** haya intercedido ante él por esta persona. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial con de fecha 23 de abril de 2018 rolante de fs. 1.639 a 1.640 (Tomo V), apuna no tener conocimiento de los hechos que en este acto se le dan a conocer, ni tiene conocimiento de los **Bandos**, ya que estaba abocado a los Consejos de Guerra. Aproxima que acompañó un libro de visitas de cárcel, donde dice que las visitas son desde abril de 1974. Antes las vistas las hacía el Fiscal **Jofré**, ayudado por **Adrián González**. Niega haber ordenado los traslados de personas desde la cárcel hasta la Fiscalía ni viceversa. Tampoco puede comprender que estas personas hubieran podido fugarse o intentado agredir a personal Militar. Aquilata que a los Oficiales se les enseñaba a redactar **Bandos**, **Iturriaga Marchesse** y **Hernán Ramírez** tenían injerencia en la redacción de los **Bandos**. Arguye que no era posible que pudiera haber interferido en el contenido de dichos **Bandos**. Respecto del Sr. **Ortigosa**, si lo conocía y ya declaró, en relación a **Mateluna**, no lo conocía. Ratifica su declaración extrajudicial prestada ante Oficiales del Departamento V de "Asuntos Internos", y rolante de fs. 480 a 482 de autos. Atestigua que **Jaime García Covarrubias** fue Secretario del Consejo de Guerra en alguna oportunidad, no vocal del mismo. Por último, le resulta extraño que los hechos de las víctimas de autos hayan ocurrido coetáneamente con los del sr. **Ortigosa**, porque es raro que se ejecutara a cuatro personas por intento de fuga.

9º) Que haciéndonos cargo de la declaración indagatoria del acusado **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD** (quien fue sometido a proceso de fs. 1.841 a 1.853 (Tomo VI), con fecha 23 de octubre de 2018, y confirmado por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco a fs. 1.884 (Tomo VI). Y **acusado** según el auto de fs. **2.041 a 2.053 (Tomo VI), con fecha 15 de marzo de 2019,** como **autor** de los delitos de **Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados** en la persona de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** y de **José María Ortigosa**, perpetrado en la ciudad de Temuco con fecha **02 de octubre de 1973**; si bien éste se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores para eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso y las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción:

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados. Además se reitera

lo ya valorado de los siguientes elementos probatorios específicos que a continuación se indican y analizan:

A. Declaraciones (53):

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

I. Testigos situados en época y contexto:

A.1 ERNESTO AUGUSTO TAPIA MARAMBIO.

En declaración judicial de fecha 05 de diciembre de 1981, rolante de fs. 52 a 53 (Tomo I), alega que el cementerio de Padre Las Casas en el año 1973, después del 11 de septiembre y recuerda que el primer cadáver sepultado en ese cementerio fue el señor **Mateluna**, quien fue muerto por Militares.

A.2 OSVALDO BASTIDAS CERÓN.

En declaración extrajudicial de fecha 16 de septiembre de 1973, rolante a fs. 143 (Tomo I), aquilata que en los primeros días de junio llegó hasta su oficina un tal **José María Ortigosa Ansoleaga** con el objeto de sacarle patente a un automóvil y dos tractores de su propiedad. Posteriormente, a los días siguientes, **Ortigosa** regresó a la Municipalidad y le manifestó que carecía de un administrador para un Fundo que poseía en Catrico, empleo para el cual se ofreció y este de inmediato aceptó la oferta. En la casa patronal observó libros de lectura marxista, no llamándole mayormente la atención, ya que **Ortigosa**, manifestó en reiteradas oportunidades que era amigo personal del ex presidente **Salvador Allende**, con asimismo los senadores **Altamirano**, **Volodia Teitelboim** y **Jaime Suárez**.

En declaración judicial de fecha 26 de septiembre de 1973, rolante de fs. 144 a 145 de autos (Tomo I), fue el detenido el 16 de septiembre de 1973 por Carabineros de Villarrica, por ser administrador del Fundo de **José Ortigosa Ansoleaga**. Afirmó que jamás ha usado armas y salvo la campaña política antes señalada, no ha tenido participación activa de esa índole. No ha sido activista ni propago ideas marxistas en pro del Gobierno anterior. Tampoco ha tenido contacto con grupos extremistas que hayan portado armamento, panfletos o afiches.

A.3 HECTOR ULISES GONZALEZ CASTRO.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre del 2012, rolante de fs. 286 a 287 (Tomo I), respecto a **José María Ortigosa Ansoleaga**, le tocó conocerlo debido a situaciones de trabajo, ya que él era mecánico en Santiago. Además en el mes de septiembre tomó conocimiento por un **Bando** el cual fue transmitido por radio, que **Ortigosa** había sido muerto por personal Militar por intento de fuga, en el interior del Regimiento Tucapel.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre del 2012, rolante a fs. 397 a 400 (Tomo II), ratificó la declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, que rola de fojas 286 a 287 de autos. El Regimiento, en septiembre de 1973 pedía que se les llevaran detenidos a dirigentes sociales de la ciudad de Villarrica. Los solicitaban telefónicamente, sin órdenes escritas. Al ver esta situación llamó al Fiscal Militar, **Alfonso Podlech Michaud** y coordinaron una reunión para analizar la situación, en la que regularizaron la forma en que se solicitaban a los detenidos. Desde esa fecha el Fiscal Militar **Podlech**, ordenó que todo se hiciera por escrito. Recuerda a **José María Ortigosa**, ya que les arreglaba el móvil que utilizaban en la Policía de Investigaciones mientras se desempeñó en Santiago. El taller de **José María Ortigosa**, estaba ubicado en calle Portugal, cercano a 5 de julio. Luego lo volvió a ver en Villarrica, sólo en una oportunidad. Eso fue antes del Golpe Militar. Ese encuentro fue en el Cuartel, ya que lo fue a ver. Precisa que él **no encontró armas en el Fundo Catrico**. Dio cuenta a sus superiores, una vez efectuado el allanamiento, que no había encontrado armas en ese lugar. Indicó tener conocimiento que **José Ortigosa** había comprado el campo en el sector Catrico, ubicado frente a un Cuartel de la Fuerza Aérea,. Cuando fueron allanar la casa y no encontraron armas, a cargo del lugar había un administrador. Supo por el Capitán de Carabineros, **Ramón Torrealba**, que ellos fueron y encontraron iniciadoras, dinamita y pizarras. El allanamiento lo hicieron por orden telefónica de la Fiscalía Militar. Insiste que ellos, el grupo de Investigaciones no encontraron nada de armas en ese lugar. Según su condición de Policía cree que “cargaron” el lugar. Barbulló que supo que había muerto **José Ortigosa** por un **Bando** que se comunicó. Luego, unos dos o tres meses, llegó gente de la DINA que andaba investigando las circunstancias de la muerte de **José Ortigosa**. Llamó a la Fiscalía Militar y le dio cuenta a **Alfonso Podlech**, quien le ordenó dejarlos detenidos.

En diligencia de careo entre Héctor Ulises Gonzalez Castro y Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto del 2013, rolante a fs. 540 (Tomo II), ratificó en lo pertinente sus dichos de fs. 397. No

reconoce a la persona con quien se le carea. Explaya que cuando llamó por teléfono a la Fiscalía Militar alguien le informó que el Fiscal era **Alfonso Podlech Michaud**. Por este motivo pensó que él lo era.

A.4 LIBARDO HERNÁN SCHWARTENSKI RUBIO.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2012, rolante a fs. 432 a 433 (Tomo II), copia de la cual se encuentra de fs. 1.034 a 1.035 (Tomo III). Sobre la existencia de un grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, agrega que conforme a su recuerdo, éste lo integraban el Capitán **Ubilla**, el Teniente **Jaime García Covarrubias (apodado El Yango)**, el Subteniente **Romilio Lavín**, los Sargentos **Orlando Moreno Vázquez** y **Raúl Schonherr Frías**, además del Sargento **Mario Arias Díaz**, los cuales realizaban su labor en una sala de interrogatorios habilitada en la cuadra de la Compañía de Plana Mayor y Servicios, donde era recurrente observar los detenidos que ingresaban a esa sala, **los cuales se sabía que eran torturados**. De la misma forma, existía un grupo de Detectives que estaba integrado por **Carlos Luco Astroza** y **Hernán Quiroz Barra**; quienes efectuaban interrogatorios, los que en más de una vez presenció en oportunidades en que debía entregarles documentación, como eran torturados los detenidos. Además otro interrogador era el fallecido Teniente **Manuel Espinoza Ponce**. Respecto a su consulta referente a las condiciones en que observó a **las personas cuando se estaban siendo torturadas, alega que éstas se encontraban desnudas, con la vista vendada y sobre un somier metálico, junto a sus torturadores** que eran los Detectives **Quiroz** y **Morales**, quienes eran acompañados en muchas oportunidades por el Sargento **Mario Arias Díaz**.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2013, rolante a fs. 519 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 432 a 433.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 12 de julio de 2013, rolante de fs. 536 a 537 (Tomo II), ratifica sus dichos de fs. 519. Aproxima que es cierto lo que el señor **Quiroz** señala en el sentido que el declarante se presentó en su negocio junto con su esposa y que posteriormente le prestó cheques como garantía para comprar un vehículo, pero se los devolvió. También es cierto que le pidió dinero a su hijo y que aún no se lo devuelve, pero lo hará esta semana. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con lo que le tocó ver en el Regimiento Tucapel, por lo que se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 05 de enero de 2010, rolante a fs. 744 a 747 (Tomo III), arguye que vio detenidos al interior del Regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973, quienes eran mantenidos en algunas cuadras de las Compañías de Cazadores y Plana Mayor. Quien estaba a cargo de los detenidos era el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, siendo sus colaboradores directos el Teniente **Espinoza**, los Sargentos **Moreno**, **Schönherr** y **Arias**. Además, había un grupo de Detectives, entre los que recuerda a **Carlos Luco Astroza** y **Hernán Quiroz Barra**. Alguno de los Conscriptos que estaban en la enfermería era requerido por los Oficiales y Suboficiales antes mencionados para que los ayudaran con los detenidos. Respecto de los hechos materia de esta investigación, asevera que se enteró de lo ocurrido por la información que apareció en el diario.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de enero de 2010, rolante a fs. 757 a 758 (Tomo III), recuerda al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, como el encargado del Servicio de Inteligencia Militar (S.I.M.). En lo relativo a las personas que ingresaban en calidad de detenidas al Cuartel, éste Oficial era quien estaba a cargo. Sobre la existencia de un grupo encargado de la entrevista de los prisioneros políticos, basa que conforme su recuerdo, éste lo integraban el Capitán **Ubilla**, los Sargentos **Orlando Moreno Vázquez** y **Raúl Schönherr Frías** además del Sargento **Mario Arias Díaz**, además, también pertenecían a este grupo los Detectives **Carlos Luco Astroza** y **Hernán Quiroz Barra**; sin dejar de mencionar al fallecido Teniente **Hugo Espinoza Ponce**. Insiste en que algunos Conscriptos de la enfermería del Cuartel, eran requeridos en oportunidades por el grupo que trabajaba con los prisioneros o detenidos, esto lo señaló porque en alguna oportunidad vio alguno de estos hombres solicitar la colaboración de la enfermería para asistir a los detenidos, quienes eran interrogados en distintos lugares del Regimiento.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 761 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.029 a 1.030 (en causa diversa). Conjetura que el Sargento **Arias Díaz** pertenecía a Plana Mayor y Servicios y al parecer se integró a la Sección Segunda después del Golpe Militar, pues lo veía junto a **Schönherr**, **Moreno Vázquez** y el Capitán **Ubilla** participando en el grupo que se ocupaba de los detenidos para su interrogatorio.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2013, rolante de fs. 763 (Tomo III), ratifica íntegramente sus declaraciones extrajudicial y judicial prestadas en autos y que rolan de fs. 1.029 a 1.030, a fs. 932 y 1.071 (en causa diversa),

respectivamente. La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el Sargento **Mario Hernán Arias Díaz**, a quien ha hecho referencia.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2013, rolante de fs. 1.077 a 1.078 (Tomo IV), ratificó su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 3.328 a 3.329 (en causa diversa). Recuerda perfectamente al Teniente **Jaime García Covarrubias** y a su hermano **Raimundo**, a quienes en una oportunidad pudo verlos al interior de la sala donde se torturaban personas en la Compañía de Plana Mayor y Servicios. En esos momentos había una persona desnuda y con su vista vendada tendida sobre un somier. También estaban presentes los Detectives **Quiroz** y **Morales**. Respecto al Subteniente **Lavín**, cuenta que él era uno de sus jefes en la Compañía de Plana Mayor y Servicios y pudo verlo entrar en más de una ocasión a la sala donde se interrogaba y torturaba personas. Respecto del punto N°1 del **Bando N° 9** de fecha 5 de octubre de 1973 que le ha sido leído, y del recorte de prensa del Diario Austral del día 4 de octubre de 1973, decanta que **los hechos allí narrados no le resultan verosímiles, por cuanto resulta difícil de creer que un detenido haya intentado fugarse del Regimiento. Cree que las personas mencionadas en el Bando, en este caso, Mateluna y Ortigosa fueron ejecutados por el grupo de Inteligencia o se murieron durante los interrogatorios y torturas**. Delibera que los hechos ocurridos en el Regimiento con relación a los detenidos lo sabían todos los Oficiales.

En diligencia de careo entre José Raúl Inzunza Reyes y Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.106 a 1.107 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 3.445 a 3.446 (otorgada en causa diversa). Divulga que efectivamente pudo haber presenciado algunos interrogatorios cuando ingresaba a la sala donde estos se llevaban a cabo para que dejara documentación. Rememora haber visto entrar a la sala de interrogatorios al Cabo **Salgado Goyeneche**, que era de la Compañía Andina y también estaba a cargo del material de guerra, trabajando junto al Teniente **Lavín**. También vio entrar frecuentemente a **Jaime García Covarrubias** y a **Raimundo García**. Sin embargo, **era común que todos los Oficiales fueran a mirar de vez en cuando, porque era la novedad**. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.108 a 1.109 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.445 a 3.446 (otorgada en causa diversa). Reconoce a la persona con quien se le carea como el Detective **Hernán Raúl Quiroz Barra**, a quien vio en la sala donde se torturaba e interrogaba detenidos.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Jaime García Covarrubias, de fecha 04 de octubre de 2013, rolante a fs. 1.153 (Tomo IV), ratifica íntegramente sus declaraciones extrajudicial y judicial prestadas en autos y que rolan de fs. 3.328, 3.355 y fs. 3.446 respectivamente (en causa diversa). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el Teniente **Jaime García Covarrubias**, de quien ha hecho referencia. Destaca que su nombre lo dio posteriormente, porque le preguntaron si conocía a otros Oficiales a los que hubiese visto en la sala donde se interrogaba y torturaba detenidos. En lo demás, se mantiene en sus dichos.

A.5 JAIME GARCÍA COVARRUBIAS.

En declaración judicial de fecha 21 de abril de 2003, rolante a fs. 550 a 555 (Tomo II), si puede decir que luego del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 se difundieron listas de personas que debían presentarse a la Fiscalía Militar y pudo ver largas filas de personas que se presentaron ante ella, la que se encontraba situada a la entrada del Regimiento. Era una oficina pequeña habilitada para ello. Si fue testigo de las detenciones que se producían en el Regimiento. Las personas que en forma voluntaria se presentaban ya que habían sido llamadas por un **Bando Militar**, el cual fue difundido por radios y diarios. **Esta gente se presentaba al Regimiento y en dependencias de la Fiscalía Militar se resolvía si quedaban detenidos o se les daba la libertad.** En el caso de los detenidos eran enviados al parecer a la Cárcel de Temuco y las personas eran trasladadas en vehículos de prisioneros. En cada vehículo al parecer se llevaba a unas seis personas aproximadamente. Lo que recuerda bien es que se trataban de vehículos cerrados, con las características de los vehículos de Gendarmería. Expone que le correspondió participar en dos Consejos de Guerra y su desempeño fue de Secretario.

En declaración judicial de fecha 26 de enero de 2010, rolante a fs. 750 a 752 (Tomo III), en lo pertinente funda que en algún momento le correspondió desempeñar el cargo de Secretario de la Fiscalía Militar, esto es en septiembre de 1973 y posteriormente en 1974. Este era un puesto rotatorio y dentro de dichas funciones estaba el leer las sanciones a los presos. Habla que sí hubo detenidos en el Regimiento Tucapel, específicamente en la guardia, los que estaban en tránsito o permanecían por un período muy breve. En un primer momento se habilitó el patio con mesas para interrogar personas, porque eran muchas, y cuando llovía se les ubicaba en el gimnasio. Posteriormente, el Capitán **Ubilla** habilitó una dependencia ubicada frente a la Comandancia, cercana al patio de mantenimiento, donde además intervenía personal de investigaciones.

En diligencia de careo entre Herman Carrasco Paul y Jaime García Cobarrubias, de fecha 15 de septiembre de 2010, rolante a fs. 895 a 897 (Tomo III), ratifica en lo pertinente su declaración de fs. 77 (otorgada en causa diversa). Dice que no vio detenidos en el gimnasio del Regimiento Tucapel, aunque es posible que los haya habido de manera transitoria, pues en ese lugar trabajaba la Sección Segunda temas de inteligencia. Recuerda que en la Sección Segunda estaba el Capitán **Ubilla** y el Teniente **Maldonado**. Además estaban los Suboficiales **Moreno** y **Schönherr**. También colaboraban en esa función algunos detectives. Invoca que fue ayudante del Regimiento Tucapel entre febrero o marzo de 1973, hasta fines de noviembre o principios de diciembre de ese mismo año. Adosa que la opinión pública fue enterada de los hechos materia de esta investigación a través de un **Bando**, que debido haber sido firmado por el Comandante **Iturriaga**, pues los **Bandos** de esa naturaleza los debía firmar el Comandante de la Guarnición. Cada situación que se producía en las distintas Unidades de la Guarnición de Temuco, como intentos de fuga en que resultaban personas muertas, eran comunicadas mediante **Bandos**. Estos bandos eran firmados por el Comandante del Regimiento. Además, normalmente podía firmar el **Bando** el Ayudante del Regimiento, como constancia de que la información era dada a conocer en una fecha y hora ciertas. Recuerda haber firmado un par de **Bandos** en que se daba cuenta de la muerte de personas a manos de alguna patrulla Militar. No fue testigo de los hechos señalados en los **Bandos**, por lo que no le consta que los sucesos hayan ocurrido o no de la manera como se detallaba en esos comunicados.

En diligencia de careo entre Héctor Omar Barra Reyes y Jaime García Cobarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fs. 900 (Tomo III), ratifica sus declaraciones de fs. 37, 58 y 946 otorgadas en causa diversa (Correspondiendo ésta última declaración a la de fs. 750 a 752, Tomo III, de la presente causa). Ostenta que existía una dependencia especialmente habilitada por el Capitán **Ubilla** junto a la Comandancia, donde eran interrogados los detenidos por el personal de inteligencia, pero jamás entró a ese lugar mientras estuvo ocupado por ese grupo, ni participó de interrogatorios y menos aún de torturas de detenidos.

En diligencia de careo entre Oscar Inostroza Segura y Jaime García Cobarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fs. 901 (Tomo III), ratifica sus declaraciones de fs. 37, 58 y 946 otorgadas en causa diversa (correspondiendo ésta última declaración a la de fs. 750 a 752, Tomo III, de la presente causa).

En diligencia de careo entre Jorge Luis Godoy Valdebenito y Jaime García Cobarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fs. 902 (Tomo III), ratifica sus declaraciones de fs. 37, 58 y 946 otorgadas en causa diversa (Correspondiendo ésta última declaración a la de fs. 750 a 752, Tomo III, de la presente causa).

En diligencia de careo entre Juan Bautista Labraña Luvecce y Jaime García Cobarrubias, de fecha 22 de septiembre de 2010, rolante a fs. 903 a 904 (Tomo III), ratifica su declaración judicial prestada a fs. 37 (otorgada en causa diversa).

En declaración judicial de fecha 24 de septiembre de 2013, rolante a fs. 1.141 a 1.145 (Tomo IV), propone que en algún momento le correspondió desempeñar el cargo de Secretario no letrado de la Fiscalía Militar, esto es después de septiembre de 1973. Este era un puesto rotatorio por lo que no tiene mucho recuerdo de qué cosa era lo que le correspondía firmar o atender. Recuerda que el Capitán **Ubilla** habilitó una dependencia ubicada frente a la Comandancia, cercana al patio de mantenimiento, donde además intervenía personal de Investigaciones que fue expresamente llamado para apoyar a la Inteligencia en los interrogatorios. Otro grupo de Detectives, según su recuerdo, trabajó con la Fiscalía Militar. Puede ser que el Capitán **Ubilla** haya interrogado personas en ese lugar o quizás se habilitaron dependencias en el gimnasio grande. Sustenta que en una oportunidad vio que en el patio del Regimiento un Conscripto fue azotado, porque robó un reloj de una persona que había sido detenida por toque de queda. El Capitán **Ubilla** trabajaba sólo con personal bajo su mando, es decir, de su Compañía. Aunque es posible que algún otro miembro del Regimiento se haya ofrecido voluntariamente para trabajar con él y que **Ubilla** lo haya aceptado. El Tribunal le lee la declaración de **Orlando Moreno Vásquez** de fs. 3449, respecto de lo cual adosa que efectivamente estaba al tanto de la existencia de detenidos en el Regimiento Tucapel, los que eran interrogados por la Sección Segunda a cargo del Capitán **Ubilla**. Pero desconoce qué sucedió con los detenidos y nada tuvo que ver con ellos. Se imagina que el Mayor **Jofré** conversaba con el Capitán **Ubilla** respecto de los detenidos. En cuanto al abogado **Alfonso Podlech afirma que esta persona llegó para asesorar al Comandante de la Guarnición en los temas jurídicos, incluyendo la Fiscalía Militar.** Supo de personas fallecidas en el Regimiento, pero se informó a través de los **Bandos** que el Coronel **Iturriaga** le entregaba para que informara a la población. También se enteró de hechos a través de los comentarios de pasillo, como fue el caso del asalto al polvorín.

En diligencia de careo entre **Ernesto García Isla y Jaime García Cobarrubias**, de fecha **04 de octubre de 2013**, rolante de fs. **1.151 a 1.152 (Tomo IV)**, ratifica su declaración judicial prestada a fs. 37, 58, 946 y 3.666. Alega que **no sólo se paseaba por la Compañía de Plana Mayor, sino que lo hizo por todas las Compañías porque como Ayudante del Regimiento debió haberlo hecho mandado por el Comandante.**

En diligencia de careo entre **Libardo Schwartenski Rubio y Jaime García Cobarrubias**, de fecha **04 de octubre de 2013**, rolante a fs. **1.153 (Tomo IV)**, ratifica sus declaraciones de fs. 37, 58, 946 y 3.666.

A.6 JOSÉ TOMÁS ARGOMEDO GARCÍA.

En declaración judicial de fecha **04 de septiembre de 2009**, rolante de fs. **700 a 701 (Tomo II)**, a partir del 11 de septiembre de 1973 pasa a desempeñar como ayudante del Coronel **Ramírez** en su calidad de Intendente. Luego del 11 de septiembre se conformó una mini junta integrada por el Coronel **Gonzalo Arias González** en representación de Carabineros; **Pablo Iturriaga Márchese** por el Ejército; **Hernán Pacheco Cárdenas** por la FACH; el Coronel **Ramírez** por el Nuevo Gobierno; y una serie de civiles connotados, entre los que recuerda a un señor de apellido **Picasso**. Respecto a los hechos ocurridos con ocasión el asalto al polvorín del Regimiento Tucapel de Temuco, no lo recuerda. Sin embargo, el Intendente citó a una reunión a todos los Comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden para ordenar que se le informara detalladamente acerca de todo enfrentamiento que ocurriera entre civiles y Militares. **Lo que pretendía era que no hubiera gente desaparecida sin justificación.** Respecto de los **Bandos**, **señala que estos eran redactados por el abogado de la Intendencia**, cuyo nombre no recuerda, pero al parecer por su conocimiento del tema tiene la impresión que trabajaba desde antes en la Intendencia, y eran firmados por el Intendente **Ramírez**. En todo caso, la información acerca de estos hechos era remitida por conducto regular hacia la Intendencia, luego de lo cual se confeccionaba el **Bando** respectivo. Los conductos regulares eran los Comandantes de cada Unidad.

En declaración judicial de fecha **01 de julio de 2013**, rolante de fs. **1.093 a 1.094 (Tomo IV)**, cuenta que respecto de sus dichos anteriores referidos a la manera como se resolvieron los casos de muerte de detenidos en la región, señala que según recuerda comenzaron a llegar a la Intendencia varios anónimos que daban cuenta de la muerte o aparición de cuerpos de personas en la región las que habrían sido ejecutadas por Patrullas Militares o de Carabineros. Producto de esto, el Coronel **Ramírez** llamó a una reunión de urgencia con los

Jefes de Ejército, Carabineros y Fuerza Aérea de la región. En esta cita el Intendente señaló que esta situación no podía seguir ocurriendo y que si se repetían hechos en que hubiesen enfrentamientos a lo menos **debían hacer entrega de los cuerpos a las familias y que los mandos Militares de la zona debían informar al Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la situación que ocurriera mediante un parte** que señalara las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos. Todo lo anterior, para poder elaborar un **Bando** que le diera una salida jurídica formal a estos acontecimientos. Nunca se interiorizó de la manera como se confeccionaban los **Bandos, pero seguramente el abogado de la Intendencia**, cuyo nombre no recuerda, tuvo que haber participado en su elaboración. Decanta que al momento de comunicar los **Bandos** no tenía dudas de la verosimilitud de lo que ellos expresaban; pero que ahora, a cuarenta años de distancia puede concluir que los **Bandos emitidos en la época de 1973 tenían como función principal darle una forma jurídica a los hechos acaecidos y no se ajustaron fielmente a lo que realmente ocurrió.**

A.7 JORGE LUIS GODOY VALDEBENITO.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de agosto de 2009, rolante de fs. 707 a 708 (Tomo III), recuerda que dentro del Regimiento efectivamente existían personas detenidas luego del 11 de septiembre de 1973, incluso recuerda el hecho de que el hermano de un Conscripto de su compañía, quien mientras permanecía prisionero en el patio de la Unidad junto a otros detenidos, de rodillas y con sus brazos extendidos los cuales debían sostener ladrillos, fue brutalmente golpeado por otro Conscripto de la Compañía de nombre **José Chávez Etchepare**, quien estaba designado por el mando de la Unidad para vendar a los detenidos, marearlos mediante la técnica de dar vueltas sobre su eje para posteriormente pasarlos a la pieza que se encontraba dentro de la Compañía de Plana Mayor, la cual contaba con un catre metálico y dos dínamos eléctricos. Difunde que conoció el funcionamiento de estos aparatos cuando por reírse, el Sargento **Mario Hernán Arias Díaz** lo puso sobre este catre y le aplicó golpes de corriente en su cuerpo, al menos por unos 10 minutos, lo cual le causó mucho dolor, vómitos y diarrea, lo que hasta el día de hoy no ha podido olvidar.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2009, rolante de fs. 717 a 719 (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 743 a 744 (correspondiente a la declaración precedente). Divulga saber de la existencia de una patrulla especial formada por Conscriptos que se ofrecieron como voluntarios, entre los que recuerda a **José Chávez Etchepare, Libardo**

Schwartenski, Juan Mario Fuente Henríquez, Juan Carrillo y al parecer Leopoldo Villagrán Alvarado, y Luis Valeria Candía, entre otros. Este grupo era dirigido por el Sargento **Mario Arias Díaz**, quien actuaba bajo las órdenes directas del Teniente **Jaime García Covarrubias**. Este grupo se destacaba por su crueldad con los detenidos y por participar en allanamientos y detenciones, recordando que siempre llegaban con especies sustraídas desde las casas que allanaban. Ratifica lo expresado.

A.8 OSCAR INOSTROZA SEGURA.

En declaración extrajudicial de fecha 26 de agosto de 2009, rolante de fs. 709 a 711 (Tomo III), descarga que destaca que dentro de lo lugares o dependencias que eran usadas para mantener prisioneros políticos dentro del Regimiento estaban la sala de banda de música de la unidad, el gimnasio chico donde se practicaba boxeo, el calabozo de la guardia y la “Sala de Conferencias” existente dentro de la Compañía de Plana Mayor y Servicio. Esta última dependencia, se encontraba ubicada al medio de la Compañía, allí se encontraba un catre metálico de los que ellos usaban y que era de una plaza, con los instrumentos necesarios para la tortura. En alguna oportunidad le correspondió llevar a esta sala a su propio cuñado de nombre **Ricardo Villanueva**, quien por ese tiempo era simpatizante de la Unidad Popular. En lo pertinente, recuerda como quienes realizaban los interrogatorios a los detenidos del Regimiento al Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, Sargento **Mario Arias Díaz**, y los Conscriptos Sargento 2do., de Reserva **José Chávez Etchepare, Libardo Schwartenski Rubio y Luis Ángel Valeria Candía** y el Teniente **Jaime García**, entre otros.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2009, rolante de fs. 720 a 722 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 753 a 755 (correspondiente a la declaración precedente). Respecto de los detenidos distingue que le correspondió trasladar a varios de ellos desde la guardia del Regimiento hasta una sala ubicada entre el pabellón de Plana Mayor y la Compañía de Morteros. A esta sala le llamaban “sala de conferencias de alto nivel”. En una de las visitas que hizo a esa sala pudo ver que dentro de esta se encontraba **Jaime García Covarrubias** y el Sargento **Mario Arias Díaz**, entre otros. **En esa oficina se torturaba a las personas mediante la aplicación de corriente.** Glosa que le correspondió custodiar detenidos en el gimnasio chico, lugar al que llegaban personas muy golpeadas, tanto hombres como mujeres.

En diligencia de careo entre Oscar Inostroza Segura y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fojas 762 (Tomo

III), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial y judicial prestadas en autos y que rola a fs. 774 (correspondiente a la declaración precedente). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el Sargento **Mario Hernán Arias Díaz** a quien ha hecho referencia. En más de una oportunidad le correspondió trasladar detenidos desde la guardia a la sala de interrogatorios, pudiendo ver en más de una oportunidad al Sargento **Arias** entre el grupo de interrogadores. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Oscar Inostroza Segura y Jaime García Covarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fs. 901 (Tomo III), ratifica sus dichos de fs. 753 y 774 (correspondiente a la declaración de fs. 709 a 711 y a la de fs. 720 a 722 respectivamente) en el sentido que vio al Teniente **Jaime García Covarrubias** en alguna oportunidad dentro de la sala donde se mantenían a los detenidos políticos al interior del Regimiento Tucapel y donde, además se les torturaba.

A.9 MARIO HERNÁN ARIAS DÍAZ.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2009, rolante a fojas 736 a 738 (Tomo III), esgrime que efectivamente vio a personas detenidas al interior del Regimiento en tal calidad, en lo denominado “en tránsito” desde la cárcel a la Fiscalía y viceversa, quienes eran generalmente mantenidos en un calabozo que se habilitó en un dormitorio de Conscriptos existente dentro la guardia. Respecto de los funcionarios encargados de las entrevistas de los detenidos al interior del Regimiento, recuerda a personal de la Policía de Investigaciones de Temuco, como por ejemplo a **Hernán Quiroz Barra** y **Hernán Morales Toledo**, además de los Sargentos **Orlando Moreno Vásquez**, y **Raúl Schonherr Frías** y el fallecido **Nelson Ubilla Toledo**. Dentro de este grupo, rememora como Conscriptos de confianza de este grupo a **Libardo Schwartenski Rubio** y **José Chávez Etchepare**. Sobre la “Sala de Conferencia”, respecto de la cual se le pregunta, espeta que cada Compañía del Regimiento tenía una sala de instrucción teórica, con la finalidad de efectuar la enseñanza respectiva a los Conscriptos, estas se encontraban al centro de cada Compañía, contigua a los baños y dormitorios. Efectivamente su Compañía tenía la suya y allí se interrogaba por parte del grupo ya referido a los detenidos.

En declaración judicial de fecha 28 de enero de 2010, rolante de fs. 755 a 756 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 879 a 881 (correspondiente a la declaración precedente). En lo pertinente estimula que las personas que mencionó

en su declaración extrajudicial como participando en interrogatorios eran los que formaban parte del Departamento Segundo.

En diligencia de careo entre Oscar Inostroza Segura y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 762 (Tomo III), ratifica íntegramente declaración prestada a fs. 951 de autos (correspondiente a la declaración precedente). En alguna oportunidad le correspondió entregar detenidos desde la guardia a Conscriptos para que llevaran detenidos a la dependencia a que hace referencia el Sr. **Inostroza**.

En diligencia de careo entre Libardo Schwartenski Rubio y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 763 (Tomo III), Ratifica íntegramente las declaración a fs. 951 de autos (correspondiente a la declaración de fs. 755 a 756). Aunque no recuerda a la persona con la que se le carea, si recuerda el nombre de **Libardo Schwartenski Rubio** como un Conscripto de confianza del grupo de Suboficiales y Oficiales a cargo de los detenidos. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Enrique Segundo Muñoz Moreno y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 764 (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 951 de autos (correspondiente a la declaración de fs. 755 a 756).

En diligencia de careo entre Manuel Jesús Contreras Salazar y Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a fs. 765 (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración prestada a fs. 951 de autos (correspondiente a la declaración de fs. 755 a 756).

En declaración judicial de fecha 06 de julio de 2013, rolante de fs. 1.110 a 1.112 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 879 a 881 (correspondiente a la declaración de fs. 736 a 738) y la judicial de fs. 951 a 952 (correspondiente a la declaración de fs. 755 a 756). Respecto de su consulta, explana solo haber visto detenidos en una dependencia ubicada en la guardia del Regimiento, los **que no se registraban en ese lugar, es decir, no se dejaba constancia de su detención e ingreso a la Unidad en el libro de novedades**. Explana que mientras estuvo allí, a veces llamaban del Departamento II para pedir que les llevaran los detenidos a la oficina que tenían en la Comandancia. Dichos detenidos eran llevados con su vista descubierta y no iban esposados. Sin embargo, le parece que había otro grupo de detenidos que eran llevados hacia la Compañía de Plana Mayor, que **iban con su vista vendada**. Respecto de su consulta, expone que el Oficial de Inteligencia del Regimiento era el **Capitán Nelson Ubilla Toledo**, quien trataba junto a su grupo el tema de los detenidos.

Tiene entendido que todos los Oficiales concurrían al lugar donde trabajaba **Ubilla** y su grupo, porque cuando llegaban con detenidos debían informarle al Capitán respecto de la razón por la cual estas personas estaban privadas de libertad. **También debían darle cuenta al Fiscal** respecto de lo mismo, que en 1973 correspondía al Mayor **Jofré**, quien se hizo asesorar por personal de la Corte de Apelaciones de Temuco y por un abogado de nombre **Alfonso Podlech**. **A este abogado lo veía casi todos los días cuando llegaba al Regimiento**. Explica que muchos detenidos que estaban en la guardia fueron llamados a declarar a la Fiscalía Militar ubicada en la Comandancia. Varios de estos fueron dejados en libertad y otros fueron llevados a la cárcel. El Tribunal le lee las declaraciones extrajudicial y judicial prestadas por **José Raúl Inzunza Reyes** de fs. 3.307 y 3.310, respecto de lo cual el deponente declara que supo de interrogatorios efectuados en la Compañía de Plana Mayor y Servicio, nunca participó de ellos. Reitera que no participó en interrogatorios o torturas de detenidos. Se comentaba eso sí, que los hermanos **García Covarrubias** participaban de estas actividades, sobre todo el menor de ellos que era medio loco, sometiendo a los Conscriptos a actividades de instrucción no programadas durante las noches.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2015, rolante de fs. 1.380 a 1.381 (Tomo IV), manifiesta que efectivamente hubo personas detenidas al interior del Regimiento Tucapel, quienes eran mantenidas por breve tiempo en la guardia de la unidad. **Ellos eran llamados a declarar en la Fiscalía Militar ubicada en el edificio de la Comandancia**. Recuerda que efectivamente el Capitán **Ubilla** trabajaba con un grupo de detectives en la Compañía de Plana Mayor, donde interrogaban detenidos en la sala de instrucción. **Los detectives trabajaban tanto en la Fiscalía Militar** como en la sala de instrucción con el Capitán **Ubilla**. Los Sargentos **Moreno Schonherr** trabajaban en la Sección Segunda. Los nombres de **Daniel Los Ángeles Mateluna Gómez, José María Ortigosa Ansoleaga** y otros, no le resultan conocidos, salvo el apellido **Ortigosa** que asocia con un rumor que decía que esta persona habría sido detenida por personal de la FACH y que habría sido dejado en libertad tras pagar una alta suma de dinero.

A.10 RAÚL CERDA AGUILEF.

En declaración judicial de fecha 25 de abril de 2012, rolante de fs. 954 a 956 (Tomo III), ratifica su declaración judicial de fs. 636 (otorgada en causa diversa). Recalca que hubo muchos detenidos en el Regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973, los que eran mantenidos en la guardia de la unidad, en el gimnasio chico y en el gimnasio grande. A cargo de los

interrogatorios de los detenidos había un grupo de Oficiales, Suboficiales y civiles. Entre los Oficiales recuerda a los Capitanes **Nelson Ubilla Toledo**, a los Tenientes **Jaime García Covarrubias** y **Alejandro Rubio Valladares** y a los Subtenientes **Raimundo García Covarrubias**, **Manuel Espinoza Ponce** y **Carlos Oviedo Arriagada**. De los Soldados recuerda al Suboficial Mayor **Quilodrán**, Sargento **Silva San Martín**, **Mario Arias Díaz** y **Alberto Cerda Miere**, este último conductor, **Víctor Juvenal Del Río Poveda**, **Albino Krausse Álvarez**, quienes trabajaban en Inteligencia y vestían de civil. Todos ellos pertenecían a la Plana Mayor que dependía de **Ubilla**. Expresa que **era conocido por todos en el Regimiento que lo detenidos eran torturados en una dependencia ubicada en la Compañía de Plana Mayor y Servicios**. Hasta ese lugar llevaban a los detenidos para interrogarlos, pudiendo ver a los Oficiales antes indicados pasar con detenidos hacia ese lugar o mandar en su nombre a buscar detenidos al gimnasio o a la guardia para ser llevado a la sala antes mencionada. Esto lo sabe porque su Compañía estaba encargada de efectuar guardias en el perímetro interior del Regimiento y constantemente podían ver estas actividades.

A.11 NAVOR SIFRIDO SOTO CERECEDA.

En declaración judicial de fecha 23 de enero de 2013, rolante de fs. 1.059 a 1.063 (Tomo IV), Poco después del 11 de septiembre de 1973 el Capitán **Fernández Carranza** fue relevado de su mando y en su lugar fue puesto el Teniente **Pablo Gran**. Asevera que vio muchos detenidos en el Regimiento Tucapel, alrededor de quinientos. Los **detenidos que estaban en el patio, estaban de cubito abdominal ordenados en filas uno al lado del otro, tenían su vista vendada con un paño negro y sus manos estaban atadas a la espalda**. Ellos (los Soldados) tenían la misión de darles alimentos una vez al día. El rancho de Soldados Conscriptos fue adaptado como un lugar para la tortura, mientras que el gimnasio fue destinado para dejar al resto de los detenidos. A estos lugares eran llevados los detenidos para ser apremiados o para que descansaran, respectivamente. También pudo ver que en ese lugar entraban civiles y otras personas que no conocía. Algunas veces, mientras estaba de guardia, le correspondió ir a dejar detenidos hacia el lugar donde eran torturados. En ese lugar pudo ver al Teniente **Espinoza**. **Recuerda que a los detenidos una vez que salían de la tortura había que ir a buscarlos entre dos a tres Soldados, puesto que no podían sostenerse en pie por sí solos. Además, se veían muy maltratados, algunos estaban amarillos y con los ojos negros, además de tener la piel pegada a la cara**. Estas personas estuvieron al menos 15 días viviendo y durmiendo en el patio o en el gimnasio, siendo sacadas a

torturas durante ese tiempo. Suma que **todas las noches podían escuchar desde la Compañía de Morteros gritos y lamentos que provenían desde el rancho de Soldados Conscriptos donde se torturaban los detenidos.** Recuerda que en la Inteligencia del Regimiento trabajaban el Capitán **Nelson Ubilla Toledo** y el Teniente **Raimundo García Covarrubias**, quienes pertenecían a la Compañía de Plana Mayor y Servicios. Seguramente ellos dos tenían algo que ver con los detenidos. Adosa que **antes del 11 de septiembre de 1973 se formaron grupos de fusilamiento**, siendo sacados efectivos de distintas Compañías para adiestrarlos en estas funciones. Efectivamente recuerda que en el patio del Regimiento se azotó a varios Soldados Conscriptos. Estos eran amarrados a un poste que había en el patio y un verdugo que tenía en su cabeza una capucha los azotaba. Los Soldados no resistían más de tres latigazos antes de desmayarse. Esto se hacía con el Regimiento completo formado en el patio y que observaba. Además, la banda tocaba los tambores. **Expresa que es imposible que los Oficiales del Regimiento no supieran lo que ocurría al interior de la unidad**, puesto que para cada cosa que se iba a hacer ellos mantenían reuniones permanentes. **Ninguno podría decir que no hubo detenidos en el Regimiento o que no supieron que se torturaba o de la manera y circunstancias en que los detenidos fueron ejecutados.** Tampoco podrían negarlo los Soldados Clase.

A.12 PABLO DANIEL ALARCÓN PÉREZ.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de mayo de 2016, rolante a fs. 1.485 (Tomo V), urde que conocía a la víctima **Daniel Mateluna Gómez**, quien vivía en las cercanías de su domicilio en calle Ziem de la Población Ercilla. Recuerda que en 1973 **Mateluna** era un Carabinero jubilado quien tenía la edad 60 años aproximadamente e ignoraba que militancia política tenía, pero conocía que era simpatizante del Gobierno del Presidente Salvador Allende. **Mateluna** era una persona muy conocida en el barrio por fomentar el deporte en la población e incluso tenía un Club Deportivo. Asevera que fue detenido en la misma fecha que su primo **Guido** y posteriormente tomó conocimiento por un **Bando Militar** que había sido ejecutado en las mismas circunstancias que su primo.

A.13 MARIO ARNOLDO ALARCÓN TAPIA

En declaración extrajudicial de fecha 05 de mayo de 2016, rolante de fs. 1.456 a 1.457 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.486 a 1.487 (Tomo V), respecto a la víctima **Daniel Mateluna Gómez**, aduce que

efectivamente lo conoció, él era una persona mayor, quien era practicante, incluso sabe que trabajó en Carabineros de Temuco. Solo supo por comentarios que había sido detenido por los Militares e incluso que había estado oculto antes de su detención y debido a que habían detenido a su hijo **Daniel** tuvo que entregarse ante la autoridad Militar. Posteriormente, por los antecedentes que obtuvo en Temuco, supo que a **Mateluna** le habían dado muerte durante un intento de fuga.

A.14 JOSÉ RAÚL INZUNZA REYES.

En diligencia de careo entre José Raúl Inzunza Reyes y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.102 a 1.103 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.310 a 3.313 (otorgados en causa diversa). Cimiento que lo recuerda muy bien porque trabajó con él en la Compañía de Plana Mayor y Servicios junto con el Capitán Nelson Ubilla Toledo. No puede estar equivocado. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre José Raúl Inzunza Reyes y Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.106 a 1.107 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.310 a 3.313 (otorgados en causa diversa). Reconoce a la persona con quien se le carea como Libardo Schwartenski Rubio de quien hizo referencia. Él estuvo presente durante los interrogatorios, pero no lo vio aplicar electricidad a los detenidos ni interrogarlos. Por otra parte, sólo recuerda al Sargento Arias participando en interrogatorios y torturas. Justifica que es cierto lo que el señor Schwartenski señala, en el sentido que todos los Oficiales del Regimiento iban a la sala de interrogatorios a curiosear. No sabe si ellos interrogaban o no, pero sí entraban a mirar.

A.15 ELIAS AMAR AMAR.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre de 2003, rolante de fs. 61 a 62 (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 583 a 584 (Tomo III), anexa que fue detenido el 14 de septiembre de 1973 en horas de la noche, en el interior de su domicilio por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, quienes vestían de uniforme y luego de realizarse un gran operativo. Luego de su detención, fue trasladado a la Base Aérea de "Maquehue", donde fue interrogado y torturado. Esa misma tarde los mismos soldados de la FACH lo trasladaron a la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel de Temuco, donde fue llevado ante el Fiscal Militar, percatándose que se trataba de un conocido abogado de la zona de nombre Alfonso Podlech, quien lo mandó incomunicado a la cárcel pública de Temuco. Recordó haber visto entre otras personas a Pedro Ríos, Daniel Mateluna, José Ortigosa y Omar Venturelli. Apunta que en el caso de Ortigosa

y Mateluna, estos fueron muertos a principios del mes de octubre, luego de haber sido sacados de la cárcel, por personal Militar quienes los trasladaban al Regimiento, ignorando las circunstancias en que ocurre la muerte de estos dos y quienes lo hicieran. En cuanto a las veces que tuvo ocasión de ver a estas personas, solo a **Mateluna lo vio en precarias condiciones físicas debido a las torturas recibidas por parte de sus interrogadores**, pero en el caso del resto de los nombrados pudo darse cuenta que se encontraban en un buen estado físico.

En declaración extrajudicial, de fecha 31 de agosto de 1990, rolante de fs. 89 a 91 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 228 a 230 (Tomo I), escrutó que en la cárcel, había unos 700 a 800 detenidos, se encontró allí con **Pedro Ríos, Venturelli, Ortigosa** quien llegó, luego fue sacado y llevado al Regimiento. Destacó que en la noche y en la tarde venían a buscar detenidos, los llamaban por una lista, algunos volvían y otros no. Respecto a **Mateluna**, lo reconoció, porque lo había conocido en calidad de dirigente deportivo. A **Mateluna y Ortigosa los llevaron juntos un día, después no volvieron** y no supo más de ellos.

A.16 ELCIDES LUIS GUBELIN DURAN.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de Noviembre de 2003, rolante de fs. 63 a 64 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 585 a 586 (Tomo III), apunta que **cerca del 20 de septiembre de 1973 llegó a la cárcel de Temuco, oportunidad en la cual tuvo la ocasión de ver detenidos en este lugar a Daniel Mateluna y José Ortigosa**, quienes en una oportunidad fueron sacados del penal, ignorando para donde eran llevados o en qué circunstancias fueron muertos, ya que a los días siguientes **se enteró, por comentarios, que habían sido al parecer fusilados**. El primero de los nombrados **estaba en muy mal estado físico producto de las torturas recibidas, mientras que en el caso de Ortigosa, éste era una persona muy activa y que incluso había pintado las galerías del recinto carcelario**.

En declaración extrajudicial, de fecha 28 de febrero de 2012 rolante de fs. 70 a 71 (Tomo I), respecto a **Daniel Mateluna Gómez**, expone que **lo conoció al interior de la Cárcel Pública de Temuco**, el permaneció recluso solo un par de días del mes de septiembre de 1973, no recordando si en alguna oportunidad le mencionó el motivo por el cual había sido detenido, como tampoco recordó haberlo visto en malas condiciones físicas. El único recuerdo que tiene es que **a fines de septiembre de 1973 no lo volvió a ver más y nunca supo que había pasado con él**.

En declaración judicial, de fecha 19 de marzo de 2012 rolante a fs. 73 (Tomo I), ratificó su declaración extrajudicial que rola de fs. 70 a 71 (Tomo I), asegura que no conocía a don Daniel Mateluna y solo tuvo contacto con él durante el período en que coincidieron en la cárcel de Temuco, por lo que desconoce qué ocurrió con esta persona.

A.17 UBILDO ANTONIO JIMENEZ VARAS.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 1973, rolante a fs. 147 (Tomo I), arguye que lo atajo en la calle José María Ortigosa, para pedirle profesionalmente le atendiera su campo. Que posteriormente visitó el campo de Ortigosa para hacer un plan de explotación, el cual no se llevó a efecto, porque no tuvo oportunidad de conversar nuevamente con Ortigosa.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto del 2012, rolante a fs. 284 a 285 (Tomo I), respecto de Daniel Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga, acotó que del primero de ellos desconoce antecedentes y a Ortigosa le tocó conocerlo debido a que él tenía un campo en el sector de Catrico y se comentaba que era activista del Gobierno y pagado para realizar estas labores, a quien recordó que cuando se encontraba detenido en el Regimiento Tucapel lo trasladaban por un patio esposado con las manos atrás, desconociendo mayores antecedentes de su paradero. Respecto a la consulta, destacó que luego del tiempo logró establecer que uno de sus torturadores en el Regimiento Tucapel, fue un Capitán de apellido Quintana, y el Fiscal Militar que lo interrogó era de apellido Podlech, quien le hizo consultas respecto a Ortigosa.

A.18 VICTOR HERNAN MATURANA BURGOS.

En declaración extrajudicial de fecha 31 de agosto de 1990, rolante de fs. 231 a 238 (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 301 a fs. 306 (Tomo I), relató que en el mes de septiembre, alrededor de las 15.00 horas en un día de la última semana, en el momento que se encontraba en el patio junto con el resto de prisioneros, fue llamado por un funcionario de Gendarmería para ser llevado a la Fiscalía. También llamó a José María Ortigosa que también estaba en el patio. Fueron sacados juntos y llevados en el mismo vehículo al Regimiento. Los condujo en una camioneta con Guardia Militar, un Suboficial del servicio de Inteligencia de apellido Moreno, quien siempre vistió de civil. Continuó que llegados al Regimiento, los hacen esperar en el calabozo al lado de la guardia. Transcurridos unos minutos llega un Conscripto y vendándole la vista lo conduce al gimnasio, entregándolo al equipo de torturadores.

Terminados estos su tarea, se lo llevan a declarar a la Fiscalía, donde lo interroga el asesor legal en base, informó que aquellos lo habían entregado. Después de esto se le lleva de nuevo al mismo calabozo, permaneciendo un tiempo breve, pues **José Ortigosa** ni ningún otro detenido permanecido en él. Lo llevan de vuelta a la cárcel incomunicado. Alrededor de la medianoche del mismo día, sorpresivamente entró a su celda, un Cabo de Gendarmería de apellido **Silva**, a quien apodaban el “**Choro Silva**”. **Muy excitado y sabiendo que él había estado en el Regimiento junto con Ortigosa, le dijo: “Vengo del servicio hospital que entregué a las 12 de la noche y hace poco llegó el cadáver de Ortigosa todo baleado”**. De esta forma supo la muerte de esta persona, lo que verifico días después, cuando se le dejó en libre platica y se reintegró al grupo de presos políticos.

En declaración judicial de fecha 20 de febrero de 1991, rolante a fs. 311 a 317 (Tomo I), ratificó su declaración prestada ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 31 de agosto de 1990. Respecto a la situación de José María Ortigosa, sustentó que en el mes de septiembre, día exacto no recuerda, se encontraba en la cárcel de Temuco junto a otros prisioneros y entre ellos José Ortigosa, a quien no ubicaba, ya que eran más de doscientos presos que allí habían. Cuando fueron llamados Ortigosa y él, conducidos en un vehículo Militar al Regimiento Tucapel, al mando de un Suboficial de apellido Moreno. En el vehículo solo iban Ortigosa y él, aquel parecía ser una persona de recursos, ya que le contó durante el trayecto al Regimiento sus inquietudes respecto de la vida que iban a llevar en la cárcel, como pintarían la galería y cosas de ese tipo. Llegados al Regimiento son conducidos al calabozo al lado de la guardia, al rato después fue llevado por un Conscripto a la sala de tortura y a continuación a la interrogación ante el asesor legal de la Fiscalía y luego a la vuelta del calabozo ya no estaba Ortigosa, para enseguida conducirlo de regreso a la cárcel incomunicado. Suma que alrededor de la medianoche del mismo día, sorpresivamente entró a su celda, un Cabo de Gendarmería de apellido Silva, a quien apodaban el “Choro Silva”, muy excitado y sabiendo que había salido temprano con Ortigosa, le dijo más o menos lo siguiente: “Vengo del servicio hospital que entregué a las 12 de la noche y hace poco llegó a la morgue el cadáver de Ortigosa todo baleado”.

En declaración extrajudicial de fecha 21 de febrero de 1991, rolante a fs. 345 a 348 (Tomo I), atina que respecto de José María Ortigosa, que tenía unos 45 años, 1.80 metros de estatura aproximadamente, macizo, tez morena y cabellos negros. Relató el traslado al Regimiento junto a Ortigosa y como se enteró de su muerte por el funcionario de Gendarmería conocido

como el "Choro Silva". Con posterioridad llegó a la cárcel el rumor que a Ortigosa lo habían baleado al intentar fugarse.

En declaración extrajudicial de fecha 03 de julio del 2003, rolante de fs. 561 a 563 (Tomo II), blasona que dentro de las personas que fueron ejecutadas por razones políticas recuerda a **José Ortigosa Ansoleaga, Juan Antonio Chávez Rivas y Daniel Mateluna Gómez**. Con estas personas nombradas anteriormente, tuvo algún tipo de contacto ya sea en la cárcel o en el Regimiento, como por ejemplo en el caso de **Ortigosa, con quien fue sacado en el mismo vehículo con dirección al Regimiento**, pero en la tarde sólo volvió el, a los días después se sabía que a éste le habían dado muerte. Agregó con relación a las personas por las cuales eran interrogadas y/o torturadas en el Regimiento Tucapel, que rememora al entonces Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, el Suboficial **Leone Quilodrán Burgos**, un Suboficial **Orlando Moreno Vásquez** y un Oficial de nombre **Manuel Vásquez Chahuán**. Acotó que respecto a los funcionarios de la Fiscalía Militar que operaban los primeros días del mes de octubre de 1973, recuerda que el Fiscal era el Mayor **Luis Jofré Soto**, quien además era Segundo Comandante del Regimiento; el Asesor Jurídico **Alfonso Podlech Michaud**, quien en su exclusiva condición de abogado asumió el puesto, pero debido a la personalidad que tenía **Jofré, un poco tímido, éste era quien "hacía y deshacía" en la Fiscalía**.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre del 2003, rolante a fs. 581 a 582 (Tomo II), indicó que con **Dixon Retamal, Jaime Eltit y José Ortigosa** estuvo en el Regimiento y a quienes vio con evidentes signos de haber sido torturados, debido a su estado físico muy deplorable, además que ellos mismos le comentaban que estaban siendo torturados, por los mismos Militares de la unidad. Mayoritariamente hablaban y era muy conocido el método de la aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo por parte de los torturadores hacia los detenidos. Hizo presente que mientras permaneció detenido hasta el mes de enero de 1976, pudo percatarse que la constante de la muerte o desapariciones de los detenidos políticos de Temuco, fue mediante el mecanismo de sacarlos desde el lugar donde se encontraban y nunca más regresaban, justificándose a través de la "Ley de Fuga" algunas de las muertes.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero del 2009, rolante a fs. 620 a 621 (Tomo II), barbulló que cuando se presentó voluntariamente ante la Fiscalía del Regimiento Tucapel el día 13 de septiembre de ese año, al ingresar a esta Fiscalía fue el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, quién vistiendo de Militar con el grado de Mayor, **ordenó sin consulta alguna al personal de esa Fiscalía, proceder a su detención, incomunicación y**

reclusión en la cárcel pública de esta ciudad, sin argumento alguno, lo que demuestra que este abogado era quién tomaba las determinaciones al interior de esa Fiscalía, sin tomar parecer si quiera a las autoridades Militares que se encontraban.

En declaración judicial de fecha 19 de julio del 2013, rolante a fs. 1.117 a 1.118 de autos (Tomo IV), ratifica sus declaraciones extrajudiciales prestadas ante la Policía de Investigaciones de Chile, que rolan de fs. 100 a 102, de fs. 163 a 164 y de fs. 257 a 258 (otorgadas en causa diversa). Basa a la pregunta que **Alfonso Podlech Michaud fue la persona que ordenó su detención e incomunicación el 13 de septiembre de 1973, además de disponer su traslado a la cárcel.** Esta persona vestía de uniforme en aquella oportunidad. Adosó que este abogado lo interrogó a lo menos en cinco oportunidades en la Fiscalía Militar mientras estuvo privado de libertad. **Él dirigía el interrogatorio** mientras que un actuario tomaba nota a máquina de lo que el declaraba. **Constantemente Podlech le decía que si no entregaba toda la información que se le estaba pidiendo en el interrogatorio, iba a ser devuelto a otro equipo para que ellos le sacaran las respuestas que él requería.** Este otro equipo era el grupo de torturadores que operaba en otra dependencia del Regimiento y al que tuvo que enfrentar en varias oportunidades durante su cautiverio. **A veces pasaba primero a la sala de torturas y luego a la Fiscalía o lo hacía a la inversa, es decir, se cumplían las amenazas de Podlech.** Anexó que en una ocasión se le hizo firmar en la Fiscalía una declaración tomada en la sala de torturas. A la pregunta, si bien el Mayor **Jofré era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, puesto que tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que Jofré. Todo el mundo sabía esto.**

En declaración extrajudicial de fecha 16 de mayo del 2016, rolante a fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.488 a 1.490 (Tomo V), respecto a las víctimas de los hechos investigados, **Daniel Mateluna Gómez y José Ortigosa Ansoleaga**, señala que a ambos los conoció al interior de la Cárcel Pública de Temuco, principalmente a **José Ortigosa Ansoleaga**, ya que **en más de una oportunidad conversó con él e incluso fueron trasladados juntos hasta dependencias del Regimiento Tucapel, los primeros días de octubre del año 1973, siendo esa la última vez que lo vio con vida, ya que él nunca salió del Regimiento y por consiguiente no regresó a la Cárcel.** Conforme a su recuerdo, el día en que los fueron a retirar de la Cárcel, se presentó personal del Regimiento Tucapel a cargo del por entonces

Sargento **Orlando Moreno Vásquez**, quien junto a un grupo de Conscriptos procedió a trasladarlos hasta el Regimiento Tucapel. Esto fue a eso de las nueve de la mañana, donde al llegar al Regimiento los dejaron en el calabazo ubicado en la Guardia de ingreso del mismo Regimiento. Respecto a su consulta, comunica que el tiempo que estuvo junto a **Ortigosa** en el calabozo de la guardia, conversaron diversos temas entre los cuales el trabajo que iban a realizar en la Cárcel Pública, relacionado con los arreglos de algunas dependencias de éstas, dando a entender la claridad que tenía este señor, en que iba a permanecer mucho tiempo detenido, dentro de las cosas que se pudo dar cuenta que **Ortigosa** provenía de una familia de mucho dinero e incluso tenía propiedades en Villarrica, las cuales no supo si estaba vendiendo o trabajando en la agricultura. Esta sesión de torturas duro desde las 09:30 horas de la mañana hasta medio día, horario en que lo regresan a la sala de guardia **percatándose que al interior de esta ya no estaba José Ortigosa**, posteriormente a eso de las dos de la tarde lo sacan de la guardia y comienzan una nueva sesión de torturas, la que duró hasta como a las ocho de la noche, horario en que lo regresan a la Cárcel Publica, en calidad de incomunicado, condición que duró cerca de tres días. Después de su incomunicación vuelve a la libre plática junto a los otros detenidos, dándose cuenta que en base a sus comentarios que **Ortigosa**, no había regresado. No obstante, esta situación la presumía, ya que estando incomunicado al calabazo llegó un Gendarme de apellido **Silva**, apodado "**El Choro**" **quien omitiendo todo procedimiento interno de la Cárcel habló con él y le comunicó que el cuerpo sin vida de Ortigosa, había llegado baleado al Hospital Regional, señalándole que se enteró directamente de esta situación, ya que él estaba cumpliendo servicio en dicho Centro Asistencial ese día**. Hace presente que nunca supo el nombre completo del Sr. **Silva**, pero mediante averiguaciones que hizo con otro Gendarme, se le dio la información preliminar que hoy día estaría fallecido. Agrega a lo anterior, que nunca supo qué pasó con el Sr. **Ortigosa**, al interior del Regimiento, posteriormente se enteró por medio de un **Bando Militar**, que había sido ejecutado junto a **Daniel Mateluna**, al intentar huir del Regimiento.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto del 2016, rolante a fs. 1.509 a 1.510 (Tomo V), ratifica sus declaraciones extrajudiciales y judiciales prestadas en autos y la de fs. 1.488 a 1.490. A su pregunta, conjetura que **Alfonso Podlech Michaud fue** la persona que ordenó su detención e incomunicación el 13 de septiembre de 1973, además de disponer su traslado a la cárcel. Esta persona vestía de uniforme en aquella oportunidad. Agrega que este abogado **lo interrogó a lo menos en cinco oportunidades en la Fiscalía Militar** mientras estuvo privado de libertad. Él dirigía el interrogatorio mientras que un

actuário tomaba nota a máquina de lo que declaraba. Constantemente **Podlech** le decía que si no entregaba toda la información que se le estaba pidiendo en el interrogatorio, iba a ser devuelto a otro equipo para que ellos le sacaran la respuesta que él requería. Este otro equipo era el grupo de torturadores que operaba en otra dependencia del Regimiento y al que tuvo que enfrentar en varias oportunidades durante su cautiverio. **A veces pasaba primero a la sala de torturas y luego a la Fiscalía o lo hacía a la inversa, es decir, se cumplían las amenazas de Podlech.** Incluso recuerda que en una ocasión se le hizo firmar en la Fiscalía una declaración tomada en la sala de torturas. Cimiento que si bien el Mayor **Jofré** era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado **Alfonso Podlech**, puesto que tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que **Jofré**. Todo el mundo sabía esto. Respecto de la oportunidad en que fue trasladado con **José Ortigosa Ansoleaga** desde la cárcel al Regimiento, recuerda que fue el Sargento **Moreno** junto a otros Conscriptos quien los sacó de ese recinto penitenciario y los llevó a la Unidad Militar antes indicada. Ese día, primero pasó a la sala de torturas y después se lo llevaron a la Fiscalía Militar. Después volvió a pasar a la sala de torturas. Finalmente regresó a la cárcel en calidad de incomunicado, no recordando si fue el propio **Moreno** quien lo llevó a la cárcel o no. Lo cierto es que **José Ortigosa** no iba con el declarante. A su pregunta cuenta que el "**Choro**" **Silva** dijo que había visto el cadáver de **Ortigosa** en la morgue, que estaba baleado.

A.19 NELSON RODOLFO THIELEMANN RODRIGUEZ.

En declaración judicial de 19 de abril de 1991, rolante de fs. 352 a 354 (Tomo II), detalla que el Fiscal Militar de ese entonces era el Mayor **Luis Jofré** y el abogado **Alfonso Podlech** solo era un Asesor Jurídico de la Fiscalía. Respecto de **José Ortigosa** recordó haberlo visto en los pasillos de la Fiscalía.

En declaración extrajudicial de 03 de julio de 2003, rolante de fs. 567 a 568 (Tomo II), distingue que después del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, en su calidad de Oficial de Reserva del Ejército, fue llamado por el Fiscal de apellido **Jofré**, para que cumpliera funciones administrativas en la Fiscalía Militar de Temuco. Respecto al Fiscal **Jofré**, recuerda que ostentaba el grado de Mayor. Rememoró un proceso sustanciado por la Fiscalía Militar contra un sujeto de apellido **Ortigosa** y que se rumoreaba entre pasillos que esta persona estaba asociada al robo de un maletín con dólares.

A.20 VÍCTOR EFREN SILVA FIGUEROA.

En declaración judicial de 03 de junio de 1991, rolante de fs. 366 a fs. 367 (Tomo II), confirma que lo apodaban en el servicio “El Choro” Silva por su carácter y proceder cuando era funcionario. Detalló que es efectivo que vio en la morgue del hospital el cadáver de **José Ortigosa**, quien estaba detenido en la Cárcel y lo vio baleado, situación que impuso al preso político el señor **Maturana**.

A.21 ALFREDO GARCÍA DIAZ.

En declaración judicial de 03 de marzo de 1992, rolante de fs. 377 a 379 (Tomo II), esgrime que fue Teniente dentro de Gendarmería de Temuco en 1973. Invocó como nombres de detenidos políticos, entre ellos a **José Ortigosa**, **Gastón Lobos**, quien estuvo incomunicado, el señor **Omar Venturelli**, un funcionario del Ejército de apellido **Morales**, un señor **Mateluna**, este caso lo recuerda porque le **correspondió entregar la ropa a la señora de él** y otros. Proclamó que el señor **Ortigosa fue retirado por personal del Ejército o la FACH**, pero no Carabineros; y a los demás, **venían un Suboficial del Ejército de apellido Moreno**.

A.22 MANUEL JESÚS CONTRERAS SALAZAR.

En declaración extrajudicial de fecha 07 de noviembre de 2012, rolante de fs. 430 a 431 (Tomo II), respecto a las víctimas de los hechos investigados, sustenta que solamente recuerda el apellido **Mateluna**, como uno de los detenidos del Regimiento.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante a fs. 518 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 430 a 431.

A.23 DOMINGO ESTEBAN QUINTANA BUSTOS.

En declaración judicial de fecha 22 de enero de 2013, rolante a fojas 1.057 a 1.058 (Tomo IV), señala que sí recuerda el nombre de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, porque escuchó en alguna oportunidad que estaba detenido en el Regimiento.

A.24 LUIS RAIMUNDO QUEZADA CHANDIA.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2014, rolante a fojas 1.317 a 1.320 (Tomo IV), recuerda el apellido **Mateluna**, identificándolo como uno de los detenidos del Regimiento Tucapel, lo que supo por boca del mismo Teniente **Espinoza**, quien en dos oportunidades le

conversó sobre **esta persona, comentando que estuvo en los momentos en que el detenido fue asesinado, probablemente al interior de la sala de torturas de la Compañía de la Plana Mayor y Servicios**, haciendo referencia que dentro de esa misma sala lo estaban interrogando y en medio del interrogatorio el Teniente **Vásquez Chahuán**, a quien apodaban el “cara de muerto”, le dio un disparo en su frente con su arma de 9 milímetros. Según lo comentado por **Espinoza**, la víctima después del disparo se habría intentado levantar, gritándoles “Milicos hijos de puta”, cayendo en una mesa donde lo tenían. También **Espinoza** le dijo que **Mateluna no murió inmediatamente y que tuvo que darle el tiro de gracia para que muriera**, señalándole además que en el lugar de los hechos también estaban los Detectives y **Moreno**. Propone que el apellido del fallecido se lo dijo **Espinoza** de forma accidental, al relatarle los fantasmas que lo atormentaban. Posteriormente este hecho fue comentado por todos los Militares, incluso estos hacían alusión al apellido de la víctima.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2016, rolante a fojas 1.504 a 1.507 (Tomo V), en lo pertinente y sobre la conversación que sostuvo con el Teniente **Espinoza**, sugiere que ésta ocurrió durante la Campaña que realizó en Curarrehue en 1974. En dicha conversación el declarante le dio su visión de la vida y entonces él se abrió a hablar sobre sí mismo y agregó que estaba marcado dentro del Ejército como el “perro malo”, por lo que su carrera estaba manchada y que estaba arrepentido de haber hecho todo lo que había hecho. En algún momento comenzó a desahogarse y le habló sobre los fantasmas que lo perseguían y por el caso de un señor de apellido **Mateluna**. **Le dijo algo así como “no sé por qué acabé matándolo”, agregó que no había razones para hacerlo, pero que le había dado rabia, que estaba como poseído y que por esto le habría disparado**. Agregó que el Subteniente **Lavín**, presente en el interrogatorio, se habría “**cagado entero**” ante la situación y que alguien habría **tenido que rematarlo porque quedó vivo después del disparo que él hizo**. Suma que dicho interrogatorio al parecer ocurrió en el gimnasio chico del Regimiento, ubicado a un costado del rancho de los Conscriptos.

A.25 NELSON LUIS AGUSTÍN SECKEL CATALÁN.

En declaración judicial de fecha 07 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1.649 a 1.652 (Tomo V), menciona que en una oportunidad, en su calidad de Subrogante del ayudante titular del Director del Personal, recibió la correspondencia, tomando conocimiento de un sumario que posteriormente le tocó ratificar. La situación era que enviaron a un Suboficial de Reserva de nombre **Carlos Cardoen con un detenido de nombre José Ortigosa hacia el**

Regimiento Tucapel, detenido después de que el Consejo de Guerra en el Regimiento lo dejara libre. Lo anterior lo sabe, pues el propio **Carlos Cardoen** se lo dijo, éste último era muy amigo de **Ortigosa**, el cual era intensamente buscado. Asevera que **Ortigosa** era fuertemente buscado en la región, porque era señalado de ser dueño de un campo de Guerrilla. Además de ser intensamente buscado por que era fundador financista del GAP (grupo de amigos personal de Allende). **Ortigosa** vivía en Rancagua, fue corredor de autos y tenía un garaje grande en Diez de Julio. **Carlos Cardoen** era amigo de **Ortigosa** y al enterarse que era buscado éste le habría aconsejado a **Ortigosa** presentarse en la Fuerza Aérea de Santiago en donde la persona con la cual se presentó, según le dijeron era un General, le señaló que en Santiago no lo buscaban pero que le aconsejaban ir a Temuco a fin de aclarar su situación. **Carlos Cardoen** en su propio avión lo trasladó a Temuco. Una vez llegado a Temuco a la base Aérea se inicia el operativo en que se señala que fue detenido **Ortigosa**, el cual fue trasladado hasta el Regimiento Tucapel de Temuco junto a **Cardoen**. Éste último le contó al deponente que lo dejaron libre y a **Ortigosa** lo sometieron a Consejo de Guerra. El resultado del Consejo de Guerra fue que se decretó la libertad de **Ortigosa**. **Estando Carlos Cardoen y la señora de Ortigosa esperando que lo dejaran libre, sintieron los disparos y luego alguien del Regimiento les informó que el detenido había intentado escapar y por eso le habían disparado.**

En declaración judicial de fecha 11 de julio de 2018, rolante de fs. 1.663 a 1.665 (Tomo V), ratifica la declaración judicial prestada en causa 114.033, agregada a esta causa de fojas 1.649 a 1.652. En lo pertinente, apunta que nunca vio detenidos desaparecidos, ni supo de la existencia específica de ellos, hasta que le contaron lo que había pasado (señor **Ortigosa y Cardoen**), después de los años, estando radicado en Santiago, gente que venía de Temuco le contaba rumores de lo sucedido. Apunta que en una conversación que tuvo con **Carlos Cardoen**, él se refirió a lo que le sucedió cuando trajo a Temuco a su amigo **José Ortigosa**, para que aclarara su situación, porque era buscado intensamente en la Zona Cautín. Apoya que conoció a **Carlos Cardoen**, pues era amigo de una amiga suya y de su suegro, por lo cual le comentó la situación, de la cual también el testigo había escuchado, pues fue un hecho público. Según se enteró, el señor **Ortigosa era buscado por tener en un campo cerca de Villarrica, una supuesta escuela de guerrillas.** Aproxima que **Cardoen** a la Base Aérea Maquehue, el señor **Cardoen** vestía de uniforme de la Fuerza Aérea por ser Oficial de Reserva, al presentarse en aquel lugar fueron detenidos ambos y trasladados al Regimiento de Temuco. Aquilata que esta situación debe haber ocurrido antes del mes de noviembre de 1973. Una vez trasladados el señor

Cardoen y **Ortigosa**, fueron interrogados, quedando en libertad **Cardoen** y el señor **Ortigosa** quedó a disposición de la Fiscalía Militar. El señor **Cardoen** le señaló que quien hizo de Juez Militar era el Segundo Comandante del Ejército. **Cardoen** le avisó a la esposa de **Ortigosa**, que vivía en Santiago o Rancagua, para que le trajera ropa a su marido y terminado el proceso dejaron en libertad al señor **Ortigosa** declarado sin cargos, de esta forma salió libre y conversó con su señora, informándole que había quedado libre y que iría a buscar sus cosas donde habían estado detenido. Concurrió acompañado de un Conscripto, cuando estaba en eso sintieron unos disparos y le informaron que por intento de fuga le habían disparado. Arguye que el señor **Cardoen** le comentó que suponía que el que ordenó dispararle fue el Comandante **Pacheco** de la Fuerza Aérea.

A.26 JUAN DE DIOS FRITZ VEGA.

En declaración judicial de fecha 11 de mayo de 2006, rolante de fs. 2.980 a 2.990 (Tomo VIII), glosa que a los hechos del 11 de septiembre de 1973, se encontraba a cargo de la Comisión Civil, a pesar que no tenía el grado y antigüedad, igualmente el Capitán **Bahamondes**, lo nombra a cargo de esta Comisión. Se dedicaban a Investigar delitos comunes como en toda Comisaría, donde existían las Comisiones de esta naturaleza, pero a partir de los hechos del 11 de septiembre de 1973, se les comienza a entregar Órdenes Judiciales en que se les ordena tomar detenidos de toda índole, incluyendo prisioneros políticos. Esas órdenes venían de la Fiscalía Militar...el Teniente **Riquelme** era quien ordenaba las detenciones, para lo cual se movilizaban en una camioneta marca Chevrolet, modelo C-10 con toldo color rojo, vistiendo de civil. Lo anterior en cumplimiento de Órdenes emanadas de las Fiscalías Militares del Ejército y de Carabineros. El declarante por su parte recibió en algunas oportunidades estas Órdenes, que consistían en papeles de roneo tipo oficio, con la instrucción "Deténgase a"...Estimula que es efectivo que **Ornar Burgos Dejean** fue agregado al SIR "Servicio de Inteligencia Regional" a petición del Comandante del Regimiento Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, debiendo efectuar ciertos servicios nocturnos junto a éste grupo cuya finalidad ignora. Evidencia que todos los detenidos que pasaban por su grupo eran pasados a la Fiscalía Militar del Ejército. ... En referencia al Capitán de Ejército **Nelson Ubilla**, funda que era parte de la Dotación del Regimiento Tucapel, y es quien estuvo a cargo de la Inteligencia en el Ejército... A lo que se le pregunta debo decir que, en cuanto a que efectivamente el procedimiento consistía en que primero les llegaba la orden, posteriormente detenían a la persona, lo entregaban al Regimiento Tucapel y estos posteriormente los enviaban a la Cárcel de Temuco...Por lo que se enteró

en la época, pero que nunca presencié, fue que el destino de los fusilados en el caso del Regimiento Tucapel eran enterrados en la Isla Cautín, que en esa época pertenecía al Regimiento. En el caso de Maquehue, éste recinto tenía hacia el poniente un lugar que utilizaban para fusilar a los detenidos y los lanzaban al Río Cautín. Habla que nunca trabajó de noche, y que siempre al día siguiente de haber detenido personas, ya no estaban en la Comisaría, se decían que los habían entregado al Regimiento Tucapel.

II. Testigos que se refieren al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud:

A.27 SIGIFREDO JARA CONTRERAS.

En declaración judicial de 04 de marzo de 1991, rolante de fs. 328 a 329 (Tomo I), no las recuerda ni conoce las víctimas de autos, debido a la gran cantidad de población de presos políticos. ...moreno y siempre andaba de civil Proclamó que los presos políticos eran sacados de la cárcel por personal del Ejército y de la FACH, quienes los sacaban con unas ordenes que estos dejaban en la guardia y estas ordenes llevaban una firma ilegible y un timbre, pero **para poder regularizar estas situaciones hubo que conversar con el Fiscal don Alfonso Podlech** y el Secretario, para poder normalizar el ingreso y egreso de los detenidos. Por último señaló conocer a **Víctor Maturana Burgos**, quien estuvo preso en la penitenciaría local.

En declaración extrajudicial de 03 de julio de 2003, rolante de fs. 565 a 566 (Tomo II), precisó que la población penal cuando llegó a Temuco en 1973 era de aproximadamente unas ochocientas personas, haciendo una división entre cuatrocientos reos por delitos comunes y cuatrocientos como prisioneros políticos. Acerca de estos últimos, no recordó cual era el sistema para ingresarlos, debido a que este tema era totalmente autoritario por parte de los Militares, ya que cuando llegaban en la noche con las patrullas, fuertemente armados y sus caras enmascaradas, se llevaban a un grupo de personas de las cuales **no habían registros, por cuanto estos no entregaban ninguna Orden Judicial o de la Fiscalía, por lo que era muy difícil para ellos poder controlarlos** y además, no estaban en condiciones de poner trabas a este procedimiento. Lo anterior lo supo a raíz de comentarios del personal que llevaba más tiempo en la unidad. Sustentó que en el mes de noviembre de ese mismo año y en circunstancias que había quedado como Jefe de penal, **fue a exponer la situación antes relatada ante el entonces Fiscal Alfonso Podlech Michaud, quien a partir de ese momento cooperó en solucionar el procedimiento y de esta forma, en corto plazo el sistema volvió a ser como correspondía, pudiendo llevar control de los**

detenidos. Con relación al traslado de los internos a las diferentes Fiscalías o Tribunales de la jurisdicción, estos eran realizados por los funcionarios de Gendarmería, sin perjuicio de las veces que los mismos Militares lo hacían, sin recordar nombres de estos, debido a que eran diferentes en cada oportunidad y con los cuales no se hablaba mucho. Todo esto antes de la conversación que tuvo con el Fiscal **Alfonso Podlech**.

A.28 LUIS ARMANDO JOFRÉ SOTO.

En declaración judicial de 23 de julio de 1991, rolante de fs. 368 a 370 (Tomo II), copia de la cual se encuentra de fs. 569 a 570 (Tomo II), ensaya que después del 11 de septiembre de 1973, cimiento que después de ese día, no recuerda cuanto tiempo después, fue nombrado Fiscal Militar, lo que significó que quedó fuera de la línea operacional propia del Ejército dedicándose solo al aspecto administrativo de la Fiscalía. Anexó que como Asesor Jurídico de la Fiscalía se desempeñó el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, en todo caso no desde los primeros días, y meses después, fue el Fiscal Militar en propiedad. Cuando había detenidos en la cárcel y se necesitaban en la Fiscalía, normalmente los trasladaba de un lugar a otro un Sargento de apellido **Moreno**, y como se hizo conocido no había problemas en que en la cárcel le entregaran los detenidos para ser interrogados en la Fiscalía, previa presentación de los documentos respectivos y oficiales. A la pregunta sobre la situación de **José Ortigosa Ansoleaga**, aseveró no recordar haberlo interrogado en la Fiscalía, pero conjeturó que esta persona se encontraba en Temuco a cargo de la construcción de un edificio y en cuanto al documento que rola a fs. 92 reconoció como suya la firma, y se debió seguramente, a que se le dio cuenta de este hecho y el como Fiscal Militar era su obligación dar crédito a la información que se le enviaba a través del Comandante del Regimiento y **otorgar los documentos necesarios para la sepultación, autopsia y entrega de cadáveres a los familiares de estos.** En todo caso en el Regimiento debe haber constancia del hecho que significó la muerte del señor **Ortigosa**, que reitera **no fue interrogado por él.** En cuanto al altercado que pudo haber tenido con la **señora de Ortigosa**, sustentó que es un hecho que no niega ni afirma categóricamente, pues con todo lo que pasaba esos días y la tensión a la que estaban sometidos, puede ser que se haya expresado en esos términos y **en todo caso trató de ayudar en lo posible para la entrega del cadáver a la señora y efectivamente entregó el salvoconducto que se le exhibió.**

A.29 AQUILES ALFONSO POBLETE MÜLLER.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre de 2012, rolante de fs. 424 a 425 (Tomo II), inquiriere que respecto a las víctimas señaladas en el decreto que se le exhibe, **recuerda a José María Ortigosa Ansoleaga, a quien interrogó al interior del Regimiento de Infantería N°08 "Tucapel de Temuco" en una fecha posterior al 11 de septiembre del año 1973.** Según su recuerdo, este hombre se encontraba detenido al interior del Regimiento y le fue entregado por el Capitán de Ejército de apellido **Ubilla**, cerca de las 16:00 horas de una tarde, quien le hizo presente que lo interrogara respecto a un dinero y documentación que portaba. **Una vez finalizado el interrogatorio, entregó a Ortigosa al Capitán Ubilla** y desde ese momento se desentendió de él, enterándose al día siguiente que **Ortigosa** había fallecido, ya que **algunos soldados mencionaban que "se lo había llevado el señor"**.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs. 615 a 617 (Tomo II), narra que fue destinado al Regimiento Tucapel de Temuco desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. Junto con él fueron asignados **Rigoberto Ortiz, Luis Morales y Hernán Quiroz**. Respecto del chofer **Carlos Luco**, parece que estuvo en el Regimiento, pero no estaba a su cargo. Nadie más fue asignado al Regimiento, al menos que el recuerde. En el Regimiento fueron recibidos por el Comandante de la Unidad, quien los presentó al Capitán **Ubilla**, informándoles que a partir de ese momento trabajarían bajo sus órdenes. **Sí interrogaron detenidos políticos.** Los interrogatorios los efectuaban en una oficina grande, que era como una cuadra, y posteriormente en un gimnasio. El declarante practicaba los interrogatorios en presencia de **Quiroz, Ortiz y Morales**. Los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que obtenían la información y le informaban de los avances de los interrogatorios al Capitán **Ubilla**, quien muchas veces presenciaba estas entrevistas. Hace presente que **el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar.** Toda la información se la entregaban a **Ubilla** y éste, a su vez, le entregaba los antecedentes a la **Fiscalía Militar**. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era **Alfonso Podlech**, que, según supo, era el **Fiscal**.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2012, rolante de fs. 991 a 992 (Tomo III), propone que en relación a su estadía en el Regimiento de Infantería N°8 "Tucapel" de Temuco, es efectivo que estaba a cargo del grupo de detectives agregados a dicho recinto Militar, haciendo

referencia a que cumplió funciones ordenadas por un Capitán de Ejército de apellido **Ubilla**, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas a dicho Regimiento. Es así que para efectuar dichas labores **se situaron en el gimnasio del Regimiento, donde personal de Ejército les entregaba los detenidos, quienes ya venían en malas condiciones físicas y procedían a interrogarlos bajo la aplicación de corriente eléctrica producida por un dinamo, recordando que con un cochayuyo mojado pasaban por el cuerpo de los detenidos simulando que se trataba de una culebra**. Hace presente que **todos los detenidos ingresaban vendados** y procuraban no sobrepasarse con ellos. Una vez terminada la sesión de interrogatorios entregaban los detenidos al Capitán **Ubilla**, quien hacía entrega de estos a otro grupo de interrogadores, pero que pertenecían al Regimiento.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de fs. 997 a 998 (Tomo III), ratifica su declaración judicial rolante de fs. 224 a 226; y la de fs. 1.990 a 1.992, así como su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile rolante de fs. 3.206 a 3.207 (respecto de otra causa). Sustenta que sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Respecto de José Ortigosa Ansoleaga recuerda que se los entregaron los Militares completamente "frisqueado", rememorando que estaba botado en el piso y el declarante le puso el pie sobre el pecho. Él le dijo que estaba comprando un campo en la zona de Pucón y Villarrica y que por ese motivo lo habían detenido. A él también lo mataron los Militares, según supo. Desconoce el nombre de los Militares que trabajaban con ellos, pero siempre fue el mismo grupo entre los Conscriptos y Clases. A su pregunta, aduce que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del Regimiento, en donde le aplicaron electricidad a estas personas. Recuerda tanto a **Quiroz** como **Ortiz**, quienes participaban dándole vuelta al dinamo, pero al que más utilizó fue a Quiroz, puesto que **Ortiz** participaba más en los interrogatorios; en tanto que **Morales** era torpe y solo servía para trasladar a los detenidos y darle algunos golpes. Las terminales eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo. Finalmente el Detective **Quiroz** no quiso regresar a Investigaciones junto con ellos y prefirió quedarse trabajando con el grupo de Inteligencia de los Militares. Este hombre se transformó en una persona cruel en el trato con los detenidos.

En declaración judicial de fecha 03 de julio de 2013, rolante a fs. 1.098 (Tomo IV), utiliza que el abogado Alfonso Podlech era quien

determinaba el destino de los detenidos. Respecto de **José Ortigosa Ansoleaga**, efectivamente vio a esta persona al interior del Regimiento Tucapel. Esta persona estaba botada en el piso del gimnasio de la unidad. Recuerda que lo arrastró hacia una banca y posteriormente le dio cuenta de esta situación al **Capitán Ubilla**, quien al parecer le dio a conocer el caso al Coronel **Iturriaga**. No supo qué Militares intervinieron en su muerte. Respecto del Detective **Quiroz** ratifica todos sus dichos anteriores, agregando que el Capitán **Ubilla** le pidió que dejara a **Quiroz** trabajando con él.

A.30 HERNÁN RAÚL QUIROZ BARRA.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 986 a 988 (Tomo III), hace presente que una vez que llegaron al Regimiento "Tucapel", se les puso bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, la cual estaba a cargo del Mayor **Luis Jofré Soto**, siendo su ayudante el Capitán **Nelson Ubilla Toledo**. Alega que se les asignaron labores de toma de declaraciones a detenidos, efectuar citaciones, detenciones y allanamientos ordenados por la Fiscalía Militar. Aquilata que mientras estuvieron agregados al Regimiento, siempre estuvieron bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, recordando que esta era asesorada por el abogado **Alfonso Podlech Michaud** y los actuarios **Quilodran** y **Tolozá**.

En declaración judicial de fecha 04 de junio de 2003, rolante de fs. 1.064 a 1.065 (Tomo IV), al presentarse a la ayudantía del Regimiento "Tucapel" fueron derivados al señor Fiscal Militar de ese entonces don **Luis Jofré Soto**, quien les indicó que debían cumplir las mismas funciones que cumplían en Investigaciones pero al mando de él. Estas consistían en detenciones, citaciones, allanamientos, búsqueda de armas, bombas. Respecto a don **Alfonso Podlech Michaud**, sabe que él asesoraba al Fiscal Militar, don **Luis Jofré Soto**, en la parte legal. Él era abogado y concurría en esa época al Regimiento donde lo vio personalmente. Atina que a petición de **Podlech** se llevó a la Fiscalía gente profesional, esto es, funcionarios actuarios de los Tribunales de Justicia.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante de fs. 1.070 a 1.075 (Tomo IV), ratificó su declaración extrajudicial rolante de fs. 3.330 a 3.331 (prestada en causa diversa). Aduce que no es efectivo lo que el señor **Aguirre** señala en sus dichos, ya que nunca prestó colaboración con el señor **Podlech** antes del 11 de septiembre de 1973, ni menos le entregó información de Inteligencia. Si bien sabía que el señor **Podlech** era un abogado de Temuco, recién lo conoció personalmente cuando comenzó a trabajar para la Fiscalía Militar en 1973. Este abogado era el asesor de la Fiscalía y se presentaba

en ese lugar dos o tres veces a la semana. Se imagina que asesoraba al Fiscal **Jofré** en la tramitación de los procesos.

En diligencia de careo entre José Raúl Inzunza Reyes y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.102 a 1.103 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 3.436 a 3.441 (otorgada en causa diversa), agrega que todas las detenciones que efectuaron estaban respaldadas por un Decreto Judicial emanado de la Fiscalía Militar.

En diligencia de careo entre Daniel Amoldo Aguirre Mora y Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 3.436 a 3.441 (otorgada en causa diversa), solo atendió al señor Podlech en el Cuartel de Investigaciones en una oportunidad en que él se presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective Ortiz. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 29 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.334 a 1.337 (Tomo IV), basa que estuvo prestando funciones en el Regimiento Tucapel desde el 11 de septiembre de 1973 hasta diciembre 1974. El jefe de Inteligencia era el Capitán Nelson Ubilla Toledo. Cuando llegamos al Regimiento Tucapel había más de 800 detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos 5 días allí, ya que ellos debían tomarles declaraciones y anotar sus datos. Esta tarea la realizaron escribiendo a mano, puesto que no tenían otros medios. Le parece que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas. Sin embargo, siempre permanecieron tomando declaraciones en el patio. En esta tarea fueron ayudados por el Suboficial Schonherr de Ejército. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en interrogatorios de detenidos en el Regimiento Tucapel, respecto de lo cual el declarante responde que sí le correspondió hacerlo, pero siempre en la oficina que tenían asignada en el recinto de la Comandancia. A su pregunta, sobre los detenidos difíciles y que eran entregados al Teniente Espinoza, esto era una orden expresa que el Mayor Jofré le dio a su jefe el Comisario Poblete. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de Carabineros, Militares o de la FACH, que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaron en su oficina. Estas personas eran derivadas al Teniente **Espinoza** por orden del Mayor **Jofré**. Para esto, ellos llamaban a la guardia para que un Soldado viniera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún conscripto más tarde para ser llevado a la presencia del Tenientes **Espinoza**. Los nombres de **Daniel de Los Ángeles**

Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga no le resultan conocidos, ni los recuerda como detenidos en El Regimiento Tucapel de Temuco en 1973. Si recuerda haber tomado conocimiento de sus muertes a través de un **Bando Militar** que fue publicado en la prensa y que daba cuenta de este hecho.

A.31 ORLANDO MORENO VÁSQUEZ.

En declaración extrajudicial de fecha 06 de noviembre de 2012, rolante de fs. 428 a 429 (Tomo II), expresa que en reiteradas oportunidades supo de la muerte de detenidos por intento de fuga, los cuales se daban a conocer a través de **Bandos Militares**, en cuya confección el declarante niega haber participado. **Estos Bandos generalmente los confeccionaba el Fiscal Militar Podlech.**

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante a fs. 528 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 428 a 429.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003, rolante de fs. 571 a 573 (Tomo II), afirma que la Fiscalía Militar tenía para su funcionamiento dos personas que eran Militares con el grado de Suboficiales, recordando a **Santiago Villarroel y Leonel Quilodran Burgos**, además de otros civiles que se agregaron después del Pronunciamiento que pertenecían a un Juzgado del Crimen de Temuco de los que recuerda a **Adrián González Maldonado** y a **Héctor Toloza Fierro**. Cabe hacer presente que estas personas fueron llevadas por un señor abogado, quien fue el que se hizo cargo de la Fiscalía Militar de Temuco a los pocos días después del 11 de septiembre de 1973, de nombre **Alfonso Podlech Michaud, quien para todos los efectos era el Fiscal Militar Letrado. Alfonso Podlech Michaud cumplía sus funciones de Fiscal en el Regimiento "Tucapel", recordando que era cotidiano verlo en el interior de esta Unidad Militar.**

En declaración judicial de fecha 22 de diciembre de 2003, rolante de fs. 605 a 606 (Tomo II), en lo pertinente el Tribunal le pregunta si el Regimiento Tucapel **fue centro de detención, respondiendo el deponente que sí, dada la gran cantidad de detenidos que llegaron al Regimiento éstos fueron dejados en el gimnasio, donde algunos permanecieron por varios días, luego de lo cual eran dejados en libertad o trasladados a la cárcel pública por orden de la Fiscalía Militar.**

En declaración extrajudicial de fecha 11 de febrero de 2009, rolante de fs. 624 a 626 (Tomo II), habla que el Mayor **Luís Jofré** siguió

cumpliendo funciones de Fiscal Militar, pero era asistido por el Abogado **Alfonso Podlech Michaud**.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2016, rolante de fs. 1.445 a 1.446 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.491 a 1.492 (Tomo V), prefiere que para el año 1973 se desempeñaba en la 2° Comandancia del Regimiento N°8 Tucapel de Temuco, correspondiéndole para la época ser el Dactilógrafo de dicha Comandancia. Respecto a las víctimas **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** y **José María Ortigosa Ansoleaga**, sólo recuerda a la víctima de apellido **Ortigosa**, puesto que se comentó que el Capitán **Callis** de Carabineros de Pitrufquén y el Coronel **Pacheco** de la Base Aérea Maquehue, habrían extorsionado a esta persona, con un dinero que éste portaba a objeto de otorgarles su libertad. Enterándose también que una vez que se supo esta situación el Comandante del Regimiento, don **Pablo Iturriaga Marchesse**, informó a la superioridad sobre esta situación, por lo que los mencionados funcionarios fueron retirados de sus puestos. Por otra parte y refiriéndose a los traslados de detenidos, hace presente que siempre recibía un documento con el o los nombres de los detenidos a trasladar de la cárcel al Regimiento, el cual era firmado por el Fiscal Militar, siendo en un principio firmados por el Mayor **Jofré** y posteriormente por **Alfonso Podlech**, una vez este fue nombrado como Fiscal Militar. En lo personal, los traslados que efectuó siempre finalizaban en la Guardia del Regimiento, dejando a los detenidos bajo la custodia de los funcionarios que cumplían dicho servicio. No obstante, sabe que eran sacados de ese recinto por el mismo personal de guardia los cuales los trasladaban a la Oficina del Fiscal Militar, ignorando si **Alfonso Podlech** participaba en esos interrogatorios. Respecto a la aplicación de la Ley de Fuga que se les dio a estas personas, no maneja ningún tipo de antecedente al respecto y en relación al detenido de apellido **Mateluna**, fue encontrado fallecido en la vía pública, específicamente en la calle O'Higgins casi al llegar a Aldunate.

En declaración judicial de fecha 06 de junio de 2016, rolante a fs. 1.461 (Tomo V), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.445 a 1.446.

A.32 HERMÁN CARRASCO PAUL.

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre del 2003, rolante a fs. 593 a 597 de autos (Tomo II), En lo pertinente, comenta que el día 8 de noviembre, aún en el gimnasio, los sacan de a uno hacia la Fiscalía para firmar

su libertad. **Esto sucedió en presencia del Cabo Schonherr y de Alfonso Podlech Michaud.**

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre del 2008, rolante de fs. 609 a 612 (Tomo II), funda que dos días después de haber sido detenido fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la Fiscalía Militar ubicada al interior del Regimiento, donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez.

En declaración extrajudicial, de fecha 05 de enero del 2009, rolante de fs. 618 a 619 (Tomo II), En lo pertinente, consultado respecto de quienes él recuerda como sus interrogadores al interior del Regimiento Tucapel, precisa que sin lugar a dudas se encuentra Orlando Moreno Vásquez, que se desempeñaba en la Fiscalía del Regimiento, a quien conocía desde niño y porque eran vecinos, el fallecido Nelson Ubilla Toledo, el Teniente de Ejército Manuel Vásquez Chahuán, además de otro Teniente llamado "El Loco Espinoza", el Teniente Jaime García Covarrubias, quien los interrogó a rostro descubierto y el Conscripto Juan Carrillo. Finalmente, relata que respecto del abogado Alfonso Podlech Michaud, éste sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de Mayor, es más fue él quien les insistió en firmar un documento que por supuesto negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del Plan "Z".

En diligencia de careo entre Hernán Carrasco Paul y Óscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto del 2013, rolante de fs. 1.124 a 1.125 de autos (Tomo IV), ratifica en lo pertinente sus declaraciones judiciales prestadas en autos de fs. 175 (correspondiente a su declaración de fs. 593 a 597) 218 (correspondiente a su declaración de fs. 609 a 612) y 3.567. Anima que reconoce a la persona sentada a su lado con la cual se le carea como Alfonso Podlech Michaud de quien ha hecho referencia. Precisa que si conoce a Alfonso Podlech Michaud desde niño. Se mantiene en sus dichos.

A.33 CARLOS LUCO ASTROZA.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2006, rolante de fs. 881 a 882 (Tomo III), asevera que en más de una oportunidad pudo ver a Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar de Tucapel, sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme.

En declaración judicial de fecha 08 de abril de 2013, rolante de fs. 1.297 a 1.299 (Tomo IV), apunta que el Mayor **Jofré** “no se metía en nada”, por lo que a su parecer el abogado **Alfonso Podlech** estaba a cargo de ello en la **Fiscalía Militar**, adicionando que esta persona andaba de uniforme en el **Regimiento**.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV), señala que el Mayor **Jofré** no se metía en nada, por lo que le parece que el abogado **Alfonso Podlech** estaba a cargo de hecho en la **Fiscalía Militar**, quien andaba de uniforme en el **Regimiento** y se entendía con el **Capitán Ubilla**. Era evidente que existía un nexo entre la **Fiscalía Militar** y el trabajo de **Inteligencia** que ejercía **Ubilla**. Adicionando que tanto **Podlech** como **Ubilla** estaban constantemente en la **Fiscalía Militar**.

A.34 EDISÓN CHIHUAILAF ARRIAGADA.

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2012, rolante de fs. 950 a 953 (Tomo III), afirma que durante ese mismo día que estuvo detenido en la guardia del **Regimiento Tucapel** pudo ver al abogado **Alfonso Podlech**, vestido de traje campaña, calzando botas y dos pistolas al cinto. Este hombre entró a la guardia visiblemente alterado, y comenzó a increpar a los **Soldados** a quienes les habría dicho “**Oye po esta es la última vez que les digo, no me dejen entrar más mujeres y viejas de mierda, que me tienen loco con sus reclamos. Yo ya se los dije y si no me hacen caso los hago fusilar a ustedes también**”. Precisa que esto lo escucho, así como también pudo ver a **Podlech** porque la puerta de la celda donde estaban los detenidos se les quedó abierta a un **Soldado**. Comenta que poco rato después entró un **Soldado** muy apesadumbrado, por lo sucedido con el abogado **Podlech**, al punto que se quejó diciéndole que estaba harto de lo que estaba sucediendo y que no hallaba la hora de que todo esto terminara. Además indicó hacia el lugar donde **Podlech** había estado y señaló que “**ahora mandaban ellos**”, como dejando entrever que había personas ajenas al **Regimiento** con mando.

A.35 ERASMO RICARDO VILLANUEVA SIMÓN.

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2012, rolante de fs. 968 a 971 (Tomo III), colige que en esa sala pudo ver una mesa larga donde estaban sentadas cinco personas entre las que recuerda un **Oficial** vestido de uniforme de la **Fuerza Aérea de Chile** y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, persona que ubicaba de vista con anterioridad. Luego de que el deponente revelara su identidad, el abogado

Alfonso Podlech buscó un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel. Luego de mirarlo **dio una orden señalando que quedaba detenido y que al día siguiente pasaba al interrogatorio**, siendo regresado a la sala de la guardia. Al día siguiente **Oscar Inostroza Segura** junto a dos Conscriptos, le dijo que por órdenes superiores debía llevarlo a interrogatorios, lo sacó de la guardia y tras caminar unos pasos le venda la vista. Sin embargo por la orientación en que quedó antes de ser vendada su vista y la dirección que siguieron **al caminar se percató que se dirigían hacia la misma sala donde había estado el día anterior donde estaba Podlech**. Rememora que una semana antes fue llevado al Regimiento Tucapel donde lo ingresaron a una dependencia donde se entrevistó con el abogado **Alfonso Podlech**, quien le dijo que por decisión del Tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara.

A.36 FRANCISCO JERÓNIMO MATTA ITURRA.

En Declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante a fojas 1.000 a 1.001 (Tomo III), dice estar seguro que fue el abogado **Alfonso Podlech Michaud** quien interrogó a su padre y a **Héctor Aguayo Olavarría**, porque su padre se lo dijo. Además, indica que a mediados de octubre de 1973 concurrió a conversar con **Alfonso Podlech Michaud** en compañía del ex diputado **Hardy Momberg**, quien en aquel tiempo era miembro del Partido Nacional. Se entrevistaron con él en una oficina ubicada al interior del Regimiento. En esa reunión **Podlech** se hizo acompañar de los Capitanes **Nelson Ubilla** y **Mario Alvarado**. Cuenta que **Hardy Momberg** le dijo a **Podlech** que si expulsaba del país al padre del declarante, él (Momberg) también se iría. Entonces **Podlech** le contestó que lo iba a echar del país de todas formas porque su padre era financista de la guerrilla del MIR y del Partido Socialista. Recuerda que en una fecha posterior, el abogado **Sergio Zapata Camus** fue a conversar con **Podlech**, en representación del padre del declarante. **Dice estar seguro que Podlech era el verdadero Fiscal Militar en Temuco y utilizaba al Mayor Jofré como “pantalla”, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y afirma que pudo comprobar su autoridad cuando conversó con él.** En lo pertinente, comenta que su padre le dijo que **Podlech** junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a **Aguayo** y a otra persona quedarse en la Fiscalía para ser interrogados. Acota que **Podlech** ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros, refiriéndose a éstos en detalle.

A.37 DANIEL ARNOLDO AGUIRRE MORA.

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.005 a 1.008 (Tomo III), respecto de **Alfonso Podlech Michaud**, puede señalar que un año antes que ocurriera el Golpe Militar, **éste abogado iba al Cuartel de Investigaciones a requerir información de tipo político**. Recuerda que se entrevistaba con el **Prefecto Leonel Hormazábal** y con el detective **Quiroz**. **Sabe que le entregaba esta información a alguien en el Regimiento Tucapel**, pero desconoce a quién. Esta información la obtenía desde los archivos que la Inteligencia de Investigaciones tenía y la usaba con el grupo de Patria y Libertad de Temuco, según comentaban los mismos funcionarios. Después del 11 de septiembre de 1973 **Podlech** siempre se mantuvo muy cercano y activo adentro del Regimiento Tucapel. Dice que incluso en una oportunidad en que el Prefecto lo presentó ante la "Junta Chica" de Temuco, **Podlech** estaba con ellos. Anexa que en una oportunidad en el mes de noviembre de 1973, con ocasión de haber quedado como Prefecto Subrogante, se produjo una fuga de personas que estaban detenidas en el Regimiento Tucapel, los que fueron dados de baja. Entonces concurrió al Regimiento para pedir antecedentes sobre este hecho y tenérselos al Prefecto cuando regresara. Cuenta que al llegar a ese lugar se entrevistó con el Comandante **Iturriaga Marchesse** y con **Alfonso Podlech**. Entonces el Comandante le dijo que sólo le comunicara al Prefecto que los detenidos habían intentado fugarse y que eso era todo. Finalmente, dice recordar el nombre de una persona de apellido **Ortigosa** que fue ejecutada por órdenes del Comandante **Iturriaga** confabulado con el Comandante **Pacheco** de la FACH. Todo esto fue hecho para quitarle una maleta con dólares que esta persona portaba. Indica que esto lo supo la familia de **Ortigosa**.

En diligencia de careo entre **Daniel Arnoldo Aguirre Mora** y **Hernán Raúl Quiroz Barra**, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.231 a 3.234 (correspondiente a la declaración precedente). Añade que poco después del 11 de septiembre aparecieron tres Oficiales de Ejército, Carabineros y Fuerza Aérea y le entregaron al Prefecto una nómina con los nombres de los Detectives que querían que fueran a trabajar al Tucapel. En cuanto a **Alfonso Podlech**, indica que antes del 11 de septiembre de 1973 iba siempre al Cuartel de Investigaciones a buscar información de inteligencia. Para esto pasaba al segundo piso de la unidad y en alguna oportunidad lo vio junto al señor **Quiroz**. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre **Daniel Arnoldo Aguirre Mora** y **Alfonso Podlech Michaud**, de fecha 13 de agosto de 2013, rolante a fs. 1.129 (Tomo IV), ratifica en lo pertinente su declaración judicial de fs. 3.231 a 3.234

(correspondiente a la declaración precedente). Reconoce a la persona con la cual se le carea como **Alfonso Podlech Michaud**.

A.38 JOSÉ HERIBERTO MANSILLA GATICA.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.011 a 1.013 (Tomo III), ratifica su declaración que rola de fs. 2.007 a 2.009 (otorgada en causa diversa). Delibera para septiembre de 1973 el Segundo Comandante del Regimiento de apellido **Jofré**. El trabajo cotidiano de la Fiscalía, como interrogar y tomar decisiones con respecto de los detenidos era de **Alfonso Podlech**, se intercedía ante éste, porque él decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. Cuenta que el Comandante **Jofré** le dijo personalmente (cuando el declarante estaba de guardia) que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que habían dos mujeres, debía tomarla **Alfonso Podlech**. Fue por esa razón que intercedió ante **Podlech** por las mujeres que conocía. Anexa que la oficina de Plana Mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el Comandante **Jofré** era el **Fiscal Militar**, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba **Podlech**. Éste tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos. El declarante agrega que fue futbolista, seleccionado de Temuco, integró el primer Deportes Temuco y a don **Alfonso Podlech** le gustaba el fútbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante él por **Rolando Núñez**, quien vivió en el mismo sector que el declarante y que en una oportunidad se tomó junto a otras personas uno de los Fondos de don **Alfonso Podlech**. Cuando esta persona se presentó en la Fiscalía, don **Alfonso** le dijo que le agradeciera por haber intercedido por él, porque sí no lo hubiese hecho, hace rato lo hubiera tenido "apuntado". Lo dejó irse y lo citó posteriormente a la Fiscalía. Gracias a que intercedió por él, **Rolando** se salvó. Nunca supo más de él. Atestigua que había una sala de torturas en la Primera Compañía de Cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su jefe **Tichahuer** y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos, mientras le decían "perrita, tu sabes eso". Afirma que **Tichahuer** y los Oficiales **García Covarrubias** tenían que ver con las torturas y los detenidos y que había personal de Inteligencia, que incluso los vigilaba a ellos. Continúa declarando que había un Cabo de apellido **Labraña** y otro grupo de Conscriptos que integraban la **Patrulla Chacal**, y que ellos le llamaban los "chalados".

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante a fs. 1.137 (Tomo IV), copia de la cual se encuentra a fs. 1.572 (Tomo V), ratifica su declaración prestada en causa diversa y aduce que efectivamente

estuvo trabajando por una tarde con don **Alfonso Podlech Michaud**, quien **tomaba declaraciones** y el deponente era el dactilógrafo. Esta situación sólo fue por una tarde y fue por orden del Mayor **Jofré**. Posteriormente se refiere a las personas por las cuales intercedió, difundiendo en lo pertinente que una ocasión fue a conversar con el Mayor **Jofré**, quien lo mandó a hablar con **Alfonso Podlech**. La decisión tomada por éste fue dejar en libertad a estas mujeres y citarlas para el día siguiente. Cuenta que **el Mayor Jofré lo mandó a hablar con don Alfonso Podlech porque él estaba a cargo de los detenidos**.

En declaración judicial de 12 de septiembre de 2013, rolante a fs. 1.138 (Tomo IV), copia de la cual se encuentra a fs. **1.573 (Tomo IV)**, amplía su declaración anterior, indicando que la persona que era deportista y por la cual intercedió ante don **Alfonso Podlech** es de apellido **Núñez**. **Alfonso Podlech** lo conocía y cuando lo vio en el Regimiento, ordenó dejarlo con arresto domiciliario y además, como era vecino del declarante, este quedó a cargo de su custodia, es decir, cuidar que no se arrancara de la ciudad.

En diligencia de careo entre José Heriberto Mansilla Gatica y Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.139 a 1.140 (Tomo IV), ratifica su declaración judicial prestada en causa diversa y la de fs. 3.605 (correspondiente a la declaración de fs. 1.138) en lo pertinente. En la guardia de la unidad se encontró con la señora **Meza Moncada** en calidad de detenida. En esa oportunidad fue a conversar con don **Alfonso**, quien le dijo que se la llevara. Por orden del Mayor **Jofré** tuvo que servir como Dactilógrafo al **Alfonso Podlech** mientras interrogaba a la señora **Meza Moncada**. **Cuenta que las funciones de don Alfonso Podlech eran tomar declaraciones a los detenidos**. Recuerda que en aquella época también intercedió ante don **Alfonso Podlech** por un amigo que era deportista y que anterior al 11 de septiembre de 1973 había tomado el fundo de la familia **Podlech** en la comuna de Lautaro. Asegura recordar muy bien lo relatado, porque fue lo único que efectuó con **Alfonso Podlech** en el Regimiento Tucapel de Temuco. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 1.568 a 1.570 (Tomo V), divulga que solo tomó dos declaraciones y **quien interrogaba era don Alfonso Podlech**, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que conocía y que estaban detenidas. Cuenta que las declaraciones las tomó en la oficina del Jefe de Plana Mayor, Expresa que en una oportunidad, después del 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 10:30 horas, mientras se encontraba de Suboficial de guardia, llegó un camión cargado de detenidos que venían del sector Toltén y Loncoche. Estas personas fueron

dejadas en el patio de la Unidad y debían pasar la noche en el Regimiento, refiriéndose a las personas por quienes intercedió ante **Alfonso Podlech**, para que quedasen en libertad. Finalmente comenta que el Capitán **Ubilla** y su grupo tenían habilitada una cuadra en la Primera Compañía para interrogar personas.

A.39 PEDRO MISAEL ELGUETA MUÑOZ.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2013, rolante de fs. 1.044 a 1.046 (Tomo III), desarrolla en una oportunidad fue designado como Policía Militar, correspondiéndole en el casino desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los Consejos de Guerra, instancias donde el abogado **Alfonso Podlech** y el Comandante del Regimiento **Pablo Iturriaga Marchesse**, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, **escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento**. Otra situación que quiere aportar, es que pudo observar cuando trasladaban a los detenidos a la sala de instrucción de la **Compañía de Morteros, lugar donde escuchaba los desesperados gritos de estas personas que eran interrogadas**.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2017, rolante a de fs. 1.048 a 1.050 (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile. En lo pertinente afirma haber visto detenidos en el Regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en la sala de instrucción de la **Compañía de Morteros. En ese lugar los detenidos eran torturados. Él pudo escuchar muchas veces los gritos de dolor que salían desde esa dependencia**. Allí eran sometidos a apremios tanto hombres como mujeres. En lo pertinente y respecto de **Alfonso Podlech Michaud**, puede señalar que lo recuerda bien porque como dijo en su declaración extrajudicial, **lo vio en los Consejos de Guerra. Esta persona al parecer leía la sentencia que casi siempre era de fusilamiento. Además, se le veía pasar a la Comandancia**.

A.40 HERNÁN ALEJANDRO MORALES GÓMEZ.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2012, rolante de fs. 1.082 a 1.085 (Tomo IV), espeta que todas las resoluciones las confeccionaba el personal de Fiscalía Militar y el sólo las firmaba. A su pregunta, escruta que conoce a **Alfonso Podlech Michaud**, quien es abogado de la ciudad de Temuco. Indica que **esta persona lo llamó por teléfono a poco de haber tomado su cargo de Fiscal Ad-Hoc para pedirle que dejara a todos los detenidos presos, porque eran extremistas**. En aquel tiempo, **Podlech** tenía muy buenas

relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel. En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Después del 11 de septiembre de 1973, **Podlech** acudía frecuentemente al Regimiento, vestido de Militar. Se decía que era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor **Jofré** sobre temas legales.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.353 a 1.354 (Tomo IV), sobre las víctimas José María Ortigosa Ansoleaga y Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez, evidencia que conoció a Ortigosa, ya que era su cliente y ubicaba a Mateluna, ya que a su parecer era Practicante y probablemente se desempeñó en el Hospital Regional de Temuco. Sobre Ortigosa, puede señalar que lo conoció en la ciudad de Villarrica, ya que estaba en el negocio de animales, él era una persona muy ostentosa y por lo que sabe manejaba dinero de otras personas producto de sus negociados. Sobre los hechos que rodearon su detención y muerte, está en su recuerdo que dos días antes de su detención le contactó telefónicamente desde Santiago, comentándole que tenía una citación desde el Regimiento Tucapel, según cree recordar le dio el nombre de Iturriaga como el Oficial que lo citaba. Dada la situación, José Ortigosa le consultó que debía hacer, a lo cual le dijo que si no tenía nada que temer se presentara, esa fue la última vez que conversó con él, ignorando si viajaría a Temuco. Es así, que después de quince días aproximadamente, se enteró por intermedio de una persona que probablemente tenía el nombre de Pedro Ansolena Hueicolea y Ramón Quezada Ansolena, quienes eran sus clientes y oriundos de Villarrica, que a José "lo habían dado vuelta".

En declaración judicial de fecha 26 de noviembre de 2014, rolante de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.353 a 1.354. Agrega que fue el Ministro de Interior, Jaime Tohá, quien le contó que existía una escuela de guerrilla en el sector costero de Carahue, quizás Nehuentúe, y que se iba a realizar una investigación por lo que debía designarse un Fiscal a Ad - hoc para este efecto. Por este motivo le pidió que se hiciera cargo de ese sumario, puesto que ya había hablado con el mando en Valdivia para que el declarante fuese el designado. Fue así que una vez notificado legalmente de su designación se presentó ante el Comandante del Regimiento Tucapel, que era de apellido Iturriaga, quien le señaló que iba a trabajar en una dependencia ubicada al lado de la oficina del Mayor Jofré y que le iban a designar un Oficial para que sirviera como actuario. Recuerda que la oficina que le entregaron tenía uno o dos escritorios y a un oficial de apellido García era el Secretario de la Fiscalía bajo su

mando, quien además, ofició de actuario durante los interrogatorios. A su pregunta, expresa que el **Mayor Jofré era una persona bonachona que no tenía el perfil de Militar clásico como Iturriaga y no tomaba mayores decisiones sobre el destino de las personas detenidas.** Por esto cuando sucedió el golpe, llegó el abogado **Alfonso Podlech** para asesorarlo en materias de la Fiscalía, a quien conocía como abogado de la ciudad de Temuco. **En aquel tiempo, Podlech tenía muy buenas relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel.** En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Sustenta que **después del 11 de septiembre de 1973, Podlech acudía Frecuentemente al Regimiento, vestido de Militar. Se decía que era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor Jofré sobre temas legales. Podlech organizó la Fiscalía Militar que funcionó al interior del Regimiento. Él fue quien trajo a los actuarios Toloza y González más un amigo de este abogado, de nombre Dorian Novoa.** Desconoce el motivo por el cual el abogado **Podlech** fue designado Fiscal Ad-Hoc para concurrir a la Corte de Apelaciones de Temuco con el objeto de solicitar actuarios y Personal Judicial para los Consejos de Guerra. Esto porque el declarante era Fiscal Ad Hoc y **nada le dijeron en ese sentido.** Exclama que **un día Toloza le dijo que Podlech interrogaba detenidos al igual que lo hacía el Mayor Jofré.** Respecto de los hechos materia de esta investigación, recuerda lo ocurrido a **José Ortigosa Ansoleaga**, quien por aquel tiempo era su cliente. Esta persona **lo llamó por teléfono a raíz de que lo estaban requiriendo en la Fiscalía Militar de Temuco mediante un Bando Militar.** El declarante le dijo que no temiera si nada había hecho. Entonces él decidió venir. Pocos días después supo que había sido ejecutado, pero no se enteró de mayores detalles, puesto que **le consultó al Comandante Iturriaga por su caso, pero éste le dijo que no se metiera.** Sabe que **Ortigosa** vino a Temuco con un maletín lleno de dólares, el cual desapareció. Alguien según entiende, se apropió de ese dinero, pero desconoce quién lo hizo.

A.41 BERNARDITA DEL CARMEN WEISSER SOTO.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.113 a 1.114 (Tomo IV), ratifica íntegramente su declaración judicial prestada en causa rol 113.051. En lo pertinente agrega que mientras se encontraba en la Fiscalía Militar, vio llegar a Conscriptos con libros requisados, uno de los cuales eran poesías de Gabriela Mistral, por lo cual solicitó al Mayor **Jofré** si podía quedárselo, lo recogió justo en el momento en que aparece el Sr. **Alfonso Podlech** a la sala. **Jofré en un acto que le pareció casi de aprobación hacia**

Podlech le insinuó que podría darle este libro, a lo que **Podlech** nada dijo, pero casi de inmediato miró hacia los otros volúmenes y sacó uno, diciendo que se iba a quedar con ese libro. **Alfonso Podlech vestía uniforme militar y fue interrogada por él en dos oportunidades junto a su actuario de apellido González.** Aclara que era este actuario quien tenía un anillo con forma de dragón y no un Militar como lo señaló anteriormente. También **González** la interrogó a solas en otras oportunidades. Suma que existe una persona de nombre **Maggie o Margarita Toledo Klenner**, quien vive en Puerto Montt y que estuvo detenida junto con ella en el Buen Pastor y que también fue interrogada por **Alfonso Podlech**. Ella puede dar testimonio de lo que le tocó vivir. Recuerda que un día mientras esperaba ser interrogada en la Fiscalía Militar, se acercó el Capitán **Ubilla**, quien siempre rondaba por ese lugar, el que tenía una venda en un brazo. En esa oportunidad dijo que habían sido víctimas de un intento de asalto, Tiempo después asoció esta declaración de **Ubilla** con el asalto al polvorín.

En diligencia de careo entre Bernardita Del Carmen Weisser Soto y Óscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.121 a 1.123 (Tomo IV), ratifica su declaración prestada en autos y que rola de fs. 3.503 a 3.504 (correspondiente a la declaración de fs. 1.113 a 1.114). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, quien la interrogó a fines de octubre de 1973 en la Fiscalía Militar ubicada en el Regimiento Tucapel. Justifica que fue interrogada por el señor Podlech en una oficina ubicada hacia el fondo del edificio que estaba situado hacia la izquierda de la entrada del Regimiento. Le parece que la relación que tenía el señor Podlech con el resto de los integrantes de la Fiscalía Militar, incluido el Mayor Jofré era de superioridad por cuanto daba la sensación que todos le tomaban el parecer a él para actuar. Fue interrogada por **Podlech** en la Fiscalía Militar, indicando que hubo muchas otras mujeres detenidas que sufrieron torturas y que seguramente fueron interrogadas por este señor, refiriéndose a las que recuerda. Invoca que el señor **Podlech** fue al Buen Pastor a efectuar visitas de cárcel ocasión en las que **sufrieron amenazas por parte de él.**

En declaración judicial de fecha 18 de noviembre de 2003, rolante a fojas 1.556 a 1.559 (Tomo V), inquiera que un día la fue a buscar el Sargento **Moreno**, quien la llevó al Regimiento para que le tomaran una declaración en la Fiscalía. En ese lugar vio pasar a unos Militares Conscriptos con un montón de libros requisados, los que iban a ser destruidos, quienes los dejaron en el piso de la oficina. Entonces apareció el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, revisó los libros y tomo para sí una colección. Además vio un libro de poesías de

Gabriela Mistral e instintivamente pidió quedárselo. Entonces el Comandante **Jofré** en un acto de nobleza se lo regaló.

En declaración judicial de fecha 23 de mayo de 2017, rolante de fs. 1.591 a 1.592 (Tomo V), ratifica sus declaraciones extrajudiciales y judiciales prestadas en autos y la de fs. 1.556 a 1.559, 1.984 a 1.987, 2.260 a. 2.261, 2.268 a 2.270, de la causa 113.089. También ratifica el careo que se practicó entre la deponente y **Alfonso Podlech** de fecha 19 de julio de 2013, en la causa rol 113.089.

A.42 RODRIGO MIGUEL ANTONIO HENRÍQUEZ ARAVENA.

En declaración judicial de fecha 13 de diciembre de 2010, rolante a fs. 1.571 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 228 a 230 (otorgada en causa diversa). Advierte que **vio al abogado Alfonso Podlech interrogar a su hermano en dependencias del Regimiento Tucapel donde funcionaba la Fiscalía Militar**. Este hecho lo presencié, pues se encontraba en los pasillos contiguos a la oficina antes mencionada. Junto con su hermano, señala que fueron interrogados **Jobet, Ljubetic y Ortigosa**, quienes pasaron a la sala de audiencias, donde se encontraba Podlech junto a los actuarios **Tolosa y González**. Le parece que fue al día siguiente o subsiguiente de la primera detención de su hermano, que se dirigió hasta el Regimiento y se entrevistó con **Alfonso Podlech**, quien le señaló que **su hermano y los demás detenidos mencionados anteriormente eran unos activistas**. Asevera que **Podlech actuaba como Fiscal Militar en propiedad, de hecho vestía Uniforme Militar y daba órdenes en ese lugar**. Además en todas las oportunidades en que concurrió a la Fiscalía Militar jamás vio al Mayor **Jofré** en Fiscalía, **solo entrevistándose siempre Podlech, quien trataba a los detenidos con epítetos tales como “vende patria”**.

A.43 JORGE EDMUNDO SEPÚLVEDA CONTRERAS.

En declaración judicial de fecha 26 de octubre de 2017, rolante de fs. 1.615 a 1.620 (Tomo V), alega que **Podlech** era quien estaba al mando de todo dentro del Regimiento. Tomando decisiones sobre quien vivía y quién no. Era el Fiscal Militar, dentro de la Comandancia tenía una oficina con los del Servicio de Inteligencia Militar. Esta persona se movilizaba por toda la región. Esto le consta al declarante, debido a que él estaba de guardia y veía esta situación. Incluso recuerda que en muchas ocasiones el mayor **Jaime García Covarrubias** le pasó documentación a **Podlech** y él decidía respecto a las personas que se indicaban en esos papeles. Todo esto que menciona es del año 1973. Respecto al caso de

Daniel Mateluna y José María Ortigosa Ansoleaga, sólo recuerda que en una oportunidad al momento de comer en el rancho, **se comentó que habían matado a un doctor de apellido Mateluna, esto era un comentario generalizado entre los Conscriptos**. Se decía que lo habían matado fuera del Regimiento, pero desconoce mayores detalles. Insiste en que en el Regimiento Tucapel había una gran cantidad de detenidos en el gimnasio y también sobre la existencia de **la sala de torturas, donde se ubicaba un camarote metálico, el que servía para aplicarles electricidad a las personas. Lo que sabe porque lo vio**. Anexa que una oportunidad le correspondió hacer guardias en el Hospital Regional de Temuco, mostrándole la persona a cargo de ese lugar los cuerpos que estaban ingresados por Personal Militar, ya que habían sido muertos por funcionarios del Regimiento, si saber mayores detalles.

III. Testigos pertenecientes al núcleo familiar y de amistad de las víctimas:

i. Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez:

A.44 DANIEL BENJAMIN MATELUNA LILLO.

En declaración judicial de fecha 03 de febrero de 2012, rolante de fs. 25 a 27 (Tomo I), acota ser hijo de **Daniel Mateluna Gómez**, quien era Suboficial retirado de Carabineros, de profesión practicante. Expone que **el 11 de septiembre de 1973, apenas supo lo que estaba pasando en Chile, se despidió de todos ellos**, quienes no entendían lo que ocurría producto de su edad. Se fue de la casa, por lo que supo, donde su amigo **Carlos Contreras**, en calle Magallanes, Población San Antonio. Desde el día siguiente, **empezaron los allanamientos en su casa, casi siempre producidos a partir del toque de queda**, siempre por Carabineros de Temuco, golpeando y botando las puertas preguntaban dónde estaba su padre. **A su padre lo vio el 16 o 17 de septiembre en la casa de sus amigos, pasó dos días con él**. El día 19 o 20 de septiembre los Carabineros volvieron a su casa, como era de costumbre, a allanar. Apareció el Carabinero que lo detuvo la primera vez y reconoció su verdadera identidad. En ese momento fue detenido inmediatamente, con su madre, porque él sabía todo lo que ellos habían hecho la primera noche cuando lo detuvieron y sus allanamientos. Agrega que **estuvo 3 días detenido en la Segunda Comisaría de Temuco. Fue golpeado y amenazado constantemente. Cuando su padre supo que lo tenían detenido y no lo soltaban, él se entregó al Regimiento Tucapel**. Al día siguiente lo liberaron. **Desde que se entregó no lo vieron más. Arguye que el 30 de septiembre supieron de él**, por un papel que envió desde la cárcel

con un Gendarme, que no supieron su nombre, porque en ese tiempo nadie se identificaba por miedo. En el papel él les decía que estaba en libre plática y que contactaran un abogado, que le llevaran comida, que se cuidaran, principalmente él. Contactaron al señor abogado **Sergio Merino Jarpa**, quien quedó de asumir su defensa. Sin embargo, posterior al 02 de octubre el abogado los contactó para decirles que **ya no había nada que hacer, su padre había sido ejecutado y no alcanzó ir a visitarlo**. Sustenta que el 01 de octubre, como a las 11:00 horas se presentó frente a la cárcel pública de Temuco, en calle Balmaceda, con lo que él pidió; y como a las 12:00 horas, llegó un Jeep militar **y pudo ver cuando dos soldados lo ayudaron a bajar, prácticamente en brazos, porque no podía caminar, se veía muy maltratado, muy golpeado. Mientras lo registraban en la recepción de la cárcel pública, pudieron verse por última vez**. Nunca pudo entregarle lo que pidió, por lo tanto volvió a su casa. Como a las 9:00 horas del día **02 de octubre su madre escuchó el Bando Militar donde decían que dos extremistas, entre los que estaba su padre y José María Ortigosa Ansoleaga, habían sido ejecutados por intentar fugarse del Cuartel Militar**. Atestigua que empezaron los trámites para saber dónde estaba su cuerpo y tratar de recuperarlo. Les entregaron el cuerpo de manera escondida y pudieron darle sepultura en el Cementerio de Padre Las Casas. Fue el primer habitante de ese cementerio. Con el tiempo se enteraron de varias personas que estuvieron presos en la cárcel junto con él, entre los que recuerda está **Víctor Maturana Burgos**.

A.45 MARIA ISABEL LILLO FLORES.

En declaración judicial de fecha **03 de febrero de 2012**, rolante de fs. **28 a 30 de autos (Tomo I)**, advierte ser la esposa de **Daniel Mateluna Gómez**. Él era jubilado de Carabineros, no estaba en servicio y apoyaba al Gobierno de Salvador Allende. Explaya que noche tras noche llegaba la fuerza pública, de todas las instituciones, a hacer allanamientos buscando a su esposo. Su esposo se había ido a la casa de la familia de **Carlos Contreras**. **Cuando allanaban lo primero que hacían era tomarla junto a su niño menor, les ponían un revolver en la cabeza y se ponían a registrar la casa, según ellos, buscando armas. Los amenazaban, apuntándoles con sus escopetas, dejaban a sus hijos boca abajo mientras registraban la casa**. Como no encontraban nada, se llevaban a sus hijos **Daniel y Patricio** a la Comisaría y los tenían toda la noche en ese lugar. Continúa que su esposo se presentó al Ejército el día 20 de septiembre de 1973, acompañado por **Alfonso**, uno de los hijos de la familia **Contreras**. **Pero a pesar de esto igual siguieron allanando su casa**. Luego de esto, fue trasladado a la cárcel de Temuco, donde estuvo desde el 20 de

septiembre hasta el día 1 o 2 de octubre, **le pasó a avisar un Gendarme amigo** de su esposo, que vivía en la Población El Esfuerzo, pero no recuerda su nombre, que **él ya no se encontraba en la cárcel, lo había trasladado al Regimiento Tucapel**. Señala que antes de que lo llevaran al Regimiento, supo, **por una enfermera que trabajaba en el Hospital y que era amiga de su marido, que lo habían llevado hasta allá porque estaba muy mal, tenía la mandíbula fracturada, sin dientes y sin uñas**. Tiene entendido que esa enfermera, que no recuerda su nombre, desapareció. Nadie de su familia alcanzó a visitarlo en el Regimiento Tucapel, **sólo supieron de su muerte por los comunicados del Bando Militar, el día 02 de octubre**. Tuvo conocimiento por personas que no conocía, que **él salió caminando abrazado con otra persona, muy despacio desde el Regimiento y que les dispararon**. Esas personas comentaron que iban en muy malas condiciones, por eso caminaba despacio. Continúa que **sus hijos corroboraron al ver el cuerpo, que su esposo estaba mutilado**. El cuerpo de su esposo lo entregaron desde el Hospital, fue un médico amigo, que llamó a la familia de **Rosita** y su esposo de apellido **Palma**, para que le avisaran que su esposo estaba en el Hospital y que fuera a retirar el cadáver, porque de lo contrario lo iban a dejar en una fosa común. A su esposo lo sepultaron en el cementerio de Padre las Casas. Fue el primer habitante de ese campo santo. Exclama que a pesar de que su marido estaba muerto y sepultado, seguían allanando su casa. Tuvo que irse a la casa de **Laura García** y su esposo.

En declaración extrajudicial, rolante de fs. 54 de autos (Tomo I), afirma que el afectado era practicante, jubilado de Carabineros. **El día 11 de Septiembre de 1973, por radio se enteró que debía presentarse al Regimiento Tucapel**. Se fue a casa de unos amigos, ya que al hogar llegaban a buscarlo Carabineros o Militares. Como no aparecía, se llevaban a los hijos de a dos detenidos, los golpeaban en la Comisaría y los soltaban en horas del toque de queda. **Cuando se enteró que el hijo mayor tenía la cabeza rota, debido a los golpes recibidos, el afectado se presentó al Regimiento Tucapel, el 20 de Septiembre. No sabiendo más de él hasta que lo entregaron muerto**. Hubo un **Bando N°8** el miércoles 4 de Octubre de 1973 del Comandante de la Guarnición Militar de Temuco, en la que decía que **el día 02 de octubre, él afectado y José María Ortigosa Ansoleaga trataron de huir del Regimiento y fueron dados de baja, firmado por Pablo Iturriaga Marchesse**. El cuerpo les fue entregado en el hospital de Temuco y lo enterró la familia en el Cementerio Padre de las Casas. **Cuando les entregaron el cadáver estaba sin dientes, producto de la tortura**.

A.46 JUAN CARLOS MATELUNA LILLO.

En declaración judicial de fecha 24 de noviembre del 2012, rolante de fs. 391 a 392 (Tomo II), explicita ser hijo de **Daniel Mateluna Gómez**, quien era Suboficial retirado de Carabineros, de profesión Practicante, él era simpatizante de izquierda. Descargó que producido el Golpe Militar, el 11 de septiembre de 1973 su padre salió de la casa, entendiendo que a la casa de **Carlos Contreras**. El mismo día 11 de septiembre, en horas de la tarde, llegaron Militares a efectuar un allanamiento en la casa, buscando a su padre. Ese día, en la noche, **también fueron Carabineros a efectuar allanamientos, llevándose detenidos a su madre y a su hermano pequeño**. Recuerda que en uno de esos allanamientos, se equivocaron y se llevaron a sus hermanos menores, **César Patricio y Ricardo**, los estuvieron detenidos hasta las 4 de la mañana. En otra oportunidad aprehendieron a su hermano **Daniel, quien sufrió golpes en su cabeza en la 2° Comisaría de Temuco. Fue muy torturado en ese lugar, llegó con su cabeza llena de sangre a la casa**. Recuerda a un Carabinero de la 2° Comisaría, que lo apodaban "**el perro**", quien efectuaba los allanamientos, le ponía la pistola en el pecho a su madre. Este Carabinero era de baja estatura, de pelo negro, bigotes y de contextura gruesa. También recuerda como parte del grupo de Carabineros que efectuaban allanamientos, a una persona que andaba de civil, alto, rubio, de ojos claros y de contextura gruesa. Atestiguó que producto de los allanamientos que se efectuaban, su padre se presentó en el Regimiento Tucapel, donde le dijeron que no saliera de la ciudad y quedó en libertad. **La última vez que vio a su padre, fue la mañana del 11 de septiembre. Conjeturo que su hermano mayor pudo verlo cuando estaba escondido en la casa de los Contreras**. Señaló que hubo un Gendarme, quien les llevaba noticias respecto a su padre. Incluso fue quien les avisó que lo iban a trasladar al Regimiento. No recordó el nombre del Gendarme. Expuso que **supieron de la muerte de su padre por un Bando** que se dio a conocer. **El cuerpo de su padre lo vio su hermano Ricardo**, él fue quien lo identificó. Por último, agrega que su hermano **Ricardo** en alguna oportunidad hizo una declaración al Comité Juicio y Castigo, que está en Temuco, donde relató cómo estaba el cuerpo de su padre al ir a identificarlo.

A.47 ALFONSO RENÉ CONTRERAS FARFÁN.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de abril de 2013, rolante a fs. 510 a 511 (Tomo II), glosa que meses antes del día 11 de septiembre de 1973 su madre contrajo una enfermedad, por la cual tuvo que ser operada en nueve oportunidades y permanecía postrada en la casa, fue así que comenzó a

ser tratada por **Daniel Mateluna Gómez**, quien era practicante y ostentaba el grado de Suboficial de Carabineros. Por lo anterior y ya llegado el Golpe de Estado comenzaron a salir los **"Bandos" en los cuales se mencionaba a Daniel Mateluna**. Fue así que el día 11 de septiembre, se dirigió a la casa de sus padres, comenzando a hacer ruido, indicándole su madre que guarde silencio, ya que **Daniel se encontraba escondido en el entretecho de la casa**, por tal motivo se **acercó al entretecho y conversó con él, solicitándole éste que por favor lo pasara a Argentina**, a lo cual señaló que era imposible, ya que su casa era allanada constantemente por funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros, pero que haría todo lo posible por llevarlo directamente al Regimiento "Tucapel", lo cual ocurrió a la semana del Golpe. Ya en el Regimiento se presentó a **Daniel** a un Coronel de Ejército, del cual no recuerda nombre, pero sabe que era el Jefe de Regimiento por esos entonces, quien conversó a puerta cerrada con **Mateluna** por aproximadamente unos veinte minutos, **para luego entregarle en custodia a su amigo**, trasladándose nuevamente a su domicilio. Pasado unos días su amigo **Mateluna** nuevamente fue llamado por los **Bandos** radiales y televisivos, por lo cual se trasladaron por segunda vez al Regimiento, quedando detenido en la misma oficina del Coronel. **Pasado los días se entera que Mateluna, se encontraba detenido en la Cárcel de Temuco y tenía contacto directo con su cuñado Neftalí Gutiérrez**, actualmente fallecido, quien le entregaba toda información. Pasado unas dos semanas de la detención de **Daniel Mateluna, en los momentos que se dirigía a la casa de sus padres en horas de la mañana, observó que un grupo de personas miraba un cuerpo**, al cual se acercó y con sorpresa **comprobó que era el de Daniel, el cual estaba de espalda y con siete impactos de bala en la espalda, quien además vestía una chaqueta azul, pantalón negro y zapatos, su cuerpo yacía en la intersección de calle Mackenna y Aldunate al costado de la línea férrea, a unas dos cuadras del Regimiento Tucapel**, fue el impacto que no lo dejaba hacer nada, por lo que se trasladó a casa de sus padres y contó lo sucedido, al mismo tiempo que se comunicó con la esposa de **Mateluna**, a quien le informó de lo sucedido. Transcurrido una hora fueron hasta el lugar y el cuerpo ya no se encontraba, por lo cual consultaron en el Regimiento y en la guardia, donde les dicen que todos los cuerpos estaban en la morgue. Por lo anterior se trasladaron junto a la cónyuge de Daniel, **Isabel Lillo** hasta la morgue, en donde ingresó y consultó por su amigo, señalándole la persona encargada que efectivamente el cuerpo de **Mateluna** se encontraba en el lugar, indicándole que para ser entregado deberían traer elementos para sellar el cajón, ya que de otra forma no lo entregarían. Así mismo el día que sacaron a **Daniel Mateluna** de la morgue, se trasladaron hasta al

Cementerio de Padre de Las Casas, en donde enterraron a su amigo, siendo este el primer cadáver que llegaba al Cementerio. Lo que si recuerda es que por indagaciones que realizó años posteriores, **la persona que habría matado a Mateluna, sería un Sargento de Ejército.** Finalmente esgrime que por comentarios de su cuñado Neftalí, **que habría sido imposible que Daniel se hubiese fugado, ya que no podía ni caminar, debido a que por las torturas él lo alimentaba en la boca, sin poder mover las extremidades,** también manifestó que **tampoco mascaba ya que le habían sacado los dientes.**

En declaración extrajudicial de fecha 18 de mayo de 2016, **rolante a fs. 1.449 a 1.451 (Tomo V),** copia de lo cual se encuentra de fs. 1.495 a 1.497 (Tomo V), espeta que sólo conoce a **Daniel Mateluna Gómez,** ya que tenían una amistad tremenda, debido a que este hombre en su calidad de practicante le había salvado la vida a su madre. Estimula que para el año 1973, **Daniel Mateluna** tenía una edad aproximada de 50 años y era practicante de Carabineros de Temuco, incluso en su tiempo libre ejercía de manera particular sus actividades. Conforme a su recuerdo, días posteriores al 11 de septiembre de 1973, el nombre de **Daniel Mateluna** comenzó a aparecer en los **Bandos Militares,** ya que él tenía ideas de izquierda. Estima que efectivamente **Daniel Mateluna estuvo oculto en el domicilio de sus padres,** donde actualmente reside, En base a la conversación que sostuvo con don **Daniel** decidió sugerirle que fueran a presentarse al Regimiento Tucapel, a objeto de evitar consecuencias mayores hacía él, su familia y la del declarante; por esta razón, ese mismo día cerca de las una de la tarde, **ambos concurren al Regimiento Tucapel,** lugar donde pidió conversar con el Mayor de esa Unidad Militar a quien ubicaba, ya que por pertenecer a la Armada, en sus días libres debía presentarse en el Regimiento. Una vez que los atendió el Mayor, cuyo nombre no recuerda, después de entablar un breve diálogo con él, le pide que salga de la Oficina y que ingrese **Mateluna,** reunión que duró cerca de quince minutos, posteriormente el Mayor sale de su oficina y le dice que **Daniel queda bajo su tutela y debía responder por él en caso de cualquier cosa.** Posteriormente nuevamente salió llamado por un **Bando Militar,** ocasión en que lo acompañó, pero esta vez no le permitieron ingresar al Regimiento, donde un funcionario Militar le señaló que se tenía que ir, ya que **Mateluna, quedaría detenido.** Conforme a su recuerdo, cerca de las nueve a diez de la mañana y mientras iba a visitar a sus padres por calle O'Higgins antes de llegar a la línea férrea, **se dio cuenta que había un grupo de gente que se encontraba viendo a un cuerpo tirado en el suelo, el cual estaba sin vida, reconociendo que era su amigo Mateluna, pudiendo apreciar que éste mantenía un impacto de bala en el cráneo, específicamente en la**

frente y diversos impactos de bala en la espalda, posteriormente fue al domicilio de sus padres a avisar la situación, para luego ir al Regimiento y pedir autorización para retirar el cuerpo de la morgue y posteriormente velarlo y darle sepultura en el cementerio de Padre Las Casas. Agrega que durante el tiempo que don **Daniel** estuvo oculto en el domicilio de sus padres, frecuentemente fueron allanados por personal de Carabineros de la 2° Comisaría. Además en una oportunidad se quedó en el domicilio de don **Daniel Mateluna**, mientras él se encontraba oculto en la casa de sus padres, siendo habitual que funcionarios de Carabineros allanaran su inmueble y maltrataran a su familia.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto de 2016, rolante a fs. 1.508 (Tomo V), ratificó sus declaraciones extrajudiciales prestadas en autos de 510 a. 511 y de fs. 1.495 a 1.497.

ii. José María Ortigosa Ansoleaga:

A.48 CARMEN GRACIELA URIARTE OYANGUREN.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de agosto de 1990, rolante de fs. 85 a 88 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 224 a 226 (Tomo I), **apoya que con su marido vivían en Santiago y en el verano de 1973 fueron al sur a veranear, les gusto la zona de Temuco por lo que decidieron comprar un fundo en sector Catrico. El abogado de la contraparte vendedora fue Alfonso Podlech, quien después fue Fiscal Militar de la zona.** Narra que hacia el 21 de septiembre llegó la Policía de Investigaciones a su casa, preguntando por su marido, ella pregunto de qué se trataba y le contestaron que era un exhorto de Temuco. **Al día siguiente se trasladó a Temuco y se entrevistó con el Fiscal Podlech, ya que la orden la impartía esa repartición.** Indagó el motivo de la citación, la acusación era tener una escuela de guerrillas. Aduce que **Podlech al otro día comentó que el administrador había confesado que tenía unos textos marxistas y un arma, lo que había sido incautado, entonces señaló que no habría ningún problema que se presentara.** Carlos que era Reserva de la FACH dijo que él lo llevaba y se fueron en el auto de la declarante, muy vistoso y único de Temuco. Se alojaron en un Hotel y al rato, una gran cantidad de efectivos Militares tomó detenido a los tres viajantes, esto es **José María, Carlos Cardoen y Pedro Pablo Errázuriz.** Fueron interrogados y liberados posteriormente, salvo **José**, pues tenía una orden para presentarse. Los acompañantes le dijeron que estuviera tranquila. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Temuco, el Alcaide **Maximiliano Vivanco, que la conocía, la llamó entre el 25 y 28 de septiembre y le comunicó que su marido se encontraba**

incomunicado, que era el único preso político incomunicado y en muy malas condiciones, ya que había sido torturado con electricidad. Le mandó un mensaje manuscrito, en el que señalaba que necesitaba dinero, pues le pedían un rescate de 250.000 dólares. **Carlos Cardoen** expresó que le entregaron una cantidad ligeramente inferior a **Pablo Iturriaga Neumann**. Desarrolla que el Alcaide la llamaba regularmente y con fecha 03 de octubre recibió la noticia. Fueron al día siguiente al Hospital, la dejaron ver el cuerpo con una persona del personal subalterno gracias a una propina, pues el medico jefe se lo negaba. **Pudo ver el cadáver de su marido, tenía 11 tiros.** Musita que en el Regimiento habló con don **Luis Jofré Soto**, quien le dijo que **a los fusilados se les depositaba en la fosa común, frente a las fuertes insistencias cedió y se lo dio en un cajón sellado.** Le prohibieron hacerle misa y anuncios en los diarios. No obstante, ella lo hizo, enterrando a su marido en Santiago, con gran asistencia. Luego tuvo que ir a Temuco a defender el campo. La defensa que hacían era que su marido era marxista. Por lo que **habló con Urrutia en la Corte y el Relator Zurita, quienes se negaron a ayudar, argumentando que su marido fue fusilado por marxista.** En Temuco se siguió un Juicio para reivindicar el campo, en el que no pudo recuperarse, pasando a poder de la antigua dueña, **Herminia Diez**, quien lo vendió a su vez. Posteriormente **en una conversación con el Fiscal Podlech, éste le dijo que lo había liberado luego de interrogarlo.** El Alcaide le relató que en una oportunidad había tomado unas copas con **Luis Jofré Soto**, quien le dijo “ese tal por cual de Ortigosa casi me convence”.

En declaración judicial, de fecha 25 de marzo de 1991, rolante de fs. 331 a 333 (Tomo I), aproxima ser la cónyuge de **José María Ortigosa Ansoleaga**, quien falleció el 02 de octubre de 1973 en Temuco, por una patrulla Militar. Reitera todo lo anterior, agregando que respecto a la noticia del fallecimiento de su marido, al cual se le aplicó la “ley de fuga”, la supo por intermedio del Alcaide de la época, don **Maximiliano Vivanco**, el que además de llamarla por teléfono, le envió un escrito de su marido en el que le comunicaba que se le estaba pidiendo la suma de US 250.000 por su libertad, no indicándole quien se los pedía, pero le informaron que era el Intendente de ese año **Pablo Iturriaga** junto a un tal **Pacheco** de la FACH. En conocimiento del fallecimiento de su marido, se trasladó de inmediato a Temuco, apersonándose en el Regimiento Tucapel, conversando con el Mayor **Luis Jofré Soto**, el cual le señaló que **los cadáveres de los fusilados iban a la fosa común y no le entregarían el cuerpo de su marido, respondiéndole que tendría que dispararle de frente y no en la espalda como a su marido para que los enterraran a los dos en esa la fosa común.** Después de eso ingresó a una oficina donde conversó con otros Militares

y regresó diciéndole que llevara un cajón y ropa, al respecto de la ropa, le dijo que su marido estaba vestido, **a lo que contestó que esa ropa no servía.** Posteriormente fue al Instituto Médico Legal, donde un funcionario o auxiliar la dejó **ver el cadáver de su esposo, que estaba en una camilla autopsiado presentando heridas de bala en la espalda.** Luego un hijo retiró el cuerpo de la morgue.

A.49 PATRICIA VERONICA ORTIGOSA URIARTE.

En declaración judicial de fecha 23 de noviembre del 2012, rolante de fs. 384 a 385 (Tomo II), escruta ser la hija de **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren**. Difundió que en la época de la muerte de su padre, tenía la edad de 12 años y vivía en Santiago. Relata su padre se juntó con **Carlos Cardoen** y **Pedro Pablo Errázuriz Ossa**, para ir a Temuco. En Temuco llegaron a un hotel, pero de inmediato cree que la Policía de Investigaciones los tomaron detenidos. Sin embargo, **el único que quedó detenido en la cárcel fue su padre. Carlos Cardoen** fue a visitarlo al día siguiente a la cárcel de Temuco. **En la cárcel, lo habrían torturado con electricidad en la lengua y testículos.** Expuso que cuando su padre estuvo en la cárcel **habrían pedido dinero, algo así como 500 mil dólares para que le dieran la libertad.** Además, les contaron que a su padre no le habían podido comprobar los delitos que se imputaban, por lo que **lo dejaron en libertad, pero al salir le dispararon.** Apuntó que su hermano **Francisco** fue el encargado de retirar el cuerpo de la morgue.

A.50 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ URIARTE.

En declaración judicial de fecha 23 de noviembre del 2012, rolante de fs. 386 a 390 (Tomo II), estimula ser hijo de **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren**, su madre enviudó y en el año 1957, se casó con **José María Ortigosa Ansoleaga**. De ese matrimonio nacen dos hijas, **Mary Carmen** y **Patricia Verónica**. Comunicó que **José Ortigosa** decidió presentarse, desconoce si en la Fiscalía Militar de Temuco o en Investigaciones de Villarrica. En esa oportunidad fue acompañado por **Pedro Pablo Errázuriz Ossa** y **Carlos Cardoen Cornejo**. Llegaron en un auto camaro del año 1972, color dorado e hicieron escala en Temuco. Se alojaron en unos moteles en las afueras de Temuco. Supo, por **Carlos Cardoen**, que llegó una patrulla de la Fuerza Aérea al motel, los detuvieron y los llevaron a interrogarlos. Desconoce si los llevaron a la Fiscalía Militar o a alguna unidad de la Fuerza Aérea o Ejército. Los interrogaron vendados. **Carlos Cardoen** había sido Oficial de la Fuerza Aérea, por lo que lo

dejaron en libertad. **Pedro Pablo Errázuriz Ossa**, se comunicó con su madre porque ella era la jefa de la Cruz Roja en Chile. Continúa que **a José Ortigosa lo enviaron a la cárcel**, no tuvieron la oportunidad de visitarlo mientras estuvo en ese lugar, **pero se enteraron que estaba ahí por el Alcaide de ese recinto de nombre Maximiliano Vivanco con quien José tenía una relación muy cercana**. La única que lo visitó en la cárcel fue la abogada de la familia de nombre **Aura Cuello**. **Explayó que el 02 de octubre de 1973**, por un llamado telefónico que recibió **Joaquín**, el mozo de la casa, les comunicaron que **José Ortigosa había fallecido**. Ese llamado lo hizo la abogada de la familia de nombre **Aura Cuello**. El cuerpo de **José Ortigosa** fue retirado por él y un grupo de personas cercanas desde el Hospital Regional de Temuco, se hicieron los funerales en Santiago. En la Fiscalía Militar de Temuco. Lugar donde fue presentado ante el Fiscal de la época, **Alfonso Podlech**, quien le preguntó por qué andaba con **Vicente Gutiérrez** y qué relación tenía **con José Ortigosa**. Le comentó que estaba averiguando la muerte de su padrastro. **Le preguntó irónicamente, de qué había muerto su padrastro y le dijo que él lo había dejado en libertad y que tenía copia de la orden, sin embargo, cuando le pidió que le exhibiera el documento se negó a hacerlo y le dio la orden de desaparecer de su vista en 5 minutos, y que no volviera más a preguntar sobre él**. Le hizo caso y desde esa fecha que no viene a Temuco.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto del 2013, rolante a fs. 541 (Tomo II), relató que junto con su madre concurren a Temuco, donde su madre se entrevistó con **Alfonso Podlech Michaud** en la Fiscalía Militar. En ese lugar **Podlech** le preguntó irónicamente a su madre si sabía cómo murió **José Ortigosa**, como ignorando a qué venía ella. Todo esto se lo contó ella una vez que salió de ese lugar y llegó al vehículo en que él la estaba esperando. Recuerda haberse entrevistado con **Alfonso Podlech** en la Fiscalía Militar, que ahora estaba ubicada en los altos de un banco. En esa oportunidad le preguntó el motivo de su detención y le contestó que andaba averiguando lo ocurrido con **José Ortigosa**. **Entonces esta persona le dijo que se acordaba perfectamente de él y que incluso le había dado la orden de libertad por falta de méritos, de lo cual guardaba una copia. Él le pidió que le exhibiera la copia, pero él se negó y le ordenó salir de la sala**.

En diligencia de careo entre Francisco Antonio Rodríguez Uriarte y Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante a fs. 542 (Tomo II), ratifica sus dichos de fs. 541. Reconoce a la persona con la que se le carea como **Alfonso Podlech Michaud**, de quien ha

hecho referencia. Dicha persona y el señor **Jofré** subrogaban en la Fiscalía. Se mantiene en sus dichos.

A.51 MARY CARMEN ORTIGOSA URIARTE.

En declaración judicial de fecha 25 de noviembre del 2012, rolante de fs. 395 a 396 (Tomo II), exclama ser hija de **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren**. En la época de la muerte de su padre, tenía la edad de 14 años y vivía en la ciudad de Santiago. Exclamó que al llegar a su casa supieron que su padre había muerto. Su madre les contó que los Militares habían dado muerte a su padre afuera del Regimiento Tucapel de Temuco, junto a un señor de apellido **Mateluna**. Ignora quien le comunicó a su madre la muerte de su padre. Relató que junto a su familia fueron a Temuco, se alojaron en el Hotel Frontera. A su madre no le querían entregar el cadáver, pero igualmente fueron a la morgue. **Su hermano, Francisco sacó las ropas de su padre para investigar qué tipo de balas tenía o cuál era la causa de su muerte. Guardó esas ropas en el maletero del auto.** Su madre consiguió que le entregaran el cuerpo y cuando llegaron a Santiago lo cambiaron de urna. **Recuerda que su padre tenía una bala en la cabeza.** Todos estos hechos la impactaron debido a su corta edad. En Temuco, su madre habló con **Alfonso Podlech, Fiscal Militar en aquella época, por lo ocurrido con su padre.** Comentó que su madre, antes de morir le contó que las señoras de los Militares que dieron muerte de su padre fueron a conversar con ella, ya que los habían dado de baja.

A.52 PEDRO PABLO ERRAZURIZ OSSA.

En declaración extrajudicial de 25 de septiembre de 2012, rolante de fs. 288 a 289 (Tomo I), difunde que el año 1970 conoció a **José Ortigosa Ansoleaga**, quien era dueño de un taller de reparaciones de automóviles. Decantó que hicieron una sociedad de palabra. A raíz de esta relación laboral, se hicieron amigos y pudo conocer su casa y familia, oyéndole decir en varias ocasiones que tenía una propiedad agrícola en el sur del país, específicamente novena región, agregando que era simpatizante del Partido Socialista. Cimentó que una vez ocurrido el Golpe de Estado el día 11 de septiembre de 1973, días posteriores a este suceso, **José Ortigosa**, fue detenido por una Patrulla Militar, desconoce las circunstancias, y fue llevado al Estadio Nacional, lugar donde permaneció por tres días, para luego continuar con su vida en normalidad. Continuó que durante los días que permaneció en la Embajada, los cuales fueron alrededor de seis a siete días, **José** se enteró por un comunicado

radial, que **debía presentarse en la ciudad de Temuco**. Ante tal requerimiento, decidieron con ayuda de **Carlos Cardoen**, amigo de ambos, efectuar averiguaciones preliminares en la Fuerza Aérea de Temuco, donde nadie supo dar ninguna indicación de que hubiese una razón del llamado, **motivo por el cual decidieron junto a Cardoen acompañar a José hasta Temuco**. Relató que llegaron hasta un hotel, que estaba ubicado al ingreso de Temuco, lugar donde a la hora después fueron detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea, los cuales se desplazaban en camiones, siendo llevados en su caso y **Cardoen** a unas dependencias de Carabineros de Chile, mientras que a **José Ortigosa**, presume que fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Aérea, siendo esta la última vez que lo vio con vida. Posteriormente fueron interrogados por funcionarios de Carabineros, quienes al corroborar sus identidades y conocer sus actividades profesionales, fueron trasladados a unas dependencias de la Fuerza Aérea, probablemente "**Base Aérea Maquehue**", **lugar donde firmaron un documento y quedaron en libertad**, aprovecharon la oportunidad de preguntar por la situación de **José Ortigosa**, indicándoles **los uniformados que se encontraba preso**. Suma que al día siguiente de haber recuperado su libertad, decidieron con **Carlos Cardoen** regresar a Santiago, enterándose dos a tres días después y por intermedio de la familia de **José Ortigosa**, **que éste había muerto por herida a balas**.

En declaración judicial de fecha 02 de julio del 2012, rolante a fs. 529 a 530 de (Tomo II), ratificó íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 288 a 289. Anexa a sus dichos que en todo momento aconsejó a **José Ortigosa** que no fuera a Temuco, pero este insistió en el viaje por lo que decidió acompañarlo junto a **Carlos Cardoen**. A la pregunta, contó que **la viuda de José Ortigosa le entregó el chaleco que él vestía cuando fue ejecutado. Ese chaleco él se lo había prestado poco antes de ser detenido. Esta prenda estaba llena de agujeros que claramente eran de balas**.

A.53 CARLOS REMIGIO CARDOEN CORNEJO.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de noviembre de 2012, rolante de fs. 421 a 423 (Tomo II), funda que fue amigo de la víctima de los hechos investigados de nombre **José Ortigosa Ansoleaga**, a quien conoció a finales de la década de los sesenta. Indicó que **José** se dedicaba al comercio en la ciudad de Santiago y a la agricultura en un terreno que tenía en las cercanías de la ciudad de Villarrica, recordando también que era piloto de vehículos de competición, desempeñándose para estos efectos en el sector de las Vizcachas,

Santiago. Respecto a la militancia política de **José**, ignora si la tuvo, **pero tiene muy claro que era amigo personal del Presidente Salvador Allende Gossens, por lo tanto, cree que era simpatizante de los partidos de Izquierda**. Sobre las circunstancias que rodearon la detención de **José**, utiliza en primer lugar que éste estuvo detenido en el Estadio Nacional, lugar donde fue sacado por un familiar de su esposa que era Oficial de Ejército, para posteriormente asilarse en la Embajada de Ecuador, lugar desde donde se comunicó telefónicamente con él, para informarle que estaba siendo requerido por las autoridades militares de Temuco, porque lo estaban acusando de tener una escuela de guerrillas en esa región, por este motivo le solicitó que interviniera por él; en su calidad de Oficial de Reserva de la Fuerza Aérea. Por este motivo, el declarante **contactó General de la Fuerza Aérea José Berdichevsky, a quien le expresó lo solicitado por Pepe, quien le dijo en esa oportunidad que lo acompañara a Temuco**, junto con un salvoconducto emitido por él. Por otra parte, **contactó a Claudio Picasso Quinto, quien era amigo tanto de José como de su persona y quien además también era Oficial de Reserva de la Fuerza Aérea. El objeto de su llamado fue para darle a conocer la situación en que se encontraba Pepe y lo que le había dicho el General antes mencionado**. Una vez recibido el salvoconducto, contactó a **José** y le informó los pasos a seguir, según su recuerdo **Pepe**, le dijo que ponía a disposición su auto modelo Cámaro y que los acompañaría su amigo personal **Pedro Pablo Errázuriz**. No recuerda la fecha exacta en que salieron desde Santiago, probablemente después del día 11 de septiembre u octubre de 1973, **salieron de mañana llegando a Temuco, cerca de las 16:00 horas de ese día contactó nuevamente a Claudio Picasso, informándole que habían llegado y que tenían la intención de dirigirse a la Base Aérea, pero Claudio le manifestó que era preferible que se alojaran en un hotel y que se presentaran en la Base Aérea al día siguiente**. Debido a esta situación, se instalaron en un hotel ubicado en la carretera, el hecho es que **cerca de las 19:00 horas fueron allanados por personal de Carabineros, quienes hicieron un ingreso muy violento al lugar donde se encontraban. Según su recuerdo, uno de los Carabineros preguntaba muy aireadamente, por Ortigosa, a lo cual Pepe levantó su mano siendo detenido inmediatamente, incluso a ellos también los detuvieron**. Posteriormente fueron llevados a la Comisaria de Carabineros de Temuco, donde no tiene muy claro si fue en ese lugar donde les señaló que era Oficial de la Fuerza Aérea y donde también le arrebataron el salvoconducto que portaba. Posteriormente, fueron separados y llevados a distintos calabozos, en determinado momento solicitó conversar con el Oficial a cargo, pero no le fue permitida tal situación. **A eso de las diez de la noche, les**

piden que salgan del calabozo y un Oficial de Carabineros le ordenó a un Carabinero que los subieran a una camioneta y le ordenó a éste que sacara su armamento y que los matara en caso de cualquier movimiento. Hace presente que fueron llevados hasta la Base Aérea "Maquehue", donde fueron recibidos por un funcionario Militar muy hostil, quien les propinó un par de culatazos y vendó su vista al ingreso. Según recuerda, se llevaron a Pepe, probablemente a una sesión de interrogatorios y luego a Pedro Pablo y finalmente al declarante. Posteriormente, lo trasladaron a una dependencia que a su parecer correspondía a una enfermería por el olor a alcohol y yodo, en dicho tugar aun vendado lo sentaron en una silla y fui interrogado por una persona cuya identidad ignora, contándole a éste señor los motivos por los cuales andaban en la zona refiriéndose al requerimiento de José. Una vez finalizado el interrogatorio, esta persona le pidió que se sacara la venda y pudo ver frente a sí una persona de civil, de bigote, pelo negro, dé tez blanca, cuya identidad nunca supo, quien le pidió excusas por el trato que habían recibido, señalándole qué se encontraban en tiempo de guerra y que había que tomar precauciones, justificando el procedimiento hacia ellos. Posteriormente, se reunió con Pedro Pablo en una dependencia de la Base y fueron trasladados al hotel, esto cerca de la 06:00 horas, donde procedieron a ducharse y guardar su ropa, dirigiéndose minutos después nuevamente a la Base para ver que iba a suceder con Ortigosa. Al llegar a la base se informó que éste había sido trasladado al Regimiento "Tucapel". Por lo antes señalado, se dirigieron al mencionado Regimiento, donde se presentaron en la guardia, lugar donde preguntaron por José Ortigosa, recordando que en esos momentos logró visualizar a Pepe, en el interior de la guardia logrando manifestarle que iba a ser juzgado en ese lugar y que se encontraba bien, también recuerda que le pidió que fuera al mercado y le comprara unas frazadas, ya que había pasado mucho frío, indicándoles también que contactaran a su señora para que ella junto a un abogado se vinieran a Temuco. Según su recuerdo, fueron a comprar las frazadas, pero no tiene claro si se las entregó personalmente o las dejó en la guardia. Posteriormente, junto a Pedro Pablo emprendieron rumbo a Santiago, recordando que en determinada parte del trayecto escucharon por la radio que el "Extremista José Ortigosa, quien se encontraba detenido al interior del Regimiento Tucapel por intentar fugarse, había sido abatido por personal Militar", esto lo escuchó cerca de las 16:00 horas. Esta situación los tomó por sorpresa e hicieron un par de llamados telefónicos a Santiago. Al llegar a Santiago, fue a casa de José, dónde tomó contacto con Carmen, su esposa, quién ya estaba en conocimiento de la muerte de su marido. Al día

siguiente Carmen le informó que el cuerpo de Pepe no iba ser entregado por las autoridades Militares, por este motivo contactó a Juan Torres Gundian, quien era Oficial de Ejército y su amigo personal, quien intercedió contactando a las autoridades en Temuco para que enviaran el cuerpo de José a Santiago. Después de dos días la familia de José recibió su cuerpo y él declarante asistió a sus funerales en el Cementerio General.

En declaración judicial de fecha 18 de diciembre de 2012, rolante de fs. 436 a 437 (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 421 a 423. Justifica que conoció a José Ortigosa a fines de 1969 o principios de 1970, estableciendo una buena amistad al punto que conocía a su esposa y a sus hijos. Se enteró a través de Carmen Uriarte de la detención de José Ortigosa en el Estadio de Chile. No tuvo oportunidad de conversar con ningún Oficial del Regimiento Tucapel de Temuco o de la Base Aérea Maquehue, salvo el que lo interrogó en ese lugar. Tiene el vago recuerdo de haber visto la chaqueta que en esa oportunidad vestía José Ortigosa, la que presentaba muestras de haber recibido impactos de bala de distinto calibre por la espalda. Esta prenda se la enseñó algún familiar de Ortigosa.

B. Documentos (19)

B.1 Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Daniel Benjamín Mateluna de fs. 10 a 21 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 1 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 42, 117 184, 187, 193 (Tomo I) y 461 (Tomo II), contiene Certificado de Defunción de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez, de la circunscripción de Temuco, quien falleció con fecha 02 de octubre de 1973, inscripción N°652, a causa estallido cráneo encefálico, traumatismo cráneo encefálico resultado de heridas por arma de fuego de guerra.
- b) A fs. 2 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 115, 187 y 190 (Tomo I), contiene Acta de Defunción de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez, que reitera los datos precedentes, añadiendo que el fallecido se encontraba casado con María Isabel Lillo Flores.
- c) A fs. 3 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 43, 116 y 192 (Tomo I), contiene Certificado Médico de Defunción Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez, en el que consta que falleció con fecha 02 de octubre de 1973, que en lo pertinente establece causa de muerte por estallido cráneo

encefálico, traumatismo craneo encefálico y heridas por arma de fuego de guerra, por autopsia realizada a la víctima. *Documento firmado por el Dr. Wolfgang Reuter.*

- d) **De fs. 4 a 5 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra de fs. 476 a 477 (Tomo II), **contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación**, en el que consta que **Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez**, de 53 años, casado, era Consejero de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Temuco. Fue detenido y trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco. Con fecha 2 de octubre de 1973 fue ejecutado en las dependencias de este recinto militar por agentes del Estado.
- e) **A fs. 6 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 46, 119, 171, 195 y 223 (Tomo I), **contiene copias de recorte de prensa que se titula “Once bajas en Cautín”**, noticia de fecha 21 de octubre de 1973, que relata lo siguiente: hasta el momento se han registrado 11 bajas en Cautín, correspondientes a individuos que pretendieron escapar de los Cuarteles, donde se los mantenía prisioneros o agredir a los Centinelas que los custodiaban, de acuerdo a los Bandos oficiales. Seis de ellos fueron dados de baja por efectivos del Ejército: Diego Durán, Daniel **Mateluna Gómez**, **José Ortigosa Ansoleaga**, **Pedro Ríos Castillo** y **Guido Troncoso Pérez**. el sexto corresponde a un desconocido que no portaba documentos y que fuera abatido durante las horas de toque de queda al no obedecer la voz de alto. Otros dos fueron dados de baja por Centinelas del grupo N°3 de helicóptero: **Hernán Henríquez** y **Alejandro Flores**. El resto, por patrullas de Carabineros: **Guillermo Hernández Elgueta**, ex Subdelegado de Cunco, **Leomedes Monroy Seguel** y **Hernaldo Aguilera Salas**.
- f) **A fs. 7 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 45, 118, 120, 170, 194, 196, 222(Tomo I) y 1.820 (Tomo V), **contiene copias de recorte de prensa que se titula “En Regimiento de Temuco, muertos dos Marxistas Por Intento de Fuga”**, que relata lo siguiente: dos personas que estaban detenidas en el interior del Regimiento Tucapel de Temuco fueron dadas de baja por las guardias internas, al intentar escapar del recinto. Estas personas fueron identificadas como **“Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga”**, de quienes no fueron proporcionados mayores antecedentes. El intento de fuga, según el Bando dado a conocer por la Comandancia de la Guarnición Militar de Temuco, ocurrió en la noche del día 02 de octubre.

Detallado en el apartado B.1 de Documentos.

B.2 Fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 189/73, emitido por la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de fs. 31 a 35 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 115 a 153 (Tomo I), **Protocolo de Autopsia Médico Legal de Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez**, de fecha 03 de octubre de 1973, en el que consta su fallecimiento con fecha 02 de octubre de 1973, y concluye que: **a)** La causa precisa y necesaria de muerte del N.N identificado como Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez fue un estallido craneo-encefálico ocurrido por disparo de bala. **b)** En la necropsia practicada, pudo localizarse dos orificios de entrada de bala, uno en la región lumbar izquierda y otro en la región escapular izquierda, estableciéndose dos orificios de salida en el flanco derecho por desintegración del proyectil, del cual se ubicó solo fragmento. El proyectil escapular izquierdo tuvo su laida en la base de la nuca. **c)** Por su localización es prácticamente seguro que hubo un tercer disparo, que impacto en la región occipital derecha, ocasionando un estallido del cráneo y la desintegración del proyectil, del cual se localizó cuatro fragmentos intracerebrales. Este disparo, no hizo orificio de salida y su trayecto fue de tras hacia adelante, de abajo hacia arriba y ligeramente de derecha a izquierda. **d)** Todos los disparos corresponden a impactos a distancia y de diferentes ángulos, por lo cual se estima que fueron hechos por diferentes armas pero de igual calibre. **e)** La lesión encefálica debió ocasionar una muerte instantánea. **f)** Los Proyectiles corresponden a gran calibre de armas de guerra. La herida lumbar determinó secciones múltiples del intestino delgado y perforaciones del intestino grueso; sección de la aorta abdominal y estallido del hígado, por lo cual también debe estimarse como rápidamente mortal. *Documento firmado por el DR. Wolfgang Reuter.*
Detallado en el apartado B.2 de Documentos.

B.3 Antecedentes proporcionados por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 42 a 55 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 142 a 174 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente forma:

- a) De fs. 48 a 50 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 57 a 60 y de fs. 172 a 174 (Tomo I), **contiene Oficio N°1095/91 del Servicio Médico Legal de Temuco, de fecha 25 de septiembre de 1991,** en el cual se indica que existen otras autopsias donde la causa de muerte haya sido consecuencia de las razones señaladas en los protocolos remitidos mediante Oficio N° 1026/91, incluyendo nómina de diversas personas, entre ellas: de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez:** de 53 años de edad, Protocolo de Autopsia N°189/73 de fecha 03/10/1973, cuya causa de muerte corresponde a estallido

cráneo encefálico, heridas de arma de fuego de guerra; y de **José María Artigosa Ansoleaga**: de 42 años de edad, Protocolo de Autopsia N°190/73 de fecha 04/10/1973, cuya causa de muerte corresponde a atrición cráneo encefálica por heridas de bala de patrulla Militar. *Firma Dra. Barrientos Orloff.*

- b) A fs. 159 a 161 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra de fs. 177 a 197 (Tomo I) y de fs. 371 a 373 (Tomo II), **contiene Protocolo de Autopsia de José María Ortigosa Ansoleaga N°190/73 de fecha 05 de octubre de 1973**, en el que consta que falleció con fecha 02 de octubre de 1973 y concluye que:
- a)** La causa precisa y necesaria de muerte del N.N identificado como José María Ortigosa Ansoleaga fue una atrición cráneo-encefálico determinada por acción de arma de fuego. **b)** El registro de autopsia ha podido demostrar el impacto de cinco proyectiles con las siguientes características: **b.i)** Orificio de entrada preauricular izquierdo, correspondiente a un disparo a distancia con salida en la región occipital, que determinó el estallido del cráneo y masa encefálica y es el causante directo de esta muerte. **B.ii)** Impacto de una bala en el lado derecho del labio superior, que corresponde probablemente a un disparo de cerca y que ocasionó una destrucción de los incisivos superiores, ubicándose el proyectil en la parte posterior de la cavidad bucal con deformidad de su base. **B.iii)** Orificio de entrada de proyectil en la región escapular izquierda, que corresponde a un disparo de cerca y es transfixiante torácica, correspondiendo a su orificio de salida al extremo postero-superiores del brazo derecho. **B. iv)** Dos orificios de entrada de proyectiles en el tercio medio posterior del hemiterax derecho de orientación paralela oblicua dirigido hacia arriba, adelante y a la izquierda. Este proyectil ha atravesado y destruido ampliamente la columna vertebral dorsal, penetraron en la parte torácica izquierda a nivel del vértice y segundo espacio intercostal izquierdo, ocasionando la fractura de la clavícula. Uno de los proyectiles escapó por la región supraclavicular. No puede ser ubicado el otro proyectil, pese al registro de la región especular izquierda, pudiendo haberse desviado terminalmente de su trayecto sin dejar huella visible. **c)** De las lesiones señaladas, se logró aislar dos proyectiles de plomo con cubierta de bronce, de forma cónica, que por sus características corresponde al calibre y tipo de balas de guerra utilizadas por el Ejército. **d)** Atendida la naturaleza y extensión de las lesiones craneanas, la muerte debió producirse en forma instantánea. **e)** La necropsia demostró además la existencia de una hipertrofia cardiaca global de predominio ventricular izquierdo, atribuible a un estado de hipertensión arterial, que el occiso debió padecer en vida. Hay cicatrices planas blanquecinas en la mano y

muslo derechos, probablemente secundarias a quemaduras. *Documento firmado por el DR. Wolfgang Reuter.*

Detallado en el apartado B.3 de Documentos.

B.4 Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, de fs. 101 a 112 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 74 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra a fs. 162, 165, 217 (Tomo I) y 478 (Tomo II), contiene **Certificado de Defunción de José María Ortigosa Ansoleaga**, Circunscripción de Temuco, Inscripción N° 648, quien falleció con fecha 02 de octubre de 1973 en la Guardia del Cuartel Militar, cuya causa de muerte fue causal Atrición cráneo encefálica, traumatismo cráneo encefálico por heridas de bala por patrulla militar.
- b) **De fs. 75 a 76 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 476 a 477 (Tomo II), contiene **Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación**, en el que consta que **José María Ortigosa Ansoleaga** de 42 años de edad, casado con dos hijas, era comerciante y agricultor, son militancia política conocida. Al ser requerido por la Fiscalía Militar de Temuco se presentó a las autoridades, siendo detenido y llevado a la cárcel y desde allí al Regimiento Tucapel. Y fue ejecutado el 02 de octubre de 1973 por agentes del Estado.
- c) **De fs. 77 a 80 (Tomo I),** contiene **Informe Individual del Caso para la Comisión respecto de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, que reúne los datos antecedentes de la víctima.
- d) **De fs. 81 a 84 (Tomo I),** contiene **Informe Individual del Caso para la Comisión respecto de José María Ortigosa Ansoleaga**, que reúne los datos antecedentes de la víctima.

Detallado en el apartado B.4 de Documentos.

B.5 Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de fs. 114 a 140 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 189 a 251 (Tomo I), en virtud del cual se adjunta toda la información que posee de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, lo que se desglosa de la siguiente forma:

- a) **A fs. 166 (Tomo I),** contiene **Certificado Médico de Defunción de José María Ortigosa Ansoleaga**, en el que consta que la víctima tenía 42 años de edad, falleció con fecha 02 de octubre de 1973 en la guardia del Cuartel Militar, cuya causa inmediata de muerte fue la Atrición Cráneo-encefálica, debido a

heridas de bala por patrulla militar. *Documento firmado por el Dr. Olfgang Reuter Berger.*

- b) **A fs. 169 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 218 a 220(Tomo I), **contiene Acta de Defunción de José María Ortigosa Ansoleaga**, que reitera los datos precedentes.

Detallado en el apartado B.5 de Documentos.

B.6 ORD. N°1370 de fecha 20 de abril de 2012, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de fs. 183 a 188 (Tomo I), en virtud del cual remite:

- a) **A fs. 185 (Tomo I)**, contiene **Extracto de Filiación y Antecedentes de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, en que consta que se encuentra fallecido y no registra condenas.
- b) **A fs. 186 (Tomo I)**, contiene **Certificado de Nacimiento de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, Circunscripción de San Pedro de Atacama, N° de Inscripción N°473, quien nació con fecha 16 de enero de 1920, registrando como padre Leonidas Mateluna y como madre es Pabla De las Mercedes Gómez.

Detallado en el apartado B.6 de Documentos.

B.7 ORD. N°1937 de fecha 29 de agosto de 2012, remitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de fs. 273 a 275 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 404 a 406 (Tomo II); **en virtud del cual remite los antecedentes familiares de las víctimas de autos**, que se desglosa de la siguiente forma:

- a) **A fs. 274 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 405 (Tomo II), **contiene antecedentes Familiares de José María Ortigosa Ansoleaga**, quien nació con fecha 20 de agosto de 1931 y falleció en Temuco el 02 de octubre de 1973. Contrajo Matrimonio con Carmen Graciela Uriarte Oyanguren en 1958, quien se encuentra fallecida desde 2001. Sus hijos son los siguientes: Mary Carmen Ortigosa Uriarte, Patricia Verónica Ortigosa Uriarte, Francisco Antonio Rodríguez Uriarte, Ignacio Rodríguez Uriarte y Miguel Isidro Rodríguez Uriarte. Sus padres fueron José María Ortigosa Cillero, (fallecido en 1983) y Teresa Ansoleaga Urrechaga (fallecida en 1986). Sus hermanos son Juan Antonio Ortigosa Ansoleaga, Teresa Ortigosa Ansoleaga, Cecilia Ortigosa Ansoleaga y María Angélica Ortigosa Ansoleaga.
- b) **A fs. 275 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 406 (Tomo II), **contiene antecedentes Familiares de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**,

quien nació con fecha 16 de enero de 1920 y falleció en Temuco el 02 de octubre de 1973. Contrajo Matrimonio con María Isabel Lillo Flores. Sus hijos son los siguientes: Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Juan Carlos Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo y César Patricio Mateluna Lillo. Sus padres fueron Leonidas Mateluna y Pabla De Las Mercedes. Sus hermanos son Aida Filomena Mateluna Gómez, Hilda Del Carmen Mateluna Gómez, Gregorio Mateluna Gómez, Jacinto Mateluna Gómez y Santiago Del Carmen Mateluna Gómez.

Detallado en el apartado B.7 de Documentos.

B.8 Copias autorizadas de causa rol 2182-98 de la Corte de Apelaciones de Santiago rolante de fs. 299 (Tomo I) a 384 (Tomo II), lo que se desglosa de la siguiente manera:

- a) A fs. 323 (Tomo I), contiene Oficio N° 160/91 de fecha 20 de febrero de 1991 del Servicio Médico Legal de la IX Región,** en que informa al 2° Juzgado del Crimen de Temuco que el 03-10-73 ingresó a dicho servicio un N.N con Oficio de la Fiscalía de Ejército Cautín, el que posteriormente fue identificado como José María Ortigosa Ansoleaga, de 42 años. El protocolo de autopsia es el N°190/73 del 04-10-73. El cadáver fu retirado del servicio por doña Carmen Uriarte Oyanguren para ser sepultado en *Santiago. Documento firmado por la Dra. Viera Barrientos Orloff.*
- b) De fs. 334 a 344 (Tomo I), contiene Informe de la Brigada de Homicidios de Temuco, de fecha 29 de marzo de 1991,** el que en virtud de una orden de investigar informa los datos de investigación respecto de la víctima José María Ortigosa Ansoleaga en que se señala lo siguiente: la denuncia la efectuó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuya víctima fue visto con vida por última vez en el Regimiento Tucapel de Temuco, reproduciendo los dichos del testigo Víctor Maturana Burgos y Sigisfredo Jara Contreras, concluyendo que mediante las declaraciones antes enunciadas y constancias respectivas se logró acreditar la efectividad de la denuncia.

Detallado en el apartado B.8 de Documentos.

B.9 Informe Pericial Planímetro N°207 de fecha 29 de mayo de 2012, evacuado por Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 958 a 965 (Tomo III), realizado en causa rol 113.089, el cual hace referencia a la fijación Planimétrica de las distintas dependencias del Regimiento de Infantería Tucapel N°8 de Temuco. Documento firmado por *Christian Silva Barra, Perito Dibujante Planimetría.*

Detallado en el apartado B.11 de Documentos.

B.10 Acta de inspección Ocular, rolante de fs. 1.015 a 1.020 (Tomo III), en que el Tribunal se constituye en dependencias del R.I N°8 “Tucapel”, en la que consta que se dirigieron al Pabellón de solteros del Casino de Oficiales, lugar donde el testigo **Raimundo García Covarrubias** identifica el dormitorio donde alojaba, así mismo se dirigen a otro lugar dentro del Casino de Oficiales donde el testigo **Romilio Lavín** indica cuál era su dormitorio. Luego el testigo **Orlando Moreno Vásquez** indica el lugar donde funcionaba la Fiscalía Militar, dirigiéndose todos a la Comandancia del Regimiento, en dicho lugar el testigo manifiesta que ésta Comandancia estaba a cargo del Mayor **Cofré**, pero después funcionaba con el **Sr. Podlech**; a su vez, el testigo **García Covarrubias** señala que habían dos oficinas, en una funcionaban los actuarios y en otra el Fiscal. A continuación, el **Sr. García** indica dónde se ubica la compañía de Plana Mayor, la Compañía de Morteros y la Compañía Cazadores que antes era la Compañía Andina. Luego el **Sr. Lavín** indica dónde el lugar donde se encontraba el gimnasio del Regimiento. El **Sr. Moreno** acotó que llegó gente detenida al Regimiento y ésta era llevada al gimnasio, siendo el Fiscal quien decidía quién iba a la cárcel o quién quedaba en libertad. Los testigos, específicamente el **Sr. Moreno**, indica el lugar donde se encuentran los baños. El Sr. Ministro pregunta a otros testigos, personal de la Policía de Investigaciones en situación de retiro, a fin de que indiquen el lugar donde trabajaban, señalando éstos que fueron destinados al Regimiento para efectos de prestar colaboración al **Sr. Fiscal Podlech**, aduciendo que habían actuarios que eran civiles y que existieron muchos detenidos, los cuales eran asignados a los detectives, aproximadamente 20 detenidos por detective. El testigo **Sr. Hernán Quiroz Barra** afirma que a él le tocó interrogar a muchos de estos detenidos. Por otra parte, el **Sr. Luco**, afirma que él en esos tiempos era chofer, y sólo llegaba hasta la guardia del Regimiento, en ese lugar se le indicaba que trámite debía hacer y él tenía expresa orden de llegar solo hasta la guardia del Regimiento. Mientras que el **Sr. Omar Burgos Dejean** agrega que trabajaba en el archivo, el cual quedaba en la Comandancia, al fondo a la izquierda, cuya oficina no tenía nombre, él daba los salvoconductos, trabajando hasta el viernes, alegando que normalmente tenía un banco de colegio ubicado antes de la Guardia del Regimiento, en el cual trabajaba entregando a la gente los salvoconductos que eran documentos firmados por el Fiscal **Jofré**. A su vez, el testigo **Sr. Raúl Schonherr Frías** indica que trabajó en la Segunda Comandancia después del 11 septiembre de 1973, señalando que en la Segunda Comandancia, en su interior, habían tres dependencias: la oficina del dactilógrafo,

funcionaba en este lugar como también la del Segundo Comandante, y otra dependencia en que habían tres oficinas, allí funcionó el Fiscal **Jofré**, después llegó el **Sr. Podlech**. Posteriormente el Sr. Ministro se reúne con otros testigos, quienes fueron Conscriptos a la época de los hechos. En lo pertinente, el Sr. Ministro, consulta al **Sr. Inostroza** (ya que en su declaración dice que le correspondió entregar detenidos a la 2da. Comandancia), desde donde sacaba a los detenidos y hasta donde los llevaba, trasladándose el testigo junto al Sr. Ministro y las demás personas a una dependencia ubicada al lado de la Guardia, donde el **Sr. Inostroza** indica que esa era una sala de espera, donde se dejaba a los detenidos. La dependencia tiene una sola puerta de entrada y salida, señalando el **Sr. Inostroza** que desde ese lugar se sacaba a los detenidos y los llevaban a la compañía de Plan Mayor, lugar donde los interrogaban en la Quinta Cuadra, había en el interior unos somieres metálicos, a las personas se las dejaba en ese lugar para que las interrogaran, ellos no ingresaba, luego salían del lugar siempre custodiados, señala que a él varias veces le tocó llevar gente que salió bien físicamente, estas personas salieron caminando, sin embargo, en esa sala se sentían ruidos de tortura. Respecto al Sr. **Jorge Luis Godoy Valdebenito**, Soldado Conscripto a la fecha de ocurrencia de los hechos, el Sr. Ministro le solicita que indique el lugar dónde él habría sido torturado, quien se desplaza al lugar donde están las Compañías, indicando que había una pieza grande en la cual tenían una cama, específicamente somier y que el Sgto. **Mario Arias** lo habría acostado y le habría aplicado corriente. El sr. **Godoy** anexa que veía a las personas que llegaban detenidas con venda en los ojos y que se escuchaban ruidos y gritaba gente. Agrega que había un Conscripto de apellido **Etchepare**, el cual mareaba a los detenidos y que en la sala de banda era el lugar donde pasaban los detenidos, los cuales eran golpeados por los mismos Soldados, por orden de los más antiguos. Indica que el Mayor **Jofré** nunca se metía en nada.

Detallado en el apartado B.12 de Documentos.

B.11 Fotografía de Daniel De los Ángeles Mateluna Gómez, rolante a fs. 1.155 (Tomo IV), acompañada al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.156 (Tomo IV).

Detallado en el apartado B.13 de Documentos.

B.12 Copia de Informe Pericial Documental Caligráfico emitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.395 a 1.423 (Tomo IV), que contiene informe pericial documental N° 584, de 25 de abril de 2014, que dice relación con **Causa Rol N° 113.089** del

Primer Juzgado del Crimen de Temuco, el cual concluye que de los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica FISCAL, en orden de “LIBERTAT” N° S/N, de la Fiscalía Militar Curacautín de Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a Carabineros de Chile, Subcomisaría Villarrica, la cual dispone la libertad de Mario Fernando Cortes Bordard y Ubildo Antonio Jiménez Varas, **es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud. Firmado por María Eugenia Sepulveda Larenas, Profesional Gr. 8° Perito Documental.**
Detallado en el apartado B.16 de Documentos.

B.13 Informe reservado del Ejército de Chile Estado Mayor General, de fs. 1.641 a 1.642 (Tomo V), de fecha 19 de abril de 2018, del Jefe Del Estado Mayor General Del Ejército, en virtud del cual se adjuntan carpetas con fotocopias debidamente autenticadas de las Hojas de Vida del periodo 1973/74, Minuta de Servicios u Hojas de Antecedentes Oficiales (HAO) y fotografías correspondientes al personal del Regimiento Tucapel de Temuco, formándose Cuaderno Reservado según resolución de fs. 1.643 (Tomo V). Dichos documentos se refieren a: Pablo Domingo Gran López, Jaime Guillermo García Covarrubias, Pedro Guillermo Manuel Tichahuer Salcedo, Manuel Abraham Vásquez Chahuán, Romilio Lavín Muñoz, Hernán Ramírez Ramírez, Norberto Uribe Moroni, Arnoldo Aedo Matus, Anacleto Aguirre Rivera, Mario Hernán Arias Díaz, Orlando Moreno Vásquez (quien fuera ascendido a Sargento 1° con fecha 03 de septiembre de 1973, tal como consta a fs. 72 vta del Cuaderno Reservado), Benjamín Rodemil Farías Lavín, Juan Labraña Luvecce, Libardo Hernán Schwartenski Rubio (quien fuera contratado con el grado 14 en la Dirección de Inteligencia Nacional en Comisión Extra-institucional con fecha 24 de junio de 1915, tal como consta a fs. 85 del Cuaderno Reservado), Manuel Rafael Campos Ceballos, Juan Humberto Carrillo Rebolledo, Juan Carlos Concha Belmar, Gabriel Alfonso Dittus Marín, Sergio Orlando Vallejos Garcés, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, Raimundo García Cobarrubias (quien pasa al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco en 1972, tal como consta a fs. 100 del Cuaderno Reservado). *Documento firmado por don John Griffiths Spielman, General de División, Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Timbre del Ejército de Chile.*
Detallado en el apartado B.17 de Documentos.

B.14 Informe Pericial Documental N°465, de fecha 31 de marzo de 2017, evacuado por Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de

Investigaciones de Chile, de fs. 1.668 a 1.674 (Tomo V), el cual concluye que según la evaluación de los antecedentes examinados, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto “Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal” en copia de autorización fechada en Temuco el 18 de diciembre de 1973, dirigida al Doctor Wolfgang Reuter B, del Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín-Temuco del Ejército de Chile, **es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud**. *Documento firmado por María Eugenia Sepúlveda Larenas, Profesional Perito Grado 5° de la Policía de Investigaciones.*

Detallado en el apartado B.18 de Documentos.

B.15 Copia autorizada del Acta de Pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973 de fs. 1.680 (Tomo V), traída a la vista según resolución de fs. 1.679, la que indica que: don Alfonso Podlech habría manifestado que había sido designado Fiscal Militar Ad Hoc con motivo del estado de sitio en que se encuentra el país a disposición de la Fiscalía Militar y gran cantidad de detenidos, por lo que el número de actuarios con los que contaba no es suficiente para interrogar con la urgencia del caso a esas personas. Por lo que se presenta ante el Presidente de la Corte, para pedirle su cooperación para que se pusiera a disposición de la Fiscalía a funcionarios que el mismo señor Podlech habría sugerido: Relator de la Corte, don Gastón Macklemburg Vásquez; Secretario en Comisión de Servicio en la Corte, Dorian Novoa Godoy; y los actuarios del Primer Juzgado y del Juzgado de nueva cuantía, señores Adrián Gonzales Maldonado y Héctor Toloza Fierro.

Detallado en el apartado B.19 de Documentos.

B.16 Resoluciones traídas a la vista y ordenas a agregar al proceso según resolución de fs. 1.681 (Tomo V), lo que se desglosa de la siguiente forma:

- a) **De fs. 1.682 a 1.705 (Tomo V)**, contiene copia autorizada de auto acusatorio dictado con fecha 14 de marzo de 2018, traída a la vista de causa rol 113.089, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en el que se acusa entre otros, a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.
- b) **De fs. 1.706 a 1.735 (Tomo V)**, contiene copia autorizada de auto acusatorio dictado con fecha 30 de noviembre de 2016, traída a la vista de causa rol 113.969, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en el que se acusa entre otros, a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.
- c) **De fs. 1.726 a 1.736 (Tomo V)**, contiene copia autorizada de auto de procesamiento dictado con fecha 23 de mayo de 2018, traída a la vista de

causa rol 113.975, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en el que se somete a proceso a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.

- d) **De fs. 1.737 1.788 (Tomo V)**, contiene copia simple de sentencia de fecha 09 de febrero de 2017, dictada por el Ministro señor Alejandro Madrid Croharé, traída a la vista de causa rol 2.182, Episodio Eltit, de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en su aspecto resolutivo, Letra E, declara que se condena entre otras personas, al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.

Detallado en el apartado B.20 de Documentos.

B.17 Copia simple del documento Junta Provincial de Gobierno de Cautín Primera edición, Suplementos Colección de bandos emitidos por el Diario Austral el 18 de noviembre del año 1973, rolante de fs. 1.798 a fs. 1.816 (Tomo V), que a fs. 1.801 en lo que respecta al subtítulo “La Provincia de Cautín”, señala que: “Las personas que a continuación se indican deberán presentarse a la Comandancia del Rgto. “Tucapel”, el sábado 15 de septiembre de 1973, ante de las 15:00 horas”, indicando los nombres de diversas personas, entre ellas Daniel Mateluna. Documentos acompañados al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.797 (Tomo V).

Detallado en el apartado B.21 de Documentos.

B.18 Fotografía de José María Ortigosa Ansoleaga, rolante a fs. 1.888 (Tomo VI), acompañada al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.887 (Tomo IV).

Detallado en el apartado B.22 de Documentos.

B.19 Documentos referidos al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, ordenados a agregar al proceso según medida para mejor resolver de fs. 3.024 (Tomo VIII) que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **De fs. 103 a 111 (Cuaderno Reservado)**, contiene Hojas de Vida del acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, respecto del periodo comprendido entre 1974 a 1981. **A fs. 104 del Cuaderno Reservado y con fecha 24 de julio de 1976**, consta que en cuanto a su preparación profesional se señaló que: “se ha destacado dentro de los finales de la Jurisdicción del IV Juzgado Militar por la idoneidad y eficiencia, evidenciada en la sustanciación de los procesos y el cabal y oportuno cumplimiento de las instrucciones que se han impartido al respecto”. **Mientras que a fs. 109 del Cuaderno Reservado y con fecha 07 de abril de 1981**, consta que en cuanto a su preparación profesional se evidenció que: “En una visita inspectiva efectuada por el Auditor

del IV Juzgado Militar a la Fiscalía Militar de Cautín (Temuco), se pudo constatar que ésta es dirigida en muy buena forma por el Tte. Podlech, en lo referido a la sustanciación de procesos y asesoría legal”.

b) De fs. 3.026 a 3.040 (Tomo VIII), contiene copia de las páginas de periódicos de la época, los que se sub-desglosan de la siguiente forma:

- i. De fs. 3.026 a 3.027 (Tomo VIII), contiene copia del Diario Austral del domingo 01 de julio de 1990, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Confesiones del ex Fiscal Militar”,
- ii. De fs. 3.028 a 3.029 (Tomo VIII), contiene entrevista al acusado de febrero de 1983, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Los desacuerdos del ex Fiscal Militar”.
- iii. De fs. 3.030 a 3.032 (Tomo VIII), contiene entrevista al acusado que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Ex Fiscal Militar de Cautín. “Espero que la Comisión de Verdad y Reconciliación no se transforme en una de venganza y ajuste de cuentas”.

Detallado en el apartado B.29 de Documentos.

10°) Que lo que se ha relatado y ponderado es también confirmado en cuanto época, lugar y actividad realizada esa día por el propio acusado **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, quien en sus declaraciones que antes se han detallado, en especial expresa:

En declaración judicial de fecha 16 de mayo de 1991 rolante de fs. 359 a 363 (Tomo II), acota que tan pronto tuvo lugar el Pronunciamiento Militar, se requirió la presencia de los ex Cadetes y en esa calidad, siendo Abogado, el Comandante **Pablo Iturriaga** le pidió que colaborara con él en distintos aspectos legales. Llegado el 11 de septiembre de 1973, recuerda haberle dicho al Comandante **Iturriaga** que ante la presencia en la unidad de decenas de detenidos y no contándose con el personal suficiente en la Fiscalía Militar para que se atendiera a esas personas, era necesario y urgente solicitar la colaboración del Poder Judicial, para hacer más expedita la labor. Una vez que lo escuchó **el Comandante Iturriaga, lo autorizó para que en su nombre y representación conversara con el Presidente de la Corte de la ciudad de Temuco, don Oscar Carrasco Acuña**, quien con toda gentileza transmitió esta inquietud al Pleno de la Corte y previa consulta a la Corte Suprema, **se autorizó para que diferentes personas pasaran en Comisión de Servicios a la Fiscalía Militar**, que funcionaba en las oficinas de la Segunda Comandancia del Regimiento Tucapel, dentro del mismo edificio. Fue así como se asignaron entre otros a don **Adrián**

González, don **Héctor Toloza**, a la señora **Victoria Gálvez**, al Relator don **Gastón Macklemburg** y al Relator y hoy Ministro **Nibaldo Segura Peña**. Su labor era de nexo entre el Comandante y el señor Fiscal, don **Luis Jofré** del Ejército y el de Carabineros de apellido **Arias**. Ésta labor era ver qué casos haría procedente los Consejo de Guerra, para lo cual se hizo la interconsulta con la Comandancia de la División. Se pidió que viera todo este tipo de problemas y que pidiera la colaboración al Colegio de Abogados, para la defensa de los encausados. Habló al efecto con su colega, don **Guido Sepúlveda**, quien contó con la colaboración de todos los colegas que fueran requeridos para hacer la defensa de los diferentes Consejos de Guerra, que en gran cantidad tuvieron lugar en esta zona. Recuerda que le llamó la atención un día determinado, que no recuerda, **pero tiene que haber sido uno a dos días antes que por Bando se diera a conocer su muerte, cuando en circunstancias en que se encontraba conversando con el Mayor Jofré, se le apersonó el señor Ortigosa, que estaba detenido en el Regimiento**. Con posterioridad al hecho de que se había dado de baja por intentar una fuga, **fue a conversar con el encausado la señora de Ortigosa, de nombre Carmen Uriarte, a quien el Fiscal solo le dio explicación de la existencia del Bando Militar**, por cuanto en tiempo de guerra, el **Bando** equivale a una Ley y no cabe su discusión. Uno de los tantos aspectos que debió ayudar fue en **llevar el libro en forma, debido al máximo de flexibilidad en cuanto al procedimiento**, ya que en vez de las 48 horas para agotar el procedimiento se dieron plazos de meses, para permitir una mejor investigación y defensa en su caso. Posteriormente, con fecha 02 de marzo y ante una petición formal del Comandante de la Guarnición, para que ocupara el cargo de Fiscal Militar, asumió dicha función con el grado de Mayor de Ejército de Servicio de Justicia Militar, el que desempeñó hasta el 02 de enero de 1983, en que renunció voluntariamente. Respecto a la pregunta que se le formula por los detenidos desaparecidos, entre ellos **José Ortigosa**, funda haberlo conocido.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2013 rolante a fs. 539 (Tomo II), ratifica su declaración judicial rolante de fs. 359 a 363.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003 rolante de fs. 576 a 578 (Tomo II), arguye que el día 11 de septiembre de 1973, oportunidad en la ocurrió el Pronunciamiento Militar en nuestro país, se encontraba en la ciudad de Temuco en su calidad de ex Cadete Militar y dada su profesión de Abogado es llamado por el Comandante del Regimiento "Tucapel" Coronel **Pablo Iturriaga Marchesse**, quien le solicita como una forma de reforzar la función de la Fiscalía Militar, asesorando y ayudando a dar una mayor agilidad al tránsito de centenares de personas detenidas que se encontraban en el patio de

la Unidad Militar. Hace presente que estos detenidos provenían de los organismos policiales respectivos y con respectiva documentación (partes). **Recuerda que muchos de ellos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.), los que a la luz de sus ideales buscaban el enfrentamiento con sus opositores, razón por la que significaba un riesgo para la seguridad de la zona.** Ante tal situación que se estaba viviendo en la zona y en general en el país, es que **accedió a la petición del Coronel Iturriaga, por lo que pasó a formar parte de la Fiscalía Militar en calidad de asesor y como organizador de los Consejos de Guerra que se formarían a partir de esa fecha.** Por esta razón **tuvo que hacer coordinaciones con el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco,** con la finalidad de reforzar la cantidad de personal, por lo que **accedió a enviarlo en Comisión de Servicio a la Fiscalía,** dentro de los cuales recuerda a **Adrián González Maldonado, Héctor Toloza Fierro** (fallecido) y **Dorian Novoa Godoy.** En dicha Fiscalía Militar, para la fecha de su ingreso, recuerda que se encontraba como Fiscal Militar el Mayor de Ejército **Luis Jofré Soto** (2° Comandante del Regimiento "Tucapel") y una persona que tenía como actuario, **Leonel Quilodrán** y las causas que se veían antes del 11 de septiembre de 1973 eran en su gran mayoría por la Ley de Reclutamiento. Su función fue exclusivamente la conversación con los abogados para que estos acudieran a la defensa de los detenidos, quienes tenían que pasar al Consejo de Guerra, para darles una debida defensa, recordando que tuvo la colaboración del Colegio de Abogados. Respecto al funcionamiento de la Fiscalía Militar, era en el mismo recinto de la Comandancia de esta Unidad Militar, pero no lo tiene muy claro y a raíz de esto es que muchas personas pudieron ver al encartado transitar por dicho recinto. Recuerda además, que una vez que se trató de normalizar la situación de los detenidos y **debido a la gran cantidad de estos, es que fueron enviados a la cárcel de la ciudad, por lo que creó un Libro de Ingreso y Egreso de Detenidos,** conforme se hacía de manera común en los Tribunales del Crimen. Narra que su función de Asesor de la Fiscalía duro **hasta el mes de marzo de 1974, asumiendo a partir de esa fecha como Fiscal Militar de la ciudad de Temuco,** dependiendo para los efectos legales de la IV Juzgado Militar de Valdivia, cargo que ocupó hasta el mes de febrero de 1983. Justifica que algunos Consejos de Guerra estaban presidido por don **Mario Olate Melo,** e integrado por el **Coronel Hernán Mardones Díaz, Eduardo Soto Parada, Benjamín Fernández Hernández, Luis Puebla Leiva, Jaime Rowe Del Rio, Jorge Verdugo Álvarez y Jaime García Covarrubias,** lo que aparece consignado en la Resolución N°1449-73, siendo todas estas personas funcionarios de la Fuerzas Armadas. Con respecto a la consulta, barbulla que mientras fue Cadete de la

Escuela Militar el año 1951 aproximadamente, recuerda que el Comandante de su Compañía era el entonces Capitán **Sergio Arellano Stark**, debiendo agregar que una vez que se retiró de la Escuela Militar no volvió a ver a este Oficial sino hasta después de producido el Pronunciamiento Militar, no pudiendo precisar fecha; en que en dependencias de la Comandancia del Regimiento Tucapel se pudo percatar de su presencia, acercándose a saludarlo y **en esa oportunidad comentó informalmente que en materia penal operaba la irretroactividad**. Palabras que le llamaron la atención, ya que provenían de un Militar, aclarando que no se podía procesar ninguna persona por hechos anteriores. Con respecto a los nombres que se le mencionan, entre ellos **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, soflama que solamente conoce a **Ortigosa**. Recuerda que mientras se desempeñó en la Fiscalía Militar, **un familiar de éste consultó por él**.

En diligencia de careo entre Daniel Aguirre Mora y Óscar Alfonso Podlech Michaud de fecha 13 de agosto de 2013 rolante a fs. 1.129 (Tomo IV), sustenta que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es don **Daniel Aguirre Mora**. siendo son absolutamente falsos los dichos de éste señor. Nunca el exculpado estuvo en la Prefectura de Investigaciones para requerir información de tipo político, **asevera que, de haber ido, sólo lo hizo para requerir información de algún detenido**.

En declaración judicial con de fecha 23 de abril de 2018 rolante de fs. 1.639 a 1.640 (Tomo V), apuna que a los Oficiales se les enseñaba a redactar **Bandos, Iturriaga Marchesse** y **Hernán Ramírez** tenían injerencia en la redacción de los **Bandos**. Respecto del Sr. **Ortigosa**, si lo conocía y ya declaró, en relación a **Mateluna**, no lo conocía. Ratifica su declaración extrajudicial prestada ante Oficiales del Departamento V de "Asuntos Internos", y rolante de fs. 480 a 482 de autos. Por último, **le resulta extraño que los hechos de las víctimas hayan ocurrido coetáneamente con los del sr. Ortigosa, porque es raro que se ejecutara a cuatro personas por intento de fuga**.

11°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados (testigos directos, indirectos, documentos, peritajes antes señalados) como además se indica en el auto acusatorio de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI) de 15 de marzo de 2019, es posible ponderar que efectivamente el acusado **ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, abogado de Temuco y Teniente de Reserva del Ejército de Chile fue llamado por el Comandante del Regimiento "Tucapel", Coronel **Pablo Iturriaga Marchesse** a colaborar con el nuevo Régimen inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973,

para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del Segundo Comandante, Mayor **Luis Jofré Soto**. En aquel lugar y ante el alto número de detenidos y de personas llamadas a prestar declaración a la Fiscalía Militar, **actuando como Fiscal Ad - Hoc hizo una presentación al Pleno del Tribunal de Alzada**, autorizándose para que diferentes personas pasaran en Comisión de Servicios a la Fiscalía Militar, (tal como consta en el Acta de Pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973 de fs. 1.680, Tomo V). Por lo que desde el 11 de septiembre de 1973 actuaba como Abogado Asesor y Fiscal Militar Ad-Hoc del Regimiento Tucapel de Temuco, interrogando a los detenidos y decidiendo el destino de las personas privadas de libertad, teniendo en esa fecha las facultades decisorias y de orden al interior de las dependencias del mencionado Regimiento. Así lo señalan: **HECTOR ULISES GONZALEZ CASTRO** en su declaración judicial de fs. 397 a 400; **ELIAS AMAR AMAR** en su declaración extrajudicial de fs. 61 a 62 (Tomo I); **VICTOR HERNAN MATURANA BURGOS** en su declaración extrajudicial de fs. 561 a 563 (Tomo II), extrajudicial de fs. 620 a 621 (Tomo II), judicial de fs. 1.117 a 1.118 de autos (Tomo IV); **SIGIFREDO JARA CONTRERAS** en su declaración judicial de fs. 328 a 329 (Tomo I), extrajudicial de fs. 565 a 566 (Tomo II); **LUIS ARMANDO JOFRÉ SOTO** en su declaración judicial de fs. 368 a 370 (Tomo II); **AQUILES ALFONSO POBLETE MÜLLER** en su declaración extrajudicial de fs. 424 a 425 (Tomo II), judicial de fs. 615 a 617 (Tomo II), judicial de fs. 997 a 998 (Tomo III), judicial de fs. 1.098 (Tomo IV); **HERNÁN RAÚL QUIROZ BARRA** en su declaración extrajudicial de fs. 986 a 988 (Tomo III), judicial de fs. 1.064 a 1.065 (Tomo IV), judicial de fs. 1.070 a 1.075 (Tomo IV), careo de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV); **ORLANDO MORENO VÁSQUEZ** en su declaración extrajudicial de fs. 428 a 429 (Tomo II), extrajudicial de fs. 571 a 573 (Tomo II), declaración extrajudicial de fs. 1.445 a 1.446 (Tomo V); **HERMÁN CARRASCO PAUL** en su declaración judicial de fs. 593 a 597 de autos (Tomo II), declaración judicial de fs. 609 a 612 (Tomo II), declaración extrajudicial de fs. 618 a 619 (Tomo II); **CARLOS LUCO ASTROZA** en su declaración extrajudicial de fs. 881 a 882 (Tomo III), judicial de fs. 1.297 a 1.299 (Tomo IV), judicial de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV); **EDISÓN CHIHUAILAF ARRIAGADA** en su declaración judicial de fs. 950 a 953 (Tomo III); **ERASMO RICARDO VILLANUEVA SIMÓN** en su declaración judicial de fs. 968 a 971 (Tomo III); **FRANCISCO JERÓNIMO MATTA ITURRA** en su declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante a fojas 1.000 a 1.001 (Tomo III); **DANIEL ARNOLDO AGUIRRE MORA** en su declaración judicial de fs. 1.005 a 1.008 (Tomo III), careo de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV); **JOSÉ HERIBERTO MANSILLA GATICA** en su declaración judicial de

fs. 1.011 a 1.013 (Tomo III), judicial de fs. 1.137 (Tomo IV), judicial de fs. 1.138 (Tomo IV), careo de fs. 1.139 a 1.140 (Tomo IV), judicial de fs. 1.568 a 1.570 (Tomo V); **PEDRO MISAEEL ELGUETA MUÑOZ** en su declaración extrajudicial de fs. 1.044 a 1.046 (Tomo III), judicial de fs. 1.048 a 1.050 (Tomo III); **HERNÁN ALEJANDRO MORALES GÓMEZ** en su declaración judicial de fs. 1.082 a 1.085 (Tomo IV), judicial de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV); **BERNARDITA DEL CARMEN WEISSER SOTO** en su declaración judicial de fs. 1.113 a 1.114 (Tomo IV), careo de fs. 1.121 a 1.123 (Tomo IV), judicial de fs. 1.556 a 1.559 (Tomo V); **RODRIGO MIGUEL ANTONIO HENRÍQUEZ ARAVENA** en su declaración judicial de fs. 1.571 (Tomo V); **JORGE EDMUNDO SEPÚLVEDA CONTRERAS** en su declaración judicial de fs. 1.615 a 1.620 (Tomo V); **CARMEN GRACIELA URIARTE OYANGUREN** en su declaración extrajudicial de fs. 85 a 88 (Tomo I); **FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ URIARTE** en su declaración judicial de fs. 386 a 390 (Tomo II), judicial de fs. 541 (Tomo II), careo de fs. 542 (Tomo II); **MARY CARMEN ORTIGOSA URIARTE** en declaración judicial de fs. 395 a 396 (Tomo II); entre otros. En tal calidad Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud tuvo pleno conocimiento de las actuaciones que se realizaban dentro del Regimiento Tucapel de Temuco, especialmente de lo realizado por el grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, de los cuales se sabía que eran torturados, entre otros métodos, mediante la aplicación de corriente. Estas personas se presentaban al Regimiento por haber sido llamadas mediante un Bando Militar, el cual fue difundido por radios y diarios, siendo en dependencias de la Fiscalía Militar donde se resolvía si quedaban detenidos o se les daba la libertad. No solamente eso, sino que también interrogó a los detenidos. Que en el caso de las víctimas **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga** según el mérito de autos consta que estuvieron en calidad de detenidos dentro del Regimiento de Infantería N°8 "Tucapel". Así lo aseveran entre otros: **ELIAS AMAR AMAR** en declaración extrajudicial de fs. 61 a 62 (Tomo I), extrajudicial de fs. 89 a 91 (Tomo I); **ELCIDES GUBELIN DURAN** en declaración extrajudicial de fs. 63 a 64 (Tomo I), extrajudicial de fs. 70 a 71 (Tomo I), judicial de fs. 73 (Tomo I); **UBILDO ANTONIO JIMÉNEZ VARAS** en su declaración extrajudicial de fs. 284 a 285 (Tomo I); **VICTOR HERNAN MATURANA BURGOS** en su declaración extrajudicial de fs. 231 a 238 (Tomo I), judicial de fs. 311 a 317 (Tomo I), extrajudicial de fs. 345 a 348 (Tomo I), extrajudicial de fs. 561 a 563 (Tomo II), extrajudicial de fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V), judicial de fs. 1.509 a 1.510 (Tomo V); **NELSON RODOLFO THIELEMANN RODRÍGUEZ** en su declaración judicial de fs. 352 a 354 (Tomo I); **VÍCTOR EFRÉN SILVA FIGUEROA** en su declaración de fs. 366 a fs. 367 (Tomo II);

ALFREDO GARCÍA DÍAZ en su declaración judicial de fs. 377 a 379 (Tomo II); **MANUEL JESÚS CONTRERAS SALAZAR** en su declaración extrajudicial de fs. 430 a 431 (Tomo II); **LUIS RAIMUNDO QUEZADA CHANDIA** en su declaración extrajudicial de fs. 1.317 a 1.320 (Tomo IV), judicial de fs. 1.504 a 1.507 (Tomo V); **NELSON LUIS AGUSTÍN SECKEL CATALÁN** en su declaración judicial de fs. 1.649 a 1.652 (Tomo V), judicial de fs. 1.663 a 1.665 (Tomo V).

Como corolario de lo expuesto, a través de los medios de prueba legal que se han detallado, ponderado y relacionados permiten al Tribunal llegar a la convicción que han existido los delitos de **Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados**, que se han tipificado con anterioridad y que en éste ilícito a diferencia de lo que expone el acusado **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD** ha tenido participación en calidad del **autor** en los términos del **artículo 15 N°1 del Código Penal** y calificado en su **carácter de lesa humanidad**, sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

Hasta el momento en esta sentencia se han visto los siguientes considerandos: 1°) y 2°) EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL Y ELEMENTOS PROBATORIOS DEL PROCESO: Declaraciones (60) y Documentos (29); 3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación jurídica de los hechos; 6°) y 7°) Concepto de Lesa Humanidad; 8°) DECLARACIÓN INDAGATORIA DE OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD; 9°), 10°) y 11°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso.-

EN CUANTO A LA DEFENSA

12°) A fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII), con fecha 04 de julio de 2019, el abogado **Víctor Carmine Zúñiga**, en representación de **Oscar Alfonso Podlech Michaud**, en lo principal de su escrito **interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento** (declinatoria de jurisdicción, amnistía y prescripción), las que **fueron rechazadas por este Tribunal** de fs. 2.602 a 2.606 (Tomo VII), con fecha 30 de julio de 2019 (en el caso de la excepción de Declinatoria de Jurisdicción) y de fs. 2.607 a 2.610 (Tomo VII), con fecha 06 de agosto de 2019, (en el caso de las excepciones de Amnistía y Prescripción). En el segundo otrosí y en subsidio de dichas excepciones, **contesta la acusación fiscal y acusaciones particulares y plantea excepciones de fondo**, solicitando la absolución de su defendido por no tener participación ni responsabilidad en los hechos.

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Solicitud de absolución:

- a. Supuesto Fiscal Militar de Facto, Ad Hoc o Fiscal Militar de Hecho.
- b. Imprecisión del auto de procesamiento y una interpretación incorrecta de antecedentes allegados a la causa.
- c. Insuficiencia de un cargo para imputar responsabilidad criminal.
- d. La tipicidad y elementos del delito.

C. Contestación respecto a las Acusaciones Particulares y Adhesión.

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal:

- a. Artículo 11 N° 6 del Código Penal (irreprochable conducta anterior).
- b. Artículo 103 del Código Penal (media prescripción).
- c. Artículo 11 N°9 del Código Penal (colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos).
- d. Atenuantes invocadas como muy calificadas.
- e. En cuanto a las Circunstancias Agravantes de Responsabilidad solicitada por los querellantes.

A. SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN: la defensa acota que no existe prueba de ninguna especie en contra de su representado que lo relacione ni siquiera indirectamente con los delitos materia de esta causa. Los únicos delitos de **Podlech** son el estar vivo y haber colaborado con el Gobierno Militar, y por ello ya ha sido perseguido en Chile y en el Extranjero.

a. SUPUESTO FISCAL MILITAR DE FACTO, AD HOC O FISCAL MILITAR DE HECHO: el Ministro Instructor prescinde del elemento esencial de la responsabilidad penal que es el nexo de causalidad entre la conducta del imputado y el delito que se imputa. Existen premisas o simples supuestos falsos, en que su defendido habría actuado durante el periodo comprendido entre el día 11 de septiembre de 1973 y el 13 Febrero de 1974, como un Fiscal Militar de Hecho, de “facto” o “ad-hoc”, en el Regimiento Tucapel de Temuco. Actuación opuesta a la de Fiscal Militar de Derecho que en forma suficientemente establecida en el proceso cumplió el Oficial Militar Mayor don Luis Jofré Soto. El señor Podlech sostiene reiteradamente que jamás ostentó ni ejerció tal posición de Fiscal Militar de Hecho, estando encuadrado estrictamente dentro del marco de una asesoría legal, la que tuvo como principal finalidad el sujetar los Procedimientos Militares de detención e interrogatorios a las normas más básicas y elementales del debido proceso, precisamente en aras de conceder a las personas detenidas por orden de las

autoridades Militares garantías mínimas de respeto a sus derechos. Asesoría legal compartida con funcionarios judiciales especialmente destinados a dicha función por el Tribunal Pleno de la I. Corte de Apelaciones de Temuco. La defensa se funda en lo descrito en el auto acusatorio, específicamente en las letras a) y b), señalando en primer término que el cargo de Fiscal Militar no es delegable; que está demostrado en autos que las visitas de cárcel se efectuaron a partir de abril de 1974, según consta en el Libro correspondiente, cuando su representado había sido designado Fiscal Militar Letrado y mucho tiempo después de ocurridos los delitos materia de acusación; y en tercer término, las atenciones a las personas que indica, corresponden a funciones propias de un Asesor.

b. IMPRECISIÓN DEL AUTO DE PROCESAMIENTO Y UNA INTERPRETACIÓN INCORRECTA DE ANTECEDENTES ALLEGADOS A LA CAUSA:

Tanto la acusación fiscal como las acusaciones particulares, son una mera reproducción de lo expresado en el auto de procesamiento, sin que ni en el primero ni en estas se indique en modo alguno como pudo el acusado Podlech apremiar y o matar a las víctimas Ortigosa y Mateluna o qué relación pudo tener con dichos delitos. Su parte no apeló en su oportunidad del auto de procesamiento, optando por la vía del Recurso de Amparo, en que la Excma. Corte Suprema a fs. 1.805 con fecha 25 de Noviembre de 2018 confirmó el auto de reo dictado por mayoría de votos; por lo que la defensa analiza el voto disidente el Ministro Sr. Kunsemuller. Por otra parte se sustenta en las declaraciones de fojas 368 a 370 y 569 a 570 del Fiscal Militar Mayor Luis Jofré Soto y el acta oficial del Tribunal Pleno de la I. Corte de Apelaciones de Temuco que rola a fojas 1.680 a 1.681 de autos, en la cual puede advertirse que el acuerdo de los Ministros fue unánime y que la autorización previa del Presidente de la Excma. Corte Suprema les fue concedida para obrar en el sentido señalado. Durante esa época hasta que fue designado Fiscal Militar en Marzo de 1974, su representado ejercía su profesión de abogado y especialmente estaba a cargo de la defensa de los pequeños y medianos agricultores, por ello el señor Podlech tenía una ardua labor, le era imposible estar permanentemente en el Regimiento, donde se desempeñaba como asesor Ad honorem. Respecto a las víctimas de autos, ambos fueron muertos por patrulla militar según Bando N°8 de la Comandancia de Guarnición de Temuco, de fecha 05 de octubre de 1973, por supuesto intento de fuga del Regimiento Tucapel. En efecto, se sustenta en los dichos el Prefecto (r) de Investigaciones Daniel Antonio Aguirre Mora, en declaración prestada el 01 de Agosto de 2012, de fs. 1.104 a 1.108; doña Carmen Uriarte a fojas 331.

Respecto al señor Mateluna, su representado jamás lo conoció ni supo de su existencia hasta la publicación del Bando N°8 comunicando su ejecución. Al contrario del señor Ortigosa del que supo que estuvo detenido en el Regimiento Tucapel, ignorando su posterior destino fatal a su vez, según documento del Archivo General del Ejército de fecha 22 de Abril de 2009, se deja constancia que el TCR (R) Podlech Michaud no pertenecía al ejército de Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 13 de Marzo de 1974, ya que fue nombrado Mayor de Justicia Militar a contar del 14 de Febrero de 1974. En este sentido, se sustenta en lo relatado por el Actuario don Adrián González Maldonado, de fs. 662 a 665; Gastón Mecklenburg, Relator en aquella época; el funcionario en Comisión de Servicio don Dorian Novoa Godoy; y el ex presidente del Colegio de Abogados de Temuco. Ahora bien, respecto al Considerando F) de la acusación fiscal, respecto a que Podlech en su calidad de Fiscal Ad Hoc y Abogado Asesor de la Fiscalía Militar, no denunció ni informó a la superioridad militar ni a otra autoridad de los ilícitos investigados, resulta sorprendente frente a las disposiciones del Código de Justicia Militar en tiempo de guerra, es ignorar que los Bandos Militares equivalen a una Ley, artículo 77 C.J.M. y no pueden discutirse y menos denunciarse ante la misma Autoridad que lo dictó, sustentándose en los propios dichos del Jefe de guardia de la cárcel pública de Temuco para Octubre de 1973, en su declaración de fojas 328 a 329. Luego la defensa rebate las declaraciones del ex funcionario de Investigaciones, Aquiles Poblete Müller de fs. 615 a 617; del Suboficial José Heriberto Mancilla Gatica de fs. 1.011; así como dos peritajes emitidos por el Laboratorio de Criminalística Central de Investigaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, los que a juicio de la defensa nada tienen que ver con los hechos de la causa.

c. INSUFICIENCIA DE UN CARGO PARA IMPUTAR RESPONSABILIDAD

CRIMINAL: Precisa que la prohibición de presumir la responsabilidad criminal es un Principio la concreción de la dignidad de la persona humana consagrada como valor supremo en el artículo 1° de la Constitución Política, y del derecho a la defensa en el marco de un debido proceso en los términos que reconoce y ampara el artículo 19 N°3 de la Ley Fundamental, citando jurisprudencia al efecto. Que en el caso del Asesor Jurídico, carecía de todo poder jurisdiccional, lo que significa que no puede atribuírsele que formaba parte de una "cadena de mando," en cuyo caso posee el poder efectivo de controlar y sancionar los actos de sus subordinados.

d. LA TIPICIDAD Y ELEMENTOS DEL DELITO: La defensa comienza analizando lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal,

respecto a los requisitos necesarios para que proceda dictar Auto Acusatorio. En este sentido afirma que los hechos que constituyen los delitos investigados en relación a los señores Mateluna y Ortigosa están incompletos, ambiguos y confusos, más aún hay una imprecisión del auto acusatorio respecto del supuesto numeral del artículo 15 del Código Penal. De la sola lectura del Auto Acusatorio, no aparece claro cómo sucedieron los hechos, pero sí que intervinieron personas ajenas a su representado, las que ni siquiera fueron debidamente investigadas, entre otras causas por estar fallecidas, imputados directamente de haber ordenado el homicidio de José María Ortigosa Ansoleaga por el Prefecto (r) de la Policía de Investigaciones Daniel Antonio Aguirre Mora en su declaración de fs. 1.104 a 1.108. Mientras que respecto a Mateluna, no hay mención alguna diferente de la del Bando N°8, dictado por el mismo Coronel Pablo Iturriaga Márchese. A continuación analiza los elementos subjetivos requeridos en los delitos de Homicidio y Apremios Ilegítimos, justificando que en cuanto a la participación, el Auto Acusatorio no señala cual forma de autoría del artículo 15 del Código Penal es la que tiene aplicación en este caso, pero según la defensa se está atribuyendo aparentemente, por su calidad de Asesor, la Autoría del artículo 15 número 2°, o sea, la de ser autor mediano, autoría que recae en el Comandante del Regimiento Tucapel y de la Guarnición de Temuco de aquella época, Pablo Iturriaga Márchese, quien redactó y publicó el Bando, debiendo saber los antecedentes que lo motivaron. El asesor de la Fiscalía Militar no tenía relación alguna con la Comandancia de la Guarnición que tenía sus propios asesores, basta con examinar la declaración de Jaime García Covarrubias de fs. 78 y José Tomás Argomedo García de fs. 604 a 605, que así lo señalan. A su vez, el documento emanado del Estado Mayor del Ejército de fecha 01 de Septiembre de 2006, se informa que Oscar Alfonso Podlech Michaud, fue designado Mayor de Justicia Militar a contar del 14 de Febrero de 1974, lo que desmiente lo dicho por Pedro Elgueta a fojas 1.008. Por otra parte, la defensa inquiere que las letras A), B) y C) del auto acusatorio, corresponden a una transcripción de lo establecido en los Autos de Reo que se han dictado en contra de su representado en casos Polvorín, Henríquez, Troncoso y Ríos. Posteriormente cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, apoyándose además en lo que señala Poblete Müller, el señor Adrián González, el dirigente del MIR Luis Alberto Alarcón Seguel a fs. 825 (1641), los abogados Mario Seguel Cides y Teodoro Ribera Beneit, el certificado de Gendarmería que señala explícitamente que durante el año 1973 no hay ninguna orden de libertad o de ingreso firmada por Alfonso Podlech. Lo anterior, desvirtúa la imputación equívoca mencionada por

Poblete, desmentida por él mismo. A su vez, se justifica en la declaración del señor Dorian Novoa, quien narra su labor en la Fiscalía, citando jurisprudencia internacional al efecto. Agrega que el Asesor no tenía ningún poder de control sobre los uniformados y civiles que cometieron ilícitos. Por consiguiente, alega que en la acusación aparece lo señalado por el Jefe de Guardia de la Cárcel de Temuco, mencionado en el considerando F), a fs. 469, Sigisfredo Jara Contreras lo que ha sido mal interpretado, cuando se refiere a que para evitar injusticias habló con su representado para que "colaborara" a resolver esta situación. En ningún momento señala que "normalizó la situación", como aparece en el Auto Acusatorio. Que la interpretación correcta indica que justamente el actuar corresponde el afán de su representado de que todo funcionara normalmente. Por ello, que cuando fue citado a la Comandancia de la Guarnición por el Comandante Iturriaga y percatarse como funcionaba la Fiscalía Militar no letrada con dos funcionarios no especializados, recabó de la Corte de Apelaciones de Temuco de que se designaran funcionarios calificados de acuerdo al artículo 29 del Código de Justicia Militar de la época. Por ello, en el Pleno que se levantó en la Corte el 17 de Septiembre de 1973 y que rola a fs. 1.716 a 1.717, se indica que comparece como Fiscal Militar Ad Hoc, para la gestión determinada de obtener personal especializado para trabajar en la Fiscalía Militar. Por lo que solo fue designado Militar Ad hoc con el objeto de cumplir con una gestión determinada encomendada por la Jefatura Militar. El Tribunal de primera instancia omite analizar que la muerte de estas personas y las circunstancias en que tuvieron lugar fueron señaladas por un Bando Militar, éste por su esencia no puede discutirse, sino aplicarse lisa y llanamente, que es lo que se hizo, citando doctrina al respecto. La Comandancia de la Guarnición lo dictó y ella tenía los antecedentes que lo ameritaban, en lo cual no tenía injerencia alguna el Asesor. Por consiguiente, se funda en el manifiesto del propio funcionario señor Jara. Atendido lo que significaba el Bando Militar, era imposible denunciar, informar a la Fiscalía Militar, y efectuar investigación a lo informado por el Comandante de la Guarnición y Jefe de la Zona en Estado de Sitio. Ahora bien, se ha hecho hincapié de una orden de libertad de dos personas de fecha 28 de septiembre del año 1973, emitido por la Fiscalía Militar de Temuco según el señor Ministro "firmada por el fiscal Ad- Hoc"; sin embargo, ese informe de fs. 1.486 se contrapone con otro informe practicado por investigaciones de Temuco que no consta en estos autos, que señala claramente que la firma no es de su representado. De esta misma manera respecto al documento de 18 Diciembre de 1973 dirigido al Doctor Reuter en que con el pie de firma de Jofré

aparecería una firma de Alfonso Podlech, la defensa lo impugna, señalando que no tiene nada que ver con estos hechos. Por todo ello, la defensa solicita dictar sentencia absolutoria, por no haber participado en estos hechos.

B. CONTESTACIÓN RESPECTO A LAS ACUSACIONES PARTICULARES Y ADHESIÓN: Respecto a las acusaciones particulares de **Sebastián Saavedra Cea** (en representación de la cónyuge e hijos de la víctima Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez) la defensa alega que ésta no precisa en absoluto como se encuentran materializadas las acciones, en las jamás han tenido lugar por parte de su representado; igualmente no señalan como están acreditadas las agravantes del artículo 12 N°8 y 11; haciendo mención a Doctrina y Jurisprudencia que nada tienen que ver con su representado, ajeno totalmente a estos hechos. En cuanto a la adhesión a la acusación formulada por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa (nieto del señor Ortigosa), también ejerce Acción Civil respecto a su representado que nada tiene que ver con estos hechos. Mientras que respecto a la Acusación Particular de Carolina Contreras Ribera por la Unidad Programa de Derechos Humanos, no aportar nada en especial, señalando el Homicidio Calificado, Apremios y Agravantes no concurren en la especie. A juicio de la defensa, estas acusaciones así como la acusación Judicial deben ser rechazadas, pues su representado es totalmente ajeno a estos hechos y debe dictarse sentencia absolutoria a su respecto, tal como sucedió en Italia.

C. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL: En subsidio de todo lo expuesto y para el eventual caso de que su representado resulte condenado, solicita que se le favorezca con el reconocimiento de las siguientes circunstancias atenuantes:

- a. **Artículo 11 N° 6 del Código Penal (irreprochable conducta anterior)**, que debe ser aplicada como **muy calificada**. Justifica que la conducta anterior y posterior de su representado ha sido incuestionadamente irreprochable, ocupando éste cargos de trascendencia en el Tribunal Calificador de Elecciones de Cautín, Consejero del Colegio de Abogados de Temuco, Docente de las Universidades Autónoma y Mayor y habiéndose distinguido en la Profesión de Abogado.
- b. **Artículo 103 del Código Penal (media prescripción)**, ya que dados los excelentes antecedentes profesionales y personales y el tiempo transcurrido ha superado con creces el plazo que la ley señala para la prescripción de este delito.

- c. **Artículo 11 N°9 del Código Penal (colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos)**, fundado en que su patrocinado ha aportado al Tribunal antecedentes relevantes para el esclarecimiento de los hechos, por lo que la atenuante debiera serle reconocida y concedida, solicitando se haga en carácter de **muy calificada**.
- d. Asimismo, solicita se de aplicación en favor de su patrocinado lo dispuesto en los artículos 67, 68 bis y 103 del Código Penal y se aplique también en su favor lo dispuesto en el artículo 68 inciso 3° del Código Penal, en cuanto a que las atenuantes invocadas sean tenidas como **muy calificadas** y, en virtud de esto, se aplique una **pena inferior en dos a tres grado a la mínima a la señalada a los delitos** por los que se le ha acusado.
- e. **En cuanto a las Circunstancias Agravantes de Responsabilidad solicitada por los querellantes**, esto es, la concurrencia de las circunstancias agravantes del artículo 12 N°8 y 11 del Código Penal, solicita que sean rechazadas. Argumentando que la ocurrencia no se encuentra acreditada en el proceso y los acusadores particulares tampoco aluden a piezas el proceso que supuestamente las acrediten, además su invocación y aceptación trasgrede el "Principio de la Prohibición de Doble Valoración" y "Prohibición del nos bis in ídem".

13°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS.

Previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

- A.** Obligación de Investigar.
- B.** Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.
- C.** Estado de Derecho.

A. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

1. Los estándares normativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación

de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial **una nueva regla que inspire la solución de un caso** que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

2. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

3. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención

Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

4. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

5. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

6. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...) el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de

investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. **Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.** Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo 42 anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explicita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expone que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137 (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la

Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. **233 (...)** Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299 (...)** Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afínca que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117 (...)** Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución,

captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129 (...)** una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130 (...)** Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111 (...)** Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114 (...)** Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes

de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los

operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo **106** indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo **131** manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas

pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo **142** narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo **77** acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad

de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo **283** añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de los Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de los Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura

y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato

estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

7. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en **Eduardo Ferrer Mac-Gregor-** (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

- i. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se

- repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida
- ii. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.
 - iii. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.
 - iv. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.
 - v. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.
 - vi. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.
 - vii. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

- viii.** El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.
- ix.** Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.
- x.** El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.
- xi.** La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.
- xii.** En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.
- xiii.** La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de

efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

xiv. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

Como puede apreciarse, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba, ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado que es lo que se ha realizado en esta sentencia y que la defensa nada expresa. Del estudio de los argumentos de la defensa, **no realiza un cotejo y ponderación de todos los testigos y los documentos, sino que se refieren a aspectos parciales**, lo que se detallará con más precisión seguidamente. En todo caso, **la defensa debe situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los derechos humanos y el delito de lesa humanidad.**

B. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (DELITOS DE LESA HUMANIDAD) PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN.

1. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este

caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) **y Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad, respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

2. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en

el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas**. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

3. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países

ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

4. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que**

trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”

5. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

6. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya

había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

7. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz**. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

8. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de

las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

9. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores

discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

10. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

11. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con

condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

12. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

13. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

14. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera

impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho.** Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

15. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

- i. **Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho.** Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.
- ii. Es decir **se retrocedió de inmediato 200 años**, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, **volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias.** Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. **Artículo 2**, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; **artículo 16**, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.
- iii. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), **no hubo separación de poderes** (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las

personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

iv. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

En este caso, la detención desde el inicio (como indica el mérito del proceso y el Auto Acusatorio de fs. 2.041 a 2.053, Tomo VI), **irregular, ilícita y los posteriores Apremios y Homicidios Calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga fueron al margen de todo derecho.** Ahora bien, el acusado desde el principio del quiebre constitucional colaboró en su calidad de Abogado Asesor de la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel de Temuco, Teniente de Reserva del Ejército de Chile, organizador de los Consejos de Guerra y Fiscal Ad Hoc de la Fiscalía Militar (como puede acreditarse de sus extractos de filiación y antecedentes). En tal calidad Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud desde el 11 de septiembre de 1973 y como han declarado los diferentes testigos y lo acreditado por los diferentes documentos (Fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 189/73, emitido por la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de fs. 31 a 35 (Tomo I); Informe Pericial Planímetro N°207 de fecha 29 de mayo de 2012, evacuado por Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 958 a 965 (Tomo III); Acta de inspección Ocular, rolante de fs. 1.015 a 1.020 (Tomo III); Informe reservado del Ejército de Chile Estado Mayor General, de fs. 1.641 a 1.642 (Tomo V); Informe Pericial Documental N°465, de fecha 31 de marzo de 2017, evacuado por Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1.668 a 1.674 (Tomo V); Copia autorizada del Acta de Pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973 de fs. 1.680 (Tomo V); Copia simple del documento Junta Provincial de Gobierno de Cautín Primera edición, Suplementos Colección de bandos emitidos por el Diario Austral el 18 de noviembre del año 1973, rolante de fs. 1.798 a fs. 1.816 (Tomo V), entre otros) y por la estructura jerarquizada de la institución del Ejército de Chile, tuvo pleno conocimiento de las actuaciones que se realizaban dentro del Regimiento Tucapel de Temuco, especialmente de lo realizado por el grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, de los cuales se sabía que eran torturados, entre otras técnicas, mediante la aplicación de corriente. Estas

personas se presentaban al Regimiento por haber sido llamadas mediante un Bando Militar, el cual fue difundido por radios y diarios, siendo en dependencias de la Fiscalía Militar donde se resolvía si quedaban detenidos o se les daba la libertad. No solamente eso, sino que también interrogó a los detenidos y decidió el destino de las personas privadas de libertad, teniendo en esa fecha facultades decisorias y de orden al interior de las dependencias del mencionado Regimiento. La múltiple prueba, directa e indirecta que se ha detallado y ponderado precedentemente, rebate cualquier argumento de la defensa, que de inicio y sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, son alegaciones de tipo adjetiva, formal, pero los hechos y la realidad de las cosas demuestra que el acusado tenía ese poder de decisión, actuando en la Fiscalía Militar sobre los diferentes detenidos, como es el caso de autos. Luego, se dan todos los elementos del derecho internacional de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad para que el acusado tenga el grado de participación de autor.

C. ESTADO DE DERECHO:

1. **Estado Autoritario:** Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (**Oscar Vilhena Vieira** (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (**Dante Jaime Haro Reyes**: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123).

Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (**Pablo Marshall Barberán** (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

2. Origen: Su idea principal puede rastrearse claramente, a través de la historia del pensamiento de la filosofía política (aunque se concrete con más precisión en la ciencia jurídica alemana siglos después). En todo caso desde Platón, recorriendo a Aristóteles, los sofistas, estoicos, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, toda la doctrina alemana, Bobbio- entre otros- podemos indicar que todos ellos coincidieron en sostener el dominio de la ley frente al ideal despótico, es decir, la supremacía del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres. Concepción mantenida hasta el día de hoy por juristas como Norberto Bobbio. (**Haro**, p.118-123). Como se expresó el término de “Estado de Derecho” empieza a ser utilizado por la ciencia jurídica y política alemana del siglo pasado para designar una relación específica entre la forma política llamada “Estado” y el derecho, relación que va más allá de un gobierno limitado que envuelve su actuación en el ropaje de las normas jurídicas (Haro, p. 118. Mismo sentido Marshall, p.191). Complementado el Estado de Derecho (**Enrique Pérez Luño** (2010): Derechos Humanos Estado de Derecho Constitución. Madrid, Tecnos, p. 219), en sus primeras manifestaciones en la experiencia histórica y doctrinal germana aparece como la búsqueda de un ideal institucional, una realidad espiritual, dirigida a proteger al ciudadano, con su libertad, sus valores, así como con sus derechos innatos y adquiridos frente peligro de eventuales abusos por parte de los detentadores del poder político.

Es decir, el Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (**Luis Villar Borda** (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese

sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (**Haro**, p. 118).

3. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo**: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (**Marshall**, pp. 187-188).

4. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (**Haro**, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (**Haro**, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (**Haro**, p. 126).

5. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del

gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (**Marshall**, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra**: **a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (**Marshall**, p.191). Sobre lo anterior **Villar Borda** (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional. **Sus elementos** son:

- i. **Constitución escrita.** En cuanto permite realizar sus fines y garantizar mejor la seguridad jurídica en relaciones entre Estado e Individuo;
- ii. **Separación de Poderes.** En cuanto Montesquieu nos indicará que hay 3 clases de poderes el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta es la forma para que el poder frene al poder y de esa manera pueda resultar la libertad que no siempre aparece en los Estados sino sólo cuando no se abusa del poder. En sentido clásico es entendido como una moderación, balanceo, mutuo control de los órganos del poder público en la búsqueda de cooperación, dada la complejidad del Estado Moderno y la funciones que se le asignan;
- iii. **Principio de la legalidad.** Este principio de legalidad de la administración significa que no debe tomar ninguna medida que contradiga la ley. De aquí se derivan los principios de la primacía de la ley (órgano elegido popularmente) y la reserva legal (propiedad y libertad solo afectadas con autorización legal);
- iv. **Principio de garantía de los Derechos Fundamentales (DDFF).** En cuanto parte esencial de un orden constitucional es la incorporación de los DDFF, cuya función principal es poner límites al poder del Estado a fin de preservar al individuo frente a la arbitrariedad de las autoridades;
- v. **Seguridad jurídica y protección de la confianza.** Es decir, se busca la seguridad jurídica y la calidad de las normas. La racionalidad y mensurabilidad de las manifestaciones de poder estatal, que junto con la regulación de distribución competencias logren una previsión y pre cálculo de las acciones estatales.
- vi. **Principio de proporcionalidad.** En cuanto una acción administrativa que afecte a un individuo, no sólo debe estar fundada en una ley sino que debe llevarse a cabo de manera que evite al máximo tocar derechos protegidos de los

ciudadanos. Es decir solo es permitida la intervención en la esfera individual en la medida que ello sea necesario para proteger intereses públicos. Debe haber una proporcionalidad entre los medios utilizados y los fines perseguidos. Se resume en la adecuación de medios, la aptitud para lograr el fin propuesto. La necesidad del medio, esto es la certeza que no existe otro medio que logrando el mismo fin afecte menos al individuo y finalmente la proporcionalidad, que la medida no afecte más de lo soportable a la persona o cuya exigencia resulte inadmisibles por irrazonable. Siempre la intervención estatal debe ser medida, justificada y racional.

6. Chile y El Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo.** Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias

extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias-separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (**Marshall**, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (**Vilhena**, p.30).

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden

resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas a un centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión. Las detenciones desde el inicio (como indica el mérito del proceso) irregulares, ilícitas y los posteriores Apremios y Homicidios Calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga fueron al margen de todo derecho. Nos permite reflexionar que el **Regimiento Tucapel de Temuco fue un centro ilegal de detención, tortura, ejecución y secuestro**. En consecuencia, el mando superior y los grupos especiales para detener a personas por motivos políticos, se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia.

ANÁLISIS DE DEFENSA ESPECÍFICA:

14°) Que haciéndonos cargo de la defensa aludida, hay que reflexionar lo siguiente:

- A.** Sobre las Tachas de testigos y objeciones de documentos.
- B.** Análisis de la prueba.
- C.** Claridad de la descripción de los hechos y la conducta del acusado.

A. SOBRE LAS TACHAS DE TESTIGOS Y OBJECIONES DE DOCUMENTOS: Que la defensa, pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma no objetó ningún documento específico. Ello es muy diferente a hacer comentarios generales, lo que no corresponde a una interposición expresa de las tachas.

B. ANÁLISIS DE LA PRUEBA: Si la defensa quiere derribar el auto acusatorio de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI), de fecha 15 de marzo de 2019, debe analizar toda la prueba y no parcialmente la prueba. Porque desde un punto vista lógico y de argumentación no puede derribarse una acusación fiscal analizando además de forma muy general, solo parte de la prueba.

C. CLARIDAD DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LA CONDUCTA DEL ACUSADO: Asimismo de la lectura de la Acusación Fiscal de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI), de fecha 15 de marzo de 2019, **la descripción de los**

hechos y la conducta del acusado aparece suficientemente clara, destacando que se estaba en un Régimen Militar y donde en el Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco en su calidad de Abogado Asesor de la Fiscalía Militar del Regimiento, Teniente de Reserva del Ejército de Chile, organizador de los Consejos de Guerra y Fiscal Militar Ad Hoc, Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud tuvo pleno conocimiento de las actuaciones que se realizaban dentro del Regimiento Tucapel de Temuco, especialmente de lo realizado por el grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, de los cuales se sabía que eran torturados, entre otras técnicas, mediante la aplicación de corriente. Estas personas se presentaban al Regimiento por haber sido llamadas mediante un Bando Militar, el cual fue difundido por radios y diarios, siendo en dependencias de la Fiscalía Militar donde se resolvía si quedaban detenidos o se les daba la libertad. No solamente eso, sino que también interrogó a los detenidos y decidió el destino de las personas privadas de libertad, teniendo en esa fecha facultades decisorias y de orden al interior de las dependencias del mencionado Regimiento. Dichas circunstancias se corroboran entre otras, por las aseveraciones de: DANIEL ARNOLDO AGUIRRE MORA, quien en su declaración judicial de fs. 1.005 a 1.008 (Tomo III), asevera que *“respecto de Alfonso Podlech Michaud, puede señalar que un año antes que ocurriera el Golpe Militar, éste abogado iba al Cuartel de Investigaciones a requerir información de tipo político. Recuerda que se entrevistaba con el Prefecto Leonel Hormazábal y con el detective Quiroz. Sabe que le entregaba esta información a alguien en el Regimiento Tucapel, pero desconoce a quién. Esta información la obtenía desde los archivos que la Inteligencia de Investigaciones tenía y la usaba con el grupo de Patria y Libertad de Temuco, según comentaban los mismos funcionarios. Después del 11 de septiembre de 1973 Podlech siempre se mantuvo muy cercano y activo adentro del Regimiento Tucapel. Dice que incluso en una oportunidad en que el Prefecto lo presentó ante la "Junta Chica" de Temuco, Podlech estaba con ellos”* y en careo de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV), suma que *“en cuanto a Alfonso Podlech, indica que antes del 11 de septiembre de 1973 iba siempre al Cuartel de Investigaciones a buscar información de inteligencia Para esto pasaba al segundo piso de la unidad y en alguna oportunidad lo vio junto al señor Quiroz”*; AQUILES ALFONSO POBLETE MÜLLER, quien en su declaración judicial de fs. 615 a 617 (Tomo II), narra que *“Toda la información se la entregaban a Ubilla y éste, a su vez, le entregaba los antecedentes a la Fiscalía Militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech”*; HERNÁN RAÚL QUIROZ BARRA quien en careo de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV) atina que *“atendió al señor Podlech en el Cuartel de Investigaciones en una oportunidad en que él se*

presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective Ortiz”; ORLANDO MORENO VÁSQUEZ, quien en su declaración extrajudicial de fs. 428 a 429 (Tomo II), evidencia que los *“Bandos generalmente los confeccionaba el Fiscal Militar Podlech”*; HERMÁN CARRASCO PAUL, quien en su declaración judicial de fs. 609 a 612 (Tomo II), colige que *“dos días después de haber sido detenido fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la Fiscalía Militar ubicada al interior del Regimiento, donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez”* y en su declaración extrajudicial de fs. 618 a 619 (Tomo II) puntualiza que el *“abogado Alfonso Podlech Michaud, sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de Mayor, es más fue él quien les insistió en firmar un documento que por supuesto negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del Plan “Z”*”; CARLOS LUCO ASTROZA, quien en su declaración extrajudicial de fs. 881 a 882 (Tomo III), anexa que *“en más de una oportunidad pudo ver a Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar de Tucapel, sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme”*, y en su declaración judicial de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV), suma que *“el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el Regimiento y se entendía con el Capitán Ubilla... era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de Inteligencia que ejercía Ubilla. Adicionando que tanto Podlech como Ubilla estaban constantemente en la Fiscalía Militar”*; FRANCISCO JERÓNIMO MATTA ITURRA, quien en su Declaración judicial de fs. 1.000 a 1.001 (Tomo III), dice que *“a mediados de octubre de 1973 concurrió a conversar con Alfonso Podlech Michaud en compañía del ex diputado Hardy Momberg...Se entrevistaron con él en una oficina ubicada al interior del Regimiento. En esa reunión Podlech se hizo acompañar de los Capitanes Nelson Ubilla y Mario Alvarado”*; PEDRO MISAEL ELGUETA MUÑOZ, quien en su declaración extrajudicial de fs. 1.044 a 1.046 (Tomo III), desarrolla que *“una oportunidad fue designado como Policía Militar, correspondiéndole en el casino desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los Consejos de Guerra, instancias donde el abogado Alfonso Podlech y el Comandante del Regimiento Pablo Iturriaga Marchesse, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento”*; HERNÁN ALEJANDRO MORALES GÓMEZ, quien en su declaración judicial de fs. 1.082 a 1.085 (Tomo IV), escruta que *“conoce a Alfonso Podlech Michaud, quien es abogado de la ciudad de Temuco. Indica que esta*

persona lo llamó por teléfono a poco de haber tomado su cargo de Fiscal Ad-Hoc para pedirle que dejara a todos los detenidos presos, porque eran extremistas...En aquel tiempo, Podlech tenía muy buenas relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel. En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Después del 11 de septiembre de 1973, Podlech acudía frecuentemente al Regimiento, vestido de Militar. Se decía que era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor Jofré sobre temas legales. Desconoce si tuvo participación en interrogatorios de detenidos, pero sí sabe que él organizó la Fiscalía Militar que funcionó al interior del Regimiento. Él fue quien trajo a los actuarios Toloza y González, más un amigo de este abogado, de nombre Dorian Novoa”, lo que reitera en su declaración judicial de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV); BERNARDITA DEL CARMEN WEISSER SOTO, quien en su declaración judicial de fs. 1.113 a 1.114 (Tomo IV), agrega que “mientras se encontraba en la Fiscalía Militar, vio llegar a Conscriptos con libros requisados, uno de los cuales eran poesías de Gabriela Mistral, por lo cual solicitó al Mayor Jofré si podía quedárselo, lo recogió justo en el momento en que aparece el Sr. Alfonso Podlech a la sala. Jofré en un acto que le pareció casi de aprobación hacia Podlech le insinuó que podría darle este libro” y en careo de fs. 1.121 a 1.123 (Tomo IV) cimienta que “Le parece que la relación que tenía el señor Podlech con el resto de los integrantes de la Fiscalía Militar, incluido el Mayor Jofré era de superioridad por cuanto daba la sensación que todos le tomaban el parecer a él para actuar”; RODRIGO MIGUEL ANTONIO HENRÍQUEZ ARAVENA, quien en su declaración judicial de fs. 1.571 (Tomo V) asevera que “Podlech actuaba como Fiscal Militar en propiedad, de hecho vestía Uniforme Militar y daba órdenes en ese lugar”; JORGE EDMUNDO SEPÚLVEDA CONTRERAS, quien en declaración judicial de fs. 1.615 a 1.620 (Tomo V) alega que “Podlech era quien estaba al mando de todo dentro del Regimiento. Tomando decisiones sobre quien vivía y quién no. Era el Fiscal Militar, dentro de la Comandancia tenía una oficina con los del Servicio de Inteligencia Militar. Esta persona se movilizaba por toda la región. Esto le consta al declarante, debido a que él estaba de guardia y veía esta situación. Incluso recuerda que en muchas ocasiones el mayor Jaime García Covarrubias le pasó documentación a Podlech y él decidía respecto a las personas que se indicaban en esos papeles”. Mientras que el mismo acusado señala en su declaración judicial de fs. 359 a 363 (Tomo II), que “el Comandante Pablo Iturriaga le pidió que colaborara con él en distintos aspectos legales”... siendo dicho Comandante quien “lo autorizó para que en su nombre y representación conversara con el Presidente de la Corte de la ciudad de Temuco, don Oscar Carrasco Acuña”, lo que reitera en su declaración

extrajudicial de fs. 576 a 578 (Tomo II); y OMAR BURGOS DEJEAN, quien en su declaración judicial de fs. 2.977 a 2.979 (Tomo VIII), atestigua que *“lo único que hacían era dar cumplimiento a los requerimientos de la Fiscalía Militar, es decir, recibían una orden de aprehensión y acto seguido concurrían al domicilio, en ese lugar consultaban por la persona...Respecto a sus labores específicas en la SICAR, reitera que cumplía las Órdenes de Detención emanadas por la Fiscalía Militar, cuyo Fiscal era un señor Podlech”*.

15°) QUE SIGUIENDO CON LA DEFENSA DE FS. 2.441 A 2.494 (TOMO VII), DEL ABOGADO VÍCTOR CARMINE ZÚÑIGA, EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, se estará a la aquilatación de las pruebas según el mérito del proceso y al análisis y ponderación detallados de las declaraciones indagatorias del acusado antes realizadas, puntualizando lo siguiente:

A. ERROR DE FOJAS: De la lectura del escrito del abogado defensor de **fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII)**, es posible advertir que incurre en error de fojas al apuntar que:

a.1. *“La Excm. Corte Suprema a fs. 1.805 con fecha 25 de Noviembre de 2018 confirmó el auto de reo dictado por mayoría de votos”*, dado que dicha foja corresponde a la copia simple del documento Junta Provincial de Gobierno de Cautín Primera edición, Suplementos Colección de bandos emitidos por el Diario Austral el 18 de noviembre del año 1973, rolante de fs. 1.798 a fs. 1.816 (Tomo V). Detallado en el apartado B.20 de Documentos.

a.2. *“basta con examinar la declaración de Jaime García Covarrubias de fs. 78 y José Tomás Argomado García de fs. 604 a 605”*, dado que la fs. 78 se encuentra dentro del Informe Individual del Caso para la Comisión respecto de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez de fs. 77 a 80 (Tomo I), detallado en el apartado B.4 letra c) de Documentos. Mientras que las fs. 604 a 605 corresponde a una declaración judicial de Pablo Domingo Gran López de fs. 603 a 604 (Tomo II).

a.3. *“El documento emanado del Estado Mayor del Ejército de fecha 01 de Septiembre de 2006, se informa que Oscar Alfonso Podlech Michaud, fue designado Mayor de Justicia Militar a contar del 14 de Febrero de 1974, lo que desmiente lo dicho por Pedro Elgueta a fojas 1.008”*, dado que dicha foja corresponde a una declaración judicial de DANIEL ARNOLDO AGUIRRE MORA

rolante de fs. 1.005 a 1.008 (Tomo III). Detallado en el apartado A.46 de declaraciones.

a.4. Se apoya en los dichos de *“de un dirigente del MIR Luis Alberto Alarcón Seguel a fs. 825 (1.641)”*, dado que a fs. 825 a 826 se encuentra una declaración judicial de Jaime Pablo Englert Bórquez y de fs. 1.641 a 1.642 (Tomo V) se encuentra el Informe reservado del Ejército de Chile Estado Mayor General, detallado en el apartado B.17 de documentos.

a.5 *“En la acusación aparece lo señalado por el Jefe de Guardia de la Cárcel de Temuco, mencionado en el considerando F), a fs. 469, Sigisfredo Jara Contreras lo que ha sido mal interpretado”*, dado que de fs. 465 a 474 (Tomo II) se encuentra la querella criminal interpuesta por los abogados Carolina Contreras Rivera y Sebastián Saavedra Cea, en representación de Juan Carlos Mateluna Lillo y María Isabel Lillo Flores.

a.6 *“En el Pleno que se levantó en la Corte el 17 de Septiembre de 1973 y que rola a fs. 1.716 a 1.717”*, dado que de fs. 1.706 a 1.735 (Tomo V) se encuentra la copia autorizada de auto acusatorio dictado con fecha 30 de noviembre de 2016, traída a la vista de causa rol 113.969, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en el que se acusa entre otros, a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud. Detallado en el apartado B.19 letra b) de documentos.

a.7 *“Ese informe de fs. 1.486 se contrapone con otro informe practicado por investigaciones de Temuco que no consta en estos autos, que señala claramente que la firma no es de su representado”*, dado que se encuentra una declaración extrajudicial de Mario Arnoldo Alarcón Tapia. Detallado en el apartado A.55 de declaraciones.

16°) EN CUANDO A LAS EXCEPCIONES DE FONDO: Que si bien la defensa del acusado en su escrito de fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII), en el segundo otrosí y en subsidio de dichas excepciones de previo y especial pronunciamiento, anuncia que planteará excepciones de fondo, es posible verificar que en ese Segundo Otrosí, tanto en su cuerpo como en la petición concreta no reiteró excepciones de fondo que había anunciado. Sin perjuicio de lo anterior, en conformidad al artículo 434 del Código de Procedimiento Penal el Tribunal renovará el examen solo de las excepciones de Amnistía y Prescripción de la Acción Penal, ello porque la declinatoria de jurisdicción quedó ejecutoriada al

tenor de lo resuelto de fs. 2.602 a 2.606 (Tomo VII). Para un mejor entendimiento el análisis se estructura de la siguiente forma:

- A. En cuanto a la excepción de amnistía del artículo 433 N°6 del Código de Procedimiento Penal.
- B. En cuanto a la excepción de prescripción de la acción penal del artículo 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal.
- C. Delitos de Lesa Humanidad.
- D. Convenios de Ginebra.
- E. Ley 20.357.

A. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE AMNISTÍA DEL ARTICULO 433 N°6 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: El Tribunal reitera los fundamentos dados en resolución de 06 de agosto de 2019, rolante de fs. 2.607 a 2.610 (Tomo VII), en cuanto ésta fue rechazada y en el sentido de que tratándose de hechos similares a los investigaciones (Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados) éste Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y no obstante, citar la defensa el Decreto Ley N°2191, éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos (114) señala que *“la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”*. En la misma línea la Corte Interamericana citada lo manifestó en la caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001, que en su párrafo 41 dispuso *“esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”*. No existiendo en conformidad a lo que dispone la propia defensa en su Primer Otrosí, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. **En consecuencia esta excepción amnistía del artículo 433 N°6 del Código de Procedimiento Penal será rechazada y así se dirá en lo resolutive de este fallo.**

B. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEL ARTICULO 433 N°7 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: El Tribunal reitera los fundamentos dados en resolución de 30 de julio de 2019, rolante de fs. 2.607 a 2.610 (Tomo VII), en cuanto esta fue rechazada, por lo que se replican los fundamentos precedentemente dados para la excepción de amnistía. Y se tiene presente además, que como estos hechos han sido calificados de delitos de lesa humanidad no es posible aplicar las disposiciones de la Prescripción del artículo 93 y siguientes del Código Penal, puesto que al ser delitos de lesa humanidad no solo son inamnistiables, sino que son además imprescriptibles. No existiendo en conformidad a lo que dispone la propia defensa en su Primer Otrosí, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. **En consecuencia esta excepción prescripción de la acción penal del artículo 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal será rechazada y así se dirá en lo resolutivo de este fallo.**

C. DELITOS DE LESA HUMANIDAD: Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excma. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados, son delitos de tal magnitud que deben ser imprescriptibles. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de lesa humanidad y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables. A modo de ilustración, el máximo Tribunal así se ha pronunciado en las causas roles 31.030 – 1994; 469 – 1998; 517 – 2004; 288 – 2012 y 1.260 – 2013, 40.168-2017, 4.080-2018, entre muchas otras. Y de la misma forma, como se ha fallado reiteradamente por este Tribunal en las causas roles: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; ; 45.362; 114.007 y 114.042.

c.1. Éste Tribunal considera que el **término crímenes de lesa humanidad** ya fue usado en un sentido no técnico en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a

los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad. Hay que precisar que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (profesor **Eugenio Raúl Zaffaroni**). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no sólo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

c.2. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo **Almonacid Arellano y otros vs Chile** dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 119**, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que *“las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”*.

c.3. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso **“Barrios Altos versus Perú”** de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo **“Almonacid Arellano y otros versus**

Chile” afirma lo anterior en los siguientes **párrafos: 82.3, 82.4, 82.6, 82.7, 111** y en especial en el **párrafo 119** donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excma. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.3. *El 11 de septiembre de 1973 advino en Chile un régimen militar que derrocó al Gobierno del Presidente Salvador Allende. “Los institutos armados y de orden, a través de la Junta de Gobierno, asumieron primero el poder ejecutivo (Decreto Ley N°1) y luego el constituyente y el legislativo (Decreto Ley N°128)”. La nueva Presidencia de la República/Comandancia en Jefe estuvo dotada “de una suma de poderes jamás vista en Chile. Su titular no sólo gobernaba y administraba el país, sino que además integraba y presidía la Junta de Gobierno y, por ende, no se podía legislar ni reformar la Constitución sin él y comandaba todo el Ejército”. Mediante Decreto Ley N°5 de 22 de septiembre de 1973 se declaró que el estado de sitio por conmoción interna que regía al país debía entenderse como “estado o tiempo de guerra”.*

82.4. *La represión generalizada dirigida a las personas que el régimen consideraba como opositoras, como política de Estado, operó desde ese mismo día hasta el fin del gobierno militar el 10 de marzo de 1990, “aunque con grados de intensidad variables y con distintos niveles de selectividad a la hora de señalar a sus víctimas”. Esta represión estuvo caracterizada por una práctica masiva y sistemática de fusilamientos y ejecuciones sumarias, torturas (incluida la violación sexual, principalmente de mujeres), privaciones arbitrarias de la libertad en recintos al margen del escrutinio de la ley, desapariciones forzadas, y demás violaciones a los derechos humanos cometidas por Agentes del Estado, asistidos a veces por civiles. La represión se aplicó en casi todas las regiones del país.*

82.5. *La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar,*

1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

c.4. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que

éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso *Gelman Vs. Uruguay* determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por

el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

c.5. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

- i. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.
- ii. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.
- iii. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.
- iv. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.
- v. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.
- vi. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.
- vii. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

c.6. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que *“El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que*

cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

c.7 Cabe puntualizar que en el caso de **“Hilario Barrios Varas” (causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema)**, en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

D. CONVENIOS DE GINEBRA: Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago **“Caso Luis Almonacid Dúmenez”** de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que **“los Convenios de Ginebra”** consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *ius cogens*. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en

caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de los Cogens o Principios Generales de Derecho Internacional". **En consecuencia, el Tribunal como lo dirá en lo resolutivo, rechazará las excepciones de Amnistía y Prescripción de la Acción Penal que de conformidad al artículo 434 del Código de Procedimiento Penal fueron renovadas para su examen.**

E. LEY 20.357: Del mismo modo, en este caso no es aplicable la **Ley 20.357**, toda vez que dicho texto en su **artículo 44** señala que "*Los hechos de que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia*", normativa, jurisprudencia y doctrina que se ha explicado detalladamente. **Finalmente sobre este punto, no es aplicable la Ley 20.357.**

17°) EN CUANTO A LA SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN POR FALTA DE PARTICIPACIÓN: No es posible dar lugar a lo solicitado por la **Defensa**, pues como se ha reiterado en un examen integral detallado de las pruebas expuestas en esta sentencia, existe en suficiencia elementos probatorios para llegar a la convicción del Tribunal a través de los medios de prueba legal,

que se han ponderado y relacionado que el acusado **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD** le cabe responsabilidad en estos hechos. En ese sentido, la defensa realiza solo afirmaciones de carácter generales, refiriéndose a cierta prueba, pero no a la prueba total del proceso, no desglosa cada medio probatorio, en especial se debe considerar:

- A. Del mismo modo y al contrario de lo que expone la defensa en su Segundo Otrosí, no existe solo una prueba, sino que múltiples pruebas para acreditar no solo el hecho (delito de Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga), sino que también la participación del acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.
- B. En efecto, si actualmente estuvieran vivos, por ejemplo el Coronel Pablo Iturriaga Marchese, el Mayor Luis Jofré Soto, Capitán Nelson Ubilla Toledo (que en realidad se encuentran fallecidos, tal como consta a fs. 1.794, 1.793 y 3.022 respectivamente), sin duda este Ministro habría dirigido la investigación a ellos como lo ha hecho en muchas causas que ha investigado respecto de otros Oficiales y respecto de todos aquellos que puedan presumirse su responsabilidad.
- C. **En cuanto a la Justicia Italiana:** Se indica a la defensa que se trata de otro país, otra jurisdicción otro sistema procesal y en ella demás, no se acusó ni investigó por los delitos que se investigan hoy; sino que fue por la desaparición del Sacerdote italo-chileno Omar Ventureli Leonelli, al como consta en el mismo documento acompañado por la defensa a fs. 2.495 (Tomo VII), detallado en el apartado B.26 letra a) de Documentos. En todo caso nosotros estamos bajo el Sistema de Protección Interamericano de los Derechos Humanos y en ese sentido, nos debemos regir por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia en esta materia de su Corte.

18°) EN CUANTO A LAS ALEGACIONES DE QUE SU DEFENDIDO FUE SUPUESTO FISCAL MILITAR DE FACTO, AD HOC O FISCAL MILITAR DE HECHO: El Tribunal reitera el detalle precedente de valoración y ponderación de la prueba al analizar los extensos medios probatorios sobre la materia. Aquilatando el Tribunal lo siguiente:

- A. Se trató de un Regimiento donde se desempeñó el abogado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud con una estructura jerarquizada. En esas condiciones

ningún abogado (como simple asesor que es lo que quiere demostrar la defensa y no lo logra) se presenta como Fiscal Ad Hoc ante la Corte de Apelaciones de Temuco, despacha ordenes (como consta en: La copia de Informe Pericial Documental Caligráfico emitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.395 a 1.423 (Tomo IV), detallado en el apartado B.16 de Documentos; el Informe Pericial Documental N°465, de fecha 31 de marzo de 2017, evacuado por Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1.668 a 1.674 (Tomo V), detallado en el apartado B.18 de Documentos; Acta de inspección Ocular, rolante de fs. 1.015 a 1.020 (Tomo III), en que el Tribunal se constituye en dependencias del R.I N°8 “Tucapel”, detallado en el apartado B.12 de Documentos; y la copia autorizada del Acta de Pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973 de fs. 1.680 (Tomo V), detallado en el apartado B.19 de Documentos) y decide el destino de muchas personas (como consta en las declaraciones de los testigos: ORLANDO MORENO VÁSQUEZ, quien en su declaración extrajudicial de fs. 428 a 429 (Tomo II), evidencia que los *“Bandos generalmente los confeccionaba el Fiscal Militar Podlech”*; HERMÁN CARRASCO PAUL, quien en su declaración judicial de fs. 609 a 612 (Tomo II), colige que *“dos días después de haber sido detenido fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la Fiscalía Militar ubicada al interior del Regimiento, donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez”* y en su declaración extrajudicial de fs. 618 a 619 (Tomo II) puntualiza que el *“abogado Alfonso Podlech Michaud, sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de Mayor, es más fue él quien les insistió en firmar un documento que por supuesto negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del Plan “Z”*; CARLOS LUCO ASTROZA, quien en su declaración extrajudicial de fs. 881 a 882 (Tomo III), anexa que *“en más de una oportunidad pudo ver a Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar de Tucapel, sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme”*, y en su declaración judicial de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV), suma que *“el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el Regimiento y se entendía con el Capitán Ubilla... era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de Inteligencia que ejercía Ubilla. Adicionando que tanto Podlech como Ubilla estaban constantemente en la Fiscalía Militar”*; FRANCISCO JERÓNIMO MATTA

ITURRA, quien en su Declaración judicial de fs. 1.000 a 1.001 (Tomo III), dice que *“a mediados de octubre de 1973 concurrió a conversar con Alfonso Podlech Michaud en compañía del ex diputado Hardy Momberg...Se entrevistaron con él en una oficina ubicada al interior del Regimiento. En esa reunión Podlech se hizo acompañar de los Capitanes Nelson Ubilla y Mario Alvarado”*; PEDRO MISAEEL ELGUETA MUÑOZ, quien en su declaración extrajudicial de fs. 1.044 a 1.046 (Tomo III), desarrolla que *“una oportunidad fue designado como Policía Militar, correspondiéndole en el casino desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los Consejos de Guerra, instancias donde el abogado Alfonso Podlech y el Comandante del Regimiento Pablo Iturriaga Marchesse, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento”*; HERNÁN ALEJANDRO MORALES GÓMEZ, quien en su declaración judicial de fs. 1.082 a 1.085 (Tomo IV), escruta que *“conoce a Alfonso Podlech Michaud, quien es abogado de la ciudad de Temuco. Indica que esta persona lo llamó por teléfono a poco de haber tomado su cargo de Fiscal Ad-Hoc para pedirle que dejara a todos los detenidos presos, porque eran extremistas...En aquel tiempo, Podlech tenía muy buenas relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel. En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Después del 11 de septiembre de 1973, Podlech acudía frecuentemente al Regimiento, vestido de Militar. Se decía que era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor Jofré sobre temas legales. Desconoce si tuvo participación en interrogatorios de detenidos, pero sí sabe que él organizó la Fiscalía Militar que funcionó al interior del Regimiento. Él fue quien trajo a los actuarios Toloza y González, más un amigo de este abogado, de nombre Dorian Novoa”*, lo que reitera en su declaración judicial de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV); BERNARDITA DEL CARMEN WEISSER SOTO, quien en su declaración judicial de fs. 1.113 a 1.114 (Tomo IV), agrega que *“mientras se encontraba en la Fiscalía Militar, vio llegar a Conscriptos con libros requisados, uno de los cuales eran poesías de Gabriela Mistral, por lo cual solicitó al Mayor Jofré si podía quedárselo, lo recogió justo en el momento en que aparece el Sr. Alfonso Podlech a la sala. Jofré en un acto que le pareció casi de aprobación hacia Podlech le insinuó que podría darle este libro”* y en careo de fs. 1.121 a 1.123 (Tomo IV) cimienta que *“Le parece que la relación que tenía el señor Podlech con el resto de los integrantes de la Fiscalía Militar, incluido el Mayor Jofré era de superioridad por cuanto daba la sensación que todos le tomaban el parecer a él para actuar”*;

RODRIGO MIGUEL ANTONIO HENRÍQUEZ ARAVENA, quien en su declaración judicial de fs. 1.571 (Tomo V) asevera que *“Podlech actuaba como Fiscal Militar en propiedad, de hecho vestía Uniforme Militar y daba órdenes en ese lugar”*; JORGE EDMUNDO SEPÚLVEDA CONTRERAS, quien en declaración judicial de fs. 1.615 a 1.620 (Tomo V) alega que *“Podlech era quien estaba al mando de todo dentro del Regimiento. Tomando decisiones sobre quien vivía y quién no. Era el Fiscal Militar, dentro de la Comandancia tenía una oficina con los del Servicio de Inteligencia Militar. Esta persona se movilizaba por toda la región. Esto le consta al declarante, debido a que él estaba de guardia y veía esta situación. Incluso recuerda que en muchas ocasiones el mayor Jaime García Covarrubias le pasó documentación a Podlech y él decidía respecto a las personas que se indicaban en esos papeles”*. Mientras que el mismo acusado señala en su declaración judicial de fs. 359 a 363 (Tomo II), que *“el Comandante Pablo Iturriaga le pidió que colaborara con él en distintos aspectos legales”*... siendo dicho Comandante quien *“lo autorizó para que en su nombre y representación conversara con el Presidente de la Corte de la ciudad de Temuco, don Oscar Carrasco Acuña”*, lo que reitera en su declaración extrajudicial de fs. 576 a 578 (Tomo II). Además se recuerda a la defensa que el propio acusado indica que era amigo del Coronel Iturriaga Marchese (tal como consta en su declaración judicial de fs. 359 a 363 (Tomo II), que *“el Comandante Pablo Iturriaga le pidió que colaborara con él en distintos aspectos legales”*... siendo dicho Comandante quien *“lo autorizó para que en su nombre y representación conversara con el Presidente de la Corte de la ciudad de Temuco, don Oscar Carrasco Acuña”*, lo que reitera en su declaración extrajudicial de fs. 576 a 578 (Tomo II); y no solo un testigo sino que varios testigos manifiestan la conducta, capacidad y decisión que tenía el ex Fiscal Luis Jofré Soto (tal como señala VICTOR HERNAN MATURANA BURGOS en su declaración extrajudicial de fs. 561 a 563 (Tomo II), quien sustenta que *“respecto a los funcionarios de la Fiscalía Militar que operaban los primeros días del mes de octubre de 1973, recuerda que el Fiscal era el Mayor Luis Jofré Soto, quien además era Segundo Comandante del Regimiento; el Asesor Jurídico Alfonso Podlech Michaud, quien en su exclusiva condición de abogado asumió el puesto, pero debido a la personalidad que tenía Jofré, un poco tímido, éste era quien “hacía y deshacía” en la Fiscalía, por lo cual es una de las personas que tiene mayor información acerca de las personas que fueron muertas, desaparecidas y en general en todos los hechos ocurridos posterior al 11 de septiembre de 1973, en su declaración judicial de fs. 1.117 a 1.118 (Tomo IV) señala que “si bien el Mayor*

Jofré era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, puesto que tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que Jofré. Todo el mundo sabía esto”, en su declaración judicial de fs. 1.509 a 1.510 (Tomo V) justifica que *“si bien el Mayor Jofré era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, puesto que tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que Jofré. Todo el mundo sabía esto”*; CARLOS LUCO ASTROZA, quien en su declaración judicial fs. 1.297 a 1.299 (Tomo IV) urde que *“el Mayor Jofré “no se metía en nada”, por lo que a su parecer el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de ello en la Fiscalía Militar”*, y en su declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV), vuelve a señalar que *“el Mayor Jofré no se metía en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el Regimiento y se entendía con el Capitán Ubilla”*; FRANCISCO JERÓNIMO MATTA ITURRA, quien en su declaración judicial de 1.000 a 1.001 (Tomo III), *“dice estar seguro que Podlech era el verdadero Fiscal Militar en Temuco y utilizaba al Mayor Jofré como “pantalla”, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y afirma que pudo comprobar su autoridad cuando conversó con él”*; JOSÉ HERIBERTO MANSILLA GATICA, quien en su declaración judicial de fs. 1.011 a 1.013 (Tomo III), suma que *“En lo formal el Comandante Jofré era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Éste tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos”*; HERNÁN ALEJANDRO MORALES GÓMEZ, quien en su declaración judicial de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV) distingue que *“el Mayor Jofré era una persona bonachona que no tenía el perfil de Militar clásico como Iturriaga y no tomaba mayores decisiones sobre el destino de las personas detenidas. Por esto cuando sucedió el golpe, llegó el abogado Alfonso Podlech para asesorarlo en materias de la Fiscalía, a quien conocía como abogado de la ciudad de Temuco”*; OMAR BURGOS DEJEAN, quien en su declaración judicial de fs. 2.977 a 2.979 (Tomo VIII), atestigua que *“lo único que hacían era dar cumplimiento a los requerimientos de la Fiscalía Militar, es decir, recibían una orden de aprehensión y acto seguido concurrían al domicilio, en ese lugar consultaban por la persona...Respecto a sus labores específicas en la SICAR, reitera que cumplía las Órdenes de Detención emanadas por la Fiscalía Militar, cuyo Fiscal era un señor Podlech”*; entre otros. En consecuencia, son demasiados los antecedentes que en una ponderación multinivel y en una

aquilatación directa e indirecta, permiten en un trabajo razonado en conformidad a la ponderación y argumentación racional ubicar y atribuir responsabilidad al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.

B. Cabe en esta materia, también hacer presente como además, en la Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán (detallado en el considerando), en cuanto a que en situaciones como las vividas en Chile en un Régimen de Facto, en un Régimen Militar, donde además el Regimiento Tucapel se utilizó como un lugar de tortura y ejecución de personas, que por el cargo que ocupaba y por el compromiso con el Régimen Militar, así como con los Oficiales, resulta inverosímil que el acusado no supiera lo que sucedía. Al contrario, participaba en todas las situaciones de los detenidos que llegaban al Regimiento Tucapel y pasaban por la Fiscalía Militar. Más aún, que como abogado no se sorprenda por las diferentes ejecuciones que se comunicaban a través de los Bandos en circunstancias que un detenido en esas condiciones (torturado y en muy mal estado físico) pudiera realizar una fuga. Es más, tal como dice Roxin (Considerando 11° letra B), del numeral 14 de esta sentencia) “Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena”. En consecuencia, no resulta justificable que una persona no entienda que cometer un asesinato es siempre contrario a Derecho, nunca puede constituir una justificación. Y en ese caso más aún, si la persona es Abogado, Asesor y Fiscal Ad Hoc de la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel.

C. Ahora bien, si el acusado como quiere indicar la Defensa, hubiera realizado una labor de simple abogado, simplemente para asesorar en determinadas materias no habría realizado las diferentes acciones que se han descrito más arriba en la Fiscalía Militar, como Fiscal Ad Hoc, firmar órdenes de libertad y decidir el destino de muchas personas, tal como invocan: HERMÁN CARRASCO PAUL, quien en su declaración judicial de fs. 609 a 612 (Tomo II), colige que “dos días después de haber sido detenido fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la Fiscalía Militar ubicada al interior del Regimiento, donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatório, el

cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez” y en su declaración extrajudicial de fs. 618 a 619 (Tomo II) puntualiza que el “abogado Alfonso Podlech Michaud, sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de Mayor, es más fue él quien les insistió en firmar un documento que por supuesto negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del Plan “Z”; CARLOS LUCO ASTROZA, quien en su declaración extrajudicial de fs. 881 a 882 (Tomo III), anexa que “en más de una oportunidad pudo ver a Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar de Tucapel, sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme”, y en su declaración judicial de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV), suma que “el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el Regimiento y se entendía con el Capitán Ubilla... era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de Inteligencia que ejercía Ubilla. Adicionando que tanto Podlech como Ubilla estaban constantemente en la Fiscalía Militar”; PEDRO MISAEL ELGUETA MUÑOZ, quien en su declaración extrajudicial de fs. 1.044 a 1.046 (Tomo III), desarrolla que “una oportunidad fue designado como Policía Militar, correspondiéndole en el casino desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los Consejos de Guerra, instancias donde el abogado Alfonso Podlech y el Comandante del Regimiento Pablo Iturriaga Marchesse, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento”; HERNÁN ALEJANDRO MORALES GÓMEZ, quien en su declaración judicial de fs. 1.082 a 1.085 (Tomo IV), escruta que “conoce a Alfonso Podlech Michaud, quien es abogado de la ciudad de Temuco. Indica que esta persona lo llamó por teléfono a poco de haber tomado su cargo de Fiscal Ad-Hoc para pedirle que dejara a todos los detenidos presos, porque eran extremistas...En aquel tiempo, Podlech tenía muy buenas relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel. En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Después del 11 de septiembre de 1973, Podlech acudía frecuentemente al Regimiento, vestido de Militar. Se decía que era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor Jofré sobre temas legales. Desconoce si tuvo participación en interrogatorios de detenidos, pero sí sabe que él organizó la Fiscalía Militar que funcionó al interior del Regimiento. Él fue quien trajo a los actuarios Toloza y González, más un amigo de este abogado, de nombre Dorian Novoa”, lo que reitera en su declaración judicial de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV); BERNARDITA DEL CARMEN

WEISSER SOTO, quien en su declaración judicial de fs. 1.113 a 1.114 (Tomo IV), agrega que *“mientras se encontraba en la Fiscalía Militar, vio llegar a Conscriptos con libros requisados, uno de los cuales eran poesías de Gabriela Mistral, por lo cual solicitó al Mayor Jofré si podía quedárselo, lo recogió justo en el momento en que aparece el Sr. Alfonso Podlech a la sala. Jofré en un acto que le pareció casi de aprobación hacia Podlech le insinuó que podría darle este libro”* y en careo de fs. 1.121 a 1.123 (Tomo IV) cimienta que *“Le parece que la relación que tenía el señor Podlech con el resto de los integrantes de la Fiscalía Militar, incluido el Mayor Jofré era de superioridad por cuanto daba la sensación que todos le tomaban el parecer a él para actuar”*; RODRIGO MIGUEL ANTONIO HENRÍQUEZ ARAVENA, quien en su declaración judicial de fs. 1.571 (Tomo V) asevera que *“Podlech actuaba como Fiscal Militar en propiedad, de hecho vestía Uniforme Militar y daba órdenes en ese lugar”*; JORGE EDMUNDO SEPÚLVEDA CONTRERAS, quien en declaración judicial de fs. 1.615 a 1.620 (Tomo V) alega que *“Podlech era quien estaba al mando de todo dentro del Regimiento. Tomando decisiones sobre quien vivía y quién no. Era el Fiscal Militar, dentro de la Comandancia tenía una oficina con los del Servicio de Inteligencia Militar. Esta persona se movilizaba por toda la región. Esto le consta al declarante, debido a que él estaba de guardia y veía esta situación. Incluso recuerda que en muchas ocasiones el mayor Jaime García Covarrubias le pasó documentación a Podlech y él decidía respecto a las personas que se indicaban en esos papeles”*. Mientras que el mismo acusado señala en su declaración judicial de fs. 359 a 363 (Tomo II), que *“el Comandante Pablo Iturriaga le pidió que colaborara con él en distintos aspectos legales”*... siendo dicho Comandante quien *“lo autorizó para que en su nombre y representación conversara con el Presidente de la Corte de la ciudad de Temuco, don Oscar Carrasco Acuña”*, lo que reitera en su declaración extrajudicial de fs. 576 a 578 (Tomo II).

- D. También cabe hacer presente, que el acusado conocía al Sr. Ortigosa puesto que cuando compró el Fundo en Catrico, el acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud era el representante de la vendedora, así lo evidencian: CARMEN GRACIELA URIARTE OYANGUREN, quien en su declaración extrajudicial de fs. 85 a 88 (Tomo I), apoya que *“con su marido vivían en Santiago y en el verano de 1973 fueron al sur a veranear, les gusto la zona de Temuco por lo que decidieron comprar un fundo en sector Catrico. No se alcanzó a inscribir. No se despidió a nadie, solo se recontrató y siguieron con el mismo personal que existía. El abogado de la contraparte vendedora fue*

Alfonso Podlech, quien después fue Fiscal Militar de la zona”; en su declaración judicial de fs. 331 a 333 (Tomo I), aduce que “su marido se enamoró de la región hasta tal punto que decidió comprar un fundo en Catrico a 20 kilómetros antes de Villarrica, el cual fue comprado a la señora Herminia Diez, lugar al cual vinieron en solo dos oportunidades. Hizo presente que el abogado de la señora Diez era el Fiscal Militar de ese entonces, don Alfonso Podlech Michaud”; FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ URIARTE, quien en su declaración judicial de fs. 386 a 390 (Tomo II), estimula que “El abogado de Herminia Diez, era Alfonso Podlech, quien después de fallecido José Ortigosa, supieron por comentarios que se había quedado con la propiedad”. Posteriormente señala que...“los envió hasta la Fiscalía Militar de Temuco. Lugar donde fue presentado ante el Fiscal de la época, Alfonso Podlech, quien le preguntó por qué andaba con Vicente Gutiérrez y qué relación tenía con José Ortigosa. Le comentó que estaba averiguando la muerte de su padrastro. Le preguntó irónicamente, de qué había muerto su padrastro y le dijo que él lo había dejado en libertad y que tenía copia de la orden, sin embargo, cuando le pidió que le exhibiera el documento se negó a hacerlo y le dio la orden de desaparecer de su vista en 5 minutos, y que no volviera más a preguntar sobre él”, en declaración judicial de fs. 541 (Tomo II), precisó que “junto con su madre concurrieron a Temuco, donde su madre se entrevistó con Alfonso Podlech Michaud en la Fiscalía Militar. En ese lugar Podlech le preguntó irónicamente a su madre si sabía cómo murió José Ortigosa, como ignorando a qué venía ella. Todo esto se lo contó ella una vez que salió de ese lugar y llegó al vehículo en que él la estaba esperando. A la pregunta, expresó que a principios de 1974 viajó con Vicente Gutiérrez Rollen a Temuco para averiguar más sobre la muerte de José Ortigosa. Recuerda haberse entrevistado con Alfonso Podlech en la Fiscalía Militar, que ahora estaba ubicada en los altos de un banco. En esa oportunidad estaba en calidad de detenido tras haber sido derivado desde Villarrica por funcionarios de la Policía de Investigaciones. En esa oportunidad le preguntó el motivo de su detención y le contestó que andaba averiguando lo ocurrido con José Ortigosa. Entonces esta persona le dijo que se acordaba perfectamente de él y que incluso le había dado la orden de libertad por falta de méritos, de lo cual guardaba una copia. Él le pidió que le exhibiera la copia, pero él se negó y le ordenó salir de la sala”, En diligencia de careo de fs. 542 (Tomo II), “ratifica sus dichos de fs. 541. Reconoce a la persona con la que se le carea como Alfonso Podlech Michaud, de quien ha hecho referencia”; MARY CARMEN ORTIGOSA URIARTE, quien en su declaración judicial de fs. 395 a 396 (Tomo II), exclama que “En Temuco, su

*madre habló con Alfonso Podlech, Fiscal Militar en aquella época, por lo ocurrido con su padre. Explanó que su madre les contó que pidieron un rescate para liberar a su padre....Con posterioridad tomaron conocimiento que su hermano ubicó a Alfonso Podlech para venderle a Carlos Cardoen Las Hachiras”; RODRIGO MIGUEL ANTONIO HENRÍQUEZ ARAVENA, quien en declaración judicial de fs. 1.571 (Tomo V), advierte que “vio al abogado Alfonso Podlech interrogar a su hermano en dependencias del Regimiento Tucapel donde funcionaba la Fiscalía Militar. Este hecho lo presencié, pues se encontraba en los pasillos contiguos a la oficina antes mencionada. Junto con su hermano, señala que fueron interrogados Jobet, Ljubetic y Ortigosa, quienes pasaron a la sala de audiencias, donde se encontraba Podlech junto a los actuarios Tolosa y González”. A su vez, es el mismo acusado quien asevera en su declaración judicial de fecha de fs. 359 a 363 (Tomo II), “que le llamó la atención un día determinado, que no recuerda, pero tiene que haber sido uno a dos días antes que por Bando se diera a conocer su muerte, cuando en circunstancias en que se encontraba conversando con el Mayor Jofré, se le apersonó el señor Ortigosa, que estaba detenido en el Regimiento, ignorando el motivo y le señaló que era amigo de una serie de Almirantes y Generales que el acusado ni conocía, y que quería hablar con ellos...Pero le llamó la atención ese hecho, porque lo vio muy exaltado.... Esta notoriedad aparece más de manifiesto cuando leyó en el Informe de Comisión Rettig, donde se señala que esta persona había sido visto maltratado...Con posterioridad al hecho de que se había dado de baja por intentar una fuga, fue a conversar con el encausado la señora de Ortigosa, de nombre Carmen Uriarte, a quien el Fiscal solo le dio explicación de la existencia del Bando Militar, por cuanto en tiempo de guerra, el Bando equivale a una Ley y no cabe su discusión”, en diligencia de careo de fs. 542 (Tomo II), afirma que “doña Carmen Uriarte se entrevistó con el Fiscal Jofré en su presencia, pero él no habló con ella... En su concepto no había ningún elemento para enjuiciar al señor Ortigosa, pero él no tomaba esas decisiones, ni se le consultaba con relación a los hechos de sangre que ocurrieron en esa época como lo sucedido con el señor Ortigosa”, y en su declaración extrajudicial de fs. 576 a 578 (Tomo II), soflama que “solamente conoce a Ortigosa. Recuerda que mientras se desempeñó en la Fiscalía Militar, un familiar de éste consultó por él”. **En consecuencia, no es posible dar lugar a solicitud de absolución efectuada por la defensa, por lo antes razonado***

19°) EN CUANTO A LA IMPRECISIÓN DEL AUTO DE PROCESAMIENTO Y UNA INTERPRETACIÓN INCORRECTA DE ANTECEDENTES ALLEGADOS A LA CAUSA E INSUFICIENCIA DE UN CARGO PARA IMPUTAR RESPONSABILIDAD CRIMINAL: Sobre esta material el tribunal se ciñe a todo lo anteriormente razonado y ponderado. Puntualizando lo siguiente:

A. De la lectura del auto acusatorio fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI), con fecha 15 de marzo de 2019, a diferencia de lo que expone la defensa y aquí también cabe recordar Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán (detallado en el considerando), citada más arriba, se observa la dinámica de los últimos 100 años sobre Jurisprudencia en materia del Código de Procedimiento Penal, los Autos de Procesamiento y Autos Acusatorios, como puede observarse en el **Libro de Alfredo Etcheberry “El Derecho Penal en la Jurisprudencia. Sentencia de 1875 a 1966”** (IV Tomos), el Auto Acusatorio dictado en esta causa sin duda cumple un estándar igual o superior en relación de la tramitación de las causas en los últimos 100 años en materias del Código de Procedimiento Penal. Al leer sus hechos se describe el contexto de la época, se describe la actuación del acusado Podlech Michaud, como Fiscal Ad Hoc y organizador de la Fiscalía Militar en el Regimiento Tucapel, lugar donde eran mantenidos los detenidos, dónde eran interrogados, que en este caso pasaban a la Fiscalía Militar, cómo fue detenido y llevado al Regimiento Tucapel Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga, los cargos que existían en contra de ellos, el Bando sobre la ejecución de ambas víctimas, entre otros. Por lo que no se ve cual es la imprecisión que alega la defensa.

B. Cabe hacer presente que **José María Ortigosa Ansoleaga concurre a Temuco por un exhorto de la Fiscalía Militar**, mientras que Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez para evitar represalias en contra de su familia decide presentarse voluntariamente ante las Autoridades Militares, quedando de inmediato detenido en el Regimiento de infantería N° 8 “Tucapel. En consecuencia, ambos fueron interrogados en la Fiscalía Militar y visto además en el Regimiento por los numerosos testigos que se han mencionado, así por ejemplo: ELIAS AMAR AMAR, quien en su declaración extrajudicial de 61 a 62 (Tomo I), *“Recordó haber visto entre otras personas a Pedro Ríos, Daniel Mateluna, José Ortigosa y Omar Venturelli. Apunta que en el caso de Ortigosa y Mateluna, estos fueron muertos a principios del mes de octubre, luego de*

haber sido sacados de la cárcel, por personal Militar quienes los trasladaban al Regimiento... En cuanto a las veces que tuvo ocasión de ver a estas personas, solo a Mateluna lo vio en precarias condiciones físicas debido a las torturas recibidas por parte de sus interrogadores”, y en su declaración extrajudicial de fs. 89 a 91 (Tomo I), escrutó que “en la cárcel, había unos 700 a 800 detenidos, se encontró allí con Pedro Ríos, Venturelli, Ortigosa quien llegó, luego fue sacado y llevado al Regimiento...Respecto a Mateluna, lo reconoció, porque lo había conocido en calidad de dirigente deportivo. A Mateluna y Ortigosa los llevaron juntos un día, después no volvieron y no supo más de ellos”; ELCIDES LUIS GUBELIN DURAN, quien en su declaración extrajudicial de fs. 63 a 64 (Tomo I) “apunta que cerca del 20 de septiembre de 1973 llegó a la cárcel de Temuco, oportunidad en la cual tuvo la ocasión de ver detenidos en este lugar a Daniel Mateluna y José Ortigosa, quienes en una oportunidad fueron sacados del penal, ignorando para donde eran llevados o en qué circunstancias fueron muertos, ya que a los días siguientes se enteró, por comentarios, que habían sido al parecer fusilados. El primero de los nombrados estaba en muy mal estado físico producto de las torturas recibidas, mientras que en el caso de Ortigosa, éste era una persona muy activa y que incluso había pintado las galerías del recinto carcelario”, en su declaración extrajudicial de fs. 70 a 71 (Tomo I), acota que “respecto a Daniel Mateluna Gómez, expone que lo conoció al interior de la Cárcel Pública de Temuco, el permaneció recluido solo un par de días del mes de septiembre de 1973...El único recuerdo que tiene es que a fines de septiembre de 1973 no lo volvió a ver más y nunca supo que había pasado con él”, y en su declaración judicial de fs. 73 (Tomo I), “ratificó su declaración extrajudicial que rola de fs. 70 a 71 (Tomo I), asegura que no conocía a don Daniel Mateluna y solo tuvo contacto con él durante el período en que coincidieron en la cárcel de Temuco”; UBILDO ANTONIO JIMENEZ VARAS, quien en su declaración extrajudicial de fs. 284 a 285 (Tomo I) “recordó que cuando se encontraba detenido en el Regimiento Tucapel lo trasladaban por un patio esposado con las manos atrás...luego del tiempo logró establecer que uno de sus torturadores en el Regimiento Tucapel, fue un Capitán de apellido Quintana, y el Fiscal Militar que lo interrogó era de apellido Podlech, quien le hizo consultas respecto a Ortigosa”; VICTOR HERNAN MATURANA BURGOS, quien en su declaración extrajudicial de fs. 231 a 238 (Tomo I), relató que “en el mes de septiembre, alrededor de las 15.00 horas en un día de la última semana, en el momento que se encontraba en el patio junto con el resto de prisioneros, fue llamado por un funcionario de Gendarmería para ser llevado a la Fiscalía. También llamó a

José María Ortigosa que también estaba en el patio. Fueron sacados juntos y llevados en el mismo vehículo al Regimiento. Los condujo en una camioneta con Guardia Militar, un Suboficial del servicio de Inteligencia de apellido Moreno, quien siempre vistió de civil... Alrededor de la medianoche del mismo día, sorpresivamente entró a su celda, un Cabo de Gendarmería de apellido Silva, a quien apodaban el "Choro Silva". Muy excitado y sabiendo que él había estado en el Regimiento junto con Ortigosa, le dijo: "Vengo del servicio hospital que entregué a las 12 de la noche y hace poco llegó el cadáver de Ortigosa todo baleado", en declaración judicial de fs. 311 a 317 (Tomo I), respecto "a la situación de José María Ortigosa, sustentó que en el mes de septiembre, día exacto no recuerda, se encontraba en la cárcel de Temuco junto a otros prisioneros y entre ellos José Ortigosa, a quien no ubicaba, ya que eran más de doscientos presos que allí habían. Cuando fueron llamados Ortigosa y él, conducidos en un vehículo Militar al Regimiento Tucapel, al mando de un Suboficial de apellido Moreno. En el vehículo solo iban Ortigosa y él, aquel parecía ser una persona de recursos, ya que le contó durante el trayecto al Regimiento sus inquietudes respecto de la vida que iban a llevar en la cárcel, como pintarían la galería y cosas de ese tipo. Llegados al Regimiento son conducidos al calabozo al lado de la guardia, al rato después fue llevado por un Conscripto a la sala de tortura y a continuación a la interrogación ante el asesor legal de la Fiscalía y luego a la vuelta del calabozo ya no estaba Ortigosa, para enseguida conducirlo de regreso a la cárcel incomunicado. Suma que alrededor de la medianoche del mismo día, sorpresivamente entró a su celda, un Cabo de Gendarmería de apellido Silva, a quien apodaban el "Choro Silva", muy excitado y sabiendo que había salido temprano con Ortigosa, le dijo más o menos lo siguiente: "Vengo del servicio hospital que entregué a las 12 de la noche y hace poco llegó a la morgue el cadáver de Ortigosa todo baleado", en su declaración extrajudicial de fs. 345 a 348 (Tomo I), atina que "respecto de José María Ortigosa, que tenía unos 45 años, 1.80 metros de estatura aproximadamente, macizo, tez morena y cabellos negros. Relató el traslado al Regimiento junto a Ortigosa y como se enteró de su muerte por el funcionario de Gendarmería conocido como el "Choro Silva". Con posterioridad llegó a la cárcel el rumor que a Ortigosa lo habían baleado al intentar fugarse", en su declaración extrajudicial de fs. 561 a 563 (Tomo II), blasona que "dentro de las personas que fueron ejecutadas por razones políticas recuerda a José Ortigosa Ansoleaga, Juan Antonio Chávez Rivas y Daniel Mateluna Gómez. Con estas personas nombradas anteriormente, tuvo algún tipo de contacto ya sea en la cárcel o en el Regimiento, como por

ejemplo en el caso de Ortigosa, con quien fue sacado en el mismo vehículo con dirección al Regimiento, pero en la tarde sólo volvió el, a los días después se sabía que a éste le habían dado muerte”, en su declaración extrajudicial de fs. 581 a 582 (Tomo II), indicó que “con Dixon Retamal, Jaime Eltit y José Ortigosa estuvo en el Regimiento y a quienes vio con evidentes signos de haber sido torturados, debido a su estado físico muy deplorable, además que ellos mismos le comentaban que estaban siendo torturados, por los mismos Militares de la unidad”, en declaración extrajudicial de fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V), respecto a las víctimas de los hechos investigados, Daniel Mateluna Gómez y José Ortigosa Ansoleaga señala que “a ambos los conoció al interior de la Cárcel Pública de Temuco, principalmente a José Ortigosa Ansoleaga, ya que en más de una oportunidad conversó con él e incluso fueron trasladados juntos hasta dependencias del Regimiento Tucapel, los primeros días de octubre del año 1973, siendo esa la última vez que lo vio con vida, ya que él nunca salió del Regimiento y por consiguiente no regresó a la Cárcel. Conforme a su recuerdo, el día en que los fueron a retirar de la Cárcel, se presentó personal del Regimiento Tucapel a cargo del por entonces Sargento Orlando Moreno Vásquez, quien junto a un grupo de Conscriptos procedió a trasladarlos hasta el Regimiento Tucapel. Esto fue a eso de las nueve de la mañana, donde al llegar al Regimiento los dejaron en el calabazo ubicado en la Guardia de ingreso del mismo Regimiento. Respecto a su consulta, comunica que el tiempo que estuvo junto a Ortigosa en el calabozo de la guardia, conversaron diversos temas entre los cuales el trabajo que iban a realizar en la Cárcel Pública, relacionado con los arreglos de algunas dependencias de éstas, dando a entender la claridad que tenía este señor, en que iba a permanecer mucho tiempo detenido, dentro de las cosas que se pudo dar cuenta que Ortigosa provenía de una familia de mucho dinero e incluso tenía propiedades en Villarrica... Después de su incomunicación vuelve a la libre plática junto a los otros detenidos, dándose cuenta que en base a sus comentarios que Ortigosa, no había regresado. No obstante, esta situación la presumía, ya que estando incomunicado al calabazo llegó un Gendarme de apellido Silva, apodado "El Choro" quien omitiendo todo procedimiento interno de la Cárcel habló con él y le comunicó que el cuerpo sin vida de Ortigosa, había llegado baleado al Hospital Regional, señalándole que se enteró directamente de esta situación, ya que él estaba cumpliendo servicio en dicho Centro Asistencial ese día. Hace presente que nunca supo el nombre completo del Sr. Silva, pero mediante averiguaciones que hizo con otro Gendarme, se le dio la información preliminar que hoy día estaría fallecido. Agrega a lo anterior, que nunca supo

qué pasó con el Sr. Ortigosa, al interior del Regimiento, posteriormente se enteró por medio de un Bando Militar, que había sido ejecutado junto a Daniel Mateluna, al intentar huir del Regimiento”, en su declaración judicial fs. 1.509 a 1.510 (Tomo V) respecto “de la oportunidad en que fue trasladado con José Ortigosa Ansoleaga desde la cárcel al Regimiento, recuerda que fue el Sargento Moreno junto a otros Conscriptos quien los sacó de ese recinto penitenciario y los llevó a la Unidad Militar antes indicada. Ese día, primero pasó a la sala de torturas y después se lo llevaron a la Fiscalía Militar. Después volvió a pasar a la sala de torturas. Finalmente regresó a la cárcel en calidad de incomunicado, no recordando si fue el propio Moreno quien lo llevó a la cárcel o no. Lo cierto es que José Ortigosa no iba con el declarante. A su pregunta cuenta que el “Choro” Silva dijo que había visto el cadáver de Ortigosa en la morgue, que estaba baleado”; NELSON RODOLFO THIELEMANN RODRIGUEZ, quien en su declaración judicial de fs. 352 a 354 (Tomo II), detalla que “respecto de José Ortigosa recordó haberlo visto en los pasillos de la Fiscalía”, en su declaración extrajudicial de fs. 567 a 568 (Tomo II) “Rememoró un proceso sustanciado por la Fiscalía Militar contra una sujeto de apellido Ortigosa y que se rumoreaba entre pasillos que esta persona estaba asociada al robo de un maletín con dólares”, VÍCTOR EFREN SILVA FIGUEROA, en su declaración judicial de fs. 366 a fs. 367 (Tomo II) “confirma que lo apodaban en el servicio “El Choro” Silva por su carácter y proceder cuando era funcionario. Detalló que es efectivo que vio en la morgue del hospital el cadáver de José Ortigosa, quien estaba detenido en la Cárcel y lo vio baleado, situación que impuso al preso político el señor Maturana”; ALFREDO GARCÍA DIAZ, quien en su declaración judicial de fs. 377 a 379 (Tomo II) “invocó como nombres de detenidos políticos, entre ellos a José Ortigosa, Gastón Lobos, quien estuvo incomunicado, el señor Omar Venturelli, un funcionario del Ejército de apellido Morales, un señor Mateluna, este caso lo recuerda porque le correspondió entregar la ropa a la señora de él y otros”; MANUEL JESÚS CONTRERAS SALAZAR, quien en su declaración extrajudicial de fs. 430 a 431 (Tomo II) distingue que “respecto a las víctimas de los hechos investigados, sustenta que solamente recuerda el apellido Mateluna, como uno de los detenidos del Regimiento”, lo que ratifica en su declaración judicial de fs. 518 (Tomo II); DOMINGO ESTEBAN QUINTANA BUSTOS, quien en su declaración judicial de fs. 1.057 a 1.058 (Tomo IV), señala que “sí recuerda el nombre de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez, porque escuchó en alguna oportunidad que estaba detenido en el Regimiento”; LUIS RAIMUNDO QUEZADA CHANDIA, quien en su declaración extrajudicial

de fs. 1.317 a 1.320 (Tomo IV *“recuerda el apellido Mateluna, identificándolo como uno de los detenidos del Regimiento Tucapel, lo que supo por boca del mismo Teniente Espinoza, quien en dos oportunidades le conversó sobre esta persona, comentando que estuvo en los momentos en que el detenido fue asesinado, probablemente al interior de la sala de torturas de la Compañía de la Plana Mayor y Servicios, haciendo referencia que dentro de esa misma sala lo estaban interrogando y en medio del interrogatorio el Teniente Vásquez Chahuán, a quien apodaban el “cara de muerto”, le dio un disparo en su frente con su arma de 9 milímetros. Según lo comentado por Espinoza, la víctima después del disparo se habría intentado levantar, gritándoles “Milicos hijos de puta”, cayendo en una mesa donde lo tenían. También Espinoza le dijo que Mateluna no murió inmediatamente y que tuvo que darle el tiro de gracia para que muriera, señalándole además que en el lugar de los hechos también estaban los Detectives y Moreno. Propone que el apellido del fallecido se lo dijo Espinoza de forma accidental, al relatarle los fantasmas que lo atormentaban. Posteriormente este hecho fue comentado por todos los Militares, incluso estos hacían alusión al apellido de la víctima”*, En su declaración judicial de fs. 1.504 a 1.507 (Tomo V), estima que *“sobre la conversación que sostuvo con el Teniente Espinoza, sugiere que ésta ocurrió durante la Campaña que realizó en Curarrehue en 1974... En algún momento comenzó a desahogarse y le habló sobre los fantasmas que lo perseguían y por el caso de un señor de apellido Mateluna. Le dijo algo así como “no sé por qué acabé matándolo”, agregó que no había razones para hacerlo, pero que le había dado rabia, que estaba como poseído y que por esto le habría disparado. Agregó que el Subteniente Lavín, presente en el interrogatorio, se habría “cagado entero” ante la situación y que alguien habría tenido que rematarlo porque quedó vivo después del disparo que él hizo. Suma que dicho interrogatorio al parecer ocurrió en el gimnasio chico del Regimiento, ubicado a un costado del rancho de los Conscriptos”*. NELSON LUIS AGUSTÍN SECKEL CATALÁN, quien en su declaración judicial de fs. 1.649 a 1.652 (Tomo V), menciona que *“en una oportunidad, en su calidad de Subrogante del ayudante titular del Director del Personal, recibió la correspondencia, tomando conocimiento de un sumario que posteriormente le tocó ratificar. La situación era que enviaron a un Suboficial de Reserva de nombre Carlos Cardoen con un detenido de nombre José Ortigosa hacia el Regimiento Tucapel, detenido después de que el Consejo de Guerra en el Regimiento lo dejara libre. Lo anterior lo sabe, pues el propio Carlos Cardoen se lo dijo, éste último era muy amigo de Ortigosa, el cual era intensamente buscado. Asevera que Ortigosa*

era fuertemente buscado en la región, porque era señalado de ser dueño de un campo de Guerrilla. Además de ser intensamente buscado por que era fundador financista del GAP (grupo de amigos personal de Allende). Ortigosa vivía en Rancagua, fue corredor de autos y tenía un garaje grande en Diez de Julio. Carlos Cardoen era amigo de Ortigosa y al enterarse que era buscado éste le habría aconsejado a Ortigosa presentarse en la Fuerza Aérea de Santiago en donde la persona con la cual se presentó, según le dijeron era un General, le señaló que en Santiago no lo buscaban pero que le aconsejaban ir a Temuco a fin de aclarar su situación. Carlos Cardoen en su propio avión lo trasladó a Temuco. Una vez llegado a Temuco a la base Aérea se inicia el operativo en que se señala que fue detenido Ortigosa, el cual fue trasladado hasta el Regimiento Tucapel de Temuco junto a Cardoen. Éste último le contó al deponente que lo dejaron libre y a Ortigosa lo sometieron a Consejo de Guerra. El resultado del Consejo de Guerra fue que se decretó la libertad de Ortigosa. Estando Carlos Cardoen y la señora de Ortigosa esperando que lo dejaran libre, sintieron los disparos y luego alguien del Regimiento les informó que el detenido había intentado escapar y por eso le habían disparado”, y en su declaración judicial de fs. 1.663 a 1.665 (Tomo V) “apunta que nunca vio detenidos desaparecidos, ni supo de la existencia específica de ellos, hasta que le contaron lo que había pasado (señor Ortigosa y Cardoen), después de los años, estando radicado en Santiago, gente que venía de Temuco le contaba rumores de lo sucedido. Apunta que en una conversación que tuvo con Carlos Cardoen, él se refirió a lo que le sucedió cuando trajo a Temuco a su amigo José Ortigosa, para que aclarara su situación, porque era buscado intensamente en la Zona Cautín. Apoya que conoció a Carlos Cardoen, pues era amigo de una amiga suya y de su suegro, por lo cual le comentó la situación, de la cual también el testigo había escuchado, pues fue un hecho público. Según se enteró, el señor Ortigosa era buscado por tener en un campo cerca de Villarrica, una supuesta escuela de guerrillas. Aproxima que Cardoen a la Base Aérea Maquehue, el señor Cardoen vestía de uniforme de la Fuerza Aérea por ser Oficial de Reserva, al presentarse en aquel lugar fueron detenidos ambos y trasladados al Regimiento de Temuco. Aquilata que esta situación debe haber ocurrido antes del mes de noviembre de 1973. Una vez trasladados el señor Cardoen y Ortigosa, fueron interrogados, quedando en libertad Cardoen y el señor Ortigosa quedó a disposición de la Fiscalía Militar. El señor Cardoen le señaló que quien hizo de Juez Militar era el Segundo Comandante del Ejército. Cardoen le avisó a la esposa de Ortigosa, que vivía en Santiago o Rancagua, para que le trajera ropa a su marido y

terminado el proceso dejaron en libertad al señor Ortigosa declarado sin cargos, de esta forma salió libre y conversó con su señora, informándole que había quedado libre y que iría a buscar sus cosas donde habían estado detenido. Concurrió acompañado de un Conscripto, cuando estaba en eso sintieron unos disparos y le informaron que por intento de fuga le habían disparado. Arguye que el señor Cardoen le comentó que suponía que el que ordenó dispararle fue el Comandante Pacheco de la Fuerza Aérea”.

- C. También se hace presente que la defensa insiste en descartar una serie de testimonios, pero ello lo hace desde un punto de vista formal, en cuanto a su defendido, Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud solo fue un Asesor, alguien con ningún poder decisión, que no interrogaba a los detenidos y no tenía conocimiento de lo que pasaba con ellos. En efecto, critica al testigo **Aquiles Poblete Müller**, que cabe hacer presente que este detective participó, interrogó y apremió a personas detenidas al interior del Regimiento Tucapel y en la dinámica, pudo saber y escuchar lo que sucedía con los detenidos, como es el caso de Abogado Podlech Michaud. La defensa sin ningún fundamento descarta a **Mansilla Gatica**, lo hace por razones meramente formales, así por ejemplo, que trabajaba en el Área Financiera o Administrativa y que está actuando de mala fe; sin embargo, en ningún testimonio durante el proceso, se ha demostrado que este testigo u otros estuvieran actuado de mala fe. El testigo **Mansilla Gatica** relata no solo que tomó declaración, sino que se refirió a otros hechos que vivió con el acusado Podlech Michaud.
- D. En cuanto a los peritajes, cabe hacer presente que el peritaje de su favor que cita la Defensa es un peritaje hecho a nivel regional, respecto de una causa; en cambio, los 2 peritajes realizados y que se invocan en el auto acusatorio fueron elaborados por el Laboratorio de Criminalista de Santiago, con mayor experiencia, con mejores antecedentes. Así el **Informe Pericial Documental Caligráfico emitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.395 a 1.423 (Tomo IV)** concluye que de los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica FISCAL, en orden de “LIBERTAT” N° S/N, de la Fiscalía Militar Curacautín de Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a Carabineros de Chile, Subcomisaría Villarrica, la cual dispone la libertad de Mario Fernando Cortes Bordard y Ubildo Antonio Jiménez Varas, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud. No se emite pronunciamiento respecto a la eventual intervención

escrituraria de Oscar Alfonso Podlech Michaud en la confección del texto que indica “peligroso pasarlo SIM”, en la declaración de fecha 26 de septiembre de 1973, otorgada por Osvaldo Bastías Zerón, Director del tránsito de la Municipalidad de Villarrica, acorde lo señalado en el punto respectivo del informe (Detallado en el apartado B.16 de Documentos). Mientras que el **Informe Pericial Documental N°465, de fecha 31 de marzo de 2017, evacuado por Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1.668 a 1.674 (Tomo V)**, concluye que según la evaluación de los antecedentes examinados, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto “Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal” en copia de autorización fechada en Temuco el 18 de diciembre de 1973, dirigida al Doctor Wolfgang Reuter B, del Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín- Temuco del Ejército de Chile, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud. (Detallado en el apartado B.18 de documentos). Sobre esta materia, desde el punto de vista de la racionalidad, la argumentación y la valoración probatoria ¿con que peritaje me tengo que quedar? Obviamente con los peritajes más integrales y que den cuenta con mayor precisión de la firma del acusado Podlech Michaud, ya que sería un contra sentido tomar un peritaje hecho por un personal de menor experiencia y con menos antecedentes. En todo caso, no es solo 1 peritaje, son dos peritajes. Por lo que la argumentación de **la Defensa cae por si sola**.

- E. Siguiendo con la idea anterior, **tampoco puede darse lugar a lo pedido por la defensa**, el Tribunal estará a cada uno de los argumentos dado con anterioridad y en especial, lo que olvida la defensa, es que estamos en sede internacional de los Derechos Humanos, que siempre van más allá del Derecho Penal Ordinario, ya que ese Derecho Penal Ordinaria no contempló ni los delitos de lesa humanidad ni la imprescriptibilidad, ni la condición ni el contexto de la víctimas, tratándose de graves violaciones a los Derechos Humanos. En esta parte, este Tribunal reitera lo señalado por la Jurisprudencia Internacional sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en el sentido de que es muy difícil de determinar los hechos en esta situación y que nunca va a ser una excusa o error de derecho la ejecución u homicidio tal como dice Roxin (Considerando 11° letra B), del numeral 14 de esta sentencia) En consecuencia, no resulta justificable que una persona no entienda que cometer un asesinato es siempre contrario a Derecho, nunca

puede constituir una justificación. Y en ese caso más aún, si la persona es Abogado, Asesor y Fiscal Ad Hoc de la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel.

F. Además el Tribunal precisa que casos similares a los del acusado Podlech Michaud, han sido resueltos por este ministro investigador y ratificados por las Iltmas., Cortes de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema, tal como se precisa en el considerando 5° de esta sentencia.

G. Entonces de lo que se trata, como queda de manifiesto en la ponderación de la prueba, el mérito del proceso y el Auto Acusatorio, que desde el inicio del quiebre constitucional del 11 de septiembre de 1973, el acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud participó en la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel de Temuco de una manera activa y protagónica; y no obstante, los diferentes ilícitos (torturas, secuestros, homicidios), comunicación de bandos sobre muertes de personas) que para un Abogado que trabaja en una Fiscalía Militar deben de resultar de inmediato inverosímiles, atendido el Régimen Militar jerarquizado y las condiciones físicas de los detenidos, por las condiciones de los interrogatorios y por los apremios ilegítimos.

H. Al respecto cabe reiterar lo señalado por la Jurisprudencia Internacional sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el **Tribunal Constitucional Federal Alemán**, cuando se evidencia que ...*“todos quienes formaban parte de la cadena de mando – comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán”* (Considerando 11° letra B), del numeral 3 de esta sentencia). Posteriormente *“La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo. De este modo, tanto*

la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado” (Considerando 11° letra B), del numeral 4 de esta sentencia). Como señala el Tribunal Constitucional Federal Alemán y en la correcta doctrina, no importa la labor que se tuviera en un determinado recinto, en este caso, en el Regimiento Tucapel de Temuco ni siquiera el acusado era un dactilógrafo, sino que era un Abogado, Teniente de Reserva, amigo de Pablo Iturriaga Marchesse, Asesor Legal, Fiscal Ad Hoc, que tomó variadas decisiones sobre el destino de los detenidos que pasaban por el Regimiento Tucapel de Temuco y eran interrogados en la Fiscalía Militar.

- I. Cabe hacer presente además, que el acusado Podlech Michaud antes del quiebre constitucional del 11 de septiembre de 1973, **ya requería información de diferentes personas en la Policía de Investigaciones de Chile**. Dichas circunstancias se corroboran entre otras, por las aseveraciones de: DANIEL ARNOLDO AGUIRRE MORA, quien en su declaración judicial de fs. 1.005 a 1.008 (Tomo III), asevera que *“respecto de Alfonso Podlech Michaud, puede señalar que un año antes que ocurriera el Golpe Militar, éste abogado iba al Cuartel de Investigaciones a requerir información de tipo político. Recuerda que se entrevistaba con el Prefecto Leonel Hormazábal y con el detective Quiroz. Sabe que le entregaba esta información a alguien en el Regimiento Tucapel, pero desconoce a quién. Esta información la obtenía desde los archivos que la Inteligencia de Investigaciones tenía y la usaba con el grupo de Patria y Libertad de Temuco, según comentaban los mismos funcionarios. Después del 11 de septiembre de 1973 Podlech siempre se mantuvo muy cercano y activo adentro del Regimiento Tucapel. Dice que incluso en una oportunidad en que el Prefecto lo presentó ante la "Junta Chica" de Temuco, Podlech estaba con ellos”* y en careo de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV), suma que *“en cuanto a Alfonso Podlech, indica que antes del 11 de septiembre de 1973 iba siempre al Cuartel de Investigaciones a buscar información de inteligencia Para esto pasaba al segundo piso de la unidad y en alguna oportunidad lo vio junto al señor Quiroz”*; AQUILES ALFONSO POBLETE MÜLLER, quien en su declaración judicial de fs. 615 a 617 (Tomo II), narra que *“Toda la información se la entregaban a Ubilla y éste, a su vez, le entregaba los antecedentes a la Fiscalía Militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech”*; HERNÁN RAÚL QUIROZ BARRA quien en careo de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV) atina que *“atendió al señor Podlech en el Cuartel de Investigaciones en una oportunidad*

en que él se presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective Ortiz”.

- J. En este punto además, cabe leer los artículos de prensa de **fs. 6 (Tomo I) y que se titula “Once bajas en Cautín”**, noticia de fecha 21 de octubre de 1973, que relata que *“hasta el momento se han registrado 11 bajas en Cautín, correspondientes a individuos que pretendieron escapar de los Cuarteles, donde se los mantenía prisioneros o agredir a los Centinelas que los custodiaban, de acuerdo a los Bandos oficiales. Seis de ellos fueron dados de baja por efectivos del Ejército: Diego Durán, Daniel Mateluna Gómez, José Ortigosa Ansoleaga, Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez. el sexto corresponde a un desconocido que no portaba documentos y que fuera abatido durante las horas de toque de queda al no obedecer la voz de alto. Otros dos fueron dados de baja por Centinelas del grupo N°3 de helicóptero: Hernán Henríquez y Alejandro Flores. El resto, por patrullas de Carabineros: Guillermo Hernández Elgueta, ex Subdelegado de Cunco, Leomedes Monroy Seguel y Hernaldo Aguilera Salas”* (detallado en el apartado B.1 letra e de Documentos). Y el artículo de prensa de **fs. 7 (Tomo I) que se titula “En Regimiento de Temuco, muertos dos Marxistas Por Intento de Fuga”**, que relata que *“dos personas que estaban detenidas en el interior del Regimiento Tucapel de Temuco fueron dadas de baja por las guardias internas, al intentar escapar del recinto. Estas personas fueron identificadas como “Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga”, de quienes no fueron proporcionados mayores antecedentes. El intento de fuga, según el Bando dado a conocer por la Comandancia de la Guarnición Militar de Temuco, ocurrió en la noche del día 02 de octubre”.* (detallado en el apartado B.1 letra f de Documentos). Además es la misma defensa, quien acompaña un **artículo de prensa a fs. 2.495 (Tomo VII)** (cuando hace alusión a la entrevista a los Sres. Ministros Alejandro Solís y Fernando Carreño), que se titula *“Se espera el requerimiento formal de la Justicia Italiana, aunque tampoco se descarta que Alfonso Podlech sea entregado antes”, al final dicho documento la afirma que “Podlech Delazare insistió en que su familia hubiera preferido que las imputaciones fueran conocidas en los Tribunales Chilenos “porque nosotros somos abogados y creemos en la justicia chilena”, concluyó”.* A su vez cabe señalar los propios dichos del acusado en las entrevistas otorgadas a los Diarios de la zona (detalladas en el apartado B.29 letra b de Documentos), así: **de fs. 3.026 a 3.027 (Tomo VIII)**, en copia del Diario Austral del domingo 01 de julio de 1990, que se titula *“Abogado Alfonso Podlech Michaud. Confesiones*

del ex Fiscal Militar”, invoca que: *“Los Marxistas quieren aparecer ahora como inocentes palomas. Justifica la intervención militar como la única alternativa democrática en su contexto y asegura que en Chile hubo una guerra. Estima que los muertos y desaparecidos son el precio que hubo que pagar para llegar al Chile que hoy tenemos. Inicia su entrevista acotando que asumió como Fiscal Militar de Temuco el 02 de marzo de 1974. Incluso antes de eso, fue Asesor Legal de la Fiscalía porque el Comandante Iturriaga que era amigo suyo se lo pidió, especialmente para algunos casos puntuales que se le estaban presentando, como el de Nehuentúe. Cuando llegó el día 11 de septiembre, le pidió que le ayudara con el objeto de reforzar su personal en la Fiscalía Militar, la que estaba a cargo del Mayor Luis Jofré. Se le pidió por el Comandante Iturriaga que se apersonara ante el Presidente de la Corte de Apelaciones de la época con el objeto que, como hombre de Derecho, al igual que el encartado, tuviera la gentileza, dado el momento especial que estaba viviendo el país, para los efectos de facilitar personal necesario al Comandante de la Guarnición, a fin de interrogar a las personas en forma adecuada, porque eran muchos detenidos. Asimismo le pidió que ayudara en la organización de los Consejos de Guerra y para lo anterior, el acusado pidió la colaboración del Colegio de Abogados, de tal modo que todos los procesados tuvieran asesoría legal; así de fs. 3.028 a 3.029 (Tomo VIII), en entrevista de febrero de 1983, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Los desacuerdos del ex Fiscal Militar”, el acusado en lo pertinente asevera que: “Le tocaron todos los procesos del MIR a contar de 14 de febrero de 1974, cuando se hizo cargo de la Fiscalía. Tomó parte en los Consejos de Guerra como acusador y allí se condenó a innumerables personas a penas diversas. Posteriormente a la pregunta que dice relación con que esperó que echaran a su hermano para levantar su voz, preguntándole el Periodista si cree que tiene también una parte de responsabilidad, el acusado de autos contesta que si hubiera sido civil es posible que en ese momento, o antes, hubiera elevado la voz disidente en algunos aspectos puntuales, porque sigue creyendo que los postulados de la Junta son los necesarios y adecuados y por ello apoya al Gobierno Militar. Pero el problema de su hermano fue el factor detonante de toda una inquietud personal”; y de fs. 3.030 a 3.032 (Tomo VIII), en entrevista que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Ex Fiscal Militar de Cautín. “Espero que la Comisión de Verdad y Reconciliación no se transforme en una de venganza y ajuste de cuentas”, en pertinente justifica que: “Rechaza lo que llama “la utilización política que se ha hecho del hallazgo de las osamentas”. Niega saber que en Temuco hayan también detenidos desaparecidos y ejecutados.*

Dice ser responsable de todo lo que sucedió a contar del día 02 de marzo de 1974 y que pasó por Fiscalía. Renuncia a cualquier Ley de Amnistía o lo que sea si el día de mañana pretenden que ha tenido alguna responsabilidad: ahí está él para asumirla. No tiene ninguna duda de que así va a ser. A la pregunta de la Periodista respecto de si mientras fue Fiscal sabía que estaba haciendo desaparecer gente, responde que esto del “desaparecimiento” es entre comillas, porque hay muchas personas que ese minuto iban “huyendo” hacia el extranjero. Era una situación bastante peculiar. Afirma que la DINA actuó llevando a los detenidos como debe ser. Respecto a la pregunta de la Periodista sobre si ellos le entregaban los detenidos, el acusado responde que algunos, otros los llevaba Carabineros, depende de la persona que había sido detenida. Respecto a la pregunta de si la información que tenía para los juicios es la que entregaba la DINA, responde que esos son antecedentes nada más; pero no constituyen una prueba completa de los hechos. De tal manera que se tenía que cotejar con las declaraciones y otros antecedentes si era procedente. Respecto a la pregunta si a los prisioneros los interrogaba el encargado o lo hacía la DINA, éste responde que él los interrogaba porque era el Fiscal Sustanciador, de tal manera que los detenidos podían venir con un parte, con la declaración extrajudicial; pero tenían que prestar su declaración ante él. Posteriormente y frente a la pregunta de qué causal era la invocada para pedir la pena de muerte en Consejo de Guerra, el encartado responde que en el Código de justicia Militar hay numerosos hechos: traición a la patria y tantos otros delitos. Aclara que el Código de Justicia Militar se aplica a todas las personas. Recordando que estábamos en una guerra y se aplicaba a todas las personas. Luego, consultado sobre los Crímenes de Lesa humanidad, lo cuales no prescriben y son inamnistiables, el acusado responde que son disposiciones de general aplicación, pero lógicamente cuando hay leyes especiales que se dictan en países que han tenido una situación especial como tuvo Chile en su oportunidad, en que incluso los Obispos fueron partidarios de que se dictara una Ley de Amnistía, no cabe ninguna duda de que la Ley especial siempre prima sobre la general. De tal manera, que a través de la Amnistía quedó solucionado todo el problema de los delitos que en aquella oportunidad tuvieron lugar, porque esto favoreció a ambos sectores. Finalmente respecto a los detenidos desaparecidos urde que su posición es muy simple: cree que existiendo esta Comisión de Verdad y Reconciliación, espera que no se transformen una Comisión de venganza y ajuste de cuentas, lo que sería tremendamente lamentable. Existiendo esta Comisión los mismos personeros, teniendo conocimiento de los hechos a través de los cuales se

pueda establecer donde se encuentran las osamentas de las personas que efectivamente hayan muerto, con el máximo de discreción, lisa y llanamente procedan a entregar los cadáveres”

20°) EN CUANTO A LA TIPICIDAD Y ELEMENTOS DEL DELITO:

Sobre esta materia el tribunal se remite a lo anteriormente razonado, señalando que:

- A.** No deja de ser un asunto formal lo manifestado por la defensa, en cuanto se refiere a la imprecisión del auto acusatorio respecto del supuesto numeral del artículo 15 del Código Penal, cabe señalar que podría haber apelado y no lo hizo del auto de procesamiento y en todo caso, este es el momento jurisdiccional, la sentencia, para calificar el delito y calificar el tipo de participación.
- B.** A diferencia de lo que expone la defensa el auto acusatorio de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI) de 15 de marzo de 2019, es preciso y claro en el contexto de los hechos, como se cometieron los hechos, como fueron detenidas las víctimas Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa, como fueron dadas de baja y la dinámica que existía desde que una persona llega detenida al Regimiento Tucapel, donde era interrogada en la Fiscalía Militar o en otro lugar y su traslado en la cárcel pública. En consecuencia, la Defensa no ha hecho una lectura adecuada ni del mérito del proceso ni del Auto Acusatorio.
- C. En cuanto al nexo causal o la relación de causalidad entre el comportamiento y el resultado:** el Tribunal reitera lo dicho. Existe un Regimiento Militar (Tucapel de Temuco), personas que fueron citadas por la Autoridad Militar a la Fiscalía Militar a través de Bandos, comunicaciones radiales, comunicaciones de la prensa, personas que se presentaron en dicho Regimiento, fueron interrogadas en la Fiscalía, fueron objetos de apremios ilegítimos, trasladados a la cárcel pública y luego ejecutadas en el mismo lugar que habían sido citadas. Las personas que participaron en esos hechos sin duda que son muchos, partiendo por el Coronel Pablo Iturriaga Marchesse, Mayor Luis Jofré Soto, Capitán Nelson Ubilla Toledo, todos fallecidos (tal como consta a fs. 1.795, 1.793 y 3.022 respectivamente); pero también es responsable el acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, no por lo que indica que la Defensa: “por lo que es el único vivo y hay una mala fe de los

testigos y otros elementos superficiales”; sino que de la prueba ponderada del mérito del proceso y del Auto Acusatorio, de la Jurisprudencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, y por su protagonismo y actuaciones ¿qué duda cabe que el acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud tuvo una participación como autor en estos hechos?. La Defensa debe leer los diferentes fallos en materia de Delitos de Lesa Humanidad, la Jurisprudencia de la Justicia Alemana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata este hecho de un hurto, se trata de graves violaciones a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y los razonamientos argumentativos no son los que hace la Defensa, sino que en conformidad a la prueba hay que aquilatar y ponderar adecuadamente, cosa que la Defensa no hace, cita autores que no vienen al caso, porque eso no se trata de delitos de Lesa Humanidad.

- D. Respecto de los actuarios que trabajaron con Podlech Michaud en la Fiscalía, obviamente que estas personas fueron, eran conocidos y favoritos del acusado. Por lo que resulta muy difícil que declaren algo distinto a lo manifestado por la Defensa.
- E. Cabe hacer presente también, que no es efectivo que la actuación del acusado fue coadyuvar a la acción de la justicia y no entrarla, pues como consta en el testimonio de numerosos testigos y la prueba ponderada, ningún debido proceso resiste la Justicia Militar, ningún debido proceso resiste la forma en que eran detenidos, en que dichas personas eran interrogadas, apremiadas e ingresadas al Regimiento Tucapel de Temuco y muchos de ellos después ejecutados. Luego resulta no verosímil que la defensa desconozca aquello y no tenga presente que en ese Regimiento se estaban realizando actos contrarios a Derecho y sin el mínimo debido proceso.

En consecuencia en estos primeros alegatos, no es posible darles lugar a todas ellas.

21°) EN CUANTO A LA CONTESTACIÓN DE LAS ACUSACIONES

PARTICULARES: La Defensa indica que los Acusadores Particulares reproducen la acusación de oficio, pero sin precisar cómo se encuentran materializadas esas acciones, las que jamás han tenido lugar por parte de su representado. Sobre esta materia el Tribunal estará a lo razonado extensa y detenidamente en forma precedente, **respecto a la Acusación de Oficio y en relación a las**

Acusaciones Particulares se reflexionará con posterioridad, al igual que sobre la solicitud de las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal alegadas.

22°) EN CUANTO A LOS TESTIMONIOS PRESENTADOS POR LA DEFENSA: Esto es, Declaración Judicial de ARCHIVALDO HUMBERTO LOYOLA LÓPEZ de fecha 27 de agosto de 2019, rolante de fs. 2.651 a 2.654 (Tomo VII); Declaración Judicial de GUIDO ALFONSO SEPÚLVEDA SÁNCHEZ de fecha 27 de agosto de 2019, rolante de fs. 2.655 a 2.658 (Tomo VII); y Declaración Judicial de JULIO GONZÁLEZ RENÉ JARA GONZÁLEZ de fecha 27 de agosto de 2019, rolante de fs. 2.659 a 2.661 (Tomo VII); en nada arredra lo que se ha ponderado y relacionado en relación a la existencia de los hechos (delito de Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados) y respecto de la participación del acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud. Ello porque, más bien, se refieren a personas que no tuvieron conocimientos directos de o indirectos de los hechos y además, en el caso del testigo ARCHIVALDO HUMBERTO LOYOLA LÓPEZ hace una relación de cuando el acusado presentó la petición a la Corte de Apelaciones de Temuco el 17 de septiembre de 1973 como Fiscal Ad Hoc. En todo caso, ratifica el protagonismo del acusado en la Fiscalía Militar, pero **ninguno de los testigos se refieren a los hechos ni a la Participación al interior del Regimiento Tucapel de Temuco del acusado.**

23°) EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS EN EL QUINTO OTROSÍ DE SU PRESENTACIÓN DE FS. 2.441 a 2.494 (Tomo VII): Tampoco en nada mengua los razonamientos y ponderaciones de las pruebas del proceso, el mérito del proceso y el Auto Acusatorio de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI). En efecto, ninguno de los 22 documentos se refiere a alguna persona o algún hecho que hubiera tenido conocimiento directo o indirecto de lo sucedido en el Regimiento Tucapel de Temuco y en la Fiscalía Miliar, en especial respecto de los hechos que involucró los Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga. En efecto:

- A.** Nada aporta para esta causa las entrevistas a los Ministros Alejandro Solías y Fernando Carreño de fs. 2.495 y 2.498 (Tomo VII).
- B.** Respecto al Fallo Corte Interamericana caso "Norin Catriman Versus Chile" de fs. 2.496 a 2.497 (Tomo VII), de igual forma este Tribunal a diferencia de lo que expone la Defensa, siempre tiene en consideración la Jurisprudencia de la

Corte Interamericana y ha ponderado en su contexto (como se ha hecho precedentemente).

- C.** Nada aportan todos los medios de prueba y el artículo de Prensa de fs. 2.495 (Tomo VII).
- D.** Tampoco aporta el Certificado de Manuel Valdés Valdés de fs. 2.499 (Tomo VII); el Certificado de Julio Jara González de fs. fs. 2.500 (Tomo VII); el Oficio Estado Mayor del Ejército de 22 de Abril de 2009, rolante de fs. 2.502 a 2.503 (Tomo VII), y el de septiembre de 2006, rolante de fs. 2.502 a 2.503 (Tomo VII); la Carta de fecha 13 de junio de 2014, rolante de fs. 2.505 a 2.506 (Tomo VII), remitida por Miguel Muñoz Farías (General de División, Jefe del Estado Mayor General del Ejército) a Gustavo Promis Baeza (abogado de Alfonso Podlech Michaud).
- E.** En cuanto a la declaración judicial de Gastón Mecklenburg de fecha 05 de Diciembre de 2013, rolante de fs. 2.507 a 2.509 (Tomo VII), si bien es cierto se refiere al contexto de la época, habla sobre el oficio de la Fiscalía Militar que llegó a la Corte de Apelaciones pidiendo funcionarios que pudieran ayudar a solucionar el gran número de detenidos que había en el Regimiento, reconociendo las firmas del Acta de Pleno de fojas 1.061. Pero en lo que dice relación con que el Sr. Podlech estaba en la Fiscalía, ignora el título que podía tener o si tomaba decisiones, aunque si recuerda haberlo visto de uniforme. También es importante señalar que dicho testigo y como una apreciación particular, señaló que el Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, no iba a recibir a cualquier persona que llegara de la calle a solicitar algo, él necesariamente debe haber tomado conocimiento respecto a la investidura o mandato que ostentaba el abogado. En consecuencia, diferencia de lo que expone la Defensa este testigo nada aporta ni menos puede desvirtuar el Auto Acusatorio y toda la ponderación de la prueba que se ha hecho precedentemente, salvo las precisiones señaladas.
- F.** En cuanto a la declaración de Dorian Novoa Godoy de fecha 08 de Septiembre de 1977, rolante de fs. 2.510 a 2.511 (Tomo VII), ésta se trata de un funcionario en Comisión de Servicio en la Fiscalía Militar de Cautín, siendo una simple declaración que no desvirtúa el mérito del proceso ni el Auto Acusatorio. Además no conocía las dinámicas de poder al interior de la Fiscalía Militar, ni la labor que efectuaba Nelson Ubilla. En consecuencia nada aporta.

- G.** En cuanto a la declaración de Guido Sepúlveda Sánchez de fecha 28 de Septiembre de 2010, rolante de fs. 2.512 a 2.513 (Tomo VII), éste no dice mucho y no es un testigo directo respecto de los hechos acaecidos en el Regimiento Tucapel de Temuco y que forman parte de este proceso. En consecuencia, nada aporta y desconoce todo el material probatorio de la causa y su ponderación.
- H.** Tampoco aporta Certificado de Gendarmería de Chile de 14 de Marzo de 2017.
- I.** En cuanto al Informe Pericial de la PDI del 4 de Julio de 2014 éste ya fue analizado precedentemente, en especial, en el Considerando 12° de esta sentencia, en cuanto a la imprecisión del auto de procesamiento y una interpretación incorrecta de antecedentes allegados a la causa e insuficiencia de un cargo para imputar responsabilidad criminal.
- J.** En cuanto a la sentencia Corte Suprema en causa rol 2182.1998, sobre secuestro calificado de Luis Jorge Almonacid Dúmenez de 28 Enero de 2016 y sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, causa rol 2182-98, sobre secuestro de Aladín Rojas de 22 de Enero de 2019, reitera el tribunal que a diferencia de lo que expone la Defensa, siempre tiene en consideración la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y ha ponderado en su contexto (como se ha hecho precedentemente).
- K.** En cuanto a la declaración de Mario Seguel Cides de fecha 13 de Abril de 2013, rolante de fs. 2.550 a 2.551 (Tomo VII y a la declaración extrajudicial de Teodoro Ribera Beneit, de fecha 10 de Enero de 2011, rolante de fs. 2.552 a 2.553 (Tomo VII), estos testigos nada aportan ni menos pueden desvirtuar el Auto Acusatorio y toda la ponderación de la prueba que se ha hecho precedentemente.
- L.** En cuanto a la supuesta “copia de la resolución dictada por la Corte de París” enunciada por la defensa en el numeral 18 del Quinto Otrosí de su escrito de fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII), ésta en realidad corresponde al documento titulado “Notificación de Auto de Procesamiento” dirigida al Sr. Emilio Sandoval Poo, que contiene además las fechas de las órdenes de detención de diferentes personas; y luego contiene una plana sobre las bases jurídicas en el Derecho Internacional, las que hacen mención a la responsabilidad del superior

jerárquico. En consecuencia, el documento acompañado no corresponde a lo referido por la Defensa de autos y nada tiene que ver con la presente causa, ni siquiera nombran al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, nada aporta y desconoce todo el material probatorio de la causa y su ponderación. Y aunque correspondiera a lo resolución dictada por la Corte de París, hay que hacer presente que se trata de un país diferente, otra jurisdicción otro sistema procesal y en ella demás, no se acusó ni investigó por los delitos que se investigan hoy.

M. Mucho menos aporta la definición de asesor de fs. 2.556 (Tomo VII) y se desvirtúa con todo lo ponderado con los medios de pruebas de fs. 2.556 (Tomo VII).

N. Del mismo modo, tampoco aporta al proceso, el Certificado del Tribunal Electoral Regional de la Araucanía de fs. 2.557 a 2.558 (Tomo VII), nada dice en materia de hechos y participación del acusado de esos hechos. En el igual sentido, el Certificado del Presidente del Colegio de Abogados de Chile de fs. 2.559 a 2.560 (Tomo VII) y el Certificado del Director Docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor de fs. 2.561 (Tomo VII).

24°) Que sin perjuicio de lo ampliamente ponderado y relacionado y para mayor ilustración de lo aquilatado, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados. Además se reitera lo ya valorado de los siguientes elementos probatorios específicos que a continuación se indican y analizan:

1) DECLARACIONES (30):

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

A.1 HECTOR ULISES GONZALEZ CASTRO.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre del 2012, rolante a fs. 397 a 400 (Tomo II), ratificó la declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, que rola de fojas 286 a 287 de autos. El Regimiento, en septiembre de 1973 pedía que se les llevaran detenidos a dirigentes sociales de la ciudad de Villarrica. Los solicitaban telefónicamente, sin órdenes escritas. Al ver esta situación llamó al Fiscal Militar, **Alfonso Podlech**

Michaud y coordinaron una reunión para analizar la situación, en la que regularizaron la forma en que se solicitaban a los detenidos. Desde esa fecha el Fiscal Militar **Podlech**, ordenó que todo se hiciera por escrito. Recuerda a **José María Ortigosa**, ya que les arreglaba el móvil que utilizaban en la Policía de Investigaciones mientras se desempeñó en Santiago. El taller de **José María Ortigosa**, estaba ubicado en calle Portugal, cercano a 5 de julio. Luego lo volvió a ver en Villarrica, sólo en una oportunidad. Eso fue antes del Golpe Militar. Ese encuentro fue en el Cuartel, ya que lo fue a ver. Precisa que él **no encontró armas en el Fundo Catrico**. Dio cuenta a sus superiores, una vez efectuado el allanamiento, que no había encontrado armas en ese lugar. Indicó tener conocimiento que **José Ortigosa** había comprado el campo en el sector Catrico, ubicado frente a un Cuartel de la Fuerza Aérea. Cuando fueron a llamar la casa y no encontraron armas, a cargo del lugar había un administrador. Supo por el Capitán de Carabineros, **Ramón Torrealba**, que ellos fueron y encontraron iniciadoras, dinamita y pizarras. El allanamiento lo hicieron por orden telefónica de la Fiscalía Militar. Insiste que ellos, el grupo de Investigaciones no encontraron nada de armas en ese lugar. Según su condición de Policía cree que “cargaron” el lugar. Barbulló que supo que había muerto **José Ortigosa** por un **Bando** que se comunicó. Luego, unos dos o tres meses, llegó gente de la DINA que andaba investigando las circunstancias de la muerte de **José Ortigosa**. Llamó a la Fiscalía Militar y le dio cuenta a **Alfonso Podlech**, quien le ordenó dejarlos detenidos.

En diligencia de careo entre **Héctor Ulises Gonzalez Castro** y **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, de fecha 12 de agosto del 2013, rolante a fs. 540 (Tomo II), ratificó en lo pertinente sus dichos de fs. 397. No reconoce a la persona con quien se le carea. Explaya que cuando llamó por teléfono a la Fiscalía Militar alguien le informó que el Fiscal era **Alfonso Podlech Michaud**. Por este motivo pensó que él lo era.

A.2 ELIAS AMAR AMAR.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre de 2003, rolante de fs. 61 a 62 (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 583 a 584 (Tomo III), anexa que fue detenido el 14 de septiembre de 1973 en horas de la noche, en el interior de su domicilio por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, quienes vestían de uniforme y luego de realizarse un gran operativo. Luego de su detención, fue trasladado a la Base Aérea de "Maquehue", donde fue interrogado y torturado. Esa misma tarde los mismos soldados de la FACH lo trasladaron a la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel de Temuco, donde fue llevado ante el

Fiscal Militar, percatándose que se trataba de un conocido abogado de la zona de nombre **Alfonso Podlech**, quien lo mandó incomunicado a la cárcel pública de Temuco. Recordó haber visto entre otras personas a **Pedro Ríos, Daniel Mateluna, José Ortigosa y Omar Venturelli**. Apunta que en el caso de **Ortigosa y Mateluna, estos fueron muertos a principios del mes de octubre, luego de haber sido sacados de la cárcel**, por personal Militar quienes los trasladaban al Regimiento, ignorando las circunstancias en que ocurre la muerte de estos dos y quienes lo hicieran. En cuanto a las veces que tuvo ocasión de ver a estas personas, solo a **Mateluna lo vio en precarias condiciones físicas debido a las torturas recibidas por parte de sus interrogadores**, pero en el caso del resto de los nombrados pudo darse cuenta que se encontraban en un buen estado físico.

En declaración extrajudicial, de fecha 31 de agosto de 1990, rolante de fs. 89 a 91 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 228 a 230 (Tomo I), escrutó que en la cárcel, había unos 700 a 800 detenidos, se encontró allí con **Pedro Ríos, Venturelli, Ortigosa** quien llegó, luego fue sacado y llevado al Regimiento. Destacó que en la noche y en la tarde venían a buscar detenidos, los llamaban por una lista, algunos volvían y otros no. Respecto a **Mateluna**, lo reconoció, porque lo había conocido en calidad de dirigente deportivo. A **Mateluna y Ortigosa los llevaron juntos un día, después no volvieron** y no supo más de ellos.

A.3 ELCIDES LUIS GUBELIN DURAN.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de Noviembre de 2003, rolante de fs. 63 a 64 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 585 a 586 (Tomo III), apunta que **cerca del 20 de septiembre de 1973 llegó a la cárcel de Temuco, oportunidad en la cual tuvo la ocasión de ver detenidos en este lugar a Daniel Mateluna y José Ortigosa**, quienes en una oportunidad fueron sacados del penal, ignorando para donde eran llevados o en qué circunstancias fueron muertos, ya que a los días siguientes **se enteró, por comentarios, que habían sido al parecer fusilados**. El primero de los nombrados **estaba en muy mal estado físico producto de las torturas recibidas, mientras que en el caso de Ortigosa, éste era una persona muy activa y que incluso había pintado las galerías del recinto carcelario**.

En declaración extrajudicial, de fecha 28 de febrero de 2012 rolante de fs. 70 a 71 (Tomo I), respecto a **Daniel Mateluna Gómez**, expone que **lo conoció al interior de la Cárcel Pública de Temuco**, el permaneció recluso solo un par de días del mes de septiembre de 1973, no recordando si en alguna oportunidad le mencionó el motivo por el cual había sido detenido, como tampoco

recordó haberlo visto en malas condiciones físicas. El único recuerdo que tiene es que **a fines de septiembre de 1973 no lo volvió a ver más y nunca supo que había pasado con él.**

En declaración judicial, de fecha 19 de marzo de 2012 rolante a fs. 73 (Tomo I), ratificó su declaración extrajudicial que rola de fs. 70 a 71 (Tomo I), asegura que no conocía a don Daniel Mateluna y solo tuvo contacto con él durante el período en que coincidieron en la cárcel de Temuco, por lo que desconoce qué ocurrió con esta persona.

A.4 UBILDO ANTONIO JIMENEZ VARAS.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto del 2012, rolante a fs. 284 a 285 (Tomo I), respecto de Daniel Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga, acotó que del primero de ellos desconoce antecedentes y a Ortigosa le tocó conocerlo debido a que él tenía un campo en el sector de Catrico y se comentaba que era activista del Gobierno y pagado para realizar estas labores, a quien recordó que cuando se encontraba detenido en el Regimiento Tucapel lo trasladaban por un patio esposado con las manos atrás, desconociendo mayores antecedentes de su paradero. Respecto a la consulta, destacó que luego del tiempo logró establecer que uno de sus torturadores en el Regimiento Tucapel, fue un Capitán de apellido Quintana, y el Fiscal Militar que lo interrogó era de apellido Podlech, quien le hizo consultas respecto a Ortigosa.

A.5 VICTOR HERNAN MATURANA BURGOS.

En declaración extrajudicial de fecha 31 de agosto de 1990, rolante de fs. 231 a 238 (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 301 a fs. 306 (Tomo I), relató que en el mes de septiembre, alrededor de las 15.00 horas en un día de la última semana, en el momento que se encontraba en el patio junto con el resto de prisioneros, fue llamado por un funcionario de Gendarmería para ser llevado a la Fiscalía. También llamó a José María Ortigosa que también estaba en el patio. Fueron sacados juntos y llevados en el mismo vehículo al Regimiento. Los condujo en una camioneta con Guardia Militar, un Suboficial del servicio de Inteligencia de apellido Moreno, quien siempre vistió de civil. Continuó que llegados al Regimiento, los hacen esperar en el calabozo al lado de la guardia. Transcurridos unos minutos llega un Conscripto y vendándole la vista lo conduce al gimnasio, entregándolo al equipo de torturadores. Terminados estos su tarea, se lo llevan a declarar a la Fiscalía, donde lo interroga el asesor legal en base, informó que aquellos lo habían entregado. Después de

esto se le lleva de nuevo al mismo calabozo, permaneciendo un tiempo breve, pues **José Ortigosa** ni ningún otro detenido permanecido en él. Lo llevan de vuelta a la cárcel incomunicado. Alrededor de la medianoche del mismo día, sorpresivamente entró a su celda, un Cabo de Gendarmería de apellido **Silva**, a quien apodaban el “**Choro Silva**”. **Muy excitado y sabiendo que él había estado en el Regimiento junto con Ortigosa, le dijo: “Vengo del servicio hospital que entregué a las 12 de la noche y hace poco llegó el cadáver de Ortigosa todo baleado”**. De esta forma supo la muerte de esta persona, lo que verifico días después, cuando se le dejó en libre platica y se reintegró al grupo de presos políticos.

En declaración judicial de fecha 20 de febrero de 1991, rolante a fs. 311 a 317 (Tomo I), ratificó su declaración prestada ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 31 de agosto de 1990. Respecto a la situación de **José María Ortigosa**, sustentó que en el mes de septiembre, día exacto no recuerda, se encontraba en la cárcel de Temuco junto a otros prisioneros y entre ellos **José Ortigosa**, a quien no ubicaba, ya que eran más de doscientos presos que allí habían. Cuando **fueron llamados Ortigosa y él, conducidos en un vehículo Militar al Regimiento Tucapel, al mando de un Suboficial de apellido Moreno**. En el vehículo solo iban **Ortigosa** y él, aquel parecía ser una persona de recursos, ya que le contó durante el trayecto al Regimiento sus inquietudes respecto de la vida que iban a llevar en la cárcel, como pintarían la galería y cosas de ese tipo. Llegados al Regimiento son conducidos al calabozo al lado de la guardia, al rato después fue llevado por un Conscripto a la sala de tortura y a continuación a la interrogación ante el asesor legal de la Fiscalía y luego a la vuelta del calabozo ya no estaba **Ortigosa**, para enseguida conducirlo de regreso a la cárcel incomunicado. Suma que alrededor de la medianoche del mismo día, sorpresivamente entró a su celda, **un Cabo de Gendarmería de apellido Silva, a quien apodaban el “Choro Silva”, muy excitado y sabiendo que había salido temprano con Ortigosa, le dijo más o menos lo siguiente: “Vengo del servicio hospital que entregué a las 12 de la noche y hace poco llegó a la morgue el cadáver de Ortigosa todo baleado”**.

En declaración extrajudicial de fecha 21 de febrero de 1991, rolante a fs. 345 a 348 (Tomo I), atina que respecto de **José María Ortigosa**, que tenía unos 45 años, 1.80 metros de estatura aproximadamente, macizo, tez morena y cabellos negros. Relató el traslado al Regimiento junto a **Ortigosa** y como **se entera de su muerte por el funcionario de Gendarmería conocido como el “Choro Silva”**. Con posterioridad llegó a la cárcel el rumor que a **Ortigosa** lo habían baleado al intentar fugarse.

En declaración extrajudicial de fecha 03 de julio del 2003, rolante de fs. 561 a 563 (Tomo II), blasona que dentro de las personas que fueron ejecutadas por razones políticas recuerda a **José Ortigosa Ansoleaga, Juan Antonio Chávez Rivas y Daniel Mateluna Gómez**. Con estas personas nombradas anteriormente, tuvo algún tipo de contacto ya sea en la cárcel o en el Regimiento, como por ejemplo en el caso de **Ortigosa, con quien fue sacado en el mismo vehículo con dirección al Regimiento**, pero en la tarde sólo volvió el, a los días después se sabía que a éste le habían dado muerte. Agregó con relación a las personas por las cuales eran interrogadas y/o torturadas en el Regimiento Tucapel, que rememora al entonces Capitán **Nelson Ubilla Toledo**, el Suboficial **Leone Quilodrán Burgos**, un Suboficial **Orlando Moreno Vásquez** y un Oficial de nombre **Manuel Vásquez Chahuán**. Acotó que respecto a los funcionarios de la Fiscalía Militar que operaban los primeros días del mes de octubre de 1973, recuerda que el Fiscal era el Mayor **Luis Jofré Soto**, quien además era Segundo Comandante del Regimiento; el Asesor Jurídico **Alfonso Podlech Michaud**, quien en su exclusiva condición de abogado asumió el puesto, pero debido a la personalidad que tenía **Jofré, un poco tímido, éste era quien "hacía y deshacía" en la Fiscalía**.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre del 2003, rolante a fs. 581 a 582 (Tomo II), indicó que con **Dixon Retamal, Jaime Eltit y José Ortigosa** estuvo en el Regimiento y a quienes vio con evidentes signos de haber sido torturados, debido a su estado físico muy deplorable, además que ellos mismos le comentaban que estaban siendo torturados, por los **mismos Militares de la unidad**. Mayoritariamente hablaban y era muy conocido el método de la aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo por parte de los torturadores hacia los detenidos. Hizo presente que mientras permaneció detenido hasta el mes de enero de 1976, pudo percatarse que la constante de la muerte o desapariciones de los detenidos políticos de Temuco, fue mediante el mecanismo de sacarlos desde el lugar donde se encontraban y nunca más regresaban, justificándose a través de la "**Ley de Fuga**" algunas de las muertes.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero del 2009, rolante a fs. 620 a 621 (Tomo II), barbulla que cuando se presentó voluntariamente ante la Fiscalía del Regimiento Tucapel el día 13 de septiembre de ese año, al ingresar a esta Fiscalía fue el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, quién vistiendo de Militar con el grado de Mayor, **ordenó sin consulta alguna al personal de esa Fiscalía, proceder a su detención, incomunicación y reclusión en la cárcel pública de esta ciudad, sin argumento alguno, lo que demuestra que este abogado era quién tomaba las determinaciones al**

interior de esa Fiscalía, sin tomar parecer si quiera a las autoridades Militares que se encontraban.

En declaración judicial de fecha 19 de julio del 2013, rolante a fs. 1.117 a 1.118 de autos (Tomo IV), ratifica sus declaraciones extrajudiciales prestadas ante la Policía de Investigaciones de Chile, que rolan de fs. 100 a 102, de fs. 163 a 164 y de fs. 257 a 258 (otorgadas en causa diversa). Basa a la pregunta que Alfonso Podlech Michaud fue la persona que ordenó su detención e incomunicación el 13 de septiembre de 1973, además de disponer su traslado a la cárcel. Esta persona vestía de uniforme en aquella oportunidad. Adosó que este abogado lo interrogó a lo menos en cinco oportunidades en la Fiscalía Militar mientras estuvo privado de libertad. **Él dirigía el interrogatorio** mientras que un actuario tomaba nota a máquina de lo que el declaraba. **Constantemente Podlech le decía que si no entregaba toda la información que se le estaba pidiendo en el interrogatorio, iba a ser devuelto a otro equipo para que ellos le sacaran las respuestas que él requería.** Este otro equipo era el grupo de torturadores que operaba en otra dependencia del Regimiento y al que tuvo que enfrentar en varias oportunidades durante su cautiverio. **A veces pasaba primero a la sala de torturas y luego a la Fiscalía o lo hacía a la inversa, es decir, se cumplían las amenazas de Podlech.** Anexó que en una ocasión se le hizo firmar en la Fiscalía una declaración tomada en la sala de torturas. A la pregunta, si bien el Mayor Jofré era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, puesto que tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que Jofré. Todo el mundo sabía esto.

En declaración extrajudicial de fecha 16 de mayo del 2016, rolante a fs. 1.452 a 1.454 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.488 a 1.490 (Tomo V), respecto a las víctimas de los hechos investigados, Daniel Mateluna Gómez y José Ortigosa Ansoleaga, señala que a ambos los conoció al interior de la Cárcel Pública de Temuco, principalmente a José Ortigosa Ansoleaga, ya que en más de una oportunidad conversó con él e incluso fueron trasladados juntos hasta dependencias del Regimiento Tucapel, los primeros días de octubre del año 1973, siendo esa la última vez que lo vio con vida, ya que él nunca salió del Regimiento y por consiguiente no regresó a la Cárcel. Conforme a su recuerdo, el día en que los fueron a retirar de la Cárcel, se presentó personal del Regimiento Tucapel a cargo del por entonces Sargento Orlando Moreno Vásquez, quien junto a un grupo de Conscriptos procedió a trasladarlos hasta el Regimiento Tucapel. Esto fue a eso de las nueve

de la mañana, donde al llegar al Regimiento los dejaron en el calabazo ubicado en la Guardia de ingreso del mismo Regimiento. Respecto a su consulta, comunica que el tiempo que estuvo junto a **Ortigosa** en el calabozo de la guardia, conversaron diversos temas entre los cuales el trabajo que iban a realizar en la Cárcel Pública, relacionado con los arreglos de algunas dependencias de éstas, dando a entender la claridad que tenía este señor, en que iba a permanecer mucho tiempo detenido, dentro de las cosas que se pudo dar cuenta que **Ortigosa** provenía de una familia de mucho dinero e incluso tenía propiedades en Villarrica, las cuales no supo si estaba vendiendo o trabajando en la agricultura. Esta sesión de torturas duro desde las 09:30 horas de la mañana hasta medio día, horario en que lo regresan a la sala de guardia **percatándose que al interior de esta ya no estaba José Ortigosa**, posteriormente a eso de las dos de la tarde lo sacan de la guardia y comienzan una nueva sesión de torturas, la que duró hasta como a las ocho de la noche, horario en que lo regresan a la Cárcel Publica, en calidad de incomunicado, condición que duró cerca de tres días. Después de su incomunicación vuelve a la libre plática junto a los otros detenidos, dándose cuenta que en base a sus comentarios que **Ortigosa**, no había regresado. No obstante, esta situación la presumía, ya que estando incomunicado al calabazo llegó un Gendarme de apellido **Silva**, apodado "**El Choro**" **quien omitiendo todo procedimiento interno de la Cárcel habló con él y le comunicó que el cuerpo sin vida de Ortigosa, había llegado baleado al Hospital Regional, señalándole que se enteró directamente de esta situación, ya que él estaba cumpliendo servicio en dicho Centro Asistencial ese día.** Hace presente que nunca supo el nombre completo del Sr. **Silva**, pero mediante averiguaciones que hizo con otro Gendarme, se le dio la información preliminar que hoy día estaría fallecido. Agrega a lo anterior, que nunca supo qué pasó con el Sr. **Ortigosa**, al interior del Regimiento, posteriormente se enteró por medio de un **Bando Militar**, que había sido ejecutado junto a **Daniel Mateluna**, al intentar huir del Regimiento.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto del 2016, rolante a fs. 1.509 a 1.510 (Tomo V), ratifica sus declaraciones extrajudiciales y judiciales prestadas en autos y la de fs. 1.488 a 1.490. A su pregunta, conjetura que **Alfonso Podlech Michaud fue** la persona que ordenó su detención e incomunicación el 13 de septiembre de 1973, además de disponer su traslado a la cárcel. Esta persona vestía de uniforme en aquella oportunidad. Agrega que este abogado **lo interrogó a lo menos en cinco oportunidades en la Fiscalía Militar** mientras estuvo privado de libertad. Él dirigía el interrogatorio mientras que un actuario tomaba nota a máquina de lo que declaraba. Constantemente **Podlech le decía que si no entregaba toda la información que se le estaba pidiendo en el**

interrogatorio, iba a ser devuelto a otro equipo para que ellos le sacaran las respuesta que él requería. Este otro equipo era el grupo de torturadores que operaba en otra dependencia del Regimiento y al que tuvo que enfrentar en varias oportunidades durante su cautiverio. **A veces pasaba primero a la sala de torturas y luego a la Fiscalía o lo hacía a la inversa, es decir, se cumplían las amenazas de Podlech.** Incluso recuerda que en una ocasión se le hizo firmar en la Fiscalía una declaración tomada en la sala de torturas. Cimentando que si bien el Mayor **Jofré** era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado **Alfonso Podlech**, puesto que tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que **Jofré**. Todo el mundo sabía esto. Respecto de la oportunidad en que fue trasladado con **José Ortigosa Ansoleaga** desde la cárcel al Regimiento, recuerda que fue el Sargento **Moreno** junto a otros Conscriptos quien los sacó de ese recinto penitenciario y los llevó a la Unidad Militar antes indicada. Ese día, primero pasó a la sala de torturas y después se lo llevaron a la Fiscalía Militar. Después volvió a pasar a la sala de torturas. Finalmente regresó a la cárcel en calidad de incomunicado, no recordando si fue el propio **Moreno** quien lo llevó a la cárcel o no. Lo cierto es que **José Ortigosa** no iba con el declarante. A su pregunta cuenta que el "**Choro**" **Silva** dijo que había visto el cadáver de **Ortigosa** en la morgue, que estaba baleado

A.6 NELSON RODOLFO THIELEMANN RODRIGUEZ.

En declaración judicial de 19 de abril de 1991, rolante de fs. 352 a 354 (Tomo II), respecto de **José Ortigosa** recordó haberlo visto en los pasillos de la Fiscalía.

En declaración extrajudicial de 03 de julio de 2003, rolante de fs. 567 a 568 (Tomo II), distingue que después del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, en su calidad de Oficial de Reserva del Ejército, fue llamado por el Fiscal de apellido **Jofré**, para que cumpliera funciones administrativas en la Fiscalía Militar de Temuco. Respecto al Fiscal **Jofré**, recuerda que ostentaba el grado de Mayor. Rememoró un proceso sustanciado por la Fiscalía Militar contra un sujeto de apellido **Ortigosa** y que se rumoreaba entre pasillos que esta persona estaba asociada al robo de un maletín con dólares

A.7 VÍCTOR EFREN SILVA FIGUEROA.

En declaración judicial de 03 de junio de 1991, rolante de fs. 366 a fs. 367 (Tomo II), confirma que lo apodaban en el servicio "**El Choro**" **Silva** por su carácter y proceder cuando era funcionario. Detalló que es efectivo que vio en

la morgue del hospital el cadáver de **José Ortigosa**, quien estaba detenido en la Cárcel y lo vio baleado, situación que impuso al preso político el señor **Maturana**.

A.8 ALFREDO GARCÍA DIAZ.

En declaración judicial de 03 de marzo de 1992, rolante de fs. 377 a 379 (Tomo II), esgrime que fue Teniente dentro de Gendarmería de Temuco en 1973. Invocó como nombres de detenidos políticos, entre ellos a **José Ortigosa, Gastón Lobos**, quien estuvo incomunicado, el señor **Omar Venturelli**, un funcionario del Ejército de apellido **Morales**, un señor **Mateluna**, este caso lo recuerda porque le **correspondió entregar la ropa a la señora de él** y otros. Proclamó que el señor **Ortigosa fue retirado por personal del Ejército o la FACH**, pero no Carabineros; y a los demás, **venían un Suboficial del Ejército de apellido Moreno**.

A.9 MANUEL JESÚS CONTRERAS SALAZAR.

En declaración extrajudicial de fecha 07 de noviembre de 2012, rolante de fs. 430 a 431 (Tomo II), respecto a las víctimas de los hechos investigados, sustenta que solamente recuerda el apellido **Mateluna, como uno de los detenidos del Regimiento**.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante a fs. 518 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 430 a 431.

A.10 LUIS RAIMUNDO QUEZADA CHANDIA.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2014, rolante a fojas 1.317 a 1.320 (Tomo IV), recuerda el apellido **Mateluna, identificándolo como uno de los detenidos del Regimiento Tucapel, lo que supo por boca del mismo Teniente Espinoza**, quien en dos oportunidades le conversó sobre **esta persona, comentando que estuvo en los momentos en que el detenido fue asesinado, probablemente al interior de la sala de torturas de la Compañía de la Plana Mayor y Servicios**, haciendo referencia que dentro de esa misma sala lo estaban interrogando y en medio del interrogatorio el Teniente **Vásquez Chahuán**, a quien apodaban el “cara de muerto”, le dio un disparo en su frente con su arma de 9 milímetros. Según lo comentado por **Espinoza**, la víctima después del disparo se habría intentado levantar, gritándoles “Milicos hijos de puta”, cayendo en una mesa donde lo tenían. También **Espinoza** le dijo que **Mateluna no murió inmediatamente y que tuvo que darle el tiro de gracia para que muriera**, señalándole además que en el

lugar de los hechos también estaban los Detectives y **Moreno**. Propone que el apellido del fallecido se lo dijo **Espinoza** de forma accidental, al relatarle los fantasmas que lo atormentaban. Posteriormente este hecho fue comentado por todos los Militares, incluso estos hacían alusión al apellido de la víctima.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2016, rolante a fojas 1.504 a 1.507 (Tomo V), en lo pertinente y sobre la conversación que sostuvo con el Teniente **Espinoza**, sugiere que ésta ocurrió durante la Campaña que realizó en Curarrehue en 1974. En dicha conversación el declarante le dio su visión de la vida y entonces él se abrió a hablar sobre sí mismo y agregó que estaba marcado dentro del Ejército como el "perro malo", por lo que su carrera estaba manchada y que estaba arrepentido de haber hecho todo lo que había hecho. En algún momento comenzó a desahogarse y le habló sobre los fantasmas que lo perseguían y por el caso de un señor de apellido **Mateluna**. **Le dijo algo así como "no sé por qué acabé matándolo", agregó que no había razones para hacerlo, pero que le había dado rabia, que estaba como poseído y que por esto le habría disparado.** Agregó que el Subteniente **Lavín**, presente en el interrogatorio, se habría **"cagado entero" ante la situación y que alguien habría tenido que rematarlo porque quedó vivo después del disparo que él hizo.** Suma que dicho interrogatorio al parecer ocurrió en el gimnasio chico del Regimiento, ubicado a un costado del rancho de los Conscriptos.

A.11 NELSON LUIS AGUSTÍN SECKEL CATALÁN.

En declaración judicial de fecha 07 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1.649 a 1.652 (Tomo V), menciona que en una oportunidad, en su calidad de Subrogante del ayudante titular del Director del Personal, recibió la correspondencia, tomando conocimiento de un sumario que posteriormente le tocó ratificar. La situación era que enviaron a un Suboficial de Reserva de nombre **Carlos Cardoen con un detenido de nombre José Ortigosa hacia el Regimiento Tucapel**, detenido después de que el Consejo de Guerra en el Regimiento lo dejara libre. Lo anterior lo sabe, pues el propio **Carlos Cardoen** se lo dijo, éste último era muy amigo de **Ortigosa**, el cual era intensamente buscado. Asevera que **Ortigosa** era fuertemente buscado en la región, porque era señalado de ser dueño de un campo de Guerrilla. Además de ser intensamente buscado por que era fundador financista del GAP (grupo de amigos personal de Allende). **Ortigosa** vivía en Rancagua, fue corredor de autos y tenía un garaje grande en Diez de Julio. **Carlos Cardoen** era amigo de **Ortigosa** y al enterarse que era buscado éste le habría aconsejado a **Ortigosa** presentarse en la Fuerza Aérea de Santiago en donde la persona con la cual se presentó, según le dijeron era un

General, le señaló que en Santiago no lo buscaban pero que le aconsejaban ir a Temuco a fin de aclarar su situación. **Carlos Cardoen** en su propio avión lo trasladó a Temuco. Una vez llegado a Temuco a la base Aérea se inicia el operativo en que se señala que fue detenido **Ortigosa**, el cual fue trasladado hasta el Regimiento Tucapel de Temuco junto a **Cardoen**. Éste último le contó al deponente que lo dejaron libre y a **Ortigosa** lo sometieron a Consejo de Guerra. El resultado del Consejo de Guerra fue que se decretó la libertad de **Ortigosa**. **Estando Carlos Cardoen y la señora de Ortigosa esperando que lo dejaran libre, sintieron los disparos y luego alguien del Regimiento les informó que el detenido había intentado escapar y por eso le habían disparado.**

En declaración judicial de fecha 11 de julio de 2018, rolante de fs. 1.663 a 1.665 (Tomo V), ratifica la declaración judicial prestada en causa 114.033, agregada a esta causa de fojas 1.649 a 1.652. En lo pertinente, apunta que nunca vio detenidos desaparecidos, ni supo de la existencia específica de ellos, hasta que le contaron lo que había pasado (señor **Ortigosa y Cardoen**), después de los años, estando radicado en Santiago, gente que venía de Temuco le contaba rumores de lo sucedido. Apunta que en una conversación que tuvo con **Carlos Cardoen**, él se refirió a lo que le sucedió cuando trajo a Temuco a su amigo **José Ortigosa**, para que aclarara su situación, porque era buscado intensamente en la Zona Cautín. Apoya que conoció a **Carlos Cardoen**, pues era amigo de una amiga suya y de su suegro, por lo cual le comentó la situación, de la cual también el testigo había escuchado, pues fue un hecho público. Según se enteró, el señor **Ortigosa era buscado por tener en un campo cerca de Villarrica, una supuesta escuela de guerrillas**. Aproxima que **Cardoen** a la Base Aérea Maquehue, el señor **Cardoen** vestía de uniforme de la Fuerza Aérea por ser Oficial de Reserva, al presentarse en aquel lugar fueron detenidos ambos y trasladados al Regimiento de Temuco. Aquilata que esta situación debe haber ocurrido antes del mes de noviembre de 1973. Una vez trasladados el señor **Cardoen y Ortigosa**, fueron interrogados, quedando en libertad **Cardoen** y el señor **Ortigosa quedó a disposición de la Fiscalía Militar**. El señor **Cardoen** le señaló que quien hizo de Juez Militar era el Segundo Comandante del Ejército. **Cardoen** le avisó a la **esposa de Ortigosa**, que vivía en Santiago o Rancagua, para que le trajera ropa a su marido y terminado el proceso dejaron en libertad al señor **Ortigosa** declarado sin cargos, de esta forma salió libre y conversó con su señora, informándole que había quedado libre y que iría a buscar sus cosas donde habían estado detenido. Concurrió acompañado de un Conscripto, cuando estaba en eso sintieron unos disparos y le informaron que por intento de fuga le habían

disparado. Arguye que el señor **Cardoen** le comentó que suponía que el que ordenó dispararle fue el Comandante **Pacheco** de la Fuerza Aérea

A.12 SIGIFREDO JARA CONTRERAS.

En declaración judicial de 04 de marzo de 1991, rolante de fs. 328 a 329 (Tomo I), no las recuerda ni conoce las víctimas de autos, debido a la gran cantidad de población de presos políticos. ...moreno y siempre andaba de civil Proclamó que los presos políticos eran sacados de la cárcel por personal del Ejército y de la FACH, quienes los sacaban con unas ordenes que estos dejaban en la guardia y estas órdenes llevaban una firma ilegible y un timbre, pero **para poder regularizar estas situaciones hubo que conversar con el Fiscal don Alfonso Podlech** y el Secretario, para poder normalizar el ingreso y egreso de los detenidos. Por último señaló conocer a **Víctor Maturana Burgos**, quien estuvo preso en la penitenciaría local.

En declaración extrajudicial de 03 de julio de 2003, rolante de fs. 565 a 566 (Tomo II), precisó que la población penal cuando llegó a Temuco en 1973 era de aproximadamente unas ochocientas personas, haciendo una división entre cuatrocientos reos por delitos comunes y cuatrocientos como prisioneros políticos. Acerca de estos últimos, no recordó cual era el sistema para ingresarlos, debido a que este tema era totalmente autoritario por parte de los Militares, ya que cuando llegaban en la noche con las patrullas, fuertemente armados y sus caras enmascaradas, se llevaban a un grupo de personas de las cuales **no habían registros, por cuanto estos no entregaban ninguna Orden Judicial o de la Fiscalía, por lo que era muy difícil para ellos poder controlarlos** y además, no estaban en condiciones de poner trabas a este procedimiento. Lo anterior lo supo a raíz de comentarios del personal que llevaba más tiempo en la unidad. Sustentó que en el mes de noviembre de ese mismo año y en circunstancias que había quedado como Jefe de penal, **fue a exponer la situación antes relatada ante el entonces Fiscal Alfonso Podlech Michaud, quien a partir de ese momento cooperó en solucionar el procedimiento y de esta forma, en corto plazo el sistema volvió a ser como correspondía, pudiendo llevar control de los detenidos.** Con relación al traslado de los internos a las diferentes Fiscalías o Tribunales de la jurisdicción, estos eran realizados por los funcionarios de Gendarmería, sin perjuicio de las veces que los mismos Militares lo hacían, sin recordar nombres de estos, debido a que eran diferentes en cada oportunidad y con los cuales no se hablaba mucho. Todo esto antes de la conversación que tuvo con el Fiscal **Alfonso Podlech.**

A.13 LUIS ARMANDO JOFRÉ SOTO.

En declaración judicial de 23 de julio de 1991, rolante de fs. 368 a 370 (Tomo II), copia de la cual se encuentra de fs. 569 a 570 (Tomo II), ensaya que después del 11 de septiembre de 1973, cimiento que después de ese día, no recuerda cuanto tiempo después, fue nombrado Fiscal Militar, lo que significó que quedó fuera de la línea operacional propia del Ejército dedicándose solo al aspecto administrativo de la Fiscalía. Anexó que como Asesor Jurídico de la Fiscalía se desempeñó el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, en todo caso no desde los primeros días, y meses después, fue el Fiscal Militar en propiedad. Cuando había detenidos en la cárcel y se necesitaban en la Fiscalía, normalmente los trasladaba de un lugar a otro un Sargento de apellido **Moreno**, y como se hizo conocido no había problemas en que en la cárcel le entregaran los detenidos para ser interrogados en la Fiscalía, previa presentación de los documentos respectivos y oficiales. A la pregunta sobre la situación de **José Ortigosa Ansoleaga**, aseveró no recordar haberlo interrogado en la Fiscalía, pero conjeturó que esta persona se encontraba en Temuco a cargo de la construcción de un edificio y en cuanto al documento que rola a fs. 92 reconoció como suya la firma, y se debió seguramente, a que se le dio cuenta de este hecho y el como Fiscal Militar era su obligación dar crédito a la información que se le enviaba a través del Comandante del Regimiento y **otorgar los documentos necesarios para la sepultación, autopsia y entrega de cadáveres a los familiares de estos**. En todo caso en el Regimiento debe haber constancia del hecho que significó la muerte del señor **Ortigosa**, que reitera **no fue interrogado por él**. En cuanto al altercado que pudo haber tenido con la **señora de Ortigosa**, sustentó que es un hecho que no niega ni afirma categóricamente, pues con todo lo que pasaba esos días y la tensión a la que estaban sometidos, puede ser que se haya expresado en esos términos y **en todo caso trató de ayudar en lo posible para la entrega del cadáver a la señora y efectivamente entregó el salvoconducto que se le exhibió**

A.14 AQUILES ALFONSO POBLETE MÜLLER.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de noviembre de 2012, rolante de fs. 424 a 425 (Tomo II), inquiriere que respecto a las víctimas señaladas en el decreto que se le exhibe, **recuerda a José María Ortigosa Ansoleaga, a quien interrogó al interior del Regimiento de Infantería N°08 "Tucapel de Temuco" en una fecha posterior al 11 de septiembre del año 1973**. Según su recuerdo, este hombre se encontraba detenido al interior del Regimiento y le fue entregado por el Capitán de Ejército de apellido **Ubilla**, cerca de las 16:00 horas de una tarde, quien le hizo presente que lo interrogara respecto a un dinero y

documentación que portaba. **Una vez finalizado el interrogatorio, entregó a Ortigosa al Capitán Ubilla** y desde ese momento se desentendió de él, enterándose al día siguiente que **Ortigosa** había fallecido, ya que **algunos soldados mencionaban que "se lo había llevado el señor"**.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs. 615 a 617 (Tomo II), narra que fue destinado al Regimiento Tucapel de Temuco desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. Junto con él fueron asignados **Rigoberto Ortiz, Luis Morales y Hernán Quiroz**. Respecto del chofer **Carlos Luco**, parece que estuvo en el Regimiento, pero no estaba a su cargo. Nadie más fue asignado al Regimiento, al menos que el recuerde. En el Regimiento fueron recibidos por el Comandante de la Unidad, quien los presentó al Capitán **Ubilla**, informándoles que a partir de ese momento trabajarían bajo sus órdenes. **Sí interrogaron detenidos políticos**. Los interrogatorios los efectuaban en una oficina grande, que era como una cuadra, y posteriormente en un gimnasio. El declarante practicaba los interrogatorios en presencia de **Quiroz, Ortiz y Morales**. Los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que obtenían la información y le informaban de los avances de los interrogatorios al Capitán **Ubilla**, quien muchas veces presenciaba estas entrevistas. Hace presente que **el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. Toda la información se la entregaban a Ubilla y éste, a su vez, le entregaba los antecedentes a la Fiscalía Militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que, según supo, era el Fiscal.**

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2012, rolante de fs. 991 a 992 (Tomo III), propone que en relación a su estadía en el Regimiento de Infantería N°8 "Tucapel" de Temuco, es efectivo que estaba a cargo del grupo de detectives agregados a dicho recinto Militar, haciendo referencia a que cumplió funciones ordenadas por un Capitán de Ejército de apellido **Ubilla**, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas a dicho Regimiento. Es así que para efectuar dichas labores **se situaron en el gimnasio del Regimiento, donde personal de Ejército les entregaba los detenidos, quienes ya venían en malas condiciones físicas y procedían a interrogarlos bajo la aplicación de corriente eléctrica producida por un dinamo, recordando que con un cochayuyo mojado pasaban por el cuerpo de los detenidos simulando que se trataba de una culebra.** Hace presente que **todos los detenidos ingresaban**

vendados y procuraban no sobrepasase con ellos. Una vez terminada la sesión de interrogatorios entregaban los detenidos al Capitán **Ubilla**, quien hacia entrega de estos a otro grupo de interrogadores, pero que pertenecían al Regimiento.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de fs. 997 a 998 (Tomo III), ratifica su declaración judicial rolante de fs. 224 a 226; y la de fs. 1.990 a 1.992, así como su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile rolante de fs. 3.206 a 3.207 (respecto de otra causa). Sustenta que **sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos.** Respecto de **José Ortigosa Ansoleaga** recuerda que se los entregaron los Militares completamente "frisqueado", rememorando que estaba botado en el piso y el declarante le puso el pie sobre el pecho. Él le dijo que estaba comprando un campo en la zona de Pucón y Villarrica y que por ese motivo lo habían detenido. A él también lo mataron los Militares, según supo. Desconoce el nombre de los Militares que trabajaban con ellos, pero siempre fue el mismo grupo entre los Conscriptos y Clases. A su pregunta, aduce que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del Regimiento, en donde le aplicaron electricidad a estas personas. Recuerda tanto a **Quiroz** como **Ortiz**, quienes participaban dándole vuelta al dinamo, pero al que más utilizó fue a Quiroz, puesto que **Ortiz** participaba más en los interrogatorios; en tanto que **Morales** era torpe y solo servía para trasladar a los detenidos y darle algunos golpes. Las terminales eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo. Finalmente el Detective **Quiroz** no quiso regresar a Investigaciones junto con ellos y prefirió quedarse trabajando con el grupo de Inteligencia de los Militares. Este hombre se transformó en una persona cruel en el trato con los detenidos.

En declaración judicial de fecha 03 de julio de 2013, rolante a fs. 1.098 (Tomo IV), utiliza que el abogado Alfonso Podlech era quien determinaba el destino de los detenidos. Respecto de **José Ortigosa Ansoleaga**, efectivamente vio a esta persona al interior del Regimiento Tucapel. Esta persona estaba botada en el piso del gimnasio de la unidad. Recuerda que lo arrastró hacia una banca y posteriormente le dio cuenta de esta situación al Capitán **Ubilla**, quien al parecer le dio a conocer el caso al Coronel **Iturriaga**. No supo qué Militares intervinieron en su muerte. Respecto del Detective **Quiroz** ratifica todos sus dichos anteriores, agregando que el Capitán **Ubilla** le pidió que dejara a **Quiroz** trabajando con él.

A.15 ORLANDO MORENO VÁSQUEZ.

En declaración extrajudicial de fecha 06 de noviembre de 2012, rolante de fs. 428 a 429 (Tomo II), expresa que en reiteradas oportunidades supo de la muerte de detenidos por intento de fuga, los cuales se daban a conocer a través de Bandos Militares, en cuya confección el declarante niega haber participado. Estos Bandos generalmente los confeccionaba el Fiscal Militar Podlech.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante a fs. 528 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 428 a 429.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003, rolante de fs. 571 a 573 (Tomo II), afirma que la Fiscalía Militar tenía para su funcionamiento dos personas que eran Militares con el grado de Suboficiales, recordando a Santiago Villarroel y Leonel Quilodran Burgos, además de otros civiles que se agregaron después del Pronunciamiento que pertenecían a un Juzgado del Crimen de Temuco de los que recuerda a Adrián González Maldonado y a Héctor Toloza Fierro. Cabe hacer presente que estas personas fueron llevadas por un señor abogado, quien fue el que se hizo cargo de la Fiscalía Militar de Temuco a los pocos días después del 11 de septiembre de 1973, de nombre Alfonso Podlech Michaud, quien para todos los efectos era el Fiscal Militar Letrado. Alfonso Podlech Michaud cumplía sus funciones de Fiscal en el Regimiento "Tucapel", recordando que era cotidiano verlo en el interior de esta Unidad Militar.

En declaración judicial de fecha 22 de diciembre de 2003, rolante de fs. 605 a 606 (Tomo II), en lo pertinente el Tribunal le pregunta si el Regimiento Tucapel fue centro de detención, respondiendo el deponente que sí, dada la gran cantidad de detenidos que llegaron al Regimiento éstos fueron dejados en el gimnasio, donde algunos permanecieron por varios días, luego de lo cual eran dejados en libertad o trasladados a la cárcel pública por orden de la Fiscalía Militar.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2016, rolante de fs. 1.445 a 1.446 (Tomo V), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.491 a 1.492 (Tomo V), prefiere que para el año 1973 se desempeñaba en la 2° Comandancia del Regimiento N°8 Tucapel de Temuco, correspondiéndole para la época ser el Dactilógrafo de dicha Comandancia. Respecto a las víctimas Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga, sólo recuerda a la víctima de apellido Ortigosa, puesto que se comentó que el Capitán Callis de Carabineros de Pitrufquén y el Coronel Pacheco de la Base Aérea

Maquehue, habrían extorsionado a esta persona, con un dinero que éste portaba a objeto de otorgarles su libertad. Enterándose también que una vez que se supo esta situación el Comandante del Regimiento, don **Pablo Iturriaga Marchesse**, informó a la superioridad sobre esta situación, por lo que los mencionados funcionarios fueron retirados de sus puestos. Por otra parte y refiriéndose a los traslados de detenidos, hace presente que siempre recibía un documento con el o los nombres de los detenidos a trasladar de la cárcel al Regimiento, el cual era firmado por el Fiscal Militar, siendo en un principio firmados por el Mayor **Jofré** y posteriormente por **Alfonso Podlech**, una vez este fue nombrado como Fiscal Militar. En lo personal, los traslados que efectuó siempre finalizaban en la Guardia del Regimiento, dejando a los detenidos bajo la custodia de los funcionarios que cumplían dicho servicio. No obstante, sabe que eran sacados de ese recinto por el mismo personal de guardia los cuales los trasladaban a la Oficina del Fiscal Militar, ignorando si **Alfonso Podlech** participaba en esos interrogatorios. Respecto a la aplicación de la Ley de Fuga que se les dio a estas personas, no maneja ningún tipo de antecedente al respecto y en relación al detenido de apellido **Mateluna**, fue encontrado fallecido en la vía pública, específicamente en la calle O'Higgins casi al llegar a Aldunate.

En declaración judicial de fecha 06 de junio de 2016, rolante a fs. 1.461 (Tomo V), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.445 a 1.446.

A.16 HERMÁN CARRASCO PAUL.

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre del 2003, rolante a fs. 593 a 597 de autos (Tomo II), En lo pertinente, comenta que el día 8 de noviembre, aún en el gimnasio, los sacan de a uno hacia la Fiscalía para firmar su libertad. **Esto sucedió en presencia del Cabo Schonherr y de Alfonso Podlech Michaud.**

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre del 2008, rolante de fs. 609 a 612 (Tomo II), funda que dos días después de haber sido detenido fue llevado junto a **Juan Antonio Chávez** hasta la oficina de la **Fiscalía Militar ubicada al interior del Regimiento**, donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban **Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez.**

En declaración extrajudicial, de fecha 05 de enero del 2009, rolante de fs. 618 a 619 (Tomo II), En lo pertinente, consultado respecto de

quienes él recuerda como sus interrogadores al interior del Regimiento Tucapel, precisa que sin lugar a dudas se encuentra **Orlando Moreno Vásquez**, que se desempeñaba en la Fiscalía del Regimiento, a quien conocía desde niño y porque eran vecinos, el fallecido **Nelson Ubilla Toledo**, el Teniente de Ejército **Manuel Vásquez Chahuán**, además de otro Teniente llamado "**El Loco Espinoza**", el Teniente **Jaime García Covarrubias**, quien los interrogó a rostro descubierto y el Conscripto **Juan Carrillo**. Finalmente, relata que respecto del abogado **Alfonso Podlech Michaud**, éste sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de Mayor, es más fue él quien les insistió en firmar un documento que por supuesto negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del Plan "Z".

En diligencia de careo entre **Hernán Carrasco Paul** y **Óscar Alfonso Podlech Michaud**, de fecha 12 de agosto del 2013, rolante de fs. 1.124 a 1.125 de autos (Tomo IV), ratifica en lo pertinente sus declaraciones judiciales prestadas en autos de fs. 175 (correspondiente a su declaración de fs. 593 a 597) 218 (correspondiente a su declaración de fs. 609 a 612) y 3.567. Anima que reconoce a la persona sentada a su lado con la cual se le carea como **Alfonso Podlech Michaud** de quien ha hecho referencia. Precisa que si conoce a **Alfonso Podlech Michaud** desde niño. Se mantiene en sus dichos.

A.17 CARLOS LUCO ASTROZA.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2006, rolante de fs. 881 a 882 (Tomo III), asevera que en más de una oportunidad pudo ver a **Alfonso Podlech** al interior de la Fiscalía Militar de Tucapel, sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme.

En declaración judicial de fecha 08 de abril de 2013, rolante de fs. 1.297 a 1.299 (Tomo IV), apunta que el Mayor **Jofré** "no se metía en nada", por lo que a su parecer el abogado **Alfonso Podlech** estaba a cargo de ello en la Fiscalía Militar, adicionando que esta persona andaba de uniforme en el Regimiento.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.331 a 1.333 (Tomo IV), señala que el Mayor **Jofré** no se metía en nada, por lo que le parece que el abogado **Alfonso Podlech** estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el Regimiento y se entendía con el Capitán **Ubilla**. Era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de Inteligencia que ejercía **Ubilla**. Adicionando que tanto **Podlech** como **Ubilla** estaban constantemente en la Fiscalía Militar.

A.18 EDISÓN CHIHUAILAF ARRIAGADA.

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2012, rolante de fs. 950 a 953 (Tomo III), afirma que durante ese mismo día que estuvo detenido en la guardia del Regimiento Tucapel pudo ver al abogado **Alfonso Podlech**, vestido de traje campaña, calzando botas y dos pistolas al cinto. Este hombre entró a la guardia visiblemente alterado, y comenzó a increpar a los Soldados a quienes les habría dicho **“Oye po esta es la última vez que les digo, no me dejen entrar más mujeres y viejas de mierda, que me tienen loco con sus reclamos. Yo ya se los dije y si no me hacen caso los hago fusilar a ustedes también”**. Precisa que esto lo escucho, así como también pudo ver a **Podlech** porque la puerta de la celda donde estaban los detenidos se les quedó abierta a un Soldado. Comenta que poco rato después entró un Soldado muy apesadumbrado, por lo sucedido con el abogado **Podlech**, al punto que se quejó diciéndole que estaba harto de lo que estaba sucediendo y que no hallaba la hora de que todo esto terminara. Además indicó hacia el lugar donde **Podlech** había estado y señaló que **“ahora mandaban ellos”**, como dejando entrever que había personas ajenas al Regimiento con mando.

A.19 FRANCISCO JERÓNIMO MATTA ITURRA.

En Declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante a fojas 1.000 a 1.001 (Tomo III), dice estar seguro que fue el abogado **Alfonso Podlech Michaud** quien interrogó a su padre y a **Héctor Aguayo Olavarría**, porque su padre se lo dijo. Además, indica que a mediados de octubre de 1973 concurrió a conversar con **Alfonso Podlech Michaud** en compañía del ex diputado **Hardy Momberg**, quien en aquel tiempo era miembro del Partido Nacional. Se entrevistaron con él en una oficina ubicada al interior del Regimiento. En esa reunión **Podlech** se hizo acompañar de los Capitanes **Nelson Ubilla** y **Mario Alvarado**. Cuenta que **Hardy Momberg** le dijo a **Podlech** que si expulsaba del país al padre del declarante, él (Momberg) también se iría. Entonces **Podlech** le contestó que lo iba a echar del país de todas formas porque su padre era financista de la guerrilla del MIR y del Partido Socialista. Recuerda que en una fecha posterior, el abogado **Sergio Zapata Camus** fue a conversar con **Podlech**, en representación del padre del declarante. Dice estar seguro que **Podlech** era el verdadero Fiscal Militar en Temuco y utilizaba al Mayor Jofré como “pantalla”, ya que fue el propio **Podlech** quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y afirma que pudo comprobar su autoridad cuando conversó con él. En lo pertinente, comenta que su padre le dijo que **Podlech** junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a **Aguayo** y a otra persona quedarse en la Fiscalía

para ser interrogados. Acota que **Podlech** ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros, refiriéndose a éstos en detalle.

A.20 DANIEL ARNOLDO AGUIRRE MORA.

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.005 a 1.008 (Tomo III), Respecto de **Alfonso Podlech Michaud**, puede señalar que un año antes que ocurriera el Golpe Militar, **éste abogado iba al Cuartel de Investigaciones a requerir información de tipo político**. Recuerda que se entrevistaba con el **Prefecto Leonel Hormazábal** y con el detective **Quiroz**. Sabe que le entregaba esta información a alguien en el **Regimiento Tucapel**, pero desconoce a quién. Esta información la obtenía desde los archivos que la Inteligencia de Investigaciones tenía y la usaba con el grupo de Patria y Libertad de Temuco, según comentaban los mismos funcionarios. Después del 11 de septiembre de 1973 **Podlech** siempre se mantuvo muy cercano y activo adentro del Regimiento Tucapel. Dice que incluso en una oportunidad en que el Prefecto lo presentó ante la "Junta Chica" de Temuco, **Podlech** estaba con ellos. Anexa que en una oportunidad en el mes de noviembre de 1973, con ocasión de haber quedado como Prefecto Subrogante, se produjo una fuga de personas que estaban detenidas en el Regimiento Tucapel, los que fueron dados de baja. Entonces concurrió al Regimiento para pedir antecedentes sobre este hecho y tenérselos al Prefecto cuando regresara. Cuenta que al llegar a ese lugar se entrevistó con el Comandante **Iturriaga Marchesse** y con **Alfonso Podlech**. Entonces el Comandante le dijo que sólo le comunicara al Prefecto que los detenidos habían intentado fugarse y que eso era todo. Finalmente, dice recordar el nombre de una persona de apellido **Ortigosa** que fue ejecutada por órdenes del Comandante **Iturriaga** confabulado con el Comandante **Pacheco** de la FACH. Todo esto fue hecho para quitarle una maleta con dólares que esta persona portaba. Indica que esto lo supo la familia de **Ortigosa**.

En diligencia de careo entre **Daniel Arnoldo Aguirre Mora** y **Hernán Raúl Quiroz Barra**, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.104 a 1.105 (Tomo IV), ratifica sus dichos de fs. 3.231 a 3.234 (correspondiente a la declaración precedente). Añade que poco después del 11 de septiembre aparecieron tres Oficiales de Ejército, Carabineros y Fuerza Aérea y le entregaron al Prefecto una nómina con los nombres de los Detectives que querían que fueran a trabajar al Tucapel. En cuanto a **Alfonso Podlech**, indica que antes del 11 de septiembre de 1973 iba siempre al Cuartel de Investigaciones a buscar información de inteligencia. Para esto pasaba al segundo piso de la unidad y en alguna oportunidad lo vio junto al señor **Quiroz**. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo entre Daniel Arnoldo Aguirre Mora y Alfonso Podlech Michaud, de fecha 13 de agosto de 2013, rolante a fs. 1.129 (Tomo IV), ratifica en lo pertinente su declaración judicial de fs. 3.231 a 3.234 (correspondiente a la declaración precedente). Reconoce a la persona con la cual se le carea como **Alfonso Podlech Michaud**.

A.21 JOSÉ HERIBERTO MANSILLA GATICA.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.011 a 1.013 (Tomo III), ratifica su declaración que rola de fs. 2.007 a 2.009 (otorgada en causa diversa). Delibera para septiembre de 1973 el Segundo Comandante del Regimiento de apellido **Jofré**. El trabajo cotidiano de la Fiscalía, como interrogar y tomar decisiones con respecto de los detenidos era de **Alfonso Podlech**, se intercedía ante éste, porque él decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. Cuenta que el Comandante **Jofré** le dijo personalmente (cuando el declarante estaba de guardia) que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que habían dos mujeres, debía tomarla **Alfonso Podlech**. Fue por esa razón que intercedió ante **Podlech** por las mujeres que conocía. Anexa que la oficina de Plana Mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el Comandante **Jofré** era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba **Podlech**. Éste tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos. El declarante agrega que fue futbolista, seleccionado de Temuco, integró el primer Deportes Temuco y a don **Alfonso Podlech** le gustaba el fútbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante él por **Rolando Núñez**, quien vivió en el mismo sector que el declarante y que en una oportunidad se tomó junto a otras personas uno de los Fondos de don **Alfonso Podlech**. Cuando esta persona se presentó en la Fiscalía, don **Alfonso** le dijo que le agradeciera por haber intercedido por él, porque sí no lo hubiese hecho, hace rato lo hubiera tenido "apuntado". Lo dejó irse y lo citó posteriormente a la Fiscalía. Gracias a que intercedió por él, **Rolando** se salvó. Nunca supo más de él. Atestigua que había una sala de torturas en la Primera Compañía de Cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su jefe **Tichahuer** y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos, mientras le decían "perrita, tu sabes eso". Afirmo que **Tichahuer** y los Oficiales **García Covarrubias** tenían que ver con las torturas y los detenidos y que había personal de Inteligencia, que incluso los vigilaba a ellos. Continúa declarando que había un Cabo de apellido **Labraña** y otro grupo de Conscriptos que integraban la **Patrulla Chacal**, y que ellos le llamaban los "chalados".

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante a fs. 1.137 (Tomo IV), copia de la cual se encuentra a fs. 1.572 (Tomo V), ratifica su declaración prestada en causa diversa y aduce que efectivamente estuvo trabajando por una tarde con don **Alfonso Podlech Michaud, quien tomaba declaraciones** y el deponente era el dactilógrafo. Esta situación sólo fue por una tarde y fue por orden del Mayor **Jofré**. Posteriormente se refiere a las personas por las cuales intercedió, difundiendo en lo pertinente que una ocasión fue a conversar con el Mayor **Jofré**, quien lo mandó a hablar con **Alfonso Podlech**. La decisión tomada por éste fue dejar en libertad a estas mujeres y citarlas para el día siguiente. Cuenta que **el Mayor Jofré lo mandó a hablar con don Alfonso Podlech porque él estaba a cargo de los detenidos.**

En declaración judicial de 12 de septiembre de 2013, rolante a fs. 1.138 (Tomo IV), copia de la cual se encuentra a fs. **1.573 (Tomo IV),** amplía su declaración anterior, indicando que la persona que era deportista y por la cual intercedió ante don **Alfonso Podlech** es de apellido **Núñez. Alfonso Podlech** lo conocía y cuando lo vio en el Regimiento, ordenó dejarlo con arresto domiciliario y además, como era vecino del declarante, este quedó a cargo de su custodia, es decir, cuidar que no se arrancara de la ciudad.

En diligencia de careo entre José Heriberto Mansilla Gatica y Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.139 a 1.140 (Tomo IV), ratifica su declaración judicial prestada en causa diversa y la de fs. 3.605 (correspondiente a la declaración de fs. 1.138) en lo pertinente. En la guardia de la unidad se encontró con la señora **Meza Moncada** en calidad de detenida. En esa oportunidad fue a conversar con don **Alfonso**, quien le dijo que se la llevara. Por orden del Mayor **Jofré** tuvo que servir como Dactilógrafo al **Alfonso Podlech** mientras interrogaba a la señora **Meza Moncada. Cuenta que las funciones de don Alfonso Podlech eran tomar declaraciones a los detenidos.** Recuerda que en aquella época también intercedió ante don **Alfonso Podlech** por un amigo que era deportista y que anterior al 11 de septiembre de 1973 había tomado el fundo de la familia **Podlech** en la comuna de Lautaro. Asegura recordar muy bien lo relatado, porque fue lo único que efectuó con **Alfonso Podlech** en el Regimiento Tucapel de Temuco. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 1.568 a 1.570 (Tomo V), divulga que solo tomó dos declaraciones y **quien interrogaba era don Alfonso Podlech**, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que conocía y que estaban detenidas. Cuenta que las declaraciones las tomó en la oficina del Jefe de Plana Mayor, Expresa que en una

oportunidad, después del 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 10:30 horas, mientras se encontraba de Suboficial de guardia, llegó un camión cargado de detenidos que venían del sector Toltén y Loncoche. Estas personas fueron dejadas en el patio de la Unidad y debían pasar la noche en el Regimiento, refiriéndose a las personas por quienes intercedió ante **Alfonso Podlech**, para que quedasen en libertad. Finalmente comenta que el Capitán **Ubilla** y su grupo tenían habilitada una cuadra en la Primera Compañía para interrogar personas.

A.22 PEDRO MISAEL ELGUETA MUÑOZ.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2013, rolante de fs. 1.044 a 1.046 (Tomo III), desarrolla en una oportunidad fue designado como Policía Militar, correspondiéndole en el caso desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los Consejos de Guerra, instancias donde el abogado **Alfonso Podlech** y el Comandante del Regimiento **Pablo Iturriaga Marchesse**, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, **escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento**. Otra situación que quiere aportar, es que pudo observar cuando trasladaban a los detenidos a la sala de instrucción de la **Compañía de Morteros**, lugar donde **escuchaba los desesperados gritos de estas personas que eran interrogadas**.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2017, rolante a de fs. 1.048 a 1.050 (Tomo III), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile. En lo pertinente afirma haber visto detenidos en el Regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en la sala de instrucción de la **Compañía de Morteros**. **En ese lugar los detenidos eran torturados. Él pudo escuchar muchas veces los gritos de dolor que salían desde esa dependencia**. Allí eran sometidos a apremios tanto hombres como mujeres. En lo pertinente y respecto de **Alfonso Podlech Michaud**, puede señalar que lo recuerda bien porque como dijo en su declaración extrajudicial, **lo vio en los Consejos de Guerra. Esta persona al parecer leía la sentencia que casi siempre era de fusilamiento. Además, se le veía pasar a la Comandancia**.

A.23 HERNÁN ALEJANDRO MORALES GÓMEZ.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2012, rolante de fs. 1.082 a 1.085 (Tomo IV), espeta que todas las resoluciones las confeccionaba el personal de Fiscalía Militar y el sólo las firmaba. A su pregunta, escruta que conoce a **Alfonso Podlech Michaud**, quien es abogado de la ciudad de Temuco.

Indica que **esta persona lo llamó por teléfono a poco de haber tomado su cargo de Fiscal Ad-Hoc para pedirle que dejara a todos los detenidos presos, porque eran extremistas.** En aquel tiempo, **Podlech** tenía muy buenas relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel. En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Después del 11 de septiembre de 1973, **Podlech** acudía frecuentemente al Regimiento, vestido de Militar. Se decía que era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor **Jofré** sobre temas legales.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de octubre de 2014, rolante de fs. 1.353 a 1.354 (Tomo IV), sobre las víctimas **José María Ortigosa Ansoleaga** y **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, evidencia que conoció a **Ortigosa**, ya que era su cliente y ubicaba a **Mateluna**, ya que a su parecer era Practicante y probablemente se desempeñó en el Hospital Regional de Temuco. Sobre **Ortigosa**, puede señalar que lo conoció en la ciudad de Villarrica, ya que estaba en el negocio de animales, él era una persona muy ostentosa y por lo que sabe manejaba dinero de otras personas producto de sus negociados. Sobre los hechos que rodearon su detención y muerte, está en su recuerdo que dos días antes de su detención le contactó telefónicamente desde Santiago, comentándole que tenía una citación desde el Regimiento Tucapel, según cree recordar le dio el nombre de **Iturriaga** como el Oficial que lo citaba. Dada la situación, **José Ortigosa** le consultó que debía hacer, a lo cual le dijo que si no tenía nada que temer se presentara, esa fue la última vez que conversó con él, ignorando si viajaría a Temuco. Es así, que después de quince días aproximadamente, se enteró por intermedio de una persona que probablemente tenía el nombre de **Pedro Ansolena Hueicolea** y **Ramón Quezada Ansolena**, quienes eran sus clientes y oriundos de Villarrica, que a **José "lo habían dado vuelta"**.

En declaración judicial de fecha 26 de noviembre de 2014, rolante de fs. 1.358 a 1.360 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.353 a 1.354. Agrega que fue el Ministro de Interior, **Jaime Tohá**, quien le contó que existía una escuela de guerrilla en el sector costero de Carahue, quizás Nehuentúe, y que se iba a realizar una investigación por lo que debía designarse un Fiscal a Ad - hoc para este efecto. Por este motivo le pidió que se hiciera cargo de ese sumario, puesto que ya había hablado con el mando en Valdivia para que el declarante fuese el designado. Fue así que una vez notificado legalmente de su designación se presentó ante el Comandante del Regimiento Tucapel, que era de apellido **Iturriaga**, quien le señaló que iba a trabajar en una dependencia ubicada al lado

de la oficina del Mayor **Jofré** y que le iban a designar un Oficial para que sirviera como actuario. Recuerda que la oficina que le entregaron tenía uno o dos escritorios y a un oficial de apellido **García** era el Secretario de la Fiscalía bajo su mando, quien además, ofició de actuario durante los interrogatorios. A su pregunta, expresa que el **Mayor Jofré era una persona bonachona que no tenía el perfil de Militar clásico como Iturriaga y no tomaba mayores decisiones sobre el destino de las personas detenidas**. Por esto cuando sucedió el golpe, llegó el abogado **Alfonso Podlech** para asesorarlo en materias de la Fiscalía, a quien conocía como abogado de la ciudad de Temuco. **En aquel tiempo, Podlech tenía muy buenas relaciones tanto con los Oficiales de la FACH como con los del Regimiento Tucapel**. En este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido Militar anteriormente. Sustenta que **después del 11 de septiembre de 1973, Podlech acudía Frecuentemente al Regimiento, vestido de Militar. Se decía que era consultado tanto por el Comandante del Regimiento como por el Mayor Jofré sobre temas legales. Podlech organizó la Fiscalía Militar que funcionó al interior del Regimiento. Él fue quien trajo a los actuarios Toloza y González más un amigo de este abogado, de nombre Dorian Novoa**. Desconoce el motivo por el cual el abogado **Podlech** fue designado Fiscal Ad-Hoc para concurrir a la Corte de Apelaciones de Temuco con el objeto de solicitar actuarios y Personal Judicial para los Consejos de Guerra. Esto porque el declarante era Fiscal Ad Hoc y **nada le dijeron en ese sentido**. Exclama que **un día Toloza le dijo que Podlech interrogaba detenidos al igual que lo hacía el Mayor Jofré**. Respecto de los hechos materia de esta investigación, recuerda lo ocurrido a **José Ortigosa Ansoleaga**, quien por aquel tiempo era su cliente. Esta persona **lo llamó por teléfono a raíz de que lo estaban requiriendo en la Fiscalía Militar de Temuco mediante un Bando Militar**. El declarante le dijo que no temiera si nada había hecho. Entonces él decidió venir. Pocos días después supo que había sido ejecutado, pero no se enteró de mayores detalles, puesto que **le consultó al Comandante Iturriaga por su caso, pero éste le dijo que no se metiera**. Sabe que **Ortigosa** vino a Temuco con un maletín lleno de dólares, el cual desapareció. Alguien según entiende, se apropió de ese dinero, pero desconoce quién lo hizo.

A.24 BERNARDITA DEL CARMEN WEISSER SOTO.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.113 a 1.114 (Tomo IV), ratifica íntegramente su declaración judicial prestada en causa rol 113.051. En lo pertinente agrega que mientras se encontraba en la Fiscalía Militar, vio llegar a Conscriptos con libros requisados, uno de los cuales

eran poesías de Gabriela Mistral, por lo cual solicitó al Mayor **Jofré** si podía quedárselo, lo recogió justo en el momento en que aparece el Sr. **Alfonso Podlech** a la sala. **Jofré en un acto que le pareció casi de aprobación hacia Podlech le insinuó que podría darle este libro**, a lo que **Podlech** nada dijo, pero casi de inmediato miró hacia los otros volúmenes y sacó uno, diciendo que se iba a quedar con ese libro. **Alfonso Podlech vestía uniforme militar y fue interrogada por él en dos oportunidades junto a su actuario de apellido González.** Aclara que era este actuario quien tenía un anillo con forma de dragón y no un Militar como lo señaló anteriormente. También **González** la interrogó a solas en otras oportunidades. Suma que existe una persona de nombre **Maggie o Margarita Toledo Klenner**, quien vive en Puerto Montt y que estuvo detenida junto con ella en el Buen Pastor y que también fue interrogada por **Alfonso Podlech**. Ella puede dar testimonio de lo que le tocó vivir. Recuerda que un día mientras esperaba ser interrogada en la Fiscalía Militar, se acercó el Capitán **Ubilla**, quien siempre rondaba por ese lugar, el que tenía una venda en un brazo. En esa oportunidad dijo que habían sido víctimas de un intento de asalto, Tiempo después asoció esta declaración de **Ubilla** con el asalto al polvorín.

En diligencia de careo entre Bernardita Del Carmen Weisser Soto y Óscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.121 a 1.123 (Tomo IV), ratifica su declaración prestada en autos y que rola de fs. 3.503 a 3.504 (correspondiente a la declaración de fs. 1.113 a 1.114). La persona sentada a su lado con la cual se le carea es el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, quien la interrogó a fines de octubre de 1973 en la Fiscalía Militar ubicada en el Regimiento Tucapel. Justifica que fue interrogada por el señor **Podlech** en una oficina ubicada hacia el fondo del edificio que estaba situado hacia la izquierda de la entrada del Regimiento. Le parece que la relación que tenía el señor **Podlech** con el resto de los integrantes de la Fiscalía Militar, incluido el Mayor **Jofré** era de superioridad por cuanto daba la sensación que todos le tomaban el parecer a él para actuar. Fue interrogada por **Podlech** en la Fiscalía Militar, indicando que hubo muchas otras mujeres detenidas que sufrieron torturas y que seguramente fueron interrogadas por este señor, refiriéndose a las que recuerda. Invoca que el señor **Podlech** fue al Buen Pastor a efectuar visitas de cárcel ocasión en las que **sufrieron amenazas por parte de él.**

En declaración judicial de fecha 18 de noviembre de 2003, rolante a fojas 1.556 a 1.559 (Tomo V), inquiriere que un día la fue a buscar el Sargento **Moreno, quien la llevó al Regimiento para que le tomaran una declaración en la Fiscalía. En ese lugar vio pasar a unos Militares Conscriptos con**

un montón de libros requisados, los que iban a ser destruidos, quienes los dejaron en el piso de la oficina. Entonces apareció el abogado **Alfonso Podlech Michaud**, revisó los libros y tomo para sí una colección. Además vio un libro de poesías de Gabriela Mistral e instintivamente pidió quedárselo. Entonces el Comandante **Jofré** en un acto de nobleza se lo regaló.

En declaración judicial de fecha 23 de mayo de 2017, rolante de fs. 1.591 a 1.592 (Tomo V), ratifica sus declaraciones extrajudiciales y judiciales prestadas en autos y la de fs. 1.556 a 1.559, 1.984 a 1.987, 2.260 a. 2.261, 2.268 a 2.270, de la causa 113.089. También ratifica el careo que se practicó entre la deponente y **Alfonso Podlech** de fecha 19 de julio de 2013, en la causa rol 113.089.

A.25 RODRIGO MIGUEL ANTONIO HENRÍQUEZ ARAVENA.

En declaración judicial de fecha 13 de diciembre de 2010, rolante a fs. 1.571 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 228 a 230 (otorgada en causa diversa). Advierte que **vio al abogado Alfonso Podlech interrogar a su hermano en dependencias del Regimiento Tucapel donde funcionaba la Fiscalía Militar**. Este hecho lo presencié, pues se encontraba en los pasillos contiguos a la oficina antes mencionada. Junto con su hermano, señala que fueron interrogados **Jobet, Ljubetic y Ortigosa**, quienes pasaron a la sala de audiencias, donde se encontraba Podlech junto a los actuarios **Tolosa y González**. Le parece que fue al día siguiente o subsiguiente de la primera detención de su hermano, que se dirigió hasta el Regimiento y se entrevistó con **Alfonso Podlech, quien le señaló que su hermano y los demás detenidos mencionados anteriormente eran unos activistas**. Asevera que **Podlech actuaba como Fiscal Militar en propiedad, de hecho vestía Uniforme Militar y daba órdenes en ese lugar**. Además en todas las oportunidades en que concurrió a la Fiscalía Militar jamás vio al Mayor **Jofré** en Fiscalía, **solo entrevistándose siempre Podlech, quien trataba a los detenidos con epítetos tales como “vende patria”**.

A.26 JORGE EDMUNDO SEPÚLVEDA CONTRERAS.

En declaración judicial de fecha 26 de octubre de 2017, rolante de fs. 1.615 a 1.620 (Tomo V), alega que **Podlech** era quien estaba al mando de todo dentro del Regimiento. Tomando decisiones sobre quien vivía y quién no. Era el Fiscal Militar, dentro de la Comandancia tenía una oficina con los del Servicio de Inteligencia Militar. Esta persona se movilizaba por toda la región. Esto le consta al declarante, debido a que él estaba de guardia y veía esta situación. Incluso

recuerda que en muchas ocasiones el mayor **Jaime García Covarrubias** le pasó documentación a **Podlech** y él decidía respecto a las personas que se indicaban en esos papeles. Todo esto que menciona es del año 1973. Respecto al caso de **Daniel Mateluna y José María Ortigosa Ansoleaga**, sólo recuerda que en una oportunidad al momento de comer en el rancho, **se comentó que habían matado a un doctor de apellido Mateluna, esto era un comentario generalizado entre los Conscriptos**. Se decía que lo habían matado fuera del Regimiento, pero desconoce mayores detalles. Insiste en que en el Regimiento Tucapel había una gran cantidad de detenidos en el gimnasio y también sobre la existencia de **la sala de torturas, donde se ubicaba un camarote metálico, el que servía para aplicarles electricidad a las personas. Lo que sabe porque lo vio**. Anexa que una oportunidad le correspondió hacer guardias en el Hospital Regional de Temuco, mostrándole la persona a cargo de ese lugar los cuerpos que estaban ingresados por Personal Militar, ya que habían sido muertos por funcionarios del Regimiento, si saber mayores detalles.

A.27 CARMEN GRACIELA URIARTE OYANGUREN.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de agosto de 1990, rolante de fs. 85 a 88 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 224 a 226 (Tomo I), apoya que con su marido vivían en Santiago y en el verano de 1973 fueron al sur a veranear, les gusto la zona de Temuco por lo que decidieron comprar un fundo en sector Catrico. **El abogado de la contraparte vendedora fue Alfonso Podlech, quien después fue Fiscal Militar de la zona.** Narra que hacia el 21 de septiembre llegó la Policía de Investigaciones a su casa, preguntando por su marido, ella pregunto de qué se trataba y le contestaron que era un exhorto de Temuco. **Al día siguiente se trasladó a Temuco y se entrevistó con el Fiscal Podlech, ya que la orden la impartía esa repartición.** Indagó el motivo de la citación, la acusación era tener una escuela de guerrillas. Aduce que **Podlech al otro día comentó que el administrador había confesado que tenía unos textos marxistas y un arma, lo que había sido incautado, entonces señaló que no habría ningún problema que se presentara.** Carlos que era Reserva de la FACH dijo que él lo llevaba y se fueron en el auto de la declarante, muy vistoso y único de Temuco. Se alojaron en un Hotel y al rato, una gran cantidad de efectivos Militares tomó detenido a los tres viajantes, esto es **José María, Carlos Cardoen y Pedro Pablo Errázuriz.** Fueron interrogados y liberados posteriormente, salvo **José**, pues tenía una orden para presentarse. Los acompañantes le dijeron que estuviera tranquila. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Temuco, el Alcaide **Maximiliano Vivanco, que la conocía, la llamó**

entre el 25 y 28 de septiembre y le comunicó que su marido se encontraba incomunicado, que era el único preso político incomunicado y en muy malas condiciones, ya que había sido torturado con electricidad. Le mandó un mensaje manuscrito, en el que señalaba que necesitaba dinero, pues le pedían un rescate de 250.000 dólares. **Carlos Cardoen** expresó que le entregaron una cantidad ligeramente inferior a **Pablo Iturriaga Neumann**. Desarrolla que el Alcaide la llamaba regularmente y con fecha 03 de octubre recibió la noticia. Fueron al día siguiente al Hospital, la dejaron ver el cuerpo con una persona del personal subalterno gracias a una propina, pues el medico jefe se lo negaba. **Pudo ver el cadáver de su marido, tenía 11 tiros.** Musita que en el Regimiento habló con don **Luis Jofré Soto**, quien le dijo que a los fusilados se les depositaba en la fosa común, frente a las fuertes insistencias cedió y se lo dio en un cajón sellado. Le prohibieron hacerle misa y anuncios en los diarios. No obstante, ella lo hizo, enterrando a su marido en Santiago, con gran asistencia. Luego tuvo que ir a Temuco a defender el campo. La defensa que hacían era que su marido era marxista. Por lo que **habló con Urrutia en la Corte y el Relator Zurita**, quienes se negaron a ayudar, argumentando que su marido fue fusilado por marxista. En Temuco se siguió un Juicio para reivindicar el campo, en el que no pudo recuperarse, pasando a poder de la antigua dueña, **Herminia Diez**, quien lo vendió a su vez. Posteriormente en una conversación con el Fiscal Podlech, éste le dijo que lo había liberado luego de interrogarlo. El Alcaide le relató que en una oportunidad había tomado unas copas con **Luis Jofré Soto**, quien le dijo “ese tal por cual de Ortigosa casi me convence”.

En declaración judicial, de fecha 25 de marzo de 1991, rolante de fs. 331 a 333 (Tomo I), aproxima ser la cónyuge de **José María Ortigosa Ansoleaga**, quien falleció el 02 de octubre de 1973 en Temuco, por una patrulla Militar. Reitera todo lo anterior, agregando que respecto a la noticia del fallecimiento de su marido, al cual se le aplicó la “ley de fuga”, la supo por intermedio del Alcaide de la época, don **Maximiliano Vivanco**, el que además de llamarla por teléfono, le envió un escrito de su marido en el que le comunicaba que se le estaba pidiendo la suma de US 250.000 por su libertad, no indicándole quien se los pedía, pero le informaron que era el Intendente de ese año **Pablo Iturriaga** junto a un tal **Pacheco** de la FACH. En conocimiento del fallecimiento de su marido, se trasladó de inmediato a Temuco, apersonándose en el Regimiento Tucapel, conversando con el Mayor **Luis Jofré Soto**, el cual le señaló que los cadáveres de los fusilados iban a la fosa común y no le entregarían el cuerpo de su marido, respondiéndole que tendría que dispararle de frente y no en la espalda como a su marido para que los enterraran a los dos en esa la fosa

común. Después de eso ingresó a una oficina donde conversó con otros Militares y regresó diciéndole que llevara un cajón y ropa, al respecto de la ropa, le dijo que su marido estaba vestido, **a lo que contestó que esa ropa no servía.** Posteriormente fue al Instituto Médico Legal, donde un funcionario o auxiliar la dejó **ver el cadáver de su esposo, que estaba en una camilla autopsiado presentando heridas de bala en la espalda.** Luego un hijo retiró el cuerpo de la morgue.

A.28 CARLOS REMIGIO CARDOEN CORNEJO.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de noviembre de 2012, rolante de fs. 421 a 423 (Tomo II), funda que fue amigo de la víctima de los hechos investigados de nombre **José Ortigosa Ansoleaga**, a quien conoció a finales de la década de los sesenta. Indicó que **José** se dedicaba al comercio en la ciudad de Santiago y a la agricultura en un terreno que tenía en las cercanías de la ciudad de Villarrica, recordando también que era piloto de vehículos de competición, desempeñándose para estos efectos en el sector de las Vizcachas, Santiago. Respecto a la militancia política de **José**, ignora si la tuvo, **pero tiene muy claro que era amigo personal del Presidente Salvador Allende Gossens, por lo tanto, cree que era simpatizante de los partidos de Izquierda.** Sobre las circunstancias que rodearon la detención de **José**, utiliza en primer lugar que éste estuvo detenido en el Estadio Nacional, lugar donde fue sacado por un familiar de su esposa que era Oficial de Ejército, para posteriormente asilarse en la Embajada da Ecuador, lugar desde donde se comunicó telefónicamente con él, para informarle que estaba siendo requerido por las autoridades militares de Temuco, porque lo estaban acusando de tener una escuela de guerrillas en esa región, por este motivo le solicitó que interviniera por él; en su calidad de Oficial de Reserva de la Fuerza Aérea. Por este motivo, el declarante **contactó General de la Fuerza Aérea José Berdichevsky, a quien le expresó lo solicitado por Pepe, quien le dijo en esa oportunidad que lo acompañara a Temuco,** junto con un salvoconducto emitido por él. Por otra parte, **contactó a Claudio Picasso Quinto, quien era amigo tanto de José como de su persona y quien además también era Oficial de Reserva de la Fuerza Aérea. El objeto de su llamado fue para darle a conocer la situación en que se encontraba Pepe y lo que le había dicho el General antes mencionado.** Una vez recibido el salvoconducto, contactó a **José** y le informó los pasos a seguir, según su recuerdo **Pepe**, le dijo que ponía a disposición su auto modelo Cámaro y que los acompañaría su a amigo personal **Pedro Pablo Errázuriz.** No recuerda la fecha exacta en que salieron desde Santiago, probablemente después del día 11 de septiembre u

octubre de 1973, salieron de mañana llegando a Temuco, cerca de las 16:00 horas de ese día contactó nuevamente a Claudio Picasso, informándole que habían llegado y que tenían la intención de dirigirse a la Base Aérea, pero Claudio le manifestó que era preferible que se alojaran en un hotel y que se presentaran en la Base Aérea al día siguiente. Debido a esta situación, se instalaron en un hotel ubicado en la carretera, el hecho es que cerca de las 19:00 horas fueron allanados por personal de Carabineros, quienes hicieron un ingreso muy violento al lugar donde se encontraban. Según su recuerdo, uno de los Carabineros preguntaba muy aireadamente, por Ortigosa, a lo cual Pepe levantó su mano siendo detenido inmediatamente, incluso a ellos también los detuvieron. Posteriormente fueron llevados a la Comisaria de Carabineros de Temuco, donde no tiene muy claro si fue en ese lugar donde les señaló que era Oficial de la Fuerza Aérea y donde también le arrebataron el salvoconducto que portaba. Posteriormente, fueron separados y llevados a distintos calabozos, en determinado momento solicitó conversar con el Oficial a cargo, pero no le fue permitida tal situación. A eso de las diez de la noche, les piden que salgan del calabozo y un Oficial de Carabineros le ordenó a un Carabinero que los subieran a una camioneta y le ordenó a éste que sacara su armamento y que los matara en caso de cualquier movimiento. Hace presente que fueron llevados hasta la Base Aérea "Maquehue", donde fueron recibidos por un funcionario Militar muy hostil, quien les propinó un par de culatazos y vendó su vista al ingreso. Según recuerda, se llevaron a Pepe, probablemente a una sesión de interrogatorios y luego a Pedro Pablo y finalmente al declarante. Posteriormente, lo trasladaron a una dependencia que a su parecer correspondía a una enfermería por el olor a alcohol y yodo, en dicho lugar aun vendado lo sentaron en una silla y fui interrogado por una persona cuya identidad ignora, contándole a éste señor los motivos por los cuales andaban en la zona refiriéndose al requerimiento de José. Una vez finalizado el interrogatorio, esta persona le pidió que se sacara la venda y pudo ver frente a sí una persona de civil, de bigote, pelo negro, de tez blanca, cuya identidad nunca supo, quien le pidió excusas por el trato que habían recibido, señalándole qué se encontraban en tiempo de guerra y que había que tomar precauciones, justificando el procedimiento hacia ellos. Posteriormente, se reunió con Pedro Pablo en una dependencia de la Base y fueron trasladados al hotel, esto cerca de la 06:00 horas, donde procedieron a ducharse y guardar su ropa, dirigiéndose minutos después nuevamente a la Base para ver que iba a suceder con Ortigosa. Al llegar a la base se informó que éste había sido trasladado al Regimiento "Tucapel". Por lo antes señalado, se dirigieron al

mencionado Regimiento, donde se presentaron en la guardia, lugar donde preguntaron por **José Ortigosa**, recordando que **en esos momentos logró visualizar a Pepe, en el interior de la guardia logrando manifestarle que iba a ser juzgado en ese lugar y que se encontraba bien, también recuerda que le pidió que fuera al mercado y le comprara unas frazadas, ya que había pasado mucho frío, indicándoles también que contactaran a su señora para que ella junto a un abogado se vinieran a Temuco**. Según su recuerdo, fueron a comprar las frazadas, pero no tiene claro si se las entregó personalmente o las dejó en la guardia. Posteriormente, junto a **Pedro Pablo** emprendieron rumbo a Santiago, recordando que **en determinada parte del trayecto escucharon por la radio que el "Extremista José Ortigosa, quien se encontraba detenido al interior del Regimiento Tucapel por intentar fugarse, había sido abatido por personal Militar"**, esto lo escuchó cerca de las 16:00 horas. Esta situación los tomó por sorpresa e hicieron un par de llamados telefónicos a Santiago. **Al llegar a Santiago, fue a casa de José, dónde tomó contacto con Carmen, su esposa, quién ya estaba en conocimiento de la muerte de su marido. Al día siguiente Carmen le informó que el cuerpo de Pepe no iba ser entregado por las autoridades Militares, por este motivo contactó a Juan Torres Gundian, quien era Oficial de Ejército y su amigo personal, quien intercedió contactando a las autoridades en Temuco para que enviaran el cuerpo de José a Santiago**. Después de dos días la familia de **José** recibió su cuerpo y él declarante asistió a sus funerales en el Cementerio General.

En declaración judicial de fecha 18 de diciembre de 2012, rolante de fs. 436 a 437 (Tomo II), ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 421 a 423. Justifica que conoció a José Ortigosa a fines de 1969 o principios de 1970, estableciendo una buena amistad al punto que conocía a su esposa y a sus hijos. Se enteró a través de Carmen Uriarte de la detención de José Ortigosa en el Estadio de Chile. No tuvo oportunidad de conversar con ningún Oficial del Regimiento Tucapel de Temuco o de la Base Aérea Maquehue, salvo el que lo interrogó en ese lugar. Tiene el vago recuerdo de haber visto la chaqueta que en esa oportunidad vestía José Ortigosa, la que presentaba muestras de haber recibido impactos de bala de distinto calibre por la espalda. Esta prenda se la enseñó algún familiar de Ortigosa.

A.29 PEDRO PABLO ERRAZURIZ OSSA (37 años a la fecha de los hechos), quien declara de 288 a 289 (Tomo I); y de fs. 529 a 530 de (Tomo II).

En declaración extrajudicial de 25 de septiembre de 2012, rolante de fs. 288 a 289 (Tomo I), difunde que el año 1970 conoció a **José Ortigosa Ansoleaga**, quien era dueño de un taller de reparaciones de automóviles, ubicado al parecer en la calle San Victoria, de la comuna de Santiago. Decantó que hicieron una sociedad de palabra, cuyo objeto era la venta a ECA de alimentos, de la cual resultaron dos o tres negocios exitosos. A raíz de esta relación laboral, se hicieron amigos y pudo conocer su casa y familia, oyéndole decir en varias ocasiones que tenía una propiedad agrícola en el sur del país, específicamente novena región, agregando que era simpatizante del Partido Socialista. Con respecto a los hechos que se investigan, cimentó que una vez ocurrido el Golpe de Estado el día 11 de septiembre de 1973, días posteriores a este suceso, **José Ortigosa**, fue detenido por una Patrulla Militar, desconoce las circunstancias, y fue llevado al Estadio Nacional, lugar donde permaneció por tres días, para luego continuar con su vida en normalidad. Ante tal detención y debido a su extrovertida personalidad, que a posterior le pudiera traer problemas y que resultara detenido nuevamente, le aconsejó que se asilara en la Embajada de Ecuador, situación que ocurrió, gracias a que fue concedido por el Cónsul de apellido **Buenaventura**. Continuó que durante los días que permaneció en la Embajada, los cuales fueron alrededor de seis a siete días, **José** se enteró por un comunicado radial, que debía presentarse en la ciudad de Temuco. Ante tal requerimiento, decidieron con ayuda de **Carlos Cardoen**, amigo de ambos, efectuar averiguaciones preliminares en la Fuerza Aérea de Temuco, donde nadie supo dar ninguna indicación de que hubiese una razón del llamado, motivo por el cual decidieron junto a **Cardoen** acompañar a **José** hasta Temuco. Relató que llegaron hasta un hotel, que estaba ubicado al ingreso de Temuco, lugar donde a la hora después fueron detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea, los cuales se desplazaban en camiones, siendo llevados en su caso y **Cardoen** a unas dependencias de Carabineros de Chile, mientras que a **José Ortigosa**, presume que fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Aérea, siendo esta la última vez que lo vio con vida. Posteriormente fueron interrogados por funcionarios de Carabineros, quienes al corroborar sus identidades y conocer sus actividades profesionales, fueron trasladados a unas dependencias de la Fuerza Aérea, probablemente "Base Aérea Maquehue", lugar donde firmaron un documento y quedaron en libertad, aprovecharon la oportunidad de preguntar por la situación de **José Ortigosa**, indicándoles los uniformados que se encontraba preso. Suma que al día siguiente de haber recuperado su libertad, decidieron con **Carlos Cardoen** regresar a Santiago, enterándose dos a tres días después y por intermedio de la familia de **José Ortigosa**, que éste había muerto por herida a balas,

desconociendo mayores detalles al respecto. Finalmente, señaló que nunca supo identidad alguna de los uniformados de la Fuerza Aérea que los detuvieron como tampoco de los Carabineros que los interrogaron, agregando que con relación a la persona de **Daniel Mateluna Gómez**, no lo conoce y es primera vez que escucha su nombre.

En declaración judicial de fecha 02 de julio del 2012, rolante a fs. 529 a 530 de (Tomo II), ratificó íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 288 a 289. Anexa a sus dichos que en todo momento aconsejó a **José Ortigosa** que no fuera a Temuco, pero este insistió en el viaje por lo que decidió acompañarlo junto a **Carlos Cardoen**. A la pregunta, no participó en la reunión junto a **José Ortigosa** desarrollada en un restaurante de Villarrica en que se haya suscitado un incidente con personal de Investigaciones de esa ciudad. Sin embargo, recordó que "**Pepe**" le comentó en alguna oportunidad que había tenido una pelea en un bar de Villarrica con un jefe de la Policía de Investigaciones de ese lugar, al cual golpeó bastante. A la pregunta, recalcó que no fue apremiado físicamente ni en la Comisaría ni en la Base Aérea Maquehue. Sin embargo, cuando salió de la Comisaría con destino a la Base Maquehue, fue conduciendo el vehículo de **Pepe Ortigosa** y junto al declarante iba un Sargento de Carabineros, que fue increpado al salir por un Teniente porque no le iba apuntando con su arma. Por esto el Sargento sacó su revólver y se lo puso en la cabeza. Cuando se alejaron dejó de hacerlo. A la pregunta, expresó que no tuvo oportunidad de conversar con ningún Oficial del Regimiento Tucapel de Temuco o de la Base Aérea Maquehue. Al día siguiente de haber sido dejado en libertad conversó con el obispo **Bernardino Piñera** para que intercediera por **José Ortigosa**. Después de esto regresó a Santiago. A la pregunta, contó que **la viuda de José Ortigosa** le entregó el chaleco que él vestía cuando fue ejecutado. Ese chaleco él se lo había prestado poco antes de ser detenido. Esta prenda estaba llena de agujeros que claramente eran de balas. A la pregunta, musitó no recordar que se haya pedido rescate por **José Ortigosa**. Finalmente, señaló que desconoce el motivo que tuvieron las autoridades de Temuco para dar muerte a **José Ortigosa**. Sólo se le ocurre el móvil de la venganza.

A.30 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ URIARTE.

En declaración judicial de fecha 23 de noviembre del 2012, rolante de fs. 386 a 390 (Tomo II), estimula ser hijo de **Carmen Graciela Uriarte Oyanguren**, su madre enviudó y en el año 1957, se casó con **José María Ortigosa Ansoleaga**. De ese matrimonio nacen dos hijas, **Mary Carmen y**

Patricia Verónica. Comunicó que **José Ortigosa** decidió presentarse, desconoce si en la Fiscalía Militar de Temuco o en Investigaciones de Villarrica. En esa oportunidad fue acompañado por **Pedro Pablo Errázuriz Ossa** y **Carlos Cardoen Cornejo**. Llegaron en un auto camaro del año 1972, color dorado e hicieron escala en Temuco. Se alojaron en unos moteles en las afueras de Temuco. Supo, por **Carlos Cardoen**, que llegó una patrulla de la Fuerza Aérea al motel, los detuvieron y los llevaron a interrogarlos. Desconoce si los llevaron a la Fiscalía Militar o a alguna unidad de la Fuerza Aérea o Ejército. Los interrogaron vendados. **Carlos Cardoen** había sido Oficial de la Fuerza Aérea, por lo que lo dejaron en libertad. **Pedro Pablo Errázuriz Ossa**, se comunicó con su madre porque ella era la jefa de la Cruz Roja en Chile. Continúa que **a José Ortigosa lo enviaron a la cárcel**, no tuvieron la oportunidad de visitarlo mientras estuvo en ese lugar, **pero se enteraron que estaba ahí por el Alcaide de ese recinto de nombre Maximiliano Vivanco con quien José tenía una relación muy cercana.** La única que lo visitó en la cárcel fue la abogada de la familia de nombre **Aura Cuello**. **Explayó que el 02 de octubre de 1973**, por un llamado telefónico que recibió **Joaquín**, el mozo de la casa, les comunicaron que **José Ortigosa había fallecido**. Ese llamado lo hizo la abogada de la familia de nombre **Aura Cuello**. El cuerpo de **José Ortigosa** fue retirado por él y un grupo de personas cercanas desde el Hospital Regional de Temuco, se hicieron los funerales en Santiago. En la Fiscalía Militar de Temuco. Lugar donde fue presentado ante el Fiscal de la época, **Alfonso Podlech**, quien le preguntó por qué andaba con **Vicente Gutiérrez** y qué relación tenía **con José Ortigosa**. Le comentó que estaba averiguando la muerte de su padrastro. **Le preguntó irónicamente, de qué había muerto su padrastro y le dijo que él lo había dejado en libertad y que tenía copia de la orden, sin embargo, cuando le pidió que le exhibiera el documento se negó a hacerlo y le dio la orden de desaparecer de su vista en 5 minutos, y que no volviera más a preguntar sobre él.** Le hizo caso y desde esa fecha que no viene a Temuco.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto del 2013, rolante a fs. 541 (Tomo II), relató que junto con su madre concurrieron a Temuco, donde su madre se entrevistó con **Alfonso Podlech Michaud** en la Fiscalía Militar. En ese lugar **Podlech** le preguntó irónicamente a su madre si sabía cómo murió **José Ortigosa**, como ignorando a qué venía ella. Todo esto se lo contó ella una vez que salió de ese lugar y llegó al vehículo en que él la estaba esperando. Recuerda haberse entrevistado con **Alfonso Podlech** en la Fiscalía Militar, que ahora estaba ubicada en los altos de un banco. En esa oportunidad le preguntó el motivo de su detención y le contestó que andaba averiguando lo ocurrido con **José**

Ortigosa. Entonces esta persona le dijo que se acordaba perfectamente de él y que incluso le había dado la orden de libertad por falta de méritos, de lo cual guardaba una copia. Él le pidió que le exhibiera la copia, pero él se negó y le ordenó salir de la sala.

En diligencia de careo entre Francisco Antonio Rodríguez Uriarte y Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante a fs. 542 (Tomo II), ratifica sus dichos de fs. 541. Reconoce a la persona con la que se le carea como **Alfonso Podlech Michaud**, de quien ha hecho referencia. Dicha persona y el señor **Jofré** subrogaban en la Fiscalía. Se mantiene en sus dichos.

2) DOCUMENTOS (10)

B.1 Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Daniel Benjamín Mateluna de fs. 10 a 21 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 1 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 42, 117 184, 187, 193 (Tomo I) y 461 (Tomo II), **contiene Certificado de Defunción de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, de la circunscripción de Temuco, quien falleció con fecha 02 de octubre de 1973, inscripción N°652, a causa estallido cráneo encefálico, traumatismo cráneo encefálico resultado de heridas por arma de fuego de guerra.
- b) **A fs. 2 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 115, 187 y 190 (Tomo I), **contiene Acta de Defunción de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, que reitera los datos precedentes, añadiendo que el fallecido se encontraba casado con María Isabel Lillo Flores.
- c) **A fs. 3 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra de fs. 43, 116 y 192 (Tomo I), **contiene Certificado Médico de Defunción Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, en el que consta que falleció con fecha 02 de octubre de 1973, que en lo pertinente establece causa de muerte por estallido cráneo encefálico, traumatismo cráneo encefálico y heridas por arma de fuego de guerra, por autopsia realizada a la víctima. *Documento firmado por el Dr. Wolfgang Reuter.*
- d) **De fs. 4 a 5 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra de fs. 476 a 477 (Tomo II), **contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación**, en el que consta que **Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez**, de 53 años, casado, era Consejero de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Temuco. Fue detenido y trasladado al Regimiento

Tucapel de Temuco. Con fecha 2 de octubre de 1973 fue ejecutado en las dependencias de este recinto militar por agentes del Estado.

- e) **A fs. 6 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 46, 119, 171, 195 y 223 (Tomo I), **contiene copias de recorte de prensa que se titula “Once bajas en Cautín”**, noticia de fecha 21 de octubre de 1973, que relata lo siguiente: hasta el momento se han registrado 11 bajas en Cautín, correspondientes a individuos que pretendieron escapar de los Cuarteles, donde se los mantenía prisioneros o agredir a los Centinelas que los custodiaban, de acuerdo a los Bandos oficiales. Seis de ellos fueron dados de baja por efectivos del Ejército: Diego Durán, Daniel **Mateluna Gómez, José Ortigosa Ansoleaga, Pedro Ríos Castillo** y Guido Troncoso Pérez. el sexto corresponde a un desconocido que no portaba documentos y que fuera abatido durante las horas de toque de queda al no obedecer la voz de alto. Otros dos fueron dados de baja por Centinelas del grupo N°3 de helicóptero: Hernán Henríquez y Alejandro Flores. El resto, por patrullas de Carabineros: Guillermo Hernández Elgueta, ex Subdelegado de Cunco, Leomedes Monroy Seguel y Hernaldo Aguilera Salas.
- f) **A fs. 7 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 45, 118, 120, 170, 194, 196, 222(Tomo I) y 1.820 (Tomo V), **contiene copias de recorte de prensa que se titula “En Regimiento de Temuco, muertos dos Marxistas Por Intento de Fuga”**, que relata lo siguiente: dos personas que estaban detenidas en el interior del Regimiento Tucapel de Temuco fueron dadas de baja por las guardias internas, al intentar escapar del recinto. Estas personas fueron identificadas como **“Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga”**, de quienes no fueron proporcionados mayores antecedentes. El intento de fuga, según el Bando dado a conocer por la Comandancia de la Guarnición Militar de Temuco, ocurrió en la noche del día 02 de octubre.

Detallado en el apartado B.1 de Documentos.

B.2 Fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 189/73, emitido por la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de fs. 31 a 35 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 115 a 153 (Tomo I), **Protocolo de Autopsia Médico Legal de Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez**, de fecha 03 de octubre de 1973, en el que consta su fallecimiento con fecha 02 de octubre de 1973, y concluye que: **a)** La causa precisa y necesaria de muerte del N.N identificado como Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez fue un estallido craneo-encefálico ocurrido por disparo de bala. **b)** En la necropsia practicada, pudo localizarse dos orificios de entrada de bala, uno en la región lumbar izquierda y otro en la región

escapular izquierda, estableciéndose dos orificios de salida en el flanco derecho por desintegración del proyectil, del cual se ubicó solo fragmento. El proyectil escapular izquierdo tuvo su laida en la base de la nuca. **c)** Por su localización es prácticamente seguro que hubo un tercer disparo, que impacto en la región occipital derecha, ocasionando un estallido del cráneo y la desintegración del proyectil, del cual se localizó cuatro fragmentos intracerebrales. Este disparo, no hizo orificio de salida y su trayecto fue de tras hacia adelante, de abajo hacia arriba y ligeramente de derecha a izquierda. **d)** Todos los disparos corresponden a impactos a distancia y de diferentes ángulos, por lo cual se estima que fueron hechos por diferentes armas pero de igual calibre. **e)** La lesión encefálica debió ocasionar una muerte instantánea. **f)** Los Proyectiles corresponden a gran calibre de armas de guerra. La herida lumbar determinó secciones múltiples del intestino delgado y perforaciones del intestino grueso; sección de la aorta abdominal y estallido del hígado, por lo cual también debe estimarse como rápidamente mortal.

Documento firmado por el DR. Wolfgang Reuter.

Detallado en el apartado B.2 de Documentos.

B.3 Antecedentes proporcionados por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 42 a 55 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 142 a 174 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente forma:

- c) De fs. 48 a 50 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 57 a 60 y de fs. 172 a 174 (Tomo I), **contiene Oficio N°1095/91 del Servicio Médico Legal de Temuco, de fecha 25 de septiembre de 1991,** en el cual se indica que existen otras autopsias donde la causa de muerte haya sido consecuencia de las razones señaladas en los protocolos remitidos mediante Oficio N° 1026/91, incluyendo nómina de diversas personas, entre ellas: de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez:** de 53 años de edad, Protocolo de Autopsia N°189/73 de fecha 03/10/1973, cuya causa de muerte corresponde a estallido cráneo encefálico, heridas de arma de fuego de guerra; y de **José María Artigosa Ansoleaga:** de 42 años de edad, Protocolo de Autopsia N°190/73 de fecha 04/10/1973, cuya causa de muerte corresponde a atrición cráneo encefálica por heridas de bala de patrulla Militar. *Firma Dra. Barrientos Orloff.*
- d) A fs. 159 a 161 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 177 a 197 (Tomo I) y de fs. 371 a 373 (Tomo II), **contiene Protocolo de Autopsia de José María Ortigosa Ansoleaga N°190/73 de fecha 05 de octubre de 1973,** en el que consta que falleció con fecha 02 de octubre de 1973 y concluye que:
- a)** La causa precisa y necesaria de muerte del N.N identificado como José

María Ortigosa Ansoleaga fue una atrición cráneo-encefálico determinada por acción de arma de fuego. **b)** El registro de autopsia ha podido demostrar el impacto de cinco proyectiles con las siguientes características: **b.i)** Orificio de entrada preauricular izquierdo, correspondiente a un disparo a distancia con salida en la región occipital, que determinó el estallido del cráneo y masa encefálica y es el causante directo de esta muerte. **B.ii)** Impacto de una bala en el lado derecho del labio superior, que corresponde probablemente a un disparo de cerca y que ocasionó una destrucción de los incisivos superiores, ubicándose el proyectil en la parte posterior de la cavidad bucal con deformidad de su base. **B.iii)** Orificio de entrada de proyectil en la región escapular izquierda, que corresponde a un disparo de cerca y es transfixiante torácica, correspondiendo a su orificio de salida al extremo postero-superiores del brazo derecho. **B. iv)** Dos orificios de entrada de proyectiles en el tercio medio posterior del hemiterax derecho de orientación paralela oblicua dirigido hacia arriba, adelante y a la izquierda. Este proyectil ha atravesado y destruido ampliamente la columna vertebral dorsal, penetraron en la parte torácica izquierda a nivel del vértice y segundo espacio intercostal izquierdo, ocasionando la fractura de la clavícula. Uno de los proyectiles escapó por la región supraclavicular. No puede ser ubicado el otro proyectil, pese al registro de la región especular izquierda, pudiendo haberse desviado terminalmente de su trayecto sin dejar huella visible. **c)** De las lesiones señaladas, se logró aislar dos proyectiles de plomo con cubierta de bronce, de forma cónica, que por sus características corresponde al calibre y tipo de balas de guerra utilizadas por el Ejército. **d)** Atendida la naturaleza y extensión de las lesiones craneanas, la muerte debió producirse en forma instantánea. **e)** La necropsia demostró además la existencia de una hipertrofia cardíaca global de predominio ventricular izquierdo, atribuible a un estado de hipertensión arterial, que el occiso debió padecer en vida. Hay cicatrices planas blanquecinas en la mano y muslo derechos, probablemente secundarias a quemaduras. *Documento firmado por el DR. Wolfgang Reuter.*

Detallado en el apartado B.3 de Documentos.

B.4 Acta de inspección Ocular, rolante de fs. 1.015 a 1.020 (Tomo III), en que el Tribunal se constituye en dependencias del R.I N°8 "Tucapel", en la que consta que se dirigieron al Pabellón de solteros del Casino de Oficiales, lugar donde el testigo **Raimundo García Covarrubias** identifica el dormitorio donde alojaba, así mismo se dirigen a otro lugar dentro del Casino de Oficiales donde el testigo **Romilio Lavín** indica cuál era su dormitorio. Luego el testigo **Orlando**

Moreno Vásquez indica el lugar donde funcionaba la Fiscalía Militar, dirigiéndose todos a la Comandancia del Regimiento, en dicho lugar el testigo manifiesta que ésta Comandancia estaba a cargo del Mayor **Cofré**, pero después funcionaba con el **Sr. Podlech**; a su vez, el testigo **García Covarrubias** señala que habían dos oficinas, en una funcionaban los actuarios y en otra el Fiscal. A continuación, el **Sr. García** indica dónde se ubica la compañía de Plana Mayor, la Compañía de Morteros y la Compañía Cazadores que antes era la Compañía Andina. Luego el **Sr. Lavín** indica dónde el lugar donde se encontraba el gimnasio del Regimiento. El **Sr. Moreno** acotó que llegó gente detenida al Regimiento y ésta era llevada al gimnasio, siendo el Fiscal quien decidía quién iba a la cárcel o quién quedaba en libertad. Los testigos, específicamente el **Sr. Moreno**, indica el lugar donde se encuentran los baños. El Sr. Ministro pregunta a otros testigos, personal de la Policía de Investigaciones en situación de retiro, a fin de que indiquen el lugar donde trabajaban, señalando éstos que fueron destinados al Regimiento para efectos de prestar colaboración al **Sr. Fiscal Podlech**, aduciendo que habían actuarios que eran civiles y que existieron muchos detenidos, los cuales eran asignados a los detectives, aproximadamente 20 detenidos por detective. El testigo **Sr. Hernán Quiroz Barra** afirma que a él le tocó interrogar a muchos de estos detenidos. Por otra parte, el **Sr. Luco**, afirma que él en esos tiempos era chofo, y sólo llegaba hasta la guardia del Regimiento, en ese lugar se le indicaba que trámite debía hacer y él tenía expresa orden de llegar solo hasta la guardia del Regimiento. Mientras que el **Sr. Omar Burgos Dejean** agrega que trabajaba en el archivo, el cual quedaba en la Comandancia, al fondo a la izquierda, cuya oficina no tenía nombre, él daba los salvoconductos, trabajando hasta el viernes, alegando que normalmente tenía un banco de colegio ubicado antes de la Guardia del Regimiento, en el cual trabajaba entregando a la gente los salvoconductos que eran documentos firmados por el Fiscal **Jofré**. A su vez, el testigo **Sr. Raúl Schonherr Frías** indica que trabajó en la Segunda Comandancia después del 11 septiembre de 1973, señalando que en la Segunda Comandancia, en su interior, habían tres dependencias: la oficina del dactilógrafo, funcionaba en este lugar como también la del Segundo Comandante, y otra dependencia en que habían tres oficinas, allí funcionó el Fiscal **Jofré**, después llegó el **Sr. Podlech**. Posteriormente el Sr. Ministro se reúne con otros testigos, quienes fueron Conscriptos a la época de los hechos. En lo pertinente, el Sr. Ministro, consulta al **Sr. Inostroza** (ya que en su declaración dice que le correspondió entregar detenidos a la 2da. Comandancia), desde donde sacaba a los detenidos y hasta donde los llevaba, trasladándose el testigo junto al Sr. Ministro y las demás personas a una dependencia ubicada al lado de la Guardia, donde el **Sr.**

Inostroza indica que esa era una sala de espera, donde se dejaba a los detenidos. La dependencia tiene una sola puerta de entrada y salida, señalando el **Sr. Inostroza** que desde ese lugar se sacaba a los detenidos y los llevaban a la compañía de Plan Mayor, lugar donde los interrogaban en la Quinta Cuadra, había en el interior unos somieres metálicos, a las personas se las dejaba en ese lugar para que las interrogaran, ellos no ingresaba, luego salían del lugar siempre custodiados, señala que a él varias veces le tocó llevar gente que salió bien físicamente, estas personas salieron caminando, sin embargo, en esa sala se sentían ruidos de tortura. Respecto al Sr. **Jorge Luis Godoy Valdebenito**, Soldado Conscripto a la fecha de ocurrencia de los hechos, el Sr. Ministro le solicita que indique el lugar dónde él habría sido torturado, quien se desplaza al lugar donde están las Compañías, indicando que había una pieza grande en la cual tenían una cama, específicamente somier y que el Sgto. **Mario Arias** lo habría acostado y le habría aplicado corriente. El sr. **Godoy** anexa que veía a las personas que llegaban detenidas con venda en los ojos y que se escuchaban ruidos y gritaba gente. Agrega que había un Conscripto de apellido **Etchepare**, el cual mareaba a los detenidos y que en la sala de banda era el lugar donde pasaban los detenidos, los cuales eran golpeados por los mismos Soldados, por orden de los más antiguos. Indica que el Mayor **Jofré** nunca se metía en nada.

Detallado en el apartado B.12 de Documentos.

B.5 Copia de Informe Pericial Documental Caligráfico emitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1.395 a 1.423 (Tomo IV), que contiene informe pericial documental N° 584, de 25 de abril de 2014, que dice relación con **Causa Rol N° 113.089** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, el cual concluye que de los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica FISCAL, en orden de “LIBERTAT” N° S/N, de la Fiscalía Militar Curacautín de Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a Carabineros de Chile, Subcomisaría Villarrica, la cual dispone la libertad de Mario Fernando Cortes Bordard y Ubildo Antonio Jiménez Varas, **es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud.** *Firmado por María Eugenia Sepulveda Larenas, Profesional Gr. 8° Perito Documental.*

Detallado en el apartado B.16 de Documentos.

B.6 Informe reservado del Ejército de Chile Estado Mayor General, de fs. 1.641 a 1.642 (Tomo V) de fecha 19 de abril de 2018, del Jefe Del Estado Mayor General Del Ejército, en virtud del cual se adjuntan carpetas con

fotocopias debidamente autenticadas de las Hojas de Vida del periodo 1973/74, Minuta de Servicios u Hojas de Antecedentes Oficiales (HAO) y fotografías correspondientes al personal del Regimiento Tucapel de Temuco, **formándose Cuaderno Reservado según resolución de fs. 1.643 (Tomo V).** Dichos documentos se refieren a: Pablo Domingo Gran López, Jaime Guillermo García Covarrubias, Pedro Guillermo Manuel Tichahuer Salcedo, Manuel Abraham Vásquez Chahuán, Romilio Lavín Muñoz, Hernán Ramírez Ramírez, Norberto Uribe Moroni, Arnoldo Aedo Matus, Anacleto Aguirre Rivera, Mario Hernán Arias Díaz, Orlando Moreno Vásquez (quien fuera ascendido a Sargento 1° con fecha 03 de septiembre de 1973, tal como consta a fs. 72 vta del Cuaderno Reservado), Benjamín Rodemil Farías Lavín, Juan Labraña Luvecce, Libardo Hernán Schwartenski Rubio (quien fuera contratado con el grado 14 en la Dirección de Inteligencia Nacional en Comisión Extra-institucional con fecha 24 de junio de 1915, tal como consta a fs. 85 del Cuaderno Reservado), Manuel Rafael Campos Ceballos, Juan Humberto Carrillo Rebolledo, Juan Carlos Concha Belmar, Gabriel Alfonso Dittus Marín, Sergio Orlando Vallejos Garcés, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, Raimundo García Cobarrubias (quien pasa al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco en 1972, tal como consta a fs. 100 del Cuaderno Reservado). *Documento firmado por don John Griffiths Spielman, General de División, Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Timbre del Ejército de Chile.*

Detallado en el apartado B.17 de Documentos.

B.7 Informe Pericial Documental N°465, de fecha 31 de marzo de 2017, evacuado por Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1.668 a 1.674 (Tomo V), el cual concluye que según la evaluación de los antecedentes examinados, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto “Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal” en copia de autorización fechada en Temuco el 18 de diciembre de 1973, dirigida al Doctor Wolfgang Reuter B, del Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín-Temuco del Ejército de Chile, **es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud.** *Documento firmado por María Eugenia Sepúlveda Larenas, Profesional Perito Grado 5° de la Policía de Investigaciones.*

Detallado en el apartado B.18 de Documentos.

B.8 Copia autorizada del Acta de Pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973 de fs. 1.680 (Tomo V), traída a la vista según resolución de fs. 1.679, la que indica que: don

Alfonso Podlech habría manifestado que había sido designado Fiscal Militar Ad Hoc con motivo del estado de sitio en que se encuentra el país a disposición de la Fiscalía Militar y gran cantidad de detenidos, por lo que el número de actuarios con los que contaba no es suficiente para interrogar con la urgencia del caso a esas personas. Por lo que se presenta ante el Presidente de la Corte, para pedirle su cooperación para que se pusiera a disposición de la Fiscalía a funcionarios que el mismo señor Podlech habría sugerido: Relator de la Corte, don **Gastón Macklemburg Vásquez**; Secretario en Comisión de Servicio en la Corte, **Dorian Novoa Godoy**; y los actuarios del Primer Juzgado y del Juzgado de nueva cuantía, señores **Adrián Gonzales Maldonado y Héctor Toloza Fierro**.

Detallado en el apartado B.19 de Documentos.

B.9 Copia simple del documento Junta Provincial de Gobierno de Cautín Primera edición, Suplementos Colección de bandos emitidos por el Diario Austral el 18 de noviembre del año 1973, rolante de fs. 1.798 a fs. 1.816 (Tomo V), que a fs. 1.801 en lo que respecta al subtítulo “La Provincia de Cautín”, señala que: “Las personas que a continuación se indican deberán presentarse a la Comandancia del Rgto. “Tucapel”, el sábado 15 de septiembre de 1973, ante de las 15:00 horas”, indicando los nombres de diversas personas, entre ellas Daniel Mateluna. Documentos acompañados al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.797 (Tomo V).

Detallado en el apartado B.21 de Documentos.

B.10 Documentos referidos al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, ordenados a agregar al proceso según medida para mejor resolver de fs. 3.024 (Tomo VIII) que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **De fs. 103 a 111 (Cuaderno Reservado),** contiene Hojas de Vida del acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, respecto del periodo comprendido entre 1974 a 1981.
- b) **De fs. 3.026 a 3.040 (Tomo VIII), contiene copia de las páginas de periódicos de la época,** los que se sub-desglosan de la siguiente forma:
 - i. **De fs. 3.026 a 3.027 (Tomo VIII), contiene copia del Diario Austral del domingo 01 de julio de 1990, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Confesiones del ex Fiscal Militar”,** entrevista en que el acusado en lo pertinente invoca lo siguiente: Los Marxistas quieren aparecer ahora como inocentes palomas. Justifica la intervención militar como la única alternativa democrática en su contexto y asegura que en Chile hubo una guerra. Estima que los muertos y

desaparecidos son el precio que hubo que pagar para llegar al Chile que hoy tenemos. Inicia su entrevista acotando que asumió como Fiscal Militar de Temuco el 02 de marzo de 1974. Incluso antes de eso, fue Asesor Legal de la Fiscalía porque el Comandante Iturriaga que era amigo suyo se lo pidió, especialmente para algunos casos puntuales que se le estaban presentando, como el de Nehuentúe. Cuando llegó el día 11 de septiembre, le pidió que le ayudara con el objeto de reforzar su personal en la Fiscalía Militar, la que estaba a cargo del Mayor Luis Jofré. Se le pidió por el Comandante Iturriaga que se apersonara ante el Presidente de la Corte de Apelaciones de la época con el objeto que, como hombre de Derecho, al igual que el encartado, tuviera la gentileza, dado el momento especial que estaba viviendo el país, para los efectos de facilitar personal necesario al Comandante de la Guarnición, a fin de interrogar a las personas en forma adecuada, porque eran muchos detenidos. Asimismo le pidió que ayudara en la organización de los Consejos de Guerra y para lo anterior, el acusado pidió la colaboración del Colegio de Abogados, de tal modo que todos los procesados tuvieran asesoría legal.

- ii. **De fs. 3.028 a 3.029(Tomo VIII), contiene entrevista al acusado de febrero de 1983, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Los desacuerdos del ex Fiscal Militar”,** donde el acusado en lo pertinente asevera lo siguiente: Le tocaron todos los procesos del MIR a contar de 14 de febrero de 1974, cuando se hizo cargo de la Fiscalía. Tomó parte en los Consejos de Guerra como acusador y allí se condenó a innumerables personas a penas diversas. Posteriormente a la pregunta que dice relación con que esperó que echaran a su hermano para levantar su voz, preguntándole el Periodista si cree que tiene también una parte de responsabilidad, el acusado de autos contesta que si hubiera sido civil es posible que en ese momento, o antes, hubiera elevado la voz disidente en algunos aspectos puntuales, porque sigue creyendo que los postulados de la Junta son los necesarios y adecuados y por ello apoya al Gobierno Militar. Pero el problema de su hermano fue el factor detonante de toda una inquietud personal.
- iii. **De fs. 3.030 a 3.032 (Tomo VIII), contiene entrevista al acusado que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Ex Fiscal Militar de Cautín. “Espero que la Comisión de Verdad y Reconciliación no se transforme en una de venganza y ajuste de cuentas”,** donde en lo pertinente justifica lo siguiente: Rechaza lo que llama “la utilización

política que se ha hecho del hallazgo de las osamentas”. Niega saber que en Temuco hayan también detenidos desaparecidos y ejecutados. Dice ser responsable de todo lo que sucedió a contar del día 02 de marzo de 1974 y que pasó por Fiscalía. **Renuncia a cualquier Ley de Amnistía o lo que sea si el día de mañana pretenden que ha tenido alguna responsabilidad:** ahí está él para asumirla. No tiene ninguna duda de que así va a ser. A la pregunta de la Periodista respecto de si mientras fue Fiscal sabía que estaba haciendo desaparecer gente, responde que esto del “desaparecimiento” es entre comillas, porque hay muchas personas que ese minuto iban “huyendo” hacia el extranjero. Era una situación bastante peculiar. Afirma que la DINA actuó llevando a los detenidos como debe ser. Respecto a la pregunta de la Periodista sobre si ellos le entregaban los detenidos, el acusado responde que algunos, otros los llevaba Carabineros, depende de la persona que había sido detenida. Respecto a la pregunta de su la información que tenía para los juicios es la que entregaba la DINA, responde que esos son antecedentes nada más; pero no constituyen una prueba completa de los hechos. De tal manera que se tenía que cotejar con las declaraciones y otros antecedentes si era procedente. Respecto a la pregunta si a los prisioneros los interrogaba el encargado o lo hacía la DINA, **éste responde que él los interrogaba porque era el Fiscal Sustanciador, de tal manera que los detenidos podían venir con un parte, con la declaración extrajudicial; pero tenían que prestar su declaración ante él.** Posteriormente y frente a la pregunta de qué causal era la invocada para pedir la pena de muerte en Consejo de Guerra, el encartado responde que en el Código de justicia Militar hay numerosos hechos: traición a la patria y tantos otros delitos. Aclara que **el Código de Justicia Militar se aplica a todas las personas.** Recordando que estábamos en una guerra y se aplicaba a todas las personas. Luego, consultado sobre los Crímenes de Lesa humanidad, lo cuales no prescriben y son inamnistiables, el acusado responde que son disposiciones de general aplicación, pero lógicamente cuando hay leyes especiales que se dictan en países que han tenido una situación especial como tuvo Chile en su oportunidad, en que incluso los Obispos fueron partidarios de que se dictara una Ley de Amnistía, no cabe ninguna duda de que la Ley especial siempre prima sobre la general. De tal manera, que a través de la Amnistía quedó solucionado todo el problema de los delitos que en aquella oportunidad tuvieron lugar,

porque esto favoreció a ambos sectores. Finalmente respecto a los detenidos desaparecidos urde que su posición es muy simple: cree que existiendo esta Comisión de Verdad y Reconciliación, espera que no se transformen una Comisión de venganza y ajuste de cuentas, lo que sería tremendamente lamentable. Existiendo esta Comisión los mismos personeros, teniendo conocimiento de los hechos a través de los cuales se pueda establecer donde se encuentran las osamentas de las personas que efectivamente hayan muerto, con el máximo de discreción, lisa y llanamente procedan a entregar los cadáveres”

Detallado en el apartado B.29 de Documentos.

3) PROPIOS DICHOS DEL ACUSADO:

Reafirmando lo ponderado y aquilatado por el Tribunal se encuentran **los propios dichos de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, que en lo pertinente consisten en lo siguiente:

En declaración judicial de fecha 16 de mayo de 1991 rolante de fs. 359 a 363 (Tomo II), acota que tan pronto tuvo lugar el Pronunciamiento Militar, se requirió la presencia de los ex Cadetes y en esa calidad, siendo Abogado, el Comandante **Pablo Iturriaga** le pidió que colaborara con él en distintos aspectos legales. Llegado el 11 de septiembre de 1973, recuerda haberle dicho al Comandante **Iturriaga** que ante la presencia en la unidad de decenas de detenidos y no contándose con el personal suficiente en la Fiscalía Militar para que se atendiera a esas personas, era necesario y urgente solicitar la colaboración del Poder Judicial, para hacer más expedita la labor. Una vez que lo escuchó **el Comandante Iturriaga, lo autorizó para que en su nombre y representación conversara con el Presidente de la Corte de la ciudad de Temuco, don Oscar Carrasco Acuña**, quien con toda gentileza transmitió esta inquietud al Pleno de la Corte y previa consulta a la Corte Suprema, **se autorizó para que diferentes personas pasaran en Comisión de Servicios a la Fiscalía Militar**, que funcionaba en las oficinas de la Segunda Comandancia del Regimiento Tucapel, dentro del mismo edificio. Fue así como se asignaron entre otros a don **Adrián González**, don **Héctor Toloza**, a la señora **Victoria Gálvez**, al Relator don **Gastón Macklemburg** y al Relator y hoy Ministro **Nibaldo Segura Peña**. Su labor era de nexo entre el Comandante y el señor Fiscal, don **Luis Jofré** del Ejército y el de Carabineros de apellido **Arias**. Ésta labor era ver qué casos haría procedente los Consejo de Guerra, para lo cual se hizo la interconsulta con la Comandancia

de la División. Se pidió que viera todo este tipo de problemas y que pidiera la colaboración al Colegio de Abogados, para la defensa de los encausados. Habló al efecto con su colega, don **Guido Sepúlveda**, quien contó con la colaboración de todos los colegas que fueran requeridos para hacer la defensa de los diferentes Consejos de Guerra, que en gran cantidad tuvieron lugar en esta zona. Recuerda que le llamó la atención un día determinado, que no recuerda, **pero tiene que haber sido uno a dos días antes que por Bando se diera a conocer su muerte, cuando en circunstancias en que se encontraba conversando con el Mayor Jofré, se le apersonó el señor Ortigosa, que estaba detenido en el Regimiento.** Con posterioridad al hecho de que se había dado de baja por intentar una fuga, **fue a conversar con el encausado la señora de Ortigosa, de nombre Carmen Uriarte, a quien el Fiscal solo le dio explicación de la existencia del Bando Militar,** por cuanto en tiempo de guerra, el **Bando** equivale a una Ley y no cabe su discusión. Uno de los tantos aspectos que debió ayudar fue en **llevar el libro en forma, debido al máximo de flexibilidad en cuanto al procedimiento,** ya que en vez de las 48 horas para agotar el procedimiento se dieron plazos de meses, para permitir una mejor investigación y defensa en su caso. Posteriormente, con fecha 02 de marzo y ante una petición formal del Comandante de la Guarnición, para que ocupara el cargo de Fiscal Militar, asumió dicha función con el grado de Mayor de Ejército de Servicio de Justicia Militar, el que desempeñó hasta el 02 de enero de 1983, en que renunció voluntariamente. Respecto a la pregunta que se le formula por los detenidos desaparecidos, entre ellos **José Ortigosa**, funda haberlo conocido.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2013 rolante a fs. 539 (Tomo II), ratifica su declaración judicial rolante de fs. 359 a 363.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003 rolante de fs. 576 a 578 (Tomo II), arguye que el día 11 de septiembre de 1973, oportunidad en la ocurrió el Pronunciamiento Militar en nuestro país, se encontraba en la ciudad de Temuco en su calidad de ex Cadete Militar y dada su profesión de Abogado es llamado por el Comandante del Regimiento "Tucapel" Coronel **Pablo Iturriaga Marchesse**, quien le solicita como una forma de reforzar la función de la Fiscalía Militar, asesorando y ayudando a dar una mayor agilidad al tránsito de centenares de personas detenidas que se encontraban en el patio de la Unidad Militar. Hace presente que estos detenidos provenían de los organismos policiales respectivos y con respectiva documentación (partes). **Recuerda que muchos de ellos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.), los que a la luz de sus ideales buscaban el enfrentamiento con sus opositores, razón por la que significaba un riesgo para la seguridad de la**

zona. Ante tal situación que se estaba viviendo en la zona y en general en el país, es que **accedió a la petición del Coronel Iturriaga, por lo que pasó a formar parte de la Fiscalía Militar en calidad de asesor y como organizador de los Consejos de Guerra que se formarían a partir de esa fecha.** Por esta razón tuvo que hacer coordinaciones con el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, con la finalidad de reforzar la cantidad de personal, por lo que accedió a enviarlo en Comisión de Servicio a la Fiscalía, dentro de los cuales recuerda a **Adrián González Maldonado, Héctor Toloza Fierro** (fallecido) y **Dorian Novoa Godoy.** En dicha Fiscalía Militar, para la fecha de su ingreso, recuerda que se encontraba como Fiscal Militar el Mayor de Ejército **Luis Jofré Soto** (2° Comandante del Regimiento "Tucapel") y una persona que tenía como actuario, **Leonel Quilodrán** y las causas que se veían antes del 11 de septiembre de 1973 eran en su gran mayoría por la Ley de Reclutamiento. Su función fue exclusivamente la conversación con los abogados para que estos acudieran a la defensa de los detenidos, quienes tenían que pasar al Consejo de Guerra, para darles una debida defensa, recordando que tuvo la colaboración del Colegio de Abogados. Respecto al funcionamiento de la Fiscalía Militar, era en el mismo recinto de la Comandancia de esta Unidad Militar, pero no lo tiene muy claro y a raíz de esto es que muchas personas pudieron ver al encartado transitar por dicho recinto. Recuerda además, que una vez que se trató de normalizar la situación de los detenidos y **debido a la gran cantidad de estos, es que fueron enviados a la cárcel de la ciudad, por lo que creó un Libro de Ingreso y Egreso de Detenidos,** conforme se hacía de manera común en los Tribunales del Crimen. Narra que su función de Asesor de la Fiscalía duro **hasta el mes de marzo de 1974, asumiendo a partir de esa fecha como Fiscal Militar de la ciudad de Temuco,** dependiendo para los efectos legales de la IV Juzgado Militar de Valdivia, cargo que ocupó hasta el mes de febrero de 1983. Justifica que algunos Consejos de Guerra estaban presidido por don **Mario Olate Melo,** e integrado por el **Coronel Hernán Mardones Díaz, Eduardo Soto Parada, Benjamín Fernández Hernández, Luis Puebla Leiva, Jaime Rowe Del Rio, Jorge Verdugo Álvarez y Jaime García Covarrubias,** lo que aparece consignado en la Resolución N°1449-73, siendo todas estas personas funcionarios de la Fuerzas Armadas. Con respecto a la consulta, barbulla que mientras fue Cadete de la Escuela Militar el año 1951 aproximadamente, recuerda que el Comandante de su Compañía era el entonces Capitán **Sergio Arellano Stark,** debiendo agregar que una vez que se retiró de la Escuela Militar no volvió a ver a este Oficial sino hasta después de producido el Pronunciamiento Militar, no pudiendo precisar fecha; en que en dependencias de la Comandancia del Regimiento Tucapel se pudo

percatarse de su presencia, acercándose a saludarlo y **en esa oportunidad comentó informalmente que en materia penal operaba la irretroactividad.** Palabras que le llamaron la atención, ya que provenían de un Militar, aclarando que no se podía procesar a ninguna persona por hechos anteriores. Con respecto a los nombres que se le mencionan, entre ellos **José María Ortigosa Ansoleaga y Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, sofama que solamente conoce a **Ortigosa**. Recuerda que mientras se desempeñó en la Fiscalía Militar, **un familiar de éste consultó por él.**

En diligencia de careo entre Daniel Aguirre Mora y Óscar Alfonso Podlech Michaud de fecha 13 de agosto de 2013 rolante a fs. 1.129 (Tomo IV), sustenta que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es don **Daniel Aguirre Mora**. siendo son absolutamente falsos los dichos de éste señor. Nunca el exculpado estuvo en la Prefectura de Investigaciones para requerir información de tipo político, **asevera que, de haber ido, sólo lo hizo para requerir información de algún detenido.**

En declaración judicial con de fecha 23 de abril de 2018 rolante de fs. 1.639 a 1.640 (Tomo V), apuna que a los Oficiales se les enseñaba a redactar **Bandos, Iturriaga Marchesse y Hernán Ramírez** tenían injerencia en la redacción de los **Bandos**. Respecto del Sr. **Ortigosa**, si lo conocía y ya declaró, en relación a **Mateluna**, no lo conocía. Ratifica su declaración extrajudicial prestada ante Oficiales del Departamento V de "Asuntos Internos", y rolante de fs. 480 a 482 de autos. Por último, **le resulta extraño que los hechos de las víctimas hayan ocurrido coetáneamente con los del sr. Ortigosa, porque es raro que se ejecutara a cuatro personas por intento de fuga.**

25°) ACUSACIONES PARTICULARES. El abogado **Sebastián Saavedra Cea** en representación de la parte querellante y demandante civil, **de fs. 2.111 a 2.136 (Tomo VI) y de fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI),** formula acusación particular en contra de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, solicitando condenarlo como autor de los delitos consumados de Homicidio Calificado y Apremios Ilegítimos en las personas de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa Ansoleaga, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 390 N°1, circunstancia 1 y 5, y artículo 150 N°1 del Código Penal Vigente a la época de los hechos, a la pena de presidio perpetuo y 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, respetivamente, más las sanciones accesorias legales, con costas. Fundando su presentación en los siguientes antecedentes, los cuales para un mejor entendimiento de ésta presentación, se estructurarán de la siguiente forma:

A. Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular: reproduce los hechos que se tienen por establecidos en la acusación de oficio dictada 2.041 a 2.053 (Tomo VI), con fecha 15 de marzo de 2019. Del mismo modo comparte la calificación jurídica del ilícito.

B. Circunstancias que deben influir en la aplicación de las penas: Solicita considerar la concurrencia de la circunstancia 8 y 11 del artículo 12 del Código Penal, toda vez, que a su juicio se desprende de lo obrado en autos de quien llevó adelante la comisión de este hecho ostentaba la calidad de funcionarios públicos y lo realizaron con el auxilio de gente armada, que además, debido a la conformación de la organización que integraban les aseguraban la impunidad en la ejecución de los mismos, citando doctrina al respecto.

C. En cuanto al quantum de la pena: Solicita la aplicación de las penas de presidio perpetuo como autor del delito consumado de Homicidio calificado en carácter reiterado y la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito consumado de Apremios Ilegítimos en carácter de reiterado, más las sanciones accesorias legales, con costas.

26°) ACUSACIÓN PARTICULAR. La abogada **Carolina Contreras Rivera** en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, de fs. 2.222 a 2.228 (Tomo VI), formula acusación particular en contra de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, en los mismos términos que el abogado Sebastián Saavedra Cea de fs. 2.111 a 2.136 (Tomo VI) y de fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI), con la salvedad que respecto a las circunstancias modificatorias de deben influir en la aplicación de las penas, alega solamente la agravante contemplada en el artículo 12 N°8 del Código Penal, solicitando al respecto la misma pena, esto es, presidio perpetuo y 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, respetivamente, más las sanciones accesorias legales, con costas.

27°) Haciéndonos cargo de las acusaciones particulares presentadas por el abogado **Sebastián Saavedra Cea** en representación de la parte querellante y demandante civil, **de fs. 2.111 a 2.136 (Tomo VI) y de fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI);** y la presentada por la abogada **Carolina Contreras Rivera** en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, **de fs. 2.222 a 2.228 (Tomo VI);** quienes reproducen los hechos de la acusación fiscal y solo solicitan que se aplique las agravantes contempladas en el **artículo 12 N°8 y 11 del Código Penal,** dichas circunstancias modificatorias serán

estudiada con posterioridad. **En consecuencia, respecto de las acusaciones particulares, el Tribunal no tiene nada que analizar.**

28°) ADHESIÓN A LA ACUSACIÓN. Ignacio Jesús Dabed Ortigosa, de fs. 2.202 a 2.220 (Tomo VI) se adhiere a la acusación judicial se adhiere a la acusación judicial de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI) de 15 de marzo de 2019, en contra de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, solicitando que sea condenado en calidad de autor del delito de Apremios Ilegítimos y Homicidio Calificado en las personas de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa Ansoleaga, al máximo de las sanciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico o aquellas que el Tribunal estime como más ajustadas al mérito del proceso.

29°) Tratándose de la adhesión a la acusación judicial de **2.202 a 2.220 (Tomo VI)** formulada por **Ignacio Jesús Dabed Ortigosa, el Tribunal nada tiene que razonar ni analizar sobre esta materia.**

En este segundo resumen ejecutivo se han visto los siguientes considerandos:

12°) DEFENSA DEL ABOGADO VÍCTOR CARMINE ZÚÑIGA, en representación del acusado;
13°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA: **A.** Obligación de investigar. **B.** Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. **C.** Estado de Derecho; **14°), 15°), 16°), 17°), 18°), 19°), 20°), 21°), 22°), 23°) y 24°) ANÁLISIS DE DEFENSA ESPECÍFICA; 25°) ACUSACIONES PARTICULARES DEL ABOGADO SEBASTIÁN SAAVEDRA CEA** en representación de Mary Carmen Ortigosa Uriarte, María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo Y Juan Carlos Mateluna Lillo; **26°) ACUSACIÓN PARTICULAR DE LA ABOGADA Carolina Contreras Rivera** en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos; **27°) Análisis de las acusaciones particulares; 28°) ADHESIÓN A LA ACUSACIÓN DE IGNACIO JESÚS DABED ORTIGOSA; 29°) Análisis de la Adhesión a la Acusación Judicial**

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL.

30°) ATENUANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL

El abogado **Víctor Carmine Zúñiga**, en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud de fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII), alega como atenuante de responsabilidad penal la prevista en el **artículo 11 N°6 y 9 del Código Penal y la del artículo 103** del mismo cuerpo legal.

A. QUE EN RELACIÓN A LA AMINORANTE DEL ARTÍCULO 11 N°6 DEL TEXTO CITADO: Se da lugar a esta aminorante, en calidad de simple, por

no existir mérito para otra calificación. En efecto, al acusado le favorece esta aminorante, toda vez que de sus extractos de filiación y antecedentes de fs. de fs. 1.393 a 1.394 (Tomo IV); 1.789 a 1.791 (Tomo V); 2.298 (Tomo VI); 2.291 a 2.300 (Tomo VII); y de fs. 2.302 a 2.304 (Tomo VII). Todo a la época de los hechos, esto es, al 02 de octubre de 1973 no tenía antecedentes penales pretéritos. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.-

B. QUE EN RELACIÓN A LA AMINORANTE DEL ARTÍCULO 11 N°9 DEL TEXTO CITADO: No es posible dar lugar a esta aminorante. La Defensa no

la desarrolla mayormente. Además porque en autos desde el inicio de la causa existían y existen medios de prueba que permitían y permiten determinar los hechos, el delito y la participación del responsable. El hecho de concurrir al Tribunal por llamamiento judicial, para nada reúne los requisitos de esta atenuante que es *“colaborar sustancialmente al esclarecimiento de los hechos”*, situación que el acusado después de más de 45 años nada ha expuesto.

C. QUE EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO PENAL, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

- a. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte**

Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

- b. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karinna Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre

violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

- c. Recientemente la ltima. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019**, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: *“Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).*

d. Del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero**, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. **En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y es rechazada.**

31°) AGRAVANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL.

El abogado **Sebastián Saavedra Cea** en sus presentaciones de fs. 2.111 a 2.136 (Tomo VI) y de fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI); invocó como circunstancia agravante la prevista en el **artículo 12 N°8 y 11 del Código Penal**; mientras que la abogada **Carolina Contreras Rivera** alegó **solamente la agravante contemplada en el artículo 12 N°8 del Código Penal**:

A. EN RELACIÓN A LA AGRAVANTE DEL ARTÍCULO 12 N°8 DEL CÓDIGO PENAL: Este Tribunal **rechazará estas agravante** por no reunirse los requisitos y elementos para ello, atendida la descripción de los hechos del Auto Acusatorio de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI) de 15 de marzo de 2019, y el mérito del

proceso. Éste Tribunal analizando la acusación (sin perjuicio que en otras causas que ha fallado el Tribunal ha acogido esta agravante, del análisis del auto acusatorio) **no es posible calzar los antecedentes con lo que piden los querellantes.**

B. EN RELACIÓN A LA AGRAVANTE DEL ARTÍCULO 12 N°11 DEL CÓDIGO PENAL: No resulta aplicable, pues del auto acusatorio se desprende que en este caso el funcionario del Ejército, por su práctica y patrullajes en el contexto de aquella época, son personas que habitualmente portan armas para el ejercicio de sus labores. En consecuencia de acuerdo al mérito del proceso y del auto acusatorio, como se describen los hechos y a lo expuesto por los querellantes, **éste Tribunal rechazará la aplicación de la agravante solicitada.**

32°) DETERMINACIÓN DE LA PENA. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, todo lo anterior debe combinarse con la posibilidad cierta que el encartado acceda a cumplir parcialmente alguna pena en libertad según los beneficios de la **Ley 18.216** (salvo que exista una prohibición legal o no esté de acuerdo con los estándares normativos sobre derechos humanos en la materia).

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente), jugando un rol fundamental que en la determinación de la pena exista la posibilidad que los acusados cumplan una parte de la pena en libertad. Pues debe preferirse aquello a que cumpla una parte de la pena privados de libertad (salvo que exista prohibición legal o esté en contra del estándar normativo, sobre derechos humanos en la materia).

33°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de Apremios Ilegítimos y Homicidio Calificado en las personas de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga, perpetrado en las comuna de Temuco el 02 de octubre de 1973, delito previsto y sancionado en el **artículo 150 N°1 y 391 N°1 circunstancia 1° y 5° del Código Penal**, vigente a la época de los hechos, que establecen la **pena de presidio o reclusión menores y la accesoria que corresponda** (para el caso de los Apremios Ilegítimos) **y presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo** (para el caso de los Homicidios Calificados).

34°) Cabe hacer presente que tal como se ha razonado y se estableció en el auto acusatorio de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI), de 15 de marzo de 2019, el encartado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud está acusados por los delitos de Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados en las personas de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa, perpetrado en la ciudad de Temuco con fecha 02 de octubre de 1973. Ahora bien, es necesario razonar lo siguiente:

- A.** En cuanto a la pena a imponer para el acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, a éste le beneficia una atenuante, esto es, la contemplada en el **artículo 11 N°6 del Código Penal** y no le perjudica ninguna agravante.
- B.** Y en conformidad al **artículo 68 del Código Penal** no puede aplicarse la pena en su grado máximo.
- C.** En consecuencia, teniendo en consideración el **artículo 69 del Código Penal**, atendida la extensión del mal causado por el delito, la pena se aplicará para al acusado **en relación al Homicidio Calificado es de presidio mayor en su grado medio** y en el caso de **los apremios ilegítimos de presidio en su grado medio, más las sanciones accesorias legales correspondientes**.
- D.** Ahora bien, respecto a la norma que beneficia más al acusado, esto es, si el artículo 74 del Código Penal o el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, se razona lo siguiente:

- i. En el caso de los Homicidios Calificados:** Al acusado se le va aplicar la pena de 12 años de predio mayor en su grado medio más las sanciones accesorias legales correspondientes. Como **son 2 delitos**, serían 24 años de presidio mayor en su grado medio más las sanciones accesorias legales correspondientes. En este sentido le beneficia la norma del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, como se trata de delitos de la misma especie se considerará como un

solo delito, aumentándose en un grado, por lo que se le aplica la pena de **20 años de presidio mayor en su grado máximo más las sanciones accesorias legales correspondientes.-**

- ii. **En el caso de los Apremios Ilegítimos:** Como son 3 años de presidio menor en su grado medio más las sanciones accesorias legales correspondientes, tendría que cumplir 6 años de presidio menor en su grado medio y las accesorias legales correspondientes. Como se trata de delitos de la misma especie se considerará como un solo delito, aumentándose en un grado, por lo que se le aplica la **pena de 5 años presidio menor en su grado máximo, más las sanciones accesorias legales correspondientes.**

35°) BENEFICIOS DE LA LEY 18.216 Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.

Respecto al acusado **ÓSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado.** En este caso se tiene en consideración:

- A. El informe del Centro de Reinserción Social, de fecha 08 de mayo de 2019, que rola de fs. 2.261 a 2.265 (Tomo VII),** el que concluye que “el Señor Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, no presenta indicadores de patrón antisocial, apreciándose un nivel de riesgo/necesidad bajo. En este contexto, ya que no presenta disposición alguna a una pena sustitutiva como Libertad Vigilada, la capacidad de respuesta a la intervención criminológica inherente a este sistema, sería desfavorable, razón por lo que solo podría orientarse al control, más que a una intervención orientada al cambio. En consecuencia, el Consejo Técnico **no recomienda una pena sustitutiva** como Libertad Vigilada, por considerarse ineficaz. *Documento firmado y timbrado por doña Vinka Bonilla Humeres, Jefe del Centro de Reinserción Social.*
- B. El Informe Pericial Psiquiátrico N°127-2019 del Servicio Médico Legal, Departamento de Salud Mental de la Región de la Araucanía de fs. 2.247 a 2.250 (Tomo VI),** el cual concluye que se trata de un hombre adulto mayor **sin alteración de juicio de realidad**, con un nivel intelectual en rango normal, hipertensión arterial y dislipidemia en tratamiento. Además es portador de marcapasos cardíaco. También tiene antecedente de haber sufrido un

accidente cerebro vascular isquémico y fue operado de cáncer de próstata. Niega los hechos que se le imputan en la causa. Sin embargo, tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por cual desde un punto de vista psiquiátrico no tiene impedimentos para enfrentar un proceso judicial ni las consecuencias de éste. *Documento Firmado por la Dra. Tamara Peldoza Neira, Médico Psiquiatra.*

C. Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente tuviera una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado en causa rol 114.058 y 113.999 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 5-2013 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 113.969 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 6.345-2011 del ingreso Juzgado del Crimen de Chile Chico, causa rol 114.000 y 114.043 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 63.556 del Juzgado de Letras De Angol y causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro.

a. Un **estándar** en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

b. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su

párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

- c. Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en términos simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357.)
- d. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

f. Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

1) Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

2) Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada

a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

- 3) **Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia**, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.
- 4) **Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú**, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El

Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

5) Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...].En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

6) Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada,

la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

- g.** Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.
- h.** Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

- i. En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).
- j. En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 al acusado** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas

y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (**Núñez, Constanza** (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la **Itma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarle al acusado ningún beneficio y deberá cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

En este tercer resumen ejecutivo se han visto los siguientes considerandos:
CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL: 30°) Atenuante de Responsabilidad Penal; 31°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 32°), 33°) y 34°) Determinación de la pena; 35°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.-

VIII. EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

36°) Que a fs. 2.111 a 2.131 (Tomo VI), en el Primer Otrosí de su presentación, el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de MARY CARMEN ORTIGOSA URIARTE (hija de José María Ortigosa Ansoleaga) y de fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI) en representación de MARÍA ISABEL LILLO FLORES, DANIEL BENJAMÍN MATELUNA LILLO, CHRISTIAN MARCELO MATELUNA LILLO, CESAR PATRICIO MATELUNA LILLO, GEORGE RICARDO MATELUNA LILLO Y JUAN CARLOS MATELUNA LILLO (Cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez) deduce demandas de indemnizaciones de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, este a su vez representado por don Óscar Exss Krugmann, Abogado Procurador Fiscal de la Región de la Araucanía, domiciliado en calle Prat N°847, oficina 202, Temuco, solicitando en definitiva condenar al Fisco de Chile a al pago de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para MARY CARMEN ORTIGOSA URIARTE (hija de José María Ortigosa Ansoleaga) y la suma de \$900.000.000 (novecientos millones de pesos) que se desglosan en la suma de \$150.000.000 para MARÍA ISABEL LILLO FLORES, DANIEL BENJAMÍN MATELUNA LILLO, CHRISTIAN MARCELO MATELUNA LILLO, CESAR PATRICIO MATELUNA LILLO, GEORGE RICARDO MATELUNA LILLO Y JUAN CARLOS MATELUNA LILLO (Cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez) por concepto de daño moral; o la suma que el

Tribunal determine en justicia, más reajustes de acuerdo al IPC e intereses desde la fecha de notificación de la demanda y las costas del juicio. El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. EN CUANTO A LOS HECHOS: Reproduce los mismos hechos ya referidos en el auto acusatorio de **fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI) de 15 de marzo de 2019**, agregando que el delito **constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad, por lo que no puede ser objeto de amnistía y prescripción**, argumentando lo anterior en base a D.L N° 5 en conjunto con el Consejo de Guerra de Temuco ROL N°1449-73, y los Convenios de Ginebra de 1949 que fueron suscritos por Chile en 1949 y publicados en el diario oficial del 17 al 20 de abril de 1951. También señala que este crimen tendría esta segunda connotación como **Crimen contra la humanidad**, ya que se violan principios que deben regir la vida de las naciones civilizadas, transgrediendo los propósitos y principios que contienen la Carta de las Naciones Unidas, citando además Sentencia del CIDH Caso Almonacid Arellano y otros v/s Estado de Chile de fecha 26 de septiembre de 2006, parágrafos 105 y 114.

B. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CHILE DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA: El 3 de Diciembre de 1973 Chile concurre con su voto a aprobar la Resolución 3.074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada **"Principios de Cooperación Internacional para la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad"**, citando en su párrafo dispositivo 1° y el numerando 8°. Los fundamentos señalados por la Resolución ya referida se encuentran contenidos también en otras de la misma índole, pronunciadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Chile como país concurrente. En consecuencia, el Estado de Chile se encuentra sujeto a obligaciones internacionales que le son exigibles directamente y ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus agentes, enjuiciar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas o a sus familiares cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Así resulta obvio, público y notorio que el delito cometido en perjuicio de **José María Ortigosa Ansoleaga y Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** es un delito de carácter estatal, que en consecuencia genera responsabilidad y como tal deben considerarse para los efectos de las acciones de reparación, que mediante estas demandas se reclaman.

C. EN CUANTO AL DERECHO: El artículo 10 del Código de Procedimiento Penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son consecuencia de ese ilícito. Para esta parte, esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado y con ocasión de sus funciones, los que infringieron el daño cuya reparación se solicita. Así entre otros instrumentos internacionales, lo establece el artículo 63 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en estrecha relación con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Estos agentes actúan en el marco de funciones estatales, con potestades, recursos materiales y humanos que esa misma organización jurídica pone a su disposición para el cumplimiento de sus tareas.

a. La competencia de este Tribunal para conocer y fallar la demanda civil

que se interpone en juicio criminal: Una de las tesis sostenidas por el Fisco de Chile para eximirse del pago de las reparaciones en este tipo de juicios, alude a una interpretación errónea del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que el Juez del Crimen, sería incompetente para conocer de estas demandas de reparación. Lo cierto es que el texto actual del artículo citado, modificado por la Ley 18.857, de 6 de diciembre de 1.989, permite en términos amplios la interposición ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal. En tal sentido, la excepción de incompetencia absoluta intentada por el Fisco de Chile ha sido mayoritariamente rechazada por los jueces llamados a resolver el conflicto, citando jurisprudencia de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

b. Fallos de la Excma. Corte Suprema que rechazan la tesis de la incompetencia del Tribunal en materia civil:

Cita al efecto las Sentencia dictadas en las causas Rol 6308-07, 10.666-2011, 4723-07, 4691-07, 695-08, 2581-2009, 13775-2010, 2414-2010, 4.662-2007. Afirma que los actos y hechos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, son imputables directamente al órgano al cual pertenecen. Esta es la llamada "Teoría del Órgano". De ahí que la responsabilidad extracontractual del Estado, se caracterice por ser una responsabilidad "orgánica", de lo cual deriva otra característica, el de ser una responsabilidad

directa. Del mismo modo, la responsabilidad del Estado está regida por un conjunto de disposiciones de Derecho Público.

- c. **Lo que ha fallado la Excma. Corte Suprema, en forma unánime, sobre la responsabilidad del Estado:** comienza citando las sentencias Rol 3354-03, 4.004-03; 4006-03 y 5.489-03, fallos unánimes de la Cuarta Sala del máximo Tribunal, que hacen claridad acerca de la responsabilidad del Estado. Afirma que es importante el reconocimiento de que la responsabilidad extracontractual del Estado se trata de una responsabilidad regida por las normas del derecho público, y que ella emana de la propia naturaleza del Estado, como persona jurídica compleja que debe desarrollar su actividad teniendo presente los principios rectores de las Bases de la Institucionalidad, contenidas en el artículo 1° de la Carta fundamental. Luego, realiza un análisis de diversas normas, entre ellas el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, artículo 4° y 1° de la Ley N° 18.575, artículo 6° de la Constitución, artículo 42 de la Ley de Bases, artículo 21 de la Ley 18.575, la historia de la Ley 18.575. justifica que no corresponde, por tanto, hacer aplicación de las normas de los artículos 2.314 y 2.315 del Código Civil, que regulan la responsabilidad por hecho ajeno o hecho de un tercero, que se encuentra al cuidado de un superior jerárquico. Las normas citadas encuentran su complemento en diversas disposiciones de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile
- d. **Referencias jurisprudenciales de nuestros Tribunales sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en materias de reparación:** La forma en que incide el derecho Internacional en esta temática de derechos humanos, queda refrendada en sentencias de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 37.483-2004, 65-2001; 2182-98. Agregando lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 3125-04.
- e. **Lo que ha aprobado Chile recientemente en el seno de las Naciones Unidas sobre la reparación en materia de Derechos Humanos:** Con fecha 21 de Marzo del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 60-147, denominada "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". El Estado de Chile concurrió a la suscripción de esa Resolución, unánimemente aprobada, citando los numerales 13, 15, 18, 19, 20 y 23; además del numeral IV, que hace alusión a la institución de la Prescripción. De lo anterior se infiere

que las acciones civiles tratándose de crímenes contra el derecho internacional no prescriben jamás.

D. EL DAÑO PROVOCADO Y EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN: El Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a los demandantes de autos. La lógica pura nos dice que ese Estado no podía investigarse a sí mismo, puesto que quedaría en evidencia su compromiso directo con los crímenes. De esa manera el Estado aseguró a sus agentes la impunidad necesaria. Esa es otra dimensión del daño ocasionado, impedir que los familiares de las víctimas supieran qué pasó con sus seres queridos. Con todo derecho pueden sus representados reclamar al Estado la reparación del inconmensurable daño que les ocasionó, por una acción intrínsecamente antijurídica. Tanto **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez como José María Ortigosa Ansoleaga**, como toda persona cualquiera fuese su condición social, tenía derecho a su dignidad y al goce y disfrute de derechos esenciales por su condición de ser humano y persona. Sus Homicidios, dejaron a sus familias en la más completa orfandad e inseguridad. Ese daño que sufrió y padece hasta hoy sus representados, es lo que constituye el daño moral que se demanda. Respecto de la prueba, acota que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba, citando jurisprudencia al respecto. Por ello, demanda al Fisco de Chile al pago de **\$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para MARY CARMEN ORTIGOSA URIARTE** (hija de José María Ortigosa Ansoleaga) y la suma de **\$900.000.000 (novecientos millones de pesos) que se desglosan en la suma de \$150.000.000 para MARÍA ISABEL LILLO FLORES, DANIEL BENJAMÍN MATELUNA LILLO, CHRISTIAN MARCELO MATELUNA LILLO, CESAR PATRICIO MATELUNA LILLO, GEORGE RICARDO MATELUNA LILLO Y JUAN CARLOS MATELUNA LILLO** (Cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez) por concepto de daño moral; **o la suma que el Tribunal determine en justicia, más reajustes de acuerdo al IPC e intereses desde la fecha de notificación de la demanda y las costas del juicio.**

37°) Que a fs. 2.202 a 2.218 (Tomo VI), en el Primer Otrosí de su presentación, Ignacio Jesús Dabed Ortigosa, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud y solidariamente en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando que se declare que los demandados

deben pagar solidariamente a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por los delitos de Apremios Ilegítimos y Homicidio Calificado en contra de don José María Ortigosa Ansoleaga la suma de **\$300.000.000 (trescientos millones de pesos), más reajustes e intereses legales desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total del mismo; o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, equidad y al mérito de autos, con costas.** El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. EN CUANTO A LOS HECHOS: Reproduce los mismos hechos ya referidos en el auto acusatorio de fs. 2.041 a 2.053 (Tomo VI) de 15 de marzo de 2019, agregando que estos hechos corroborarían y acreditarían la responsabilidad del Abogado Asesor y Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud y del Estado de Chile. Anexa que los delitos cometidos en contra José María Ortigosa Ansoleaga, generan además efectos civiles, responsabilidad que recaen solidariamente sobre los perpetradores directos y responsables del hecho y sobre el Estado de Chile.

B. EL RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Alega que los hechos relatados configuran los delitos de Apremios Ilegítimos y Homicidio Calificado de José María Ortigosa Ansoleaga, previstos y sancionados en los artículos 150 N°1 y 391 N°1 circunstancias 1° y 5° del Código Penal, vigente a la época de los hechos. Funda su presentación en que el hecho que se encuentra acreditado en autos fue perpetrado por agentes del Estado cumpliendo funciones públicas, que actuaron dentro de una política sistemática de violación de Derechos Humanos implementada por el Gobierno de la época en contra de sus adversarios políticos. El querellado y demandado **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud** siempre obró alejado de toda legalidad, amparado por el Gobierno de facto, a tal punto que justifica su muerte en un supuesto “intento de fuga”. Así las cosas, el Estado de Chile a su mutuo propio, ha reconocido su responsabilidad en forma expresa a través del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Retting).

C. EN CUANTO AL DAÑO: Al ser hijo de doña **Patricia Verónica Ortigosa Uriarte** y por consiguiente **nieto de la víctima José María Ortigosa Ansoleaga**, ha sufrido un daño moral profundo que se ha traducido en un perjuicio irreparable de índole subjetivo, además del daño traspasado por su madre. Difunde que este daño irreparable se enmarca en la historia familiar la cual

ha sido quebrada por la violencia, intentando en su rol de hijo apoyar a su madre y alivianar la angustia familiar, llevando un peso desde su más temprana edad.

D. EN CUANTO AL DERECHO: Invoca el artículo 10 del código de procedimiento penal en favor de determinar la competencia en esta causa sobre la acción civil, desarrollando que en la presente causa se cumplen con los requisitos necesarios para ello, al encontrarse acreditado el delito, el cual ha originado el daño moral, por lo que existirá el vínculo causal. Destaca también el artículo 6° de la Constitución Política de la República y el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado para determinar procedencia de la demanda civil contra el fisco.

- a. Respecto de la responsabilidad del Acusado:** Se funda en lo dispuesto en el artículo 2.134 del Código Civil.
- b. Respecto a la responsabilidad del Estado de Chile:** Glosa que se consagra en las Actas Constitucionales N°2 y 3 y en la actual Constitución de 1980, la cual reconoce claros antecedentes de la Constitución de 1925, vigente a la época de los ilícitos. Destaca que la doctrina ha establecido que existe un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado, citando doctrina al respecto. Analiza los artículos 1, 2, 4, 10 N°1, 9 y 10 de la Constitución de 1925; artículos 6, 7, 19 N°20 de la Constitución de 1980; y 2.314 del Código Civil
- c. Respecto a la responsabilidad administrativa del Estado de Chile actual:** Alude al principio de Vigencia In Actum de normas lus Publicistas del Derecho Administrativo, en conjunto con citar disposiciones como el artículo 38 inciso 2 de la constitución política de la república y artículo 4 de la ley 18.575
- d. Respecto de la prescriptibilidad de la acción:** Evidencia que la responsabilidad del estado es un problema de Derecho Público y al cual cabe aplicar las reglas de éste y no las contempladas en el Código Civil, citando doctrina al respecto
- e. Naturaleza de la Responsabilidad del Estado:** Expone que la responsabilidad el Estado emana del Derecho Público, refiriéndose a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, la cual es eminentemente objetiva. Por lo cual no se precisa el dolo ni la culpa, sino que solamente que el actuar de un órgano del Estado porque un daño que la víctima ano esté a obligada a soportar.
- f. La obligación de reparar en el Derecho Internacional:** Para resolver esta demanda no solo deben aplicarse las normas de Derecho Interno, sino que también las reglas de Derecho Internacional, de acuerdo al artículo 5° de la

constitución política de la república, y la Resolución N° 60/147 de la Asamblea General De Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 2005, sobre los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de Derechos Humanos y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones; haciendo hincapié en las directrices número I, VII y IX; fundándose además en la Convención Americana de Derechos Humanos en aplicación a sus artículos 1 y 63 inciso 1.

- g. Procedencia de la indemnización por daño moral:** Invoca los artículos 2.329 y 2.314 del Código Civil, argumentando que la indemnización comprende todo daño, por lo cual está comprendido el daño moral. Así en el caso Ad Litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados. Por el solo hecho de haberse producido los delitos, el daño moral se presume y Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, en ejercicio de las funciones del Fiscal Militar, es responsable de lo acaecido, sin que se haya demostrado la sujeción a un procedimiento racional y justo previamente establecido en la ley. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal.

38°) Que de fs. 2.317 a 2.354 (Tomo VII), contesta la demanda civil el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Manuel Espinoza, respecto demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea (en representación de MARÍA ISABEL LILLO FLORES, DANIEL BENJAMÍN MATELUNA LILLO, CHRISTIAN MARCELO MATELUNA LILLO, CESAR PATRICIO MATELUNA LILLO, GEORGE RICARDO MATELUNA LILLO Y JUAN CARLOS MATELUNA LILLO, cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez); de fs. 2.357 a 2.393 (Tomo VII) respecto demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea (en representación de MARY CARMEN ORTIGOSA. Hija de José María Ortigosa Ansoleaga); y de fs. 2.396 a 2.426 (Tomo VII), respecto demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por IGNACIO JESÚS DABED ORTIGOSA, (Nieto de José María Ortigosa Ansoleaga). Inicia sus presentaciones, acotando que los demandantes civiles demandan:

- a. Una suma total de \$900.000.000 (novecientos millones de pesos), a razón de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de ellos, esto es, MARÍA ISABEL LILLO FLORES, DANIEL BENJAMÍN MATELUNA LILLO, CHRISTIAN MARCELO MATELUNA LILLO, CESAR**

PATRICIO MATELUNA LILLO, GEORGE RICARDO MATELUNA LILLO Y JUAN CARLOS MATELUNA LILLO, quienes invocan la calidad de cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez.

- b. Una suma total de **\$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos)** para MARY CARMEN ORTIGOSA, quien invoca la calidad de hija de José María Ortigosa Ansoleaga.
- c. Una suma total de **\$300.000.000 (trescientos millones de pesos)**, para IGNACIO JESÚS DABED ORTIGOSA, quien invoca la calidad de nieto de José María Ortigosa Ansoleaga

Todo más reajuste e intereses por concepto de indemnización de perjuicios, por daño moral, por el **Homicidio y Apremios Ilegítimos** de don **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez** de don **José María Ansoleaga**, cometidos en los primeros días del mes de octubre de 1973 y las costas de la causa.

Solicita que la mencionada demanda sea íntegramente rechazada, por los siguientes fundamentos:

Para un mejor entendimiento de las contestaciones efectuadas por el Fisco de Chile, se estructurará sus presentaciones de la siguiente forma:

- A. Excepción reparación satisfactiva. improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación (*respecto de las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea*) y Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandan, por preterición legal del demandante y por haber sido reparado en la forma que se expresa (*respecto a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa.-*)
- B. Excepción de prescripción extintiva.
- C. En cuanto al daño e indemnización reclamadas.
- D. Improcedencia del pago de ajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

A. EXCEPCIÓN REPARACIÓN SATISFACTIVA. IMPROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR HABER SIDO YA INDEMNIZADOS LOS DEMANDANTES EN CONFORMIDAD A LAS LEYES DE REPARACIÓN (*respecto de las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea*) **y EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DINERARIA DEMANDAN, POR PRETERICIÓN LEGAL DEL DEMANDANTE Y POR HABER SIDO REPARADO**

EN LA FORMA QUE SE EXPRESA (respecto a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa):

- 1) Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas:** No resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Tal comprensión solo puede efectuarse al interior - y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicales en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño. En este escenario, la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero – preferentemente en cuotas mensuales.
- 2) Complejidad reparatoria:** Comienza citando a Lira. Posteriormente señala que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación o también llamada “Comisión Rettig”, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe derivó en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la Comisión, entendió por **reparación** *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe”*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en *“un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas”*. Compensación de daños morales y mejora

patrimonial, son los dos claros objetivos de estas normas reparatorias. Consideraciones prácticamente idénticas a las señaladas se pueden formular respecto de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, ahora denominada Comisión Asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura y de las leyes 19.992 y 20.405. Asumida esa idea reparatoria, tanto la Ley 19.123 como las leyes 19.980, 19.992 y otras normas jurídicas conexas, han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación. En ese sentido, se puede indicar que la reparación a la víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones a saber:

a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero: En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2015, en concepto de: **a) Pensiones:** la suma de \$199.772.927.770 como parte de las asignadas por la ley 19.123 (Comisión Rettig) y \$419.831.652.606 como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech). **b) Bono:** la suma de \$41.856.379.416 asignada por la ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047 por la Ley 19.992. **c) Desahucio** (bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888 asignada por la Ley 19.123. **d) Bono extraordinario** (Ley 20.874): la suma de \$21.256.000.000. En consecuencia, a diciembre de 2015 el Fisco ya había desembolsado la **suma total de \$706.387.596.727**, entre otros beneficios.

b) Reparaciones mediante la asignación de derechos: La reparación no solo se realiza mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En este sentido, la Ley 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas de DDHH los siguientes derechos: **a)** Todos los familiares del causante tendrán el derecho a recibir de manera gratuita las prestaciones médicas incluidas en el Régimen General de Garantías en Salud y las derivadas de embarazos. **b)** Los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, sin aporte fiscal, y reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán un derecho al pago de la matrícula y del total del arancel mensual de cada establecimiento. **c)** Asimismo, se conceden beneficios en vivienda, correspondientes a acceso de subsidios de viviendas.

c) Reparaciones simbólicas: Se realizan a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: **a)** La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993. **b)** El establecimiento mediante el Decreto N°121 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del 10 de octubre de 2006, del día Nacional del Detenido Desaparecidos (se elige el día 30 de agosto de cada año). **c)** La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. **d)** El establecimiento mediante Ley N°20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos. **e)** La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DDHH.

- 3) La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas:** Puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DDHH no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cumulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, **no pudiendo por ello ser exigidos nuevamente**. Al efecto, funda sus argumentos citando fallos de la Excma. Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia, normativa internacional y doctrina. En efecto, cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos desarrollada por Chile, citando al efecto el caso Almonacid, jurisprudencia y doctrina atinente. Estando entonces las acciones deducidas en estos autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cumulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es

que se **opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes 19.123, 19.980 y sus modificaciones**; mientras que respecto demanda civil de indemnización de perjuicios deducida en su contra por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa, quien ha invocado la calidad de nieto de la víctima, **opone las excepciones de preterición en lo económico y reparación satisfactiva a su respecto, al haber sido ya reparado mediante las reparaciones simbólicas y beneficios de salud, a través del programa PRAIS.**

B. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

- a. **Normas de prescripción aplicables:** Oponen la excepción de **prescripción extintiva** de las acciones de indemnización de perjuicios deducidas por los mencionados actores con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; solicitando que por encontrarse ellas prescritas, se rechace la demanda de autos en todas sus partes. Según lo expuesto en la mencionada demanda, el **Homicidio de don Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga** se cometió en el **mes de octubre del año 1973**, pero es del caso que aun entendiéndose suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 04 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de **notificación de la demanda de autos, esto es, el 17 de junio de 2019**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. **En subsidio**, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la **excepción de prescripción extintiva de 5 años** contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.
- b. **Generalidades sobre la prescripción:** Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo

disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, citando jurisprudencia nacional al efecto. Advierte que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1° del Código Civil). Adopta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

c. Fundamento de la prescripción: La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Los planteamientos doctrinarios permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Afirma que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. En la especie, el ejercicio de las acciones civiles ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

d. Jurisprudencia sobre la materia:

1. Cita la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013.
2. Además existen numerosos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en los cuales se ha reconocido expresamente el carácter prescriptible de las acciones indemnizatorias en casos de violación a los derechos humanos.

e. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción, citando doctrina fiscal al efecto.

f. Normas contenidas en el Derecho Internacional: Al respecto, se hace cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en las demandas, adelantando que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. En consecuencia, se refiere a la "Convención sobre la

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución N°60/147 de 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo modo, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile" y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, **el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la Ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, debiendo rechazar íntegramente las demandas por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.**

C. EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIÓN RECLAMADAS: En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, la defensa fiscal opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos.

- a. Existencia y fijación de la indemnización por daño moral:** Alega que respecto a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa, los apremios ilegítimos y el fallecimiento de don José María Ortigosa Ansoleaga ocurren en septiembre y octubre de 1973, mientras que el demandante nació el 02 de febrero de 1995, o sea casi 22 años después del homicidio de su abuelo, cuando estaba nuevamente asentado el sistema democrático en Chile. Por lo que debe descartarse en él un sentimiento de vergüenza o un trato vejatorio derivado de las trágicas circunstancias en que había fallecido su abuelo, porque la memoria de éste ya había sido limpiada tras el restablecimiento de la democracia. Tampoco puede soslayarse el hecho de que la hija de don José María Ortigosa Ansoleaga estima en estos mismo autos en \$150.000.000 la indemnización por el daño moral devenido de la pérdida de su madre; mientras que Ignacio Jesús Dabed Ortigosa en su calidad de nieto con un vínculo de parentesco más lejano y no habido si quiera conocido a su abuelo estime la indemnización de su daño moral en el doble de aquella suma. Por otra parte, el Fisco estima que el **daño moral** consiste en *“la lesión o detrimento que experimenta una persona, en*

general, en sus atributos o cualidades morales”. Tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extrapatrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél, citando la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto. Anexa que habrá de estarse entonces al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño. En tal sentido, las cifras pretendidas en las demandas como compensación del daño moral, resultan absolutamente excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros Tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

- b. En subsidio de las alegaciones precedentes de reparación satisfactiva y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos efectuados por el Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales:** Lo anterior, de conformidad a las leyes de reparación (19.123 y 19.980, entre otras) y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. Además es pertinente hacer presente que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los Tribunales en esta materia.

D. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE AJUSTES E INTERESES CON ANTERIORIDAD A QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUEDE EJECUTORIADA: Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. A la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Por consiguiente, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y se condene a su representado al pago de indemnizaciones de perjuicios, tales reajustes sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se

encuentre firme o ejecutoriada, fundamentándose en lo dispuesto en el artículo 1.551 del Código Civil y la jurisprudencia de nuestros Tribunales superiores.

39°) A fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII), con fecha 04 de julio de 2019, **contesta la demanda civil** el abogado **Víctor Carmine Zúñiga**, en representación de **Oscar Alfonso Podlech Michaud** en el **Sexto Otrosí** de su presentación, solicitando darles tramitación a las excepciones opuestas de ineptitud del libelo, falta de legitimación causal pasiva y activa y prescripción de la acción, y en definitiva acogerla, rechazando la acción civil en contra de su defendido en todas sus partes, con expresa condenación e costas. Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de las contestaciones efectuadas por el Fisco de Chile, se estructurará sus presentaciones de la siguiente forma:

- A.** Excepción dilatoria de ineptitud del libelo por falta de algún requisito en el modo de proponer la demanda (artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil).
- B.** Falta de legitimación causal para que Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, sea sujeto pasivo de una acción indemnizatoria por el homicidio y apremios ilegítimo en la persona del Señor Ortigosa.
- C.** Falta de legitimación activa de Ignacio Jesús Dabed Ortigosa para ser demandante de la acción de indemnización de perjuicios: la defensa se basa en su condición de nieto del Señor Ortigosa.
- D.** Prescripción de la acción civil.

A. EXCEPCIÓN DILATORIA DE INEPTITUD DEL LIBELO POR FALTA DE ALGÚN REQUISITO EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA (artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil): alega que la Demanda Civil (interpuesta por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa) contenida en el primer otrosí del libelo indicado, adolece de las siguientes faltas:

- a.** No cumple con el artículo 254 N°3 del Código de Procedimiento Civil que exige a la demanda contener "El nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado" y tampoco lo mencionan en la Adhesión a la Acusación Fiscal.
- b.** No cumple con la exigencia del artículo 254 N°4 del Código de Procedimiento Civil, de contener la exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoya en relación con su defendido.

B. FALTA DE LEGITIMACIÓN CAUSAL PARA QUE OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, SEA SUJETO PASIVO DE UNA ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR EL HOMICIDIO Y APREMIOS ILEGÍTIMOS EN LA PERSONA DEL SEÑOR ORTIGOSA: Se funda en que su representado es absolutamente ajeno a la muerte de que da cuenta el Bando Militar N°8 de la Guarnición Militar de Temuco, de fecha 05 de Octubre de 1973, en que no tuvo injerencia alguna, pues era el Asesor de la Fiscalía Militar y no de la Guarnición Militar de Temuco. Presupuesto procesal esencial de la acción, del juicio y la sentencia, que al faltar respecto de su defendido debe conducir necesariamente al rechazo de la acción civil y que incluso los jueces deben declarar de oficio, sin incurrir por ello en ultra petita, conforme a la opinión enormemente mayoritaria de la doctrina y jurisprudencia.

C. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE IGNACIO JESÚS DABED ORTIGOSA PARA SER DEMANDANTE DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS: La defensa se basa en su condición de nieto del señor **Ortigosa**. Es central la determinación de a quién corresponda la acción, es decir, quién tiene titularidad activa para demandar, en este sentido la jurisprudencia en general la ha limitado a la familia nuclear, esto es, cónyuges e hijos, citando jurisprudencia al respecto.

D. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, que establece un plazo de 4 años para la prescripción de las acciones indemnizatorias emanadas de los delitos y cuasi delitos, de tal modo que la acción ejercitada por los delitos de Homicidio, y Apremios ilegítimos de fecha 5 de Octubre de 1973, prescribió el 5 de Octubre de 1977, esto es, hace 41 años y 8 meses, por lo que la demanda debe ser rechazada además por este concepto.

40°) Que haciéndonos cargo de las **contestaciones de las demandas efectuadas por el Fisco de Chile**, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de las contestaciones efectuadas por el Fisco de Chile, se estructurará sus presentaciones de la siguiente forma:

A. Excepción reparación satisfactiva. improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación (*respecto de las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea*) y

Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandan, por preterición legal del demandante y por haber sido reparado en la forma que se expresa (*respecto a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa*).

B. Excepción de prescripción extintiva.

C. En cuanto al daño e indemnización reclamadas.

D. Improcedencia del pago de ajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

A. EXCEPCIÓN REPARACIÓN SATISFACTIVA.
IMPROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR HABER SIDO YA INDEMNIZADOS LOS DEMANDANTES EN CONFORMIDAD A LAS LEYES DE REPARACIÓN (respecto de las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea) **y EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DINERARIA DEMANDA, POR PRETERICIÓN LEGAL DEL DEMANDANTE Y POR HABER SIDO REPARADO EN LA FORMA QUE SE EXPRESA** (respecto a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa): Se estará a lo ya razonado en siguientes causas: **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014; **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014; **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014; **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015; **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016; **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015; **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitruquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016; **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016; **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de

17 de agosto de 2016, **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015; **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016; **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016; **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016; **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016; **Causa rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016; **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017; **Causa rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017; **Causa rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017; **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017; **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016; **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017; **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017, **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018; **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de

2020; **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020; **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020; **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018; **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018; **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018; y **Causa rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018. **Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.**

a.1. Sobre lo anterior, **estas excepciones deben ser rechazadas.** En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral (solo cita una Ley que tiene que ver con leyes laborales, esto es, Ley. 16.744, no atinente a la materia). Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial:

a.2. El fallo de 01 de abril de 2014, rol 1424-2013, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-**

13, 3841-12 y 5436-10. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, *la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile.* Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que los demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

a.3. En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado lo informado por el Instituto de Previsión Social:

1. Respecto a la víctima Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez:

El ORD. N°59992/2019 de 17 de julio de 2019, acompañado a fs. 2.611 a 2.612 (Tomo VII), emitido por el Instituto de Previsión social, en virtud del cual informa los beneficios obtenidos de reparación de las Leyes N°19.123 y 19.980, recibidos por la cónyuge e hijos del causante Ley Rettig, don Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez, agregando que Daniel y George Mateluna Lillo, son beneficiarios de una pensión de reparación de la Ley N°19.992, en su calidad de víctimas directas de prisión política y tortura, Valech.

Complementado en ORD. 59989/2019 de 17 de julio de 2019, acompañado de fs. 2.631 a 2.632 (Tomo VII), en virtud del cual agrega que la cónyuge del Sr. Mateluna, doña María Isabel Lillo también es beneficiaria de una pensión de orfandad en ex Caja de Ferrocarriles.

a. Respecto a la víctima José María Ortigosa Ansoleaga:

El mismo modo, el ORD. 60028/2019 de 17 de julio de 2019, acompañado a fs. 2.613 (Tomo VII), emitido por el Instituto de Previsión social, en virtud del cual informa que don Ignacio Jesús Dabed Ortigosa no ha recibido beneficios otorgados por las Leyes de Reparación N°19.123 y 19.980 por el causante de Ley Rettig, don José María Ortigosa Ansoleaga.

El ORD. 60049/2019 de 19 de julio de 2019, acompañado de fs. 2.614 a 2.615 (Tomo VII), en virtud del cual informa los beneficios de reparación de la Ley 19.880, recibido por doña Mary Carmen Ortigosa Uriarte, en calidad de hija del causante de Ley Rettig, don José María Ortigosa Ansoleaga.

El ORD. 59978/2019 de 17 de julio de 2019, acompañado de fs. 2.626 a 2.627 (Tomo VII), en virtud del cual informa los beneficios de reparación de

las Leyes N°19.123 y 19.980 recibidos por la cónyuge e hijas del causante de la Ley Rettig don José María Ortigosa Ansoleaga.

a.4. En consecuencia esta primera alegación que realiza el Fisco de Chile, respecto de: 1) La demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don **Sebastián Saavedra Cea** (en representación de MARÍA ISABEL LILLO FLORES, DANIEL BENJAMÍN MATELUNA LILLO, CHRISTIAN MARCELO MATELUNA LILLO, CESAR PATRICIO MATELUNA LILLO, GEORGE RICARDO MATELUNA LILLO Y JUAN CARLOS MATELUNA LILLO (Cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez); **2)** La demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado **Sebastián Saavedra Cea** (en representación de MARY CARMEN ORTIGOSA (Hija de José María Ortigosa Ansoleaga); **3)** La demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por **IGNACIO JESÚS DABED ORTIGOSA**, (Nieto de José María Ortigosa Ansoleaga) **serán rechazadas.**

B. QUE EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL ARTÍCULO 2.332 EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 2.497 Y 2.515 EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 2.514 DEL CÓDIGO CIVIL: También **será rechazada**. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la **Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo rol 1424-2013 de 1 de abril de 2014**, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez,

en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIÓN RECLAMADAS:

c.1. Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta

forma , lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I , artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo**. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de las indemnizaciones reclamadas.

c.2. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls. Una Teoría de la Justicia**. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

c.3. Que en la misma línea, el autor citado en su obra Liberalismo Político, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión

pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

c.4. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo *La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile*, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena”* (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer una análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera

interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

c.5 Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia **procede rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.**

c.6 Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de **cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros** parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Se tendrá presente además tal como lo expone el **Fisco de Chile a fs. 1.538 (Tomo V) en su escrito de Contestación a la Demanda Civil de Indemnización de Perjuicios** deducida por el abogado el abogado Herman Leonardo Saavedra Enríquez, en representación de Juan Santiago y Lucía, ambos Millalén Huenchunir a fs. 1.459 a 1.471 (Tomo IV), que el **daño moral** consiste en *“la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales, recaen en elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente”*. Sobre este punto la **Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:**

- 1) Causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros,** sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.
- 2) El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021,** sentencia de remplazo que en expresa en su considerando **Décimo Quinto:**...*“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “falta de servicio”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del*

inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública". En este sentido, en su parte resolutive "se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme".

Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre las indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia **aparece justo y razonable que se otorgue el monto pedido por el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de los querellantes y demandantes civiles; mientras que para el caso de Ignacio Jesús Dabed Ortigosa se otorgará un monto inferior, tal como se dirá en lo resolutive del fallo.**

D. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REAJUSTES E INTERESES CON ANTERIORIDAD A QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUEDE EJECUTORIADA: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, **éste pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.**

41°) Que haciéndonos cargo de las **contestaciones de las demandas efectuadas por el abogado Víctor Carmine Zúñiga de fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII)**, en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

- A.** En cuanto a la excepción dilatoria de ineptitud del libelo por falta de algún requisito en el modo de proponer la demanda (artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil).
- B.** En cuanto a la falta de legitimación causal para que Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, sea sujeto pasivo de una acción indemnizatoria por el homicidio y apremios ilegítimo en la persona del Señor Ortigosa.
- C.** En cuanto a la falta de legitimación activa de Ignacio Jesús Dabed Ortigosa para ser demandante de la acción de indemnización de perjuicios: la defensa se basa en su condición de nieto del Señor Ortigosa.
- D.** En cuanto a la prescripción de la acción civil.

A. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DILATORIA DE INEPTITUD DEL LIBELO POR FALTA DE ALGÚN REQUISITO EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA (Artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil):

- a. Respecto a que el demandante civil no cumple con el artículo 254 N°3 del Código de Procedimiento Civil que exige a la demanda:** Si bien es cierto Tribunal tiene en consideración que **Ignacio Jesús Dabed Ortigosa** en el Primer Otrosí de su presentación de fs. 2.202 a 2.218 (Tomo VI), señala que ignora el domicilio del acusado y demandado civilmente, no haciendo referencia a su Profesión u Oficio; el Tribunal no tiene duda de la persona de que se trata. Lo anterior, atendido de que el demandante civil individualiza al demandado civilmente como “Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud”, sumado a que se trata del único acusado de autos y de conformidad al mérito del proceso, el Auto Acusatorio, la descripción de los hechos relatados por los testigos y lo expuesto por las partes, no cabe duda de que se trata de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, Abogado conocido en Temuco, quien desde el 11 de septiembre de 1973 actuó como Abogado Asesor y Fiscal Militar Ad-Hoc del Regimiento Tucapel de Temuco y sus datos, título, profesión son determinables en la causa.
- b. Respecto a que el demandante civil no cumple con la exigencia del artículo 254 N°4 del Código de Procedimiento Civil, de contener la**

exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoya en relación con su defendido: No es efectivo, toda vez que el demandante civil en su presentación expone un subtítulo denominado “*I. Los Hechos*” y otro denominado “*IV. El Derecho*” refiriéndose a ellos. En consecuencia, lo alegado por la Defensa no tiene ningún asidero y deberá estarse al mérito del proceso, el Auto Acusatorio y lo analizado en el presente fallo. **En consecuencia, el Tribunal rechazará esta excepción, como se dirá en lo resolutivo del fallo,** porque hay una exposición clara de los hechos y el derecho.

B. EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN CAUSAL PARA QUE OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, SEA SUJETO PASIVO DE UNA ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR EL HOMICIDIO Y APREMIOS ILEGÍTIMO EN LA PERSONA DEL SEÑOR ORTIGOSA: En relación a este punto, no es efectivo lo que señala el actor, toda vez que del mérito del proceso y de lo razonado en esta sentencia, el acusado y demandando civil Oscar Alfonso Podlech Michaud es autor de los delitos de Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados de José María Ortigosa Ansoleaga (en este caso), por lo que **esta excepción no puede ser acogida.**

C. EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE IGNACIO JESÚS DABED ORTIGOSA PARA SER DEMANDANTE DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS: Este Tribunal reproduce los argumentos dados para la contestación de la Demanda Civil contra el Fisco de Chile, en el sentido de que no existe ninguna norma donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, nietos (como en el caso de autos) u otros de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por lo que el acusado y demandado civilmente de autos, sí puede ser sujeto pasivo de una acción indemnizatoria (tal como sucede en la presente causa). Además el demandante civil Ignacio Jesús Dabed Ortigosa en el Primer Otrosí de su presentación de fs. 2.202 a 2.218 (Tomo VI) en el apartado, subtulado como “*IV. El Derecho*” se refiere tanto a la responsabilidad del Acusado como a la del Estado de Chile, además de citar la normativa nacional como internacional atingente. En dicho apartado, señala que de conformidad al Código Civil y siendo el demandado acusado en autos, debe reparar el daño que ha causado. **En consecuencia, el Tribunal también rechazará esta excepción, como se dirá en lo resolutivo del fallo.**

c.1. Cabe hacer presente que éste Tribunal ya se ha pronunciado anteriormente, reproduciendo los argumentos dados para la contestación de la Demanda Civil contra el Fisco de Chile, en el sentido de que no existe ninguna norma donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, nietos (como en el caso de autos) u otros de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Así solo en el presente año se ha reiterado en: **la Sentencia Definitiva de 25 de febrero de 2021 en causa rol 45.365**, causa en donde es posible encontrar como querellantes y demandantes civiles a quienes invocan además la calidad de **hermanos** de la víctima de autos; **la Sentencia Definitiva de 30 de abril de 2021 en causa rol 114.051** causa en donde es posible encontrar como querellantes y demandantes civiles a quienes invocan además la calidad de **hermanos** de la víctima de autos; **la Sentencia Definitiva de 11 de junio de 2021 en causa rol 45.364**, causa en donde es posible encontrar como demandante civil a quien invoca además la calidad de **prima** de la víctima de autos; **la Sentencia Definitiva de 03 de septiembre de 2021 en causa rol 114.103**, causa en donde es posible encontrar como querellantes y demandantes civiles a quienes invocan además la calidad de **hermanos** de la víctima de autos; y **la Sentencia Definitiva de 22 de septiembre de 2021 en causa rol 45.367**, causa en donde es posible encontrar como querellantes y demandantes civiles a quienes invocan la calidad de **hermanos** de la víctima de autos.

c.2. No es efectivo como señala la demandada que la acción entablada se agota con la cónyuge sobreviviente y los hijos legítimos (familia nuclear), ya que al respecto existen diferentes fallos dictados por este Tribunal y ratificados por la Excm. Corte Suprema, donde no solo el/la cónyuge sobreviviente e hijos han interpuesto las acciones civiles, sino también lo han hecho los **hermanos, prima, u otros**, tal como se ha detallado precedentemente. Y esto se despende del concepto de reparación integral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un aspecto individual de la persona y un aspecto social que, este último tiene que ver la familia y comunidad. En efecto, la actuación del acusado le ha privado a la familia y a la comunidad el poder haber disfrutado de la compañía de la víctima y todo el desarrollo de su personalidad a su nieto. **En consecuencia, el Tribunal también rechazará esta excepción, como se dirá en lo resolutivo del fallo.**

D. EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL: El

Tribunal reproduce lo señalado para las Contestaciones a las demandas civiles de autos efectuadas por el Fisco de Chile. Así, sobre esta materia la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excm. Corte Suprema han ratificado de manera uniforme en las causas roles 31.030 – 1994; 469 – 1998; 517 – 2004; 288 – 2012 y 1.260 – 2013, 40.168-2017, 4.080-2018, entre muchas otras. Y de la misma forma, como se ha fallado reiteradamente por este Tribunal en las causas roles: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; ; 45.362; 114.007 y 114.042. Lo anterior, en cuanto a que **no procede invocar la Prescripción Civil en materia de Delitos de Lesa Humanidad**, toda vez que son **imprescriptible inamnistiables**; por lo que **no rigen las normas del Derecho Civil**. Por lo que también se reproduce lo señalado por éste Tribunal al pronunciarse sobre las Excepciones de Fondo aludidas en el Segundo Otrosí del escrito de Defensa de fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII), y que fueran renovadas para su examen de conformidad al artículo 434 del Código de Procedimiento Penal.

42°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del delito de **Apremios Ilegítimos y Homicidio calificado de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga**, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Daniel Benjamín Mateluna de fs. 10 a 21 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 1 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra a fs. 42, 117 184, 187, 193 (Tomo I) y 461 (Tomo II), contiene Certificado de Defunción de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez.
- b) A fs. 2 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra a fs. 115, 187 y 190 (Tomo I), contiene Acta de Defunción de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez.
- c) A fs. 3 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 43, 116 y 192 (Tomo I), contiene Certificado Médico de Defunción Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez.
- d) De fs. 4 a 5 (Tomo I),** copia de lo cual se encuentra de fs. 476 a 477 (Tomo II), contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que consta que Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez, de 53 años,

casado, era Consejero de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Temuco. Fue detenido y trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco. Con fecha 2 de octubre de 1973 fue ejecutado en las dependencias de este recinto militar por agentes del Estado.

- e) **A fs. 6 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 46, 119, 171, 195 y 223 (Tomo I), contiene copias de recorte de prensa que se titula "Once bajas en Cautín".
- f) **A fs. 7 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 45, 118, 120, 170, 194, 196, 222(Tomo I) y 1.820 (Tomo V), contiene copias de recorte de prensa que se titula "En Regimiento de Temuco, muertos dos Marxistas Por Intento de Fuga".
- g) **A fs. 8 (Tomo I)**, contiene Certificado de Nacimiento de Daniel Benjamín Mateluna Lillo, quien nació con fecha 03 de enero de 1952, registrando como padre a Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y como madre a María Isabel Lillo Flores.
- h) **A fs. 9 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 464 (Tomo II), contiene Certificado de Matrimonio entre Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y a María Isabel Lillo Flores, Circunscripción de San Bernardo, N° de Inscripción 5, el cual fue celebrado con fecha 04 de enero de 1950.

Detallado en el apartado B.1 de Documentos.

B. Fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 189/73, emitido por la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de fs. 31 a 35 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 115 a 153 (Tomo I), Protocolo de Autopsia Médico Legal de Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez, de fecha 03 de octubre de 1973, en el que consta su fallecimiento con fecha 02 de octubre de 1973.

Detallado en el apartado B.2 de Documentos.

C. Antecedentes proporcionados por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 42 a 55 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 142 a 174 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente forma:

- a) **De fs. 48 a 50 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra de fs. 57 a 60 y de fs. 172 a 174 (Tomo I), contiene Oficio N°1095/91 del Servicio Médico Legal de Temuco, de fecha 25 de septiembre de 1991, en el cual se indica que existen otras autopsias donde la causa de muerte haya sido consecuencia de las razones señaladas en los protocolos remitidos mediante Oficio N° 1026/91, incluyendo nómina de diversas personas, entre ellas: de Daniel De Los

Ángeles Mateluna Gómez y de José María Artigosa Ansoleaga. *Firmado por la Dra. Barrientos Orloff*

- b) A fs. 159 a 161 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra de fs. 177 a 197 (Tomo I) y de fs. 371 a 373 (Tomo II), contiene Protocolo de Autopsia de José María Ortigosa Ansoleaga N°190/73 de fecha 05 de octubre de 1973, en el que consta que falleció con fecha 02 de octubre de 1973. Documento *firmado por el DR. Wolfgang Reuter*.

Detallado en el apartado B.3 de Documentos.

D. Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, de fs. 101 a 112 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 74 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 162, 165, 217 (Tomo I) y 478 (Tomo II), contiene Certificado de Defunción de José María Ortigosa Ansoleaga.
- b) De fs. 75 a 76 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra de fs. 476 a 477 (Tomo II), contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, respecto a José María Ortigosa Ansoleaga.
- c) De fs. 77 a 80 (Tomo I)**, contiene Informe Individual del Caso para la Comisión respecto de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez.
- d) De fs. 81 a 84 (Tomo I)**, contiene Informe Individual del Caso para la Comisión respecto de José María Ortigosa Ansoleaga.

Detallado en el apartado B.4 de Documentos.

E. Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de fs. 114 a 140 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 189 a 251 (Tomo I), en virtud del cual se adjunta toda la información que posee de **Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez**, lo que se desglosa de la siguiente forma:

- a) A fs. 166 (Tomo I)**, contiene Certificado Médico de Defunción de José María Ortigosa Ansoleaga.
- b) A fs. 169 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 218 a 220 (Tomo I), contiene Acta de Defunción de José María Ortigosa Ansoleaga, que reitera los datos precedentes.

Detallado en el apartado B.5 de Documentos.

F. ORD. N°1937 de fecha 29 de agosto de 2012, remitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de fs. 273 a 275 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 404 a 406 (Tomo II); **en virtud del cual remite los**

antecedentes familiares de las víctimas de autos, que se desglosa de la siguiente forma:

- a) **A fs. 274 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 405 (Tomo II), contiene antecedentes Familiares de José María Ortigosa Ansoleaga.
- b) **A fs. 275 (Tomo I)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 406 (Tomo II), contiene antecedentes Familiares de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez.

Detallado en el apartado B.7 de Documentos.

G. Copias autorizadas de causa rol 2182-98 de la Corte de Apelaciones de Santiago rolante de fs. 299 (Tomo I) a 384 (Tomo II), lo que se desglosa de la siguiente manera:

- a) **A fs. 323 (Tomo I)**, contiene **Oficio N° 160/91 de fecha 20 de febrero de 199 del Servicio Médico Legal de la IX Región**, en que informa al 2° Juzgado del Crimen de Temuco que el 03-10-73 ingresó a dicho servicio un N.N con Oficio de la Fiscalía de Ejército Cautín, el que posteriormente fue identificado como José María Ortigosa Ansoleaga. *Documento firmado por la Dra. Viera Barrientos Orloff.*
- b) **De fs. 334 a 344 (Tomo I)**, contiene **Informe de la Brigada de Homicidios de Temuco, de fecha 29 de marzo de 1991**, el que en virtud de una orden de investigar informa los datos de investigación respecto de la víctima José María Ortigosa Ansoleaga.

Detallado en el apartado B.8 de Documentos.

H. Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Carolina Contreras Riveras y Sebastián Saavedra Cea, de fs. 465 a 474 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 462 (Tono II)**, contiene Certificado de Nacimiento de Juan Carlos Mateluna Lillo.
- b) **A fs. 463 (Tono II)**, contiene Certificado de Nacimiento de María Isabel Lillo Flores.

Detallado en el apartado B.9 de Documentos.

I. Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Carolina Contreras Riveras de fs. 489 a 500 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 479 (Tono II)**, contiene Certificado de Nacimiento de Christian Marcelo Mateluna Lillo.

- b) **A fs. 480 (Tono II)**, contiene Certificado de Nacimiento de César Patricio Mateluna Lillo.
- c) **A fs. 481 (Tono II)**, contiene Certificado de Nacimiento de George Ricardo Mateluna Lillo.
- d) **De fs. 485 a 488 (Tono II)**, contiene copia del caso de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez existente en la página web “Memoria viva”.

Detallado en el apartado B.10 de Documentos.

J. Informe Pericial Planímetro N°207 de fecha 29 de mayo de 2012, evacuado por Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 958 a 965 (Tomo III), realizado en causa rol 113.089. Documento *firmado por Christian Silva Barra, Perito Dibujante Planimetría*.

Detallado en el apartado B.11 de Documentos.

K. Fotografía de Daniel De los Ángeles Mateluna Gómez, rolante a fs. 1.155 (Tomo IV), acompañada al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.156 (Tomo IV).

Detallado en el apartado B.13 de Documentos.

L. Copia simple del documento Junta Provincial de Gobierno de Cautín Primera edición, Suplementos Colección de bandos emitidos por el Diario Austral el 18 de noviembre del año 1973, rolante de fs. 1.798 a fs. 1.816 (Tomo V), que a fs. 1.801 en lo que respecta al subtítulo “La Provincia de Cautín”.

Detallado en el apartado B.21 de Documentos.

M. Fotografía de José María Ortigosa Ansoleaga, rolante a fs. 1.888 (Tomo VI), acompañada al proceso por la abogada Carolina Contreras en su presentación de fs. 1.887 (Tomo IV).

Detallado en el apartado B.22 de Documentos.

N. Certificado de Nacimiento de Mary Carmen Ortigosa Uriarte de fs. 2.002 (Tono VI), acompañados en la querella Criminal presentada por Sebastián Saavedra Cea de fs. 1.999 a 2.001 vta (Tomo VI).

Detallado en el apartado B.23 de Documentos.

Ñ. Documentos acompañados en la querella Criminal presentada por Luis Hermosilla Osorio de fs. 2.014 a 2.017 (Tomo VI), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **A fs. 2.018 (Tono VI),** copia de lo cual se encuentra a fs. 2.427 (Tomo VII) y 2.673 (Tomo VIII), contiene Certificado de Nacimiento de Ignacio Jesús Dabed Ortigosa.
- b) **A fs. 2.019 (Tono VI),** copia de lo cual se encuentra a fs. 2.675 (Tomo VIII), contiene Certificado de Defunción de Patricia Verónica Ortigosa Uriarte.
- c) **A fs. 2.020 (Tono VI),** copia de lo cual se encuentra a fs. 2.674 (Tomo VIII), contiene Certificado de Nacimiento de Patricia Verónica Ortigosa Uriarte.

Detallado en el apartado B.24 de Documentos.

O. Certificados de Defunción, ordenados a agregar al proceso según medida para mejor resolver de fs. 3.003 (Tomo VIII) y 3.021 (Tomo VIII)

- b) **A fs. 3.005 (Tomo VIII),** contiene certificado de Carmen Graciela Uriarte Oyanguren, quien falleció con fecha 19 de noviembre de 2001.

Detallado en el apartado B.28 de Documentos.

P. Documentos referidos al acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, ordenados a agregar al proceso según medida para mejor resolver de fs. 3.024 (Tomo VIII) que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **De fs. 103 a 111 (Cuaderno Reservado),** contiene Hojas de Vida del acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, respecto del periodo comprendido entre 1974 a 1981.
- b) **De fs. 3.026 a 3.040 (Tomo VIII),** contiene copia de las páginas de periódicos de la época, los que se sub-desglosan de la siguiente forma:
 - i. De fs. 3.026 a 3.027 (Tomo VIII), contiene copia del Diario Austral del domingo 01 de julio de 1990, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Confesiones del ex Fiscal Militar”.
 - ii. De fs. 3.028 a 3.029 (Tomo VIII), contiene entrevista al acusado de febrero de 1983, que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Los desacuerdos del ex Fiscal Militar”.
 - iii. De fs. 3.030 a 3.032 (Tomo VIII), contiene entrevista al acusado que se titula “Abogado Alfonso Podlech Michaud. Ex Fiscal Militar de Cautín. “Espero que la Comisión de Verdad y Reconciliación no se transforme en una de venganza y ajuste de cuentas”.

Detallado en el apartado B.29 de Documentos.

Q. Informe de la Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, de fs. 2.794 a 2.965 (Tomo VIII), en virtud del cual se adjunta fotocopia los siguientes documentos de trabajo internos elaborados por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile y la Vicaría de la Solidaridad: **1)** Algunos factores de daño a la salud mental. **2)** Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos. **3)** Situación emocional de menores, hijos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. **4)** Saludos mental y violación a los derechos humanos. **5)** Los ejecutados de Calama: Una experiencia de Trabajo Social con sus familiares a 14 años de sus ejecuciones. *Documento firmado por doña María Paz Vergara Low, Secretaria Ejecutiva de la Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.*

R. Informe de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) de fecha 06 de mayo de 2019, rolante de fs. 2.269 a 2.277 (Tomo VII), que contiene documentación sobre las secuelas en el plano de salud mental en los familiares de víctimas de violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar. Éste informe a modo de conclusión manifiesta que “no obstante las manifestaciones y consecuencias psicopatológicas descritas, no se trata únicamente de cuadros o síndromes psicopatológicos, sino al mismo tiempo de expresiones concretas del conflicto social y político desarrollado en una sociedad determinada, que se manifiesta tanto en el psiquismo individual, como en la subjetividad social. Se puede apreciar que frente a diversas situaciones traumáticas, la sintomatología y la desestructuración que se observan pueden manifestarse de manera similar. Es preciso enfatizar, que la especificidad radicada en la situación traumática, que en Chile se definió a través de la represión política. Esta trasforma el contexto social haciendo amenazador y traumatizante y con un gran potencial destructivo. Incidiendo en las condiciones materiales de la vida concreta, en la sobrevivencia psíquica, y en los significados y valores que constituyen el sentido de la vida de los sujetos”. *Documento firmado por Elena Gómez Castro, Directora Ejecutiva.*

S. ORD.N°1986 de fecha 30 de abril de 2019, en virtud del cual el Subsecretario de Redes Asistenciales, don Luis Catillo Fuenzalida, adjunta **Norma Técnica N°88, para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973-1990, de fs. 2.230 a 2.242 (Tomo IV).** *Documento firmado dicho Subsecretario.*

T. Declaración Judicial de ALFONSO RENÉ CONTRERAS FARFÁN de fs. 2.634 a 2.635 (Tomo VII) y de MARIO ARNOLDO ALARCÓN TAPIA de fs. 2.636 a 2.637 (Tomo VII), quienes declaran sin tacha y legalmente examinados que conocen a María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo y Juan Carlos Mateluna Lillo, Cónyuge e hijos de la víctima de autos Daniel Mateluna Gómez. En el caso del testigo **Alfonso René Contreras Farfán**, desde hace más de 50 años aproximadamente, dado que el Sr. Mateluna (víctima de autos) atendía su mamá que ese encontraba en estado grave, es decir, desahuciada y después de la muerte de la víctima de autos los llevó a su casa. Mientras que en el caso del testigo **Mario Arnoldo Alarcón Tapia**, desde 1964 aproximadamente, por ser vecinos y porque jugaban a la pelota juntos. Ambos declaran sobre la afectación sufrida por la familia luego del homicidio del padre, ya que los hijos tuvieron que dejar de estudiar, la viuda y sus hijos tuvieron que irse a Santiago, trabajando ésta en costuras para mantenerlos, no eran felices por la falta del padre. Sus hijos se vieron afectados por la muerte del padre y tuvieron que partir al exilio, emocionalmente quedaron quebrados. Además se agrega el hecho de que la víctima (Daniel Mateluna Gómez) era el médico del barrio, por lo que todos acudían a él por alguna enfermedad.

U. Declaración Judicial de PATRICIO OSVALDO ENCINA CUELLAR de fs. 2.638 a 2.639 (Tomo VII) y de NORMA INÉS ARÉVALO ZUÑIGA de fs. 2.640 a 2.641 (Tomo VII), quienes declaran sin tacha y legalmente examinados que conocen a Mary Ortigosa Uriarte (hija de la víctima de autos José Ortigosa Ansoleaga). En el caso del testigo **Patricio Osvaldo Encina** desde que tenían 14 años aproximadamente, porque sus familias eran amigas. Mientras que la testigo **Norma Inés Arévalo Zúñiga** desde hace 6 años a la fecha de su declaración, dado que son amigas, conociéndola en un taller de aeroterapia. Ambos declaran sobre la afectación sufrida por la hija de la víctima de autos, les contó lo vivido y sufrido por su familia, señalando que tenía muy corta edad al fecha de los hechos, su padre era el sostenedor de la casa y después de esta tragedia se separó la familia y tuvieron que vender propiedades y Maricarmen quedó muy afectada, tanto así que en un tiempo desde esa situación hacia adelante, tuvo dos intentos de suicidios, encontrándose en tratamiento por depresión; dada la situación dejó de estudiar y tuvo que trabajar, sumado a que cada año recuerda a su padre en sus cumpleaños y sigue sufriendo como si fuera el primer día.

V. **Declaración Judicial de MACARENA ELIZABETH DABED SAHID de fs. 2.642 a 2.643 (Tomo VII), CRISTÓBAL ANDRÉS DABED SAHID de fs. 2.644 a 2.645 (Tomo VII), MARIO ENRIQUE DABED JAMIS de fs. 2.646 a 2.648 (Tomo VII), y SEBASTIAN ANDRÉS URRESTI ABALOS de fs. 2.649 a 2.650 (Tomo VII),** quienes declaran sin tacha y legalmente examinados que conocen a Ignacio Jesús Dabed Ortigosa y lo que sufrió producto de la detención, apremios y homicidio de su abuelo, don José María Ortigosa Ansoleaga. En el caso de la testigo **Macarena Elizabeth Dabed Sahid** por ser la hermana mayor y lo he visto en todos sus ambitos, en el colegio, la universidad, con sus amigos; lo mismo sucede en el caso del testigo **Cristóbal Andrés Dabed Sahid**; en el caso del testigo **Mario Enrique Dabed Jamis** por ser el padre de Ignacio; y en el caso de del testigo **Sebastián Andrés Urresti Ábalos** por ser cercano a la familia y compañero de Ignacio en sus estudios. Quienes señalan que Ignacio es una persona muy arisca por que su madre sufrió mucho con todo lo que pasó a su papá, el no sabe como tener mucho feeling con las personas, es muy tímido, le cuesta mucho tener amistades, le tomaba mucho tiempo poder confiar en alguien. La mamá de Ignacio, Patricia, le costaba mucho demostrar su cariño, por este mismo hecho, que perdió a su padre. Ignacio vive bajo un entorno de mucho dolor de parte de su madre, donde el hereda toda esta pena y le cuesta mucho desenvolverse en su adolescencia, en su niñez. Sin duda alguna para él ha sido un trauma por varias razones, principalmente el hecho de no contar con un abuelo y haberlo conocido por lo menos, no tuvo la oportunidad. A los 15 o 16 años se enteró como fueron los hechos, y naturalmente tuvo periodos complicados, tuvo que ir al psicólogo incluso desde pequeño. Por lo que quiso continuar con el caso en memoria de la mamá (fallecida).

W. **Declaración Judicial de ARCHIVALDO HUMBERTO LOYOLA LÓPEZ de fecha 27 de agosto de 2019, rolante de fs. 2.651 a 2.654 (Tomo VII),** quien luego de las preguntas de Tachas formuladas por la Abogada Carolina Contreras y legalmente examinado, conjetura que: conoce al abogado **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud** desde que llegó a Temuco el año 1972, cuando llegó como Relator a la Corte. Es así que para el mes de septiembre de 1973 y especialmente el 11 de ese mes se desempeñaba como Relator de la Corte de Apelaciones. Preguntado sobre si tiene conocimiento de la presentación que hiciera el abogado **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud** a la I. Corte de Apelaciones de Temuco el 17 de septiembre de 1973, responde que tiene mucho conocimiento, cree que fue él quien dio cuenta al Pleno de la Corte de la presentación donde pedía funcionarios en Comisión de Servicios, ahí estaban los

3 Relatores más el Secretario de la Corte, la conocieron y dieron la cuenta. Respecto a la calidad en que se presentó **Alfonso Podlech**, responde que exactamente el título no lo sabe, pero él era Abogado Asesor de la Fiscalía, no era Fiscal. Se le exhibe el documento al testigo de la presentación de la época, respondiendo que puede ser que se haya presentado como Fiscal Militar Ad Hoc, no lo descarta. Niega haber conocido al Fiscal Militar de Cautín en funciones al año 1973, Mayor de Ejército don **Luis Jofré Soto**, al único que conoció fue al Intendente. Distingue que supo que **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud** era Abogado Asesor, pero exactamente lo que hacía no lo sabe. Preguntado sobre los Consejos de Guerra llevados a cabo en el Regimiento Tucapel en el mes de Octubre del año 1973, contesta que fue Presidente de los Consejos de Guerra un Ministro de la Corte de esa época don **Mario Olate Melo**, quien usaba el uniforme, ya que iba a la sala con el uniforme. Usaba todos los privilegios de Militar, hablaba mucho de las cosas en el caso de Fonseca, ahí intervino **Podlech** y cree que éste lo salvó porque **Mario Olate** despotricaba al mundo. Aclara que **Podlech** habría salvado **Fonseca**, porque tenía todo en contra, incluso se hablaba de la pena de muerte porque como iba a la guerrilla de los fines de semana, era un hecho público y notorio. **Fonseca** iba a la guerrilla, la que existió y todavía hay rastros que se pueden verificar. Fonseca con esa actitud cometió el delito de traición a la patria y eso tiene incluso ahora, la pena de muerte, entonces escuchó a **Olate** en la corte comentar, era un hombre muy hablador, en los comentarios, por lo que escuchó que era pena de muerte. Y el Fiscal en esa época era **Podlech**. Cree que **Fonseca** estuvo un solo día preso, tuvo arresto domiciliario, con el teléfono intervenido y se enojó con ellos, porque ni siquiera lo llamaban. A **Fonseca** lo sacaron el mismo 1973, lo sacaron del edificio dos Milicos, uno por cada lado, mientras ellos los miraban de arriba. El tribunal pregunta al testigo ¿cómo sabe usted que **Alfonso** salvo al Sr. **Fonseca**?, a lo que el testigo responde porque él era el Fiscal, agregando que el juicio de Fonseca fue el 74 cuando ya era Fiscal, en todo caso aunque no hubiera sido Fiscal cree que desde el comienzo lo ayudó. Divulga que el único conocimiento que tenía de los Consejos de Guerra llevados a cabo en el Regimiento Tucapel a partir del mes de octubre de 1973, era por comentarios, pero conocimiento real no. Comentarios del mismo **Olate** por ejemplo. Respecto a la pregunta si conoció de algún Reclamo, Recurso o Queja por la actuación como Asesor Jurídico de la Fiscalía Militar de Cautín del abogado **Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud**, responde el testigo que no, ya que en la Corte en esa época no intervenía para nada, la Jurisdicción estaba en manos de la Justicia Militar.

X. **Declaración Judicial de GUIDO ALFONSO SEPÚLVEDA SÁNCHEZ de fecha 27 de agosto de 2019, rolante de fs. 2.655 a 2.658 (Tomo VII)**, quien luego de las preguntas de Tachas formuladas por la Abogada Carolina Contreras y legalmente examinado, conjetura que es efectivo que el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como Presidente del Colegio de Abogados de Temuco y durante varios años después, es decir, del 73 al 83 aproximadamente. Suma que es correcto que **Alfonso Podlech** en esa época también se desempeñaba como Consejero del Colegio de Abogados de Temuco y que al producirse el Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, el señor **Podlech** solicitó que se le renegara del cargo de Consejero por haber sido designado Asesor Jurídico de la Fiscalía Militar No Letrada a cargo del Mayor **Luis Jofré Soto**. Le consta que don **Alfonso Podlech** al constatar la cantidad de detenidos que se encontraban a disposición de la Fiscalía Militar, instó ante la Comandancia de la División de Ejército con asiento en Valdivia, para que se solicitara la colaboración en Comisión de Servicio de funcionarios de la Fiscalía Militar de Valdivia para tramitar las causas de los detenidos, pues la de Temuco carecía de personal idóneo y se encontraba sobrepasada por el volumen de causas que atendía. Ello le consta por las actividades que desempañaban en el Consejo, ya que en esa oportunidad él solicitó al Consejo congelar la calidad de Consejero, porque había sido llamado a ser Asesor Jurídico en el Regimiento, porque fue llamado a ser Asesor Jurídico del Regimiento en la persona del Fiscal, señor Luis Jofré, el Consejo lo tuvo en consideración y estuvo conforme. El tribunal le pregunta ¿Cuál sería el conflicto de intereses? Respondiendo el testigo que el Consejo de Abogados ya estaba adoptando algunas disposiciones para lograr algunos acuerdo destinados a advertir que no se estaba cumpliendo con normas procesales mínimas, sin debido proceso. Incluso llegó una carta de la familia de **Renato Maturana** para la designación de 8 o 9 Consejeros para ponerse a disposición de los detenidos que no tenían defensa particular. Arguye que tomaron conocimiento en el Consejo de la información general, respecto a que el Pleno de la Corte de apelaciones de Temuco en que se designó funcionarios en Comisión de Servicios del Poder Judicial para reforzar el trabajo de la Fiscalía Militar, Pleno que fue solicitado por la Autoridad Militar, concurriendo el Abogado **Alfonso Podlech** como Fiscal Militar Ad Hoc, para llevar a cabo la gestión encomendada, que se ajustaba a lo establecido en el artículo 29 del Código de Justicia Militar de la época y para ello se contó con la autorización de la Corte Suprema de la época. Consultado sobre si tomó conocimiento o recuerda en que calidad el acusado se presentó, porque el acta que consta en el proceso se presenta como Fiscal Militar Ad Hoc, el testigo responde que se puede haber

presentado así, pero no estaban al tanto de las gestiones que él desarrollaba. El detalle no fue discutido en el proceso del Consejo. No sabe exactamente como se presentó ante la Corte, ya que no estuvo en ningún alegato tampoco. Preguntado el testigo respecto a si el acusado en su rol como Asesor Jurídico se preocupó de que las personas llevadas a proceso fueran defendidas legalmente, proporcionándole el Defensor correspondiente y que ésta labor fue ardua y le significó mucho tiempo de dedicación y que en su virtud, el Sr. Podlech solicitó la colaboración del Colegio de Abogados, responde que sí, así es, el Consejo tomó conocimiento desde un principio, todas esas inquietudes de don **Alfonso** eran de ellos como Consejo desde antes también, al correr un par de semanas vieron que las relaciones de las personas en el ámbito político y social no estaban siendo llevadas como en Estado de Derecho y en esos términos el Consejo entró a tomar acuerdos como los señalados. Consultado el testigo si escuchó comentario o supo acerca de la forma de estos Consejos de Guerra y si respetaban el debido proceso, responde que sí, por supuesto, el personalmente asistió a dos Consejos de Guerra en Defensa y puede decir que el Presidente era un Ministro de la Corte y las Defensas debían ser leídas, no podían intervenir oralmente, fue muy sorpresivo, lo que se les exigía. Por otro lado, señala que no es efectivo que Podlech haya estado organizando Consejos de Guerra, no tomó conocimiento de ello, todo lo relacionado con eso había que entenderlo con **Luis Jofré**, él era ante quien había que recurrir para hacer una presentación, o resolución, pero con **Alfonso Podlech** nunca se entrevistaron sobre eso. Físicamente en qué lugar compareció a los Consejos de Guerra en el Regimiento, donde dice que efectivamente vio a **Alfonso** vestido de militar. **Podlech** debió ayudar al Fiscal para informar a los familiares de los detenidos y evacuar consultas, gestión que es propia de ese rol y solo le consta que se atendía con el Sr. **Luis Jofré**.

Y. Declaración Judicial de JULIO GONZÁLEZ RENÉ JARA GONZÁLEZ de fecha 27 de agosto de 2019, rolante de fs. 2.659 a 2.661 (Tomo VII), quien luego de las preguntas de Tachas formuladas por la Abogada Carolina Contreras y legalmente examinado, decanta que: reconoce su firma y ratifica el certificado expedido por él y acompañados en autos en el 5° otrosí de la presentación de fs. 2441. Justifica que trabajó en la Corporación de Reforma Agraria en Temuco desde principios del año 1972 hasta el año 1977, allí le tocaba tasar los predios agrícolas, los frutos pendientes, discutir con los propietarios el monto de las tasaciones y discutir la cantidad de terreno que ellos podían quedarse o reserva que se les llamaba en ese tiempo. Después una vez que llegaban a acuerdo con ellos, todo ese trabajos se llevaba al Consejo del CORA

en Santiago y los abogados de la Corporación efectuaban el resto. Comunica que sí les correspondió atender entre otros abogados a don **Alfonso Podlech Michaud**, con quien conversó varias veces respecto a clientes que él tenía, entre los años 72, 73, ya que testigo cimienta que se retiró el 77 y durante todos esos años atendían directamente en la oficina en CORA o muchas veces tuvieron reuniones con el Intendente que había aquí en esos momento, él estuvo un tiempo nada más, después como el 74 o 75 ya no lo veía más, lo saludaba en la calle y punto, después él no siguió porque en los años posteriores ya no hubo tanto problema de discutir reservas o monto, más que nada era entregar predios, los primeros años estuvimos avocados a regularizar tierra con los propietarios. Explica que su rol en relación con el Abogado antes citado, era llegar a un acuerdo con los abogados que venían con el consentimiento del propietario a solicitar cierta cantidad de reserva de hectáreas de suelo que eran necesarias y a su vez tasación del predio. Consultado el testigo respecto de los tiempos de espera para que los solicitantes, entre ellos **Podlech**, fueran atendidos y sus petitorios, resueltos, responde que los abogados eran atendidos en la medida que el tuviera tiempo o el Director, se turnaban entre Director y el declarante, los atendían inmediatamente. Pero el resolver los casos que presentaban los Abogados, se demoraban meses, era llegar acuerdo con el propietario, para llegar a ese acuerdo él tenía que estar de acuerdo en el monto de las acciones, de la cantidad de tierra que se le iba a entregar la forma de pago y una vez acordado todo eso, eso se llevaba a Consejo a Santiago y una vez aprobado por el a Consejo se volvía a Temuco y se empezaba a concretar lo que el Consejo había aprobado. Consultado por las víctimas de autos, **Daniel Mateluna y José Ortigosa Ansoleaga**, apunta que le suenan, **Ortigosa** tenía muchos animales y los tenía en diferentes predios de la Corporación que eran asentamientos, pero más nada, agregando que lo conoció después del 73 cuando supo que un señor x que era el que le llevaba todo a **Ortigosa** aquí, era el único que sabía dónde estaban los animales, él se quedó con los animales, al **Sr. Ortigosa** nunca lo conoció, pero sabe que tenía muchos animales.

Cabe señalar que estos testigos ya fueron analizados en la parte penal y respecto a la parte civil, en nada desvirtúan los fundamentos del Demandante Civil.-

Z. Informe Psicológico de Patricia Ortigosa Uriarte de fs. 2.664 a 2.667 (Tomo VIII), el que concluye que la evaluada presentó cuadros psicopáticos de relevancia, concordantes con las consecuencias a mediano y largo plazo que generó en su vida la muerte de don José María Ortigosa. Las

circunstancias en que muere su padre, incorporaron de por vida violencia autobiográfica; generando síntomas estables en el tiempo, compatibles con una secuela psíquica, secundaria a dicho evento. *Documento firmado por doña María Teresa Scoot Tocornal.*

43°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por los delito de Apremios Ilegítimos y Homicidios calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga **está plenamente acreditados**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes las indemnizaciones que se demanda esto es: **a)** la perpetración de un delito por agente del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por los actores y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para los actores, por los ilícitos de Apremios Ilegítimos y Homicidios calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga cometido por los Agentes del Estado, las sumas de:

- a) \$150.000.000** (ciento cincuenta millones de pesos) para la hija de José María Ortigosa Ansoleaga, **Mary Carmen Ortigosa Uriarte**.
- b) \$150.000.000** (ciento cincuenta millones de pesos) para cada una de las siguientes personas: **María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo y Juan Carlos Mateluna Lillo** (cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez).
- c) \$100.000.000** (cien millones de pesos) para el nieto José María Ortigosa Ansoleaga, **Ignacio Jesús Dabed Ortigosa Ansoleaga**. Cabe hacer presente que respecto a este demandante civil, se condena al Fisco de Chile a pagar en forma solidaria con el acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud.

Lo que equivale a la suma total de \$1.150.000.000 (mil ciento cincuenta millones de pesos).

En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado lo informado por el Instituto de Previsión Social:

a) Respecto a la víctima Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez:

El ORD. N°59992/2019 de 17 de julio de 2019, acompañado a fs. 2.611 a 2.612 (Tomo VII), emitido por el Instituto de Previsión social, en virtud del cual informa los beneficios obtenidos de reparación de las Leyes N°19.123 y 19.980, recibidos por la cónyuge e hijos del causante Ley Rettig, don Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez, agregando que Daniel y George Mateluna Lillo, son beneficiarios de una pensión de reparación de la Ley N°19.992, en su calidad de víctimas directas de prisión política y tortura, Valech.

Complementado en ORD. 59989/2019 de 17 de julio de 2019, acompañado de fs. 2.631 a 2.632 (Tomo VII), en virtud del cual agrega que la cónyuge del Sr. Mateluna, doña María Isabel Lillo también es beneficiaria de una pensión de orfandad en ex Caja de Ferrocarriles.

b) Respecto a la víctima José María Ortigosa Ansoleaga:

El mismo modo, el ORD. 60028/2019 de 17 de julio de 2019, acompañado a fs. 2.613 (Tomo VII), emitido por el Instituto de Previsión social, en virtud del cual informa que don Ignacio Jesús Dabed Ortigosa no ha recibido beneficios otorgados por las Leyes de Reparación N°19.123 y 19.980 por el causante de Ley Rettig, don José María Ortigosa Ansoleaga.

El ORD. 60049/2019 de 19 de julio de 2019, acompañado de fs. 2.614 a 2.615 (Tomo VII), en virtud del cual informa los beneficios de reparación de la Ley 19.880, recibido por doña Mary Carmen Ortigosa Uriarte, en calidad de hija del causante de Ley Rettig, don José María Ortigosa Ansoleaga.

El ORD. 59978/2019 de 17 de julio de 2019, acompañado de fs. 2.626 a 2.627 (Tomo VII), en virtud del cual informa los beneficios de reparación de las Leyes N°19.123 y 19.980 recibidos por la cónyuge e hijas del causante de la Ley Rettig don José María Ortigosa Ansoleaga.

Documentos firmados y timbrados por el Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia del IPS, don Alexander Suárez Olivares.

44°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL: 36°) Demandas Civiles interpuestas por el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de Mary Carmen Ortigosa Uriarte, María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo Y Juan Carlos Mateluna Lillo; **37°) Demanda Civil interpuesta por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa; 38°) Contestaciones de las Demandas Civiles por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Manuel Espinoza, en representación del Consejo de Defensa del Estado: A.** Excepción reparación satisfactiva. improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación (respecto de las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea) y Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandan, por preterición legal del demandante y por haber sido reparado en la forma que se expresa (respecto a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa). **B.** Excepción de Prescripción Extintiva. **C.** En cuanto al daño e indemnización reclamadas. **D.** Improcedencia del pago de ajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; **39°) Contestación de la Demanda Civil por el abogado Víctor Carmine Zúñiga,** en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud: **A.** Excepción dilatoria de ineptitud del libelo por falta de algún requisito en el modo de proponer la demanda (artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil. **B.** Falta de legitimación causal para que Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, sea sujeto pasivo de una acción indemnizatoria por el homicidio y apremios ilegítimo en la persona del Señor Ortigosa **C.** Falta de legitimación activa de Ignacio Jesús Dabed Ortigosa para ser demandante de la acción de indemnización de perjuicios: la defensa se basa en su condición de nieto del Señor Ortigosa. **D.** Prescripción de la acción civil; **40°) Análisis de la contestaciones de las demandas civiles efectuadas por el Fisco de Chile; 41°) Análisis de la contestación de la demanda civil efectuadas por el abogado Víctor Carmine Zúñiga,** en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud; **42°) Acreditación probatoria del daño moral; 43°) Montos; 44°) reajustes e intereses de las sumas demandadas**

IX. ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N°6 y 9, 12 N°8 y 11, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 56, 61, 68, 69, y 150 N°1 y 390 N°1 circunstancias 1° **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; Ley 18.575; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216; Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980; Ley 20.357, Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949, se declara:**

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I.- QUE NO HA LUGAR a las Excepciones Fondo consistentes en **Amnistía y Prescripción de la Acción Penal** del artículo del artículo 433 N°6 y 7 del Código de Procedimiento Penal, **renovadas para su examen en conformidad al artículo 434 del Código de Procedimiento Penal**, interpuestas por el Víctor Carmine Zúñiga, en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud en su presentación de fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII) como excepciones de previo y especial pronunciamiento.

II.- Que SE CONDENA, con costas a **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, R.U.N. 3.085.228-1, ya individualizado, en calidad de **AUTOR** a:

- 1. LA PENA DE 20 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO Y ACCESORIAS** de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de habilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena por los delitos de **Homicidios Calificados** en las personas de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa Ansoleaga.
- 2. LA PENA DE 5 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO Y ACCESORIAS** de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por los delitos de **Apremios Ilegítimos** en las personas de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y de José María Ortigosa Ansoleaga.

Todos perpetrados en la ciudad de Temuco con fecha **02 de octubre de 1973**. Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los **artículos 150 N°1 y 391 N°1, circunstancias 1° y 5°** respectivamente, del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de **lesa humanidad**.

III.- Que respecto al acusado **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, según se expresó, **no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216**, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de **abono** los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

- A. ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el 30 de octubre de 2018**, como consta de fs. 1.860 a 1.861 (Tomo VI), cuando es notificado del auto de

procesamiento y la medida cautelar de arresto domiciliario total; **hasta el 07 de enero de 2019.**

B. ARRESTO DOMICILIARIO PARCIAL: Desde el 07 de enero de 2019, como consta a fs. 1.969 (Tomo VI), cuando es notificado de la resolución dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco, en virtud de la cual se revoca la resolución apelada de fecha 28 de noviembre de 2018 de fs. 1.930 y en su lugar se decreta en contra del procesado la medida cautelar de **arresto domiciliario nocturno** desde las 20:00 a 08:00 horas del día siguiente; así como de la resolución de fs. 1.963 (Tomo VI), en virtud de la cual se le concede la **libertad provisional** al procesado, cuya fianza fue elevada por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco desde la suma \$1.500.000 a \$4.000.000 (tal como consta a fs. 1.976); **hasta 14 de enero de 2019**

C. ORDEN DE LIBERTAD: hasta 14 de enero de 2019, como consta a fs. 1.994 (Tomo VI), cuando es notificado de la resolución de fs. 1.983 (Tomo VI), que ordenó su excarcelación,

Todo lo anterior por aplicación de los artículos 74 del Código Penal y 503 del Código de Procedimiento Penal.

IV.- La pena impuesta al condenado comenzará a regir desde que se presente o sea habido en la presente causa.

V.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas al acusado, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

VI.- Que **NO HA LUGAR** a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, don **Manuel Espinoza Torres** en sus presentaciones de fs. 2.317 a 2.354 (Tomo VII), 2.357 a 2.393 (Tomo VII) y de fs. 2.396 a 2.426 (Tomo VII), esto es:

A. Excepción reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación (*respecto de las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Sebastián Saavedra Cea*) y excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal del demandante y por haber sido reparado en la forma que se

expresa (*respecto a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Ignacio Jesús Dabed Ortigosa*).

- B.** Prescripción extintiva, respecto de todas las demandas civiles interpuestas por el abogado Sebastián Saavedra Cea de fs. 2.111 a 2.131 (Tomo VI) y de fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI) e Ignacio Jesús Dabed Ortigosa de fs. 2.202 a 2.218 (Tomo VI).

Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

VII.- Que **NO HA LUGAR** a las excepciones efectuadas por el abogado **Víctor Carmine Zúñiga**, en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud en el Sexto Otrosí de su presentación de **fs. 2.441 a 2.494 (Tomo VII)**, y que consiste en:

- A.** Excepción dilatoria de ineptitud del libelo por falta de algún requisito en el modo de proponer la demanda, de conformidad al artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil.
- B.** Falta de legitimación causal para que Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, sea sujeto pasivo de una acción indemnizatoria por el homicidio y apremios ilegítimo en la persona del señor Ortigosa.
- C.** Falta de legitimación activa de Ignacio Jesús Dabed Ortigosa para ser demandante de la acción de indemnización de perjuicios.
- D.** Prescripción de la Acción Civil.

VIII.- Que **HA LUGAR** a las Demandas Civiles interpuestas:

- A.** Por el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de **MARY CARMEN ORTIGOSA URIARTE** (hija de José María Ortigosa Ansoleaga) de fs. 2.111 a 2.131 (Tomo VI) y de fs. 2.172 a 2.197 (Tomo VI) en representación de **MARÍA ISABEL LILLO FLORES, DANIEL BENJAMÍN MATELUNA LILLO, CHRISTIAN MARCELO MATELUNA LILLO, CESAR PATRICIO MATELUNA LILLO, GEORGE RICARDO MATELUNA LILLO Y JUAN CARLOS MATELUNA LILLO** (Cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez).
- B.** Por **IGNACIO JESÚS DABED ORTIGOSA** de fs. 2.202 a 2.218 (Tomo VI).

Condenándose a las partes demandadas, Fisco de Chile, a pagar las sumas de:

- a. \$150.000.000** (ciento cincuenta millones de pesos) para la hija de José María Ortigosa Ansoleaga, **Mary Carmen Ortigosa Uriarte**.

- b. **\$150.000.000** (ciento cincuenta millones de pesos) para cada una de las siguientes personas: **María Isabel Lillo Flores, Daniel Benjamín Mateluna Lillo, Christian Marcelo Mateluna Lillo, Cesar Patricio Mateluna Lillo, George Ricardo Mateluna Lillo y Juan Carlos Mateluna Lillo** (cónyuge e hijos de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez).

Condenándose a las partes demandadas, Fisco de Chile y acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud en forma solidaria, a pagar la suma de:

- c. **\$100.000.000** (cien millones de pesos) para el nieto José María Ortigosa Ansoleaga, **Ignacio Jesús Dabed Ortigosa**.

Todo lo anterior, equivale a la suma total de \$ 1.150.000.000 (mil ciento cincuenta millones de pesos).

IX.- Las sumas anteriores deberán ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

X.- Que se condena en **costas, al FISCO de Chile** y al acusado **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD** por haber sido totalmente vencidos.

Notifíquese esta sentencia personalmente al sentenciado, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el **artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal**, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra de los sentenciados para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese**.

Consúltase si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 114.017.-

Dictada por don **ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE**, Ministro en
Visita Extraordinaria.

Autoriza don Christian Álvarez Barrios, Secretario Subrogante de la
Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno,
notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (lvr).